ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 128

Revista de Derecho Constitucional

N.° 128

Lic. Carlos Rafael Pineda Melara
Director de Servicios Técnicos Judiciales

Lcda. Evelin Carolina Del Cid Flores
Jefa de la Unidad Gestora de Procesos de Documentación Jurídica y Judicial

Lic. Carlos René Castillo Hernández
Jefe del Departamento de Documentación Judicial

MAFI Carlos Omar Lemus
Jefe del Departamento de Publicaciones

Lcda. Roxana Maricela López Segovia
Jefa de la Sección de Diseño Gráfico

Fabiola Vanessa Segura Cortez
Diagramación

Mgtr. Andrea Nathalia García Peña
Diseño de portada

* * * * *

La presente edición contiene sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad, hábeas corpus y amparos en el período de julio-septiembre del 2023; índice analítico por descriptores y artículos relacionados a la materia por estudiosos del derecho.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN i

OBSERVACIONES PRELIMINARES ii

DOCTRINA
Caducidad en los procedimientos administrativos sancionatorios en El Salvador.
¿Seguimos en tiempos de incertidumbre?.....1

CUADRO FÁCTICO 7

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

AMPAROS

Admisión.....56
Improcedencias.....110
Inadmisibilidades.....210
Sobreseimientos.....237
Sentencias definitivas.....275

HÁBEAS CORPUS

Desistimientos.....305
Improcedencias.....309
Inadmisibilidades.....705
Sobreseimientos.....808
Sentencias.....866
Sentencias definitivas.....878

INCONSTITUCIONALIDADES

Iniciados por inaplicación
Improcedencias.....909

Iniciados por demanda
Improcedencias.....913

ÍNDICE POR DESCRIPTORES

Amparos.....966
Hábeas Corpus.....968
Inconstitucionalidades.....970

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2025

Dr. Henry Alexander Mejía
PRESIDENTE

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

Dr. Henry Alexander Mejía
PRESIDENTE

MSc. Elsy Dueñas Lovos
VOCAL

Dr. Ramón Iván García
VOCAL

MSc. Luis Javier Suárez Magaña
VOCAL

MSc. Héctor Nahún Martínez García
VOCAL

SALA DE LO CIVIL

Lic. Óscar Alberto López Jerez
PRESIDENTE

Lic. Alex David Marroquín Martínez
VOCAL

Dra. Lidia Patricia Castillo Amaya
VOCAL

SALA DE LO PENAL

MSc. Alejandro Antonio Quinteros Espinoza
PRESIDENTE

MSc. Sandra Luz Chicas de Fuentes
VOCAL

Lic. Roberto Carlos Calderón Escobar
VOCAL

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Lic. José Ernesto Clímaco Valiente
PRESIDENTE

MSc. Vicente Alexander Rivas Romero
VOCAL

MSc. José Fernando Marroquín Galo
VOCAL

Lic. Miguel Elías Martínez Cortez
VOCAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Presidente: Lic. Óscar Alberto López Jerez

Vocal: MSc. Elsy Dueñas Lovos

Vocal: Lic. José Ángel Pérez Chacón

Vocal: MSc. Luis Javier Suárez Magaña

Vocal: MSc. Héctor Nahún Martínez García

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
SECCIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Coordinadores: Lic. Luis Campos Anaya
Lic. German Ernesto del Valle

PRESENTACIÓN

La presente edición pretende ser un texto útil para los interesados en conocer y aplicar la jurisprudencia como fuente de derecho.

La recopilación y el tratamiento jurídico de la información se llevan a cabo en el Departamento de Documentación Judicial, cuyo objetivo fundamental es divulgar las sentencias, a través de revista, como mediante el uso de medios informáticos, que puede ser consultado por los operadores judiciales y todos los interesados en conocer la jurisprudencia salvadoreña.

Este esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la democratización de la sociedad salvadoreña, pretende dar a conocer los lineamientos que establece la Sala de lo Constitucional para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Por esta razón, en esta nueva edición se encuentran las sentencias de los procesos de amparo, hábeas corpus e inconstitucionalidades; resaltando la inclusión del cuadro fáctico, en sustitución del maximario publicado en volúmenes anteriores; además, aquellos términos jurídicos utilizados en el cuerpo de la resolución y que forman parte de un diccionario de descriptores asociados, lo que permitirá al lector centrar su foco de atención en la investigación de las sentencias que puntualmente necesita y minimizar los tiempos de búsqueda de dicha información.

En ese sentido, se espera que esta y las siguientes publicaciones sean de máxima utilidad práctica y didáctica y que permitan calibrar la jurisprudencia constitucional, orientándola al debate, estudio y a la investigación, para el logro de los ideales generales de justicia, libertad y paz duradera en El Salvador.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Esta edición contiene las resoluciones pronunciadas por la Sala de lo Constitucional, en el tercer trimestre de 2023.

METODOLOGÍA

Para tener un mejor acceso a las resoluciones, se ha elaborado un Cuadro Fáctico, que consiste en una descripción sintetizada, precisa y clara del asunto sometido a discusión; se incluye el contenido de la decisión o fallo cuando ello sea estrictamente necesario. Este resumen lo elabora el analista del Área Constitucional del Departamento de Documentación Judicial, sin entrecomillar para que sea evidente que no es parte de la sentencia.

Ejemplo:

109-2010

Demanda de amparo interpuesta por la sociedad peticionaria en contra del artículo 9 letra e) de la Ley de Gravámenes Relacionados con el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, por la obligación de pago de un tributo consistente en un permiso especial para el funcionamiento de su empresa de seguridad, el cual considera inconstitucional porque no determina con claridad el hecho generador del tributo.

En la parte final, se encuentra un índice alfabético de Descriptores con sus Restrictores asociados y la referencia de la sentencia a la cual pertenecen.

La asignación de los descriptores implica la delimitación temática de los puntos jurídicos de interés desarrollados en la sentencia; sin embargo, para facilitar aún más la búsqueda de la información jurisprudencial, se agregan otros elementos de esa delimitación mediante el uso de los restrictores.

El término **DESCRIPTOR**, podemos definirlo como la palabra o conjunto de palabras con autonomía conceptual propia y diferenciada. Ejemplo, Debido proceso, Derecho de audiencia, Garantías Constitucionales, etc.

El término **RESTRICTOR**, constituye la expresión de una idea sintética que ofrece al usuario una mayor precisión del contenido de la sentencia, reflejado ya por el descriptor, para facilitar su comprensión en el caso concreto. Ejemplo:

Descriptor
AMPARO CONTRA LEYES
418-2009
Restrictor
Improcedente cuando la pretensión se configura sobre una disposición que ya fue declarada inconstitucional

Descriptor
ASUNTOS DE MERA LEGALIDAD
272-2009
Restrictor
Inconformidades que carecen de contenido constitucional.

A cada sentencia se pueden asociar varios descriptores, este método permite hacer referencia a distintos temas expuestos de manera explícita o implícita, y su adecuada clasificación permite que puedan ser localizados por el usuario dentro de cada uno de los Procesos (Amparos, Hábeas Corpus e Inconstitucionalidades) y de acuerdo a cada tipo de resolución.

Toda comunicación o colaboración debe enviarse a la siguiente dirección:

REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Oficinas administrativas y jurídicas de la Corte Suprema de Justicia,
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador.

Correo electrónico: centrodedocumentacionjudicial@oj.gob.sv

Los artículos firmados a título personal,
no representan la opinión o pensamiento del Departamento
de Documentación Judicial o de la Sala de lo Constitucional.

Caducidad en los procedimientos administrativos sancionatorios en El Salvador. ¿Seguimos en tiempos de incertidumbre?

1. Prefacio

La entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante LPA), trató de remediar lo que por mucho tiempo en materia administrativa generó una serie de problemas para el ejercicio de los derechos de los administrados y la aplicación práctica de los procedimientos administrativos sancionatorios por parte de la Administración Pública, y aunque, cada institución tenía sus propios criterios, leyes o reglamentos para la tramitación de dichos procedimientos, ahora, tienen que adecuarse a la LPA, que contempla un régimen jurídico de uniformidad de los procedimientos, siendo uno de los elementos más importantes de dicha ley, ya que, se dio un paso importante en el Derecho Administrativo Salvadoreño respecto a la actividad de la Administración Pública, debiendo respetarse los principios en que se fundara el procedimiento, sin menoscabo de los principios especiales que contenga cada ley por su exclusividad del régimen al que aplican, pero a su vez, todos estos principios deben estar armonizados con la Constitución de la República.

Uno de los principios a los que nos referimos es específicamente la Seguridad Jurídica, que es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

La Seguridad Jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación. En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos establecidos.

La seguridad jurídica debería generar al administrado, la certeza sobre los procedimientos administrativos realizados por la administración pública, siendo a través de los actos o actuaciones administrativas en donde se aplican normas de rango legal o reglamentario, así como principios constitucionales, que deberían servir para evitar la arbitrariedad del poder público, es decir que, para apartarse de una situación jurídica ya establecida, toda autoridad pública debe ceñir su actuación conforme a los procedimientos de ley.

He de referirme especialmente al procedimiento administrativo sancionatorio iniciado de oficio, el plazo que tiene la administración para sustanciar y dictar/notificar un acto o resolución, el incumplimiento de notificar una resolución expresa en ese tiempo determinado, y por lo tanto los efectos de dicho incumplimiento, pero principalmente la incertidumbre que se ha generado, y que pocos se han percatado, de la aplicación/interpretación de algunas instituciones para evadir el plazo y sus consecuencias.

2. Duración del procedimiento administrativo sancionatorio

El procedimiento administrativo es el medio utilizado por las autoridades para dictar actos administrativos, los cuales únicamente serán válidos, eficaces y legítimos, si en la consecución de los mismos se han respetado los derechos y garantías procedimentales.

El procedimiento administrativo sancionatorio, parte de la concepción del ejercicio del poder punitivo del Estado, y esta potestad sancionadora de tinte constitucional debe ejercerse siguiendo un procedimiento previo constitucionalmente configurado y dentro de los plazos legalmente establecidos, sin dilaciones indebidas.

El tiempo de todo procedimiento ocupa un lugar central en la idea de lo que debe ser un procedimiento (similar a un proceso penal), siendo una de las condiciones del debido proceso. Es un aspecto que ha sido nutrido desde la jurisprudencia, tomando en cuenta, la dimensión de su duración, junto con otros elementos esenciales como el derecho de defensa, el principio de legalidad o seguridad jurídica.

Un procedimiento no debería verse extendido ilimitadamente o por tiempos desmedidos, menos aún, un procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio, ya que no se consideraría un procedimiento justo, a pesar de que se cumplan con las otras condiciones.

El art. 89 LPA determina que: "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido ésta de oficio o a petición del interesado, salvo lo establecido en Leyes Especiales."

"No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista" para el caso, el equivalente a: "no hay procedimiento que dure más de nueve meses ni administrado que lo soporte", ya que con la entrada en vigencia de la LPA debería brindarse seguridad jurídica en los procedimientos administrativos, al menos, en lo referente al plazo para su culminación.

En la presente, hacemos referencia al plazo de nueve meses, reconociendo que la administración pública podría suspender dicho plazo, por las causales del articulo 90 LPA, pero, nos referimos a aquellos procedimientos

administrativos sancionatorios iniciados de oficio, que no tienen razón de suspender el plazo, y la administración, llegado el día, no dicta/notifica una resolución final.

3. Efectos del incumplimiento de dictar/notificar una resolución en el plazo de nueve meses para los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados de oficio (silencio administrativo)

Como corolario del apartado anterior, podría inferirse que debería de tenerse una "certeza" que un procedimiento administrativo, debería tramitarse (iniciar y concluirse) en el plazo de nueve meses (si no hay causales de suspensión de plazo), por lo que la primera pregunta que debe realizarse es, ¿Qué pasa si la administración pública -específicamente en procedimientos administrativos sancionatorios iniciados de oficio- no dicte ni notifique resolución expresa en el plazo de nueve meses?

El art. 114 LPA nos da la respuesta específicamente en su numeral dos, que establece que la expiración del plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, en los procedimientos que la Administración se encuentre ejercitando potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad y archivo del expediente.

La caducidad es una figura jurídica de naturaleza netamente adjetiva y se define como una forma de terminación del procedimiento administrativo por la haber llegado al plazo máximo para resolver, cuyo incumplimiento impide su prosecución y resolución final; es decir, supone, la terminación de un procedimiento sancionador sin que le sea notificada una resolución sobre el fondo.

En los procedimientos administrativos sancionatorios, el efecto inmediato es que imposibilita a que la autoridad, ante su propia inactividad, continúe instruyendo un procedimiento sancionatorio fuera del plazo legalmente establecido, dicho en otras palabras, una vez iniciado un procedimiento si éste no concluye en el plazo legal, la consecuencia jurídica es que dicho procedimiento caduca, configurándose entonces una forma de darlo por finalizado.

Lo anterior implica que la figura de la caducidad operaría de pleno derecho en los procedimientos administrativos sancionatorios cuando no se notifique una resolución expresa en el plazo de nueve meses.

Parece que se tuviese una certeza jurídica en cuanto a la aplicación de la caducidad, que no quedaría lugar a dudas para que cualquier administración pública, llegado el plazo de los nueve meses que dicta la ley, debe de oficio declarar la caducidad.

A ello debemos agregar que dictar/notificar una resolución final, no es solamente un derecho del administrado, es una verdadera obligación de la administración pública.

4. Reglas para computar el plazo de los nueve meses.

Siguiendo el hilo lógico del apartado anterior, lo que nos trae a saber si la aplicación normativa tiene la certeza o sigue con incertidumbre, se tiene lo siguiente, el deber ser del derecho nos indica, que todas las administraciones públicas, en sus resoluciones de inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, debería establecer el plazo legalmente previsto para llevar a cabo un acto del procedimiento, la fecha en la que vence y las consecuencias de su incumplimiento o retraso, según el articulo 82 LPA.

No obstante, desde la entrada en vigencia de la LPA, ¿Cuántas administraciones públicas que inician un procedimiento, establecen dicha fecha de manera exacta? No me ha tocado la suerte de encontrarme con una administración pública tan diligente, no se si el lector ha corrido con otra suerte.

Continuando con el computo de plazo, del mismo articulo 82 LPA, que establece que, cuando el plazo se fija por meses o años, estos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes o año del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Por lo tanto, la respuesta parece sencilla, el computo del plazo debe entenderse de fecha a fecha, pero ¿a cuál fecha se refiere?

Veamos, cuáles son nuestras opciones de la "primera" fecha, es decir, desde cuando debe entenderse que empiezan a contar los nueve meses, con el presente ejemplo práctico:

1. La fecha en la que es emitido el acto administrativo, supongamos que se emite la resolución con fecha 4 de marzo de 2023. (que no necesariamente tiene que ser la misma fecha que es notificado)
2. La fecha en la que es notificado dicho acto administrativo, supongamos que se notifica electrónicamente el 11 de marzo de 2023. (cuando es notificado ya sea personalmente o por medio electrónico)
3. La fecha en la que se entiende que es notificado tomando en cuenta las reglas procesales del articulo 178 Código Procesal Civil y mercantil, es decir, que se debe entender por realizada la notificación transcurridas veinticuatro horas después del envió, siempre que conste evidencia de su recibo, siguiendo el ejemplo anterior, se entendería notificada el 12 de marzo de 2023.
4. La fecha en la que empieza a correr el tiempo del emplazamiento, que siguiendo con el ejemplo anterior, se entendería que es el 13 de marzo de 2023.

Nos encontramos en igual situación para contar la fecha hasta donde se entenderá finalizado esos cuatro meses, es decir, siguiendo con el ejemplo práctico anterior.

1. La fecha en la que es emitido el acto administrativo, supongamos que se emite la resolución el 4 de diciembre de 2023.(pero no es notificada en dicha fecha)

2. La fecha en la que es notificado la resolución final, supongamos que la notifican 11 de diciembre de 2023 a través del sistema de notificación electrónica.

3. La fecha en la que se entiende que es notificado, siguiendo las reglas del articulo 178 CPCM, es decir, veinticuatro horas después del envió, siguiendo el ejemplo anterior, se entendería notificada el 12 de diciembre de 2023

5. Criterios de interpretación que generan incertidumbre.

Debemos decir que uno de los criterios más aceptados, lo encontramos en el derecho comparado, y es el que establece que el cómputo de los nueve meses para que la Administración dicte una resolución definitiva comienza a contarse desde la fecha de emisión del auto de inicio del procedimiento, debido a que por medio de la emisión del auto de inicio (y no por su notificación), la Administración Pública expresa su voluntad de instruir un procedimiento administrativo sancionador en contra de los particulares, lo anterior lo encontramos en el artículo 21.3 letra a) de la Ley 39/2015 de España indica que, en los procedimientos iniciados de oficio, estos inician desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Si bien es cierto, desde el año 2019, ya muchos órganos de la administración pública ya están aplicando la caducidad en sus procedimientos, se puede mencionar por ejemplo resoluciones del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, del Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, algunas alcaldías, inclusive las mismas secciones de investigaciones de la Corte Suprema de Justicia para casos de suspensión de abogados o notarios, y por lo tanto, nos encontramos en la práctica que los criterios de las fechas de inicio y de finalización han sido disparejos, encontrando en algunos casos la interpretación implícita que empieza a contar desde la fecha de notificación, y no desde la fecha que contiene la resolución, o a conveniencia, desde la fecha que se entiende que ha ido notificado según las reglas del CPCM, y no desde la fecha que contiene la resolución.

La pregunta conclusiva es: ¿qué sucede si la Administración pública irrespeta el plazo legalmente establecido para concluir el procedimiento sancionador y luego de superado el mismo impone una sanción administrativa – como ya ha ocurrido en muchos casos prácticos conocidos-?

La respuesta es que dicha resolución sería nula de pleno derecho por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto, con base en el art. 36 letra b) de la LPA, para lo cual, existen antecedentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo en proceso ref. 75-18-PC-SCA.

6. A manera de conclusión:

Con lo antes desarrollado, podemos concluir que en El Salvador quedaron expresamente prohibidos los procedimientos administrativos sancionadores perpetuos, quedando establecido la duración máxima y en que casos puede suspenderse dicho plazo, pero quedando aún, por algunas administraciones públicas, sujeto a "interpretación" desde cuándo y hasta cuándo se debe entender este "de fecha a fecha" que menciona la LPA, cuando a conveniencia por ampliar unos días, se olvidan de dictar resolución en el plazo de lo nueve meses.

Lo cierto es, que será necesario que los jueces de lo contencioso administrativo, cámaras o la misma sala de lo contencioso, definan con CERTEZA, que debe entenderse de esta estipulación "de fecha a fecha" que señala el art. 82 LPA.

Esperemos que ya no existan procedimientos sancionadores que duren 100 años ni administrados que lo permitan ni siquiera por un día más.

Cuadro fáctico

AMPAROS

Pág.

Admisión

159-2022 56

Se admite la demanda presentada contra el director general de la Policía Nacional Civil, por el despido efectuado. Tal admisión se debe a que, según el interesado, se habrían vulnerado sus derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral, ya que previo a la remoción debió seguírsele el procedimiento legal respectivo a fin de que pudiera defender sus derechos.

Improcedencias

107-2021 60

La presente demanda de amparo iniciada contra el municipio de Delgado, departamento de San Salvador, y el Alcalde de la referida municipalidad, se declara improcedente, por no haber agotado el medio impugnativo establecido en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, es decir el recurso de revisión previsto en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

171-2022 63

Se declara improcedente la demanda suscrita, contra la Asamblea Legislativa por la emisión del artículo 40 de la Tarifa General de Arbitrios Municipales de Jiquilisco, creada mediante Decreto Legislativo número 301 de 25 de febrero de 1986, publicado en el Diario Oficial número 50, tomo 290 de 14 de marzo de 1986, por la supuesta inobservancia del principio de capacidad económica, en virtud de que no se evidencia la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la sociedad actora.

118-2023 68

La presente demanda de amparo contra la Sala de lo Penal se declara improcedente, en virtud que la pretensión planteada se sustenta en un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el acto impugnado, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

239-2021 73

Declárase improcedente la demanda formulada, contra la directora de recursos humanos del Ministerio de Hacienda, la jefa de la Oficina Regional de Occidente, el subdirector general de impuestos internos y el jefe de la División Jurídica, estos últimos de la Dirección General de Impuestos Internos, debido a que se deduce la existencia de una manifiesta conformidad con la situación que se busca controvertir y por estar fundamentado el reclamo en aspectos de mera legalidad cuyo conocimiento no corresponde al ámbito constitucional.

248-2022 78

La presente demanda de amparo iniciada contra el Concejo Municipal de El Congo, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador, se declara improcedente, –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– debido a que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

102-2023 85

Se declara improcedente la demanda de amparo presentada, contra el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en

la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– debido a que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

274-2022 91

La abogada del interesado reclama contra la Jueza de lo Civil de San Marcos, por la sentencia pronunciada en el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios, por medio de la cual desestimó la pretensión del actor con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales; también contra la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto, la cual fue desfavorable para los intereses de su patrocinado; y finalmente contra la Sala de lo Civil por la providencia pronunciada en casación, en virtud de la cual declaró que no había lugar a casar la sentencia de segunda instancia que fue recurrida. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente en virtud de que el reclamo se reduce a una cuestión de estricta legalidad y de simple inconformidad con las actuaciones que busca controvertir, cuyo conocimiento no corresponde al Tribunal Constitucional.

13-2023 101

El representante legal de la sociedad demandante impugna la constitucionalidad del art. 3 n° 47 de la Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel, puesto que, según sus consideraciones, el tributo cuestionado utiliza como base imponible el activo del administrado, situación que no revelaría la verdadera capacidad contributiva del sujeto obligado. Razón por la cual presenta demanda de amparo contra la Asamblea Legislativa, por la emisión del articulo y numeral señalado. Pretensión que ha sido declara improcedente, ya que no se evidencia la existencia de un agravio constitucional

dentro del presente caso, en tanto la disposición cuestionada fue declarada inconstitucional por esta Sala, por lo que ha perdido vigencia, habiendo sido expulsada del ordenamiento jurídico.

202-2022 105

Declárase improcedente la demanda de amparo iniciada contra el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima, por no advertirse la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional, además, porque la pretensión planteada se sustenta en un asunto de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

27-2022 110

Se declara improcedente la demanda de amparo, contra la Sala de lo Penal, en virtud que la pretensión planteada se fundamenta en un derecho constitucional protegido por el hábeas corpus.

322-2022 113

Se declara improcedente la demanda de amparo, en virtud de no advertirse la trascendencia constitucional del presunto agravio ocasionado a los actores, además, el reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad cuyo conocimiento no corresponde a la Sala.

443-2020 119

Declárase improcedente la demanda suscrita contra la Asamblea Legislativa, en virtud de que no se evidencia la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la sociedad actora.

108-2023 126

Se declara improcedente la demanda de amparo presentada, contra el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador, por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional, y por otra debido a que la pretensión planteada

contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

29-2022 132

Se declara improcedente la demanda de amparo presentada, contra el Concejo Municipal de El Paisnal, el Juez Tercero de lo Laboral y la Cámara Segunda de lo Laboral, estos dos de San Salvador, por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y, que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a la Sala.

343-2022 138

La presente demanda de amparo interpuesta en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera y el Juez de lo Civil y Mercantil de esa misma jurisdicción por la Falta de emplazamiento dentro del proceso ejecutivo iniciado en contra del actor, se declara improcedente, por la falta de agotamiento del medio impugnativo establecido en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración alegada, es decir el recurso de apelación previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil; además que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

23-2019 143

Se declara improcedente la demanda, contra el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Autoridad de Aviación Civil, en virtud de tratarse de un asunto de mera legalidad, al no evidenciarse de sus argumentos la existencia de un agravio constitucional, sino más bien una mera disconformidad con lo resuelto.

251-2022

La presente demanda de amparo iniciada contra el Concejo Municipal de Acajutla, departamento de Sonsonate, se declara improcedente, por la falta de agotamiento del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, es decir, la nulidad de despido establecida en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

114-2023

La presente demanda de amparo interpuesta contra el Juez Quinto de lo Laboral y la Cámara Primera de lo Laboral, ambos de San Salvador, se declara improcedente, en virtud que su reclamo se reduce a una cuestión de estricta legalidad y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

66-2023

Se declara improcedente la demanda, contra el Alcalde Municipal de Chinameca, departamento de San Miguel, en virtud de que los argumentos no evidencian la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional, sino aspectos de simple disconformidad respecto al cierre del local, el cual se realizó en el ejercicio de la técnica autorizatoria de la administración.

74-2023

Se declara improcedente la demanda suscrita, contra el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, en virtud de que el acto contra el que se reclama no tiene carácter definitivo.

186-2023

Se declara improcedente la demanda de amparo, contra la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel, en virtud que la pretensión planteada se fundamenta en un derecho constitucional protegido por el hábeas corpus.

229-2022 173

La presente demanda de amparo contra el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno), se declara improcedente, en virtud de no haberse sustentado la existencia de un agravio en la esfera jurídica de la pretensora.

134-2023 177

Se declara improcedente la demanda de amparo planteada, contra la Jueza de lo Civil de San Marcos. por no agotar el recurso idóneo legalmente previsto en contra de la sentencia impugnada y, aunque se hubiera hecho uso del recurso de apelación, el reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y simple inconformidad con las actuaciones impugnadas, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

144-2023 182

Se declara improcedente la demanda de amparo planteada, contra el Juez de lo Civil de San Marcos, en virtud de que su reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a la Sala.

7-2023 188

La presente demanda de amparo, planteada contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana se declara improcedente, debido a que no se agotaron los medios impugnativos franqueados en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional reclamada.

119-2022 192

La presente demanda de amparo contra la Cámara de la Segunda Sección de Occidente departamento de Sonsonate, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado trata de un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a la Sala de lo Constitucional.

110-2023 197

Se declara improcedente la demanda de amparo, iniciada contra el Juez de lo Laboral de Santa Tecla, la

Cámara Segunda de lo Laboral de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil, en virtud de que la pretensión planteada se sustenta en un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con los actos impugnados, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

194-2023 201

Se declara improcedente la demanda de amparo interpuesta, contra el Juez tres del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en virtud de que su reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a la Sala.

208-2023 206

Se declara improcedente la demanda de amparo, contra el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, ya que la situación que impugna no es susceptible de causar un perjuicio de trascendencia constitucional.

Inadmisibilidades

447-2021 210

La presente demanda de amparo iniciada contra la Unidad de Relaciones Laborales de la Gerencia de Talento Humano y la directora ejecutiva, ambos del Fondo Solidario para la Salud, ha sido declarada inadmisible en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

296-2021 211

La presente demanda de amparo iniciada contra el Juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, ha sido declarada inadmisible en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

318-2022 212

La presente demanda de amparo ha sido declarada inadmisible en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

434-2021 213

La presente demanda de amparo contra el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador y la Dirección General de Migración y Extranjería, se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado adecuadamente las prevenciones que fueron realizadas.

334-2021 220

La presente demanda de amparo contra el Ministro de la Defensa ha sido declarada inadmisible, en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

418-2021 221

La presente demanda de amparo interpuesta contra el Ministro de Defensa Nacional se declara improcedente, en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

73-2022 222

La presente demanda de amparo contra del Concejo Municipal de San Salvador, se declara inadmisible, en virtud de que la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional no fue evacuada de forma eficaz, es decir que no se subsanaron de forma efectiva las deficiencias advertidas en la demanda.

56-2023 224

La presente demanda de amparo contra el Juez de lo Civil de Usulután, ha sido declarada inadmisible en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

95-2022 225

La presente demanda de amparo ha sido declarada inadmisible en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

113-2022 227

La presente demanda de amparo contra el presidente, la gerente legal, la técnica ejecutiva de gestión de la presidencia, la asistente de despacho de la presidencia y el técnico de soporte administrativo al territorio, todos

de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ha sido declarada inadmisible en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

57-2022 228

La presente demanda da amparo contra el Director General de Centros Penales, ha sido declarada inadmisible en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

153-2022 228

La presente demanda de amparo contra el Juez Primero de Paz de Mejicanos, departamento de San Salvador, ha sido declarada inadmisible en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

122-2022 229

La presente demanda de amparo interpuesta contra la Jueza Especializada de Extinción de Dominio de San Salvador y la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, por la supuesta lesión de los derechos a la seguridad jurídica, defensa –este como manifestación del debido proceso–, protección jurisdiccional –en su dimensión relativa al deber de motivación de las resoluciones judiciales– y propiedad del actor, se declara inadmisible, en virtud de no haber evacuado las prevenciones que fueron realizadas dentro del plazo legalmente establecido.

273-2021 231

La presente demanda de amparo interpuesta contra el Juez de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, por la supuesta vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, audiencia y defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso–, así como los principios de legalidad e igualdad, se declara inadmisible la demanda de amparo, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

40-2023 232

La presente demanda de amparo iniciada contra el Juez tres del Juzgado Cuarto de Civil y Mercantil de San Salvador, en la que se declaró improponible el recurso de revocatoria interpuesto contra el señalamiento de fecha y hora para la venta en pública subasta de un inmueble propiedad del citado señor. Se declara inadmisible, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

30-2023 233

La presente demanda de amparo interpuesta contra el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente y Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, se declara inadmisible, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

58-2023 235

Se declara inadmisible la demanda de amparo planteada contra el Juez uno del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

398-2021 236

La presente demanda de amparo iniciada contra el Concejo Municipal de Apopa, por haberlos destituido sin que se les siguiera un procedimiento previo en el que se les diera la oportunidad de defenderse. Se declara inadmisible, en virtud que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

Sobreseimientos

190-2021 237

Se sobresee el presente proceso de amparo promovido en contra del Presidente y de la Junta Directiva, ambos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, en virtud de la falta de titularidad del derecho

a la estabilidad laboral, de conformidad con lo establecido en los arts. 14 y 31 n° 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

16-2021 240

En el presente proceso de amparo en contra del Ministro de Salud y de la Directora General del ISSS se declara el sobreseimiento de la pretensión, por el fallecimiento de la actora.

196-2017 242

En el presente proceso de amparo promovido por la sociedad Corporación ALFA, S.A de C.V., en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se declara el sobreseimiento de la pretensión en virtud de que los argumentos planteados se traducen en asuntos de mera legalidad.

29-2021 248

Se sobresee el proceso de amparo promovido, en contra de la Asamblea Legislativa, en virtud que la disposición impugnada no produce un agravio a su derecho a la propiedad, por inobservancia del principio de capacidad económica.

511-2019 259

Se sobresee el presente proceso de amparo promovido en contra del Concejo Municipal de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, de conformidad con el art. 31 n° 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

306-2021 262

Se sobresee el presente proceso de amparo promovido en contra del Delegado Contravencional del municipio de Santa Tecla, en virtud de haberse comprobado el cese de los efectos del acto reclamado.

112-2020 264

En la presente demanda de amparo se declara el sobreseimiento de la pretensión, en virtud de haber manifestado la actora su conformidad con los efectos del acto reclamado.

480-2020 268

Se sobresee el proceso de amparo, en contra de la actuación atribuida al Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

96-2019 271

Se declara el sobreseimiento de la presente demanda de amparo en contra de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, por haber manifestado el pretensor su conformidad con el actor reclamado.

Sentencias definitivas

512-2019 275

La presente demanda de amparo se declara no ha lugar, en virtud de no existir vulneración al derecho a la propiedad por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria por la emisión del artículo 7 n° 12 letra s) de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ciudad Delgado, ya que dicha disposición sí presenta las características de una tasa, pues se otorga una contraprestación por su pago y además, se trata de un servicio que se encuentra dentro de las competencias del municipio.

189-2017 288

Se sobresee el presente proceso de amparo en contra del Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad en virtud de no haberse agotado el recurso de apelación para subsanar la presunta afectación de los derechos que reclama la actora y en contra de la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y la Sala de lo Civil por constituir un asunto de estricta legalidad. Y se declara no ha lugar el amparo presentado en contra de la Rectora del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología, denominado "Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, en virtud de que la relación que existía entre la actora y la Escuela Especializada no era de índole laboral, sino que derivó de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales suscrito por un

plazo determinado y para la realización de una actividad específica, se concluye que la demandante no tenía la calidad de empleada pública adscrita a ese centro educativo y, por tanto, no era titular del derecho a la estabilidad laboral.

HÁBEAS CORPUS

Desistimientos

1683-2022 305

El presente proceso de hábeas corpus se tiene por desistido, de conformidad a la manifestación clara y expresa del actor, en razón que la favorecida se encuentra en libertad.

Improcedencias

2083-2022 309

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2141-2022 314

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

941-2022 318

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado que trata sobre la imposición de la medida cautelar de detención provisional por parte de la autoridad judicial.

1012-2022 322

Se declara improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor JAMR, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1189-2022 326

El solicitante reclama de la valoración que el juzgador otorgó a los elementos de convicción que constaban en el proceso penal contra la favorecida, sobre los cuales sustentó su decisión de imponer la medida cautelar de la detención provisional a su hija. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2113-2022 329

La presente demanda de hábeas corpus promovido en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de tratarse de asunto de mera legalidad.

2499-2022 333

El peticionario expresa que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal del favorecido, al no haberse dado seguimiento a su petición en la que solicitó que el Consejo Criminológico Regional Occidental, propusiera a su representado para el beneficio de libertad condicional al juez penitenciario a efecto de que se determinara su procedencia, de la cual únicamente fue notificado que había sido recibida. Agregó que solicitó ante el juez penitenciario respectivo lo referido al aludido beneficio, el que declaró ha lugar dicha petición y ordenó el trámite correspondiente. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse lo propuesto de un asunto que carece de un agravio vigente que incida en el derecho de libertad física.

2524-2022 338

El peticionario afirma que el favorecido fue capturado de manera ilegal ya que, según refiere no ha cometido ningún delito, no existía orden por escrito, ni fundamento para su detención. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

371-2021 343

La presente demanda de hábeas corpus contra el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Penal, se declara improcedente, en virtud de tratarse sobre asuntos de mera legalidad.

549-2022 346

La presente demanda de hábeas corpus iniciado contra agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de Santa Ana, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado.

888-2022 351

La peticionaria reclama de la privación de libertad en que se encuentra el favorecido, describiendo la procedencia teórica del proceso constitucional y haciendo referencia a una detención arbitraria o ilegal en el marco régimen de excepción, sin indicar el hecho concreto del que reclama, la autoridad a la que se lo atribuye ni la vulneración constitucional de derechos del referido señor; y es que la peticionaria únicamente señala la fecha de la captura, sin exponer por qué la considera inconstitucional; asimismo, se reclama de la falta de información proporcionada por la Procuraduría General de la República sobre el proceso penal del referido señor, pues lo tienen prohibido, alegando que no sabe a la orden de cuál juez se encuentra, a pesar de tener conocimiento del recinto penitenciario donde el detenido está recluido. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente al no proponerse asuntos con trascendencia constitucional.

940-2022 354

La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación en el delito de agrupaciones ilícitas. No obstante lo planteado la presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado.

177-2022 358

El solicitante expone que, por haber cumplido las dos terceras partes de su condena, tener una conducta intachable y haber cursado el programa de acuerdo al delito, le asiste el derecho de libertad condicional ordinaria

conforme lo establece el artículo 85 del CP, en ese sentido solicita a esta sala sea quien "exclusivamente definan si ha existido o no infracción a la Constitución". Dicha pretensión ha sido declarado improcedente, en virtud de que el reclamo planteado trata sobre asuntos de mera legalidad.

353-2021 360

El presente proceso de hábeas corpus reclama contra la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Tecla, por la omisión de unificar sus condenas. Dicha pretensión se declara improcedente, esto debido a la existencia de vicios en la pretensión relativos a la falta de agravio y por plantear asuntos de mera legalidad.

777-2020 363

Según lo planteado por la solicitante, debido a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz declarada por el Tribunal Constitucional, el juez demandado ordenó dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y abrir nuevamente el proceso penal en el cual, considera, se vulneraron diversos derechos fundamentales del imputado puesto que se rigió bajo el Código Procesal Penal de 1973, cuyo contenido no guarda armonía con los principios constitucionales, además, alegó que la acción penal se encuentra prescrita. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional.

654-2022 367

El solicitante reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación, pues a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación en el delito de agrupaciones ilícitas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

726-2022 370

La presente demanda de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Heriberto Alejandro Villalta López, en contra del "Director de Centros Penales General" y a

un juez especializado (no especifica cuál), "ambos de San Salvador", a favor de la señora CJPL. Dicha pretensión se declara improcedente, al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

108-2023 374

El peticionario reclama que el favorecido cumple una detención provisional ilegal por haberse prorrogado su plazo máximo original doce días después de haber vencido. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por falta de actualidad en el agravio reclamado.

167-2022 376

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, ya que lo propuesto se refiere a cuestiones que competen al proceso penal y a los jueces en materia penal, quienes son los únicos autorizados para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal, situación que no le compete a la Sala de lo Constitucional.

219-2021 379

Se declaró improcedente la petición de hábeas corpus incoada, en virtud de plantearse aspectos carentes de trascendencia constitucional, siendo de estricta legalidad.

33-2022 386

La presente demanda de hábeas corpus contra el Juez de Instrucción de Santa Ana, se declara improcedente, por falta de agravio constitucional en relación con el derecho de libertad física del favorecido derivado de la detención provisional reclamada.

465-2021 388

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra actuaciones de los magistrados de la Sala de lo Penal, se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado carece de trascendencia constitucional.

1121-2022 391

La presente demanda de hábeas corpus instalada contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Miguel, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado de la detención provisional.

1571-2022 394

La presente demanda de hábeas corpus instalado contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado.

251-2022 399

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se declara improcedente, en virtud de alegarse asuntos de mera legalidad sin trascendencia constitucional.

41-2022 403

En el presente proceso lo planteado por el favorecido está orientado a que el Tribunal Constitucional determine que en su condena ha existido doble persecución, ya que señala que en su proceso debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 del Código Penal, dado que la autoridad demandada lo condenó por un delito bajo la modalidad de continuado y, también pretende que se revise su sentencia condenatoria analizando la prueba incorporada al proceso, tomando como base el supuesto del art. 489 No. 7 del Código Procesal Penal con la finalidad de determinar su inocencia. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de estricta legalidad.

1478-2022 407

El presente proceso de hábeas corpus se declara improcedente, en virtud de que los términos en que la actora plantea la demanda imposibilita a la Sala de lo Constitucional efectuar un análisis de lo expuesto.

2000-2022 410

La solicitante reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2117-2022 414

La solicitante reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentra el favorecido, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitando que se restablezca la libertad de los procesados por haberse excedido el término de la detención provisional. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2127-2022 417

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

615-2022 421

La solicitante señala que la favorecida se encuentra detenida de forma ilegal y arbitraria, pues alega que los agentes captores carecían de orden judicial o administrativa ni existió flagrancia, tampoco había certeza sobre la existencia de una investigación contra ella o sobre la comisión de un delito. Además, sostiene que fue llevada con engaños y que la policía es auxiliar de la Fiscalía, por lo que no está facultada para aprehender a una persona. También sostiene que el juez no observó que la detención era ilegal, dado que no verificó si cumplía los estándares judiciales. Entonces, con solo celebrar dicha audiencia, pese a las condiciones de la detención, se transgredió la libertad, pues ese accionar contrarió los requisitos legales respectivos. Por ello, considera que el juez no respetó las garantías para la defensa de la favorecida, y que fue juez y acusador simultáneamente. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

945-2022 428

El peticionario alega que se mostró parte en sede policial como defensor particular del favorecido y asume que los agentes policiales remitieron el acta respectiva

junto con las demás diligencias iniciales de investigación a sede fiscal, pero esta no fue agregada por los agentes fiscales a la solicitud de imposición de medidas y, en consecuencia, no fue citado para comparecer a la audiencia de imposición de medidas donde la autoridad judicial le decretó detención provisional al justiciable. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por falta de agravio en los derechos protegidos a través del hábeas corpus.

124-2022 431

El peticionario alega que su condena de cincuenta y tres años de prisión vulnera sus derechos derivados del art. 27 de la Constitución de la República, porque estaría de manera indefinida privado de libertad, considerando además que el art. 45 numeral 1) del Código Penal es inconstitucional y debe minimizarse el monto de la pena. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional.

317-2021 434

La presente demanda de hábeas corpus ha sido promovida contra el Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, la cual se declara improcedente, en virtud de que el planteamiento expuesto constituye un asunto de estricta legalidad.

1626-2022 436

El peticionario sostiene que la detención provisional que cumple el favorecido es ilegal e injusta, ya que su captura se realizó por agentes policiales sin contar con orden administrativa que la decretara y sin que estuviera cometiendo algún delito, sino solamente por tener tatuajes en su cuerpo que no son alusivos a pandillas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1629-2022 441

El peticionario únicamente afirma que la favorecida fue privada de libertad debido a la estigmatización de ciertos sectores y que se vulneraron sus derechos de libertad y trabajo, puesto que era comerciante, sin indicar el hecho concreto que reclama ni las razones por las que

considera inconstitucional la detención. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2115-2022 444

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado consistente en que la medida cautelar impuesta vulnera el derecho de libertad física, es un asunto de mera legalidad, donde la Sala no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión.

2118-2022 448

La presente demanda de hábeas corpus iniciado contra el Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, se declara improcedente, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad.

965-2022 451

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado sobre la imposición de la detención provisional.

1024-2022 455

La peticionaria refiere que, según consta en el acta de captura y relación circunstanciada de los hechos, no se ha comprobado que su compañero de vida se encontrara "agrupado" en algún lugar con la finalidad de delinquir. Además, alega que el poseer tatuajes artísticos no constituye un elemento indiciario suficiente para presumir que se es parte de una estructura organizada para cometer delitos y, en este caso, debe existir la declaración de un testigo que corrobore "la acción de los agentes policiales", por lo que la conducta del señor SF, en relación con el delito que se le atribuye, es atípica y su detención es ilegal y arbitraria. Por tal razón solicita que se valore su estado de salud –sin proponer un reclamo al respecto– y se anule el proceso penal o la detención provisional en que su compañero de vida se encuentra o le sean impuestas

otras medidas. Dicha petición se declara improcedente la petición de hábeas corpus incoada, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1048-2022

La peticionaria cuestiona la captura y posterior detención provisional decretada al favorecido, considerando que se le ha causado agravio, pues, además de no pertenecer a pandillas, se encontraba con medidas sustitutivas a la prisión y la actual restricción interrumpió su reinserción a la sociedad y le impide el desarrollo de sus actividades. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1756-2022

El peticionario afirma que el favorecido fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que, según refiere no existía orden por escrito, ni fundamento para su detención. Asimismo, señala de forma general que a su criterio existen vulneraciones al debido proceso, atentados contra la dignidad personal y falta de información que en muchos casos podría constituir desaparición forzada. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

265-2022

El solicitante reclama la incorporación de un testigo con criterio de oportunidad al elenco probatorio y la valoración que el juez de sentencia otorgó a su declaración, lo cual, a su criterio, no cumple con los requisitos del debido proceso. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen una mera inconformidad sin trascendencia constitucional.

489-2022

El primer peticionario afirma que los favorecidos fueron capturados sin orden de detención por agentes policiales, sin permitirles contacto con defensor ni familiares, y la jueza al decretar la detención provisional no valoró los argumentos de la defensa, tampoco cumplió con los presupuestos de dicha medida cautelar pues los

elementos de convicción fueron insuficientes y no valoró las circunstancias de los hechos ni si alguno tenía medidas cautelares. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse que carece de trascendencia constitucional y de un asunto de mera legalidad.

648-2022 481

La solicitante reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

950-2022 485

La peticionaria refiere que su hijo, el señor CR, fue capturado el día "20 de abril de 2022" y que el día 10 de junio del mismo año se celebró audiencia especial de revisión de medidas en el "Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador", en la que la defensa técnica de su hijo presentó todos los arraigos laborales, domiciliares y familiares para que se le sustituyera la detención provisional, ya que no es pandillero y no posee antecedentes penales ni policiales, lo cual se acreditó con las respectivas constancias. Sin embargo, la jueza denegó el otorgamiento de dichas medidas porque el inmueble donde aquel habitaba no se encontraba registrado a su nombre, sino que estaba inscrito a nombre de su abuela ya fallecida y, para dicha autoridad judicial, era necesario que el imputado fuera dueño y poseedor del inmueble para gozar de medidas distintas a la privación de libertad. Dicha pretensión se declara improcedente, en virtud de que el actor no argumento un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad.

1670-2022 488

La peticionaria cuestiona la actuación de agentes de la corporación policial, pues afirma que estos plasmaron en las actas de detención una mentira elaborada a efectos de capturar al favorecido. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1718-2022 494

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción A3 de San Salvador; dicha petición se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención provisional.

1945-2022 499

El solicitante señala que no hay fundamento legal para la detención del favorecido, pues afirma que no había cometido delito, que el hecho de encontrarse en un lugar considerado de grupos pandilleriles no es motivo suficiente para la privación de libertad. Además sostiene que la detención provisional se fundamentó únicamente con el acta de detención que obra en el expediente. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

258-2022 504

La presente demanda de hábeas corpus iniciado en contra de un juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado.

268-2022 507

Lo planteado por el favorecido está orientado a que el Tribunal Constitucional determine que en su condena ha existido doble persecución, ya que señala que en su proceso debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 del Código Penal, dado que la autoridad demandada lo condenó por un delito bajo la modalidad de continuado. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

992-2022 510

El solicitante reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentra el favorecido, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito

de agrupaciones ilícitas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

275-2021 514

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado trata sobre asuntos de mera legalidad.

1013-2022 518

La peticionaria cuestiona la captura y posterior detención provisional decretada a la favorecida, considerando que se le ha causado agravio, pues, además de no pertenecer a grupos de pandillas, se encontraba en cumplimiento de trabajo de utilidad pública y la actual restricción interrumpe su reinserción a la sociedad y le impide el desarrollo de sus actividades. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1807-2022 522

La solicitante señala que no hay fundamento legal para la detención del favorecido, pues afirma que este no ha cometido delito, ni fue perseguido o privado de libertad junto a otras personas o en flagrancia. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1885-2022 527

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad.

207-2022 532

El solicitante refiere que ante la autoridad demandada ha solicitado audiencia previa de revisión de caso con el perdón de la víctima, asimismo, sostiene que de intervenir su hijo, la víctima dirá la verdad de cómo sucedieron los hechos y que el proceso se debió a la manipulación de una persona que buscaba hacerle daño al condenado. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por reclamar un asunto sin trascendencia constitucional.

2114-2022 535

La presente demanda de hábeas corpus, instalado contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, se declara improcedente, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

672-2022 538

El peticionario afirma que el favorecido fue capturado de manera ilegal e inconstitucional ya que, según refiere no tiene tatuajes, nunca ha cometido delito, carece de antecedentes penales y policiales, no ha estado involucrado en grupos delictivos y tampoco existe una orden escrita decretando su privación de libertad. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

1175-2022 543

La peticionaria afirma que la detención de la favorecida es ilegal o arbitraria pues, según refiere fue detenida en su lugar de trabajo sin tener una orden de detención o pruebas en su contra, ya que no posee antecedentes penales o vínculo alguno con estructuras, agrega que han presentado arraigos y pruebas de su inocencia y que es madre soltera de tres hijos. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de legalidad.

118-2022 548

La presente demanda de hábeas corpus presentado en contra de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se declara improcedente, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen asuntos de mera legalidad.

2149-2022 551

La presente demanda de hábeas corpus presentado en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Miguel, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado.

2203-2022 556

La presente demanda de hábeas corpus interpuesta contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, se declara improcedente, en virtud de tratarse de asuntos de mera legalidad.

2347-2022 560

La solicitante reclama contra la detención provisional en la que se encuentra el favorecido, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por la Fiscalía General de la República no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitando que se restablezca la libertad del procesado por haberse excedido el término de la detención provisional. Dicha pretensión fue declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

538-2022 563

La solicitante reclama por la demora con la cual la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador tramita las peticiones efectuadas a favor del favorecido, así como de la falta de respuesta del Consejo Criminológico Regional Central en emitir el dictamen necesario para analizar en audiencia especial el otorgamiento del beneficio penitenciario de la libertad condicional ordinaria, lo cual vulnera los derechos del imputado. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por falta de agravio efectivo actual, derivado del acto reclamado.

963-2022 567

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, ya que no se proponen hechos que amenacen de manera cierta e inminente la libertad personal de la actora y que deban hacerse cesar por esta la Sala de lo Constitucional.

1328-2022 570

La presente demanda de hábeas corpus interpuesto contra el Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador, se declara improcedente, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad.

2126-2022 573

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2404-2022 578

El solicitante reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2531-2022 582

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, en virtud de que los planteamientos establecidos constituyen una mera inconformidad carente de trascendencia constitucional.

79-2022 585

Las afirmaciones del peticionario están encaminadas a que el Tribunal Constitucional analice la prueba habida en el proceso penal y que fue valorada por la autoridad judicial para condenar al favorecido de los hechos acusados, en ese sentido señala la falta de dirección funcional de la Fiscalía General de la República; asimismo sostiene que el delito no se enmarca en los hechos acusados por no demostrarse su dominio funcional. Cuestiona la falta de certificación por parte de la Unidad Técnica Ejecutiva para la víctima, además la admisión y valoración del acta del reconocimiento de personas como prueba, debido a que según él en ella no constan las firmas de los defensores y, finalmente, refiere que no fue privado de libertad en flagrancia, pero cuando fue detenido no se le mostró orden de captura emitida por la autoridad competente. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por alegarse asuntos de mera legalidad sin trascendencia constitucional.

60-2022 588

El peticionario pretende que el Tribunal Constitucional analice, por medio de hábeas corpus preventivo, la situación del favorecido, quien no cumple restricciones a su libertad personal pero, a criterio del solicitante, es posible que las sufra, ya que se tramita proceso penal ante el Juez Segundo de Instrucción de la Unión, del cual alega extinta la acción, por prescripción. Dicha pretensión ha sido declarada improcedencia por tratarse de un asunto sin trascendencia constitucional y no plantearse agravio en el derecho fundamental de libertad física.

724-2022 592

La presente demanda de hábeas corpus presentado en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Miguel, se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado tarta de asuntos de mera legalidad y de simple inconformidad.

439-2022 598

La presente demanda de hábeas corpus ha sido interpuesta debido a que los abogados del favorecido estiman que existe falta de fundamentación de la sentencia con respecto a la insuficiencia y valoración de las pruebas, concretamente la transcripción de la declaración de los agentes investigadores; ya que, de forma errónea, se le consideró al condenado coautor en el delito acusado, pues su única participación fue la de dar seguridad, en consecuencia, su grado de autoría y por ende la pena debió adecuarse a la de cómplice, tal como lo solicitaron en el recurso de revisión. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad.

799-2022 601

La actual pretensión de hábeas corpus presentada a favor del actor y a favor de más de cincuenta veteranos y excombatientes del "FMLN-HISTÓRICO" y cuarenta familias agricultoras del caserío Barra Salada, cantón Salinas de Ayacachapa del municipio de Sonsonate que nos son identificados, se declara improcedente, lo cual radica porque se alegan asuntos que no pueden ser conocidos a través del hábeas corpus y que carecen de trascendencia constitucional.

1376-2022 605

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales y la detención provisional decretada por el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana.

1992-2022 610

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

1999-2022 614

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo plantead o contra la detención realizada por agentes policiales.

89-2022 617

El actor considera que debió ser condenado por un solo delito y no por dos, con base en su apreciación sobre los hechos y su consideración de la existencia de un concurso aparente de leyes. Dicha pretensión ha sido declarada improcedente por tratarse de un asunto de mera legalidad.

962-2022 620

La presente demanda de hábeas corpus interpuesta contra el Director de la Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República, se declara improcedente, al proponer un asunto que carece de trascendencia constitucional.

1996-2022 623

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2092-2022 628

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2337-2022 631

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2356-2022 636

La presente demanda de hábeas corpus presentado contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de reclamarse asuntos de mera legalidad.

2413-2022 640

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del ejército, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada.

245-2022 645

La presente demanda de hábeas corpus presentada contra los jueces del Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado planteado sobre la condena y su falta de fundamento consiste en asuntos de mera legalidad.

2583-2022 648

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra agentes de la Policía Nacional Civil, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

2348-2022 651

La presente demanda de hábeas corpus presentada contra un Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana

–sin especificar cuál–, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado se trata de asuntos de mera legalidad.

82-2022 654

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado se trata sobre asuntos de mera legalidad.

949-2022 656

La presente demanda de hábeas corpus presentada contra agentes de la Policía Nacional Civil y del "Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana", se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado trata sobre asuntos de mera legalidad.

98-2022 661

La presente demanda de hábeas corpus presentada contra uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado constituye asuntos de mera legalidad.

2352-2022 664

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra un Juez Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado trata de asuntos de mera legalidad.

1177-2022 667

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra el Juez Especializado de Instrucción de San Salvador –sin especificar cuál–, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad

278-2022 670

La presente demanda de hábeas corpus iniciado contra el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de que el acto reclamado trata de asuntos de mera legalidad.

2851-2022 673

La presente demanda de hábeas corpus iniciada contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, se declara improcedente, en virtud de que el reclamo planteado se fundamenta en un asunto de mera inconformidad.

348-2022 675

El demandante expone que se encuentra procesado por el delito de robo, sin indicar la autoridad responsable de las actuaciones u omisiones que expone, que su abogado le expresó que, según el requerimiento fiscal, se le estaba procesando por "robo con arma de fuego", por lo que centra su reclamo en su desacuerdo con las medidas sustitutivas a la detención provisional decretadas debido a que, según su criterio, no ha cometido el delito que se le atribuye y hay falta de elementos probatorios en su contra. Dicha pretensión se declara improcedente, en virtud de que se alegan asuntos de mera legalidad.

2006-2022 677

La presente demanda de hábeas corpus contra agentes de la delegación de la Policía Nacional Civil de San Agustín, Usulután, se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

148-2022 682

La presente demanda de hábeas corpus presentado contra de uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, se declara improcedente, en virtud que el reclamo planteado sobre la pena impuesta trata de asuntos de mera legalidad.

206-2022 685

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional y de estricta legalidad, con respecto al reclamo de la pena impuesta.

2731-2022 689

La presente demanda de hábeas presentada contra el Juez Especializado de Instrucción "A2" de San Salvador, se declara improcedente, por alegarse asuntos sin trascendencia constitucional.

678-2022 692

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente en virtud de que el acto reclamado se trata de un asunto de mera legalidad y con respecto a uno de los favorecidos por carecer de trascendencia constitucional.

277-2022 699

La presente demanda de hábeas corpus presentada contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, se declara improcedente, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

3258-2022 701

La presente demanda de hábeas corpus instalada contra los jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia, ambos con sede en San Salvador, se declara improcedente, en virtud que los planteamientos expuestos constituyen asuntos de mera legalidad.

Inadmisibilidades

179-2021 705

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haber contestado las prevenciones efectuadas por el Tribunal Constitucional.

2689-2022 706

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

2112-2023 708

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

2049-2022 710

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

326-2022 712

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

387-2019 714

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse contestado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

39-2019 715

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud no haber subsanado las prevenciones en los términos requeridos por la Sala de lo Constitucional.

965-2023 717

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención en los términos requeridos por la Sala de lo Constitucional.

1176-2022 721

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

2044-2022 722

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

948-2022 724

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de que la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional no fue evacuada en el tiempo establecido para ello.

456-2022 726

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

630-2022 728

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

899-2022 729

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

589-2022 731

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

625-2022 733

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

292-2021 734

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

392-2021 735

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

121-2022 736

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por el Tribunal Constitucional.

1738-2022 738

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible por no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

1746-2022 740

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional

1922-2022 742

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

2029-2022 744

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por el tribunal constitucional.

1918-2022 747

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por el Tribunal Constitucional.

918-2022 748

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

216-2021 750

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por el Tribunal Constitucional.

270-2021 751

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por el Tribunal Constitucional.

387-2021 753

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible por no haberse subsanado en los términos requeridos por el Tribunal Constitucional los aspectos prevenidos.

2081-2022 756

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

47-2020 758

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

1257-2022 759

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

790-2020 761

Se declara inadmisible la petición de hábeas corpus, por no haberse subsanado la prevención efectuada por este tribunal en los términos requeridos en cuanto a la falta de citación al proceso del privado de libertad.

1135-2022 766

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

1515-2022 769

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

925-2022 770

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en razón de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

865-2022 772

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, al no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

912-2022 774

La presente petición de hábeas corpus ha sido declarada inadmisible al no haberse evacuado la prevención efectuada por el Tribunal Constitucional.

239-2021 776

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

1537-2023 777

Se declara inadmisible la petición de hábeas corpus planteada, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

1264-2022 778

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de que no se evacuaron las prevenciones realizadas por la Sala de lo Constitucional.

1615-2022 780

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

166-2022 782

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud que el actor no evacuó la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

448-2022 783

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

461-2021 786

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de que no se evacuaron las prevenciones realizadas por la Sala de lo Constitucional.

516-2023 788

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, por tratarse de un asunto de mera legalidad con relación al reclamo planteado contra la detención realizada por agentes policiales.

66-2022 790

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por la Sala de lo Constitucional.

1543-2022 792

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haber evacuado la prevención efectuada por la Sala de lo Constitucional.

709-2023 794

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de que no se configurarse un agravio constitucional en relación con la prohibición de doble juzgamiento que el actor reclama.

1105-2022 799

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

650-2022 801

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, en virtud de no haberse evacuado la prevención realizada por el Tribunal constitucional.

572-2022 804

La presente demanda de hábeas corpus se declara improcedente, en virtud de que no se evacuó la prevención realizada por la Sala de lo Constitucional.

734-2023 806

La presente demanda de hábeas corpus se declara inadmisible, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por la Sala de lo Constitucional.

Sobreseimientos

160-2021 808

Se declara el sobreseimiento de la pretensión de hábeas corpus en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado

557-2020 814

Los solicitantes refieren que el imputado se encuentra privado de libertad en el Centro Penal de Apanteos, en virtud de que fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, pero al no estar de acuerdo con dicha sentencia interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, Ahuachapán, confirmado la decisión. Por lo que, aún inconformes, interpusieron recurso de casación, el cual a la fecha no ha sido resuelto por la Sala de lo Penal, no obstante haber transcurrido más de un año desde su presentación. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

640-2020 816

En el presente caso se alega la falta de fundamentación de la ampliación de la detención provisional del favorecido. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

744-2020 819

El peticionario alega que su defendido fue condenado, decisión contra la que se interpuso recurso de apelación y posteriormente el de casación. Considera que aquel se encuentra en una privación de libertad ilegal por haberse excedido el plazo de veinticuatro meses de la detención provisional sin que exista sentencia condenatoria firme ni prórroga de la citada medida cautelar. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

182-2021 821

El presente proceso de hábeas corpus se sobresee en razón de haber cesado los efectos del acto reclamado.

357-2021 824

El peticionario refiere que su defendida fue condenada por un juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, decisión que fue recurrida en apelación ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, en donde mediante resolución pronunciada se confirmó su condena; posteriormente, interpuso recurso de casación el cual a la fecha no ha sido resuelto, por lo que alega que su representada tiene más de veinticuatro meses en detención provisional, excediendo así el plazo máximo que la ley establece para dicha medida cautelar. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

56-2021 826

Se sobresee el presente proceso de hábeas corpus en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

26-2021 830

El solicitante expuso que, habiendo cumplido con los requisitos regulados en el art. 85 del Código Penal, ha dirigido tres escritos al juez penitenciario que demanda para obtener la libertad condicional, sin que se le diera respuesta. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

555-2020 834

En la presente demanda de hábeas corpus se declara el sobreseimiento del reclamo, ya que no existe un acto restrictivo de libertad que se derive del reclamo en cuestión. En consecuencia, cese la medida cautelar ordenada en este proceso constitucional.

578-2020 838

En la presente demanda de hábeas corpus se declara el sobreseimiento del acto reclamado, en virtud de haber cesado los efectos del mismo.

455-2020 841

En el presente proceso de hábeas corpus se declara el sobreseimiento de la pretensión, en razón de haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la detención provisional, tal sobreseimiento radica en razón de existir una condena impuesta a la favorecida.

303-2022 844

El solicitante alega que en audiencia inicial celebrada por la Jueza de Paz de Ayutuxtepeque, ordenó que el proceso penal instruido en contra de su representado pasara a instrucción pero con medidas alternas a la detención provisional, librando ese mismo día los oficios al centro penal aludido para que se ejecutara su inmediata libertad; sin embargo, el director penitenciario demandado ha omitido dar cumplimiento a dicha orden, manteniendo al favorecido restringido de su libertad, sin que exista justificación para ello. El presente proceso de hábeas corpus ha sido sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

256-2022 847

En el presente proceso de hábeas corpus se declara el sobreseimiento de la pretensión, debido a que no existe un agravio en el derecho de libertad física del actor generado por la detención provisional, al momento de promoverse el actual proceso.

184-2021 850

Se sobresee el hábeas corpus solicitado, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

465-2020 852

Se declara el sobreseimiento del presente proceso de hábeas corpus, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

361-2020 856

En la presente demanda de hábeas corpus se declara el sobreseimiento, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

138-2021 858

En la presente demanda de hábeas corpus se declara el sobreseimiento de la pretensión, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

459-2019AC 861

Se declara el sobreseimiento de la pretensión de hábeas corpus, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

Sentencias

59-2022R 866

En el presente proceso de hábeas corpus se confirma la decisión venida en revisión que determinó la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales de defensa, audiencia y libertad personal del favorecido.

220-2021R 872

En el presente recurso de revisión se confirma la sentencia desestimatoria venida en revisión, proveída por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana por no haberse vulnerado los derechos fundamentales de defensa y libertad personal en la decisión de mantener su detención provisional.

Sentencias definitivas

747-2020 878

Se declara no ha lugar el hábeas corpus, por haberse comprobado la existencia de una decisión judicial escrita que justifica la restricción a la libertad física, la cual fue emitida por la Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador.

128-2022R 881

Se confirma la sentencia venida en revisión, proveída por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, emitida en el hábeas corpus promovido, en cuanto a no haberse vulnerado la prohibición constitucional de doble juzgamiento ni el derecho de libertad personal del favorecido.

251-2021R 888

Se declara no ha lugar el hábeas corpus solicitado, al no existir violación a su derecho de defensa y libertad física; en consecuencia, deben continuar los favorecidos en la situación jurídica en que se encuentren.

330-2021R 892

Se declara no ha lugar el hábeas corpus solicitado, al no existir violación a los derechos de defensa, presunción de inocencia y libertad física; en consecuencia, continua el favorecido en la situación jurídica en que se encuentre.

34-2022R 898

Se confirmase el fallo emitido por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, de la resolución venida en revisión consistente en declarar no ha lugar el hábeas corpus solicitado, con base en los argumentos expuestos en la decisión, al no existir violación a sus derechos de defensa y libertad física; en consecuencia, continúe el favorecido en la situación jurídica en que se encuentre.

386-2020 902

La presente demanda de hábeas corpus se declara no ha lugar, por no haber existido inobservancia al principio de legalidad ni violación constitucional a los derechos a la seguridad jurídica y libertad física del favorecido, por parte de la autoridad demandada.

INCONSTITUCIONALIDADES

INICIADOS POR INAPLICACIÓN

Improcedencias

42-2023 909

La presente demanda de inconstitucionalidad presentada vía certificación de inaplicación por el Juez Segundo de Paz de Atiquizaya, en la que declaró inaplicable el artículo 346-B letra b del Código Penal, por la supuesta violación al artículo 27 inciso 3° de la Constitución, se declara improcedente. En razón de que la resolución de inaplicabilidad no reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional y la ley para poder iniciar un proceso de inconstitucionalidad.

INICIADOS POR DEMANDA

Improcedencias

25-2023 913

La presente demanda de inconstitucionalidad donde se solicita se declara inconstitucional los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Impuestos Municipales de Usulután, por la supuesta vulneración de los artículos 2 y 131 ord. 6° de la Constitución se declara improcedente, en virtud de no haber configurado los elementos correspondientes con el examen de igualdad conforme a los precedentes constitucionales, a pesar de que el propio demandante vinculó sus alegaciones con el principio de igualdad.

23-2023 916

Se declara improcedente la demanda presentada, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, por la supuesta violación de los artículos 2 y 131 ordinal 6° de la Constitución. La razón es que no se han configurado los elementos del test de ig ualdad según los precedentes constitucionales, pese a que el actor vinculó sus alegaciones con el principio de igualdad.

27-2023 919

La presente demanda de inconstitucionalidad mediante la cual pide la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022, que contiene la declaratoria del régimen de excepción, así como de sus decretos sucesivos se declara improcedente, en virtud que lo que la actora pretende reclamar es una detención arbitraria, por lo que tal reclamo no se corresponden con los fines del proceso de inconstitucionalidad. Por el contrario, son argumentos propios del proceso de hábeas corpus, motivo por el cual la pretensión se declara improcedente.

28-2023 922

La presente demanda de inconstitucionalidad se declara improcedente, en razón que las alegaciones no corresponden con los fines del proceso de inconstitucionalidad, más bien corresponden al proceso de hábeas corpus y también por no existir un parámetro de control y una confrontación normativa.

30-2023 925

La presente demanda de inconstitucionalidad se declara improcedente, en virtud que existe cosa juzgada con relación a la inconstitucionalidad planteada.

36-2023 929

La presente demanda de inconstitucionalidad se declara improcedente en virtud de existir cosa juzgada en relación con la pretensión planteada y al no exponer argumentos diferentes a los planteados en la inconstitucionalidad 45-2012.

24-2023 932

Se declárase improcedente la demanda, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 482 del Código Procesal Civil y Mercantil, por la supuesta violación de los artículos 11 y 12 de la Constitución. Las razones son: a) en relación con la alegación sobre la supuesta infracción al debido proceso, se ha invocado un parámetro de control más genérico respecto de otros más concretos; b) en cuanto a la supuesta transgresión del derecho de defensa, no se ha aducido de forma suficiente cómo este resultaría vulnerado, y c) sobre la supuesta violación de la presunción de inocencia, esta es una categoría constitucional que solamente resulta aplicable a los procesos o procedimientos en los que se ejerza el poder punitivo estatal (Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador), no en los procesos civiles.

45-2023 936

La presente demanda de inconstitucionalidad se declara improcedente, en virtud de que se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 202 de la Constitución, pues este no contiene la autonomía municipal; también se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 14 de la Constitución, pues el arresto administrativo previsto en dicha disposición es una restricción de la libertad física de las personas impuesta por una autoridad administrativa, sujeta a reserva de ley, también la alegación de la supuesta infracción al artículo 131 de la Constitución no delimita suficientemente el parámetro de control en cuanto a la supuesta violación de la reserva de ley.

54-2023 941

La presente demanda de inconstitucionalidad donde se solicita se declare inconstitucional la Ley Especial para la Reestructuración Municipal por vicios de forma y contenido al supuestamente violentar disposiciones constitucionales se declara improcedente, la razón radica que la consulta popular no es una etapa del proceso de formación de ley que exija la Constitución, no se han argumentado los elementos necesarios con relación a que no se tomó el censo poblacional elaborado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo y no se realizó ningún contraste normativo sobre la supuesta infracción a los artículos 72 y 73 de la Constitución, así como tampoco se adujo la violación al artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana.

ADMISIÓN

159-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito presentado por el señor JIVR, junto con sus anexos, por medio del cual evacua las prevenciones realizadas.

Analizados la demanda y el mencionado escrito, con la documentación adjunta, se hacen las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, el citado actor reclama contra el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), por el aparente despido de hecho ejecutado en el mes de octubre de 2017. Al respecto, indica que ingresó a laborar para dicha institución el 18 de agosto de 2001 por contrato de trabajo y posteriormente fue nombrado por Ley de Salarios. Manifiesta que se desempeñó como asesor jurídico en diversas unidades, siendo trasladado en octubre de 2016 a la Delegación La Libertad Norte, ubicada en el centro de Lourdes Colón, lugar donde había altos niveles de delincuencia.

Expone que solicitó no ser reubicado en ese lugar debido a la actividad de las pandillas, pero no obtuvo una respuesta favorable a su petición; por ello, en 2017 fue acosado por tales grupos. De ahí fue traslado al "Penalito" de Lourdes Colón y estando en dicho lugar –asegura– lo amenazaron con su muerte por ser empleado de la PNC.

Explica que por tal situación solicitó vía telefónica un permiso para ausentarse de su trabajo por tres días, a lo cual el comandante de guardia le manifestó que su jefe no se encontraba en ese momento, pero que le informaría sobre su llamada. Sin embargo, al retornar a sus labores, el 23 de octubre de 2017 el inspector jefe de la Subdelegación de Lourdes Colón le informó que había sido despedido. Alega que dicha decisión fue adoptada sin haberse tramitado un procedimiento previo en el que pudiera defender sus derechos, ni se le otorgó ninguna indemnización por la terminación de su vínculo laboral. Consecuentemente, considera que se han lesionado sus derechos de audiencia y estabilidad laboral.

II. Expuestos los argumentos que constituyen el relato de los hechos, es pertinente, en atención al principio *iura novit curia* –el Derecho es conocido por el Tribunal– y al artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la queja formulada por el peticionario.

La jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– ha establecido que el derecho de audiencia se traduce en la exigencia constitucional de que toda limitación a las posibilidades de ejercer un derecho sea precedida del proceso que para el caso concreto el ordenamiento jurídico prevé, el cual deberá hacerse del conocimiento de todos los intervinientes y darles a estos la posibilidad real de exponer sus razonamientos y de defender sus derechos de manera plena y amplia y, además, en este, deberán cumplirse todas aquellas formalidades esenciales que tiendan a asegurar la efectividad del derecho de audiencia.

De igual manera, en la relacionada sentencia se estableció que el derecho de defensa se manifiesta ante la configuración de una contienda donde exista la necesidad de argüir y aportar elementos tendentes al desvanecimiento de los alegatos incoados por la contraparte; el ejercicio de este derecho implica las posibilidades de participar en un proceso informado por el principio de contradicción, en que las partes puedan ser oídas en igualdad y utilizar las pruebas pertinentes en su defensa.

En ese orden de ideas, es necesario señalar que, si bien es cierto, se ha alegado –como categoría jurídica procesal– la posible vulneración del derecho de audiencia, de la relación de los hechos y de la situación planteada en la demanda se colige que también se procura sustentar la aparente conculcación del derecho de defensa –como manifestación del debido proceso–, por presuntamente haberse omitido realizar un procedimiento previo a la destitución del interesado en el que tuviera la oportunidad de controvertir los hechos y aportar los medios probatorios.

Por consiguiente, la admisión de la demanda se entenderá respecto de la supuesta lesión de los derechos de audiencia, defensa –ambos como manifestaciones del debido proceso– y estabilidad laboral.

III. Habiéndose constatado que la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia determinados por la legislación procesal y la jurisprudencia aplicable, su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad del supuesto despido de hecho del señor VR realizado en octubre de 2017 aparentemente por órdenes del director general de la PNC.

Tal admisión se debe a que, en opinión del actor se habrían quebrantado sus derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral, pues previo a su remoción debió seguírsele el procedimiento legal respectivo a fin de que pudiera defender sus derechos.

IV. Establecidos los términos de la admisión del proceso, corresponde examinar la posibilidad de decretar una medida precautoria.

De esta manera, resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos del acto impugnado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares, cuya función es impedir la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la queja y se lleva a cabo mediante una incidencia en la esfera jurídica del demandado o, incluso, de quien resulte beneficiado con el acto cuya constitucionalidad se busca controvertir.

Con relación a ello, es menester puntualizar que para la adopción de una medida cautelar deben concurrir al menos dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho amenazado –*fumus boni iuris*– y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso –*periculum in mora*–.

En el presente caso, se advierte que existe apariencia de buen derecho en virtud, por una parte, de la invocación de una presunta afectación de los derechos constitucionales del pretensor y, por otra, de la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace descansar aquella, específicamente por señalar que ha sido separado de su cargo sin que previamente se tramitara un procedimiento en el que se garantizara su defensa.

No obstante, en vista del tiempo transcurrido desde la actuación reclamada –23 de octubre de 2017– no se observa que exista un efectivo peligro en la demora, ya que la afectación alegada en la esfera jurídica de aquel se habría consumado.

Por consiguiente, al no concurrir uno de los requisitos procesales para la adopción de medidas precautorias en esta sede, resulta impertinente ordenar la suspensión de los efectos de la actuación impugnada.

V. Corresponde en este apartado realizar algunas consideraciones sobre la manera en que se llevarán a cabo ciertas actuaciones procesales en este caso.

1. Con relación a la tramitación del amparo y, en particular, sobre la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal al Fiscal de esta Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como se ha ordenado en los autos de 5 y 19 de julio de 2013, amparos 195-2012 y 447-2013, respectivamente, que al contestar la audiencia que se le confiere conforme al artículo 23 de la LPC, señale un lugar dentro de esta ciudad o un medio técnico para tales efectos; caso contrario, las notificaciones deberán efectuarse en el tablero de esta Sala, en virtud de lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en los procesos constitucionales.

Sin embargo, tomando en consideración que dicha autoridad mediante el escrito de 26 de junio de 2020 proporcionó una dirección de correo

electrónico para diligenciarle los actos de comunicación, deberán realizarse las notificaciones a través del referido medio técnico, mientras aquella no indique lo contrario.

2. Asimismo, es importante aclarar que para rendir informes, así como para evacuar audiencias o traslados, la autoridad demandada y demás intervinientes dentro de este proceso podrán hacer uso del correo institucional (sala.constitucional@oj.gob.sv).

POR TANTO, con base en las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 21, 22, 23, 79 inciso 2º y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y demás disposiciones citadas, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Admítese* la demanda presentada por el señor JIVR contra el director general de la Policía Nacional Civil, por su despido –aparentemente– de hecho, efectuado en octubre de 2017.

Tal admisión se debe a que, según el interesado, se habrían vulnerado sus derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral, ya que previo a su remoción debió seguírsele el procedimiento legal respectivo a fin de que pudiera defender sus derechos.

2. *Sin lugar la suspensión de los efectos del acto reclamado*, por haberse consumado sus efectos en la esfera jurídica del pretensor.

3. *Informe* dentro de veinticuatro horas el director general de la Policía Nacional Civil, si son ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda.

4. *Instrúyese* a la Secretaria de esta Sala que, habiéndose recibido el informe requerido a la autoridad demandada o transcurrido el plazo sin que esta lo rindiere, notifique el presente auto al Fiscal de la Corte, a efecto de oírlo en la siguiente audiencia.

5. *Previénese* al Fiscal de la Corte que, al contestar la audiencia que se le confiere conforme al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, señale un lugar dentro de esta ciudad o un medio técnico para recibir las notificaciones; caso contrario, estas deberán realizarse mediante tablero. Sin embargo, en virtud de que a través del escrito de 26 de junio de 2020 se proporcionó una dirección de correo electrónico, deberán efectuársele las comunicaciones a través del mencionado medio técnico, mientras aquel no indique lo contrario.

6. *Identifique* la autoridad demandada el medio técnico por el cual desea recibir los actos procesales de comunicación.

7. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (correo electrónico) designado por el Fiscal de la Corte para recibir notificaciones.

8. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

107-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas y cinco minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por el señor AREC, junto con la documentación anexa, mediante el cual subsana las prevenciones que le fueron efectuadas.

Antes de emitir el pronunciamiento que corresponda, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, el actor reclama contra el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, y el Alcalde de la referida municipalidad.

Al respecto, explica que ingresó a laborar a la citada alcaldía el 19 de mayo del 2000, siendo su último cargo el de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones *ad honorem*, en el que desempeñaba funciones eminentemente técnicas, tales como: cumplir las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas establecidas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de dicha ley, entre otras; sin embargo, el 28 de mayo de 2018 el Síndico Municipal le hizo saber que se encontraba despedido, dado que su puesto de trabajo era de confianza, ello sin haberle seguido un procedimiento previo en el que se le permitiera defender sus intereses.

Inconforme con ello, inició un juicio ante el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), quien declaró sin lugar la nulidad de despido pretendida, por lo que impugnó tal decisión mediante un recurso de revocatoria; no obstante, este también fue resuelto de forma desfavorable.

Por consiguiente, estima que se han menoscabado sus derechos de audiencia –como manifestación del debido proceso–, seguridad jurídica y a un "juicio previo".

II. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. La jurisprudencia constitucional –verbigracia las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya

validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

2. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El señor EC demanda al municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, y al Alcalde de la referida municipalidad por su despido presuntamente de hecho, situación que habría lesionado sus derechos de audiencia –como manifestación del debido proceso–, seguridad jurídica y a un "juicio previo".

De igual forma, señala que "... [respecto a] si posterior a la interposición del recurso de revocatoria hi[zo] uso del recurso de [revisión] u otro medio impugnativo[,] siendo que [su] despido fue intempestivo por parte de la municipalidad que [...] se hizo sin que se [le] siguiera el procedimiento previo, se trata de un acto que violenta el debido proceso [...] como acto previo indispensable para que sea constitucional [...] por lo que estaba habilitado desde ese momento [para] la promoción del proceso de amparo...", de lo que se colige que el peticionario no agotó el recurso de revisión regulado en el artículo 79 de la LCAM.

2. A. Al respecto, debe apuntarse que en la improcedencia de 11 de marzo de 2010, amparo 160-2010, se determinó que la exigencia del agotamiento de los recursos constituye una carga para la parte interesada de emplear en tiempo y forma los medios impugnativos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia.

B. Según expresa el actor, con la finalidad de convertir su destitución ordenada por las autoridades demandadas, interpuso nulidad de despido ante el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador, misma que fue rechazada, razón por la cual planteó recurso de revocatoria, el cual también fue desestimado.

Ahora bien, el artículo 79 de la LCAM dispone que: "... de las sentencias definitivas de los jueces de lo laboral o jueces con competencia en esa materia del municipio de que se trate, *podrá interponerse recurso de revisión en la cámara respectiva de esta materia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la denegación del recurso de revocatoria*, expresando en el mismo los motivos que se tengan para impugnar la sentencia [...] La parte que se considere agraviada por la sentencia proveída por la cámara respectiva en el recurso de revisión, podrá ejercer sus derechos mediante la acción contencioso administrativa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia....".

De conformidad con la disposición citada, una vez agotada la revocatoria, el interesado tenía el plazo de tres días hábiles para interponer recurso de revisión ante la cámara competente y controvertir la decisión del Juez Primero de lo Laboral de San Salvador que le causaba agravio; sin embargo, tal y como afirma el señor EC "... no hi[zo] uso de [ese] u otro medio impugnativo...".

En ese sentido, es posible afirmar que, si bien es cierto, la parte actora interpuso revocatoria con el objetivo de controvertir el fallo a través del cual se declaró que no había lugar a la demanda de nulidad de despido, una vez rechazado el mismo tenía habilitado el derecho para plantear la revisión ante la cámara competente, el cual, además, ha sido perfilado por la jurisprudencia constitucional –por ejemplo, en las sentencias del 13 de marzo de 2015, amparos 82-2012 y 84-2012– como un medio de impugnación

idóneo para corregir las eventuales lesiones a los derechos fundamentales que hayan tenido lugar a consecuencia de la inobservancia de preceptos legales u omisiones procedimentales por parte de la autoridad demandada, el cual, en el presente caso, no fue agotado.

En consecuencia, el recurso de revisión consagrado en el artículo 79 de la LCAM se perfila como un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC; por ende, al no verificarse tal circunstancia, es decir, el agotamiento del mismo, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en la precitada disposición.

3. En atención a lo expuesto, es posible advertir en el presente caso la existencia de un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide el conocimiento y decisión sobre el fondo del reclamo formulado, pues se ha omitido agotar el mecanismo específico franqueado en la legislación ordinaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la vulneración constitucional generada por la actuación que se impugna, siendo pertinente la terminación anormal del presente amparo a través de la figura de la improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el señor AREC contra el municipio de Delgado, departamento de San Salvador, y el Alcalde de la referida municipalidad, por la falta de agotamiento del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 79 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

2. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

171-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por los abogados JARF y DIGA, en calidad de apoderados judiciales de la sociedad Bósforo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Bósforo, Ltda. de C.V.), junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. Los referidos profesionales dirigen su queja contra la Asamblea Legislativa (AL) por haber emitido el art. 40 de la Tarifa General de Arbitrios Municipales de Jiquilisco (TGAMJ), creada mediante Decreto Legislativo número 301 de 25 de febrero de 1986, publicado en el Diario Oficial número 50, tomo 290 de 14 de marzo de 1986.

La disposición impugnada prescribe:

"Art. 40. Cuando un negocio o actividad estuviere gravado en esta Tarifa sobre activo, será deducible de éste, para efectos de la determinación del impuesto correspondiente, los bienes de su propiedad que están ubicados o radicados en otra jurisdicción, inclusive el de las salas de venta, agencias, subagencias, sucursales o cualquier otra empresa o actividad.

Les serán deducibles, además las partidas siguientes:

a) Depreciación de activo fijo, a excepción de los inmuebles;

b) Reservas de cuentas incobrables;

c) Títulos valores garantizados por el Estado."

Al respecto, sostienen que dicho artículo vulnera el principio de capacidad económica, puesto que –en su opinión– regula que los impuestos relacionados con las actividades comerciales dentro del municipio de Jiquilisco deberán ser determinados utilizando como base el "activo circulante" de los sujetos obligados, esto sin permitir la deducción de los pasivos que se encuentren detallados en la situación contable de cada contribuyente.

II. Habiendo puntualizado los planteamientos esenciales de la parte peticionaria, es necesario formular ciertas consideraciones de índole jurisprudencial que han de servir como fundamento de la presente decisión.

Tal como se sostuvo en el sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, este proceso constitucional persigue que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

En ese sentido, para la procedencia de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros requisitos– que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio–. Dicho agravio tiene como requisitos que este se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional por la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: *(i)* cuando el acto u omisión impugnado es inexistente; *(ii)* cuando, no obstante la existencia real de una actuación u omisión, esta ha sido reali-

zada dentro del marco constitucional; o *(iii)* cuando es incapaz de producir por sí misma una afrenta a la persona que reclama.

Consecuentemente, si la pretensión de amparo no incluye los elementos antes mencionados, hay ausencia de agravio constitucional y la pretensión debe ser rechazada por existir imposibilidad de juzgar el caso desde este ámbito.

III. Expuesto lo anterior, corresponde evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas por los apoderados de la sociedad solicitante.

1. Los abogados ********** y ********** impugnan la constitucionalidad del art. 40 de la TGAMJ, alegando –en síntesis– que dicha disposición vulnera el principio de capacidad económica, ya que –al tenor literal de la misma y según sus consideraciones–, aquellos impuestos relacionados con las actividades comerciales realizadas dentro del municipio de Jiquilisco se determinan utilizando como base el "activo circulante" de los sujetos obligados, ello sin permitir la deducción de los pasivos del contribuyente.

2. A. Ahora bien, con relación al tema en cuestión –activo como base imponible–, es necesario recordar que esta Sala ha sostenido, a partir de las sentencias de 19 de abril de 2017 y de 26 de mayo de 2017, amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, respectivamente, que si bien la redacción típica de las leyes tributarias municipales permite restar a la base imponible del impuesto –activo imponible– las deducciones expresamente mencionadas en sus textos normativos, ello no debe interpretarse en el sentido que estas sean las únicas que tengan que excluirse para determinar el *quantum* del tributo. Así, las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6° de la Constitución (Cn.), están obligadas a excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con sus acreedores –pasivo–, con el objeto de gravar –únicamente– la riqueza neta de los destinatarios y así respetar el principio de capacidad económica.

Aunado a ello, en la mencionada sentencia de inconstitucionalidad 50-2015, se especificó que el art. 127 de la Ley General Tributaria Municipal (LGTM) dispone que en la determinación de la base imponible de los tributos municipales deben considerarse los pasivos del contribuyente, por lo que, siendo dicha normativa de carácter general en materia tributaria municipal, complementa las leyes especiales en esa materia. En tal sentido, si una norma tributaria especial no aclara si en la cuantificación de la base imponible puede determinarse deduciendo también el pasivo del contribuyente, no debe interpretarse como regulación opuesta o que se sustrae del art. 127 de la LGTM, más bien debe entenderse que si las deducciones del pasivo para determinar la base imponible no se encuentran previstas en las leyes tributarias especiales, es porque el legislador decidió dejarlo a la regulación de la LGTM.

B. i. En similar línea, resulta oportuno traer a consideración que esta Sala, por medio del sobreseimiento de 22 de mayo de 2023, amparo 385-2020, ha ratificado el criterio jurisprudencial sostenido a partir de las sentencias pronunciadas en los ya citados procesos de amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, el cual reconoce el principio de conservación de las leyes y aclara la aplicación constitucional entre leyes generales y especiales en el ámbito tributario municipal en relación con el principio de capacidad económica, art. 131 ord. 6° de la Cn.

ii. Al respecto, debe subrayarse –tal como se sostuvo en la sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– que la *interpretación conforme* es la máxima de hermenéutica jurídica, según la cual, de entre los varios entendimientos posibles de una disposición –objeto de la interpretación–, debe escogerse, para dar una solución jurídica al caso, la norma –resultado de la interpretación– que mejor se acomode a la Ley Suprema.

Y es que, el fundamento de este tipo de interpretación se encuentra cimentado tanto en el principio de unidad del ordenamiento jurídico, como en la supremacía constitucional que se proyecta sobre las leyes, condicionando así el sentido que cabe atribuirle a estas.

De este modo, el efecto práctico que dicha máxima tiene en el control constitucional es que el juzgador debe buscar que el entendimiento de la formulación lingüística de una determinada prescripción se acomode al sentido constitucional, manteniendo la imperatividad de la ley en aquellas posibilidades interpretativas que no contradigan a la Cn.

iii. Así, como se puntualizó en el referido sobreseimiento del amparo 385-2020, en relación con las leyes tributarias que regulan impuestos a las actividades económicas debe entenderse que, independientemente de que dichos cuerpos normativos establezcan o no deducciones específicas que los sujetos pasivos del tributo pueden realizar a su favor, la base imponible del impuesto –cualquiera que sea su denominación– excluye el pasivo de los contribuyentes reflejado en sus balances contables, conforme al principio de capacidad económica contenido en el art. 131 ord. 6° de la Cn. Esto es coherente con lo prescrito en el art. 127 de la LGTM –normativa de carácter general en materia tributaria municipal que complementa las leyes especiales–, el cual dispone que en la determinación de este tipo de impuestos municipales deben considerarse los pasivos del contribuyente.

La aludida interpretación resulta más acorde con las disposiciones que conforman el Derecho Constitucional Tributario, pues permite que las personas contribuyan al gasto público tomando en cuenta las posibilidades económicas reales que tienen para ello y, de manera integral, que los municipios –sujetos activos de estos tributos– efectúen la recaudación necesaria para la realización de los planes de desarrollo local que elaboren conforme al art. 206 de la Cn.

C. Habiendo acotado lo precedente, es menester colegir que, en el caso concreto, si bien el art. 40 de la TGAMJ permite restar a la base imponible del impuesto cuestionado –activo imponible– ciertas deducciones puntuales, ello no debe interpretarse en el sentido que estas sean las únicas que tengan que excluirse para determinar el *quantum* del tributo. Así, las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6° de la Cn., deben excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con sus acreedores –pasivo–, en virtud de que los impuestos municipales establecidos por la TGAMJ –relacionados con las actividades industriales, comerciales, financieras o de servicios, realizadas por comerciantes individuales o sociales–, únicamente gravan la riqueza neta de sus destinatarios, resultando congruentes con el principio de capacidad económica.

En consecuencia, no se observa que la disposición legal impugnada genere una posible vulneración al principio de capacidad económica derivado del art. 131 ord. 6° de la Cn., por lo que en el presente caso no se evidencia la existencia de un agravio constitucional, debiendo descartarse la pretensión a través de la declaratoria de improcedencia.

D. i. Por otra parte, es conveniente puntualizar ciertos aspectos relativos a los cobros presuntamente realizados por las autoridades municipales de Jiquilisco.

Al respecto, es necesario enfatizar que la presente resolución no debe interpretarse como un aval por parte de esta Sala para que dicha municipalidad proceda a cobrar de manera arbitraria los impuestos previstos en la TGAMJ.

Así, si bien se ha reconocido que de la mera vigencia del artículo impugnado no se deduce un posible agravio constitucional, ello no exime a la municipalidad de Jiquilisco de cumplir con los criterios jurisprudenciales de esta Sala al momento de cuantificar los tributos.

De este modo, al aplicar la citada disposición a sus contribuyentes, las autoridades municipales deben tener en cuenta la obligación de restar la totalidad de los pasivos de estos, para así obtener una base imponible que verdaderamente refleje la capacidad económica de los sujetos obligados.

Este mecanismo de implementación de la norma tributaria municipal debe aplicarse de manera automática y general por parte de la municipalidad a todos sus contribuyentes, por lo que no debe interpretarse que requiere de un pronunciamiento directo por parte de esta Sala que le ordene realizarlo con un sujeto determinado. Esto implica que la correcta aplicación del tributo –con base al principio de capacidad económica y por tanto en respeto a la Cn.– conmina a la municipalidad a verificar el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales de esta Sala, esto es a deducir el total de los pasivos a los activos de los contribuyentes.

ii. Aclarado lo precedente, resulta igualmente oportuno recordar que los procedimientos para determinación de las obligaciones tributarias municipales se encuentran regulados en la LGTM –arts. 100 y siguientes–.

En tal orden, en caso de considerarse que ha existido un error técnico, una infracción de índole legal o el posible apartamiento de los criterios jurisprudenciales de esta Sala, la parte interesada tiene a su disposición, para efectos de impugnación en sede ordinaria, tanto los mecanismos administrativos –determinados en la LGTM y en la Ley de Procedimientos Administrativos–, como los procesos judiciales aplicables a la jurisdicción contencioso administrativa –definidos en la Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a los abogados JARF y DIGA, en calidad de apoderados judiciales de la sociedad Bósforo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en virtud de haber acreditado en forma debida la personería con la que intervienen en el presente proceso.

2. *Declárase improcedente* la demanda suscrita los licenciados ********** y ********** contra la Asamblea Legislativa por la emisión del artículo 40 de la Tarifa General de Arbitrios Municipales de Jiquilisco, creada mediante Decreto Legislativo número 301 de 25 de febrero de 1986, publicado en el Diario Oficial número 50, tomo 290 de 14 de marzo de 1986, por la supuesta inobservancia del principio de capacidad económica, en virtud de que no se evidencia la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la sociedad actora.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar indicado por los citados profesionales para recibir los actos de comunicación, así como de las personas comisionadas para tal efecto.

4. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. .—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

118-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por el señor ESPB, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, el actor manifiesta que es dueño de dos inmuebles ubicados en el municipio de Quelepa, departamento de San Miguel; sin embargo, el señor WNMM, en calidad de notario, elaboró ciertas compraventas en las que hizo constar que vendió los citados bienes a la señora MMMG.

Sostiene que en las fechas en las que supuestamente se otorgaron los mencionados instrumentos se encontraba fuera del país, razón por la cual inició un proceso penal en contra del señor MM por el delito de falsedad documental agravada.

En ese sentido, aduce que el aludido señor se sometió a un procedimiento abreviado en el que admitió su responsabilidad en el ilícito que le fue imputado, por lo que el Juez de Sentencia de San Miguel lo condenó al pago de determinada cantidad de dinero a través de la resolución de 28 de enero de 2022.

Afirma que, a pesar de confesar su culpabilidad, los defensores del señor MM plantearon recurso de apelación ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, quien declaró sin lugar el mismo, por lo que interpusieron recurso de casación ante la Sala de lo Penal, tribunal que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no había resuelto tal medio impugnativo.

En razón de lo señalado, reclama contra la Sala de lo Penal por la lesión a sus derechos de propiedad y a la seguridad jurídica.

II. Delimitados los argumentos expresados por la parte pretensora, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El señor PB coloca en el extremo pasivo de su pretensión a la Sala de lo Penal por supuestamente incurrir en dilaciones indebidas pues, a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, no había emitido pronunciamiento alguno respecto del recurso de casación que la defensa del señor MM planteó en el proceso penal instruido en contra de aquel. Lo anterior, por considerar que se lesionaron sus derechos de propiedad y a la seguridad jurídica.

Para justificar la inconstitucionalidad de la circunstancia apuntada y, específicamente, para fundamentar la presumible transgresión de sus derechos constitucionales, el actor aduce que: "... los defensores del imputado interpusieron [...] recurso de casación únicamente para dilatar las resultas del proceso [...] h[a] presentado escritos ante la [...] Sala de lo Penal [...] solicitando [...] que resuelva lo procedente [...] pero [sus] escritos no han tenido en dicha Sala [...] en donde por razones para [él] inexcusables se niegan a resolver el [...] recurso de casación...".

También, afirma que "... esa situación de interponer dichos recursos no [le] ha permitido que [sus] bienes [...] vuelvan legítimamente a [su] patrimonio, ya que el Tribunal Primero de Sentencia [le] ha expresado que mientras el expediente penal se encuentre en la sede de la [...] Sala de lo Penal, es imposible librar oficio al [...] Registro de la Propiedad Raíz de Hipotecas [...] para la [...] cancelación de las matrículas [de los inmuebles]...", razón por la cual solicita "... librar oficio al señor Registrador [...] para las respectivas cancelaciones de las matrículas [...] que siguen en favor de la señora [...] M G y regresen [...] [a su] persona...".

2. Acotado lo precedente, se observa a partir del análisis de lo reseñado en la demanda que, aun cuando el interesado afirma que existe transgresión a sus derechos fundamentales, los alegatos empleados únicamente evidencian su inconformidad con el aspecto señalado, es decir, con la supuesta dilación de la autoridad judicial demandada de resolver el recurso de casación que fue planteado por la defensa del señor MM.

Y es que, los argumentos están dirigidos, básicamente, a que esta Sala establezca si, conforme a la normativa secundaria concerniente y de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, la Sala de lo Penal ha incurrido en algún tipo de demora indebida por no conocer del fondo del referido medio impugnativo.

En otras palabras, el demandante busca que sea el ámbito constitucional quien examine el trámite dado por la referida autoridad judicial al aludido recurso. Aunado a ello, procura que sea esta sede quien le ordene al registrador competente la cancelación de las matrículas correspondientes a los bienes inmuebles de su propiedad y que se encuentran inscritos a favor de la señora M G, todo lo cual no es parte de su competencia.

Así, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido –por ejemplo, en la sentencia de 4 de octubre de 2013, hábeas corpus 228-2013– que este Tribunal no es un contralor del cumplimiento de los plazos del proceso penal dispuestos por el legislador; sin embargo está habilitado para conocer de vulneraciones a derechos fundamentales que pueden producirse justamente en razón de la dilación que acontezca en el mencionado proceso, *siempre que puedan tener incidencia en el derecho de libertad física objeto de tutela del hábeas corpus.*

Asimismo, para determinar si la tardanza en la contestación de una petición dentro de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional se deben de tener en consideración los siguientes elementos: *i)* la complejidad del asunto: ya sea la complejidad fáctica del litigio, la jurídica o las propias deficiencias técnicas del ordenamiento; *ii)* el comportamiento del recurrente: puesto que no merece el carácter de indebida una dilación que haya sido provocada por el propio litigante y; *iii)* la actitud del juez o tribunal, referida a si las dilaciones en el proceso obedecen a la inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación, dejó transcurrir el tiempo sin emitirla decisión correspondiente para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las partes.

No obstante, es menester señalar que –en principio– los anteriores supuestos no se configuran en el caso en estudio.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que, según se expuso en el mencionado amparo 408-2010, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales desarrollen con relación a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde. En consecuencia, definir si corresponde o no ordenar la cancelación de las matriculas concernientes a los inmuebles propiedad del actor, implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

En ese orden de ideas, no le corresponde a esta sede establecer esos aspectos, pues tal actividad implicaría realizar una labor de verificación de la normativa infraconstitucional aplicable al caso concreto, así como una valoración sobre las situaciones fácticas tomadas en cuenta por la autoridad respectiva para actuar de la manera que lo hace, lo que, a su vez, conllevaría a la arrogación de funciones y atribuciones legalmente establecidas para esta.

3. Se concluye entonces que el asunto formulado no concierne al conocimiento del ámbito constitucional por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro

de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, ya que la pretensión radica en un aspecto de estricta legalidad ordinaria, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. En otro orden, el señor PB ha señalado un correo electrónico para recibir actos de comunicación. Así, pese a que no existe constancia de que dicha dirección se encuentre registrada en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota de tal medio técnico a fin de potenciar el derecho de audiencia de la parte actora.

V. Finalmente, el peticionario solicita que se requiera a la autoridad judicial demandada que remita los expedientes con números de referencia 266-UDADADJ-7-2015-SM y 54/2020. Sin embargo, debe recordarse lo señalado en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), el cual dispone: "Todo funcionario o autoridad está en la obligación de ordenar dentro de tercero día que se extiendan las certificaciones que se les pidiere, siempre que en la solicitud se exprese que el objeto de la certificación es para que pueda surtir efecto en un proceso constitucional; y aun cuando la persona solicitare certificación de expedientes, procesos o archivos relativos a ella misma, o a sus bienes, que por leyes especiales tengan carácter de secreto o reservado. El funcionario o autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá directamente y sin dilación al tribunal que esté conociendo en el proceso constitucional".

Por tanto, para que esta Sala requiera a la autoridad respectiva que extienda certificaciones de los documentos que custodia, es necesario que el interesado las haya solicitado previamente.

En el presente caso, se observa que el interesado no ha cumplido con los requisitos que establece el artículo 82 LPC para estos casos, ya que no comprueba que previamente haya dirigido la referida solicitud a la autoridad competente en los términos indicados en dicho artículo y, además, dado que con esta resolución finaliza anormalmente este proceso, deberá declararse sin lugar dicha petición.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente la demanda* de amparo presentada por el señor ESPB contra la Sala de lo Penal en virtud de que la pretensión planteada se sustenta en un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el acto impugnado, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Declárase* sin lugar la petición formulada por el actor referida a que se requiera a la autoridad judicial demandada que remita los expedientes con números de referencia 266-UDADADJ-7-2015-SM y 54/2020, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y en virtud de la decisión de finalización anormal del proceso adoptada en la presente resolución.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (correo electrónico) señalado por el interesado para recibir notificaciones.

4. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

239-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibido el escrito suscrito por el abogado Héctor Ramón César Abel Chavarría Flores en calidad de apoderado del señor EAMR, por medio del cual evacúa las prevenciones que fueron efectuadas.

Analizados la demanda y el mencionado escrito, junto con sus respectivos anexos, se realizan las siguientes consideraciones:

I. De manera inicial, es preciso señalar que el escrito antes referido fue remitido por el aludido profesional por medio de correo electrónico.

Esta Sala ya ha sostenido, por ejemplo, en las resoluciones de 26 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2020, pronunciadas en el hábeas corpus 148-2020 y el amparo 167-2020, respectivamente, la posibilidad de que se remitan escritos al correo electrónico institucional de esta Sala, para lo cual los remitentes se deben asegurar del correcto envío de aquellos, conforme a las exigencias formales que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) y en observancia de los plazos previstos en esta. La Secretaría de esta Sala confirmaría la recepción de las peticiones y se encargaría de su trámite posterior.

II. El apoderado del actor manifiesta que promueve el presente proceso de amparo contra el subdirector general de impuestos internos, el jefe de la División Jurídica, la jefa de la Oficina Regional de Occidente –estos tres de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)– y la directora de recursos humanos del Ministerio de Hacienda por atribuirles: *i)* a los dos primeros el acta de 4 de septiembre de 2020 en la cual se ordenó la suspensión del cargo del señor MR, por habérsele imputado la comisión de

una falta grave; y *ii)* a las dos últimas el acuerdo No. 739 de 4 de septiembre de 2020 a través del que se aceptó la renuncia voluntaria del referido trabajador, así como la supuesta omisión de resolver el escrito presentado el 8 de septiembre de 2020 en el que dicho interesado solicitó que se dejara sin efecto su renuncia.

Al respecto, indica que su representado laboró para el Ministerio de Hacienda desde el 1 de octubre de 1996, desempeñando diversos cargos en la institución, siendo su último puesto de trabajo el de jefe de la Sección Jurídica de la Oficina Regional de Occidente de Santa Ana de la DGII, en virtud de que el 4 de septiembre de 2020 fue convocado a una audiencia realizada en la Subdirección General de Impuestos Internos, en la cual se le atribuyó el cometimiento de una falta grave y, consecuentemente, fue suspendido de su cargo.

Asevera que debido a los supuestos hechos que configuraban la infracción, las autoridades respectivas intimidaron, amenazaron y coaccionaron a su representado para que presentara su renuncia, ya que le indicaron que de lo contrario sería expuesto en medios digitales, redes sociales y otros, lo que le causaría un "desprestigio profesional irreparable". Por ello, el 4 de septiembre de 2020 renunció de forma voluntaria al empleo. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2020 presentó un escrito en el que solicitó que se dejara sin efecto la renuncia que interpuso; no obstante, a la fecha, se ha omitido resolver su petición.

En ese orden, el aludido profesional alega que su mandante fue sancionado con suspensión del cargo sin que se tramitara un procedimiento en el que pudiera ejercer su defensa y controvertir los hechos constitutivos de la supuesta infracción. Asimismo, argumenta que su renuncia se debió a las amenazas y coacciones que ejercieron las autoridades administrativas, lo que –a su juicio– provocó un vicio en el consentimiento del demandante, por lo que este requirió que su renuncia se dejara sin efecto; sin embargo, no existe un pronunciamiento sobre esa solicitud.

Como consecuencia de lo anterior, considera que a su patrocinado le fueron transgredidos los derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso–, a la estabilidad laboral y a recurrir.

III. Acotado lo precedente, conviene exteriorizar los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia –v.gr. resoluciones de 7 de septiembre de 2006, 8 de marzo de 2007 y 12 de enero de 2009, amparos 508-2006, 157-2006 y 1109-2008, respectivamente– que una causal de improcedencia en el proceso de amparo concurre cuando existen actos que de alguna manera expresan o manifiestan la conformidad del agraviado con la situación debatida.

En cuanto a esta causal, conviene acotar que un acto de autoridad se entiende explícitamente consentido o aceptado cuando se ha hecho por parte del supuesto agraviado una adhesión a este, ya sea de forma verbal, escrita o plasmada en signos inequívocos e indubitables de aceptación.

En ese contexto, la conformidad con el acto cuestionado se traduce en la realización de acciones por parte del agraviado que indiquen claramente su disposición de cumplirlo o admitir sus efectos, como puede ser, por ejemplo, el emitir una declaración de voluntad en la cual expresamente libere, exonere o exima a determinada autoridad de la responsabilidad de una actuación específica, ya que si bien el amparo pretende defender los derechos constitucionales del demandante, debe constar que el agravio subsiste, a efectos que sea procedente la pretensión formulada. De allí que, ante la manifiesta conformidad o convalidación del pretensor con el acto impugnado, el proceso carece de objeto para juzgar el caso desde la perspectiva constitucional.

2. Asimismo, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte interesada deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

IV. Expuesto lo anterior, es menester evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas en el presente proceso.

1. El abogado de la parte demandante ha responsabilizado al subdirector general de impuestos internos y al jefe de la División Jurídica, ambos de la DGII, por la suspensión del cargo de su representado, la cual –aparentemente– "se convirtió en definitiva" sin haber tramitado un procedimiento legal respectivo, lo que a su consideración constituyó un despido de hecho.

En ese sentido, aduce que, de forma posterior a esa suspensión, su mandante habría sido coaccionado a presentar su renuncia laboral bajo amenazas e intimidación, la cual fue aceptada por la jefa de la Oficina Regional de Occidente de la DGII y la directora de recursos humanos del Ministerio de Hacienda a través del acuerdo No. 739 de 4 de septiembre de 2020. Por lo que aquel presentó un escrito el 8 de septiembre de 2020 en el que requirió que el documento respectivo se dejara sin efecto; sin embargo, tal petición no ha sido resuelta por las mencionadas autoridades.

Por ello, alega que se han vulnerado los derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones del debido proceso–, a la estabilidad laboral y a recurrir del pretensor.

2. Con relación a los argumentos planteados por el apoderado del actor y específicamente lo afirmado en cuanto a que la suspensión "definitiva" del cargo fue efectuada sin procedimiento previo y que la renuncia fue llevada a cabo mediante coacción, se advierte, de lo expuesto en la demanda y en el escrito de evacuación de prevenciones, que dicho profesional se limita a indicar que las autoridades administrativas "levantaron el acta de suspensión y [lo] obligaron a renunciar de forma coaccionada, amenazante e intimidatoria".

No obstante, esta Sala no es materialmente competente para conocer y dilucidar este tipo de circunstancias, máxime cuando el citado profesional no ha identificado de manera precisa los hechos concretos en los que pretende sustentar la supuesta coacción de la que el señor MR habría sido objeto. Por el contrario, los alegatos utilizados son vagos e imprecisos, no siendo consistentes para fundamentar, en el presente caso, la trascendencia constitucional de la referida situación.

Así, se observa que, pese a manifestar encontrarse en desacuerdo con la suspensión del cargo y la renuncia, el procurador del peticionario no expone circunstancias concretas que desvirtúen de alguna manera que este habría consentido la finalización del vínculo laboral que ahora se busca controvertir, al haber decidido firmar el documento que –según consta en la documentación incorporada al expediente– era una "renuncia voluntaria y de carácter irrevocable" (mayúsculas suprimidas). En virtud de lo expuesto, es posible colegir que el demandante ha consentido los efectos de las actuaciones contra las que se reclama.

En ese sentido, se estima que se ha pretendido que en sede constitucional se revise una supuesta sanción de suspensión del cargo sin procedimiento previo, que a criterio del mencionado profesional constituyó un despido, pese a que posteriormente el señor MR realizó un acto mediante el cual habría expresado su anuencia con la finalización de su relación laboral con la institución.

3. Aunado a lo anterior, en cuanto a la forma en que presuntamente el interesado habría renunciado a su trabajo, se advierte que –en esencia– se procura que esta Sala determine la existencia de algún vicio en su consentimiento, en virtud de una supuesta coacción que se realizó para condicionar la voluntad del señor MR y conminarlo a presentar el aludido documento. De igual manera, se pretende que se verifique si con esa aparente intimidación se habrían vulnerado los derechos fundamentales del actor.

Al respecto, es menester retomar que esta Sala no es competente para analizar y decidir si –de conformidad con lo previsto en la legislación secundaria– efectivamente existió un ilícito o un vicio del consentimiento motivado por la autoridad demandada con el fin de doblegar la voluntad del pretensor y lograr así que este último presentara la citada renuncia. Tampoco corresponde al ámbito constitucional determinar si la presunta amenaza efectuada al peticionario –que de no renunciar "[se] expondr[ía] en medios digitales, escritos, redes sociales y televisión" la infracción que supuestamente cometió– era suficiente para que este se sintiera obligado a suscribir dicho documento.

En ese orden de ideas, se colige que lo expuesto por el abogado del demandante, más que evidenciar una posible transgresión a los derechos fundamentales de su representado, se reduce a plantear un asunto que carece de trascendencia constitucional, ya que no le compete a esta Sala determinar la concurrencia de un vicio del consentimiento en un documento o si las autoridades demandadas han presuntamente incurrido en un hecho constitutivo de delito, pues esas son situaciones de estricta legalidad que corresponde establecer a la jurisdicción ordinaria en los procesos correspondientes.

4. En otro orden, en cuanto a la aparente omisión de resolver la petición de 8 de septiembre de 2020 en la que el señor MR requirió que se dejara sin efecto su renuncia, se colige que con dicho reclamo su procurador pretende controvertir una presunta falta de respuesta a situaciones relativas a un vínculo jurídico laboral cuya finalización fue consentida por el demandante y, por consiguiente, debe entenderse que convalidó de manera expresa la terminación de la relación de trabajo y sus efectos en su esfera jurídica.

Además, a pesar de que en su demanda asevera que el actor fue engañado y coaccionado para que firmara su renuncia del cargo, no logra advertirse la trascendencia constitucional de los hechos expuestos, debido a que sus planteamientos se sustentan en situaciones que no corresponde conocer a esta Sala. De este modo, si bien aduce la omisión de respuesta a una petición, no se evidencia un agravio de naturaleza constitucional, ya que, como se mencionó, su relación laboral habría finalizado debido a un acto unilateral y en principio voluntario –su renuncia–.

5. Por los motivos expuestos, no tendría eficacia admitir e iniciar el trámite de este proceso y pronunciar un fallo sobre las supuestas vulneraciones constitucionales indicadas, toda vez que del estudio de las circunstancias fácticas y jurídicas narradas en la demanda y en el escrito planteado se deriva la imposibilidad de juzgar el fondo de lo procurado por el abogado del interesado.

Lo anterior, puesto que, por un lado, se reclama contra una situación que en su momento el demandante asintió, manifestando expresamente su decisión de dar por terminado su vínculo laboral con la institución al haber presentado su renuncia y sin haber sustentado su abogado la trascendencia constitucional de los hechos concretos que evidenciarían una supuesta coacción. Por otro, debido a que la pretensión se fundamenta en un asunto de estricta legalidad, siendo incompetente el ámbito constitucional para dilucidar si existió algún vicio en la voluntad del demandante al momento de suscribir el documento de renuncia correspondiente. Finalmente, no se deduce un agravio de naturaleza constitucional con la omisión de respuesta a su petición, pues con ella pretendía revertir una situación que eventualmente fue asentida por el pretensor.

De esta forma, es pertinente declarar la improcedencia de la presente demanda de amparo, por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda formulada por el abogado Héctor Ramón César Abel Chavarría Flores en calidad de apoderado del señor EAMR contra la directora de recursos humanos del Ministerio de Hacienda, la jefa de la Oficina Regional de Occidente, el subdirector general de impuestos internos y el jefe de la División Jurídica, estos últimos de la Dirección General de Impuestos Internos, debido a que se deduce la existencia de una manifiesta conformidad con la situación que se busca controvertir y por estar fundamentado el reclamo en aspectos de mera legalidad cuyo conocimiento no corresponde al ámbito constitucional.

2. Notifíquese.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

248-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito presentado por la licenciada ********** como defensora pública y en representación del señor JLL, por medio del cual evacua la prevención que le fue formulada.

Analizados la demanda de amparo y el relacionado escrito, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La aludida profesional manifiesta que reclama contra: *i)* el Concejo Municipal de El Congo, departamento de Santa Ana, por el acuerdo número 15 contenido en el acta número 1 de 1 de mayo de 2021, a través del cual se decidió no renovar el nombramiento del señor L como auditor interno; *ii)* el Juez de lo Laboral de Santa Ana por la resolución de 10 de agosto de 2021 en la que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido; y *iii)* la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por el auto de 2 de septiembre de 2021 con referencia Inc. 352-2021 en el cual declaró improcedente el recurso de apelación intentado contra la decisión del referido juez.

Al respecto, manifiesta que su representado laboró en la Alcaldía Municipal de El Congo como auditor interno desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 3 de mayo de 2021, en virtud de que en esa fecha el concejo municipal lo destituyó de su cargo de auditor sin que se tramitara un procedimiento previo a la terminación de la relación de trabajo.

Inconforme con la decisión, el interesado promovió una demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana, quien le realizó una serie de prevenciones y por medio de la resolución de 10 de agosto de 2021 declaró la inadmisibilidad de aquella en virtud de la aparente evacuación deficiente de las mismas y dejó a salvo el derecho de interponer nuevamente la solicitud. Respecto a dicha actuación presentó recurso de revocatoria, pero la citada autoridad rechazó tal medio impugnativo.

Posteriormente, planteó recurso de apelación ante la Cámara Primera de lo Laboral, la que por auto de 2 de septiembre de 2021 declaró su improcedencia por considerar que –conforme a la ley aplicable al caso– únicamente las sentencias definitivas son susceptibles de impugnación a través de ese mecanismo. Asimismo, la referida abogada sostiene que las funciones de su poderdante dentro de la referida municipalidad consistían en realizar informes finales de auditoría y que no era un cargo de confianza por lo que el despido habría sido arbitrario.

A partir de lo anterior, la defensora del actor considera que las autoridades demandadas habrían vulnerado el derecho a recurrir de su mandante, puesto que debido a los cortos plazos que existen para volver a presentar la demanda de nulidad no tuvo posibilidad de hacerlo, por lo que planteó recurso de apelación el que fue rechazado por la cámara demandada por haber hecho interpretaciones "restrictivas y ritualistas" carentes de argumentos jurídicos. Como consecuencia, considera que se le han vulnerado a su patrocinado los derechos a la estabilidad laboral –como concreción del derecho al trabajo– audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la protección jurisdiccional.

II. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. A. La jurisprudencia constitucional –verbigracia, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme con la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

B. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

2. De igual forma, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La procuradora de la parte actora demanda al Concejo Municipal de El Congo por supuestamente ordenar el despido de hecho del interesado sin un procedimiento previo a su despido. Asimismo, coloca en el extremo pasivo de su pretensión al Juez de lo Laboral de Santa Ana por declarar inadmisible la demanda de nulidad de despido que interpuso para controvertir tal destitución. De igual forma, reclama contra la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por declarar improcedente el recurso de apelación que se planteó para impugnar la citada decisión de primera instancia.

Lo anterior, por considerar que se lesionaron los derechos a la estabilidad laboral –como concreción del derecho al trabajo– audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la protección jurisdiccional.

Asimismo, expone que se declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido por no haberse evacuado debidamente ciertas prevenciones que fueron efectuadas. Aunado a ello, aduce que se intentó que se revocara tal decisión, pese a ello, el aludido juez rechazó ese medio impugnativo "... por considerar que no se cumplía con el requisito de hacer constar la infracción legal que se estima[ba] cometida". Por otro lado, sostiene que mediante el auto de 2 de septiembre de 2021 la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador determinó que "... la resolución que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido solo admite recurso de revocatoria...", motivo por el cual declaró improcedente el recurso de apelación que se planteó.

2. A. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCAM, en contra de la destitución aparentemente injusta de la parte peticionaria procede la nulidad de despido, es decir, en la normativa secundaria aplicable existe una vía adecuada para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se afirma fueron conculcados.

Con relación a ello, la jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las sentencias de 13 de marzo de 2015, amparos 82-2012 y 84-2012– ha sostenido que la mencionada nulidad se erige como una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional que se alega en este proceso, puesto que posibilita un mecanismo por medio del cual aquel servidor público municipal que sea despedido sin causa justificada o sin que se le siga el procedimiento correspondiente, puede discutir la afectación que se produce en su esfera jurídica como consecuencia de su separación del cargo.

Por ello, se ha concluido que la nulidad del despido consagrada en el artículo 75 de la LCAM constituye un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC y, por ende, debe verificarse su agotamiento en debida forma.

B. Al respecto, la procuradora de la parte demandante afirma que se presentó demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana para que la aludida autoridad revisara el caso y resolviera lo conveniente; sin embargo, la mencionada profesional asevera que el juzgador efectuó en dos ocasiones ciertas prevenciones en virtud de que dicha defensora pública no había acreditado su personería ante esa sede y porque la pretensión carecía de claridad en determinados aspectos, para lo cual le concedió el término legalmente establecido para tal efecto, pero –a criterio de esa autoridad– no fueron subsanadas adecuadamente, situación que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad de aquella.

En virtud de ello, se planteó recurso de revocatoria ante esa misma instancia, pero fue rechazado por el citado juez, debido a la aparente falta del requisito de hacer constar la infracción legal que presuntamente se había cometido. Posteriormente, se presentó recurso de apelación ante la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador; no obstante, la autoridad de segunda instancia declaró improcedente dicho medio impugnativo, en razón de que esa decisión no admite tal recurso conforme a lo regulado en la ley de la materia.

En ese orden de ideas, es dable colegir que no se agotó en debida forma el medio impugnativo idóneo previsto en la legislación secundaria para controvertir el despido contra el que se reclama en este amparo, debido a que el Juez de lo Laboral de Santa Ana efectuó ciertas prevenciones a la pretensión planteada en sede ordinaria, las cuales no fueron evacuadas satisfactoriamente, aspecto que irremediablemente derivó en su declaratoria de inadmisibilidad.

Y es que, tal y como se indicó en los amparos 49-2010 y 51-2010, la exigencia de agotamiento de los medios impugnativos idóneos como requisito de procedencia del amparo constituye una carga para la parte actora de emplear en tiempo y forma los mismos, lo que implica ineludiblemente *cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de aquellos*, debido a que la inobservancia de dichas circunstancias motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

Por ende, al no verificarse tal situación, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en el artículo 12 inciso 3° de la LPC.

3. Aunado a lo anterior, es importante apuntar que, de lo expuesto en la demanda, se observa que la abogada de la parte demandante únicamente estaría en desacuerdo con lo resuelto por las autoridades judiciales demandadas, pues para evidenciar la trascendencia constitucional de su reclamo sostiene que el juez estableció que no se cumplieron las prevenciones realizadas o en su caso, tal como consta en la documentación anexa –resolución de 10 de agosto de 2021– su escrito resultó "contradictorio y confuso" y que no logró aclarar aspectos fácticos que no podían ser suplidos por la autoridad judicial. Sin embargo –a juicio de la mencionada profesional– las prevenciones sí fueron subsanadas en los términos requeridos pese a que eran "ritualistas".

De lo anterior, se infiere que lo que se busca es que esta Sala actúe como una nueva instancia de legalidad para revisar dicha situación, es decir, que verifique si la solicitud de nulidad de despido que se interpuso en sede ordinaria cumplía o no con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos por el legislador –específicamente si las prevenciones efectuadas fueron debidamente subsanadas–, así como, si a partir de los argumentos contenidos en el recurso de revocatoria, podía colegirse la infracción legal que se estimaba cometida con la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda.

De igual manera, pretende que se determine si la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador debía conocer de la apelación interpuesta, pese a que la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM) no regula tal medio impugnativo para controvertir la inadmisibilidad de la petición y que para ello se tendría que tomar como parámetro las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, lo cual escapa del catálogo de competencias que le ha sido conferido por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos fundamentales.

Así, la jurisprudencia constitucional ha establecido –por ejemplo, el auto pronunciado en el citado amparo 408-2010– que, en principio, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponden, pues ello implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De tal forma, la procuradora de la parte actora pretende que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades judiciales demandadas, respecto a: *i)* si procedía o no tener por subsanadas las prevenciones que fueron efectuadas y, a partir de ello, darle trámite a la demanda de nulidad de despido que se planteó; y *ii)* si correspondía o no admitir el medio impugnativo que se presentó ante la autoridad de segunda instancia para controvertir el rechazo de aquella. Sin embargo, para dilucidar tales alegatos esta Sala tendría que actuar como un tribunal ordinario y verificar, con base en la ley secundaria correspondiente, las circunstancias particulares del caso, lo cual supondría abordar aspectos de mera legalidad que no corresponden a la competencia de este tribunal por no tener transcendencia constitucional.

4. De esta manera, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar los actos cuestionados –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del mecanismo específico franqueado en la legislación secundaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la vulneración constitucional generada por la actuación administrativa que se impugna, concretamente la nulidad de despido que establece el artículo 75 de la LCAM y –por otra– porque el asunto formulado por la parte pretensora respecto de las autoridades judiciales demandadas se reduce a un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con lo resuelto.

En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia del reclamo planteado por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 inciso 3° y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por la abogada ********** en calidad de defensora pública y en representación del señor JLL contra el Concejo Municipal de El Congo, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación

correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– debido a que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.——DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. .—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

102-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo suscrita por el abogado ********** en calidad de defensor público y en representación de la señora AEMM, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, el citado profesional dirige su pretensión contra: *i)* el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, por haber ordenado –aparentemente– la no renovación del contrato de trabajo de su representada a partir del 30 de junio de 2021; *ii)* el Juez de lo Laboral de Santa Ana por la resolución de 6 de septiembre de 2021 en la que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido; y *iii)* la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por el auto de 23 de diciembre de 2021 con referencia Inc. 416-R-2021 en el cual declaró improcedente el recurso de revisión intentado contra la decisión del aludido juez.

Al respecto, manifiesta que la parte demandante laboró en la Alcaldía Municipal de Santa Ana como cobradora o recolectora de impuesto diario en el Mercado Central 1, por contrato de trabajo, desde el 1 de junio de 2013 hasta el 30 de junio de 2021, en virtud de que ese mismo día se le informó de manera verbal que su contrato ya no sería renovado, lo cual –a su juicio– constituyó un despido injustificado, dado que el cargo no era de confianza y no se tramitó un procedimiento previo a la terminación de la relación laboral en el que se le permitiera ejercer su defensa.

Afirma que se promovió una demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana, conforme con lo regulado en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), quien realizó una serie de prevenciones a la petición; sin embargo, por medio de la

decisión de 6 de septiembre de 2021 declaró la inadmisibilidad de aquella en virtud de la aparente evacuación deficiente de las mismas y dejó a salvo el derecho de interponer nuevamente la solicitud. Respecto a dicha actuación se presentó recurso de revocatoria, pero la citada autoridad rechazó tal medio impugnativo a través del proveído de 21 de septiembre de 2021, debido a que –a criterio del mencionado juzgador– la parte recurrente no determinó la infracción legal cometida, pues se limitó a realizar valoraciones subjetivas sobre los argumentos de la resolución con la que se mostraba inconforme.

Por lo anterior, planteó recurso de revisión ante la Cámara Primera de lo Laboral; no obstante, esta emitió el auto de 23 de diciembre de 2021 en el que declaró su improcedencia por considerar que según el artículo 79 de la LCAM –la ley aplicable al caso– únicamente las sentencias son susceptibles de impugnación mediante ese mecanismo y no la resolución que declaró la inadmisibilidad de la solicitud de nulidad de despido, puesto que respecto de ese tipo de decisión puede intentarse la revocatoria.

Por tal motivo, considera que las autoridades demandadas inobservaron los derechos de acceso a la jurisdicción –como manifestación de la protección jurisdiccional–, seguridad jurídica, estabilidad laboral, audiencia, defensa –estos dos como concreciones del debido proceso– y a recurrir.

II. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. A. La jurisprudencia constitucional –verbigracia, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme con la normativa de la materia. De manera

que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

B. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

2. De igual forma, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El procurador de la parte actora demanda al Alcalde Municipal de Santa Ana por supuestamente ordenar el despido de hecho de la interesada sin un procedimiento previo a habérsele informado que no se renovaría su contrato de trabajo. Asimismo, coloca en el extremo pasivo de su pretensión al Juez de lo Laboral de Santa Ana por declarar inadmisible la demanda de nulidad de despido que interpuso para controvertir tal

destitución. De igual forma, reclama contra la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por declarar improcedente el recurso de revisión que planteó para impugnar la citada decisión de primera instancia.

Lo anterior, por considerar que se lesionaron los derechos de acceso a la jurisdicción –como manifestación de la protección jurisdiccional–, seguridad jurídica, estabilidad laboral, audiencia, defensa –estos dos como concreciones del debido proceso– y a recurrir, dado que no se concedió la oportunidad a la parte interesada de defenderse en un proceso previo a su despido.

Asimismo, expone que se planteó la "acción de nulidad de despido", habiendo sido declarada inadmisible, en razón de no haberse evacuado debidamente ciertas prevenciones que fueron efectuadas. Por otro lado, sostiene que mediante la decisión de 23 de diciembre de 2021 la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador determinó que "... la resolución que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido solo admite recurso de revocatoria...", motivo por el cual declaró improcedente el recurso de revisión que se planteó.

2. A. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCAM, en contra de la destitución aparentemente injusta de la parte peticionaria procede la nulidad de despido, es decir, en la normativa secundaria aplicable existe una vía adecuada para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se afirma fueron conculcados.

Con relación a ello, la jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las sentencias de 13 de marzo de 2015, amparos 82-2012 y 84-2012– ha sostenido que la mencionada nulidad se erige como una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional que se alega en este proceso, puesto que posibilita un mecanismo por medio del cual aquel servidor público municipal que sea despedido sin causa justificada o sin que se le siga el procedimiento correspondiente, puede discutir la afectación que se produce en su esfera jurídica como consecuencia de su separación del cargo.

Por ello, se ha concluido que la nulidad del despido consagrada en el artículo 75 de la LCAM constituye un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC y, por ende, debe verificarse su agotamiento en debida forma.

B. Al respecto, el procurador de la parte demandante afirma que se presentó demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana para que dicha autoridad revisara el caso y resolviera lo conveniente; sin embargo, tal y como asevera el mencionado profesional, el aludido juzgador efectuó en dos ocasiones ciertas prevenciones en virtud de que la defensora pública que participó en representación de la parte actora en dicha sede no había acreditado su personería y porque la pretensión

carecía de claridad en determinados aspectos, para lo cual concedió a la parte interesada el término legalmente establecido para dicho efecto, pero –a criterio de esa autoridad– no fueron subsanadas adecuadamente, situación que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad de aquella.

En virtud de ello, se planteó recurso de revisión ante la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador; no obstante, la autoridad de segunda instancia declaró improcedente dicho medio impugnativo, en razón de que esa decisión no admite tal recurso conforme a lo regulado en la ley de la materia.

En ese orden de ideas, es dable colegir que no se agotó en debida forma el medio impugnativo idóneo previsto en la legislación secundaria para controvertir el despido contra el que se reclama en este amparo, debido a que el Juez de lo Laboral de Santa Ana efectuó ciertas prevenciones a la pretensión planteada en sede ordinaria, las cuales no fueron evacuadas satisfactoriamente, aspecto que irremediablemente derivó en su declaratoria de inadmisibilidad.

Y es que, tal y como se indicó en los amparos 49-2010 y 51-2010, la exigencia de agotamiento de los medios impugnativos idóneos como requisito de procedencia del amparo constituye una carga para la parte actora de emplear en tiempo y forma los mismos, lo que implica ineludiblemente *cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de aquellos,* debido a que la inobservancia de dichas circunstancias motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

Por ende, al no verificarse tal situación, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en el artículo 12 inciso 3° de la LPC.

3. Aunado a lo anterior, es importante apuntar que, de lo expuesto en la demanda, se observa que el abogado de la parte demandante únicamente estaría en desacuerdo con lo resuelto por las autoridades judiciales demandadas, pues para evidenciar la trascendencia constitucional de su reclamo sostiene que las prevenciones que el juzgador determinó que no fueron evacuadas, en realidad fueron subsanadas en los términos requeridos y si tal juez consideraba que no se dio una respuesta adecuada debió realizar una nueva prevención. Así, aduce que "... en el caso de la prevención número 2, 10 y 11) relativo a acreditar circunstancias de despido; se dio respuesta a cada uno de ellas y particularmente en [el] n[ú] mero once donde se vuelve a clarificar las circunstancias que en la relación de los hechos de la demanda se habían manifestado, y el juzgado no lo estimó as[í] ya que estas se refieren a los hechos y sobre las facultades que

son objeto de materia probatoria en juicio y no liminarmente; también es innecesaria e inoportuna, ya que es situación de hechos y ciertamente clarific[ó] los hechos del despido que el juzgado debió entrar a conocer...".

De lo anterior, se infiere que lo que se busca es que esta Sala actúe como una nueva instancia de legalidad para revisar dicha situación, es decir, que verifique si la demanda de nulidad de despido que se interpuso en sede ordinaria cumplía o no con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos por el legislador –específicamente si las prevenciones efectuadas fueron debidamente subsanadas–, así como si la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador debía conocer de la revisión interpuesta, pese a que la LCAM no regula tal medio impugnativo para controvertir la inadmisibilidad de la petición y que para ello se tendría que tomar como parámetro las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, lo cual escapa del catálogo de competencias que le ha sido conferido por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos fundamentales.

Así, la jurisprudencia constitucional ha establecido –por ejemplo, el auto pronunciado en el citado amparo 408-2010– que, en principio, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde, pues ello implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y debe realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De tal forma, el procurador de la parte actora pretende que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades judiciales demandadas, respecto a si, por un lado, procedía o no tener por subsanadas las prevenciones que fueron efectuadas y, a partir de ello, darle trámite a la demanda de nulidad de despido que se planteó y, por otro, si correspondía o no admitir el medio impugnativo que se presentó para controvertir el rechazo de aquella, es decir que para dilucidar tales alegatos esta Sala tendría que actuar como un tribunal ordinario y verificar, con base en la ley secundaria correspondiente, las circunstancias particulares del caso, lo cual supondría abordar aspectos de mera legalidad que no corresponden a la competencia de este tribunal por no tener transcendencia constitucional.

4. De esta manera, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar los actos cuestionados –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del mecanismo específico franqueado en la legislación secundaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la vulneración constitucional generada por la actuación administrativa que se impugna,

concretamente la nulidad de despido que establece el artículo 75 de la LCAM y –por otra– porque el asunto formulado por la parte pretensora respecto de las autoridades judiciales demandadas se reduce a un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con lo resuelto.

En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia del reclamo planteado por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 inciso 3° y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* al abogado ********** en calidad de defensor público y en representación de la señora AEMM, por haber acreditado debidamente la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el aludido profesional contra el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– debido a que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (cuenta electrónica única registrada en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia) señalado por el procurador de la parte interesada para recibir los actos procesales de comunicación.

4. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN–-RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

274-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinticinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibido el escrito firmado por los abogados Ana Concepción Irías Lozano y Martín Salvador Morales Somoza en calidad de apoderados de la sociedad Zona Franca Miramar, Sociedad Anónima

de Capital Variable (Zona Franca Miramar, S.A. de C.V.), en virtud del cual solicitan que se tenga a su patrocinada como tercera beneficiada en el presente proceso de amparo y se declare inadmisible la pretensión planteada en el mismo por no cumplir con los parámetros de exigencia constitucional.

Analizada la demanda suscrita por la abogada Elsy Francisca Reyes Martínez en calidad de apoderada del señor JAGL, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, la abogada del peticionario manifiesta que demanda: *i)* a la Jueza de lo Civil de San Marcos, departamento de San Salvador, por la sentencia pronunciada el 25 de noviembre de 2020 en el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios marcado con la referencia 7-PC-2020, por medio de la cual –entre otros aspectos– desestimó la pretensión del actor con relación al reclamo de pago de honorarios a la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V.; *ii)* la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por la resolución emitida el 19 de octubre de 2021 en el recurso de apelación con referencia 115-CSM-20.4, la que fue desfavorable para los intereses de su patrocinado; y *iii)* la Sala de lo Civil por la providencia pronunciada el 31 de marzo de 2022 en la casación con referencia 244-CAM-2021, en virtud de la cual se declaró que no había lugar a casar la sentencia de segunda instancia que fue recurrida.

Al respecto, alega que el interesado suscribió con la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. un contrato de servicios –en el cual se otorgó un poder judicial– para la promoción de un proceso común declarativo de prescripción extintiva contra la sociedad Tecnología Innovadora de Construcción Centroamericana, Sociedad Anónima de Capital Variable (Tecnocen, S.A. de C.V.) y que en dicho convenio se pactaron las cantidades referentes a los honorarios del señor GL como procurador.

En ese orden, precisa que en el juicio común iniciado contra la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V. su mandante logró los resultados esperados, pues la sentencia pronunciada en tal proceso fue favorable para los intereses de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. y, además, explica que a pesar de que la primera sociedad presentó recurso de apelación este fue declarado inadmisible, en virtud de tales circunstancias el demandante solicitó a su poderdante –en ese entonces– el pago de sus honorarios; sin embargo su requerimiento fue denegado.

Ahora bien, sostiene que las mencionadas sociedades suscribieron el 19 de marzo de 2019 un contrato de transacción para poner fin a sus conflictos legales, sin consultar el contenido del mismo con el señor GL y que el día posterior a la firma de dicho convenio la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. le informó al peticionario vía correo electrónico que

se había decidido desistir del proceso común iniciado contra la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V. así como de la apelación que fue presentada por esta última sociedad.

En ese sentido, afirma que el desistimiento comunicado a su mandante fue de carácter procesal, que no se refería a que se estaba desistiendo del aludido contrato de prestación de servicios y, además, ante la negativa de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. de cancelar al demandante los honorarios correspondientes, este promovió un proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios ante la Jueza de lo Civil de San Marcos, quien desestimó la pretensión del señor GL, pues consideró que la mencionada sociedad estuvo en situaciones más gravosas a las existentes cuando contrató con aquel, ya que la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V. había denunciado penalmente a los representantes legales de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. y que para concluir los conflictos acontecidos entre dichas sociedades suscribieron el citado contrato de transacción. Asimismo, asegura la licenciada Reyes Martínez que en la sentencia de 25 de noviembre de 2020 la juzgadora infringió el "deber de congruencia".

Así, precisa que inconforme con la decisión de primera instancia el peticionario acudió a la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro para presentar recurso de apelación, pero tal autoridad judicial, entre otras cosas, declaró tanto la nulidad de la sentencia pronunciada en el juicio declarativo común como la terminación del contrato de prestación de servicios en cuestión, sin que dicha petición –asevera– fuera planteada por la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V. en el incidente de apelación.

Indica que el actor interpuso casación ante la Sala de lo Civil, pero que esta pese a la infracción al principio de congruencia por parte de la cámara declaró que no había lugar a casar la sentencia de segunda instancia que fue recurrida.

Por lo expuesto, aduce como vulnerados los derechos de audiencia, defensa, igualdad y a la "motivación de las resoluciones judiciales" de su poderdante, así como los principios de congruencia y seguridad jurídica.

II. Determinados los argumentos de la parte demandante, corresponde en este apartado expresar brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La abogada del interesado reclama contra las siguientes autoridades: *i)* la Jueza de lo Civil de San Marcos, por la sentencia pronunciada el 25 de noviembre de 2020 en el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios con referencia 7-PC-2020, por medio de la cual desestimó la pretensión del actor con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales a la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V.; *ii)* la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por la resolución emitida el 19 de octubre de 2021 en el recurso de apelación con referencia 115-CSM-20.4, la cual fue desfavorable para los intereses de su patrocinado; y *iii)* la Sala de lo Civil por la providencia pronunciada el 31 de marzo de 2022 en la casación con referencia 244-CAM-2021, en virtud de la cual declaró que no había lugar a casar la sentencia de segunda instancia que fue recurrida.

Al respecto, cuestiona que, a pesar de la existencia del convenio de prestación de servicios suscrito entre su patrocinado y la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. y, además, de que aquel logró los resultados esperados en el juicio común declarativo de prescripción extintiva promovido contra la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V., la jueza de primera instancia desestimó la pretensión del señor GL, pues le negó el pago de los honorarios correspondientes, ya que consideró que la sociedad que era su mandante sufrió situaciones más gravosas a las existentes cuando contrató con aquel, en razón de la denuncia penal efectuada por la sociedad Tecnocen, S.A. de C.V., situación que conllevó a la firma del contrato de transacción entre ambas sociedades.

Por lo descrito, expone que el actor presentó los recursos de apelación y de casación, pero que tales medios impugnativos fueron resueltos desfavorablemente para los intereses de su representado; asimismo, controvierte la falta de congruencia de las resoluciones que impugna en el presente amparo.

2. Así, partiendo del análisis de la demanda se observa que, si bien la licenciada Reyes Martínez ha aseverado que existe una transgresión a los derechos fundamentales del señor JAGL, sus alegatos únicamente evidencian la inconformidad que posee con el contenido de las resoluciones impugnadas.

De este modo, dilucidar los planteamientos de la apoderada del actor conllevaría a analizar –desde una perspectiva estrictamente formal– la manera en que el juez tramitó y resolvió el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios, en especial el sentido en que emitió la sentencia cuestionada y la valoración que de conformidad con la normativa secundaria realizó de las argumentaciones que fueron formuladas por las partes intervinientes en primera instancia y los elementos probatorios incorporados en esa sede, pese a que la sentencia proveída en tal juicio común fue declarada nula por la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y que dicha autoridad pronunció la decisión –sobre el caso en cuestión– que legalmente consideró pertinente.

Además, se advierte que se pretende que se verifique si la cámara debía estimar la pretensión planteada por el actor con relación al pago de honorarios que –según afirma la abogada Reyes Martínez– la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. le adeuda a aquel y si efectivamente la Sala de lo Civil tenía que casar la sentencia del incidente de apelación que fue recurrida, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, la normativa secundaria y las expectativas personales del interesado con relación al resultado de los señalados medios impugnativos.

En ese sentido, conocer de la pretensión, en los términos en que ha sido formulada, requeriría la verificación de la aplicación que las autoridades demandadas efectuaron de lo regulado para el caso en cuestión en la legislación de la materia, así como determinar si efectivamente la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. debía cancelar la totalidad de los honorarios que pactó con el señor GL en el contrato de prestación de servicios que suscribieron y determinar los efectos del desistimiento que dicha sociedad le comunicó al requirente, los cuales son aspectos cuyo conocimiento no son competencia de este Tribunal al no tener trascendencia constitucional.

Con referencia a lo anterior, debe recalcarse que no corresponde a esta Sala examinar la forma en que los jueces interpretan y aplican la normativa secundaria y tampoco la manera en que valoran la prueba y los alegatos que las partes vierten en los procesos y medios impugnativos.

Sobre ello, resulta pertinente traer a colación lo expresado por esta Sala –v. gr. la citada improcedencia del amparo 408-2010– en cuanto a que el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen respecto a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les concierne.

En consecuencia, revisar –de conformidad con la legislación de la materia y las particularidades del caso– la forma en que el juez de primera instancia tramitó el aludido proceso declarativo común de cumplimiento de

contrato de prestación de servicios y el sentido en que emitió la sentencia que le puso fin a este, con base en la actividad procesal y probatoria llevada a cabo en el mismo –en específico si se valoraron correctamente los argumentos y elementos probatorios que las partes aportaron de conformidad con la ley de la materia –, pese a que la sentencia emitida en el mencionado juicio común fue declarada nula, así como si la cámara y la Sala de lo Civil debieron establecer que existía la obligación por parte de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. de cancelar los honorarios derivados del aludido convenio al señor GL, todo lo cual implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

Y es que, enjuiciar lo anteriormente señalado conllevaría a controlar, en esencia, si –de acuerdo con la normativa secundaria– la valoración que hizo el juez de la actividad procesal y probatoria realizada en el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios fue adecuada para el caso concreto; no obstante, la sentencia pronunciada en el mismo fue declarada nula por la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro. En similares términos, implicaría examinar la legalidad del análisis de los medios impugnativos formulados por el peticionario y verificar la idoneidad de los razonamientos utilizados por las autoridades demandadas para emitir las resoluciones que son controvertidas en este amparo, todo lo cual no es competencia de esta Sala.

3. Por otro lado, la abogada Reyes Martínez argumenta que la Jueza de lo Civil de San Marcos, la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil emitieron las resoluciones que son controvertidas en el presente amparo inobservando el "deber de congruencia", así como cuestiona la motivación de las mismas.

Ahora bien, de la lectura de la documentación anexa se evidencia que la aludida cámara, al momento de pronunciar la sentencia en el recurso de apelación, advirtió la falta de congruencia en la decisión de primera instancia, debido a que la jueza había basado la mencionada sentencia de 25 de noviembre de 2020 en circunstancias que no fueron aportadas por las partes procesales en el trámite del aludido juicio declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios, ya que la juzgadora determinó que existía la extinción de la obligación de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. con relación al pago de los honorarios del señor GL por la pérdida de la cosa según lo estipulado en el artículo 1438 ordinal 6° del Código Civil, cuando tal alegación nunca fue expresada, pues la citada sociedad lo que argumentó en su defensa fue que unilateralmente había dado por terminado el contrato suscrito con el actor, en razón de que los representantes de la sociedad enfrentaron situaciones jurídicas gravosas y, posteriormente, la cámara declaró tanto la nulidad de la referida

sentencia pronunciada por la Jueza de lo Civil de San Marcos como la terminación unilateral del contrato en cuestión y desestimó las pretensiones del peticionario.

En igual sentido, también la Sala de lo Civil en la sentencia de casación, observó que la resolución emitida por la cámara en el recurso de apelación carecía de congruencia, ya que se había declarado la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios, sin que ese punto fuera propuesto en la apelación por el señor GL, ni introducido por la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. en el proceso de primera instancia, quien sostuvo en el trámite de dicho juicio declarativo común que el convenio había sido terminado unilateralmente; además, la sala detalló que la cámara carecía de facultades para añadir nuevas razones como motivos de apelación; no obstante lo descrito, la Sala de la Civil determinó que no era estimable casar la sentencia de la cámara, pese al vicio procedimental detectado, pues tal providencia "...se enc[ontraba] correcta y ajustada a derecho..." y, por ello, la mencionada sala en la resolución que le puso fin a la casación procedió a efectuar la motivación para corregir la falta procesal cometida por la cámara en los términos que establece el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil y precisó que tal autoridad judicial se enfocó de manera correcta en los tiempos en que era viable dar por terminado el contrato de prestación de servicios.

De este modo, en concordancia con las sentencias de apelación y casación que la abogada del peticionario adjuntó a la demanda, se denota que la supuesta falta de congruencia y motivación por parte de la jueza de primera instancia y la cámara que fue alegada en lo referente a desestimar la pretensión de pago de honorarios al señor GL por parte de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. y el agravio que tales decisiones aparentemente le causaron a aquel, fueron subsanadas en sede ordinaria por medio de los recursos que él mismo interpuso, al haberse advertido y reparado tales yerros.

Por otra parte, con relación a la supuesta falta de congruencia y debida motivación de la resolución emitida por la Sala de lo Civil en el recurso de casación correspondiente, se advierte de la lectura de aquella y de los argumentos planteados en la demanda, que lo que persigue la apoderada del actor es que esta Sala actúe como una nueva instancia de legalidad para revisar –conforme a la normativa secundaria y las particularidades del caso– su pretensión de pago de honorarios, lo cual no corresponde al ámbito constitucional.

Al respecto, esta Sala en la sentencia de 30 de abril de 2010, amparo 308-2008, ha sostenido que en todo tipo de resolución se exige un juicio de reflexión razonable y justificable sobre la normativa legal que deba aplicarse, por lo que no es necesario que la fundamentación sea extensa o

exhaustiva, sino que basta con que esta sea concreta y clara, pues si no se exponen de esa forma las razones en las que se apoyan los proveídos de las autoridades, no pueden las partes observar el sometimiento de los funcionarios a la ley, ni tener la oportunidad de hacer uso de los mecanismos de defensa por medio de los instrumentos procesales específicos.

De este modo, conocer de la queja formulada implicaría discernir si el contenido de las actuaciones reclamadas y en especial los razonamientos consignados en ellas con relación a los asuntos que controvierte la apoderada del actor se ajustaban a lo previsto en la legislación de la materia, y a sus apreciaciones subjetivas toda vez que no se ha sostenido aquella en aspectos de naturaleza constitucional.

En ese sentido, los argumentos expuestos por la representante del pretensor están orientados a que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades demandadas, tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuyo conocimiento escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

De tal suerte que no se logra advertir la relevancia constitucional de la afectación generada en la esfera jurídica del actor como consecuencia de las actuaciones que impugna; por el contrario, se observa que se controvierten cuestiones de estricta legalidad ordinaria relacionadas con la manera en que concluyó el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios, así como con el sentido en que se resolvieron los medios impugnativos intentados, aspectos que, en definitiva, no son atribución de esta Sala conocer.

4. Así pues, el asunto formulado en el presente caso no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, ya que el asunto en comento carece de trascendencia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. Por otro lado, se observa que la abogada Reyes Martínez, solicita que esta Sala requiera a la Jueza de lo Civil de San Marcos que remita certificación del proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios marcado con la referencia 7-PC-2020.

Sobre ello, es fundamental recalcar lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual dispone: "Todo funcionario o autoridad está en la obligación de ordenar dentro de tercero día que se extiendan las certificaciones que se les pidiere, siempre que en la solicitud se exprese que el objeto de la certificación es para que pueda surtir efecto en un proceso constitucional; y aun cuando la persona solicitare certificación de expedientes, procesos o archivos relativos a ella misma, o a sus bienes, que por leyes especiales tengan carácter de secreto o reservado. El funcionario o autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá directamente y sin dilación al tribunal que esté conociendo en el proceso constitucional".

En ese sentido, para que se pueda requerir a la autoridad citada que extienda certificación de los documentos o expedientes que custodia, es necesario que la parte interesada las haya solicitado previamente.

De este modo, se advierte que en el presente caso no se han cumplido los requisitos del citado artículo y, además, en razón de que con esta resolución finaliza anormalmente este proceso, deberá declararse sin lugar dicha petición.

V. Ahora bien, los abogados Irías Lozano y Morales Somoza han solicitado –en calidad de apoderados de la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. y mediante escrito que se encuentra agregado al presente proceso– que se autorice la intervención de su representada como tercera beneficiada, así como que se declare inadmisible la demanda presentada por la parte actora por no cumplir con los parámetros de exigencia constitucional.

Al respecto, tal como sostuvo esta Sala en la sentencia de 12 de abril de 2013, amparo 607-2012, el tercero beneficiado es un sujeto que procura intervenir en el trámite del proceso en razón de que ha obtenido una ventaja, beneficio o provecho, ya sea directo o reflejo, como consecuencia del acto que se impugna en sede constitucional.

Desde esa perspectiva, el tercero beneficiado pretende, con su actuación, *evitar el perjuicio jurídico que se le podría ocasionar como efecto reflejo de la sentencia estimatoria* que llegara a emitirse en el proceso de amparo, interviniendo consecuentemente en defensa del provecho obtenido o que pretende obtener por medio de la concreción o conservación de la situación fáctica o jurídica objeto de debate.

En ese sentido, se advierte que la sociedad Zona Franca Miramar, S.A. de C.V. tuvo la calidad de parte pasiva en el proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios con referencia 7-PC-2020, juicio en el cual se emitieron los actos reclamados a favor de aquella.

Así, nota esta Sala que la aludida sociedad –en el supuesto que la demanda presentada en este amparo hubiese sido admitida– eventualmente pudo haber intervenido en este proceso en calidad de tercera beneficiada con las actuaciones impugnadas; en ese sentido, deberá autorizarse la intervención de los referidos profesionales, por haber acreditado en debida forma su personería.

No obstante, al declararse la improcedencia de esta demanda en el presente auto con lo que este proceso finaliza en su etapa liminar, resulta innecesario emitir un pronunciamiento respecto del requerimiento de los citados abogados con relación al rechazo de la demanda de este amparo.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a la abogada Elsy Francisca Reyes Martínez en calidad de apoderada del señor JAGL, en virtud de haber acreditado en forma debida la personería con la que interviene en este proceso.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por la referida abogada contra la Jueza de lo Civil de San Marcos, departamento de San Salvador, la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil, en virtud de que el reclamo se reduce a una cuestión de estricta legalidad y de simple inconformidad con las actuaciones que busca controvertir, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Declárase sin lugar* la petición formulada por la licenciada Reyes Martínez concerniente a que se requiera a la Jueza de lo Civil de San Marcos remita la certificación del proceso declarativo común de cumplimiento de contrato de prestación de servicios marcado con la referencia 7-PC-2020, por no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y en virtud de la decisión de finalización anormal del proceso adoptada en la presente resolución.

4. *Tiénese* a los abogados Ana Concepción Irías Lozano y Martín Salvador Morales Somoza en calidad de apoderados de la sociedad Zona Franca Miramar, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien –en el supuesto que la demanda presentada en este amparo hubiese sido admitida– eventualmente pudo haber intervenido en el presente proceso en calidad de tercera beneficiada.

5. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar y medios técnicos –telefax y correo electrónico inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia– señalados tanto por la apoderada de la parte actora como por los representantes de la sociedad Zona Franca

Miramar, Sociedad Anónima de Capital Variable, para recibir los actos procesales de comunicación, así como de las personas comisionadas para tales efectos.

6. *Notifíquese*.

""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

13-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con treinta y cinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo firmada por el abogado Juan José Alvarenga Navas, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado judicial de la sociedad Corporación CME, Sociedad Anónima de Capital Variable (Corporación CME, S.A. de C.V.), junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El referido profesional dirige su reclamo contra la Asamblea Legislativa (AL) por haber emitido el art. 3 n° 47, de la Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel (TGAMSM), creado por Decreto Legislativo (DL) n° 965 de 10 de febrero de 1953, publicado en el Diario Oficial (DO) n° 58, tomo 158 de 18 de marzo de 1953, reformado por DL n° 279 de 14 de diciembre de 1984, publicado en el DO n° 15, tomo 286, de 22 de enero de 1985.

La disposición impugnada prescribe:

"Art. 3.- Impuestos

n° 47. Comerciantes sociales o individuales, cada uno, al mes, con activo circulante:

a) Hasta de ¢2,000.00.....¢3.00

b) De más de ¢5,000.00.....¢5.00

c) De más de ¢5,000.00 hasta ¢10,000.00.....¢10.00

ch)De más de ¢10,000.00.....¢10.00

Más ¢1.00 por cada millar o fracción; sobre el excedente de ¢10,000.00

Este número será aplicable a los negocios, empresas o actividades comerciales como almacenes, ferreterías, abarroterías, supermercados, compañías o empresas eléctricas y otras similares, así corno a todos aquellos negocios o actividades en general que no aparecen gravados expresamente en esta misma tarifa".

Al respecto, sostiene que la disposición cuestionada vulnera el derecho de propiedad de la sociedad actora, como consecuencia de la inobservancia del principio de capacidad económica en materia tributaria.

Así, argumenta —en síntesis— que la AL no tomó en consideración la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, puesto que determinó que los activos serían la base imponible del tributo en cuestión, esto sin permitir la deducción de los pasivos de cada contribuyente.

II. Habiendo puntualizado los planteamientos esenciales de la queja, es necesario formular ciertas consideraciones de índole jurisprudencial que han de servir como fundamento de la presente decisión.

Tal como se sostuvo en el sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, este proceso constitucional persigue que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

En ese sentido, para la procedencia de la pretensión de amparo. es necesario -entre otros requisitos- que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión -lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio-. Dicho *agravio* tiene como requisitos que este se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional -elemento jurídico- y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable -elemento material-.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional por la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: *(i)* cuando el acto u omisión impugnado es inexistente: *(ii)* cuando. no obstante la existencia real de una actuación u omisión, esta ha sido realizada dentro del marco constitucional: o *(iii)* cuando es incapaz de producir por sí misma una afrenta a la persona que reclama.

Consecuentemente, si la pretensión de amparo no incluye los elementos antes mencionados, hay ausencia de agravio constitucional y la pretensión debe ser rechazada por existir imposibilidad de juzgar el caso desde este ámbito.

III. Expuesto lo anterior corresponde evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas por el licenciado Alvarenga Navas.

1. El citado profesional impugna la constitucionalidad del art. 3 n° 47 de la TGAMSM, puesto que -según sus consideraciones- el tributo cuestionado utiliza como base imponible el activo del administrado, situación que no revelaría la verdadera capacidad contributiva del sujeto obligado.

2. Ahora bien, resulta imprescindible señalar que mediante sentencia de 10 de octubre de 2012, pronunciada en la inconstitucionalidad 15-2012, la mencionada disposición fue declarada inconstitucional, siendo así expulsada del ordenamiento jurídico.

En dicha sentencia, se estableció, por una parte, que el impuesto previsto en el art. 3 n° 47 de la TGAMSM debía tomar en consideración el principio de capacidad económica. de conformidad con el art. 131 ord. 6° de la Constitución (Cn.) y, por otra, que ese precepto legal establecía un tributo que gravaba el "activo circulante- de los sujetos obligados.

De esta manera, se concluyó que al activo circulante no es un elemento revelador de verdadera capacidad económica y contributiva, dado que este se calcula sin haber realizado la deducción del pasivo correspondiente, incluyendo componentes que exceden del capital contable concernido, el cual es la categoría que efectivamente refleja la riqueza o capacidad económica de un comerciante y que, desde la perspectiva constitucional, es apta para ser tomada como la base imponible de un impuesto a la actividad económica.

Apuntado lo precedente, se debe hacer énfasis en que la disposición señalada como causante de agravio en la esfera jurídica de la sociedad actora ha sido declarada inconstitucional de forma general y obligatoria, por lo que esta no se encuentra vigente y no es susceptible de generar efectos en la situación jurídica de la parte demandante.

En este orden, dado que el acto reclamado ha dejado de existir, no se evidencia la concurrencia de un agravio constitucional dentro del presente caso, debiendo descartarse la pretensión a través de la declaratoria de improcedencia.

3. Por otra parte, es conveniente puntualizar ciertos aspectos relativos a los cobros realizados por las autoridades municipales de San Miguel.

Al respecto, es necesario dejar constancia que la presente decisión no debe interpretarse corno un aval por parte de esta Sala para que dicha municipalidad proceda a cobrar de manera arbitraria los tributos regulados por una disposición que ha sido declarada inconstitucional y que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico.

Aclarado lo precedente. resulta igualmente oportuno recordar que los procedimientos para determinación de las obligaciones tributarias municipales se encuentran regulados en la Ley General Tributaria Municipal (LGTM) —arts. 100 y siguientes—.

En tal orden, en caso de considerarse que dentro de la determinación de los impuestos municipales ha concurrido un error, una infracción de índole legal o la aplicación indebida de una norma jurídica que ha perdido vigencia —corno consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad—, la parte interesada tiene a su disposición, para efectos de impugnación en sede ordinaria, no solo los mecanismos administrativos establecidos en la 1,GTM y la Ley de Procedimientos Administrativos, sino los procesos judiciales aplicables a la jurisdicción contencioso administrativa —definidos en la Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa—.

IV, 1. En otro orden, se advierte que el licenciado Alvarenga Navas manifiesta actuar en carácter de apoderado judicial de la sociedad actora; sin embargo, el período para el cual fue elegido el administrador único de Corporación CME, S.A. de C.V. —persona que compareció a otorgar el poder judicial— venció el 18 de diciembre de 2022.

En tal sentido, debe prevenirse al citado profesional que en caso pretenda plantear algún recurso o solicitud posterior, deberá incorporar la documentación necesaria con la que respalde la calidad en la que se desee actuar o, en su caso, el representante de dicha sociedad tendrá que comparecer de manera directa, todo de conformidad con los arts. 61, 68 y 69 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria al proceso de amparo.

2. Finalmente se advierte que el mencionado abogado señala su cuenta inscrita dentro del Sistema de Notificación Electrónica (SNE), una dirección física y un número de teléfono fijo para recibir los actos de comunicación.

Al respecto, es menester recordar que el art. 170 del CPCM dispone que demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad...".

Así, con respecto al teléfono brindado, el referido artículo determina que los medios técnicos que se pretendan utilizar para recibir comunicaciones judiciales deberán posibilitar la corroboración de recepción de las notificaciones, tal como lo sería un número de telefax.

Por consiguiente, se tomará nota del SNE y de la dirección brindada, no así del aludido número telefónico.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda suscrita por el abogado Juan José Alvarenga Navas, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado judicial de la sociedad Corporación CME, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la Asamblea Legislativa por la emisión del artículo 3 numeral 47 de la Tarifa General de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel, puesto que no se evidencia la existencia de un agravio constitucional dentro del presente caso, en tanto la disposición cuestionada fue declarada inconstitucional por esta Sala, por lo que ha perdido vigencia, habiendo sido expulsada del ordenamiento jurídico.

2. *Adviértese* al licenciado Alvarenga Navas que si posteriormente pretende impugnar esta decisión o realizar una solicitud adicional, deberá presentar la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se

desee actuar o, en su caso, el representante de dicha sociedad tendrá que comparecer de manera directa.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de la cuenta inscrita dentro del Sistema de Notificación Electrónica y de la dirección indicadas por el abogado Alvarenga Navas para recibir los actos de comunicación, así como de la persona comisionada para tal efecto.

4. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

202-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos los oficios 5662, 66 y 1199, remitidos por el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima, en los que solicita informes sobre el estado de este proceso; los cuales fueron debidamente rendidos por la Secretaría de esta Sala.

Analizada la demanda firmada por la abogada ********** en calidad de apoderada judicial de la señora EGCR, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La citada abogada manifiesta que su poderdante promovió un proceso ejecutivo contra la herencia yacente del señor AACR, representada por una curadora, que fue sustanciado por el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima, en el que se pronunció sentencia el 23 de febrero de 2021 estimando sus pretensiones. Luego, al iniciar la ejecución forzosa, su representada pidió, desde el inicio, que se le adjudicara en pago un inmueble embargado en el proceso; en ese orden de ideas, una vez cumplidos los trámites requeridos, el juez convocó a una audiencia de realización de bienes, en donde se reiteró la petición de adjudicación –sin oposición de la curadora de la herencia yacente–, pese a lo cual, el juez no accedió a ello y ordenó la venta en pública subasta como forma de realización de dicho bien.

Inconforme con lo anterior, presentó recurso de revocatoria, del cual se mandó a oír a la curadora mencionada, que nuevamente manifestó estar de acuerdo con la adjudicación a favor de la ejecutante; sin embargo, por medio de auto de 7 de enero de 2022, el juez declaró sin lugar el recurso, alegando que la aquiescencia de la curadora no era un factor a tomar en cuenta, ya que, debido a la naturaleza de dicha figura, esta no tenía fa-

cultades para disponer del bien embargado. Luego, la ejecutante alegó la nulidad del auto que ordenaba la subasta, pero esta fue desestimada por medio de resolución de 26 de enero de 2023, argumentando, entre otras cosas, que "[u]na de las etapas del proceso de [e]jecución [f]orzosa lo constituye la subasta", es decir, que dicha forma de realización debía ser agotada antes de acceder a la adjudicación solicitada por la ejecutante.

Así, al momento de celebrarse la subasta compareció un postor que ofreció adquirir el inmueble por la cantidad a la que ascendía la liquidación de las cantidades adeudadas, por lo que el juez señalado se lo adjudicó en pago, pese a las repetidas solicitudes de su mandante de que dicho bien se le adjudicara a ella y, además, al hecho de que –contrario a lo dicho por el juez– la subasta de ese bien solo podía acordarse si no hubieran resultado eficaces las demás formas de realización, según el artículo 654 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), es decir, si su poderdante no hubiera solicitado su adjudicación en pago.

Debido a tales hechos, presentó recursos de apelación y de casación con la finalidad de impugnar la adjudicación al rematante, pero los tribunales competentes declararon su inadmisibilidad e improcedencia, respectivamente.

Por lo expuesto, considera infringidos los derechos de propiedad, seguridad jurídica, audiencia y defensa –estos últimos como manifestaciones del debido proceso– de su representada.

II. Determinados los argumentos expresados por la abogada de la parte pretensora, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. Esta Sala ha sostenido –*v. gr*. en las improcedencias de 23 de junio de 2003 y 17 de febrero de 2009, amparos 281-2003 y 1-2009 respectivamente– que para la procedencia de la pretensión de amparo es necesario que el actor se autoatribuya liminarmente alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica, derivadas de los efectos de la existencia del acto reclamado, cualquiera que fuere su naturaleza, es decir, lo que en términos generales la jurisprudencia constitucional ha denominado de manera concreta "*agravio*", mismo que se funda en la concurrencia de dos elementos: el material y el jurídico, entendiéndose por el primero cualquier daño, lesión, afectación o perjuicio definitivo que la persona sufra en forma personal y directa; y por el segundo –el elemento jurídico–, que el daño sea causado o producido en ocasión o mediante la real violación de derechos constitucionales atribuida a alguna autoridad o, inclusive, a un particular.

Ahora bien, habrá casos en que la pretensión de la parte actora no incluya los anteriores elementos –entiéndase por falta de agravio–; dicha ausencia, en primer lugar, puede provenir de la inexistencia de un acto u omisión, ya que solo de modo inverso pueden deducirse efectos concretos

que posibiliten la concurrencia de un agravio; y en segundo lugar, puede ocurrir que no obstante la existencia real de una actuación u omisión, por la misma naturaleza de sus efectos, el sujeto activo de la pretensión no sufra perjuicio de trascendencia constitucional, directo ni reflejo, actual ni futuro, como por ejemplo en los casos en que los efectos del acto reclamado no constituyen aspectos propios del marco constitucional.

Ciertamente, para dar trámite a un proceso como el presente, es imprescindible que la omisión o el acto im pugnado genere en la esfera jurídica de la parte demandante un agravio o perjuicio definitivo e irreparable de trascendencia constitucional, pues de lo contrario resultaría infructuosa y contraproducente la sustanciación de un proceso cuya pretensión carezca de uno de los elementos esenciales para su adecuada configuración.

2. Por otro lado, tal como se ha indicado en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La abogada ********* impugna el auto emitido por el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima el 16 de marzo de 2022 –y su rectificación de 18 de marzo de 2022– por medio del cual adjudicó a un rematante el inmueble embargado a favor de su patrocinada.

En ese sentido, expone que el juzgador emitió dicha resolución pese a que en varias ocasiones se le pidió que lo adjudicara en pago a su patrocinada, lo cual no fue atendido por el funcionario bajo el argumento de que la subasta constituía una de las etapas procesales de la ejecución y que, en consecuencia, debía ser agotada previamente a una adjudicación en pago; sin embargo, para dicha profesional esa forma de realización solo podía acordarse si hubieran resultado ineficaces las demás, es decir, que el bien en cuestión solo podía subastarse si su mandante no hubiera solicitado que se le adjudicara en pago a ella, con independencia de que, como sucedió en el caso concreto, el rematante haya adquirido el inmueble por el total de la liquidación judicial.

2. A. Apuntado lo precedente –y a partir de los hechos expuestos por la procuradora de la pretensora y la documentación aportada– no es posible colegir la existencia de alguna privación, daño o lesión de rango constitucional que pudiera afectar la esfera jurídica de la señora CR, ya que esta obtuvo la completa satisfacción de su derecho de crédito, pues el rematante adquirió el inmueble por el importe de la liquidación judicial, lo que, conforme al artículo 552 inciso 2° del CPCM, constituye la finalidad de la ejecución forzosa, para lo cual –en principio– es irrelevante el orden de preferencia adoptado respecto a las formas legalmente previstas para realizar los bienes embargados.

De tal manera, la queja se fundamenta en el desacuerdo entre las expectativas personales de la interesada y la interpretación adoptada por el juez demandado respecto a las normas que rigen la realización de bienes, sin un trasfondo de relevancia constitucional.

B. Por otro lado, aun cuando la mencionada profesional afirma que existió una transgresión a los derechos fundamentales de su representada, los alegatos esgrimidos únicamente evidencian una inconformidad con la situación impugnada. Y es que, del modo en que ha sido planteada, su pretensión está orientada a que esta Sala revise la corrección legal de la decisión del juez demandado, es decir, si era necesario que subastara el bien embargado antes de acceder a adjudicarlo en pago a la ejecutante.

Sin embargo, esto implicaría un contraste, a la luz de la ley procesal civil y mercantil, entre los razonamientos de la abogada de la demandante –para quien la adjudicación debió ser acordada con antelación a la subasta– y los de la autoridad demandada –que interpretó que la subasta era una etapa que debía agotarse previamente a la adjudicación–. Es decir, dilucidar los alegatos planteados conllevaría a analizar –desde una perspectiva infraconstitucional– si la decisión de la autoridad demandada era la legalmente procedente.

Así, este Tribunal no es competente para determinar si la decisión del juez fue adecuada tomando en consideración los supuestos del caso específico y la ley aplicable, pues este ha interpretado y aplicado su criterio jurídico particular respecto de los artículos pertinentes que incumben al caso en concreto y los elementos probatorios que obran dentro del proceso, lo que se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas.

Por tanto, para atender los reclamos de la abogada *********, esta Sala tendría que sustituir en sus funciones a la jurisdicción ordinaria, esto es, entrar a valorar la legislación secundaria en relación con las circunstancias planteadas, lo que se constituye en una cuestión de eminente aplicación e interpretación de las leyes comunes, con lo cual se estaría desnaturalizando el proceso de amparo al pretender utilizarlo como un mecanismo para revisar la legalidad de los actos reclamados y no como el medio para la subsanación de presuntas lesiones a derechos fundamentales.

3. En ese sentido, tomando en consideración que para la procedencia de la pretensión de amparo es necesario que el actor se autoatribuya liminarmente alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica, derivadas de los efectos de la existencia de los actos u omisiones impugnados, se colige que en el presente caso no concurre uno de los elementos esenciales para su adecuada configuración, pues no se advierte que exista algún agravio concreto y de relevancia constitucional en la esfera jurídica de la señora EGCR, quien, independientemente de las formas, ha visto satisfecho completamente su derecho de crédito, por lo que se ha cumplido con la finalidad de la ejecución forzosa.

Aunado a ello, el asunto formulado no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir defectos que habilitan la terminación anormal del proceso.

IV. En otro orden de ideas, se advierte que el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima, por medio de oficios número 5662, 66 y 1199, pidió que se remitieran informes sobre el estado de este proceso, los que fueron debidamente rendidos; sin embargo, en virtud de que por medio de esta resolución finaliza anormalmente este amparo, es menester instruir a la Secretaría de esta Sala que rinda un nuevo informe a dicho juez, anexando copia de este pronunciamiento.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a la abogada ********** en calidad de apoderada judicial de la señora EGCR, en virtud de haber acreditado en forma debida la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por la abogada *********, en la calidad señalada, contra el Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima, por no advertirse la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la señora CR y, además, porque la pretensión planteada se sustenta en un asunto de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Instrúyese* a la Secretaría de este Tribunal que rinda nuevo informe al Juez de lo Civil de Santa Rosa de Lima sobre el estado actual del presente proceso, anexando copia de este pronunciamiento.

4. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico –correo electrónico inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia– señalado por la abogada de la parte actora para recibir los actos procesales de comunicación.

5. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

27-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por el abogado *********, quien pretende actuar como apoderado del señor JRMP, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El aludido profesional aduce que mediante resolución de 1 de abril de 2019 el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca condenó al actor a la pena de veinte años de prisión por la comisión del delito de homicidio.

Afirma que se interpuso recurso de apelación ante la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, quien el 30 de septiembre de 2020 confirmó el fallo condenatorio, por lo que planteó recurso de casación; sin embargo, la Sala de lo Penal resolvió que no había lugar a casar la decisión de segunda instancia el 14 de enero de 2022.

Asevera que la mencionada sala no motivó adecuadamente su resolución, aunado al hecho de que la detención provisional en la que se encontraba el interesado excedió del plazo de 36 meses.

Por lo expuesto, demanda a la Sala de lo Penal por la lesión de los derechos a la seguridad jurídica y petición, así como el debido proceso del pretensor.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

1. El artículo 12 inciso final de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) prevé que: "[s]i el amparo solicitado se fundare en detención ilegal o restricción de la libertad personal de un modo indebido, se observará lo que dispone el Título IV de la presente ley", apartado que regula el proceso de hábeas corpus.

Por su parte, el artículo 11 inciso 2° de la Constitución de la República establece que "... [l]a persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad.

También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas...".

Con base en dichas disposiciones, esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia –improcedencia de 19 de mayo de 2008, amparo 475-2008– que una de las causales de finalización anormal de este proceso concurre cuando la pretensión incoada se fundamenta en derechos tutelados por el hábeas corpus.

2. En relación con lo expuesto, también se ha señalado en la improcedencia de 12 de junio de 2001, amparo 567-2000, que a pesar del rechazo liminar de la demanda en aquellos supuestos en los que el reclamo se fundamente en la supuesta vulneración del derecho a la libertad del interesado, esta Sala se encuentra facultada, por aplicación del principio *iura novit curia* –el Derecho es conocido por el Tribunal– y lo dispuesto en el artículo 80 de la LPC, para tramitar la petición por medio del cauce procedimental que jurídicamente corresponde, con independencia de la denominación que el actor haya hecho de la vía procesal que invoca.

Consecuentemente, en este tipo de casos, debe rechazarse el conocimiento de la queja formulada en el proceso de amparo y ordenarse su tramitación de conformidad con el procedimiento que rige el hábeas corpus, tal como se ha realizado en las improcedencias de 29 de abril de 2015 y 10 de noviembre de 2017, amparos 64-2015 y 329-2016 respectivamente.

III. El abogado ********** demanda a la Sala de lo Penal por emitir la decisión de 14 de enero de 2022 con la que declaró que no había lugar a casar la resolución de 30 de septiembre de 2020 proveída por la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, por considerar que se lesionaron los derechos a la seguridad jurídica y petición, así como el debido proceso del señor MP.

Para fundamentar la inconstitucionalidad de dicha situación, manifiesta que: "... la falta de fundamentación [...] [es que] dice la sala que la cámara puede omitir realizar la fundamentación descriptiva en sus resoluciones cuando es esto un requisito de toda sentencia, así también dice que basta con notificar al abogado defensor y no al procesado [...] la Sala de lo Penal ha omitido resolver en el tiempo adecuado [...] por haber transcurrido [...] los 36 meses de la detención provisional...".

Al respecto, esta Sala en la sentencia de 5 de noviembre de 2010, hábeas corpus 112-2010, ha precisado que dicho proceso constitucional constituye un mecanismo destinado a proteger el derecho fundamental de libertad física de los justiciables ante restricciones, amenazas, perturbaciones o incidencias ejercidas en tal categoría de forma contraria a la Constitución, concretadas ya sea por particulares o autoridades judiciales o administrativas.

En ese sentido, aunque el referido profesional expresa pedir amparo y, en consecuencia, la Secretaría de esta Sala clasificó el referido escrito como tal clase de proceso, dado que aduce que el demandante se encuentra privado de libertad cumpliendo una pena de prisión, se advierte que los derechos fundamentales que pretende tutelar se encuentran vinculados al de libertad física, por lo que es procedente ordenar que su pretensión sea tramitada como un hábeas corpus.

Por consiguiente, en vista que el reclamo planteado adolece de un vicio que impide la tramitación del proceso de amparo, este deberá finalizar mediante la figura de la improcedencia.

IV. Por otra parte, se advierte que el abogado ********** pretende actuar como apoderado del señor MP; sin embargo, según el artículo 14 de la LPC la demanda de amparo podrá presentarse por la persona agraviada o por medio de su representante legal o mandatario.

En tal sentido, en caso de que pretenda plantear algún recurso o solicitud posterior en este proceso, deberá incorporar la documentación necesaria con la que compruebe su calidad de apoderado del señor JRMP de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) –de aplicación supletoria en los procesos de amparo–.

V. Además, en su demanda el citado profesional ha consignado como medios para recibir los actos procesales de comunicación el Sistema de Notificación Electrónica y tres números telefónicos.

Al respecto, es menester resaltar que de conformidad con el artículo 170 del CPCM, los medios técnicos que se pretendan utilizar para recibir comunicaciones judiciales deberán posibilitar la constancia de recepción, tal como lo sería un número de telefax. En ese sentido, los números de teléfono no permiten acreditar la aludida circunstancia, por lo que no resultan admisibles para la realización de notificaciones

En cuanto a la dirección de correo electrónico, pese a que no se adjunta constancia de que la misma se encuentre registrada en el Sistema de Notificación Electrónica de esta Corte, se deberá tomar nota de la misma para garantizar el derecho de audiencia de la parte actora.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 inciso 4° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por el abogado *********, quien pretende actuar como apoderado del señor JRMP, contra la Sala de lo Penal, en virtud de que la pretensión planteada se fundamenta en un derecho constitucional protegido por el hábeas corpus.

2. *Instrúyese* a la Secretaría de esta Sala que inscriba la referida solicitud en el registro de procesos de hábeas corpus, para lo cual deberá asignar el número de referencia que corresponda para su respectiva tramitación mediante esa vía procesal.

3. *Ordénase* a la Secretaría de esta Sala que traslade la información correspondiente de este expediente de amparo a efecto de documentar el inicio del proceso de hábeas corpus respectivo.

4. *Adviértese* al citado profesional que, si posteriormente pretende impugnar esta decisión o realizar una solicitud adicional en este proceso, deberá presentar la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se desee actuar de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil.

5. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (Sistema de Notificación Electrónica) señalado por el abogado ********** para recibir los actos de comunicación.

6. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS.—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

322-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por el abogado FMR en calidad de apoderado de los señores JMLCC, JSAP, JADG, JCRA, LAHQ, LAR, LEMD, JAN, CAMC, CCG, CJ conocido por CJG, TGF, FAR, JAR, VMC, TGH, VMMH, DMF, RVA, DPA, MAC, AHR y JPA, mediante el cual pretende evacuar las prevenciones realizadas.

Analizados la demanda de amparo, así como el referido escrito, junto con la documentación anexa, se realizan las consideraciones siguientes:

I. El citado profesional manifiesta que los pretensores laboraron en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), desde el 2002, en virtud de la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno de la República y organizaciones de expatrulleros en el conflicto armado de El Salvador relativo a la "Propuesta de Solución Caso Desmovilizados del Servicio Territorial (expatrulleros)", por lo que se encontraban vinculados con dicha institución por contrato de trabajo y se desempeñaban como coordinadores y promotores sociales para llevar a cabo el levantamiento de la información concerniente a la calidad y requisitos de cada uno de los beneficiarios del proyecto denominado "Seguridad Ciudadana en el Sector Agropecuario".

Expone que los contratos de trabajo eran prorrogados; sin embargo, en junio de 2009 fueron despedidos de manera –aparentemente– arbitraria por la presidenta del aludido ente, sin que se tramitara previamente un

procedimiento en el que se les permitiera defender sus derechos, esto a pesar de que los cargos que desempeñaban no eran de confianza, sino que sus funciones eran de carácter permanente y continuo, pues pertenecían al "giro" ordinario del ISTA.

Inconformes con la decisión, presentaron denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) con el propósito de exhibir las vulneraciones laborales de las que fueron objeto, así como para obtener una resolución en la que se ordenara al ISTA el pago de los salarios y demás prestaciones laborales, respectivamente. Al respecto, el abogado de los interesados asevera que la primera autoridad no se ha pronunciado sobre la lesión a los derechos que fueron invocados en su denuncia y, la segunda, les indicó que su solicitud era una responsabilidad administrativa de la institución para la que prestaban sus servicios.

Aunado a ello, acudieron ante los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Laboral de San Salvador, quienes rechazaron sus demandas, declarando la improponibilidad de estas, así como la prescripción de la acción. Posteriormente, impugnaron tales decisiones por medio de los recursos de apelación y casación, los cuales fueron desestimados. Asimismo, presentaron la demanda de amparo que fue clasificada bajo la referencia 209-2019, pero fue declarada inadmisible por medio del proveído de 30 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, sostiene que se transgredieron los derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral, por lo que pretende que se condene "al pago de los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a cada uno de los demandantes".

II. Expuesto lo anterior, corresponde establecer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

1. Esta Sala ha sostenido –sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, e improcedencia de 24 de abril de 2019, amparo 206-2018– que este tipo de procesos constitucionales persiguen que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

Y es que, debido a la naturaleza jurídica del amparo, es necesario que exista un agravio concreto, esto es, un desmedro que las personas experimentan en su esfera jurídica como resultado de las actuaciones de un determinado funcionario, cuya constitucionalidad se cuestiona.

En ese sentido, para la procedencia del amparo, es necesario –entre otros presupuestos– que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales

de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio–. Este tiene como requisitos que se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional cuando el acto u omisión alegado es inexistente o cuando, no obstante concurra una actuación u omisión por parte de la autoridad a quien se le atribuye la responsabilidad, aquella ha sido legítima, es decir, se ha realizado dentro del marco constitucional o es incapaz de producir por sí misma una afrenta en la esfera jurídica constitucional del sujeto que reclama.

De tal suerte que si la pretensión del actor no incluye los elementos mencionados, hay ausencia de agravio y esta debe ser rechazada por existir imposibilidad absoluta de juzgar el caso desde el ámbito constitucional.

2. Asimismo, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte interesada deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto a presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones adoptadas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Tomando en cuenta las precedentes consideraciones, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones invocadas en el presente caso.

1. En síntesis, la parte actora reclama contra el Presidente del ISTA por su despido –aparentemente– arbitrario realizado en junio de 2009, por lo que, se solicita a esta Sala que condene a dicha autoridad al pago de salarios, así como de los "daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a cada uno de los demandantes". A juicio de los interesados, tal situación produjo la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones del debido proceso– y estabilidad laboral, dado que fueron separados de sus cargos sin un procedimiento previo en el que se les permitiera defender sus derechos, tomando en consideración que las funciones que desempeñaban en la institución eran de carácter permanente. Por ello, la parte peticionaria considera que debe repararse el daño y estimar su petición.

Asimismo, se sitúa en el extremo pasivo de la pretensión a los Jueces Primero, Segundo y Tercero de lo Laboral y a las autoridades jurisdiccionales que desestimaron los recursos de apelación y casación.

2. Del análisis de la demanda se advierte que la pretensión no es de naturaleza constitucional, sino eminentemente patrimonial, ya que se ha incoado el presente amparo como un mecanismo para solicitar que se reconozca que se ocasionó un daño material y moral a los pretensores y, por consiguiente, se ordene el pago de los salarios, así como de la indemnización por daños y perjuicios.

Al respecto, debe tomarse en consideración que el amparo tiene como objeto la protección reforzada de los derechos fundamentales, tutelando al pretensor ante la transgresión generada por una actuación u omisión de la autoridad. De ahí que su efecto restitutorio consiste en ordenar que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional, pero, cuando dicho efecto ya no sea posible, la sentencia será meramente declarativa, quedándole únicamente expedita al interesado la promoción de los procesos previstos por el legislador para deducir ese tipo de pretensiones contra el funcionario personalmente responsable –responsabilidad patrimonial– en los que se cuantificará el daño causado.

Así, se colige que lo alegado por la parte actora no corresponde al proceso de amparo, puesto que no se procura la tutela de derechos fundamentales, sino que se conozca sobre la pretensión patrimonial contra autoridades del ISTA. Sin embargo, tramitar su demanda implicaría una intromisión en las competencias que el legislador ha atribuido a otras autoridades para conocer de un presunto agravio de índole económica y que se atribuye al funcionamiento normal o anormal de la administración pública; a la vez que se estaría desnaturalizando el proceso de amparo al pretender utilizarlo como un mecanismo para un reclamo esencialmente patrimonial y no como el medio para la subsanación de presuntas lesiones a derechos constitucionales.

Por ello, se evidencia que no se ha fundamentado la trascendencia constitucional del reclamo formulado por los demandantes, pues el amparo no es el mecanismo para analizar lo pretendido en la demanda –una reparación económica o patrimonial por actos de la administración–, por lo que escapa de la competencia de esta Sala. Y es que, para que este tribunal pueda conocer del fondo de la pretensión, es preciso que el sujeto activo se atribuya la existencia de un agravio a alguno de sus derechos fundamentales.

Lo anterior, debido a que, si bien se aduce la lesión de ciertos derechos y garantías constitucionales, la queja se centra en solicitar el pago de los salarios que los interesados afirman dejaron de percibir, así como la indemnización por daños y perjuicios morales y materiales, y no en que sea restablecido algún derecho fundamental, como podría ser el derecho a la estabilidad laboral. En ese sentido, no se logra observar la posible afecta-

ción a los derechos invocados, en los términos en que ha sido planteado el alegato en referencia, lo que conlleva a la declaratoria de improcedencia de la demanda por existir un defecto en la pretensión.

3. Por otra parte, se observa que el profesional en referencia expresa su intención de demandar a la PDDH, la CCR, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Laboral, así como a las autoridades jurisdiccionales que conocieron de los recursos de apelación intentados contra las resoluciones de los mencionados jueces y a la autoridad que conoció de la casación; no obstante, omite justificar los motivos por los que los sitúa en el extremo pasivo de su pretensión y los derechos que habrían vulnerado con sus decisiones.

Al respecto, se colige que únicamente estaría inconforme con el resultado obtenido por parte de tales autoridades, pretendiendo que esta Sala revise lo actuado por aquellas. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo expresado por la jurisprudencia de esta Sala –v.gr. en el citado amparo 408-2010– en cuanto a que la Sala de lo Constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen respecto a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde.

De ahí que entrar a conocer dicho reclamo implicaría efectuar –desde el ámbito estrictamente infraconstitucional– una revisión de los motivos por los cuales las autoridades judiciales correspondientes rechazaron sus pretensiones, así como los mecanismos de impugnación que presentaron, lo cual escapa del catálogo de atribuciones de este Tribunal, pues pertenecen al ámbito de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Lo anterior, también evidencia un defecto en la pretensión que impide el conocimiento del fondo de aquella.

4. Así, en definitiva, la petición formulada en este proceso no corresponde al conocimiento de la Sala de lo Constitucional porque: *i)* el abogado ********** no ha logrado fundamentar la relevancia constitucional del presunto agravio ocasionado a los actores, pretendiendo en el fondo únicamente una reparación de naturaleza eminentemente patrimonial; y *ii)* su pretensión se reduce a un asunto de mera legalidad ordinaria cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

Por ende, del análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas se deriva la imposibilidad de juzgar, desde una perspectiva constitucional, el fondo del reclamo planteado, debiendo declararse la improcedencia de la demanda de amparo.

IV. Finalmente, el abogado ********** manifiesta que los señores AGO, FJAM, REOJ y SAA, formaron parte del grupo de personas que fueron despedidas del ISTA en junio de 2009, sin embargo, fallecieron, por lo que solicita que se que se nombre un curador ad litem a efecto de que represente los intereses de los "herederos" de los aludidos difuntos en el presente proceso de amparo.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que el objeto del proceso de amparo radica en la pretensión, la cual persigue esencialmente que se imparta a la persona justiciable protección jurisdiccional contra un acto de autoridad –formal o material– que estima inconstitucional y que, específicamente, considera violatorio del ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

Además, un proceso de amparo la inexistencia de alguno o algunos de los elementos configuradores de la pretensión –relativos a los sujetos o al objeto– que generen la imposibilidad para la Sala de juzgar el caso concreto. En efecto, si el sujeto activo de la relación jurídico-procesal constitutiva de la pretensión de amparo deja de existir, dada la naturaleza intuito personae de la lesión a derechos constitucionales, es dable sostener que el proceso pierde la base subjetiva sobre la que descansa, siempre y cuando la configuración de la parte actora sea de carácter unipersonal y el acto reclamado incida únicamente en sus derechos.

En razón de lo expuesto, se observa que, debido a la naturaleza de los derechos invocados, estos solo podrían ser reclamados por su titular, quienes, en este caso, ya se encontraban fallecidos al momento de la presentación de la demanda. Además, el planteamiento relacionado carece de trascendencia constitucional, en virtud de que no corresponde a esta Sala determinar quién sería el sucesor procesal de tales personas, en razón de que dicho análisis no atañe al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, aunado a que implicaría la irrupción en competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

En ese sentido, tomando en consideración que las personas que pudieron ser los sujetos activos de la pretensión de amparo ya fallecieron –y dado que en el presente caso no se ha argüido que la lesión a derechos fundamentales que se invoca haya incidido en la esfera particular de otros sujetos– y que lo indicado es un asunto de mera legalidad, resulta pertinente declarar sin lugar la petición efectuada por el abogado **********.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* al abogado FMRen calidad de apoderado de los señores VMC y AHR, en virtud de haber acreditado en forma debida la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por el abogado FMR en calidad de apoderado de los señores JMLCC, JSAP, JADG, JCRA, LAHQ, LAR, LEMD, JAN, CAMC, CCG, CJ conocido por CJG, TGF, FAR, JAR, VMC, TGH, VMMH, DMF, RVA, DPA, MAC, AHR y JPA, en virtud de no advertirse la trascendencia constitucional del presunto agravio ocasionado a los actores y porque el reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Declárase sin lugar* la petición realizada por el abogado FMR orientada a que se nombre un curador a los señores AGO, FJAM, REOJ y SAA, debido que se alega la vulneración de derechos fundamentales cuyos titulares fallecieron –sin haberse argüido que las situaciones reclamadas hayan afectado a otros sujetos–, así como por la falta de trascendencia constitucional de la aludida solicitud.

4. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

443-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con diez minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

A sus antecedentes los escritos firmados por el abogado José Roberto Campos González, en calidad de representante de la sociedad Megavalores, Sociedad Anónima de Capital Variable (Megaval, S.A. de C.V.).

Analizada la demanda de amparo, así como los mencionados escritos, junto con la documentación anexa, se hacen las siguientes consideraciones:

I. El citado profesional dirige su reclamo contra la Asamblea Legislativa (AL), por ha ber emitido los arts. 11 y 12 –original y reformado en su letra d) este último– de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador (LIAEMA), promulgada por Decreto Legislativo (DL) número 265 de 4 de febrero de 2010, publicado en el Diario Oficial (DO) número 45, tomo 386, de 5 de marzo de 2010, luego reformada por DL número 604 de 27 de enero 2011, publicado en el DO número 40, tomo 390, de 25 de febrero de 2011.

Las disposiciones impugnadas prescriben:

"De la Base Imponible

Art. 11.- Para efectos de esta Ley se tendrá como base imponible el activo imponible, entendiendo por activo imponible aquellos valores en activos que posee una persona natural o jurídica para el desarrollo de su actividad económica específica.

El activo imponible se determinará deduciendo del activo total, todos aquellos activos gravados en otros municipios."

"De la Forma de Establecer la Cuantía del Impuesto

Art. 12.- Las tarifas mensuales del impuesto se establecerán mediante una cuota fija y una variable que se aplicarán de acuerdo a la base imponible, conforme a lo siguiente:

a) Los activos imponibles desde $300.01 hasta $3,000.00 pagarán una cuota fija de $ 1.50 más un factor de 2 por millar o fracción.

b) Los activos imponibles desde $3,000.01 hasta $30,000.00 pagarán una cuota fija de $2.00 más un factor de 3 por millar o fracción.

c) Los activos imponibles desde $30,000.01 hasta $100,000.00 pagarán una cuota fija de $ 6.00 más un factor de 275 por millar o fracción.

d) Los activos desde cien mil punto cero uno dólares $100,000.01, se calcularán de acuerdo con la siguiente tabla:

ACTIVO IMPONIBLE	TARIFA
DE $100,000.01 A $200,000.00	$281.00 MÁS $1.05 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $100,000.00
DE $200,000.01 A $300,000.00	$285.00 MÁS $1.10 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $200,000.00
DE $300,000.01 A $400,000.00	$300.00 MÁS $1.20 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $300,000.00
DE $400,000.01 A $500,000.00	$400.00 MÁS $1.30 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $400,000.00
DE $500,000.01 A $1,000,000.00	$500.00 MÁS $1.40 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $500,000.00
DE $1,000,000.01 EN ADELANTE	$1,000.00 MÁS $1.50 POR MILLAR O FRACCIÓN DE MILLAR QUE EXCEDA DE $1,000,000.00

Todas las cantidades expresadas en este artículo han sido establecidas en dólares de los Estados Unidos de América."

Al respecto, sostiene que los artículos cuestionados vulneran los derechos de propiedad y a la seguridad jurídica, ambos en relación con el principio de tributación equitativa, argumentando –en síntesis– que la AL no tomó en consideración la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, puesto que determinó que los activos serían la base imponible de los tributos en cuestión, esto sin permitir la deducción de los pasivos de cada contribuyente.

II. Habiendo puntualizado los planteamientos esenciales de la parte peticionaria, es necesario formular ciertas consideraciones de índole jurisprudencial que han de servir como fundamento de la presente decisión.

Tal como se sostuvo en el sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, este proceso constitucional persigue que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

En ese sentido, para la procedencia de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros requisitos– que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio–. Dicho agravio tiene como requisitos que este se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional por la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: *(i)* cuando el acto u omisión impugnado es inexistente; *(ii)* cuando, no obstante la existencia real de una actuación u omisión, esta ha sido realizada dentro del marco constitucional; o *(iii)* cuando es incapaz de producir por sí misma una afrenta a la persona que reclama.

Consecuentemente, si la pretensión de amparo no incluye los elementos antes mencionados, hay ausencia de agravio constitucional y la pretensión debe ser rechazada por existir imposibilidad de juzgar el caso desde este ámbito.

III. Expuesto lo anterior, corresponde evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas por el abogado Campos González.

1. El referido profesional impugna la constitucionalidad de los arts. 11 y 12 de la LIAEMA, puesto que –según sus consideraciones– el tributo creado por la autoridad demandada toma como base imponible el activo del administrado, situación que no revelaría la verdadera capacidad contributiva del sujeto obligado.

2. A. Ahora bien, con relación al tema en cuestión –activo como base imponible–, es necesario recordar que esta Sala ha sostenido, a partir de las sentencias de 19 de abril de 2017 y de 26 de mayo de 2017, amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, respectivamente, que si bien la redacción típica de las leyes tributarias municipales permite restar a la base imponible del impuesto –activo imponible– las deducciones expresamente mencionadas en sus textos normativos, ello no debe interpretarse en el sentido que estas sean las únicas que tengan que excluirse para determinar el *quantum* del tributo. Y es que, las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6° de la Cn., están obligadas a excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con sus acreedores –pasivo–, con el objeto de gravar –únicamente– la riqueza neta de los destinatarios y así respetar el principio de capacidad económica.

Aunado a ello, en la mencionada sentencia de inconstitucionalidad 50-2015, se especificó que el art. 127 de la Ley General Tributaria Municipal (LGTM) dispone que en la determinación de la base imponible de los tributos municipales deben considerarse los pasivos del contribuyente, por lo que, siendo dicha normativa de carácter general en materia tributaria municipal, complementa las leyes especiales en esa materia. En tal sentido, si una norma tributaria especial no aclara si en la cuantificación de la base imponible puede determinarse deduciendo también el pasivo del contribuyente, no debe interpretarse como regulación opuesta o que se sustrae del art. 127 de la LGTM, más bien debe entenderse que si las deducciones del pasivo para determinar la base imponible no se encuentran previstas en las leyes tributarias especiales, es porque el legislador decidió dejarlo a la regulación de la LGTM.

B. i. En similar línea, resulta oportuno traer a consideración que esta Sala, por medio del sobreseimiento de 22 de mayo de 2023, amparo 385-2020, ha ratificado el criterio jurisprudencial sostenido a partir de las sentencias pronunciadas en los ya citados procesos de amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, el cual reconoce el principio de conservación de las leyes y aclara la aplicación constitucional entre leyes generales y especiales en el ámbito tributario municipal en relación con el principio de capacidad económica, art. 131 ord. 6° de la Cn.

ii. Al respecto, debe subrayarse –tal como se sostuvo en la sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– que la *interpretación conforme* es la máxima de hermenéutica jurídica, según la cual, de entre los varios entendimientos posibles de una disposición –objeto de la interpretación–, debe escogerse, para dar una solución jurídica al caso, la norma –resultado de la interpretación– que mejor se acomode a la Ley Suprema.

Y es que, el fundamento de este tipo de interpretación se encuentra cimentado tanto en el principio de unidad del ordenamiento jurídico, como en la supremacía constitucional que se proyecta sobre las leyes, condicionando así el sentido que cabe atribuirle a estas.

De este modo, el efecto práctico que dicha máxima tiene en el control constitucional es que el juzgador debe buscar que el entendimiento de la formulación lingüística de una determinada prescripción se acomode al sentido constitucional, manteniendo la imperatividad de la ley en aquellas posibilidades interpretativas que no contradigan a la Cn.

iii. Así, como se puntualizó en el referido sobreseimiento del amparo 385-2020, en relación con las leyes tributarias que regulan impuestos a las actividades económicas debe entenderse que, independientemente de que dichos cuerpos normativos establezcan o no deducciones específicas que los sujetos pasivos del tributo pueden realizar a su favor, la base imponible del impuesto –cualquiera que sea su denominación– excluye el pasivo de los contribuyentes reflejado en sus balances contables, conforme al principio de capacidad económica contenido en el art. 131 ord. 6° de la Cn. Esto es coherente con lo prescrito en el art. 127 de la LGTM –normativa de carácter general en materia tributaria municipal que complementa las leyes especiales–, el cual dispone que en la determinación de este tipo de impuestos municipales deben considerarse los pasivos del contribuyente.

La aludida interpretación resulta más acorde con las disposiciones que conforman el Derecho Constitucional Tributario, pues permite que las personas contribuyan al gasto público tomando en cuenta las posibilidades económicas reales que tienen para ello y, de manera integral, que los municipios –sujetos activos de estos tributos– efectúen la recaudación necesaria para la realización de los planes de desarrollo local que elaboren conforme al art. 206 de la Cn.

C. Habiendo acotado lo precedente, es menester colegir que, en el caso concreto, si bien la LIAEMA permite restar a la base imponible ciertas deducciones puntuales, ello no debe interpretarse en el sentido que estas sean las únicas que tengan que excluirse para determinar el *quantum* del tributo. Así, las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6° de la Cn., deben excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con sus acreedores –pasivo–, en virtud de que los impuestos municipales establecidos por la LIAEMA –relacionados con las actividades industriales, comerciales, financieras o de servicios, realizadas por comerciantes individuales o sociales–, únicamente gravan la riqueza neta de sus destinatarios, resultando congruentes con el principio de capacidad económica.

En consecuencia, no se observa que las disposiciones legales impugnadas generen una posible vulneración al principio de capacidad económica derivado del art. 131 ord. 6° de la Cn., por lo que en el presente caso no se evidencia la existencia de un agravio constitucional, debiendo descartarse la pretensión a través de la declaratoria de improcedencia.

D. i. Por otra parte, es conveniente puntualizar ciertos aspectos relativos a los cobros presuntamente realizados por las autoridades municipales de Ayutuxtepeque.

Al respecto, es necesario enfatizar que la presente resolución no debe de interpretarse como un aval por parte de esta Sala para que la administración municipal proceda a cobrar de manera arbitraria los impuestos previstos en la LIAEMA.

Así, si bien se ha reconocido que de la mera vigencia de los artículos impugnados no se deduce un posible agravio constitucional, ello no exime a la municipalidad de cumplir con los criterios jurisprudenciales de esta Sala al momento de cuantificar los tributos.

De este modo, al aplicar las citadas disposiciones a sus contribuyentes, las autoridades municipales deben tener en cuenta la obligación de restar la totalidad de los pasivos de estos, para así obtener una base imponible que verdaderamente refleje la capacidad económica de los sujetos obligados.

Este mecanismo de implementación de la norma tributaria municipal debe aplicarse de manera automática y general a todo contribuyente, por lo que no debe entenderse que requiere de un pronunciamiento directo por parte de esta Sala que le ordene realizarlo con un sujeto determinado. Esto implica que la correcta aplicación del tributo –con base al principio de capacidad económica y por tanto en respeto a la Cn.– conmina a la municipalidad a verificar el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales de esta Sala, esto es a deducir el total de los pasivos a los activos de los contribuyentes.

ii. Aclarado lo precedente, resulta igualmente oportuno recordar que los procedimientos para determinación de las obligaciones tributarias municipales se encuentran regulados en la LGTM –arts. 100 y siguientes–.

En tal orden, en caso de considerarse que ha existido un error técnico, una infracción de índole legal o el posible apartamiento de los criterios jurisprudenciales de esta Sala, la parte interesada tiene a su disposición, para efectos de impugnación en sede ordinaria, tanto los mecanismos administrativos –determinados en la LGTM y en la Ley de Procedimientos Administrativos–, como los procesos judiciales aplicables a la jurisdicción contencioso administrativa –definidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa–.

IV. Finalmente, el mencionado profesional señala una dirección ubicada en el municipio de Ayutuxtepeque, un número de telefax, un número de teléfono fijo y un correo electrónico para recibir los actos procesales de comunicación.

Sobre ello, se debe recordar que el art. 170 del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en el proceso de amparo– dispone que "... [e]l demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad...".

Así, dado que la dirección brindada por el peticionario se encuentra fuera de San Salvador, circunscripción territorial en la cual se encuentra ubicada la sede de esta Sala, no podrá tomarse nota del lugar proporcionado –únicamente para efecto de llevar a cabo los actos de comunicación– en aplicación de la disposición legal relacionada.

Con respecto al teléfono brindado, el referido artículo determina que los medios técnicos que se pretendan utilizar para recibir comunicaciones judiciales deberán posibilitar la corroboración de recepción de las notificaciones, tal como un telefax. Por consiguiente, no podrá tomarse nota del aludido número telefónico fijo.

Sobre el correo electrónico, pese a que no se anexa constancia de que este se encuentre registrado en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota de ese medio –así como del número de telefax–, a fin de garantizar el derecho de audiencia de la parte actora.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* al abogado José Roberto Campos González en carácter de representante de la sociedad Megavalores, Sociedad Anónima de Capital Variable, por haber acreditado en forma debida la personería con la que interviene en el presente proceso.

2. *Declárase improcedente* la demanda suscrita el licenciado Campos González contra la Asamblea Legislativa por haber emitido los arts. 11 y 12 –original y reformado en su letra d) este último– de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, promulgada por Decreto Legislativo número 265 de 4 de febrero de 2010, publicado en el Diario Oficial número 45, tomo 386, de 5 de marzo de 2010, luego reformada por Decreto Legislativo número 604 de 27 de enero 2011, publicado en el Diario Oficial número 40, tomo 390,

de 25 de febrero de 2011, en virtud de que no se evidencia la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la sociedad actora.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de los medios técnicos –número de telefax y correo electrónico– indicados por el abogado Campos González para recibir los actos de comunicación, así como de la persona comisionada para tal efecto.

4. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA–H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

108-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo suscrita por la abogada CMRC en calidad de defensora pública y en representación del señor DNL, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, la citada profesional dirige su pretensión contra: *i)* el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, por haber ordenado –aparentemente– la no renovación del contrato de trabajo de su representado a partir del 30 de junio de 2021; *ii)* el Juez de lo Laboral de Santa Ana por las resoluciones de 9 de septiembre de 2021 y 24 de septiembre de 2021 en las que, por un lado, declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido y, por otro, declaró la improponibilidad del recurso de revocatoria de dicho auto y *iii)* la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por el auto de 23 de diciembre de 2021 con referencia Inc. 395-R-2021 en el cual declaró improcedente el recurso de revisión intentado contra la decisión del aludido juez en la que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido.

Al respecto, manifiesta que la parte demandante laboró en la Alcaldía Municipal de Santa Ana como agente municipal, por contrato de trabajo, desde el 7 de mayo de 2015 hasta el 30 de junio de 2021, en virtud de que ese mismo día se le informó de manera verbal que su contrato ya no sería renovado, lo cual –a su juicio– constituyó un despido injustificado, dado que el cargo no era de confianza y no se tramitó un procedimiento previo a la terminación de la relación laboral en el que se le permitiera ejercer su defensa.

Afirma que se promovió una demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana, conforme con lo regulado en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), quien realizó una serie de prevenciones a la petición; sin embargo, por medio de las decisiones de 9 de septiembre de 2021 y 24 de septiembre de 2021, en la primera, se declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido incoado por el actor, en virtud de la aparente evacuación deficiente de las mismas y dejó a salvo el derecho de interponer nuevamente la solicitud y, en la segunda, declaró improcedente el recurso de revocatoria de la referida inadmisibilidad, debido a que –a criterio del mencionado juzgador– la parte recurrente no determinó la infracción legal cometida, pues se limitó a realizar valoraciones subjetivas sobre los argumentos de la resolución con la que se mostraba inconforme.

Por lo anterior, planteó recurso de revisión ante la Cámara Primera de lo Laboral; no obstante, esta emitió el auto de 23 de diciembre de 2021 en el que declaró su improcedencia por considerar que según el artículo 79 de la LCAM –la ley aplicable al caso– únicamente las sentencias son susceptibles de impugnación mediante ese mecanismo y no la resolución que declaró la inadmisibilidad de la solicitud de nulidad de despido, puesto que respecto de ese tipo de decisión puede intentarse la revocatoria.

Por tal motivo, considera que las autoridades demandadas inobservaron los derechos de acceso a la jurisdicción –como manifestación de la protección jurisdiccional–, seguridad jurídica, estabilidad laboral, audiencia, defensa –estos dos como concreciones del debido proceso– y a recurrir.

II. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. A. La jurisprudencia constitucional –verbigracia, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme con la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

B. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

2. De igual forma, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La procuradora de la parte actora demanda al Alcalde Municipal de Santa Ana por supuestamente ordenar el despido de hecho del interesado sin un procedimiento previo a habérsele informado que no se renovaría su

contrato de trabajo. Asimismo, coloca en el extremo pasivo de su pretensión al Juez de lo Laboral de Santa Ana por declarar inadmisible la demanda de nulidad de despido que interpuso para controvertir tal destitución e improponible el recurso de revocatoria contra dicha decisión. De igual forma, reclama contra la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador por declarar improcedente el recurso de revisión que planteó para impugnar la citada decisión de primera instancia.

Lo anterior, por considerar que se lesionaron los derechos de acceso a la jurisdicción –como manifestación de la protección jurisdiccional–, seguridad jurídica, estabilidad laboral, audiencia, defensa –estos dos como concreciones del debido proceso– y a recurrir, dado que no se concedió la oportunidad a la parte interesada de defenderse en un proceso previo a su despido.

Asimismo, expone que se planteó la "acción de nulidad de despido", habiendo sido declarada inadmisible, en razón de no haberse evacuado debidamente ciertas prevenciones que fueron efectuadas. Por otro lado, sostiene que mediante la decisión de 23 de diciembre de 2021 la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador determinó que "... la resolución que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de despido solo admite recurso de revocatoria...", motivo por el cual declaró improcedente el recurso de revisión que se planteó.

2. A. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCAM, en contra de la destitución aparentemente injusta de la parte peticionaria procede la nulidad de despido, es decir, en la normativa secundaria aplicable existe una vía adecuada para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se afirma fueron conculcados.

Con relación a ello, la jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las sentencias de 13 de marzo de 2015, amparos 82-2012 y 84-2012– ha sostenido que la mencionada nulidad se erige como una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional que se alega en este proceso, puesto que posibilita un mecanismo por medio del cual aquel servidor público municipal que sea despedido sin causa justificada o sin que se le siga el procedimiento correspondiente, puede discutir la afectación que se produce en su esfera jurídica como consecuencia de su separación del cargo.

Por ello, se ha concluido que la nulidad del despido consagrada en el artículo 75 de la LCAM constituye un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC y, por ende, debe verificarse su agotamiento en debida forma.

B. Al respecto, la procuradora de la parte demandante afirma que se presentó demanda de nulidad de despido ante el Juez de lo Laboral de Santa Ana para que dicha autoridad revisara el caso y resolviera lo conveniente; sin embargo, tal y como asevera la mencionada profesional, el aludido

juzgador efectuó en dos ocasiones ciertas prevenciones en virtud de que la defensora pública que participó en representación de la parte actora en dicha sede no había acreditado su personería y porque la pretensión carecía de claridad en determinados aspectos, para lo cual concedió a la parte interesada el término legalmente establecido para dicho efecto, pero –a criterio de esa autoridad– no fueron subsanadas adecuadamente, situación que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad de aquella.

En virtud de ello, se planteó recurso de revisión ante la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador; no obstante, la autoridad de segunda instancia declaró improcedente dicho medio impugnativo, en razón de que esa decisión no admite tal recurso conforme a lo regulado en la ley de la materia.

En ese orden de ideas, es dable colegir que no se agotó en debida forma el medio impugnativo idóneo previsto en la legislación secundaria para controvertir el despido contra el que se reclama en este amparo, debido a que el Juez de lo Laboral de Santa Ana efectuó ciertas prevenciones a la pretensión planteada en sede ordinaria, las cuales no fueron evacuadas satisfactoriamente, aspecto que irremediablemente derivó en su declaratoria de inadmisibilidad.

Y es que, tal y como se indicó en los amparos 49-2010 y 51-2010, la exigencia de agotamiento de los medios impugnativos idóneos como requisito de procedencia del amparo constituye una carga para la parte actora de emplear en tiempo y forma los mismos, lo que implica ineludiblemente *cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de aquellos*, debido a que la inobservancia de dichas circunstancias motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

Por ende, al no verificarse tal situación, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en el artículo 12 inciso 3° de la LPC.

3. Aunado a lo anterior, es importante apuntar que, de lo expuesto en la demanda, se observa que la defensora de la parte demandante únicamente estaría en desacuerdo con lo resuelto por las autoridades judiciales demandadas, pues para evidenciar la trascendencia constitucional de su reclamo sostiene que las prevenciones que el juzgador determinó que no fueron evacuadas, en realidad fueron subsanadas en los términos requeridos y si tal juez consideraba que no se dio una respuesta adecuada debió realizar una nueva prevención. Así, aduce que "... las prevenciones realizadas por el Juez de lo [L]aboral de Santa Ana, no eran indispensables para no admitir la demanda, y dejar de fuera el fondo del asunto y excluir la misma del conocimiento jurisdiccional..." [resaltado suprimido].

De lo anterior, se infiere que lo que se busca es que esta Sala actúe como una nueva instancia de legalidad para revisar dicha situación, es decir, que verifique si la demanda de nulidad de despido que se interpuso en sede ordinaria cumplía o no con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos por el legislador –específicamente si las prevenciones efectuadas fueron debidamente subsanadas– y si era el recurso de revocatoria planteado ante la misma autoridad era o no procedente, así como si la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador debía conocer de la revisión interpuesta, pese a que la LCAM no regula tal medio impugnativo para controvertir la inadmisibilidad de la petición y que para ello se tendría que tomar como parámetro las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, lo cual escapa del catálogo de competencias que le ha sido conferido por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos fundamentales.

Así, la jurisprudencia constitucional ha establecido –por ejemplo, el auto pronunciado en el citado amparo 408-2010– que, en principio, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde, pues ello implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y debe realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De tal forma, la procuradora de la parte actora pretende que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades judiciales demandadas, respecto a si, por un lado, procedía o no tener por subsanadas las prevenciones que fueron efectuadas y, a partir de ello, darle trámite a la demanda de nulidad de despido que se planteó y, por otro, si correspondía o no admitir el medio impugnativo que se presentó para controvertir el rechazo de aquella, es decir que para dilucidar tales alegatos esta Sala tendría que actuar como un tribunal ordinario y verificar, con base en la ley secundaria correspondiente, las circunstancias particulares del caso, lo cual supondría abordar aspectos de mera legalidad que no corresponden a la competencia de este tribunal por no tener transcendencia constitucional.

4. De esta manera, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar los actos cuestionados –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del mecanismo específico franqueado en la legislación secundaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la vulneración constitucional generada por la actuación administrativa que se impugna, concretamente la nulidad de despido que establece el artículo 75 de la LCAM y –por otra– porque el asunto formulado por la parte pretensora respecto de las autoridades judiciales demandadas se reduce a un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con lo resuelto.

En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia del reclamo planteado por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 inciso 3° y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a la abogada CMRC en calidad de defensora pública y en representación del señor DNL, por haber acreditado debidamente la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por la aludida profesional contra el Alcalde Municipal de Santa Ana, departamento de Santa Ana, el Juez de lo Laboral de Santa Ana y la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– debido a que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (cuenta electrónica única registrada en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia) señalado por la procuradora de la parte interesada para recibir los actos procesales de comunicación.

4. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENITEZ—RUBRICADAS—"""

29-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas y veinticinco minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

Tiénese por recibido el escrito firmado por la abogada Nancy Vanessa González Fuentes como defensora pública y representante del señor MEGG, en el que solicita se autorice su intervención en sustitución de la licenciada Rixy Vanessa Cáceres Hasbún, junto con el documento anexo.

Analizados la demanda de amparo presentada por la abogada Cáceres Hasbún, junto con la documentación anexa, así como el escrito de la procuradora González Fuentes, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, la abogada Cáceres Hasbún manifiesta que el actor ingresó a laborar en la Alcaldía Municipal de El Paisnal, departamento de San Salvador, el 18 de marzo de 2014 en el cargo de mesero, desarrollando sus labores en el centro turístico **********. Afirma que el 7 de junio de 2021, cuando el peticionario se presentó a su lugar de trabajo, se le manifestó que no podía ingresar, entregándole el Secretario Municipal una copia del acta número *** que contiene el acuerdo número *** con el que el Concejo Municipal de la referida comuna determinó destituir al señor GG, sin brindarle ningún tipo de explicación y sin entregarle alguna cantidad de dinero en concepto de indemnización.

Sostiene que con el objetivo de impugnar el despido del peticionario, se interpuso una demanda de nulidad de despido ante el Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador, quien el 30 de junio de 2021 efectuó una serie de prevenciones, las cuales no fueron subsanadas en el plazo conferido para ello por concurrir –según su criterio– justo impedimento a su favor; sin embargo, el 16 de julio de 2021 dicha autoridad declaró inadmisible la misma, por lo que se presentó recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, pero el mismo fue rechazado por improcedente el 2 de diciembre de 2021.

En razón de lo expuesto, considera que se lesionaron los derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral –como concreción del derecho al trabajo– del actor.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte pretensora, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. La jurisprudencia constitucional –verbigracia las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos procesales que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía una vez agotada la vía jurisdiccional o administrativa correspondiente.

Así, se ha señalado que la exigencia del agotamiento de los recursos comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales recursos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito mencionado.

En razón de lo anterior, se ha indicado que para la realización del objeto de la pretensión de amparo y para que se dirima la cuestión fundamental planteada, es imprescindible que la parte demandante haya agotado previamente, en tiempo y forma, todas las herramientas idóneas –de naturaleza ordinaria o extraordinaria– para reparar la violación constitucional aducida por la parte agraviada, en otras palabras, aquellas que posibilitan que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación, pues –de no agotarse estas– la pretensión devendría improcedente.

2. Por otro lado, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La abogada Cáceres Hasbún demanda al Concejo Municipal de El Paisnal, departamento de San Salvador, por ordenar la destitución del señor GG mediante el acuerdo número *** contenido en el acta número ***. Asimismo, coloca en el extremo pasivo de su pretensión al Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador por emitir la decisión de 16 de julio de 2021 con la que declaró inadmisible la demanda planteada con la finalidad de impugnar el despido presuntamente de hecho del interesado. Finalmente, reclama contra la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador por el fallo de 2 de diciembre de 2021 con el que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto para controvertir la resolución de primera instancia.

Lo anterior, por considerar que se lesionaron los derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral –como concreción del derecho al trabajo– del demandante.

Para justificar la inconstitucionalidad de las actuaciones apuntadas y, específicamente, para fundamentar la presumible transgresión de los derechos constitucionales del señor GG, la citada profesional aduce que "... el despido realizado a [su] representado es totalmente inconstitucional debido a que la autoridad demandada no tiene ningún respaldo legal para haberlo ordenado, por lo que se advierte que en realidad solo se trata de un despido injustificado [...] se agotó la vía judicial y el Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador [...] declar[ó] inadmisible la demanda por haber transcurrido el término para evacuar prevenciones [...] todas las prevenciones hechas [...] son más que todo para dilatar el proceso y se dio el caso que no pud[o] responder [las mismas] por justo impedimento [...] la Cámara Segunda de lo Laboral [...] rechazó la impugnación de la resolución [...] sin entrar a conocer de[l] fondo sobre el proceso internamente...".

2. A. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), en contra de la destitución aparentemente injusta del peticionario procedía la nulidad de despido, es decir, la normativa secundaria aplicable prevé un mecanismo para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se afirma le fueron conculcados al interesado.

Con relación a ello, la jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las sentencias de 13 de marzo de 2015, amparos 82-2012 y 84-2012– ha sostenido que la mencionada nulidad se erige como una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional que se alega en este proceso, puesto que posibilita un mecanismo por medio del cual aquel servidor público municipal que sea despedido sin causa justificada o sin que se le siga el procedimiento correspondiente, puede discutir la afectación que se produce en su esfera jurídica como consecuencia de su separación del cargo.

Por ello, se ha concluido que la nulidad del despido consagrada en el artículo 75 de la LCAM constituye un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC y, por ende, debe verificarse su agotamiento en debida forma.

B. Al respecto, la abogada Cáceres Hasbún afirma que se presentó demanda de nulidad de despido ante el Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador para que dicha autoridad revisara el caso y resolviera lo pertinente; sin embargo, tal y como asevera la mencionada profesional, el aludido juzgador efectuó ciertas prevenciones en virtud de que la pretensión carecía de claridad en determinados aspectos, para lo cual concedió a la parte interesada el término de tres días hábiles, pero no fueron subsanadas en el plazo concedido, situación que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad de aquella.

A consecuencia de ello, se planteó recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador; no obstante, la autoridad de segunda instancia rechazó el mismo, en vista de que la decisión cuestionada no admitía su interposición según la normativa aplicable.

En ese orden de ideas, es dable colegir que no se agotó en debida forma el medio impugnativo idóneo establecido en la legislación segundaria para controvertir el despido que se reclama en este amparo, debido a que el Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador realizó ciertas prevenciones a la pretensión planteada en sede ordinaria, las cuales no fueron evacuadas oportunamente, aspecto que irremediablemente derivó en su declaratoria de inadmisibilidad.

Y es que, tal y como se indicó en los amparos 49-2010 y 51-2010, la exigencia de agotamiento de los medios impugnativos idóneos como requisito de procedencia del amparo constituye una carga para la parte actora de emplear en tiempo y forma los mismos, lo que implica ineludiblemente cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de aquellos, debido a que la inobservancia de dichas circunstancias motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

Por ende, al no verificarse tal situación, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en el artículo 12 inciso 3° de la LPC.

3. Por otro lado, es menester apuntar que, aun cuando la abogada Cáceres Hasbún afirma que existe transgresión los derechos fundamentales del pretensor, los alegatos empleados únicamente evidencian su inconformidad con las situaciones judiciales señaladas, es decir, con la inadmisibilidad de la demanda planteada para impugnar el despido, así como con el rechazo del recurso de apelación interpuesto para controvertir dicha decisión de primera instancia.

Y es que, sus argumentos están dirigidos, básicamente, a que esta Sala establezca si, conforme a la normativa secundaria respectiva y de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, la demanda presentada en sede ordinaria cumplía o no con los requisitos para ser admitida, así como si el supuesto justo impedimento alegado para no evacuar las prevenciones que le fueron efectuadas concurría o no.

Asimismo, sus alegatos están encaminados a que mediante un proceso de amparo se determine –con base en la legislación de la materia– que la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador tuvo que entrar a conocer del recurso de apelación planteado –en especial, dilucidando si la decisión recurrida era legamente impugnable– y, a partir de ello, revocar el fallo del Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador, todo lo cual no es competencia de este Tribunal.

Así pues, busca que esta Sala establezca que dichas autoridades judiciales debieron –inicialmente en primera instancia y luego en apelación, respectivamente– pronunciarse sobre el fondo de la pretensión y sobre el despido del señor GG, pese a que aparentemente no se reunían los requisitos para interponer las respectivas peticiones.

En otras palabras, la abogada Cáceres Hasbún procura que en sede constitucional se defina, en virtud de los términos fijados por el legislador en la ley secundaria aplicable, si el Juez Tercero de lo Laboral de San Salvador tuvo que, por una parte, tener por acreditado el justo impedimento que se alegó y, por otra, admitir la demanda planteada con el objetivo de controvertir el despido del actor y, a partir de ello, declarar la nulidad del despido de aquel. También, intenta que se determine que la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador no debió rechazar el recurso de apelación interpuesto para reclamar la mencionada decisión de primera instancia –pese a que aparentemente carecía del requisito de impugnabilidad objetiva–, circunstancias que no son parte de la competencia conferida esta Sala, sino aspectos que concierne dilucidar ante las autoridades competentes.

En ese orden de ideas, no le corresponde al ámbito constitucional establecer si las autoridades judiciales demandadas tuvieron que entrar a conocer del fondo de la pretensión planteada ante sus oficios, pues tal actividad implicaría realizar una labor de verificación de la normativa infraconstitucional aplicable al caso concreto, así como una valoración sobre las situaciones fácticas tomadas en cuenta por las autoridades respectivas para arribar a sus decisiones, lo que, a su vez, conllevaría a la arrogación de funciones y atribuciones legalmente establecidas para estas.

4. De esta manera, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar los actos cuestionados –por una parte– por la falta de agotamiento en debida forma del mecanismo específico franqueado en la legislación secundaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la vulneración constitucional invocada, concretamente la nulidad de despido que establece el artículo 75 de la LCAM y –por otra– porque el asunto formulado no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, ya que pretensión carece de relevancia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto que habilita la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a la abogada Nancy Vanessa González Fuentes en calidad de defensora pública en sustitución de la licenciada Rixy Vanessa Cáceres Hasbún y en representación del señor MEGG, por haber acreditado debidamente la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por la abogada Cáceres Hasbún contra el Concejo Municipal de El Paisnal, el Juez Tercero de lo Laboral y la Cámara Segunda de lo Laboral, estos dos de San Salvador, en virtud de –por una parte– la falta de agotamiento en debida forma del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en el artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y –por otra– que la pretensión planteada contra las autoridades judiciales se sustenta en un asunto de mera legalidad y estricta inconformidad, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico –cuenta del Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia– señalado por la abogada González Fuentes para recibir notificaciones.

4. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

343-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda firmada por el abogado Juan Carlos Huezo Ayala en calidad de apoderado del señor SDJOA, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El citado profesional manifiesta que ante el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera se sustanció un proceso ejecutivo contra su mandante, en el que, ante la imposibilidad de emplazarlo en la dirección señalada en la demanda, se requirió a diferentes instituciones que brindaran la dirección de residencia de dicha persona que constara en sus registros. Producto de ello, el Registro Nacional de las Personas Naturales

proporcionó una dirección en los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la Dirección General de Migración y Extranjería, un reporte de movimientos migratorios que constataba que el señor OA había viajado hacia ese mismo país por motivos de residencia.

No obstante, expresa que dicho juzgador ordenó, por decreto de 20 de diciembre de 2018, emplazar al señor OA por medio de edicto, luego de lo cual, al no haber comparecido el demandado, le nombró un curador ad litem para que lo representara en el proceso. Sin embargo, este no presentó oposición a la demanda y, por tanto, se pronunció sentencia de 18 de junio de 2019 condenando a su poderdante a pagar cierta cantidad de dinero en concepto de capital y costas procesales.

Ahora bien, con posterioridad el expediente fue trasladado al conocimiento del Juez de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera (en virtud de Decreto Legislativo número 276 de 21 de marzo de 2019). Este juzgador advirtió que no se había tratado de emplazar al señor OA en la dirección de EE.UU antes de emitir sentencia y, juzgando que ello infringía su derecho de defensa, consideró oportuno –tras argumentar la imposibilidad de anular el emplazamiento y la sentencia en esa etapa procesal– decretar la nulidad de la notificación de la decisión final realizada al curador *ad litem* y ordenar la remisión del exhorto respectivo a fin de procurar que la citada providencia judicial le fuera comunicada personalmente al señor OA.

Una vez fue notificado de dicha sentencia, el requirente se mostró parte en el proceso por medio de apoderado judicial, y alegó –ante el mismo juez de lo civil y mercantil– la nulidad "del proceso ejecutivo", solicitud que el funcionario, mediante auto de 8 de noviembre de 2021, declaró sin lugar debido a que ya existía una sentencia firme.

Debido a esto, el demandante –por medio del abogado Huezo Ayala– recurrió en apelación contra la resolución que declaró sin lugar la nulidad; sin embargo, este recurso fue declarado improcedente por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, a través de auto de 17 de febrero de 2022.

De tal manera, el abogado considera que las actuaciones de los Jueces Segundo de Primera Instancia y de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera han sido arbitrarias, pues –a pesar de ser un hecho evidenciado en el proceso– se obvió emplazar a su representado en la dirección en el extranjero en la cual efectivamente residía. Por tanto, opina que han actuado al margen de lo previsto en la ley, ocasionando que el señor OA no tuviera conocimiento del proceso ni pudiera realizar alegaciones o defenderse.

Así, estima transgredidos el derecho de defensa –como manifestación del debido proceso– y los principios de tipicidad, legalidad y seguridad jurídica de su representado.

II. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. La jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

2. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El abogado Huezo Ayala dirige su reclamo contra el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera y el Juez de lo Civil y Mercantil de esa misma jurisdicción, por la supuesta "falta de emplazamiento" del señor OA dentro del proceso ejecutivo iniciado ante el primero y tramitado luego por el segundo.

Sin embargo, las circunstancias narradas por dicho profesional permiten colegir que el acto susceptible de causar un agravio de naturaleza constitucional en la esfera jurídica del demandante, por tratarse de un acto definitivo –y por tanto, controlable en esta sede–, es la sentencia de 18 de junio de 2019, debido a que la base fáctica de la demanda y la documentación anexa permiten advertir que los argumentos expuestos se orientan a reclamar que esta se haya emitido sin haber emplazado personalmente a su representado y que posteriormente no se haya anulado, pese a que constaba una dirección en el extranjero en donde hacerlo.

Así, dicho profesional explica que el primero de los jueces emplazó por edicto a su mandante y, posteriormente, le nombró un curador *ad litem* para que lo representara en el proceso, obviando que –como resultado de las medidas de localización que el mismo funcionario había ordenado– el señor OA residía en EE.UU. y constaba una dirección en ese país en la cual podía intentarse el emplazamiento de forma personal.

Asimismo, refiere que –una vez tuvo a su cargo la tramitación del proceso respectivo– el juez de lo civil y mercantil mencionado no anuló el juicio ejecutivo, tal como lo pidió el señor OA por medio de su entonces apoderado judicial (una vez le fue notificada la sentencia personalmente en el lugar en que residía), por argumentar dicha autoridad que ya existía una sentencia firme y acceder a lo pedido era contrario a la seguridad jurídica.

2. A. Ahora bien, el análisis de la demanda y documentación anexa permite advertir que lo alegado por el abogado de la parte actora evidencia el incumplimiento del requisito delineado en el romano precedente, pues *respecto a la situación que pretende impugnarse ante esta Sala*, no se agotó el recurso ordinario disponible, dado que la apelación interpuesta ante la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente no se dirigió contra el acto definitivo susceptible de agraviar al señor OA, sino contra el auto simple que declaró sin lugar el incidente de nulidad planteado ante el propio juez de primera instancia.

Al respecto, de acuerdo con los artículos 238, 508 y 469 del Código Procesal Civil y Mercantil, dicha actuación definitiva era susceptible de reparación ante el tribunal de alzada correspondiente y no frente a la misma autoridad que lo pronunció. Y es que, si bien el interesado puede alegar que la situación expuesta en esta demanda le acarreaba un perjuicio, este podría haber sido enmendado directamente mediante el recurso de apelación, mismo que, al tener efecto devolutivo, posibilitaba que, objetiva-

mente, la queja planteada fuera revisada por un tribunal colegiado bajo la jurisdicción de funcionarios distintos, permitiendo –si fuese procedente– retrotraer todo lo actuado al estado en que se encontraba en el momento de incurrirse en el vicio; por tanto, constituía una herramienta idónea que permitía la posibilidad efectiva de subsanación en esa vía de impugnación.

B. En ese marco, esta Sala se ha pronunciado –improcedencia de 4 de diciembre de 2015, amparo 107-2015– en el sentido que resulta necesario exigir a la parte actora que, previo a la incoación del proceso de amparo, *alegue los hechos en que se sustenta la vulneración de derechos fundamentales que arguye en su demanda* en el proceso correspondiente.

Con esto, se otorga a las autoridades que conozcan de un caso concreto y a aquellas ante quienes se interpongan los recursos que deben agotarse previo a incoar la pretensión de amparo, una oportunidad real de pronunciarse sobre la transgresión constitucional que se les atribuye y, en su caso, de repararla de manera directa e inmediata.

Además, se garantiza la aplicación de los principios de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, evitándose que las partes, a pesar de tener conocimiento de la infracción constitucional y contar con la oportunidad procesal de hacerlo, omitan alegarla en sede ordinaria, con el objetivo de conseguir, en el supuesto de que las decisiones adoptadas en esa sede les sean desfavorables, la anulación de dichos pronunciamientos por medio del amparo y, con ello, la dilación indebida del proceso o procedimiento.

C. En conclusión, la apelación interpuesta por el abogado Huezo Ayala ante la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente no podría considerarse como un cumplimiento del requisito expuesto, pues no fue dirigida en contra del acto definitivo capaz de ocasionar perjuicio al demandante de este amparo. En ese sentido, no cabría admitir la demanda de amparo para tratar de ventilar aspectos que debieron alegarse ante la instancia correspondiente, permitiendo que esta reparase la supuesta lesión, pues ello resulta ser contrario al carácter subsidiario y extraordinario de este tipo de proceso, tal como se expresó en la sentencia de 6 de febrero de 2013, amparo 477-2010.

3. Así, en este caso es posible advertir la existencia de un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide el conocimiento y decisión sobre el fondo del reclamo interpuesto, pues se ha omitido agotar el mecanismo específico franqueado en la legislación ordinaria que posibilitaría de forma efectiva la discusión y subsanación de la infracción presuntamente generada por la actuación impugnada, siendo pertinente la terminación anormal de este amparo mediante la figura de la improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* al abogado Juan Carlos Huezo Ayala en calidad de apoderado del señor SDJOA, por haber acreditado debidamente la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el abogado Huezo Ayala en calidad de apoderado del señor OA contra el Juez Segundo de Primera Instancia y el Juez de lo Civil y Mercantil, ambos de San Francisco Gotera, por la falta de agotamiento del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración alegada, específicamente el recurso de apelación previsto en los artículos 508 y 469 del Código Procesal Civil y Mercantil.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de los medios técnicos –números de telefax y cuenta del Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia– señalados por el abogado de la parte actora para recibir los actos procesales de comunicación, así como de la persona comisionada para tal efecto.

4. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

23-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibido el escrito firmado por el abogado **********, en carácter de apoderado judicial de la sociedad Vuela Aviación, Sociedad Anónima, Sucursal El Salvador (Vuela Aviación, S.A., Sucursal El Salvador o Volaris), en el cual señala lugar y medio técnico para recibir notificaciones por haberlo omitido en su demanda.

Analizada la demanda de amparo suscrita por el aludido apoderado contra el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo, ambos de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), junto a la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El abogado de la sociedad peticionaria expone que el 10 de julio de 2018 la AAC –por medio de su Director Ejecutivo– inició un procedimiento sancionador en contra de su representada. Sin embargo, afirma que el acto de notificación del auto emitido ese día adolecía de nulidad ya que no se entregaron copias de la documentación esencial para ejercer el derecho de defensa; asimismo, consideró que se vulneraron el principio de legalidad,

así como el debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, razón por la que su poderdante planteó oposición a la apertura del procedimiento mediante escrito de 24 de julio de 2018.

No obstante, el Director Ejecutivo de la AAC resolvió continuar con el trámite y abrió a pruebas. Al estar inconforme, Volaris formuló un recurso de revocatoria contra el referido auto, el cual fue declarado improcedente, por lo que presentó escrito de apelación. Dicho medio impugnativo fue declarado sin lugar por el Consejo Directivo de la AAC y por ende se confirmó la resolución cuestionada.

Además, sostiene que el 16 de octubre de 2018 el Director Ejecutivo de la AAC emitió la resolución definitiva en el procedimiento sancionador sin haberse agotado el procedimiento administrativo, irrespetando el término de prueba en el que su mandante hubiera podido ejercer su derecho de defensa. Mediante dicha decisión se sancionó a su representada con dos multas por las siguientes infracciones: *i)* por no seguir las rutas aéreas ni aterrizar en los aeropuertos de acuerdo con lo fijado en el permiso de operación y el plan de vuelo y *ii)* por realizar operaciones de transporte aéreo sin contar con la autorización respectiva.

En ese orden, relata que Volaris presentó recurso de revocatoria en el que alegó "... ilegalidades respecto de la vulneración al procedimiento legal y constitucionalmente establecido para la aportación de pruebas...", pero fue declarado improcedente y se confirmó la decisión impugnada. Al continuar inconforme, planteó recurso de apelación el 14 de noviembre de 2018 ante el Director Ejecutivo de la AAC, a través de un escrito que fue presentado en tiempo y forma; sin embargo, la persona encargada de recibir los escritos ya se había retirado antes de la hora de salida –15:52 horas–, por lo que se dejó en la ventanilla continua a efecto de que fuera entregado al referido funcionario. Dichas circunstancias fueron plasmadas en un acta ante un notario que lo acompañaba y que se encontraba en el estacionamiento de dicha institución.

Pese a que afirma que el recurso fue debidamente presentado, en virtud de proveído de 27 de noviembre de 2018 fue declarado inadmisible por el Consejo Directivo de la AAC por extemporáneo, lo cual "... no es cierto, puesto que en su misma resolución expone las declaraciones de los empleados de la AAC [...], quienes entre otras circunstancias expresan que [...] efectivamente [se] present[ó] en la instalaciones de la AAC y [...] dej[ó] en su poder el escrito que [...] mediante memorándum [...] de fecha [16] de noviembre de [2018], lo remitieron al Director Ejecutivo...".

En ese orden, estima que el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo, ambos de la AAC, han vulnerado los derechos a recurrir, de defensa, audiencia y seguridad jurídica, así como el principio de proporcionalidad.

Y es que, sostiene que la decisión mediante la cual se sancionó a su mandante "...[n]o describe la infracción, no fundamenta la sanción y solo aplica las multas por las supuestas infracciones en las disposiciones legales señaladas..."; asimismo, asegura que se le está aplicando doblemente una multa por un mismo hecho.

De igual manera, alega que la resolución de 27 de noviembre de 2018 que declaró inadmisible el recurso de apelación por extemporáneo carece de razonabilidad pues "... está basada sobre hechos que la autoridad demandada [...] da por ciertos y que no reflejan la verdad material de lo sucedido...".

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora, corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se emitirá.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuesto lo anterior, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas por la parte actora.

1. En síntesis, el apoderado de Volaris sostiene que la AAC ha vulnerado los derechos de defensa, audiencia, a recurrir y a la seguridad jurídica de su representada, así como el principio de proporcionalidad, en virtud de que se le impuso una doble sanción por los mismos hechos sin fundamentarse la tipificación de la infracción ni la multa impuesta. Además, alega que en el procedimiento que se instruyó en contra de su mandante se irrespetó el término probatorio y su oportunidad de recurrir.

En ese orden, se advierte que los señalamientos que expresa el procurador de la sociedad actora se resumen en cuatro puntos: *i)* la presunta imposición de dos sanciones por un mismo hecho, *ii)* la falta de fundamento respecto a las infracciones que se le atribuyeron y sus respectivas sanciones, *iii)* el supuesto irrespeto al plazo probatorio y *iv)* el rechazo al recurso de apelación por extemporáneo pese a haberlo presentado en tiempo y forma.

2. En cuanto a la posible doble sanción por el mismo hecho, de lo expuesto en la demanda, así como en la documentación anexa se observa que el 28 de junio de 2018 el Encargado de Delegados Aeroportuarios informó que Volaris poseía permiso de operación por parte de la AAC del 1 de abril al 31 de mayo de 2018 para la ruta San José, Costa Rica –San Salvador, El Salvador–Cancún, México y viceversa (SJO/SAL/CUN/SAL/SJO); sin embargo, de acuerdo con el referido informe, la sociedad actora realizó operaciones no autorizadas por la AAC y voló la ruta Cancún, México–San Salvador, El Salvador y viceversa (CUN/SAL/CUN).

En ese orden, la AAC estableció en su resolución que el procedimiento sancionador se había instruido con base en los artículos 192 número 1 letras e) y g) de la Ley Orgánica de Aviación Civil, en los que se sanciona con multa "[n]o seguir las rutas aéreas ni aterrizar en los aeropuertos de acuerdo con lo fijado en el permiso de operación y el plan de vuelo" y "[r]ealizar operaciones de transporte aéreo sin contar con la autorización respectiva", respectivamente.

En tal sentido, la autoridad demandada tramitó el aludido procedimiento en virtud de que Volaris no respetó la ruta autorizada de conformidad con el permiso de operación concedido y efectuó vuelos durante el mes de junio de 2018 cuando el permiso vencía el 31 de mayo de ese año –de conformidad con la documentación anexa–.

En cuanto al primer punto, se sostuvo que a la sociedad actora se le había otorgado la referida autorización para operar una ruta determinada; sin embargo, decidió operar otra ruta, omitiendo aterrizar en Costa Rica.

De este modo, el Director Ejecutivo de la AAC concluyó que las acciones de la sociedad actora se adecuaban a dos infracciones tipificadas por la ley secundaria: por un lado, continuar volando, pese a que el permiso estaba vencido y, por otro, realizar una ruta distinta a la que había sido autorizada.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que para que opere la prohibición a la doble persecución, sanción o juzgamiento debe concurrir una triple identidad en los elementos que conforman las pretensiones que se analizan: *(i) eadem personara* –identidad personal–, el cual indica que la persona procesada y juzgada por la acción u omisión que se atribuye sea la misma, lo que conlleva una referencia estrictamente personal y sólo puede amparar a la persona natural o jurídica que ya ha sido perseguida; *(ii) eadem res* –identidad en el objeto–, implica que hechos idénticos y correspondientes al mismo periodo son incapaces de dar lugar a dos diferentes procedimientos sancionadores, por lo que tal cuadro fáctico ya no puede ni debe ser objeto de un nuevo enjuiciamiento, independientemente de la calificación jurídica o *nomen iuris* en que pretenda subsumirse; y *(iii) eadem causa petendi* –identidad en el fundamento–, supone que debe tratarse del mismo motivo por el cual se juzga y con ello se hace referencia al mismo objetivo final del proceso.

De este modo, si concurre la misma causa de infracción administrativa, corresponde declarar la identidad, por cuanto se trata del mismo motivo de juzgamiento –sentencias de 2 de diciembre de 2011 y 13 de febrero de 2015, habeas corpus 94-2009 e inconstitucionalidad 21-2012, respectivamente–; a los cuales deben de agregarse como elementos integradores de esta garantía: que se trate de un proceso válido y que haya recaído resolución de carácter definitivo.

En ese orden, no se advierte una posible inobservancia a la prohibición de doble juzgamiento, pues no se evidencia una identidad en la causa, ya que la autoridad demandada razonó cada una de las infracciones cometidas por la sociedad actora las cuales no derivan de los mismos motivos. Y es que, de la lectura de la demanda y la documentación anexa se deduce que las multas tuvieron fundamentos fácticos perfectamente delimitados, de lo que no se colegiría la concurrencia de una doble persecución por un mismo hecho.

En virtud de lo expuesto, el argumento referente al quebrantamiento a la mencionada garantía tendrá que ser descartado por no evidenciarse un presunto agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de la sociedad actora.

3. En cuanto a la supuesta falta de fundamento respecto a las infracciones que se le atribuyeron a la sociedad actora y sus respectivas sanciones, tal como se advirtió en el apartado anterior, se observa que el Director Ejecutivo de la AAC expuso los razonamientos en los que sustentó la comisión de las infracciones imputadas y las multas impuestas.

Es decir, de la lectura de las actuaciones impugnadas no se infiere la ausencia de fundamentación por parte de la autoridad cuestionada por lo que conocer del caso planteado conllevaría a revisar si, de acuerdo con el cuadro fáctico y las pruebas aportadas al procedimiento, se acreditaron las infracciones atribuidas a la sociedad actora, de lo que no se logra evidenciar la posible afectación constitucional que pretende alegar el abogado de la sociedad actora.

En tal sentido, deberá rechazarse este argumento de la sociedad peticionaria por no reflejar una posible vulneración a derechos constitucionales de esta, más bien, se observa que el abogado de Volaris estaría inconforme con el fundamento y contenido de lo resuelto por las autoridades demandadas por ser contrario a los intereses de su mandante.

4. Respecto al alegato del supuesto irrespeto al plazo probatorio, de la documentación anexa a la demanda se observa que, mediante resolución de 9 de agosto de 2018, el procedimiento se abrió a pruebas. En ese período el apoderado de la sociedad peticionaria presentó recurso de revocatoria contra ese mismo auto y, posteriormente, un recurso de apelación contra la decisión que rechazó el primer medio impugnativo. En dichos recursos

alegó que se le había entregado de forma incompleta la documentación que sustentaba el inicio del procedimiento. Sin embargo, el Consejo Directivo de la AAC sostuvo que el expediente administrativo siempre estuvo a disponibilidad de la sociedad y que su apoderado nunca lo solicitó.

Asimismo, en la resolución de 7 de noviembre de 2018, en la que el Director Ejecutivo de la AAC declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra la decisión definitiva, dicha autoridad señaló que el procedimiento se abrió a pruebas por ocho días hábiles "... para que el Licenciado Campos Sánchez, presentara las pruebas que considerara pertinentes en el [...] proceso administrativo sancionador, por lo que al transcurrir dicho plazo y no presentar prueba alguna, esta [a]utoridad dicta resolución...".

En tal sentido, se infiere que la sociedad peticionaria utilizó el término probatorio para cuestionar las decisiones que había tomado el Director Ejecutivo de la AAC con relación al inicio del procedimiento sancionatorio, pero –aparentemente– no planteó argumentos ni aportó medios de prueba que contradijeran las imputaciones que se le efectuaban.

En ese orden, no se logra observar una posible conculcación a los derechos fundamentales de la parte actora, ya que de la lectura de la documentación agregada al presente amparo se aprecia que la sociedad peticionaria tuvo la posibilidad de acceder al expediente, plantear sus alegatos de defensa y presentar las pruebas que hubiese estimado pertinentes y conducentes, por lo que esta parte de su planteamiento tendrá que ser declarado improcedente por carecer de sustento en un agravio de naturaleza constitucional.

5. Por último, con relación al rechazo al recurso por extemporáneo, pese a que de acuerdo con el abogado Campos Sánchez este se presentó en tiempo y forma, es preciso recapitular que en la resolución de 27 de noviembre de 2018 el Consejo Directivo declaró inadmisible la apelación en virtud de que esta "...se presentó fuera del horario hábil de la Institución y no presentó el escrito a través del canal oficial de recepción de documentos de la Institución...".

Sin embargo, el procurador de la sociedad demandante asegura que dicha decisión carece de razonabilidad que ya que "... está basada sobre hechos que la autoridad demandada [...] da por ciertos y que no reflejan la verdad material de lo sucedido...".

En ese orden, para dilucidar el argumento de la parte actora se tendría que examinar la documentación presentada por el referido profesional, así como los fundamentos de la decisión emitida por el Consejo Directivo de la AAC como si este tribunal se tratara de una instancia superior de revisión de la legalidad de lo actuado por las autoridades administrativas. Además, se denota que conocer del mencionado planteamiento conllevaría a dilucidar la posible falsedad de la información que consta en el expediente

administrativo, toda vez que esta –aparentemente– no coincidiría con la visión de la parte actora y que incluso fue documentada en un instrumento notarial, situación que no le compete verificar o resolver a esta Sala.

Con relación a lo señalado, tal como se indicó en el citado amparo 408-2010, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a las leyes que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde, pues esto implicaría la irrupción de potestades que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben ejercerse por los jueces y tribunales ordinarios y las autoridades administrativas.

En virtud de ello, el planteamiento expuesto por la parte actora escapa de las atribuciones de esta Sala, pues la interpretación y aplicación que realicen las autoridades de las leyes dentro de sus competencias está fuera de su alcance funcional. De este modo, analizar si se siguieron los cauces y los plazos legales para la presentación de un recurso o si se incurrió en alguna falsedad con relación a su forma y momento de interposición no es un asunto que concierne desentrañar a este tribunal, pues se trata de una cuestión de mera legalidad que debe dilucidarse desde la perspectiva de la normativa secundaria.

6. En ese orden, los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad actora sobre las actuaciones de las autoridades de la AAC no evidencian una probable conculcación de derechos fundamentales; más bien, se basan en aspectos de mera legalidad que no están dentro del ámbito competencial de esta Sala, pues no se infiere la trascendencia constitucional del asunto planteado. En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

IV. Por otra parte, se advierte que el abogado Campos Sánchez ha señalado números de fax y de teléfono, así como un correo electrónico para recibir notificaciones.

Con relación a los medios indicados por la parte actora, es preciso acotar que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un Sistema de Notificación Electrónica y elartículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en el proceso de amparo– dispone que "... [e]l demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad...".

Así, respecto al número de teléfono consignado, se advierte que dicho mecanismo no permite registrar por escrito la recepción de las notificaciones efectuadas, por lo que no podría ser utilizado para el fin señalado.

En cuanto al correo señalado, pese a que no existe constancia que este se encuentre registrado en el Sistema de Notificación Electrónica, se deberá tomar nota de ese medio técnico para recibir actos de comunicación, a fin de garantizar el derecho de audiencia a la parte actora; de igual forma se tendrá por proporcionado el número de fax para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda suscrita por abogado **********, en calidad de apoderado judicial de la sociedad Vuela Aviación, Sociedad Anónima, Sucursal El Salvador, contra el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Autoridad de Aviación Civil, por las supuestas vulneraciones a los derechos a la seguridad jurídica, a recurrir, de audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso–, así como del principio de proporcionalidad, en virtud de tratarse de un asunto de mera legalidad, al no evidenciarse de sus argumentos la existencia de un agravio constitucional, sino más bien una mera disconformidad con lo resuelto por ser contrario a los intereses de su representada.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de los medios técnicos (correo electrónico y número de fax) indicados por la parte demandante para recibir notificaciones.

3. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

251-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito remitido vía correo electrónico por el abogado Rubén Aníbal Blanco Vásquez en calidad de apoderado del señor MAVE, mediante el cual subsana las prevenciones efectuadas.

Analizada la demanda y el escrito antes relacionado, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En primer lugar, debe tomarse en cuenta que el aludido escrito ha sido presentado mediante correo electrónico por el citado profesional.

Esta Sala sostuvo, por ejemplo, en las resoluciones de 26 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2020, pronunciadas en el hábeas corpus 148-2020 y el amparo 167-2020, respectivamente, que en aquel momento se habían

emitido una serie de decretos ejecutivos y legislativos que contenían limitaciones a la libertad de circulación y que regulaban que todos los habitantes del territorio de la República debían guardar cuarentena domiciliar obligatoria, salvo excepciones.

A consecuencia de las medidas establecidas, existía una probabilidad real de que las personas no pudieran presentar sus demandas y escritos materialmente en la Secretaría de esta Sala tal como lo prevé la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); sin embargo, la restricción para el libre tránsito no debía representar un obstáculo para tutelar de forma efectiva sus derechos fundamentales, pues ello es exigencia del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 Cn.–.

Por tanto, esta Sala dispuso que mientras se mantuvieran las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia generada por el Covid-19, serían analizadas las demandas –y sus respectivos escritos– remitidas por los ciudadanos al correo electrónico institucional de esta Sala, debiendo asegurar los peticionarios el correcto envío de aquellas, conforme a las demás exigencias formales que establece la LPC y en observancia de los plazos establecidos en esta. La Secretaría de esta Sala confirmaría la recepción de las peticiones y se encargaría de su trámite posterior.

II. En síntesis, el representante del demandante manifiesta que promueve el presente proceso de amparo contra el Concejo Municipal de Acajutla del departamento de Sonsonate, por la presunta terminación arbitraria de la relación laboral de su mandante con dicha municipalidad, ordenada por medio del acuerdo número ***, consignado en el acta número *** de 26 de abril de 2022.

Para fundamentar su reclamo relata que el interesado comenzó a laborar para la mencionada municipalidad el 1 de mayo de 2021 como jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de la citada Alcaldía. No obstante, el 2 de mayo de 2022 se le informó que se había decidido la terminación de su vínculo laboral por la supuesta falta de idoneidad en el ejercicio del cargo.

Asevera que esa decisión se adoptó sin que se siguiera un procedimiento previo en el que se garantizaran los derechos al demandante, pese a que las funciones que ejercía eran de carácter regular y continuo dentro de la municipalidad. Asimismo, expresa que su representado no recibió ninguna indemnización, ni firmó un finiquito en el que liberara de responsabilidad a la autoridad demandada.

En cuanto al agotamiento de los recursos, el procurador del demandante sostiene que "no existe uniformidad de criterios" [mayúsculas suprimidas] respecto a si el cargo de jefe de la UACI es un cargo de confianza o no, por lo que decidió acceder directamente a la protección de esta Sala a través del proceso de amparo.

Por todo lo antes señalado, aduce que se han vulnerado los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral –como manifestación del derecho al trabajo– del pretensor.

III. Determinado lo anterior, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

1. La jurisprudencia constitucional –por ejemplo, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la LPC. Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme con la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

2. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

IV. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El abogado del pretensor dirige su reclamo contra el Concejo Municipal de Acajutla, en virtud de haber ordenado el despido de este. Para justificar la inconstitucionalidad de la actuación apuntada y, específicamente, para fundamentar la presumible transgresión de derechos fundamentales, aduce que su patrocinado fue separado del cargo que ejercía en la relacionada municipalidad sin que previo a ello se tramitara un procedimiento en el que se garantizaran sus derechos y en el que se posibilitara su defensa, lo cual provocó la transgresión de los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral –como manifestación del derecho al trabajo–.

Asimismo, manifiesta que ha promovido el proceso de amparo de manera directa, en virtud de que su mandante se desempeñaba como jefe de la UACI y considera que "no existe uniformidad en [la] jurisprudencia en cuanto a si [ese] cargo es de confianza o no..." (mayúsculas suprimidas).

2. Al respecto, de conformidad con la sentencia de 13 de marzo de 2015, amparo 82-2012, la nulidad de despido regulada en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM) se considera una vía idónea y eficaz para subsanar eventuales lesiones de los derechos fundamentales de los servidores públicos municipales que hayan sido separados de sus cargos sin la tramitación del proceso regulado en la aludida ley. Por ello, su exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC y, por ende, al no verificarse tal circunstancia, la queja planteada no cumplirá con uno de los requisitos necesarios para la eficaz configuración de la pretensión de amparo.

En consecuencia, a partir del referido pronunciamiento, resulta necesario exigir a la parte actora que, previo a la incoación del proceso de amparo, haya alegado ante la autoridad competente los hechos en los que se sustenta la vulneración de derechos fundamentales que arguye en su demanda, pues con dicha exigencia se garantiza el carácter subsidiario y extraordinario del proceso de amparo.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, los jueces con competencia para conocer del proceso de nulidad de despido regulado en la LCAM deberán atender, tanto para determinar su competencia objetiva como para resolver el fondo de la pretensión planteada, los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta Sala respecto al derecho a la estabilidad laboral regulado en el artículo 219 de la Cn. y, con base en dichos parámetros, analizar las funciones específicas que desempeñaba el servidor público municipal destituido, a efecto de determinar si el cargo que ocupaba era o no de confianza.

Asimismo, las cámaras que conocen en segunda instancia de los procesos tramitados de conformidad con el mencionado cuerpo legal son competentes para analizar, al resolver los recursos que se les planteen, si el juez ante quien se presentó la demanda tenía competencia para conocer del asunto y si el cargo que desempeñaba el servidor municipal era o no de confianza.

En efecto, las referidas cámaras tienen un papel fundamental en la protección de los derechos de acceso a la jurisdicción y a la estabilidad laboral de dichos servidores públicos, ya que, por una parte, al resolver el recurso de apelación previsto en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil –el cual, como se indicó en el considerando II.1 de la citada sentencia con referencia 82-2012, procede contra las decisiones de los jueces de primera instancia en las que se declaren incompetentes–, pueden ordenar a los jueces de lo laboral que den el trámite correspondiente a las demandas cuando estas hayan sido rechazadas debido a una errónea interpretación del artículo 2 número 2 de la LCAM; y, por otra, al conocer el recurso de revisión previsto en el artículo 79 de la LCAM, tienen la posibilidad de brindarle al servidor público municipal la tutela que le permita conservar su empleo, siempre que ello resulte acorde con la jurisprudencia que esta Sala ha desarrollado en relación con el contenido del artículo 219 de la Cn.

4. Ahora bien, en este caso particular, no es atendible el alegato expuesto por el representante del actor, respecto a la supuesta inexistencia de uniformidad de los criterios jurisprudenciales relativos a si el cargo de jefe de la UACI es de confianza o no, ya que como se apuntó en los párrafos que anteceden, debió haber utilizado la nulidad del despido para conseguir aquel fin –determinar si su cargo era de confianza o no y si está incluido en la carrera administrativa municipal–. De lo expuesto, se infiere que, desde un punto de vista objetivo, las circunstancias que esboza el interesado no lo eximen del agotamiento previo y completo de los mecanismos que la normativa correspondiente le confiere.

5. En consecuencia, la nulidad del despido prevista en la LCAM se perfila como un medio impugnativo cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC; por ende, al no verificarse tal circunstancia, es decir, el agotamiento del relacionado medio impugnativo, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que encuentra asidero en la precitada disposición.

En atención a lo expuesto, es posible advertir en el presente caso la existencia de un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide el conocimiento y decisión sobre el fondo del reclamo formulado, pues se ha omitido agotar mecanismos específicos franqueados en la legislación ordinaria que posibilitarían la discusión y posible subsanación de

la vulneración constitucional generada por la actuación que se impugna, siendo pertinente la terminación anormal del presente amparo a través de la figura de la improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el abogado Rubén Aníbal Blanco Vásquez en calidad de apoderado del señor MAVE contra el Concejo Municipal de Acajutla, departamento de Sonsonate, por la falta de agotamiento del medio impugnativo franqueado en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada, específicamente, la nulidad de despido prevista en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

114-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cinco minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda firmada por elt abogado Boris Romeo García Alvarado, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado de la sociedad Rectex de El Salvador. Sociedad Anónima de Capital Variable, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El citado abogado manifiesta que la sociedad peticionaria (Rectex) fue demandada ante el Juez Quinto de lo Laboral de San Salvador por un trabajador que le reclamaba indemnización por despido injustificado; dicho juzgador pronunció sentencia el 6 de abril de 2021 desestimando la excepción de abandono de labores que se interpuso y condenando a su patrocinada al pago de determinada suma en concepto de prestaciones laborales. Inconforme, Rectex apeló esa resolución, pero la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador (la Cámara) la confirmó mediante sentencia de 4 de marzo de 2022.

Sobre esto, dice que el juez emitió su sentencia realizando una aplicación automática de ciertas presunciones legales, sin acompañarlas de otros medíos probatorios que permitieran llegar a una conclusión objetiva; en ese sentido, tuvo por acreditados los extremos de la demanda planteada por el trabajador —relación laboral, condiciones contractuales y despido

injustificado— con base en el contenido de los artículos 347 del Código Procesal Civil (CPCM) y 414 del Código de Trabajo (CT), es decir, mediante una aceptación tácita de los hechos, fundamentada en la incomparecencia del representante legal de la parte patronal para rendir declaración de parte contraria.

Además, considera que la valoración de la prueba expuesta en la sentencia carece de fundamentación, pues al analizar uno de los testimonios ofertados por el trabajador, el juzgador solo mencionó que lo hizo de acuerdo con las reglas de la sana crítica, obviando expresar cuál de ellas utilizó específicamente, lo que, en su opinión, ocasiona que no sea posible conocer el proceso mental que le permitió llegar a la convicción real de lo sucedido.

En el caso de la Cámara, esta restó valor a los testimonios aportados en el juicio, tanto por el trabajador como por el patrono y, además, también tuvo por probados los extremos de la demanda mediante la sola aplicación de las presunciones legales señaladas, por lo que pronunció su sentencia. —que confirmó la condena de primera instancia— sin fundamentarse en ninguna otra prueba, lo que sería contrario al principio de razón suficiente, como parte integrante de la lógica, y al criterio expresado por esta Sala, que—dice— ya se ha pronunciado en el sentido de que la aceptación tácita de los hechos no puede aplicarse de forma automática por los juzgadores.

Por lo expuesto, considera infringidos los derechos a la seguridad jurídica, defensa — como manifestación del debido proceso— y a una resolución de fondo motivada y congruente —como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional— de la solicitante.

II. Determinados los argumentos de la parte demandante, corresponde en este apartado expresar brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de cuestiones puramente judiciales o administrativas consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El abogado García Alvarado reclama contra: *i)* la sentencia pronunciada el 6 de abril de 2021 por el Juez Quinto de lo Laboral de San Salvador, mediante la cual se desestimó la excepción opuesta y condenó a Rectex al pago de indemnización por despido injustificado y *ii)* la sentencia emitida el 4 de marzo de 2022 por la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador, en el recurso de apelación correspondiente, mediante la cual confirmó la resolución condenatoria de primera instancia.

En ese sentido, sustancialmente, refiere que ambos tribunales arribaron a la conclusión de condenar a la referida sociedad por medio de una errónea valoración de la prueba y una errónea aplicación de los artículos 347 del CPCM y 414 del CT, ya que tuvieron por probado el despido injustificado basándose únicamente en la incomparecencia del representante legal de Rectex a rendir declaración de parte contraria, estimándola como una aceptación tácita de los hechos atribuidos a la sociedad, sin considerar que fuera de esa única circunstancia aislada, no existían elementos suficientes para acreditar los extremos de la demanda. Adicionalmente, alega que el juez de lo laboral no motivó su sentencia respecto a la valoración de la prueba testimonial de cargó, impidiendo de esa forma conocer las razones que lo llevaron a resolver en la forma en que lo hizo.

2. Partiendo del análisis de la demanda se observa que, Si bien el abogado firmante ha aseverado que existe una transgresión a los derechos fundamentales de la sociedad peticionaria, los alegatos que formula únicamente evidencian: la inconformidad que posee con, el. contenido de las resoluciones que se impugnan. Y es que su pretensión implicaría ineludiblemente que esta Sala revise la valoración de la prueba y determine si ciertas presunciones legales resultaban aplicables al caso concreto a efectos de tener por establecido el despido injustificado del trabajador, lo cual conllevarla, imbíbitamente; el análisis de la interpretación de los elementos probatorios realizada por las autoridades demandadas.

Así, en último término, la pedido supondría que este Tribunal se pronuncie sobre la procedencia legal de la terminación de un contrato de trabaja y sobre la concurrencia de responsabilidad patronal, ello mediante un contraste —a la luz de la ley aplicable— de los razonamientos del mencionado abogado (que considera que las presunciones establecidas en los artículos 347 del CPCM y 414 del CT no resultaban aplicables al caso y que -si la prueba se hubiera valorado de la forma en que expone en su demanda, la conclusión de los tribunales hubiera sido distinta) y los de las autoridades demandadas (que, basadas en las circunstancias particulares del caso y en la ley aplicable, interpretaron que la aplicación de las mencionadas presunciones eran pertinentes en el caso analizado y que la excepción opuesta por el patrona no era estimable).

Ahora, aunque el abogado García Alvarado justifica parte de su reclamó en que- el juez de lo laboral presuntamente no, motivó la valoración de la prueba testimonial ofertada por su contraparte, de la documentación anexa a su demanda se evidencia que este sí expuso las razones por las que dio fe a dicho testimonio (diciendo, de manera sucinta, que la testigo podía dar fe de la relación laboral pues también trabajaba para Rectex, además, que —en razón de su cargo— podía conocer las condiciones de trabajo del demandante y que, respecto de la. fecha del despido, su dicho le resultaba creíble porque se encontraba en el lugar y escuchó cuando este ocurrió).

En tal sentido no puede pretender asimilar la *ausencia* de motivación en la sentencia, con, la *inconformidad* que le causan los fundamentos expuestos en ella o. la forma en que se expusieron; y es que resulta evidente en esta etapa liminar que la queja no se refiere. a la falta de motivación en la valoración de la prueba testimonial cargo, sino a su desacuerdo con las razones, del juez para darle fe.

De este modo, para atender los reclamos del abogado García Alvarado, este Tribunal tendría que sustituir en sus funciones a la jurisdicción ordinaria, esto es, entrar a valorar la legislación secundaria en relación con las circunstancias planteadas, lo que se constituye en una cuestión de eminente aplicación e interpretación de las leyes comunes; con lo cual se estaría desnaturalizando el proceso de amparo al pretender utilizarlo como un mecanismo para revisar la legalidad de los actos reclamados y no como el medio para la subsanación de presuntas lesiones a derechos fundamentales.

3. Acerca de lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo expresado por esta Sala *-v. gr.* la citada improcedencia del amparo 408-2010- en cuanto a que el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen respecto a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les concierne.

De tal forma, este tribunal no es competente para declarar sí resultaban estimables o no las causales de terminación del contrato laboral alegadas por el trabajador y tampoco le corresponde pronunciarse sobre el mérito otorgado por las autoridades demandadas a los medios probatorios o sobre la aplicación de presunciones legales en un proceso judicial, ya que ello se enmarca -en principio- dentro de las facultades legales de la jurisdicción ordinaria.

Así pues, los alegatos señalados para justificar la supuesta inconstitucionalidad de las resoluciones emitidas por los tribunales demandados no logran evidenciar la presunta lesión de los derechos fundamentales invocados, sino una mera inconformidad con los fundamentos expuestos por las mencionadas autoridades para estimar la pretensión del trabajador y para confirmar dicha decisión en alzada.

En ese sentido, los argumentos del mencionado abogado están orientados a que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades señaladas, tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuyo conocimiento escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala, por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

4. Así, el reclamo formulado en este caso no corresponde al conocimiento de este Tribunal, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

En razón de lo anterior, esta Sala no se encuentra habilitada -dentro de su marco de actuación- para revisar, con base en las disposiciones legales de la materia y las particularidades del supuesto planteado, la decisión de tener por terminado un contrato de trabajo por las causas alegadas por el trabajador y condenar a la parte patronal al pago de ciertas prestaciones laborales, ni tampoco para analizar si el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Rectex debió de estimarse o no; es decir, no puede entrar a evaluar -con base en la normativa secundaria y las particularidades del caso concreto— los razonamientos de las autoridades judiciales demandadas para decidir como lo hicieron, ya que son aspectos que no son competencia del ámbito constitucional conocer, pues implicaría la irrupción de facultades que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De esta forma, ya que el asunto planteado carece de trascendencia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. Finalmente, se advierte que el abogado García Alvarado. con el fin de acreditar su calidad de apoderado de la sociedad Rectex de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó un poder general judicial otorgado a su favor por dicha persona jurídica, según el cual, el señor LRR —administrador único propietario y representante legal—, fue elegido para desempeñar sus funciones por un, periodo de cinco años, a partir del 26 de mayo de 2014, por lo que se colige que —al momento de presentar la demanda de este amparo— la vigencia de su nombramiento ya ha finalizado.

En tal sentido, es preciso advertir al aludido abogado que, en caso de plantear cualquier petición posterior ante esta Sala, deberá comprobar su personería o, en su caso, el representante actual de la sociedad mencionada tendrá que comparecer de manera directa. En ambos supuestos deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se desee actuar de acuerdo con los artículos 61, 67 y siguientes CPCM y 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con, el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por el abogado Boris Romeo García Alvarado, quien manifiesta, actuar en calidad de apoderado de la sociedad Rectex de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el Juez Quinto de lo Laboral y la Cámara Primera de lo Laboral, ambos de San Salvador, en virtud de que su reclamo se reduce a una cuestión de estricta legalidad y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Adviértese* al abogado García Alvarado que, en caso de plantear una petición posterior ante esta Sala en representación de dicha sociedad, deberá comprobar su personería o, en su caso, el representante actual de la sociedad tendrá que comparecer de manera directa. En ambos supuestos deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se desee actuar, de conformidad con los artículos 61, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil y 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de los medios técnicos —correo electrónico y Cuenta Electrónica Única del Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia— señalados por el abogado García Alvarado para recibir los actos procesales de comunicación.

4. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—-O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

66-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo firmada por el señor JCG, junto con la documentación anexa, se hacen las siguientes consideraciones:

I. El demandante manifiesta que el 20 de marzo de 2023 se apersonaron agentes de la policía municipal de Chinameca, departamento de San Miguel, junto con empleados de la aludida municipalidad al local donde realiza su actividad económica –venta de telas– dentro del mercado municipal de dicha localidad.

De conformidad con lo expuesto por el interesado, los servidores públicos le manifestaron que no había pagado los impuestos correspondientes y procedieron a cerrar el negocio y a retirar la mercadería, la cual –según le indicaron– sería trasladada a la alcaldía; asimismo dejaron en el interior del local algunos bienes que no le permitieron sacar.

Afirma que la administración del mercado municipal de Chinameca cerró su negocio en virtud de que la persona a quien se le adjudicó el local no se encontraba en él; sin embargo, alega que existe un contrato de subarrendamiento entre su persona y el señor REAQ, además, sostiene que todos los tributos correspondientes han sido cancelados a la mencionada administración.

En ese orden, el peticionario arguye que el cierre de su local en el mercado municipal y la sustracción de la mercadería por orden del Alcalde Municipal de Chinameca han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, trabajo, propiedad, igualdad y a la protección en la defensa de los derechos.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora, corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

1. Esta Sala ha sostenido –sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006 e improcedencia de 24 de abril de 2019, amparo 206-2018– que este tipo de procesos constitucionales persiguen que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

Y es que, debido a la naturaleza jurídica del amparo, es necesario que exista un agravio concreto, esto es, un perjuicio que las personas experimentan en su esfera jurídica como resultado de las actuaciones de un determinado funcionario, cuya constitucionalidad se cuestiona.

En ese sentido, para la procedencia del amparo, es necesario –entre otros presupuestos– que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio–. Este tiene como requisitos que se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional cuando el acto u omisión alegado es inexistente o cuando, no obstante concurra una actuación u omisión por parte de la autoridad a quien se le atribuye la responsabilidad, aquella ha sido legítima, es decir, se ha realizado dentro del marco constitucional o es incapaz de producir por sí misma una afrenta en la esfera jurídica constitucional del sujeto que reclama.

De tal suerte que si la pretensión del actor no incluye los elementos mencionados, hay ausencia de agravio y esta debe ser rechazada por existir imposibilidad absoluta de juzgar el caso desde el ámbito constitucional.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas por la parte actora en el presente caso.

1. En síntesis, el peticionario cuestiona el cierre de su local efectuado el 20 de marzo de 2023 –a su juicio– por orden del Alcalde Municipal de Chinameca, así como la sustracción de la mercadería que tenía a la venta.

A su criterio dicha actuación ha vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, trabajo, propiedad, igualdad y a la protección en la defensa de los derechos.

2. A. Al respecto, el actor plantea dos posibles razones que motivaron que las autoridades edilicias procedieran a cerrar su negocio: por una parte, alega que los servidores municipales le expresaron que era por falta de pago de tributos, pese a que afirma estar solvente con sus obligaciones tributarias y, por otra, menciona que el motivo fue que el adjudicatario del local no se encontraba presente en dicho lugar.

En la nota de 13 de marzo de 2023 –anexa a la demanda– se relaciona que el 8 del mismo mes y año se notificó al actor que tenía 5 días hábiles para desalojar el local, los cuales finalizaron el 15 del mencionado mes y año.

Además, en la nota en la que –aparentemente– las autoridades edilicias le dan respuesta al escrito presentado el 10 de marzo de 2023 por el actor, se relacionó que el Administrador del Mercado Municipal remitió nota el 27 de marzo de ese mismo año al subarrendatario del local, en la que requirió que demostrara "... fehacientemente en qu[é] calidad estaba en el puesto y porque [sic] el adjudicatario no se encontra[ba] en el mismo..."; sin embargo, de conformidad a dicha nota, el demandante no brindó respuesta dentro del plazo que se le otorgó.

Asimismo, en la citada nota se expresa que el equipo técnico jurídico de la municipalidad dio seguimiento al caso del señor CG y concluyó que "... el administrador del Mercado Municipal de Chinameca, ha realizado su actuación en el marco jurídico determinado en la [Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Mercado Municipal de Chinameca]".

B. De lo expuesto se observa que el motivo por el cual la municipalidad de Chinameca requirió al actor que desalojara el local y posteriormente procedió a su cierre consiste en que no demostró la calidad en que se encontraba realizando su actividad económica en dicho puesto del mercado; y es que, aparentemente, este se habría adjudicado a otra persona quien, a su vez, le subarrendaba el espacio al señor CG.

De conformidad con el art. 7 de la aludida ordenanza, se entiende por adjudicatario "... a aquel que ocupa un área determinada del mercado en forma continua con base en un contrato de arrendamiento suscrito con la municipalidad"; asimismo, el art. 8 del mismo cuerpo legal establece que la persona que no pueda acreditar su derecho de adjudicatario permanente no puede ejercer actividad comercial dentro del mercado y será retirado por el uso ilegal del área ocupada.

En ese sentido, se observa que las autoridades municipales habrían actuado de conformidad con el marco legal que rige el funcionamiento del mercado, ya que, de la documentación agregada a la demanda, se infiere que se requirió al actor que acreditara la calidad en la que se encontraba ejerciendo el comercio en el local que –presuntamente– había sido adjudicado a otra persona y, al no poder hacerlo, procedió con lo establecido en la citada disposición.

C. Con relación a lo anterior, es pertinente acotar ciertos aspectos referentes a la técnica autorizatoria de la administración.

De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal –sentencia de 13 de diciembre de 2005, inconstitucionalidad 8-2004–, los actos de técnica autorizatoria constituyen una forma de incidencia en la esfera jurídica de los particulares, en el sentido que la autoridad con potestades normativas regula el ejercicio de determinadas actividades que le son propias y que solo podrá llevarlas a cabo previa intervención de la administración encaminada a constatar el cumplimiento de las condiciones materiales, formales y procedimentales previstas por el ordenamiento jurídico.

Estas condiciones persiguen proteger determinados intereses colectivos, según la naturaleza de las actividades de que se trate. En ese sentido, la potestad de conceder autorizaciones lleva ínsita la posibilidad que la administración pública impida el ejercicio de las actividades reguladas en los casos en que no exista la autorización debida y, en general, en todos aquellos en que esas actividades se ejerciten al margen de los lineamientos definidos por el ordenamiento. De lo contrario, no se alcanzaría el fin que persigue la norma que instituye la autorización en cada caso.

En tal sentido, aun cuando pueda parecer una limitante al ejercicio de un determinado derecho –*v. gr* derecho a la libertad de empresa–, en realidad no consiste en una medida privativa, sino que simplemente estipula los requisitos para el ejercicio de este; es decir, se trata de una mera regulación del derecho en cuestión –sentencia de 21 de septiembre de 2012, inconstitucionalidad 60-2005–.

3. En ese contexto, no se infiere la supuesta afectación a los derechos constitucionales invocados por el peticionario, ya que la autoridad municipal actuó bajo la técnica autorizatoria de la administración al requerir que comprobara la calidad de adjudicatario y, al no realizarlo, aplicó lo establecido en la norma local que regula el funcionamiento de los mercados, lo que conllevó al cierre del aludido local comercial por el presunto uso ilegal del área ocupada.

Y es que, la técnica autorizatoria no se refiere únicamente a la facultad de la administración pública de autorizar el ejercicio de ciertas actividades reguladas por el legislador, sino que implica la potestad de vigilancia.

Es decir, el acto administrativo que autoriza cierta actividad –en principio– no concluye las obligaciones que posee la administración, ya que esta tiene el deber de supervisar y vigilar el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley para el ejercicio de dicha actividad; y es que, sin este control posterior, los parámetros fácticos y jurídicos que en su momento permitieron la autorización, podrían ser irrespetados y dar cabida no solo a la ilegalidad sino a la puesta en riesgo de la población.

En tal sentido, la técnica autorizatoria lleva implícita la facultad de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio de la actividad autorizada y se extiende a la posibilidad de cancelarla o revocarla si se constata el incumplimiento sobrevenido de estos.

En ese orden, se advierte que la municipalidad, al ejercer su facultad de vigilancia derivada de la técnica autorizatoria, evidenció que los términos bajo los cuales se había adjudicado el local no estaban siendo respetados, ya que el adjudicatario no era la persona que estaba gestionando el negocio, por lo que requirió al peticionario que abandonara voluntariamente el local y, al no hacerlo dentro del plazo señalado, procedió a cerrar de manera oficiosa aquel, conforme a lo establecido en la normativa de la materia.

Aunado a ello, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las actividades vinculadas con la técnica autorizatoria administrativa, tales como la denegatoria, suspensión, cancelación, revocatoria de una licencia o permiso, no implica –en principio– la privación de derechos fundamentales, por lo que, en tales supuestos no existe la obligación constitucional de seguir un procedimiento previo para tal efecto –sentencia de 25 de octubre de 2002 e improcedencia de 10 de febrero de 2012, inconstitucionalidad 14-99 y amparo 408-2011, respectivamente–.

No obstante, en el caso planteado, se advierte que la municipalidad remitió notas al señor CG con el fin de que acreditara su permanencia en el local, previo a proceder con su desalojo y cierre; es decir, le brindó la oportunidad de justificar la realización de su actividad económica en dicho negocio de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza aplicable.

En atención a lo anterior, no se logra inferir la posible conculcación de los derechos invocados por el pretensor por parte de las autoridades demandadas mediante el cierre del local en el que ejercía su actividad económica, más bien se advierte que tal decisión fue emitida bajo la técnica autorizatoria de la administración, la cual no comparte el peticionario por considerar que es contraria a sus intereses.

4. Así, de los alegatos expuestos en la demanda por el señor CG se observa que estos se basan en razonamientos que no sustentan la posible afectación a su esfera jurídica constitucional, más bien, se advierte que el cierre del local fue realizado bajo la técnica autorizatoria de la administración y que los argumentos del actor denotan aspectos de mera disconformidad que no son competencia de esta Sala dirimir, de lo que se deriva la imposibilidad de juzgar, desde la perspectiva constitucional, el reclamo formulado, ya que existen defectos en la pretensión que vuelven ineludible su declaratoria de improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda suscrita por el señor JCG contra el Alcalde Municipal de Chinameca, departamento de San Miguel, en virtud de que sus argumentos no evidencian la concurrencia de un agravio de trascendencia constitucional sino aspectos de simple disconformidad respecto al cierre del local, el cual se realizó en el ejercicio de la técnica autorizatoria de la administración, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (correo electrónico registrado en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia) para recibir actos procesales de comunicación.

3. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. —O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

74-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cincuenta minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo firmada por el abogado JNFA, en calidad de apoderado judicial de las señoras AMP y PHSG, junto con la documentación anexa, se hacen las siguientes consideraciones:

I. El apoderado de las demandantes expresa que sus patrocinadas arrendaron un inmueble ubicado en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad; sin embargo, no formalizaron un contrato de forma escrita, sino que debido a las buenas referencias que poseían, el propietario del inmueble confió en su palabra y celebraron un acuerdo verbal. De esta manera, alquilaron el referido inmueble por más de cinco años.

No obstante, el nuevo propietario del inmueble comenzó a exigirles que desocuparan la casa sin darles la oportunidad de dialogar. Así, el 10 de marzo de 2023 fueron notificadas por el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla de la resolución en la que señalaba el 14 de abril de este año para realizar el lanzamiento y desocupación material del inmueble.

Por otra parte, expresa que el 30 de marzo de 2023, la mencionada autoridad judicial decretó medidas de protección a favor de sus mandantes y contra el propietario del inmueble y otra persona más, ya que alegaron que se había planteado denuncia ante la Fiscalía General de la República por supuestos hechos constitutivos de los delitos de amenazas y expresiones de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, el 12 de abril de 2023, sus representadas fueron notificadas de la resolución de 11 del mismo mes y año emitida por el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, en la que declaró improponible la solicitud de medidas de protección a favor de las interesadas y dejó sin efecto las dictadas anteriormente.

En ese orden, sostiene que se han vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, a la vivienda del no propietario, defensa y audiencia –estos dos últimos como manifestaciones del debido proceso–.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora, corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

1. La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

2. Por otra parte, esta Sala ha establecido que en el proceso de amparo el objeto material de los hechos narrados en la pretensión se encuentra determinado por el acto reclamado, el cual, en sentido lato, puede ser una acción u omisión proveniente de cualquier autoridad pública o de particulares, que debe reunir de manera concurrente ciertas características, entre las que se destacan que se produzca en relaciones de supra subordinación, que genere un perjuicio o agravio en la esfera jurídico constitucional de la persona y que posea carácter definitivo.

En ese sentido, se sostuvo en la improcedencia del 20 de febrero de 2009, amparo 1073-2008, que esta Sala, por regla general, únicamente es competente para controlar la constitucionalidad de los actos concretos y de carácter definitivo emitidos por las autoridades demandadas, encontrándose impedida de analizar aquellos actos que carecen de dicha definitividad por tratarse de actuaciones de mero trámite o de ejecución.

Por ello, para sustanciar un proceso de amparo constitucional, es imprescindible que el acto u omisión impugnado sea de carácter definitivo, capaz de generar en la esfera jurídica del demandante un agravio de igual naturaleza con trascendencia constitucional; caso contrario, resultaría contraproducente, desde el punto de vista de la actividad jurisdiccional, la gestión de un proceso cuya pretensión carezca de uno de los elementos esenciales para su adecuada configuración, pues ello volvería improductiva su tramitación.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas por la parte actora en el presente caso.

1. El apoderado de las peticionarias cuestiona el auto de 11 de abril de 2023 emitido por el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, en el que declaró improponible la solicitud de medidas de protección solicitadas por aquellas y revocó las que se habían otorgado a su favor previamente.

A criterio del referido profesional, dicha decisión vulnera los derechos a la seguridad jurídica, a la vivienda del no propietario, defensa y audiencia –estos dos últimos como manifestaciones del debido proceso– de sus mandantes.

2. A. En cuanto a la supuesta vulneración a los derechos de audiencia y defensa –como manifestación del debido proceso– y a la seguridad jurídica, el apoderado de las demandantes sostiene que las medidas de protección emitidas a favor de sus mandantes se señalaron para un plazo de seis meses contados a partir de 30 de marzo de 2023; sin embargo, el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla las dejó sin efecto mediante auto de 11 de abril de 2023, pese a que –a juicio del citado abogado– sus representadas se encontraban en peligro.

Al respecto, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, se advierte que la resolución cuestionada se refiere a las medidas de protección solicitadas por las actoras en contra del propietario del inmueble que arrendaban y otra persona.

De acuerdo con el art. 57 letra k) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), a las mujeres que enfrenten hechos de violencia se les concederá como una garantía procesal y de manera inmediata las medidas emergentes, de protección o cautelares establecidas en las leyes secundarias.

Ahora bien, aun cuando la LEIV establece que las medidas solicitadas se otorgarán de forma inmediata, ello no significa que el aplicador de la ley deba actuar de manera automática, más bien, debe valorar los hechos que se le plantean en la solicitud de las medidas y determinar si son procedentes o no y, de serlo, conceder aquellas que considere idóneas para asegurar una mayor protección.

Ello no puede ser de otra manera, ya que tales medidas, si bien se otorgan como una garantía a favor de las mujeres que enfrentan hechos de violencia, pueden representar una limitación a los derechos del presunto agresor, por lo que su otorgamiento requiere de un análisis por parte de la autoridad judicial competente con el fin de, por una parte, salvaguardar de mejor manera los derechos de la mujer y, por otra, evitar limitaciones arbitrarias o injustificadas en la esfera jurídica de la persona a quien se le atribuye la supuesta agresión.

En ese orden, el juez competente tiene la facultad de revisar la solicitud que se le plantea y, luego de un análisis, decidir si es procedente o no conceder las medidas requeridas.

En tal sentido, no se infiere cómo la negativa del Juez Segundo de Paz de Santa Tecla de otorgar las medidas solicitadas afecta los derechos constitucionales de las peticionarias, ya que está dentro de sus facultades analizar dicha solicitud y decidir si lo pedido resulta procedente o no; de ello, se colegiría que únicamente se encuentran en desacuerdo con el contenido de la mencionada decisión.

B. Aunado a ello, esta Sala ha sostenido –sentencia de 12 de abril de 2007, inconstitucionalidad 28-2006– que las medidas cautelares –al igual que las medidas protectoras– implican la idea de prevención, pues con su imposición se pretende evitar posibles frustraciones tanto de la tramitación del proceso como de la efectividad de la sentencia que lo culmina, en caso de ser estimatoria, para asegurar el cumplimiento de la misma. En ese orden, las medidas cautelares son herramientas procesales a través de las cuales se persigue la eficacia de la resolución que emite el órgano jurisdiccional encargado de pronunciarse sobre el fondo de un asunto sometido a su conocimiento.

En tal sentido, las medidas precautorias, cautelares o de protección tienen entre sus principales características la temporalidad y variabilidad, es decir, estas poseen efectos transitorios y pueden ser modificadas, sustituídas o incluso revocadas si las circunstancias que dieron origen a su imposición varían o cesan y, por ende, desaparecen las razones que las motivaron, por ello, es competencia del aplicador de la ley secundaria verificar que se cumplan los requisitos –*fumus bonis iuris y periculum in mora*– para otorgar o mantener este tipo de medidas.

En virtud de ello, la supuesta vulneración a derechos constitucionales que –a juicio del abogado de las demandantes– deriva de la revocatoria de las medidas protectoras concedidas a favor de sus patrocinadas no refleja una afectación definitiva en la esfera constitucional de estas, ya que la temporabilidad y variabilidad son elementos de la naturaleza de las medidas protectoras.

3. Con relación a la presunta vulneración al derecho a la vivienda del no propietario, el abogado de las actoras sostiene que se debió respetar el contrato de arrendamiento verbal por parte del nuevo dueño del inmueble y realizar el procedimiento establecido en la ley.

El argumento planteado por el referido profesional no refleja una trascendencia constitucional, más bien, se trata de una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelta por los tribunales ordinarios. Y es que, en orden de dirimir lo argüido es necesario verificar la existencia del contrato y los acuerdos pactados, especialmente lo referente al plazo; tales aspectos escapan del catálogo de competencia de este tribunal.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que en principio el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a las leyes que rigen los trámites cuyo conocimiento les corresponde, toda vez que esto implicaría la irrupción de potestades que en exclusiva han sido atribuidas y deben realizarse por los funcionarios y órganos pertinentes.

4. En ese sentido, se advierte que la actuación impugnada por el abogado de las demandantes no reviste la característica de definitiva y habría sido emitida en el ejercicio de las facultades legales conferidas al aludido juzgador, en consecuencia, no puede producir un agravio de igual naturaleza en la esfera jurídica de sus poderdantes; lo anterior, debido a que el acto reclamado consiste en la negativa y revocatoria de medidas de protección cuyas características son la temporalidad y variabilidad; aunado a ello, las alegaciones no reflejan una posible afectación a los derechos fundamentales de sus mandantes, más bien, se observa que tales argumentos se basan en aspectos de mera legalidad y disconformidad respecto a la decisión judicial por haber resultado contraria a los intereses de sus representadas y que no son competencia de esta Sala dirimir.

Por consiguiente, la situación advertida en el caso en estudio evidencia la existencia de defectos en la pretensión que motivan el rechazo liminar de la demanda planteada mediante la figura de la improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* al abogado JNFA en calidad de apoderado judicial de las señoras AMP y PHSG, en virtud de haber acreditado debidamente la personería con la que actúa.

2. *Declárase improcedente* la demanda suscrita por el referido profesional en el carácter indicado contra el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla, en virtud de que el acto contra el que se reclama no tiene carácter definitivo y, por ende, no puede producir un agravio de igual naturaleza en la esfera jurídica de las interesadas, a la vez que ha sido emitido en el ejercicio de las facultades legales atribuidas a la mencionada autoridad; asimismo, sus argumentos no evidencian un agravio de trascendencia constitucional sino aspectos de mera legalidad y disconformidad con la actuación reclamada que no son competencia de esta Sala conocer.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar y el medio técnico (cuenta registrada en el Sistema de Notificación Electrónica) por el abogado de la parte actora para recibir actos de comunicación, así como de las personas comisionadas para tales efectos.

4. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARIS TIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

186-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas del día once de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por la señora MJSS, quien manifiesta ser hermana del señor JPAM, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La aludida señora aduce que en los años 2005 y 2006 los Jueces de Sentencia de San Miguel, La Unión y San Francisco Gotera condenaron al actor a cierta pena de prisión por la comisión de los delitos de estafa.

En ese sentido, afirma que durante dieciséis años no se le efectuó una correcta unificación de las penas al señor AM; sin embargo, a petición de un abogado defensor se solicitó la realización de tal procedimiento, pero la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel aplicó una ley desfavorable que, además, ya no estaba vigente.

Por lo expuesto, demanda a la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel por la lesión a los derechos de defensa –como manifestación del debido proceso–, seguridad jurídica y libertad, así como el principio de legalidad del interesado.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

1. El artículo 12 inciso final de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) prevé que: "[s]i el amparo solicitado se fundare en detención ilegal o restricción de la libertad personal de un modo indebido, se observará lo que dispone el Título IV de la presente ley", apartado que regula el proceso de hábeas corpus.

Por su parte, el artículo 11 inciso 2° de la Constitución de la República establece que "... [l]a persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas...".

Con base en dichas disposiciones, esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia –improcedencia de 19 de mayo de 2008, amparo 475-2008– que una de las causales de finalización anormal de este proceso concurre cuando la pretensión incoada se fundamenta en derechos tutelados por el hábeas corpus.

2. En relación con lo expuesto, también se ha señalado en la improcedencia de 12 de junio de 2001, amparo 567-2000, que a pesar del rechazo liminar de la demanda en aquellos supuestos en los que el reclamo se fundamente en la supuesta vulneración del derecho a la libertad del interesado, esta Sala se encuentra facultada, por aplicación del principio iura novit curia –el Derecho es conocido por el Tribunal– y lo dispuesto en el artículo 80 de la LPC, para tramitar la petición por medio del cauce procedimental que jurídicamente corresponde, con independencia de la denominación que el actor haya hecho de la vía procesal que invoca.

Consecuentemente, en este tipo de casos, debe rechazarse el conocimiento de la queja formulada en el proceso de amparo y ordenarse su tramitación de conformidad con el procedimiento que rige el hábeas corpus, tal como se ha realizado en las improcedencias de 29 de abril de 2015 y 10 de noviembre de 2017, amparos 64-2015 y 329-2016 respectivamente.

III. La señora SS demanda a la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel por supuestamente haber efectuado una incorrecta unificación de las penas a las que el señor AM fue condenado por la comisión de determinados hechos delictivos, situación que habría lesionado los derechos de defensa –como manifestación del debido proceso–, seguridad jurídica y libertad, así como el principio de legalidad del interesado.

Para fundamentar la inconstitucionalidad de dicha situación, manifiesta que: "... el juzgador penitenciario no realiza la valoración en lo que concierne a la pena a imponer de acuerdo a lo que establece el artículo 45 y 71 del Código Penal que estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos en lo referente a la condena máxima que son treinta y cinco años de prisión, sino que vulnera el orden constitucional al aplicar [...] la pena máxima del Decreto Legislativo 1009 de fecha 29 de febrero de 2012 [...] que establece como pena máxima de sesenta años de prisión que nació después de ser declarada la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 486 ...".

Al respecto, esta Sala en la sentencia de 5 de noviembre de 2010, hábeas corpus 112-2010, ha precisado que dicho proceso constitucional constituye un mecanismo destinado a proteger el derecho fundamental de libertad física de los justiciables ante restricciones, amenazas, perturbaciones o incidencias ejercidas en tal categoría de forma contraria a la Constitución, concretadas ya sea por particulares o autoridades judiciales o administrativas.

En ese sentido, aunque la referida señora expresa pedir amparo y, en consecuencia, la Secretaría de esta Sala clasificó el referido escrito como tal clase de proceso, dado que se aduce que el demandante se encuentra privado de libertad cumpliendo una pena de prisión y que, en consecuencia, el derecho fundamental que pretende tutelarse se encuentra vinculado al de libertad física, es procedente ordenar que su pretensión sea tramitada como un hábeas corpus.

Por consiguiente, en vista que el reclamo planteado adolece de un vicio que impide la tramitación del proceso de amparo, este deberá finalizar mediante la figura de la improcedencia.

IV. Por otra parte, se advierte que la señora SS manifiesta actuar en calidad de hermana del señor AM; sin embargo, según el artículo 14 de la LPC la demanda de amparo podrá presentarse por la persona agraviada o por medio de su representante legal o mandatario.

Por ello, en caso de que pretenda plantear algún recurso o solicitud posterior en este proceso, deberá incorporar la documentación necesaria con la que compruebe su calidad de abogada de la República y de apoderada del señor JPAM de conformidad a los artículos 61, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos de amparo– o, en todo caso, el interesado deberá comparecer por medio de apoderado debidamente nombrado.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 inciso 4° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por la señora MJSS, quien manifiesta ser hermana del señor JPAM, contra la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel, en virtud de que la pretensión planteada se fundamenta en un derecho constitucional protegido por el hábeas corpus.

2. *Instrúyese* a la Secretaría de esta Sala que inscriba la referida solicitud en el registro de procesos de hábeas corpus, para lo cual deberá asignar el número de referencia que corresponda para su respectiva tramitación mediante esa vía procesal.

3. *Ordénase* a la Secretaría de esta Sala que traslade la información correspondiente de este expediente de amparo a efecto de documentar el inicio del proceso de hábeas corpus respectivo.

4. *Adviértese* a la señora SS que, si posteriormente pretende impugnar esta decisión o realizar una solicitud adicional en este proceso, deberá presentar la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se desee actuar de conformidad a los artículos 61, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil.

5. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico (telefax) señalado por la señora SS para recibir los actos de comunicación.

6. *Notifíquese*.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

229-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por el licenciado Marvin David Cerén Castillo en calidad de apoderado de la señora OALDA, por medio del cual evacua las prevenciones realizadas por esta Sala, junto con la documentación anexa.

Previo a emitir un pronunciamiento sobre la demanda presentada, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El citado profesional dirige su reclamo contra el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno) por haber ordenado el desalojo de la actora y su grupo familiar respecto del inmueble en el que habitan –ubicado en el municipio de Colón, departamento de La Libertad– mediante la resolución de 15 de julio de 2022, emitida en el proceso con referencia 54-EF-16-NZ/CM, notificada a la peticionaria el 19 de agosto de 2022.

Al respecto, explica que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) promovió un juicio ejecutivo contra el señor JBOG y durante la ejecución forzosa de la sentencia emitida en aquel se habría ordenado el desalojo de su poderdante. No obstante, afirma que esta en ningún momento fue emplazada ni notificada de las resoluciones emitidas en dicho proceso a fin de que pudiera ejercer sus derechos, salvo el acto contra el cual ahora reclama, en el que se le otorgó un mes para desalojar dicho bien so pena de un posterior lanzamiento. Además, pese a que se le comunicó a su mandante la resolución que impugna, no pudo intervenir en la mencionada ejecución forzosa, debido a que no fue parte en el juicio ejecutivo en cuestión.

Aunado a lo anterior, alega que el bien raíz propiedad de su mandante carece de gravamen y esta no tiene obligación alguna con el FSV, ni relación contractual como fiadora o codeudora solidaria del señor OG, pues ella compró de buena fe y de manera directa el inmueble a personas particulares.

En virtud de lo relatado, estima como vulnerados los derechos de propiedad, audiencia y defensa, pues se le ha pretendido despojar de un bien de su patrimonio sin haber podido intervenir en el juicio respectivo.

II. Determinados los argumentos de la parte demandante, corresponde en este apartado exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se sostuvo en el sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, este proceso constitucional persigue que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

En ese sentido, para la procedencia en la etapa inicial de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros– que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio–. Dicho agravio tiene como requisitos que se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional cuando el acto u omisión alegado es inexistente o cuando, no obstante concurra una actuación u omisión por parte de la autoridad a quien se le atribuye la responsabilidad, aquella ha sido legítima, es decir, se ha realizado dentro del marco constitucional o es incapaz de producir por sí misma una afrenta en la esfera jurídica constitucional del sujeto que reclama.

Consecuentemente, si la pretensión del actor no incluye los elementos antes mencionados, hay ausencia de agravio y la pretensión debe ser rechazada por existir imposibilidad absoluta de juzgar el caso desde el ámbito constitucional.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El abogado Cerén Castillo reclama contra el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno) por haber ordenado el desalojo de la actora y su grupo familiar respecto del inmueble en el que habitan, mediante la resolución de 15 de julio de 2022 emitida en el proceso con referencia 54-EF-16-NZ/CM, notificada a la peticionaria el 19 de agosto de 2022.

En ese sentido, cuestiona que a pesar de que su patrocinada no tenía ninguna obligación crediticia con el FSV y que el bien raíz embargado es de su propiedad, el juzgador pretende desalojarla del inmueble en que habita junto con su grupo familiar. Además, afirma que la interesada en ningún momento fue emplazada ni notificada de las resoluciones emitidas en dicho proceso ejecutivo a fin de que pudiera ejercer sus derechos y que esta no tenía el carácter de fiadora o codeudora solidaria del señor OG, quien es el demandado en el proceso ejecutivo que dio origen a la relacionada ejecución forzosa

2. En ese orden de ideas, se observa que el presunto agravio de trascendencia constitucional que habrían sufrido la actora como consecuencia de la situación que impugna se basa esencialmente en que, producto de las citadas diligencias de ejecución forzosa, el juez demandado emitió una orden de lanzamiento de los ocupantes del bien raíz, pese a que aquella –según el aludido profesional– es la propietaria de mismo y que registralmente este no cuenta con ningún gravamen, lo anterior sin que aparentemente tuviera la oportunidad de controvertir dicha situación.

Al respecto, de la lectura de la documentación anexa a la demanda y al escrito de evacuación de prevenciones, se advierte que la interesada fue notificada personalmente de la resolución de 15 de julio de 2022 pronunciada en la referida ejecución forzosa, en la cual se le concedía como ocupante del inmueble un mes para que procediera con el desalojo de este, en los términos que establecen los artículos 694 y 695 del Código Procesal Civil y Mercantil.

En ese orden de ideas, el referido procurador asevera que la interesada no fue parte del juicio ejecutivo en el cual se demandó al señor OG y que, por esa causa, aquella no se dirigió ante la autoridad demandada para comprobar las razones por las cuales permanecía en el inmueble en cuestión y en especial presentar el título que la legitimaba, pese a que –sostiene– era la propietaria del mismo y no el relacionado señor, según la información contenida en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente.

Aunado a ello, expone el abogado Cerén Castillo que su poderdante no se apersonó a la Procuraduría General de la República para buscar asesoría legal sobre el caso en cuestión y así poder dilucidar la situación jurídica del inmueble en controversia, debido a "... la tardanza en la respuesta de dicha institución...".

Ahora bien, es importante indicar que aun cuando se asevera que la actora no fue demandada por el FSV en el proceso ejecutivo, esta tuvo la oportunidad de acudir ante el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno) –a quien se le atribuye el acto que le causa el aparente agravio de carácter constitucional– en el momento en que tuvo conocimiento de la cuestionada ejecución forzosa con la finalidad de justificar su permanencia en el bien raíz y poder incorporar en el proceso de primera instancia la documentación –que ha agregado al expediente del presente amparo– sobre la titularidad del mismo. No obstante, omitió efectuar tal actuación para procurar defender sus intereses, pese a que fue notificada del auto en el que se concedió un plazo para ese fin.

Así, la demandante pudo haber interpuesto sus peticiones ante la autoridad judicial que demanda con la finalidad de controvertir o intentar suspender la orden de lanzamiento, pero decidió no hacer uso del cauce legal idóneo para intentar subsanar la vulneración alegada, tomando en cuenta que se le confirió una audiencia en sede ordinaria donde podría haber hecho valer el derecho que actualmente asevera poseer sobre el inmueble que ha sido adjudicado en la fase de ejecución forzosa.

3. Por otra parte, se observa que el procurador de la señora LDA afirma que el inmueble embargado en el juicio ejecutivo es propiedad de esta y que, según la información del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente, dicho bien raíz no cuenta con ninguna medida cautelar decretada por el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno).

En ese sentido, se deduce que se pretende que esta sede dirima una aparente controversia registral que definiría la eficacia jurídica de un título determinado frente a terceros, circunstancia que escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala; por ende, la referida señora tiene expeditas las vías legales ante las autoridades correspondientes para exponer sus peticiones con la finalidad de dilucidar la situación jurídica de tal bien raíz.

4. Por tanto, con arreglo a las circunstancias expuestas se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar la constitucionalidad de la actuación que se busca controvertir, puesto que no se ha fundamentado el presunto agravio de trascendencia constitucional padecido en relación con aquella. En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por el abogado Marvin David Cerén Castillo en calidad de apoderado de la señora OALDA contra el Juez de lo Civil de Santa Tecla (juez uno), pues no se ha sustentado la existencia de un agravio de naturaleza constitucional respecto de la esfera jurídica de la pretensora con relación con el acto cuestionado, ya que tuvo la oportunidad de hacer uso del cauce legal idóneo para procurar subsanar la vulneración alegada.

2. *Notifíquese*.

""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

134-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cincuenta minutos del día dieciséis de agosto dé dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo planteada por la señora ESMC o ELMDTR, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La requirente expresa que fue demandada en un proceso ejecutivo sustanciado ante la Ateza de lo Civil de San Marcos, dentro del cual contestó la demanda en sentido negativo, alegando ciertos motivos de oposición y ofertando determinados medios de prueba para acreditarlos; sin embargo, la jueza no los admitió y emitió sentencia, condenándola al pago de una suma de dinero. Inconforme, presentó recurso de apelación contra dicha resolución, que fue estimado por el tribunal de alzada correspondiente y anuló lo decidido por dicha juzgadora en la audiencia de oposición y en la sentencia de mérito, retrotrayendo el proceso hasta la última actuación válida, ordenando admitir la prueba propuesta por la señora MC.

Luego de esto, la jueza pronunció nuevamente sentencia condenatoria el 3 de enero de 2022, en la que, dice, pese a lo ordenado por la cámara, no se admitió la prueba, que ofertó y, por ende, esta no fue valorada; además, dicha resolución no se motivó en legal forma; como consecuencia de esto, estima que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, audiencia y defensa —estos últimos como manifestaciones del debido proceso—,

II. Determinados los argumentos expresados por la pretensora, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión,

1. A. La jurisprudencia constitucional —por ejemplo, las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010— ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

Así, se ha señalado que esta exigencia comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación. debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales mecanismos en sede ordinaria y. en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito.

B. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala —sentencia de 9 de diciembre de 2009; amparo 18-2004— ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

2. Por otra parte, tal como se ha indicado en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017. respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de, las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. La solicitante reclama contra la sentencia emitida el 3 de enero de 2022 por la 3 Jueza de lo Civil de San Marcos, debido a que sostiene que dicha funcionaría la condenó al pago de cierta cantidad de dinero sin haber admitido y valorado la prueba que ofertó para acreditar los motivos de oposición alegados, pese .a que existía una orden del tribunal superior, en grado en cuya virtud debía de haber admitido dichos medios probatorios y, además, por considerar que dicha resolución no se ha motivado, en legal forma.

2. A. Respecto a lo manifestado en la demanda, se advierte que, según consta en los registros de esta. Sala, la señora ELMC promovió un amparo, identificado con la referencia 52-2022, que fue declarado, improcedente por auto de 13 de enero de 2023; además, que el objeto de ese proceso versaba, esencialmente, sobre el mismo asunto planteado en el presente proceso, pues el reclamo se dirigía contra la misma autoridad y cuestionaba la constitucionalidad de la misma resolución, aduciéndose en ambas demandas —sustancialmente— los mismos motivos de impugnación.

En ese orden de ideas, el rechazo del amparo 52-2022 se debió a que, según su abogado, quienes entonces eran los apoderados de la señora MC no habían hecho uso, en el tiempo prescrito por la ley, del recurso de apelación contra la sentencia de 3 de enero de 2022 —cuya inconstitucionalidad es también el objeto de esta demanda— debido. a que dicho proveído fue notificado por medio del Sistema de Notificación Electrónica de esta Corte y, cuando el apoderado judicial de dicha persona accedió a su cuenta, ya había precluido el plazo de interposición del recurso.

En relación con lo anterior, se dijo en la improcedencia mencionada que ese argumento no resultaba atendible para justificar válidamente la omisión en el agotamiento del recurso correspondiente y, por tanto, se evidenciaba que la actora no había dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 12 inciso 3° de la LPC, en el sentido que, previo a la incoación del proceso de amparo, no se había agotado el medio impugnativo que la ley aplicable al caso le habilitaba.

B. Sobre lo precedente, es pertinente señalar que, debido a que en ambos procesos existe una identificación de sus objetos, así como de sus argumentos de hecho y de derecho, las conclusiones expresadas en el amparo 52-2022 resultan extrapolables al análisis de la presente demanda y, en ese sentido, es lógico inferir que, forzosamente, en este caso también se ha incumplido con el requisito mencionado en el párrafo anterior; es decir, no se ha agotado previamente el medio impugnativo idóneo previsto en la legislación para subsanar las presuntas transgresiones .a derechos fundamentales, en este caso concreto, el recurso de apelación.

Así, debe añadirse que no se puede pretender utilizar una demanda de amparo para ventilar, aspectos que deben alegarse en la instancia jurisdiccional ordinaria, permitiendo que estas reparen la lesión en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos, pues ello es contrarío a su carácter subsidiario y extraordinario, tal como lo expresó esta Sala en la sentencia de 6 de febrero de 2013, amparo 471-2010:

C. En consecuencia, en el presente caso es posible advertir la existencia de un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide el conocimiento y decisión sobre el fondo del reclamo interpuesto, pues se ha omitido agotas los mecanismos específicos franqueados en la legislación ordinaria que posibilitaría la discusión y posible subsanación de la infracción presuntamente generada por la actuación impugnada, siendo pertinente la terminación anormal de este amparo mediante la figura de la improcedencia.

3. A. Por otra parte, es necesario destacar que aun cuando se hubiese agotado en debida forma el recurso de apelación y pese a queda actora afirma que existe una transgresión a sus derechos fundamentales, los alegatos expuestos únicamente evidencian su inconformidad con la situación apuntada, es decir, con la sentencia que la condenó a pagar cierta cantidad de dinero. Y es que de la lectura de la copia simple de la sentencia impugnada se advierte que la prueba propuesta por la señora MC en el proceso de primera instancia sí fue admitida y valorada por la autoridad judicial, tal como consta en el romano V letra "c" de dicha providencia.

De igual forma, se evidencia que la juzgadora sí habría motivado la valoración de los medios probatorios, pues expuso las razones que la llevaron a otorgarle determinado mérito a cada uno de ellos. En tal sentido no puede asimilarse la ausencia de motivación con la inconformidad que le causan a la requirente los fundamentos expuestos en la providencia que impugna; y es que, debido a tales razones, resulta evidente en esta etapa liminar que la queja no se refiere a la falta de motivación en la valoración de la prueba, sino a un desacuerdo con los razonamientos de la jueza demandada.

Así, dado que la prueba ofertada por la señora MC sí fue admitida y valorada y, además, que la sentencia habría sido motivada, *se hace patente que lo que eh realidad se pretende someter al conocimiento de esta Sala es la validez de la valoración probatoria efectuada en la resolución mencionada*, de acuerdo con la normativa infraconstitucional aplicable y las expectativas subjetivas de la interesada; es decir, que esta Sala actúe como una nueva instancia de legalidad para revisar el análisis del material probatorio aportado en un proceso ejecutivo.

B. Acerca de lo anterior, resulta. pertinente traer a colación lo, expresado por esta Sala —*v. gr.* la citada improcedencia del amparo 408-2010— en cuanto a que el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen respecto a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les concierne.

De tal forma, este Tribunal no es competente para revisar la valoración de la prueba efectuada por la autoridad judicial demandada, pues esta ha interpretado y aplicado su criterio jurídico particular respecto de los artículos pertinentes que incumben al caso concreto, lo que se encuentra dentro de las facultades legales que le han sido conferidas.

Asimismo, los alegatos señalados para justificar la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia emitida por la jueza demandada no logran evidenciar la presunta lesión de los derechos fundamentales invocados, sino —a la larga— una mera inconformidad con los fundamentos expuestos por la mencionada autoridad para estimar la pretensión ejecutiva que le fue planteada.

En ese sentido, los argumentos de la pretensora están orientados a que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por la jueza señalada, tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuyo conocimiento escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

4. A. Así, el reclamo formulado en este caso no corresponde al conocimiento de este Tribunal, que se encuentra imposibilitado para controlar

la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de no haberse agotado el mecanismo de impugnación idóneo previsto en la legislación secundaria y, consecuentemente, la pretensión de amparo adolece de un defecto que impide entrar a su conocimiento.

B. Aunado a ello, es importante mencionar que, incluso si se hubiese cumplido con el requisito mencionado, esta sede estaría inhibida para conocer la queja planteada en este caso, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

En razón de lo anterior, esta Sala no se encuentra habilitada para examinar ni revisar los razonamientos de la autoridad demandada para decidir en la forma en la que lo hizo — conforme a las disposiciones legales de la materia y las particularidades del supuesto planteado—, pues hacerlo implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

C. De esta forma, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir defectos en la pretensión que habilitan la terminación anormal del proceso.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12 inciso 3ª y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declarase improcedente* la demanda de amparo planteada por la señora ESMC o ELMDR contra la Jueza de lo Civil de San Marcos. en virtud de que, por una parte, no se agotó el recurso idóneo legalmente previsto en contra de la sentencia impugnada y. por otra, aunque se hubiera hecho uso del recurso de apelación, el reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y simple inconformidad con las actuaciones impugnadas, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar señalado por la demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

144-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo firmada por el abogado Heriberto Alfaro García, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado judicial del señor SARM, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El abogado mencionado expone que el señor RM fue demandado en un proceso especial ejecutivo, que fue conocido por el Juez de lo Civil de San Marcos ("Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Marcos") bajo la referencia 385-PEM-2019, en el cual se emitió sentencia condenándolo al pago de cierta cantidad de dinero, sin, que, dice, se le haya emplazado y notificado en legal forma.

En ese sentido. aparentemente el emplazamiento fue intentado en varias oportunidades: primero, por el notificador de ese juzgado y, después, por medio de comisiones procesales enviadas a los Juzgados de Paz de Santo Tomás y de Santiago Texacuangos: pero, según explica, todos los empleados judiciales consignaron en sus actas que no les fue posible localizar la dirección proporcionada para realizar el acto de comunicación y, en consecuencia, el juzgador le nombró al interesado una curadora *ad litem* que lo representara en el proceso y, luego, emitió la sentencia aludida.

Posteriormente, al iniciarse la ejecución forzosa, esta fue notificada a la curadora, que no planteó oposición alguna, por lo que se continuó con el trámite del proceso y se nombró un perito para valuar el inmueble embargado. El problema -se infiere- es que este último, se apersonó al inmueble embargado, lo que desmentiría lo documentado por los empleados judiciales relacionados, pues se demostraría que sí era posible localizar la dirección en la que residía el señor RM y, por tanto -se deduce-, también lo era el haberlo emplazado de forma personal.

Esta circunstancia habría vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, audiencia y defensa -estos últimos **como manifestaciones del debido proceso**- del demandante, puesto que no fue legalmente emplazado ni notificado de las actuaciones procesales; por ende, en la demanda se pide que el proceso de primera, instancia "[vuelva] al estado de notificación del [d]ecreto de [e]mbargo".

Asimismo, el abogado citado expresa que con anterioridad presentó un amparo en el que cuestionaba la constitucionalidad, de las mismas actuaciones del Juez de lo Civil de San Marcos, que se clasificó con la referencia 349-2022, pero que fue declarado improcedente por auto de 22 de mayo de 2023 "por considerarse que los argumentos expuesto[s]... eran de mera legalidad, y simple inconformidad con la actuación impugnada...".

II. Determinado lo anterior, corresponde exponer brevemente los fundamentos jurídicos de la presente resolución.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-

2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los, derechos fundamentales que se proponen corno parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de temas puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Expuesto lo precedente es menester evaluar la posibilidad de conocer las infracciones alegadas en el presente proceso.

1. El abogado Alfaro García dirige su pretensión contra el Juez de lo: Civil de San Marcos por haber pronunciado la sentencia de 8 de abril de 2022, que condenó al señor RM a pagar cierta cantidad de dinero en concepto de capital y accesorios.

Para fundamentar su reclamo expone que ante el juez aludido se sustanció un proceso ejecutivo contra el solicitante, en el cual no se le notificaron personalmente el emplazamiento ni las demás actuaciones procesales, con fundamento en que no era posible localizar la dirección proporcionada para hacerlo. según lo informado por los notificadores del Juzgado de lo Civil de San Marcos y de los Juzgados de Paz de Santo Tomás y Santiago Texacuangos —que fueron comisionados para llevar a cabo tal acto de comunicación—.

Sin embargo, a juicio del citado profesional, esto se desacreditaría con el dictamen presentado por el perito valuador, ya que este sí pudo localizar el lugar en cuestión (que era el señalado para emplazarlo y supuestamente no podía ser hallado) a efectos de elaborar el valúo de dicho inmueble.

En consecuencia, puede colegirse que hace recaer su queja en la infamación proporcionada por los notificadores de los juzgados mencionados, la cual, en su opinión, es inverosímil pues, debido a la personación del perito valuador a la residencia del señor RM, podría deducirse que la dirección sí era localizable y, por tanto, las declaraciones de dichos empleados judiciales no resultarían fiables, lo que —al parecer— no habría sido tomado en cuenta por el juez demandado.

2. Así, partiendo del análisis de la demanda, se observa que, aun cuando el abogado firmante asevera que existió una transgresión a los derechos fundamentales del interesado, los alegatos que formula únicamente evidencian una inconformidad con el contenido de las actas elaboradas por los notificadores del Juzgado de lo Civil de San Marcos y de los Juzgados

de Paz de Santo Tomás y Santiago. Texacuangos, en las que manifestaron que no les había sido posible localizar la dirección señalada para notificar al mencionado requirente.

Y es que, tal como lo ha planteado, se colige que impugna la sentencia emitida por la autoridad demandada (como acto definitivo controlable en esta sede) porque, en último término, estaría viciada por las transgresiones supuestamente cometidas por los notificadores va mencionados, quienes afirmaron que no había sido posible localizar la dirección proporcionada para notificar al señor RM personalmente, lo que —según el abogado— no fue verídico, pues el perito valuador sí pudo constituirse en ella. Por tanto, pretende que se retrotraiga el proceso hasta la etapa del emplazamiento.

De- este modo, se infiere que procura que esta Sala analice la veracidad del contenido de las actas suscritas por los notificadores mencionados, pues sustenta su reclamo en la contraposición del contenido del informe pericial presentado en el proceso —que afirma es verdadero— y el de dichas actas —que, por oposición, no lo sería—. Sin embargo, esto conllevaría a realizar un estudio —desde una perspectiva estrictamente formal— de: *i)* la inexactitud y, en consecuencia, la falsedad de lo dicho por los notificadores aludidos, y las razones del juzgador demandado para haber dado credibilidad a dicha información, estimando que era legalmente procedente el nombramiento de una curadora *ad litem* que representara al señor RM en ese proceso.

Por tanto, para atender los reclamos del abogado Alfaro García, esta Sala tendría que sustituir en sus funciones a la jurisdicción ordinaria, esto es, entrar a valorar la legislación secundaria en relación con las circunstancias planteadas, lo que se constituye en una cuestión de eminente aplicación e interpretación de las leyes comunes, con lo cual se estaría desnaturalizando el proceso de amparo al pretender utilizarlo como un mecanismo: para revisar la legalidad de los actos reclamados y no como el medio para la subsanación de presuntas lesiones a derechos fundamentales.

3. Acerca de lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo expresado por esta Sala —*v. gr*. la citada improcedencia del amparo 408-2010— en cuanto a que el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen respecto a los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les concierne.

Así, sobre su reclamo contra presuntas falsedades consignadas por los notificadores de los mencionados juzgados en las actas en las que informaron que no había sido posible localizar la dirección proporcionada para notificar al señor RM, es necesario traer a cuenta que la jurisprudencia de este Tribunal —sentencia de 7 de agosto de 2005 y la improcedencia de 11 de noviembre de 2011, amparos 724-2004 y 353-2011, respectivamente—,

ha sostenido que las comunicaciones realizadas por los notificadores gozan de una presunción de veracidad que únicamente puede destruirse por la vía ordinaria, lo cual, sin negar el acceso a la jurisdicción para exponer dicho razonamiento —por medio del proceso idóneo—, permite que exista certeza de la actividad jurisdiccional.

De igual manera, la designación de un curador *ad litem*, por sí misma, no constituye un sustento constitucional para alegar la vulneración de los derechos de audiencia y defensa del solicitante, pues esta, en principio, se configura más bien como una garantía para su ejercicio, al recaer en un abogado la postulación del ausente —por diversas causas—, lo cual, teóricamente, le asegura ser representado por alguien con conocimientos técnicos para efectivizar los mencionados derechos.

En ese sentido, los alegatos para argumentar la inconstitucionalidad de las actuaciones del juez demandado no sugieren una lesión a los derechos fundamentales invocados, sino una mera inconformidad con los fundamentos expuestos por la citada autoridad para considerar veraz la información aportada por los notificadores en cuestión y, en consecuencia, nombrarle una curadora *cid litem* al solicitante. Y es que el abogado mencionado omite señalar por qué. constitucionalmente, el acto impugnado supone un obstáculo real y efectivo para garantizar los derechos mencionados o —de ser el caso— los motivos por los que la interpretación del funcionario citado habría supuesto una restricción injustificada de estos.

En consecuencia, los argumentos de la parte pretensora están orientados a que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por la autoridad demandada. tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuyo conocimiento escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

4. Así, el reclamo formulado en este caso no corresponde al conocimiento de este tribunal, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

En razón de lo anterior, esta Sala no se encuentra habilitada —dentro de su marco de actuación— para determinar la veracidad o falsedad del contenido de las actas de notificación, por encontrarse fuera del catálogo de competencias que la. Constitución le ha conferido; en consecuencia. hacerlo implicaría la irrupción en competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De esta forma, ya que el asunto planteado carece de trascendencia constitucional, debe declararse la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. A. Respecto a lo manifestado por el abogado compareciente, es pertinente señalar que, tal como lo señala, consta en los registros de esta Sala dicho profesional presentó otro proceso de amparo el 22 de diciembre de 2022, al que se le asignó el número de referencia 349-2022, en el que también cuestionaba la constitucionalidad de la sentencia pronunciada por el Juez de lo Civil de San Marcos el 8 de abril de 2022 en el proceso con referencia 385- PEM-2019, y que fue declarado improcedente por medio de auto de 22 de mayo de 2023 — notificado el 25 de mayo de ese mismo año al medio técnico señalado—, por considerarse que los hechos expuestos solo evidenciaban una inconformidad con los fundamentos expuestos por el juzgador para considerar veraz la información aportada por los notificadores en cuestión y, en consecuencia, nombrarle al señor RM una curadora *ad litem.*

Actualmente, el abogado aludido impugna —con cambios de forma de escasa importancia en la redacción de su demanda— la misma actuación del juzgador referido y por iguales motivos que los expuestos en la demanda de amparo 349-2022; en ese sentido, se advierte que el reclamo sometido a conocimiento constitucional en el relacionado amparo versaba sobre el mismo asunto planteado en el presente, pues su análisis permite identificar que existe identidad entre los elementos que conforman ambas pretensiones —sujetos, objeto y causa—.

De tal modo, es evidente que pretende que esta Sala revise nuevamente, *en idénticos términos*, la pretensión planteada contra el Juez de lo Civil de San Marcos; al respecto, debe indicarse que cuando una demanda de amparo es rechazada mediante la figura de la improcedencia o del sobreseimiento por existir un vicio de fondo en la demanda, ese supuesto no podría ser propuesto nuevamente ante esta Sala en iguales términos, ya que sería objeto de una misma decisión de rechazo, pues el vicio de fondo seguiría subsistiendo, tal como ocurre en este caso.

B. Finalmente, se advierte que el abogado Alfaro García intenta remitirse a la documentación presentada en el amparo 349-2022 con el fin de acreditar su calidad de apoderado judicial del demandante, dado que —pese a lo expresado en su demanda—no agrega el documento que demuestre que puede procurar a- favor de dicha persona.

En tal sentido, se advierte a dicho abogado que, no obstante que en el expediente citado consta un poder judicial otorgado a su favor por el requirente, ello no lo exime de la carga de acreditar su postulación procesal en un proceso distinto que se tramita de manera autónoma, por lo que debe-

rá prevenirsele que, en caso de plantear cualquier petición posterior ante esta Sala, tendrá que acreditar documentalmente la calidad en la que pretende actuar, de. conformidad con los artículos 68 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil y 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales o, en todo caso, el interesado podrá comparecer de forma personal, detallando sus datos generales y anexando fotocopia de su Documento Único de identidad o de algún otro medio de identificación,

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 1.3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE:**

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo planteada por el abogado Heriberto Alfaro García, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado judicial del señor SARM, contra el Juez de lo Civil de San Marcos, en virtud de que su reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Previénese* al abogado Alfaro García que, en caso de plantear una petición posterior ante esta Sala, deberá acreditar documentalmente su calidad de apoderado del demandante, conforme a los artículos 68 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil y 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales o, en todo caso el interesado podrá comparecer de forma personal, detallando sus datos generales y anexando fotocopia de su Documento Único de Identidad o de algún otro medio de identificación.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico -correo electrónico inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia- señalado por el abogado Alfaro García para recibir los actos procesales de comunicación.

4. *Notifíquese*.

"""""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

7-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas y veinte minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por el señor RFMM, junto con la documentación anexa, se realizan las consideraciones siguientes:

I. En síntesis, el actor manifiesta que el 5 de febrero de 2018 le compró un vehículo al señor BFVH; sin embargo, cuando se disponía a realizar el

traspaso respectivo, se le manifestó que dicho bien tenía una restricción, en razón de que el mencionado señor estaba siendo juzgado penalmente por la comisión de determinados delitos.

En ese sentido, afirma que presentó escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) requiriendo que se dejara sin efecto la restricción; no obstante, la citada entidad le respondió el 5 de enero de 2020 que, previo a acceder a su petición, sería investigado para determinar el origen de los fondos con los que compró el referido automóvil, así como si el mismo tenía vinculación con el delito de lavado de dinero y activos.

Asevera que el 23 de marzo de 2021 le solicitó al Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana que levantara la restricción del aludido vehículo, "... pero solo se [le] respondió que se iba a mandar a oír a la [FGR]...".

Sostiene que en fechas 19 de junio y 19 de agosto, ambos de 2022, interpuso nuevamente escritos ante la expresada autoridad judicial en los que reiteró su solicitud, pero "... únicamente [le] notificaron que le concedían cinco días a la [FGR] para que se pronunciara sobre [su] petición...", requerimiento que fue efectuado una vez más el 4 de octubre de 2022, pero a la fecha de la presentación de la demanda de este amparo no había sido respondido.

Por lo expuesto, demanda al Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana por la lesión a sus derechos de propiedad y petición.

II. Establecido lo anterior, conviene ahora, para resolver adecuadamente el caso en estudio, exponer brevemente los fundamentos jurídicos de la presente resolución.

1. La jurisprudencia constitucional –verbigracia las improcedencias de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– ha señalado que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los medios impugnativos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC). Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotado el cauce jurisdiccional o administrativo correspondiente.

2. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de los recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su

finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para requerir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

III. Expuestas las consideraciones precedentes, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El señor MM demanda al Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana por supuestamente omitir responder ciertas solicitudes que planteó relativas a la devolución de determinado vehículo del que es dueño, pues dicho funcionario "... únicamente [le] notific[ó] que le concedía cinco días a la [FGR] para que se pronunciara sobre [su requerimiento]...". Lo anterior, por considerar que se lesionaron sus derechos de propiedad y petición.

2. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 289 del Código Procesal Penal (CPP), en contra de la presunta negativa de la autoridad demandada de devolver el aludido bien procedía la utilización de la figura de la controversia, es decir, en la normativa secundaria aplicable existía un mecanismo que el interesado pudo utilizar a fin de que se restablecieran los derechos fundamentales que se afirma le fueron conculcados.

Así pues, de conformidad con la disposición citada, el señor MM pudo haber generado la controversia en torno a la devolución del vehículo que le fue incautado y, a partir de ello, disponer la formación de un incidente conforme a lo previsto para las excepciones de previo y especial pronunciamiento –artículo 313 del CPP–, en el que tendría la oportunidad de ofrecer la prueba que estimara pertinente y, en caso de que la decisión que emitiese la autoridad competente resultase desfavorable, quedaría habilitado para la interposición del recurso de apelación ante la cámara respectiva –artículos 319 y 464 del CPP–, medio impugnativo que, tal como se indicó en la improcedencia de 14 de enero de 2016, amparo 637-2015, es un mecanismo idóneo para controvertir aquellos actos que puedan resultar lesivos a los derechos de las personas.

De igual manera, en la improcedencia de 13 de enero de 2023, amparo 52-2022, se sostuvo que en aquellos casos en los que la ley habilita su interposición, el recurso de apelación es un medio de impugnación eficaz para subsanar la eventual lesión de derechos fundamentales y, por tanto, a efecto de cumplir con lo prescrito en el artículo 12 inciso 3° de la LPC,

resulta necesario su agotamiento previo a la incoación de un proceso de amparo, o sea, que la apelación es un recurso cuyo planteamiento no puede ser optativo sino de necesaria utilización para la persona que requiere la tutela de sus derechos constitucionales mediante la formulación de una pretensión de amparo.

Sin embargo, de lo expuesto en la demanda se colige que el interesado no agotó las herramientas aludidas y, por el contrario, una vez advertida la aparente negativa de la autoridad demandada, optó por la interposición directa del amparo.

En consecuencia, los mecanismos referidos –especialmente el recurso de apelación consagrado en el artículo 464 del CPP– se perfilan como medios impugnativos cuya exigibilidad es indispensable para cumplir con lo preceptuado por el artículo 12 inciso 3° de la LPC; por ende, al no verificarse tal circunstancia, la queja planteada no cumple con uno de los requisitos imprescindibles para la eficaz configuración de la pretensión de amparo y que tiene asidero en la precitada disposición.

3. Así, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar el acto cuestionado por la falta de agotamiento de los mecanismos específicos franqueados en la legislación secundaria que posibilitarían la discusión y eventual subsanación de la vulneración constitucional generada por la actuación que se impugna, concretamente la controversia que establece el artículo 289 del CPP, lo que le habría permitido al interesado la eventual utilización del recurso de apelación contenido en el artículo 464 del CPP.

De esta forma, debe declararse la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. Por otra parte, el señor MM señala una dirección que se encuentra en el municipio de San Miguel, un telefax y una dirección de correo electrónico para recibir actos de notificación.

Al respecto, el artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos de amparo– dispone que "... [e]l demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad...".

Así, se observa que la dirección brindada se encuentra fuera de San Salvador, circunscripción territorial en la cual se encuentra ubicada la sede de esta Sala, por lo que no podrá tomarse nota del lugar proporcionado.

En cuanto al correo electrónico, pese a que no existe constancia de que dicha dirección se encuentre registrada en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota de tal medio técnico a fin de garantizar el derecho de audiencia de la parte actora.

Con fundamento en lo expuesto, únicamente se tomará nota del número de telefax y la dirección de correo electrónico indicados para tales efectos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el señor RFMM contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana debido a que no se agotaron los medios impugnativos franqueados en la legislación correspondiente para la posible subsanación de la vulneración constitucional alegada.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de los medios técnicos –telefax y correo electrónico– indicados por el interesado para recibir los actos procesales de comunicación.

3. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

119-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por el señor MEHP, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El actor manifiesta su intención de demandar a la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, departamento de Sonsonate, por la sentencia de 27 de junio de 2018 en la que revocó la sentencia pronunciada el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla en el proceso de autorización de despido de empleado público y, en consecuencia, declaró que había lugar a la destitución del señor HF del cargo de oficial aduanero en la Dirección General de Aduanas (DGA), sin responsabilidad para la institución.

Al respecto, explica que ingresó a laborar en la DGA el 3 de abril de 2006 en el cargo de oficial aduanero, desempeñando sus labores en las distintas aduanas del país, siendo la aduana de Acajutla, departamento de Sonsonate, el último lugar donde se desempeñó hasta: el 11 de julio de

2018, en virtud de que —en dicha fecha— se emitió el acuerdo n° *** en el que se dejó sin efecto su nombramiento en el referido cargo a partir del 16 de julio de ese mismo año.

Manifiesta que las imputaciones en su contra —que originaron la destitución del cargo— consisten en: *i)* que el 22 de agosto de 2017, encontrándose en la aduana de Acajutla y utilizando los equipos informáticos, alteró la información contenida en la autorización del régimen de importación de vehículos usados (ARIVU) número **********9 de fecha 16 de agosto de 2016, en el sentido de consignar que el autobús que amparaba la declaración era de dos puertas y no de una puerta como había sido declarado por el propietario; .y *ii)* que el 5 de septiembre de 2017, utilizando su clave de acceso al sistema ARIVU, modificó la información contenida en el ARIVU número **********5 de fecha 6 de febrero de 2016, cambiando la capacidad del autobús que correspondía a la declaración de mercancías No. ***-***, lo cual sólo puede realizarse luego de verificado un procedimiento para rectificar las declaraciones de mercaderías.

En virtud de lo relatado, la DGA inició el proceso: de autorización de despido previsto en la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no comprendidos en la Carrera Administrativa (LRGAEPNCCA) por considerar que el señor HF incurrió en la falta al artículo 31 letra b) de la Ley de Servicio Civil (LSC), consistente en el deber de desempeñar con celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes al ,cargo, siendo esta una causal de despido según el artículo 53 letra a) de la citada ley.

En ese orden, explica que el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla emitió la sentencia de 20 de febrero de 2018, con referencia 8***-***, en la que declaró sin lugar el despido del señor HF. Inconforme con ello, la DGA presentó recurso de revisión ante la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, quien emitió el acto reclamado en el cual revocó la mencionada sentencia y, consecuentemente, declaró que había lugar a la destitución del cargo.

Como resultado de lo expuesto, el actor aduce que se ha menoscabado su derecho a la estabilidad laboral por inobservancia de los principios de tipicidad, culpabilidad, legalidad y seguridad jurídica.

II. Expuesto lo anterior, corresponde establecer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte interesada deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que, se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Tomando en cuenta las consideraciones que anteceden, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones invocadas en el presente caso.

1. Se advierte que la actuación que se pretende impugnar es la sentencia de 27 de junio de 2018 emitida por la autoridad demandada, mediante la cual revocó lo resuelto por el Juzgado de. Primera Instancia de Acajutla y declaró que habla lugar a la destitución del señor MEHF del cargo de oficial aduanero en la DGA, sin responsabilidad para la institución, por la causal establecida en los artículos 53 letra a) con relación al 31 letra b) de la LSC. Dichos artículos prevén como causal de despido el incumplimiento reiterado o grave del deber de desempeñar con celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes a su cargo o empleo.

Lo anterior -en opinión del referido pretensor- ha conculcado su derecho a la estabilidad laboral por inobservancia de los principios de tipicidad, culpabilidad, legalidad y seguridad jurídica, pues aduce que la ley no describe explícitamente los hechos constitutivos de la infracción que la DGA le atribuyó, a pesar de que es exigible que toda conducta ilícita esté suficientemente descrita en la ley, conteniendo una descripción completa de los elementos esenciales, es decir, de las conductas objeto de infracción y sanción.

Asimismo. asevera que la conducta por la cual fue destituido no fue reiterada ni grave. por lo que no hubo elementos objetivos con los cuales llegar al convencimiento de la falta de acierto y eficiencia en el desempeño del cargo y a pesar de ello "[se le] atribuyó] la sanción más gravosa". De ahí, considera que la causal de despido ha sido erróneamente invocada y que la autoridad demandada incurrió en una arbitrariedad al revocar la decisión del juez.

2. Del análisis de los alegatos esbozados en la demanda, se observa que el interesado ha afirmado que existe una transgresión a su derecho, fundamental por la inobservancia de principios constitucionales; sin embargo, partiendo de los argumentos esgrimidos únicamente se evidencia la inconformidad del señor HF con el contenido de la decisión que declaró había lugar a autorizar su despido.

Y es que, en esencia, se infiere que, mediante la presentación de la demanda de amparo, el actor pretende que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, analizando si era procedente o no autorizar el despido y si existían causas justificadas para dicho efecto. Asimismo se procura que se verifique la tipicidad de la conducta, tomando como parámetro las circunstancias particulares del caso concreto la valoración que se efectuó de los elementos probatorios aportados en el proceso de autorización de despido y en el recurso de revisión, así como la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes.

Todo ello, con el propósito de determinar si en efecto la conducta atribuida fue grave o reiterada y si la misma puede ser comprendida en la falta al deber de desempeñar con celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes al cargo. De esta manera, se advierte que la inconformidad del demandante radica en la forma en que la autoridad demandada ha interpretado la normativa aplicable al caso a fin de subsumir los hechos en esta última y los motivos en los que fundamentó la comprobación de la conducta infractora. No obstante, tales situaciones escapan del catálogo de competencias conferido a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

Aunado a lo anterior, de la lectura de las resoluciones anexas a su demanda —sentencias del Juzgado de Primera Instancia de Acajutla y de la Cámara de la Segunda Sección de Occidente —se colige que la separación del actor del cargo que desempeñaba en la DGA obedeció a la comisión de determinadas faltas que le fueron atribuidas y comprobadas —según la autoridad demandada— en el procedimiento de autorización de despido, en el cual tuvo la posibilidad de ser escuchado, intervenir, ejercer su derecho de defensa y de oponerse dentro del recurso de revisión, por lo que no se colige que la actuación impugnada haya ocasionado un agravio de trascendencia constitucional.

Por ende, no se infiere la estricta relevancia constitucional de la pretensión del demandante, pues se advierte que los argumentos expuestos, más que evidenciar una supuesta transgresión del derecho invocado, se reducen a plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con la actuación que impugna.

3. Así pues, el asunto formulado por el actor no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera corno una instancia superior para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, del análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas se verifica que la pretensión formulada carece de trascendencia constitucional, siendo un asunto de mera legalidad. En consecuencia, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo. por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. En otro orden, el señor HF en su demanda consigna un lugar que se encuentra ubicado fuera de la circunscripción territorial del municipio de San Salvador para recibir notificaciones. Así, de conformidad con los artículos 170 y 171 del Código Procesal Civil y Mercantil —de aplicación supletoria en los procesos de amparo—, se le advierte al demandante que, en caso plantee alguna petición o recurso con posterioridad, indique un lugar dentro del municipio de San Salvador o un medio técnico —número de fax o correo electrónico registrado en el Sistema de Notificación Electrónica Judicial de la Corte Suprema de Justicia— para recibir los actos procesales de comunicación; dele contrario se le notificará por medio del tablero de esta Sala.

Ahora bien. en razón de la situación descrita y. referente a la forma en que se llevará a cabo la notificación de la presente resolución al interesado, es preciso instruir a la Secretaría de esta Sala que efectúe tal acto de comunicación mediante comisión procesal al juzgado correspondiente.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo presentada por el señor MEHF contra la Cámara de la Segunda Sección de Occidente departamento de Sonsonate, en virtud de tratarse de un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Instrúyase* a la Secretaría de. esta Sala que comunique la presente providencia a la parte actora mediante comisión procesal al juzgado correspondiente.

3. *Adviértase* a la parte actora que en caso de plantear alguna petición o recurso ante esta Sala deberá señalar una dirección dentro de la circunscripción territorial de este municipio o un medio técnico —fax o correo electrónico registrado en el Sistema de Notificación Electrónica Judicial de la Corte Suprema de Justicia— para efectuar los actos de comunicación en el presente proceso; de lo contrario estos se realizarán mediante el tablero conforme con lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del Código Procesal Civil y Mercantil.

4. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

110-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo presentada por los licenciados ********* y ********** en calidad de apoderados de Picnic Sociedad Anónima de Capital Variable, junto con la documentación anexa, se hacen las siguientes consideraciones:

I. La sociedad demandante, por medio de sus apoderados, manifiesta que reclama contra: *i)* la decisión de 5 de julio de 2022 emitida por el Juez de lo Laboral de Santa Tecla (juez uno) por medio de la cual se condenó a la referida sociedad a pagar a la trabajadora RGDM el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de indemnización por despido injusto, vacación proporcional, aguinaldo proporcional y salarios caídos; *ii)* la resolución de 23 de noviembre de 2022 emitida por la Cámara Segunda de lo Laboral de la Primera Sección del Centro en la que confirmó la anterior decisión y *iii)* el auto de 11 de enero de 2023 en el que la Sala de lo Civil declaró improcedente el recurso de casación incoado.

Al respecto, básicamente mencionan que al ventilarse el proceso laboral en contra de su poderdante no se valoraron las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica lo que terminó desfavoreciendo a su patrocinada condenándola al pago de cierta cantidad de dinero a favor de la trabajadora mencionada y, respecto de las otras dos decisiones, sostienen que en dichas resoluciones las autoridades judiciales habrían omitido pronunciarse respecto del fondo de lo planteado debido a "meros formalismos superables por el mismo razonamiento judicial" lo que ha provocado la lesión a los derechos de acceso a la jurisdicción, audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso– de la sociedad que representan, así como la inobservancia a los principios de legalidad e imparcialidad judicial .

II. Determinados los argumentos de los abogados de la sociedad actora, corresponde en este apartado expresar brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de asuntos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas por los apoderados de la sociedad interesada en el presente caso.

1. Los mencionados profesionales impugnan la sentencia emitida por el Juez de lo Laboral de Santa Tecla (juez uno) por medio de la cual se condenó a la referida sociedad a pagar cierta cantidad de dinero, la resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Laboral de la Primera Sección del Centro en la que confirmó la anterior decisión y el auto en el que la Sala de lo Civil declaró improcedente el recurso de casación incoado.

Al respecto, aducen como vulnerados los derechos de acceso a la jurisdicción, audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso–, así como la inobservancia de los principios de legalidad e imparcialidad judicial de la sociedad actora, debido a que sostienen que el aludido juez condenó a su mandante a pagar a la trabajadora DM indemnización por despido injusto, entre otros, sin que se valoraran las pruebas aportadas conforme a las reglas de la sana crítica y porque existieron muchos formalismos que pudieron haberse superado con razonamiento judicial. Asimismo, consideran que la cámara y sala demandadas no entraron a conocer del fondo de lo planteado.

2. Sobre ello, se verifica de la documentación agregada a este expediente–resolución de 5 de julio de 2022– que en el proceso laboral se emitió sentencia en la que se relacionó la intervención de los apoderados de la sociedad demandante y la prueba de descargo que estos ofrecieron, así como las excepciones que alegaron durante la tramitación del referido proceso laboral. Además, consta que por medio de testigos se logró comprobar la relación laboral entre la trabajadora y la sociedad Picnic; asimismo se acreditó el despido, por lo que aunque no existía contrato de trabajo por escrito, operaban las presunciones legales a favor de la empleada debido a que ni el patrono ni sus representantes se presentaron a la audiencia de conciliación y que con la prueba que presentó la sociedad solo se logró comprobar el despido de hecho en contra de la trabajadora.

Por otro lado, respecto del resto de decisiones impugnadas se advierte que en la resolución emitida en el recurso de apelación de 23 de noviembre de 2022, la referida cámara estableció que no constaba que los apoderados de la sociedad Picnic hayan aportado prueba útil, pertinente y fehaciente de

que la trabajadora había ocasionado inconvenientes en su lugar de trabajo que "causó problemas en el funcionamiento de la imagen de la empresa", supuestamente por tener "conexiones en agrupaciones ilícitas"; por lo que se estableció que los únicos medios de prueba aportados –testimonial y documental– conllevaban a la confirmación de la sentencia recurrida.

Finalmente, en la decisión del 11 de enero 2023 la Sala de lo Civil declaró improcedente el recurso de casación planteado debido a que el reclamo no cumplía con la exigencia legal de procedencia de conformidad con los arts. 586, 602 del Código de Trabajo y 519 ord. 3° del Código Procesal Civil y Mercantil.

En definitiva, de la documentación anexa a la demanda, se advierte que en las resoluciones de 5 de julio de 2022, 23 de noviembre de 2022 y 11 de enero de 2023 se relacionó la prueba vertida en el proceso laboral que, sumada con las presunciones legales, terminó favoreciendo a la trabajadora, por lo que se condenó a la sociedad actora al pago de cierta cantidad de dinero a favor de aquella, decisión que fue confirmada en segunda instancia en el recurso de apelación interpuesto, la cual posteriormente fue impugnada por parte de los abogados de la referida sociedad, por medio del recurso de casación, el cual fue rechazado por falta de cumplimiento de presupuestos procesales.

De lo anterior, se colige que los apoderados de la sociedad demandante únicamente están en desacuerdo con la condena impuesta a su poderdante por parte del juez de lo laboral por haberse comprobado el despido de hecho y favorecido a la trabajadora con dicho fallo; decisión que resultó confirmada en los recursos de apelación y casación.

Y es que, con la queja planteada buscan que esta Sala revise –de conformidad con la normativa secundaria– el proceso individual de trabajo que se siguió en contra de la referida sociedad, la valoración de los medios probatorios aportados y el contenido de la sentencia que la condenó en dicha sede; así como también pretenden que se revise la sentencia del recurso de apelación que confirmó dicha condena y el posterior rechazo al recurso de casación planteado por los apoderados de la actora. Sin embargo, es menester indicar que analizar las pruebas vertidas en un proceso o si se cumplen o no los requisitos para la procedencia de un determinado recurso corresponde exclusivamente a las autoridades ordinarias ante cuyo conocimiento se ha sometido el caso concreto.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido –v. gr. el citado auto pronunciado en el amparo 408-2010– que, en principio, el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen con relación a los enunciados legales que rigen los procedimientos cuyo conocimiento les corresponde y, en consecuencia,

revisar la valoración que aquellas hayan realizado de los medios de prueba ventilados dentro de un trámite especifico o el cumplimiento de los requisitos de procedencia de los recursos, implicaría la irrupción de competencias que, en exclusiva, han sido atribuidas y debe realizarse por los funcionarios y órganos de la materia.

En ese orden, de los argumentos expuestos por los licenciados ********* y ********* se infiere que buscan que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por las autoridades judiciales demandadas, tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las disposiciones infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuyo conocimiento escapa del catálogo de competencias conferido a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos fundamentales.

De tal suerte que no se logra evidenciar la estricta relevancia constitucional de la afectación generada en la esfera jurídica de la sociedad actora como consecuencia de las actuaciones que impugnan sino su simple inconformidad con la condena impuesta a favor de la trabajadora despedida, así como con la confirmación de dicha sanción y el rechazo del recurso de casación intentado ante la Sala de lo Civil; por el contrario, se advierte que se controvierten cuestiones de estricta legalidad, aspectos que no son atribuciones de esta Sala conocer.

3. En definitiva, con arreglo a las circunstancias expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar la constitucionalidad de los actos cuestionados, debido a que la pretensión radica en una cuestión de mera legalidad e inconformidad con las actuaciones reclamadas.

Y es que, la queja formulada no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

De esta forma, ya que el asunto planteado carece de trascendencia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. Por otra parte, se observa que los apoderados de la parte actora han señalado una dirección, correos electrónicos y un número telefónico para recibir notificaciones.

Al respecto, el artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos constitucionales– dispone que "...[e]l demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad...".

En tal sentido, los números telefónicos no posibilitan dejar constancia de la realización de notificaciones, por lo que no podrá tomarse nota de este, en aplicación de la disposición legal relacionada. Por consiguiente, únicamente, se tomará nota del lugar y correos electrónicos proporcionados para recibir los actos procesales de comunicación.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a los licenciados ********* y ********* como apoderados de la sociedad Picnic, Sociedad Anónima de Capital Variable, por haber acreditado en debida forma la personería con la que actúan.

2. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por los referidos profesionales –en la citada calidad– contra el Juez de lo Laboral de Santa Tecla, la Cámara Segunda de lo Laboral de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Civil, en virtud de que la pretensión planteada se sustenta en un asunto de mera legalidad y simple inconformidad con los actos impugnados, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar y medios técnicos (correos electrónicos registrados en el Sistema de Notificación Electrónica) señalados por los abogados de la parte actora para recibir los actos de comunicación procesal, así como de las personas comisionadas para tal efecto.

4. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA–PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

194-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda de amparo firmada por la señora MGL, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La actora expresa que en su contra se promovió un proceso ejecutivo que fue tramitado por el Juez tres del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador (Juez 3CM1), en el que se mostró parte por medio de una defensora pública que le fue asignada por la Procuraduría General de la República (PGR) y alegó la prescripción extintiva de la obligación; debido a ello, se mandó a oír a la acreedora, que ofertó cierta documentación para descalificar dicho motivo de oposición, por lo que se corrió traslado a la abogada de la PGR para que se pronunciara al respecto, sin embargo, no lo hizo "no obstante su legal notificación".

En consecuencia, el Juez 3CM1 sentenció el caso el 24 de noviembre de 2021, desestimando la prescripción invocada y condenando a la deudora al pago de cierta suma de dinero; luego se habría iniciado la ejecución forzosa, en la que –se colige– se adjudicó en pago a la ejecutante un inmueble perteneciente a la señora GL; añadiendo que, aunque la resolución mencionada le fue notificada a su defensora, ella no supo de su emisión hasta que un empleado de su acreedora le informó que "había perdido" su casa.

Como resultado de ello, entiende que dicha providencia le ha causado un agravio de relevancia constitucional, pues al no haberse contestado el traslado conferido a la procuradora que la representaba, "no se celebró audiencia alguna, por ello no tuv[o] la ocasión de [...] ser escuchada en [sus] argumentos"; asimismo, no se habrían aplicado las normas legales pertinentes, ya que, pese a que la obligación exigida se había extinguido, "no [se] sometió a consideración ni a valoración" la prescripción aducida, no obstante que "los 5 años que dice la ley ya habían transcurrido y el derecho [de cobro de la acreedora] ya había precluído".

Por lo anterior, sostiene que se han conculcado sus derechos de propiedad, posesión y defensa –como manifestación del debido proceso–, así como el principio de igualdad jurídica.

II. Determinados los argumentos enunciados por la requirente, es necesario explicar brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará esta decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que su reclamo posee trascendencia constitucional, esto es, deben patentizar la pretendida afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de aspectos puramente judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el contenido de las decisiones tomadas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos, la cuestión

sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

III. Detallado lo precedente, corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones aducidas en el presente caso.

1. La demandante reclama contra la sentencia emitida el 24 de noviembre de 2021 por el Juez 3CM1, que desestimó el motivo de oposición interpuesto y la condenó al pago de cierta cantidad de dinero, debido –básicamente– a que dicho funcionario habría inobservado las leyes aplicables al caso.

Sobre el particular, dice que: *i)* se omitió llamar a la audiencia de prueba prevista en el artículo 467 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), con lo que se le habría privado de la oportunidad de exponer sus argumentos ante el juzgador mencionado y *ii)* se le condenó al pago de una deuda ya prescrita y, por tanto, que no podía ser exigida judicialmente; es decir, sus razonamientos giran en torno a la manera en que se llegó al fallo de la sentencia.

2. En ese sentido, las expresiones de la señora GL evidencian que, en esencia, se encuentra inconforme con el resultado del proceso ejecutivo promovido contra ella y –se deduce– con la hipotética adjudicación en pago de un inmueble de su propiedad.

Y es que, de la demanda se inferiría que procura –en último término– que esta Sala revise la forma en que se tramitó la oposición que interpuso y, además, que establezca que esta debió estimarse en primera instancia, pues –según sus propias acotaciones– el funcionario judicial notificó en legal forma la sentencia de mérito a su defensora pública y, asimismo, hizo del conocimiento de esta la documentación presentada por la contraparte, dándole la oportunidad de pronunciarse sobre ella, lo cual es conforme con lo dispuesto en la normativa legal y jurisprudencia constitucional.

Consecuentemente, lo que realmente se pide es la realización de un contraste, a la luz de las leyes aplicables, de los razonamientos de la pretensora –para quien era indispensable la realización de una audiencia de prueba y, además, que considera que su oposición era atendible– y los de la autoridad demandada –que no valoró necesaria la celebración de una audiencia, según la potestad que le otorgaba el artículo 467 inciso 2° del CPCM y que, con base en las circunstancias particulares del caso y la prueba aportada, concluyó que la obligación objeto del proceso no había prescrito–.

De este modo, para atender los reclamos de la peticionaria, este Tribunal tendría que sustituir en sus funciones a la jurisdicción ordinaria, esto es, entrar a valorar la legislación secundaria en relación con las circunstancias manifestadas, lo que se constituye en una cuestión de eminente aplicación

e interpretación de las leyes comunes, con lo cual, se estaría desnaturalizando el proceso de amparo al pretender utilizarlo como un mecanismo para revisar la legalidad del acto reclamado y no como el medio para la subsanación de presuntas lesiones a derechos fundamentales.

3. Acerca de lo anterior, es conveniente traer a colación lo dicho por esta Sala –*v. gr*. la citada improcedencia del amparo 408-2010– en cuanto a que el ámbito constitucional carece de competencia material para efectuar el análisis relativo a la interpretación y aplicación que las autoridades judiciales o administrativas desarrollen sobre los enunciados legales que rigen los trámites cuyo conocimiento les concierne.

De tal modo, este Tribunal no es competente para declarar si aquel caso podía o no ser resuelto solo con la documentación que fue aportada o si debía haberse citado a una audiencia de prueba –*teniendo en cuenta que las partes, por medio de los traslados conferidos, pudieron argüir lo que consideraron oportuno–,* tampoco lo es para definir la exigibilidad de la obligación reclamada en dicho juicio, ni para pronunciarse sobre si las decisiones del juzgador fueron las adecuadas de acuerdo con los supuestos del caso específico; pues este ha interpretado y aplicado su criterio jurídico particular respecto de los artículos que incumben al caso concreto y los elementos probatorios que obran dentro del proceso, lo cual se encuentra dentro de las facultades que le han sido conferidas.

De igual manera, las afirmaciones para justificar la supuesta inconstitucionalidad de la resolución impugnada no logran evidenciar la denunciada lesión de los derechos fundamentales invocados, sino una mera inconformidad entre las expectativas personales de la interesada y la decisión adoptada por el juez demandado.

En ese marco, se advierte que los argumentos de la solicitante están orientados a que se arribe a una conclusión diferente de la obtenida por dicha autoridad, tomando como parámetro para ello las circunstancias particulares del caso concreto y la aplicación de las leyes infraconstitucionales correspondientes, situaciones cuya verificación escapa del catálogo de competencias conferidas a esta Sala por estar circunscrita su función exclusivamente a examinar si ha existido vulneración a derechos constitucionales.

4. Así, en este caso no corresponde al ámbito constitucional conocer del reclamo formulado, por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos reconocidos a favor de las personas.

Por ende, evaluar –conforme a las disposiciones legales de la materia y las particularidades del supuesto planteado– los razonamientos de la autoridad demandada para decidir en la forma en la que lo hizo, es un aspecto que no es competencia de esta Sala conocer, pues implicaría la irrupción de facultades que, en exclusiva, han sido atribuidas y deben realizarse por los jueces y tribunales ordinarios.

De esta forma, ya que el asunto detallado carece de trascendencia constitucional, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

5. Establecido lo anterior, resulta inevitable referirse a que, según los alegatos expuestos por la firmante, la defensora pública que fue nombrada para representar sus intereses en el aludido proceso habría actuado de manera negligente al no evacuar el traslado que le fue conferido; a propósito, resulta oportuno resaltar que si la interesada considera que dicha profesional ha incumplido con la labor que le fue asignada, puede acudir a las instancias correspondientes en sede administrativa para exponer su caso.

IV. Finalmente, se ha señalado una dirección dentro de la ciudad de San Salvador y un correo electrónico como medios para para recibir notificaciones.

En relación con esto, pese a que no existe constancia de que este último se encuentre registrado en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota de él, para garantizar el derecho de audiencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo interpuesta por la señora MGL contra el Juez tres del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en virtud de que su reclamo se reduce a cuestiones de estricta legalidad y de simple inconformidad con la actuación impugnada, cuyo conocimiento no corresponde a esta Sala.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del lugar y del medio técnico –correo electrónico– señalados por la demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.–GARCÍA–PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

208-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Analizada la demanda firmada por el señor LAS, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El requirente expresa que fue demandado por el Fondo Social para la Vivienda en un proceso ejecutivo tramitado ante el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, debido a lo cual acudió a la Procuraduría General de la República a fin de obtener asesoría jurídica en dicha institución, la que designó una defensora pública para que lo representara en aquel proceso –que, dice, no ejerció una defensa técnica efectiva pues no alegó ningún motivo de oposición ni interpuso recurso alguno–.

Ahora bien, en ese juicio se embargó un inmueble de su propiedad, se pronunció sentencia condenatoria y, una vez iniciada la ejecución forzosa, se adjudicó en pago dicho bien a favor de una tercera adquirente, sin que ninguna actuación procesal se hubiera comunicado personalmente al señor S, hasta el auto de 26 de junio de 2023 en el que el juzgador realizó la transferencia de dominio del bien aludido a favor de la rematante y le otorgó 30 días a los ocupantes del inmueble –el actor y su familia– para desalojarlo, so pena de proceder a su lanzamiento forzoso.

Ante tal situación, acudió a la sede judicial señalada, en donde se le hizo saber que su procuradora era a la única a quien tenía que ponerse en conocimiento de las resoluciones y sentencias; sin embargo, considera que esta interpretación sobre la manera de informar a las partes lo sucedido dentro del proceso generó una vulneración de sus derechos de defensa y a la seguridad jurídica, dado que –opina– la ley exigiría que todos los actos se notifiquen no solo a las partes técnicas, sino también a las materiales; es decir, que todo lo ocurrido en el juicio debió hacérsele saber a él personalmente además de a su defensora.

II. Determinados los argumentos expresados por el pretensor, es necesario exponer brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se sostuvo en el sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006, este proceso constitucional persigue que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

En ese sentido, para la procedencia al inicio del proceso de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros requisitos– que el sujeto activo

se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión –lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente *agravio*–. Dicho agravio tiene como requisitos que se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional –elemento jurídico– y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable –elemento material–.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional cuando el acto u omisión alegado es inexistente o cuando, no obstante concurra una actuación u omisión por parte de la autoridad a quien se le atribuye la responsabilidad, *aquella ha sido legítima, es decir, se ha realizado dentro del marco constitucional* o es incapaz de producir por sí misma una afrenta en la esfera jurídica constitucional del sujeto que reclama.

Consecuentemente, si la pretensión del demandante no incluye los elementos antes mencionados, hay ausencia de agravio constitucional y la pretensión debe ser rechazada por existir imposibilidad absoluta de juzgar el caso desde el ámbito constitucional.

III. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas en el presente caso.

1. El señor LAS demanda al Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel debido a que este, dentro de un juicio ejecutivo promovido en su contra, notificó las resoluciones –sentencia, despacho de ejecución, cita a subasta, entre otras– únicamente a su defensora pública que había sido designada para representarlo, pasando por alto darle parte también a él de tales providencias, con lo cual considera que se han transgredido sus derechos, pues –dice– la ley le impone a los funcionarios judiciales la obligación de informar de sus decisiones tanto a las partes técnicas como a las materiales, lo que fue incumplido por el juzgador relacionado.

2. En relación con lo expuesto, se advierte que el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) dispone que: "[e]n los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso", a su vez, el artículo 169 de dicha ley ordena que toda resolución judicial se notifique en el más breve plazo y, por último, el artículo 176 inciso 1° de ese cuerpo normativo establece que: "[s]iempre que la parte compareciere por procurador éste recibirá todas las notificaciones que se refieran a su representado, aún la de la sentencia o auto que pone fin al proceso, con el valor y eficacia establecidos en este código".

En ese sentido, en la sentencia de 14 de diciembre de 2011, inconstitucionalidad 46-2010, este Tribunal sostuvo que la configuración legal de la postulación preceptiva se convierte en un presupuesto procesal sin el cual no es posible que el proceso se lleve a cabo, pues es un factor esencial para el pleno ejercicio del derecho de defensa; asimismo, que el fundamento constitucional de esa figura se encuentra en los artículos. 2 y 11 de la Constitución y que la asistencia de un abogado tutela de mejor forma los intereses de las partes, ya que: "La defensa técnica, como garantía del debido proceso tiene su configuración constitucional en la protección jurisdiccional; ello porque, ante la incuestionable diversidad y complejidad que en muchos casos revisten los conflictos entre particulares, la persona común requiere asistencia técnica para el acceso efectivo a la justicia; además, es indispensable que este acceso se rodee de todas las garantías, esto es, dentro de un proceso constitucionalmente configurado".

De ese modo, a partir de los hechos expuestos en la demanda y la documentación aportada, no es posible colegir la existencia de alguna privación, daño o lesión de rango constitucional que pudiera afectar la esfera jurídica del señor Solís, ya que –según sus propias expresiones– el juez cuestionado notificó en legal forma todas sus resoluciones a la defensora pública que actuaba en su nombre dentro del juicio antedicho.

Desde esa perspectiva, no se advierte la forma en que la situación impugnada pudo haber causado un agravio de relevancia constitucional en la esfera jurídica del demandante, ya que el funcionario actuó conforme al marco legal vigente, pues hizo saber sus decisiones a la profesional del derecho que representaba al señor Solís, asegurando el ejercicio efectivo del derecho de defensa de este, lo cual es conforme con lo dispuesto en la normativa secundaria y la jurisprudencia constitucional.

Así, la queja se fundamenta en el desacuerdo entre las expectativas personales del interesado y el resultado obtenido en el proceso judicial instaurado contra él, sin un trasfondo de relevancia constitucional, pues básicamente se limita a manifestar su inconformidad con la forma en que se efectuaron las comunicaciones en el aludido proceso conforme a lo regulado en la ley de la materia.

Aunado a lo anterior, de los alegatos expuestos por el demandante se advierte que, aparentemente, la defensora pública que fue nombrada para que representara sus intereses en el aludido proceso ejecutivo habría actuado de manera negligente. Al respecto, si el interesado considera que dicha profesional ha incumplido con la labor que le fue asignada, puede acudir a las instancias correspondientes en sede administrativa para exponer su caso.

3. En consecuencia, con base en las consideraciones expuestas, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar la constitucionalidad de la situación cuestionada, debido a que esta *ha sido legítima, porque el juez demandado se ha ajustado a las reglas establecidas legalmente en relación con los actos procesales de comunicación, es decir, se ha realizado dentro del marco constitucional,* ya que dicho funcionario cumplió con su obligación de hacer saber sus resoluciones a la procuradora que representaba al pretensor en el proceso de primera instancia, con lo cual se garantizaban sus derechos constitucionales.

De tal forma, es pertinente declarar la improcedencia de la demanda de amparo, por concurrir un defecto en la pretensión que habilita la terminación anormal del proceso.

IV. Finalmente, se observa que el señor Solís ha establecido un correo electrónico como medio para recibir notificaciones.

En relación con ello, pese a que no existe constancia de que este se encuentre registrado en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota de él, para garantizar el derecho de audiencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la demanda de amparo firmada por el señor LAS contra el Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, ya que la situación que impugna no es susceptible de causar un perjuicio de trascendencia constitucional en su esfera jurídica, pues lo actuado en primera instancia fue informado en debida forma por medio de su defensora pública, como ordena la legislación procesal civil y mercantil; en consecuencia, las comunicaciones procesales se llevaron a cabo conforme al marco constitucional.

2. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala del medio técnico –correo electrónico– señalado por la parte actora para recibir los actos procesales de comunicación.

3. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

447-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas del día diez de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por el señor JRPA contra la Unidad de Relaciones Laborales de la Gerencia de Talento Humano y la directora ejecutiva, ambos del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), por la suspensión de su acuerdo de nombramiento como médico I en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Santa Elena, departamento de Usulután, desde el 20 de marzo de 2018, así como por omitir dar inicio a un procedimiento previo para su despido, respectivamente, con lo cual aparentemente habrían vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la garantía del "juez natural".

Mediante auto de 13 de febrero de 2023, notificado el día 23 de ese mismo mes y año en el medio técnico designado para tales efectos –correo electrónico–, se previno al mencionado demandante que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo legalmente previsto para que el actor evacuara las prevenciones en comento, sin que este lo haya hecho dentro del término que se le otorgó.

En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el señor JRPA contra la Unidad de Relaciones Laborales de la Gerencia de Talento Humano y la directora ejecutiva, ambos del Fondo Solidario para la Salud, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

296-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por la señora EPVDP, por medio del cual pretende subsanar las prevenciones efectuadas.

Analizados la demanda y el referido escrito, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por la señora PVDP contra el Juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, por la supuesta lesión a sus derechos de seguridad jurídica, propiedad, "a la motivación de las resoluciones", "a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional", audiencia y defensa –estos dos últimos como manifestaciones del debido proceso–, así como el principio de congruencia.

Mediante auto de 7 de diciembre de 2022, notificado el 20 de diciembre de 2022 en el correo electrónico designado para tales efectos, se previno a la aludida señora que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que la actora presentó el 10 de marzo de 2023 un escrito en el que pretende subsanar las deficiencias de su demanda, ya que afirma que el 8 de marzo de 2023 fue notificada personalmente de la citada resolución de 7 de diciembre de 2022; sin embargo, de la lectura del acta de notificación respectiva se observa que el acto de comunicación fue realizado el 20 de diciembre de 2022 en el medio técnico designado para tales efectos, es decir, que al momento de presentar el relacionado escrito, dicho plazo había finalizado.

En ese sentido, se observa que el escrito firmado por la señora PVDP fue presentado de manera extemporánea ante esta sede, pues ya había transcurrido el término conferido a la parte demandante para evacuar las

prevenciones formuladas. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

III. Por otra parte, el abogado Juan Carlos Huezo Ayala, en calidad de apoderado general judicial de la señora OKEM, solicitó por medio de escrito de 25 de abril de 2022 que se autorizara la intervención de su representada como tercera beneficiada, así como que se declarara la improcedencia de la demanda presentada por la parte actora.

Sin embargo, en virtud de que con el presente pronunciamiento este amparo finaliza liminarmente, resulta innecesario emitir un pronunciamiento al respecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la demanda de amparo firmada por la señora EPVDP, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

318-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se hacen las siguientes consideraciones:

I. 1. Este proceso de amparo fue iniciado por los señores MEL, JEG, JAG y otros que aparentemente cuestionaban la resolución MARN-DEB-079-2022, emitida el 7 de marzo de 2022 por el Director General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la presunta vulneración de sus derechos a un medioambiente sano y de defensa, ya que la autorización de la tala de seis pinos que se encontraban dentro de un área natural protegida trascendía a un interés colectivo, pues en dicha zona existe un nacimiento de agua de gran envergadura para varias comunidades aledañas.

Aunado a ello, manifestaron que el MARN omitió realizar la consulta pública respectiva, lo que les impidió externar su opinión y preocupación respecto al permiso en cuestión.

2. Mediante auto de 14 de abril de 2023 notificado el 5 de mayo de 2023, mediante el correo electrónico señalado en la demanda para tales efectos, se previno a la parte actora que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclararan ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ha transcurrido el plazo conferido a los supuestos demandantes para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo hayan hecho dentro del término legalmente previsto. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la demanda de amparo aparentemente firmada por los señores MEL, JEG, JAG y otros, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. Notifíquese.

"—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""""

434-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

Tiénese por recibido el escrito firmado por el abogado **********, como apoderado judicial de la sociedad Operaciones Químicas, Sociedad Anónima de Capital Variable (OQUIM), mediante el cual pretende evacuar las prevenciones realizadas.

Analizados la demanda de amparo y el mencionado escrito, se realizan las siguientes consideraciones:

I. De manera inicial, debe tomarse en cuenta que el documento presentado por el abogado ********** fue remitido mediante correo electrónico.

Al respecto, esta Sala sostuvo –por ejemplo– en las resoluciones de 26 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2020, pronunciadas en el hábeas corpus 148-2020 y el amparo 167-2020, respectivamente, que en aquel momento se habían emitido una serie de decretos ejecutivos y legislativos que contenían limitaciones a la libertad de circulación y que regulaban que todos los habitantes del territorio de la República debían guardar cuarentena domiciliar obligatoria, salvo excepciones.

A consecuencia de las medidas establecidas, existía una probabilidad real de que las personas no pudieran presentar sus demandas y escritos materialmente en la Secretaría de esta Sala tal como lo prevé la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); sin embargo, la restricción para el libre tránsito no debía representar un obstáculo para tutelar de manera efectiva sus derechos fundamentales, pues ello es exigencia del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 de la Constitución–.

Por tanto, esta Sala dispuso que serían analizadas las demandas y escritos remitidos por los ciudadanos al correo electrónico institucional de esta Sala, debiendo asegurar los peticionarios el correcto envío de ellos, conforme con las demás exigencias formales que establece la LPC y en observancia de los plazos establecidos en esta. La Secretaría de esta Sala confirmaría la recepción de las peticiones y se encargaría de su trámite posterior.

II. 1. Sustancialmente, el profesional citado manifiesta que OQUIM fue demandada en un juicio individual ordinario de trabajo, cuyo conocimiento correspondió al Juez Primero de lo Laboral de San Salvador (Juez 1LB1), en el que dicha sociedad solicitó que se pidiera a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) un informe de los movimientos migratorios de la trabajadora demandante, a fin de acreditar que esta había salido del país sin autorización de su empleador, por lo que, a su criterio, se había configurado un abandono de trabajo como causal de terminación del contrato laboral sin responsabilidad para el patrono. Asimismo, manifiesta que se pidió el mismo tipo de informe, respecto a la representante legal de la sociedad requirente, a la DGME, con el objeto de acreditar su imposibilidad para comparecer a rendir declaración de parte contraria en la fecha señalada para ello.

Para sustentar su reclamo, expuso que el juez omitió resolver la petición referida, pese a manifestar que sobre ello se proveería en el momento procesal oportuno y, en el mismo sentido, la DGME se negó a entregar el informe de la representante legal, argumentando que el poder que se había presentado para solicitarlo no facultaba al apoderado para retirarlo de esa instancia administrativa.

De esa manera, dichas autoridades habrían ocasionado que la parte patronal se viera afectada en sus derechos de propiedad, seguridad jurídica, audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso–, dado que, de haberse contado con esos movimientos migratorios, se hubiera comprobado el abandono de trabajo y la imposibilidad de rendir declaración de parte contraria en la fecha señalada y no habría operado la presunción prevista en el artículo 414 del Código de Trabajo.

2. En razón de haberse advertido que el abogado ********* no contaba con facultades para representar judicialmente a la sociedad requirente, por las razones detalladas en el auto de 29 de marzo de 2023, se le previno para que presentara la documentación idónea para acreditar la calidad en la que pretendía actuar.

Asimismo, al existir aspectos por esclarecer en cuanto a la configuración de la pretensión, esta Sala previno que se señalara con exactitud: *i)* las autoridades a quienes se colocaba en el extremo pasivo de la demanda; *ii)* los actos de decisión concretos y de carácter definitivo que se atribuían a las autoridades que finalmente se demandaran; *iii)* la estricta trascendencia constitucional del presunto agravio ocasionado en la esfera jurídica de la sociedad actora como consecuencia de los actos que en definitiva se impugnaran; *iv)* por qué se consideraban transgredidos los derechos de audiencia y defensa de la sociedad interesada, especialmente cuando esta tuvo la oportunidad de intervenir en el proceso a través de sus representantes; *v)* la manifestación concreta del derecho de propiedad que le había sido conculcada a la sociedad demandante, así como las razones por las que se estimaba transgredido; *vi)* si se había hecho uso de los recursos de apelación y casación para controvertir las situaciones a las que se aludía en la demanda. En caso de haberse hecho, debía manifestarse si ya existían resoluciones definitivas, las autoridades que los sustanciaron, el sentido en que se pronunciaron los fallos, si también se orientaba la queja contra ellas, los derechos que se estimaban lesionados como consecuencia y los motivos en que se hacían descansar esas presuntas transgresiones. De lo contrario, tenían que indicarse las razones objetivas por las que no se agotaron dichos medios impugnativos y *vii)* que se anexaran –de ser posible– copias de las distintas resoluciones a las que se aludía en la demanda, así como de las que se hubieran emitido en los citados medios impugnativos, en caso de haberse agotado los mismos.

III. Corresponde analizar si los alegatos planteados en el escrito de evacuación de prevención logran subsanar las observaciones formuladas.

1. A. En relación con las autoridades a quienes se coloca en el extremo pasivo de la demanda, el abogado JCVA señala expresamente, en el número 1 de su escrito, que son el Juez 1LB1 y la DGME; sin embargo, en el número 6 del mismo documento, manifiesta que se interpusieron recursos

de apelación y de casación, por lo que "puede ampliarse las quejas [sic] contra estas instancias de conocimiento especializado, pues han ratificado la acción de conculcar los derechos de defensa y audiencia de [su] representada...".

Tal declaración resulta incierta, en tanto que el uso de la expresión "puede" –en su sentido natural y obvio (artículo 20 del Código Civil)– indica que para el abogado es posible o contingente integrar a esas autoridades como parte del elemento subjetivo de su pretensión, dejando –en apariencia– a criterio de este Tribunal si ello debe ocurrir o no, lo que, en el fondo, sugeriría el planteamiento de una pretensión a título alternativo. A partir de ello, se colige que el mencionado profesional no ha subsanado adecuadamente este aspecto de la prevención, pues continúa dejando en indeterminación el aspecto pasivo de su pretensión, tomando en cuenta que son las partes las que deben establecer los extremos de su reclamo.

B. Por otro lado, aun si fuera posible entender que en efecto se pide tener como partes demandadas a los tribunales de apelación y casación, resultaría que, de todas formas, se habría incumplido con lo requerido en la prevención realizada, ya que no se han brindado las razones claras y objetivas por las que se les atribuye la lesión de los derechos fundamentales de OQUIM, pues la frase "han ratificado la acción de conculcar los derechos de defensa y audiencia de [la demandante]" es simplemente una afirmación carente de argumentación jurídica que permita a esta Sala evaluar la pretensión desde una perspectiva constitucional y que no podría ser subsanada oficiosamente, por no tratarse de un error de derecho.

De ese modo, el análisis de lo expresado en la evacuación de las prevenciones permite advertir que aún continúa la imprecisión señalada sobre este aspecto y, en consecuencia, no puede tenerse por subsanada en debida forma esta prevención.

2. A. En cuanto a los actos de decisión concretos y definitivos contra los que se reclama, el abogado ********** señala que son: i) "la omisión manifiesta" del Juez 1LB1 de no resolver la petición de pedir un informe de movimientos migratorios de la trabajadora demandante, y ii) el "acto concreto y de carácter definitivo" consistente en la negativa de la DGME de no entregar el informe de movimientos migratorios de la representante legal de OQUIM.

B. Ahora bien, esta Sala expresó en la improcedencia de 20 de febrero 2009, amparo 1073-2008, que se encuentra impedida de analizar los actos que carecen de definitividad por tratarse de actuaciones de trámite o sujetas a una decisión que puede controlarse ulteriormente en el mismo procedimiento mediante el mecanismo de control jurisdiccional en otras instancias o grados.

Por ello, para promover el proceso de amparo constitucional es imprescindible que el acto u omisión impugnada sea de carácter definitivo, capaz de generar en la esfera jurídica del demandante un agravio de igual naturaleza con trascendencia constitucional; caso contrario, resultaría contraproducente la sustanciación de un proceso cuya pretensión carezca de uno de los elementos esenciales para su adecuada configuración, pues ello volvería improductiva su tramitación.

C. A pesar de lo anterior, el abogado citado se limita a reiterar, básicamente, lo dicho en la demanda, sin –al menos– argumentar por qué entiende que las circunstancias que pretende someter al control de esta sede serían capaces de producir un agravio de naturaleza definitiva en la esfera jurídica de la demandante, ya que –en principio– no habrían sido estas, *por sí mismas*, las que incidieron de manera permanente en sus derechos o situación jurídica, como sería el caso de la sentencia de mérito y las resoluciones que agotaron los recursos legalmente procedentes (artículo 12 inciso 3° de la LPC).

Por tales razones, no se puede tener por evacuada en debida forma la prevención realizada.

3. En cuanto a la estricta trascendencia constitucional del agravio alegado, se advierte que el abogado ********* ha reiterado que este consiste –sustancialmente– en que las presuntas omisiones incidieron de forma negativa en la decisión judicial, pues de haberse contado con los informes de movimientos migratorios señalados en su demanda, se hubiera acreditado la causal alegada para la procedencia del despido sin responsabilidad patronal y no habría operado la presunción establecida en el artículo 414 del Código de Trabajo y –presumiblemente– OQUIM obtendría una decisión judicial favorable.

Sin embargo, como se indicó en el auto de 29 de marzo de 2023, tales planteamientos no podrían ser objeto de conocimiento del ámbito constitucional, por configurarse como asuntos de mera legalidad que, así expuestos, solo revelarían la pretensión de que esta Sala revise los sucesos acaecidos en la primera instancia de un proceso laboral, conforme a las normas infraconstitucionales pertinentes y la prueba aportada, lo cual no forma parte de su competencia.

En razón de ello, se advierte que con sus argumentos el abogado aludido continúa sosteniendo una mera inconformidad con las situaciones reclamadas, sin haber sustentado de qué manera estas implicarían una afectación de relevancia constitucional en la esfera jurídica de OQUIM.

4. En otro orden, sobre los motivos que fundamentan la transgresión de los derechos de audiencia y defensa, el aludido abogado manifiesta que, si bien OQUIM tuvo participación en el juicio, la omisión del juzgador

impidió que tuviera acceso a elementos de prueba documental con los que se pretendía demostrar el supuesto abandono de trabajo y la imposibilidad de rendir declaración de parte contraria en la fecha señalada para tales efectos.

Sobre lo expuesto, se observa que las aseveraciones realizadas no corresponden con el contenido material del derecho de audiencia, establecido por ejemplo en la sentencia de 12 de noviembre de 2010, amparo 40-2009, citada por el propio abogado; de igual manera, no se brindan argumentos jurídicos que evidencien la afectación del mencionado derecho y, en tal sentido, no puede considerarse como evacuada en debida forma esta prevención, al no haberse brindado los motivos que fueron requeridos y que serían necesarios para que este Tribunal pudiese llevar a cabo un juzgamiento desde la perspectiva constitucional.

5. En cuanto la manifestación concreta del derecho de propiedad que se consideraba vulnerada y las razones objetivas por las que se estimaba transgredida, el abogado de la interesada se limita a señalar que una sentencia condenatoria contra OQUIM "a todas luces genera[ría] un pasivo inminente en la empresa, que mermará[,] sin duda[,] el patrimonio social [...] y su capacidad operativa".

Así, debe destacarse que, como sucede en otras partes de su escrito, el abogado realiza una afirmación carente de argumentos y, en este escenario, especulativa, la cual –en todo caso– supondría el planteamiento de un agravio de futuro remoto, que no se enmarca dentro del ámbito de protección del amparo, pues su fundamentación se encuentra conformada por hechos inciertos, eventuales y cuya producción –si llegara a ocurrir– caería dentro del área de lo incierto y sus efectos serían totalmente aproximados, ya que no posee ningún tipo de conexión íntima, ni sólida, con el presente – improcedencia de 14 de febrero de 2000, amparo 819-99 y la sentencia de 19 de noviembre de 2002, amparo 549-2000–, por lo que tampoco se ha subsanado adecuadamente este aspecto de la prevención.

6. Por lo expuesto, se concluye que, a pesar de las prevenciones formuladas, aún se dejan en indeterminación ciertas circunstancias necesarias para la adecuada configuración de la pretensión planteada, pues no solo no se han señalado de forma expresa los actos concretos y definitivos contra los que podría válidamente dirigirse esta, sino que, además, no se ha logrado establecer la estricta relevancia constitucional del agravio aparentemente ocasionado en la esfera jurídica de la parte actora en relación con las situaciones reclamadas ni las razones en las que se fundamentan las vulneraciones de los derechos fundamentales presuntamente afectados como resultado de los hechos descritos en la demanda.

IV. Con fundamento en lo reseñado, se deduce que el abogado ********* no ha aclarado o corregido las deficiencias advertidas en su demanda, por lo que esta deberá declararse inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 18 de la LPC, el cual determina que la falta de aclaración o corrección satisfactoria de la prevención producirá dicho efecto.

Y es que, el supuesto hipotético de la mencionada disposición no puede entenderse únicamente en cuanto a la presentación en tiempo del escrito que pretende evacuar las prevenciones, pues aquel implica, además, que mediante él se subsanen efectivamente las deficiencias de la demanda advertidas inicialmente por esta Sala, lo que en este caso particular no ha sido satisfecho.

No obstante, debe aclararse que dicha declaratoria no es impedimento para que la actora pueda formular nuevamente su queja ni para que se analice su procedencia, *siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.*

V. Por otro lado, el abogado señalado solicitó que esta Sala requiriera" copia[s] certificadas de las resoluciones del expediente de la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador y del Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador [...] así como [de] la resolución de la Sala de lo Civil, a efecto[s] de poder ilustrarse mejor de todo lo acontecido".

Sobre ello, es fundamental recalcar que el artículo 82 de la LPC dispone: "Todo funcionario o autoridad está en la obligación de ordenar dentro de tercero día que se extiendan las certificaciones que se les pidiere, siempre que en la solicitud se exprese que el objeto de la certificación es para que pueda surtir efecto en un proceso constitucional; y aun cuando la persona solicitare certificación de expedientes, procesos o archivos relativos a ella misma, o a sus bienes, que por leyes especiales tengan carácter de secreto o reservado. El funcionario o autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá directamente y sin dilación al tribunal que esté conociendo en el proceso constitucional".

En ese sentido, para que se pudiera requerirse a las autoridades citadas que extendieran certificación de los documentos o expedientes que custodian, sería necesario que la parte interesada las hubiera solicitado previamente.

De este modo, se advierte que en el presente caso no se han cumplido los requisitos del citado artículo y, además, en razón de que con esta resolución finaliza anormalmente este proceso, deberá declararse sin lugar dicha petición.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el abogado JCVA en calidad de apoderado judicial de la sociedad Operaciones Químicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador y la Dirección General de Migración y Extranjería, en virtud de no haberse evacuado adecuadamente las prevenciones que fueron realizadas.

2. *Declárase sin lugar* la petición formulada por el abogado ********* relativa a que se requieran copias certificadas de las resoluciones expresadas en su escrito, por no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y en virtud de la decisión de finalización anormal del proceso adoptada en la presente resolución.

3. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENITEZ—RUBRICADAS—"""

334-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. Este proceso de amparo fue promovido por la abogada ********* en calidad de apoderada de las señoras MAF conocida por MAFA, ACRH conocida por ACRI y SJOC contra el Ministro de la Defensa Nacional, por la aparente falta de reconocimiento de la prestación económica por la renuncia voluntaria al empleo regulada en el artículo 30-A de la Ley de Servicio Civil, con lo cual se habrían inobservado los derechos a la seguridad jurídica, a la estabilidad laboral, de audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso–, así como el principio de igualdad.

Mediante auto de 23 de enero de 2023 –notificado el 27 de febrero de ese mismo año en el medio técnico señalado en la demanda para tal efecto– se previno a la citada profesional que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido a la abogada ********** para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo haya hecho dentro del término que se le otorgó. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo interpuesta por la abogada ********* en representación de las señoras MAF conocida por MAF Aparicio, ACRH conocida por ACRI y SJOC contra el Ministro de la Defensa, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES. C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—RUBRICADAS—"""

418-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. Este proceso de amparo fue promovido por la abogada Ana María del Carmen Vásquez García en calidad de apoderada de las señoras MAFA conocida por MAFA, ACRDH conocida por ACRI y SJODC contra el Ministro de la Defensa Nacional, por la aparente falta de reconocimiento de la prestación económica por la renuncia voluntaria al empleo regulada en el artículo 30-A de la Ley de Servicio Civil, con lo cual se habrían inobservado los derechos a la seguridad jurídica, estabilidad laboral, de audiencia y defensa –como manifestaciones del debido proceso–, así como el principio de igualdad.

Mediante auto de 22 de febrero de 2023 –notificado el 24 de marzo de ese mismo año en el medio técnico señalado en la demanda para tal efecto– se previno a la citada profesional que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido a la abogada Vásquez García para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo haya hecho dentro del término que se le otorgó. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo interpuesta por la abogada Ana María del Carmen Vásquez García en representación de las señoras MAFA conocida por MAFA, ACRDH conocida por ACRI y SJODC contra el Ministro de la Defensa Nacional, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

""—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O CANALES—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

73-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por el abogado Miguel Ángel Anaya Arteaga, por medio del cual intenta subsanar las prevenciones efectuadas.

Analizados la demanda de amparo y el escrito presentado, se realizan las siguientes consideraciones:

I. En síntesis, en el mencionado escrito el referido profesional refiere, entre otros puntos, que sus poderdantes no han emitido ni firmado alguna declaración en la cual eximan de responsabilidad a la autoridad demandada; asimismo, menciona las funciones que realizaban los señores: SERA, AMCDP, SEGA, DESA, ZAMDM, AEH, OAR, JALR, EMADC, FDJR y AGS, a quienes relaciona como sus "representados".

No obstante, en su demanda el licenciado Anaya Arteaga manifestó que actuaba en calidad de apoderado de los señores: MESP, DDCMP, MIVH, MMMDD, VFNF, JCGA, DOMM, LEVF, MECC, JME, NLBC, EEMR y NEMM y no de las personas que señala en el escrito de evacuación de prevención.

II. Ahora bien, es menester recapitular que al existir aspectos por esclarecer en cuanto a la configuración de la pretensión, esta Sala previno al referido profesional que aclarara las siguientes imprecisiones que imposibilitaban la adecuada configuración de la pretensión: *i)* si, a la fecha, los actores habían recibido alguna cantidad de dinero en concepto de la indemnización como resultado de la supuesta terminación de su relación laboral con la municipalidad de San Salvador o habían emitido alguna declaración por escrito en la cual eximieran a la autoridad demandada de responsabilidad por la situación que le imputaban; *ii)* las funciones que realizaban cada uno de sus poderdantes en la municipalidad de San Salvador; *iii)* si efectivamente pretendía argüir la infracción del derecho a la seguridad jurídica de sus mandantes o si en realidad intentaba aducir la afectación de derechos fundamentales más específicos, indicando, además, las causas concretas en las que sostenía la supuesta lesión de los derechos constitucionales que indicara; *iv)* las razones por las que aseveraba que sus representados eran titulares del derecho a la estabilidad laboral; *v)* si sus poderdantes habían promovido de manera previa o paralela a este amparo otro proceso o recurso con el objeto de impugnar las situaciones narradas en su demanda —por ejemplo, ante la jurisdicción contencioso administrativa—; de ser así, tendría que precisar ante cuál autoridad y cuál fue su resultado o si se encontraba pendiente de resolver; también, debía expresar, en caso de haberse resuelto, si reclamaba contra la decisión emitida, identificando los derechos que se habrían vulnerado con tal actuación y los motivos para sustentar esa transgresión; por el contrario, en caso de no haberse hecho uso de ningún medio impugnativo, tendría que explicar las razones que le impidieron a sus mandantes utilizarlo.

III. En ese sentido, corresponde analizar si los alegatos planteados en el escrito de evacuación de prevenciones logran subsanar las observaciones formuladas.

Al respecto, tal como se relacionó en el romano 1 de esta decisión, el abogado Anaya Arteaga ha pretendido evacuar la prevención realizada en calidad de apoderado de determinadas personas que no coinciden con las que mencionó en su demanda y para las cuales no tendría la acreditación legal para hacerlo; tal inconsistencia, que no puede ser suplida o corregida por esta Sala, ha conllevado a la falta de contestación de las prevenciones que le fueron efectuadas.

En ese orden, en vista de tal inconsistencia no se han subsanado las prevenciones que se le realizaron al apoderado de los actores, por lo que, a pesar de que este ha presentado en tiempo el escrito en el que intenta evacuar las observaciones formuladas en virtud del aludido auto, estas todavía resultan vigentes, pues —tal como se advierte— existen aspectos imprescindibles de la pretensión de amparo cuyo esclarecimiento ha sido omitido y, consecuentemente, es imposible pronunciarse sobre el fondo de aquellos.

IV. Con base en lo reseñado, se deduce que el mencionado profesional no ha aclarado o corregido las deficiencias de su demanda, por lo que esta deberá declararse inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual determina que la falta de aclaración o corrección satisfactoria de la prevención producirá dicha declaratoria.

Y es que, el supuesto hipotético de la referida disposición no puede entenderse únicamente en cuanto a la presentación en tiempo del escrito que pretende evacuar la prevención, pues aquel implica, además, que mediante él se subsanen efectivamente las deficiencias de la demanda advertidas al inicio por esta Sala, lo que en este caso particular no ha sido satisfecho.

No obstante, debe aclararse que tal declaratoria no impide que los demandantes puedan formular nuevamente su queja ni que se analice su procedencia, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo suscrita por el licenciado Miguel Ángel Anaya Arteaga en calidad de apoderado general judicial de los señores MESP, DDCMP, MIVH, MMSDD, VFNF, JCGA, DOMM, LEVF, MECC, JME, NLBC, EEMR y NEMM, en contra del Concejo Municipal de San Salvador, en virtud de no haber subsanado de manera eficaz las prevenciones que fueron realizadas.

2.*Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

56-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por el abogado ********** en calidad de apoderado del señor DARR, conocido por DARP, contra el Juez de lo Civil de Usulután, por haber pronunciado sentencia en un proceso ejecutivo condenándolo al pago de cantidad de dinero –presuntamente– sin haber respetado el "diseño constitucionalmente configurado" para esa clase de juicios.

En relación con lo planteado, mediante auto de 26 de mayo de 2023, notificado el 5 de junio de 2023 mediante el correo electrónico señalado para tales efectos, se previno al abogado mencionado que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión que planteaba.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo otorgado al abogado ********** para evacuar las prevenciones aludidas, sin que este haya evacuado dicha carga procesal. En virtud de ello, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que dispone que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal efecto.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el abogado ********** en calidad de apoderado del señor DARR, conocido por DARP, contra el Juez de lo Civil de Usulután, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

95-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas y treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se hacen las siguientes consideraciones:

I. 1. El abogado *********, en calidad de apoderado judicial del señor PMPH, expresó que su mandante es dueño de una granja porcícola, ubicada en el cantón Santa Rosa del municipio de ciudad Arce.

Agregó que mediante resolución de 2 de agosto de 2021, la Unidad de Medioambiente de la Alcaldía Municipal de ciudad Arce, departamento de La Libertad, declaró ilegal el funcionamiento de la granja —pese a que esta poseía permiso del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) desde el 2007—, le impuso la sanción de clausura definitiva por el supuesto incumplimiento a las disposiciones ambientales, de salud y municipales, así como ordenó evacuar a todos los cerdos en un determinado plazo.

En ese orden, alegó que la decisión de la municipalidad vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, a "la integridad del medía ambiente", la "obligación generada frente a una autoridad" y el principio de legalidad.

2. Mediante auto de 12 de abril de 2023 se previno al apoderado: del demandante que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión planteada. Dicha resolución le fue notificada al referido profesional el 2 de mayo de 2023 a través de la cuenta del Sistema de Notificación Electrónica judicial que se proporcionó en la demanda.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ha transcurrido el plazo conferido a la parte peticionaria para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo haya hecho dentro del término legalmente previsto. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la den-tanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo firmada por el abogado *********, en calidad de apoderado judicial del señor PMPH, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENITEZ—RUBRICADAS—""

113-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue promovido por el señor DGCC contra el presidente, la gerente legal, la técnica ejecutiva de gestión de la presidencia, la asistente de despacho de la presidencia y el técnico de soporte administrativo al territorio, todos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, por su supuesto despido injustificado, con lo cual –aparentemente– se habrían conculcado sus derechos a la estabilidad laboral, audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y presunción de inocencia.

Mediante auto de 1 de marzo de 2023, notificado el día 3 de ese mismo mes y año en el medio técnico señalado en la demanda para tales efectos, se previno al actor que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido al señor CC para evacuar las prevenciones en comento, sin que este lo haya hecho dentro del término que se le otorgó. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el señor DGCC contra el presidente, la gerente legal, la técnica ejecutiva de gestión de la presidencia, la asistente de despacho de la presidencia y el técnico de soporte administrativo al territorio, todos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. .--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

57-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por la señora EEVR contra el Director General de Centros Penales, por la supuesta vulneración a sus derechos de audiencia, defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral –como concreción del derecho al trabajo–.

Mediante auto de 6 de enero de 2023 –notificado el 15 de marzo de 2023 en el medio técnico señalado para tales efectos– se previno a la actora que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido a la peticionaria para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo haya hecho dentro del término legal pertinente. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por la señora EEVR, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. —O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

153-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por la abogada ******** en calidad de apoderada de los señores FHCC y BMCC contra el Juez Primero de Paz de Mejicanos, departamento de San Salvador, por la supuesta lesión a los derechos de seguridad jurídica, "a la protección del Estado", propiedad, posesión y "arraigo" de sus representados al haber emitido el auto de 18 de mayo de 2022 en las diligencias de desalojo con referencia 04-3-2022.RAAG, mediante el cual ordenó el desalojo de los mencionados señores de conformidad con la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, pese a que aquellos no tenían la calidad de invasores.

Mediante auto de 6 de marzo de 2023, notificado el 14 de abril de 2023 en el correo electrónico designado para tales efectos e inscrito en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, se previno a la aludida licenciada que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido a la parte actora para evacuar las prevenciones formuladas, sin que esta lo haya hecho dentro del término que se le otorgó. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que los demandantes puedan formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo firmada por la abogada ******** en calidad de apoderada de los señores FHCC y BMCC, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

122-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibido el escrito presentado por el abogado Julio César Orellana Rivera quien pretende actuar como apoderado del señor RESZ, mediante el cual solicita la ampliación del plazo conferido para subsanar las prevenciones efectuadas.

Antes de emitir la resolución correspondiente, es necesario efectuar las siguientes consideraciones:

I. La demanda de amparo que dio inicio a este proceso fue presentada por el abogado Orellana Rivera –en la condición apuntada– contra la Jueza Especializada de Extinción de Dominio de San Salvador y la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, por la supuesta lesión de los derechos a la seguridad jurídica, defensa –este como manifestación del debido proceso–, protección jurisdiccional –en su dimensión relativa al deber de motivación de las resoluciones judiciales– y propiedad del actor.

Mediante auto de 9 de junio de 2023, notificado el 5 de julio de 2023 en el medio técnico designado en la demanda para tales efectos, se le previno al abogado Orellana Rivera que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, el aludido profesional presentó el 12 de julio de 2023 un escrito en el que, lejos de evacuar las prevenciones efectuadas, requiere que "... se amplíe [el] plazo..." conferido para tales efectos.

Al respecto, debe indicarse que el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dispone que "recibida la demanda, la Sala la admitirá si se hubiere llenado los requisitos que exige el artículo 14. En caso contrario, prevendrá al demandante que lo haga dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación. *La falta de aclaración o de corrección oportuna, producirá la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda".*

En consecuencia, se advierte que el citado profesional no subsanó las prevenciones en el periodo de tiempo que le fue otorgado; por tanto, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en la referida disposición, la cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el abogado Julio César Orellana Rivera quien pretende actuar como apoderado del señor RESZ, en virtud de no haber evacuado las prevenciones que fueron realizadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO —RUBRICADAS—""

273-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por el señor LAL contra el Juez de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, por la supuesta vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, audiencia y defensa –estos dos como manifestaciones del debido proceso–, así como los principios de legalidad e igualdad.

Mediante auto de 5 de mayo de 2023 –notificado el 24 de julio de 2023 en el medio técnico señalado para tales efectos– se previno al actor que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, aclarara ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo conferido al peticionario para evacuar las prevenciones formuladas, sin que lo haya hecho dentro del término legal pertinente. En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá dicha declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte interesada pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión incoada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por el señor LAL, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO —RUBRICADAS—""

40-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día treinta de agosto de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por la señora APLMCDV quien, afirmando ser representante del señor RAVR, impugnaba la resolución de 10 de enero de 2023, emitida por el Juez tres del Juzgado Cuarto de Civil y Mercantil de San Salvador, en la que se declaró improponible el recurso de revocatoria interpuesto contra el señalamiento de fecha y hora para la venta en pública subasta de un inmueble propiedad del citado señor.

En relación con lo planteado, mediante auto de 26 de mayo de 2023, notificado el 27 de junio de 2023 a través del número de fax señalado para tal efecto, se previno a la persona mencionada que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión que planteaba.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo otorgado a la señora CDV para evacuar las prevenciones aludidas, sin que esta haya evacuado dicha carga procesal. En virtud de ello, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que dispone que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el espacio de tiempo establecido producirá tal efecto.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para ello.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo planteada por la señora APMCDV, como presunta representante del señor RAVR, contra el juez tres del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2..*Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C—-GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

30-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a nueve horas con treinta y cinco minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Agréganse a sus antecedentes los oficios remitidos por el Jefe de la Unidad de Verificación y Asistencia Judicial del Registro Nacional de las Personas Naturales; el Departamento de Afiliaciones y Traspasos de AFP Crecer, Sociedad Anónima; el Secretario General Interino del Tribunal Supremo Electoral; la Jefa de Clientes Corporativos de AFP Confía, Sociedad Anónima; el Gerente de Emisión de Pasaportes de la Dirección General de Migración y Extranjería; el Jefe de la Sección de Administración de Registro y Asistencia de Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda; el Jefe de la Sección de Aseguramiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social —con el visto bueno del Jefe del Departamento de Afiliación y Recaudación de dicha entidad—, mediante los cuales proporcionan información sobre la dirección y otros posibles medíos de notificación del señor AEEA.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por el señor AEEA, quien cuestionaba al Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de Santa Ana por ciertas actuaciones emitidas durante la tramitación de un proceso declarativo común promovido en su contra y, asimismo, a la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente y Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que presuntamente habrían denegado sus peticiones.

En relación con lo planteado, mediante auto de 1 de marzo de 2023 se previno al demandante que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión que planteaba. Asimismo —al no haber señalado medio técnico ni dirección en la cual notificarle—, se instruyó a la Secretaría de este Tribunal para que realizara las diligencias de localización pertinentes; producto de lo cual, se comunicó la antedicha decisión a través de comisión procesal que fue diligenciada por el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana que, de acuerdo con el acta respectiva, realizó la notificación el 28 de junio de 2023 por medio de persona mayor de edad que se encontraba en la dirección señalada y manifestó tener un vínculo familiar con el requirente.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo otorgado al señor EA para evacuar las, prevenciones aludidas, sin que este haya cumplido con dicha carga procesal. En virtud de ello, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que dispone que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el espacio de tiempo establecido producirá tal efecto.

No obstante, es preciso señalar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para ese fin.

III. Finalmente, es menester señalar que la presente resolución deberá ser notificada por medio del tablero judicial de esta Sala, ya que el actor no subsanó la prevención relativa a indicar un lugar dentro del municipio de San Salvador o un medio técnico que permita dejar constancia de recepción para recibir los actos procesales de comunicación, pese a haber sido debidamente notificado.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declarase inadmisible* la demanda de amparo firmada por el señor AEEA contra el Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente y Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese* la presente resolución por medio del tablero judicial de esta Sala.

"""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

58-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por el señor CEBC contra el Juez uno del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador por la emisión de la resolución de 28 de febrero de 2023 en la que se señaló fecha y hora para la entrega material del inmueble que alegaba ocupar en calidad de subarrendante.

En relación con ello, mediante auto de 31 de mayo de 2023, que se tuvo por notificado el 28 de junio de 2023, en virtud del aviso judicial fijado en la dirección señalada como lugar para recibir notificaciones, conforme al artículo 177 incisos 2° y 3° del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos de amparo–, se le previno que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión que planteaba.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo otorgado al señor BC para subsanar las prevenciones aludidas, sin que este haya evacuado dicha carga procesal. En consecuencia, deberá declararse inadmisible la demanda interpuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que dispone que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el espacio de tiempo establecido producirá tal efecto.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que el peticionario pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión expuesta, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para ello.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo planteada por el señor CEBC contra el Juez uno del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C—GARCÍA––PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

398-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Antes de emitir el pronunciamiento correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El presente proceso de amparo fue iniciado por la licenciada ********* en calidad de apoderada de los señores JSSM, FAECZ y FJVD contra el Concejo Municipal de Apopa por haberlos destituido sin que se les siguiera un procedimiento previo en el que se les diera la oportunidad de defenderse.

Mediante auto de 16 de agosto de 2023, notificado el 7 de septiembre de 2023 en el medio técnico designado para tales efectos, se previno a la mencionada profesional que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, se aclararan ciertos aspectos de la pretensión planteada.

II. Ahora bien, se advierte que actualmente ya ha transcurrido el plazo legalmente previsto para que la licenciada ********* evacuara las prevenciones en comento, sin que lo haya hecho dentro del término que se le otorgó.

En virtud de tal circunstancia, deberá declararse inadmisible la demanda planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el cual ordena que la falta de aclaración o corrección de la prevención en el plazo establecido producirá tal declaratoria.

No obstante, es preciso aclarar que el contenido de la presente resolución no impide que la parte peticionaria pueda formular nuevamente su queja ni que se analice el fondo de la pretensión planteada, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales para tal efecto.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con la citada disposición legal, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase inadmisible* la demanda de amparo presentada por la licenciada ********* en calidad de apoderada de los señores JSSM, FAECZ y FJVD contra el Concejo Municipal de Apopa, en virtud de que las prevenciones realizadas no fueron evacuadas dentro del plazo legalmente establecido.

2. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—GARCÍA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

190-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos los escritos remitidos vía correo electrónico y firmados por: *(i)* el Fiscal de esta Corte, por medio del cual evacúa el traslado que le fue conferido de conformidad con el art. 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); *(ii)* el abogado Julio Cesar Vargas Acevedo, en calidad de apoderado del señor JCVG, mediante el cual contesta el traslado conferido a su mandante de conformidad con el art. 27 de la LPC; y *(iii)* el señor JCVG, parte actora en este proceso de amparo, quien también evacua en su carácter personal el traslado del art. 27 de la LPC.

Previo a continuar con el trámite correspondiente, se efectúan las siguientes consideraciones:

I.*1*. Por resolución de 31 de agosto de 2022 se admitió la demanda planteada, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del presunto despido del señor JCVG ordenado por el Presidente y la Junta Directiva, ambos del Instituto de Transformación Agraria (ISTA), del cargo que desempeñaba como jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) en la citada institución, mediante acuerdo contenido en el punto VIII del acta de sesión ordinaria núm. 12-2019 de 18 de junio de 2019, el cual surtió efectos a partir del 30 de noviembre de 2019, lo anterior sin tramitarle el procedimiento legal respectivo, a pesar de que sus funciones eran técnicas y de carácter permanente.

En la misma resolución se denegó la suspensión de los efectos del acto reclamado, pues se consideró que, en vista del tiempo transcurrido desde la emisión del despido que se busca controvertir, no existía un peligro en la demora porque la afectación alegada en la esfera del demandante se habría consumado.

2. A. Al rendir los informes que les fueron requeridos, las autoridades demandadas manifestaron que no eran ciertos los hechos que les fueron atribuidos en la demanda, pues la destitución del peticionario del cargo de jefe de la UACI se realizó conforme al ordenamiento jurídico vigente, por ello pidió que se declara no ha lugar el amparo incoado en su contra.

II. *1. A*. En la resolución de 28 de mayo de 2007, amparo 234-2007, se señaló que el art. 14 de la LPC establece como requisito formal para la admisibilidad de la demanda de amparo que la parte actora se autoatribuya la titularidad de un derecho fundamental que considere vulnerado u obstaculizado por el acto de autoridad contra el que reclama.

Así, en principio, no se exige como requisito de procedencia de la pretensión de amparo la comprobación objetiva de la titularidad del derecho que invoca el demandante, sino únicamente su autoatribución subjetiva como elemento integrante de la esfera jurídica particular. *Sin embargo, existen casos en los que, durante el transcurso del proceso, se establece la falta de titularidad del derecho cuya transgresión alega el pretensor, no obstante su autoatribución personal, lo cual se erige como un óbice para conocer del fondo del reclamo planteado.*

B. En efecto, este Tribunal no puede juzgar si existe o no conculcación de un derecho fundamental cuando el supuesto agraviado no es su titular, ya que sin serlo no puede configurarse algún acto de autoridad que lo vulnere. *En consecuencia, la falta de titularidad efectiva del derecho fundamental alegado constituye un defecto que torna inviable la tramitación completa del proceso, pues impide que se pueda conocer el fondo del asunto, esto es, examinar si la declaración subjetiva hecha por el demandante es cierta o no en cuanto a la infracción constitucional argüida, obligando así a esta Sala a rechazar en el transcurso del proceso la demanda formulada mediante la figura del sobreseimiento.*

C. Específicamente respecto al derecho a la estabilidad laboral, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido —v. gr., en la sentencia de 5 de marzo de 2010, amparo 1036-2007—que este implica la facultad de conservar un trabajo o empleo y que es insoslayablemente relativo, pues el empleado no tiene derecho a una completa inamovilidad, ya que es necesario que concurran los factores siguientes: *(i)* que subsista el puesto de trabajo; *(ii)* que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; *(iii)* que las labores se desarrollen con eficiencia; *(iv)* que subsista la institución para la cual presta servicio; y *(v) que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiera de confianza, ya sea personal o política.*

2. A. En el presente caso, el Presidente y la Junta Directiva del ISTA reafirmaron en sus intervenciones que no eran ciertos los hechos que les fueron atribuidos en la demanda, pues la destitución del peticionario del cargo de jefe de la UACI se realizó conforme al ordenamiento jurídico vigente.

B. El pretensor, por su parte, afirmó que su cargo no era de confianza y que previo a ordenar su despido debió tramitarse el procedimiento respectivo que le permitiera el ejercicio de su defensa.

3. A. En ese orden de ideas, resulta necesario recordar que esta Sala puede efectuar cambios de sus criterios jurisprudenciales cuando, entre otros motivos, existan cambios en su configuración subjetiva, haya variado la realidad normada o se adviertan errores en la interpretación efectuada (sentencia de 25 de agosto de 2010, inconstitucionalidad 1-2010). Así, es preciso mencionar que esta Sala se encuentra conformada en su totalidad por Magistrados propietarios diferentes de los que suscribieron el criterio jurisprudencial que se estableció en la sentencia de 8 de diciembre de 2014, amparo 743-2012, respecto de la naturaleza del cargo jefe de la UACI, por ello se modificó el precedente establecido en el citado fallo.

B. En efecto, en la sentencia de 17 de febrero de 2023, amparo 367-2019, se advirtió en relación con las potestades conferidas al jefe de la UACI que, si bien este debe contar con determinadas cualificaciones profesionales, por la trascendencia de sus decisiones y gestiones se trata de un cargo de alto nivel dentro de la institución, cuya importancia se debe a que se le confía la responsabilidad de los procesos de compra, los cuales pueden afectar los fondos públicos asignados a la institución. Así, el cargo en cuestión sí conlleva la facultad de adoptar, con un margen de libertad, decisiones determinantes, concretamente respecto de los procesos de compra en las instituciones. Por consiguiente, se coligió que *el cargo en cuestión debe ser catalogado como de confianza.*

4. En ese sentido, no obstante que el art. 11 de la Cn. impone la obligación de seguir un proceso o un procedimiento previo a la privación de cualquier derecho, en el que el afectado sea oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes, y que el art. 219 de la Cn. garantiza a los empleados públicos el derecho a la estabilidad laboral, en el presente caso dicho derecho no es atribuible al demandante porque no concurre uno de los aspectos que la jurisprudencia constitucional ha establecido como esenciales para ello, pues el cargo de jefe de la UACI, a partir de la sentencia de 17 de febrero de 2023, amparo 367-2019, es catalogado como de confianza y, por lo tanto, se encuentra comprendido en una de las excepciones que la Constitución establece respecto a la titularidad del derecho a la estabilidad laboral (art. 219 inc. 3°), por lo que no era necesario seguirle un procedimiento previo a su despido.

En consecuencia, al haberse determinado la falta de titularidad del demandante en relación con el derecho a la estabilidad laboral, lo cual constituye un defecto de la pretensión de amparo que impide, por su relevancia, el conocimiento del fondo del asunto planteado, es pertinente *sobreseer el presente proceso por la supuesta vulneración de derechos constitucionales atribuidas al Presidente y a la Junta Directiva del ISTA, de conformidad con los arts. 14 y 31 n° 3 de la LPC.*

POR TANTO, con base en lo expuesto y en las disposiciones legales citadas, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por el señor JCVG en contra del Presidente y de la Junta Directiva, ambos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, en virtud de la falta de titularidad del derecho a la estabilidad laboral, de conformidad con lo establecido en los arts. 14 y 31 n° 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

16-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos los escritos remitidos vía correo electrónico y firmados por: *(i)* la abogada Norma Cecilia Jiménez Morán, en calidad de apoderada de la Directora General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), mediante el cual evacúa el traslado conferido a dicha autoridad de conformidad con el art. 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) y, además, solicita que se sobresea el presente proceso de amparo de conformidad con el art. 31 n° 3 de la citada ley; *(ii)* la abogada Ada Marisol Cruz Bonilla, en calidad de apoderada del Ministro de Salud, por medio del cual presenta sus alegatos finales, agrega documentación y, además, informa a este Tribunal sobre el deceso de la pretensora de este amparo; y *(iii)* el Fiscal de esta Corte, por medio del cual hace uso del traslado otorgado de conformidad con el art. 30 de la LPC.

Previo a continuar con la tramitación del presente amparo, corresponde exponer las siguientes consideraciones:

I. 1. Mediante auto de 8 de febrero de 2021 se admitió la demanda incoada por la señora PEFM en contra del Ministro de Salud y de la Directora General del ISSS, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida y a la salud.

En ese mismo auto se adoptó una medida cautelar consistente en que las autoridades demandadas, a través de los canales correspondientes, debían asegurar que de manera inmediata se le brindara a la señora FM el tratamiento terapéutico y los medicamentos adecuados para su enfermedad —entre el que podría llegar a encontrarse un trasplante renal—, de conformidad con el respectivo análisis médico de la evolución de su padecimiento

y el resultado obtenido con los tratamientos anteriores que le habían sido ordenados, debiendo tales autoridades documentar las actuaciones realizadas y acreditarlas dentro de este proceso.

2. En su escrito la apoderada de la Directora General del ISSS alega que, ante la omisión probatoria y fáctica de la actora para establecer la falta de respuesta de dicho instituto y la vulneración de sus derechos, se vuelve imposible el conocimiento de fondo del asunto, ya que esta Sala no se puede pronunciar sobre una pretensión que se basa en un hecho que no ha sido aportado o aclarado plenamente por la parte que lo alega. Por ello, estima que, de conformidad con el art. 31 n° 3 de la LPC, es procedente sobreseer el presente caso.

De lo expuesto por la apoderada de la Directora General del ISSS se advierte que sus argumentos se encuentran orientados a revelar que en el caso objeto de estudio no existe la vulneración constitucional alegada por la actora en su demanda, es decir, la aludida autoridad requiere que esta Sala desestime la pretensión planteada, situación que constituye un asunto que debe decidirse en sentencia. Consecuentemente, es procedente declarar sin lugar su petición.

3. Ahora bien, la apoderada del Ministro de Salud al presentar sus alegatos finales advirtió que en el "informe [sobre la] gestión de trasplante renal" de 3 de febrero de 2023, suscrito por el Coordinador de la Oficina por el Derecho a la Salud del Hospital Nacional Rosales (HNR), consta que el 5 de diciembre de 2022 se recibió un correo electrónico del titular de la cuenta indicada por la pretensora para la recepción de los actos de comunicación de dicho nosocomio —el señor **********—, mediante el cual informó que la señora PEFM "había fallecido hace unos meses" y anexó documentación de respaldo (folio 241).

II. 1. Establecido lo anterior, y en orden a resolver el caso en estudio, es procedente exteriorizar los fundamentos jurídicos de esta resolución.

Esta Sala ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el objeto del proceso de amparo radica en la pretensión, la cual persigue esencialmente que se imparta a la persona justiciable protección jurisdiccional contra un acto de autoridad —formal o material— que estima inconstitucional y que, específicamente, considera vulnera el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor. Así las cosas, la pretensión de amparo condiciona la iniciación y eventualmente —ante el cumplimiento o no de requisitos legales y jurisprudenciales referidos a la parte actora, la autoridad demandada o el ente jurisdiccional— la tramitación del proceso.

Ahora bien, un proceso de amparo puede finalizar de forma anormal por la desaparición de alguno o algunos de los elementos configuradores de la pretensión —relativos a los sujetos o al objeto— que generen la imposibilidad para la Sala de juzgar el caso concreto. En efecto, si el sujeto activo de la relación jurídico-procesal constitutiva de la pretensión de amparo

deja de existir, es dable sostener que el proceso pierde la base subjetiva sobre la que descansa y, por tanto, resulta procedente ordenar su finalización a través de la figura del sobreseimiento, de conformidad con lo prescrito en el art. 31 n° 6 de la LPC, siempre y cuando la configuración de la parte actora sea de carácter unipersonal y el acto reclamado incida únicamente en sus derechos.

2. En el presente caso, la apoderada del Ministro de Salud aportó al proceso el informe rendido por el Coordinador de la Oficina por el Derecho a la Salud del HNR, en el cual se hace constar que la señora PEFM falleció. En razón de lo anterior, dado que se ha comprobado la causal de sobreseimiento antes referida y que en el transcurso del proceso no se arguyó que la vulneración a derechos constitucionales alegada por la demandante haya incidido en los derechos de otros sujetos, *resulta procedente sobreseer el presente proceso de amparo de conformidad con el art. 31 n° 6 de la LPC.*

POR TANTO, con fundamento en lo expuesto y en las disposiciones legales citadas, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Declárase que no ha lugar* el sobreseimiento planteado por la apoderada de la Directora General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social al presentar sus alegatos finales, debido a que sus argumentos se encontraban orientados a revelar que en el caso objeto de estudio no existía la vulneración constitucional alegada por la parte actora, situación que constituía el objeto mismo de control del presente amparo y, por ende, un asunto que debía decidirse en sentencia.

2. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por la señora PEFM en contra del Ministro de Salud y de la Directora General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida y a la salud, de conformidad con el art. 31 n° 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

3. *Cesen* los efectos de la medida cautelar adoptada y ratificada mediante resoluciones de 8 de febrero y 14 de junio de 2021, respectivamente.

4. *Notifíquese*.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO —RUBRICADAS—""

196-2017

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Habiendo sido convocado el Magistrado suplente Oscar Antonio Canales Cisco, en sustitución de la Magistrada Elsy Dueñas Lovos, con el fin de conformar Sala junto con los demás magistrados propietarios y conocer el proceso de amparo promovido por la sociedad Corporación ALFA, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, el señor AC, en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (SCA), se efectúan las siguientes consideraciones:

I. *1.* En esencia, el representante de la sociedad demandante manifestó que en virtud del informe de auditoría emitido por la Subdirección de Otros Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 8 de julio de 2011, la referida Dirección emitió la resolución con ref. ***-TII-***-M-2011 de 17 de agosto de 2011 en la que se determinó a cargo de la sociedad Corporación ALFA, S.A. de C.V., el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), correspondiente a los períodos tributarios de julio a diciembre de 2008, y se le multó par la evasión intencional del referido impuesto por cada período tributario.

Al respecto, indicó que la DGII determinó el pago de un impuesto sobre un hecho inexistente, pues su representada pactó una promesa de venta con la municipalidad de Colón y no un arrendamiento con promesa de venta como lo indicó la aludida autoridad administrativa, por lo que se encontraba exenta del pago del aludido tributo. Asimismo, aseguró que la imposición de la multa lesiona su derecho a la propiedad, pues ha sido sancionada a partir de una operación que no constituye un hecho generador de la infracción; además, esta fue determinada de forma errónea ya que no se efectuó una adecuada integración según lo dispuesto en el art. 254 del Código Tributario y los principios establecidos en los arts. 3 y 246 de la Cn. De igual forma, sostuvo que la referida autoridad vulneró el derecho de defensa de la sociedad actora, pues no le garantizó la "asistencia técnica" para la defensa de sus intereses.

En relación con lo expuesto, indicó que interpuso recurso de apelación contra la referida resolución ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), el cual, mediante la resolución con ref. Inc I**********TM de 20 de agosto de 2012 confirmó la resolución apelada, sin tener en consideración que la operación realizada por la sociedad actora no constituía un hecho generador para la imposición del tributo y la multa, tampoco se pronunció del reclamo efectuado por la vulneración al derecho de defensa provocado por la DGII.

En este punto, agregó que impugnó ambas resoluciones ante la SCA, autoridad que en su fallo de 10 de agosto de 2016 declaró que no había ilegalidad en los actos administrativos emitidos por la DGII y el TAIIA. Al respecto, señaló que la autoridad judicial no efectuó ningún razonamiento ni

valoración sobre una constancia firmada por el Alcalde Municipal de Colón. la cual fue presentada como prueba sobrevenida, con el propósito de probar la naturaleza de la contratación efectuada entre dicha municipalidad y la sociedad Corporación ALFA, S.A. de C.V.

En virtud de lo expuesto, el representante legal de la sociedad actora consideró que las referidas autoridades con sus actuaciones habían vulnerado los derechos de audiencia, defensa y a la propiedad por la infracción de los principios de legalidad, capacidad contributiva y no confiscación.

2. A. Mediante la resolución de 17 de marzo de 2021 se declaró improcedente de manera parcial la demanda incoada por la sociedad Corporación ALFA, S.A. de C.V., en relación con el extremo de la pretensión referente a la posible transgresión del derecho a la propiedad —por infracción a los principios de legalidad, capacidad económica y de no confiscación—, así como del derecho de defensa —como manifestación del debido proceso, por no haber garantizado la defensa técnica en el procedimiento administrativo—, en virtud de haberse evidenciado una mera disconformidad con lo resuelto, así como la falta de trascendencia constitucional del agravio alegado.

B. Por otra parte, se suplió la deficiencia de la queja planteada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), en el sentido que los argumentos esgrimidos con relación a la supuesta vulneración del derecho de audiencia se referían a aspectos relacionados con la vulneración de los derechos a obtener una resolución de fondo motivada y congruente —como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional— y a la propiedad.

Luego de efectuada la referida suplencia se admitió la demanda planteada circunscribiéndose al control de constitucionalidad de la sentencia pronunciada por la SCA el 10 de agosto de 2016, en el proceso contencioso administrativo con ref. 398-2012, en la que se declaró que no existían lo vicios de ilegalidad respecto de las resoluciones por la DGII y el TAIIA, en las que se determinó el IVA aplicable a ciertos períodos fiscales y las multas correspondientes, así como su confirmación en apelación.

Tal admisión se fundamentó en que, aparentemente, la SCA no se pronunció sobre la documentación presentada por la sociedad actora como "prueba sobrevenida", por lo que posiblemente vulneró los derechos a obtener una resolución motivada y congruente —como una manifestación del derecho a la protección jurisdiccional— y a la propiedad.

3. En su defensa, los Magistrados de la SCA expresaron que el proceso contencioso administrativo puesto a su conocimiento fue tramitado según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) derogada,

de aplicación al caso concreto de conformidad con el art. 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente. En dicho proceso realizaron un análisis del expediente administrativo y de la prueba presentada ante la DGII a efecto de verificar los puntos de ilegalidad alegados por la actora. Posteriormente, emitieron una resolución motivada en la que se expusieron las razones de hecho y de derecho con los elementos de prueba aportados al proceso. Al respecto, señalaron que la actividad probatoria en materia contencioso administrativa se encuentra regulada en el art. 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) —ahora derogada—, donde se establece que se abrirá el juicio a pruebas por un plazo de 20 días, siendo este el momento procesal oportuno para la aportación de la prueba.

Asimismo, indicaron que, conforme con el principio de preclusión procesal, las partes debían hacer uso de sus derechos dentro de los términos que el ordenamiento jurídico dispone. De ahí que la posibilidad de presentar prueba debía hacerse en el plazo otorgado para ello. De no hacerlo, la etapa finaliza, excepto en aquellos casos que se solicitaba prueba para mejor proveer. En ese orden, expresaron que la etapa oportuna para aportar la prueba es dentro del término de 20 días otorgado por la norma antes citada. Además, manifestaron que la LJCA no establecía reglas para la proposición de la prueba, pero que, de conformidad con el art. 53, resultaba aplicable el art. 317 inc. 2' del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), según el cual la prueba debe singularizarse y exponerse su pertinencia y utilidad para que el juzgador decida sobre su admisión o rechazo.

En relación con lo expuesto, señalaron que el art. 288 del CPCM establece que, junto con la demanda, se deben aportar los documentos o dictámenes .periciales en los que las partes apoyan sus pretensiones y en la etapa de pruebas se debe singularizar los medios probatorios, justificando su pertinencia y utilidad.

En ese orden, expresaron que, por auto de 3 de junio de 2014, se abrió a pruebas el proceso contencioso en cuestión; sin embargo la sociedad actora presentó en concepto de prueba "sobrevenida" la constancia en discusión hasta la etapa de traslados del art. 28 de la LJCA derogada.

En virtud de lo expuesto, argumentaran que no se pronunciaron en la sentencia respecto de la referida constancia, pues había precluido la etapa para proponerla y aportarla de conformidad con el art. 289 del CPCM. Por tal razón afirmaron que no existe la vulneración de derechos alegada por la sociedad demandante.

II. 1. A. En el amparo las afirmaciones del actor deben justificar que su reclamo posee relevancia constitucional, pues, si plantea aspectos puramente judiciales o administrativos que no revelan una posible vulneración a sus derechos fundamentales, su queja no podría ser juzgada en esta sede. Y es que, desde el punto de vista de la competencia material de esta Sala, la proposición de lo que la jurisprudencia califica de "asuntos de mera legalidad" se interpreta como un defecto absoluto en la facultad de juzgar, lo que representa un óbice para examinar el fondo de la queja planteada. Debe así recordarse que esta Sala es incompetente, en razón de lo establecido en su marco normativo de actuación, para conocer de aquellas cuestiones que tienen una exclusiva base infraconstitucional, dado que su regulación y determinación está prevista solo en normas de rango inferior a la Constitución.

B. Las situaciones señaladas implican la existencia de vicios en la pretensión que generan la imposibilidad de juzgar el caso concreto o toman inviable la tramitación completa del amparo y, en ese sentido, la demanda debe ser rechazada, al inicio o durante la prosecución del proceso, en este último caso mediante la figura del sobreseimiento, de conformidad con el art. 31 n° 3 de la LPC.

2. A. a. En el presente caso, la sociedad Corporación ALFA, S.A. de C.V., reclama contra la sentencia de 10 de agosto de 2016, pronunciada por la SCA en el proceso contencioso administrativo con ref. 398-2012. Sus argumentos, en esencia, se centran en una sola cuestión: la supuesta omisión de valoración de la constancia firmada por el Alcalde Municipal de Colón, presentada como prueba sobrevenida.

Al respecto, se observa que durante la tramitación de este amparo la sociedad actora alegó que la SCA vulneró sus derechos constitucionales al omitir valorar la prueba sobreviniente que le fue presentada, pues esta "habría conducido inequívocamente conducido a la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo a concluir que la operación realizada [...] se trató de una promesa de venta y no una [sic) arrendamiento". Dicho elemento probatorio aseveró que había sido gestionado desde el inicio del proceso contencioso; sin embargo, fue hasta el 26 de febrero de 2015 que logró obtenerse. Sobre tal afirmación, no consta en el presente expediente documentación alguna orientada a verificar que la constancia en cuestión haya sido ofrecida como elemento probatorio previo a su presentación como prueba sobrevenida.

De igual forma, argumentó, respecto de la documentación que presentó dentro del plazo probatorio señalado en el art. 26 LJCA, que dicha prueba "no fue valorada correctamente", pues, a su parecer, con esta y la constancia suscrita por el Alcalde del Municipio de Colón "queda de manifiesto la inexistencia del hecho generador de arrendamiento".

b. La autoridad demandada, para justificar la constitucionalidad de la omisión realizada en el acto reclamado, señaló que mediante el auto de 3 de junio de 2014 se habilitó la fase probatoria, sin que la parte actora mencionara, ofreciera, solicitara o informara sobre la presunta requisición de la constancia a la Alcaldía Municipal de Colón, pues era deber de la sociedad contribuyente, al no disponer de ese medio de prueba, describir su contenido o indicar el lugar en el que se encontraba o en todo caso pedir alguna medida para su incorporación, de conformidad con el art. 288 del CPCM.

Así, concluyó que en la sentencia que ha sido reclamada se expusieron las razones de hecho y de derecho de la decisión, haciendo una relación del análisis del expediente administrativo, congruente con la pretensión de la parte actora y adecuado a los elementos y pruebas agregados al proceso.

B. Así, las argumentaciones planteadas por la sociedad actora lejos de poner en evidencia la relevancia del presente reclamo, tienden a revelar su simple inconformidad con la decisión de la SCA de declarar que no existen los vicios de ilegalidad alegados en los actos administrativos emitidos por la DGII y el TAI1A, lo que en definitiva denota aspectos que redundan en la proposición de un asunto de mera legalidad, puesto que, básicamente, solicita la revisión de la apreciación interpretativa efectuada por la SCA en relación con los enunciados legales aplicables al caso concreto y determinar que el referido tribunal debió valorar el elemento probatorio presentado en forma posterior al plazo establecido para ello y al no hacerlo incurrió en un error de aplicación de la normativa procesal.

Sin embargo, como se explicó, *esta Sala carece de competencia para pronunciarse sobre aquellas cuestiones que se refieren a la mera aplicación de la ley a casos concretos y, por ello, escapa de sus facultades realizar consideraciones sobre la forma en que la autoridad demandada interpretó y aplicó las disposiciones de la LJCA derogada que regulaban el procedimiento probatorio ante la jurisdicción contencioso administrativa.*

Tal circunstancia pone de manifiesto un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide la conclusión normal de este caso, por lo que, al haberse admitido erróneamente la demanda, *procede sobreseerlo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y 31 ord 3° de la LPC.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y lo dispuesto en los arts. 13 y 31 ord. 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por la sociedad Corporación ALFA, S.A de C.V., en contra la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que sus argumentos sobre la supuesta vulneración de sus derechos a obtener una resolución de fondo motivada y congruente —como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional— y a la propiedad, se reducen a un asunto de mera legalidad.

2. *Déjase sin efecto* la medida cautelar adoptada y confirmada en este proceso mediante los autos de 17 de marzo de 2021 y de 2 de julio de 2021, respectivamente.

3. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

29-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos por correo electrónico: *(i)* el escrito firmado por la abogada **********, en calidad de apoderada del Alcalde y del Concejo Municipal de San Salvador, por medio del cual acredita la calidad con la que interviene en el presente proceso; *(ii)* el escrito firmado por la Primera Secretaría de la Asamblea Legislativa, mediante el cual rinde el informe estipulado en el art. 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); y *(iii)* el escrito firmado por las abogadas ********* y ********, como apoderadas de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), en el cual manifiestan que su mandante no tiene legitimación procesal para actuar en este proceso, por lo que debe ser desvinculada de este.

Previo a continuar con la tramitación del presente proceso de amparo, se deben realizar las siguientes consideraciones:

I.1. A. a. La abogada *********, con el fin de acreditar la calidad con la que actúa en el presente proceso como apoderada del Alcalde y del Concejo Municipal de San Salvador, adjunta copia del poder otorgado a su favor –y de otros– por los referidos funcionarios para que los represente judicialmente.

b. Por su parte, las abogadas ********** y ********** solicitan que se autorice su intervención como apoderadas de la Junta Directiva de la DOM, para lo cual adjuntan copia del poder otorgado a su favor –y de otros– por la Presidenta de la DOM, quien fue autorizada por la Junta Directiva para que otorgara tal instrumento.

B. Al respecto, se advierte que los poderes presentados cumplen con los requisitos regulados en los arts. 68 y 69 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) –de aplicación supletoria a los procesos de amparo–, por lo que es procedente autorizar la intervención de las mencionadas abogadas en el carácter en que comparecen.

A. Por otro lado, se observa que la abogada ********** reitera la dirección y el medio técnico –la Cuenta Electrónica Única (CEU) de la Alcaldía Municipal de San Salvador registrada en el Sistema de Notificación Electrónica del Órgano Judicial (SNE)– propuestos en su primer escrito para recibir actos procesales de comunicación, así como a la persona comisionada para tales efectos.

No obstante ello, solicita ser notificada exclusivamente por medio de la CEU de la Alcaldía Municipal de San Salvador registrada en el SNE y, además, comisiona a otras dos personas para recibir notificaciones.

En ese sentido, la Secretaria de esta Sala, de conformidad con el art. 170 inc. 1° del CPCM, deberá tomar nota de la mencionada observación, así como de las nuevas personas comisionadas por la referida profesional.

B. Finalmente, se observa que las abogadas ********* y ********* señalaron una dirección y un medio técnico —la CEU de la DOM registrada en el SNE— para recibir los actos procesales de comunicación.

En ese sentido, los actos de comunicación procesal del presente proceso de amparo deberán ser realizados a las mencionadas profesionales utilizando la dirección y el medio técnico proporcionados, por lo que, de conformidad con el art. 170 inc. 1° del CPCM, la Secretaria de esta Sala deberá tomar nota-de estos.

II. 1. El entonces apoderado del señor LMAA manifestó en su demanda que dirige su reclamo en contra de la Asamblea Legislativa por haber emitido el art. 1.02.1 de la Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de San Salvador (TAMSS), mediante el Decreto n° 436 de 22 de octubre de 1980, publicado en el Diario Oficial n° 220, tomo n° 269, de 21 de noviembre de 1980, en el cual se establece un impuesto municipal a cargo de las persona-S naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales en dicho municipio, cuyo monto se ha determinado con base en su activo. Dicha disposición establece:

Art 1.- Las personas naturales o jurídicas, sucesiones y fideicomisos, pagarán en concepto de IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES de la siguiente manera:

[...] 02 COMERCIO

_____

02.1 EMPRESAS COMERCIALES

Las Empresas y establecimientos comerciales pagarán conforme la siguiente tabla:

IMPUESTO MENSUAL

Si el activo es hasta ¢10.000.00	¢ 5.00	
De ¢ 10.000.01 hasta ¢25.000.00	¢5.00 más ¢1.00 por millar o fracción	¢10.000.00
De ¢25.000.01 hasta ¢50.000.00	¢20.00 más ¢0.90 por millar o fracción sobre el excedente…	¢25.000.00
De ¢50.000.01 hasta ¢200.000.00	¢42.50 más ¢0.80 por millar o fracción sobre el excedente…	¢50.000.00
De ¢200.000.01 hasta ¢500.000.00	¢162.50 más ¢0.70 por millar o fracción sobre el excedente…	¢200.000.00
De ¢500.000.01 hasta ¢800.000.00	¢372. más ¢0.50 por millar o fracción sobre el excedente…	¢800.000.00
De ¢1,200.000.01 hasta ¢1,600.000.00	¢752.50 más ¢0.40 por millar o fracción sobre el excedente…	¢1, 200.000.00
De ¢1,600.000.01 hasta ¢2,000.000.00	¢912.50 más ¢0.30 por millar o fracción sobre el excedente…	¢1, 600.000.00
De ¢2,000.000.01 hasta ¢3,000.000.00	¢1.032.50 más ¢0.20 por millar o fracción sobre el excedente…	¢2,000.000.00
De ¢3,000.000.01 hasta ¢5,000.000.00	¢1.232.50 más ¢0.15 por millar o fracción sobre el excedente…	¢3,000.000.00
De ¢5,000.000.01 hasta ¢7,500.00.00	¢1.532.50 más ¢0.10 por millar o fracción sobre el excedente…	¢5,000.000.00
De ¢7,500.000.01 hasta ¢10,000.000.00	¢1.782.50 más ¢0.05 por millar o fracción sobre el excedente…	¢7,500.000.00
De ¢10,000.00.01 hasta ¢15,000.000.00	¢1,907.50 más ¢0.03 por millar o fracción sobre el excedente…	¢10,000.000.00
De ¢15,000.000.01 en adelante…	¢2,057.50 más ¢0.02 por millar o fracción sobre el excedente…	¢15,000.000.00

Al respecto, sostuvo que el mencionado artículo vulnera el derecho a la propiedad de su mandante por la inobservancia del principio de capacidad económica, ya que –en su opinión– para la configuración del tributo no se tomaron en cuenta los factores que verdaderamente revelan la riqueza de los contribuyentes, pues no se permite la deducción de los pasivos.

2. Mediante auto de 16 de abril de 2021 se admitió la demanda planteada para controlar la constitucionalidad del art. 1.02.1 de la TAMSS, en virtud de que podría estar afectando el derecho a la propiedad del demandante por inobservancia del principio de capacidad económica en materia tributaria.

3. En su defensa, la Asamblea Legislativa consideró que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad, ya que, al decretarse el impuesto controvertido,

se actuó de conformidad con lo establecido en el art. 131 ord. 6° de la Cn., pues se decretó de manera equitativa. Asimismo, señaló que la disposición controvertida determina una tabla objetiva de aplicación del impuesto a las actividades comerciales, la cual se elaboró con base en criterios técnicos que nacieron en el proceso de formación de ley.

Además, en relación con la forma de establecer la base imponible, arguyó que según los criterios establecidos en la Ley General Tributaria Municipal (LGTM) "el activo" debe ser considerado sobre el capital neto del contribuyente por parte del aplicados, lo cual –en su opinión– es acorde con la jurisprudencia de esta Sala –v. gr., la sentencia de 19 de abril de 2017, amparo 446-2015– y el art. 5 del Código Tributario.

III. 1. A. a. En este punto se advierte, según el contenido de la demanda planteada y del auto de 16 de abril de 2021, que la anterior conformación subjetiva de esta Sala reconoció que la jurisprudencia constitucional, a partir de las sentencias de 19 de abril de 2017 y de 26 de mayo de 2017, amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015 –respectivamente–, ha sostenido que si bien la redacción típica de las leyes tributarias municipales permite restar a la, base imponible del impuesto –activo imponible– las deducciones expresamente mencionadas en sus textos normativos, ello no debía interpretarse en el sentido que estas sean las únicas que tengan que excluirse para determinar el *quantum* del tributo, ya que las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6° de la Cn., están obligadas a excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con sus acreedores –pasivo–, con el objeto de gravar –únicamente– la riqueza neta de los destinatarios y así respetar el principio de capacidad económica.

b. Esto significó que, en razón de dicha interpretación constitucional, aquellos tributos cuya base imponible era el activo no podían generar una vulneración del derecho a la propiedad, pues su contenido no inobservaba el principio de capacidad económica derivado del art. 131 ord. 6° de la Cn., por lo que al no evidenciarse la existencia de un agravio constitucional debía descartarse la pretensión a través de una improcedencia o un sobreseimiento, según correspondiera.

B. *a*. Ahora bien, en el referido auto de 16 de abril de 2021 se consideró *oficiosamente* que la continuidad de la jurisprudencia podía flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos –error interpretativo, cambios en la realidad normada y/o cambio de la conformación subjetiva del Tribunal–, por lo que se admitió sin más la demanda presentada y se aclaró que dicho pronunciamiento no implicaba –por sí mismo y en ese momento– un cambio de precedente, pero que en el curso de este proceso se evaluaría la jurisprudencia actual sobre el tema del activo como base imponible en el contexto constitucional de la legislación tributaria municipal –que, entre otros

aspectos, se vincula con el derecho de propiedad, el principio de capacidad económica y la aplicación directa y generalizada de los criterios jurisprudenciales emitidos por esta sede por parte de las autoridades municipales–.

b. Ante ello, se observa que, a pesar de que se trató de una actuación oficiosa de esta Sala –es decir, que la parte actora en ningún momento solicitó en su demanda la revisión del criterio jurisprudencial antes mencionado–, la conformación subjetiva anterior de este Tribunal omitió proporcionar razones o argumentos suficientes para sustentar la necesidad de evaluar los precedentes constitucionales consolidados. En otras palabras, en el auto de admisión de la demanda no se evidenció la presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos fueran supuestamente incompletos o erróneamente interpretados, que los fundamentos fácticos hubieran aparente y sustancialmente variado al grado de volver incoherente el pronunciamiento originario con la realidad normada o que debido al cambio en la conformación subjetiva del Tribunal se hubiera generado una posible relectura de las disposiciones constitucionales y de los precedentes que las han aplicado, para que se adecue a las nuevas realidades.

2. *A*. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la ausencia de contraste argumentativo implicó la inexistencia de razones para habilitar el apartamiento de los precedentes, dado que para ello se exige que este sea especialmente justificado –argumentado– con un análisis prospectivo de la antigua jurisprudencia; y, en consecuencia, produjo la imposibilidad para revisar el criterio jurisprudencial, debido a que ello requiere que se examine la pretensión de validez de los nuevos alegatos brindados con el objeto de derrotar la anterior posición jurisprudencial.

Asimismo, si bien la conformación subjetiva de la Sala de lo Constitucional cambió mediante el Decreto Legislativo n° 2 de 1 de mayo de 2021, publicado en el Diario Oficial n° 81, Tomo 431 de esa misma fecha, y lo cual sobreviene en una circunstancia en principio suficiente para modificar un precedente, los actuales magistrados –distintos a los que pronunciaron el auto de 16 de abril de 2021– consideran que la línea jurisprudencial referida a la determinación del "activo" como base imponible de aquellos impuestos cuyo hecho generador lo constituye algún tipo de actividad económica –industrial, comercial, financiera o de servicios— realizada por comerciantes individuales o sociales —sujetos pasivos— no adolece de problemas en sus fundamentos normativos –error interpretativo– ni han variado sus fundamentos fácticos –cambio en la realidad normada–, por lo que no existen las circunstancias necesarias para habilitar la revisión y el cambio del autoprecedente.

B. *a*. En razón de ello, *tal como se estableció en la resolución de 22 de mayo de 2023, amparo 385-2020, se ratifica el criterio jurisprudencial sostenido a partir de las sentencias pronunciadas en los ya citados procesos de*

amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, el cual reconoce el principio de conservación de las leyes y, además, aclara la aplicación constitucional entre leyes generales y especiales en el ámbito tributario municipal en relación con el principio de capacidad económica (art. 131 ord. 6° de la Cn.).

b. Y es que debe recordarse que, tal como se sostuvo en la sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009, la interpretación conforme es la máxima de hermenéutica jurídica según la cual, de entre los varios entendimientos posibles de una disposición –objeto de la interpretación–, debe escogerse para dar una solución jurídica al caso la norma –resultado de la interpretación– que mejor se acomode a la Ley Suprema. Su fundamento es tanto el principio de unidad del ordenamiento jurídico como la supremacía constitucional, que se proyecta sobre las leyes condicionando el sentido que a estas cabe atribuirle.

El efecto práctico que dicha máxima tiene en el control constitucional es que el juzgador debe buscar que el entendimiento de la formulación lingüística de una determinada prescripción se acomode al sentido de la Constitución, manteniendo la imperatividad de la ley en aquellas posibilidades interpretativas que no contradigan a la Ley Suprema.

Así, si el hecho generador es algún tipo de actividad económica, el contribuyente puede realizar a su favor deducciones específicas establecidas en la ley municipal, lo cual no prohíbe que la base imponible del tributo pueda determinarse también con la deducción del pasivo del contribuyente. En efecto, según el art. 127 de la LGTM –disposición cuyo contenido normativo es general en materia tributaria municipal–, "[e]n la determinación de la base imponible y en la estructuración de las tarifas correspondientes, también deberán ser consideradas aquellas deducciones y pasivos, en los límites mínimos y máximos que se estimen adecuados". De acuerdo con esto, que una norma tributaria especial -como la TAMSS- no aclare sí la cuantificación de la base imponible puede determinarse deduciendo también el pasivo del contribuyente, no debe interpretarse como regulación opuesta o que se sustrae de la regulación del art. 127 LGTM, sino que debe entenderse que si las deducciones del pasivo para determinar la base imponible no fueron previstas en las leyes tributarias especiales es porque el legislador decidió dejarlo a la regulación de la LGTM. La consecuencia que esto produce es que el objeto de control se vuelve coherente con el principio de capacidad económica.

IV. *1*. Aclarado lo anterior, corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se emitirá.

A. Esta Sala ha sostenido -sobreseimiento de 27 de enero de 2009, amparo 795-2006 e improcedencia de 24 de abril de 2019, amparo 206-2018- que este tipo de procesos constitucionales persiguen que se imparta a la persona la protección jurisdiccional contra cualquier acto u omisión de autoridad que estime inconstitucional y que, específicamente, vulnere u obstaculice el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor.

Y es que, debido a la naturaleza jurídica del amparo, es necesario que exista un agravio concreto, esto es, un desmedro que las personas experimentan en su esfera jurídica como resultado de las actuaciones de un determinado funcionario, cuya constitucionalidad se cuestiona.

En ese sentido, para la procedencia del amparo, es necesario -entre otros presupuestos- que el sujeto activo se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión -lo que en términos generales de la jurisprudencia constitucional se ha denominado simplemente agravio-. Este tiene como requisitos que se produzca con relación a normas o preceptos de rango constitucional -elemento jurídico- y que genere una afectación difusa o concreta en la esfera jurídica de la persona justiciable -elemento material-.

Desde esta perspectiva, se ha afirmado que hay ausencia de agravio constitucional por la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: *(i)* cuando el acto u omisión impugnado es inexistente; *(ii)* cuando, no obstante la existencia real de una actuación u omisión, esta ha sido realizada dentro del marco constitucional; o *(iii)* cuando es incapaz de producir por sí misma una afrenta a la persona que reclama.

Las situaciones señaladas implican la existencia de vicios en la pretensión que generan la imposibilidad de juzgar el caso concreto o tornan inviable la sustanciación completa del proceso y, por ello, la demanda debe ser rechazada al inicio o durante su tramitación. En este último caso, mediante la figura del sobreseimiento, de conformidad con el art. 31 n° 3 de la LPC.

2. *A*. En el presente caso, el demandante impugnó el art. 1.02.1 de la TAMSS, por considerar que dicha disposición establece un impuesto a la actividad económica desarrollada en el municipio de San. Salvador, tomando como base imponible el activo del contribuyente, lo cual –a su juicio– no revela la verdadera capacidad contributiva del sujeto obligado por no excluirse la totalidad del pasivo de este.

Dicho precepto establece que por el tributo cuyo hecho generador lo constituye la actividad comercial realizada por empresas o establecimientos comerciales debe efectuarse el pago mensual de cierta cantidad de dinero con base en el activo, el cual se determina de acuerdo con lo prescrito en el art. 4 de la TAMSS, es decir, efectuando algunas deducciones específicas del activo total: "a) Los activos invertidos en sucursales o agencias que operen en otra jurisdicción; b) La reserva legal para depreciación de activo fijo; c) La reserva legal aceptada por las leyes; d) La reserva legal a sociedad y compañías, e) Las inversiones en otras Sociedades, que operen en otra jurisdicción y que estén gravadas en las Tarifas de los Municipios correspondientes; f) Los títulos o valores garantizados por el Estado que están exentos de impuestos; y [*sic*] g) La reserva para cuentas incobrables según lo establece la Ley[;] h) El déficit y las pérdidas de operación".

B. Ahora bien, como ya se dijo en las sentencias pronunciadas en los procesos de amparo 446-2015 e inconstitucionalidad 50-2015, ratificadas en el citado amparo 385-2020 y en la presente resolución, en relación con las leyes tributarias que regulan impuestos a las actividades económicas debe entenderse que, independientemente de que dichos cuerpos normativos establezcan o no deducciones específicas que los sujetos pasivos del tributo pueden realizar a su favor, la base imponible del impuesto –cualquiera que sea su denominación– excluye el pasivo de los contribuyentes reflejado en sus balances contables, conforme al principio de capacidad económica contenido en el art. 131 ord. 6° de la Cn., lo cual es acorde con lo prescrito en el art. 127 de la LGTM –normativa de carácter general en materia tributaria municipal que complementa las leyes especiales en esa materia–, el cual dispone que en la determinación de la base imponible de los tributos municipales debe considerarse los pasivos del contribuyente.

La aludida interpretación resulta más acorde con las disposiciones que conforman el Derecho Constitucional Tributario, pues permite que las personas contribuyan al gasto público tomando en consideración las posibilidades económicas reales que tienen para ello y, además, que los municipios –sujetos activos de este tipo de tributos– efectúen la recaudación necesaria para la realización de los planes de desarrollo local que elaboren conforme al art. 206 de la Cn.

C. *a*. A partir de lo anterior, es posible colegir que, si bien a la base imponible del impuesto en cuestión —activo— se le deben efectuar las deducciones mencionadas en el art. 4 de la TAMSS, dicha disposición legal implica también que las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación de los arts. 131 ord. 6° de la Cn. y 127 de la LGTM, deberán excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con acreedores (pasivo), con lo cual se tiene que el tributo establecido en el art. 1.02.1 de la TAMSS únicamente grava la riqueza neta de su destinatario, resultando acorde con el principio de capacidad económica.

En consecuencia, se concluye que la disposición legal impugnada no genera *per se* una vulneración al derecho a la propiedad del demandante, pues el contenido de aquella no inobserva el principio de capacidad económica derivado del art. 131 ord. 6° de la Cn., por lo que *en el presente caso se configura un supuesto de ausencia de agravio que impide la terminación normal de este caso, debiendo finalizarse por medio de la figura del sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 ord 3° de la LPC.*

b. Ahora bien, la presente resolución no debe de interpretarse como un aval por parte de esta Sala para que la municipalidad proceda a cobrar a su arbitrio los impuestos previstos en el art. 1.02.1 de la TAMSS.

Así, si bien es cierto que se ha reconocido que de la mera vigencia del artículo controvertido no se deduce un posible agravio constitucional, ello no exime a la municipalidad de San Salvador de cumplir con los criterios jurisprudenciales de esta Sala al momento de cuantificar el tributo. De este modo, *al aplicar la citada disposición a sus contribuyentes, la referida municipalidad debe restar la totalidad de los pasivos de estos para obtener la base imponible que verdaderamente refleje la capacidad económica de los sujetos obligados.*

Este *mecanismo de implementación de la norma tributaria municipal debe aplicarse de manera automática y general por parte de la municipalidad a todos los contribuyentes del referido impuesto*, por lo que no debe interpretarse que requiere de un pronunciamiento directo por parte de esta Sala que le ordene realizarlo con un sujeto determinado. Esto implica que la correcta aplicación del tributo –con base al principio de capacidad económica y por tanto en respeto a la Constitución– conmina a la municipalidad de San Salvador a verificar el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales de esta Sala, esto es a deducir el total de los pasivos a los activos de los contribuyentes.

V. Por otro lado, se observa que las abogadas ********* y *********, como apoderadas de la Junta Directiva de la DOM, alegaron que su mandante no tiene legitimación procesal para actuar en el presente proceso, por lo que debe ser desvinculada de este. No obstante, en virtud de que esta Sala ha decidido estimar una causal de sobreseimiento respecto a la pretensión del demandante, se vuelve innecesario emitir un pronunciamiento respecto a dicha solicitud, de conformidad con los principios de pronta y cumplida justicia y de economía procesal.

VI. *1*. Finalmente, se advierte que el abogado ******** interpuso su renuncia como apoderado del señor LMAA en el presente proceso, por lo que este tribunal no cuenta actualmente con ninguna vía para poder realizar comunicaciones procesales al demandante, quien no ha comparecido a señalar ningún lugar o medio técnico para recibir los referidos actos.

Ante ello, debe tomarse en consideración que el derecho de audiencia es una manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, cuya concreción se produce mediante los actos procesales de comunicación, ya que estos posibilitan a los sujetos procesales ser oídos ante los jueces y tribunales. Así, *tales actos optimizan el derecho a la protección jurisdiccional,* pues se producen con la finalidad de dar a conocer a las partes y a terceros las decisiones que los funcionarios judiciales profieren. En ese sentido, hacer partícipes a las partes de los decretos, autos y sentencias es una exigencia derivada del derecho de audiencia.

2. Eh relación con lo expuesto, los actos de comunicación, por regla general, deben utilizar aquellos mecanismos o formalidades que, en principio, sean los más aptos y garantistas para la obtención de un conocimiento real y efectivo de una decisión judicial. Por ello, en el caso particular de las notificaciones, estas han de verificarse preferentemente en el lugar que el pretensor haya señalado en su demanda –arts. 170 y 177 del CPCM–.

A. Al respecto, se advierte que si bien el señor LMAA no ha señalado directamente ninguna dirección o medio técnico para recibir notificaciones en este amparo, junto con la demanda se incorporó un documento en el que consta la dirección de su negocio –con cuenta comercial n° ********** y el cual se encuentra relacionado con el tributo impugnado– (folio 11).

B. Por otro lado, esta Sala ha establecido que, a pesar de que liminarmente haya constado en el respectivo expediente la dirección o el mecanismo en que se hicieron saber al actor las providencias judiciales dictadas, es posible que estos dejen de ser viables para practicar los actos de comunicación –independientemente de las circunstancias que hayan originado dicha situación–. En tal casa, el art. 171 inc. 2° del CPCM dispone que las notificaciones se practiquen por medio del *tablero del tribunal, siempre que dicha información no conste en ningún registro público* ni se encuentre en poder de instituciones privadas que están en la obligación de colaborar –art. 12 del CPCM–.

En ese sentido, previo a la notificación mediante el tablero, es necesario que el juez o tribunal intente obtener los datos correspondientes de registros públicos o de bases de datos de instituciones privadas que tienen la obligación de colaborar, con el fin de potenciar un conocimiento real y efectivo de las decisiones que se provean. Al respecto, esta Sala considera que, en aplicación supletoria de lo prescrito en el art. 181 inc. 2° del CPCM, pueden proporcionar información útil y complementaria, entre otras, las siguientes instituciones públicas y privadas: el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las administradoras de fondos de pensiones Confia y Crecer.

3. A. En virtud de lo expuesto y de conformidad con los parámetros establecidos en la presente resolución, *previo a ordenarse que los actos de comunicación dirigidos al señor LMA se efectúen por medio de tablero, la Secretaría de esta Sala debe intentar la comunicación correspondiente en la dirección establecida en el folio 11 del expediente judicial y, solo en el supuesto de que el resultado de dicha práctica sea infructuoso, requerirá la información pertinente a las instituciones públicas y privadas antes mencionadas y, al tener conocimiento de un lugar y/o medio técnico, llevará a cabo la comunicación en la forma ordinaria.*

B. Asimismo, ante la ausencia de alternativas viables para que el demandante reciba los actos procesales de comunicación, *es procedente advertir al señor LMAA que, en caso de plantear cualquier petición ante esta Sala, deberá señalar expresamente un lugar dentro de la circunscripción territorial de esta Sala y/o un medio técnico adecuado para la recepción de notificaciones con garantías de seguridad y confiabilidad, so pena de efectuar futuras comunicaciones procesales por medio del tablero judicial.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y lo dispuesto en el art. 31 n° 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese* a la abogada ********* como apoderada del Alcalde y del Concejo Municipal de San Salvador, por haber acreditado debidamente la personería con la que comparece.

2. *Tiénese* a las abogadas ******** y ******** como apoderadas de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales, por haber acreditado debidamente la personería con la que comparecen.

3. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por el señor LMAA, en contra de la Asamblea Legislativa, en virtud de que la disposición impugnada no produce un agravio a su derecho a la propiedad –por inobservancia del principio de capacidad económica–.

4. *Dejase sin efecto* la medida precautoria adoptada y confirmada mediante los autos de 16 de abril de 2021 y de 2 de febrero de 2022, respectivamente.

5. *Instrúyese* a la Secretaría de esta Sala que intente los actos de comunicación procesal al señor LMAA en la dirección establecida en el folio 11 del expediente judicial y, solo en el supuesto de que el resultado de dicha práctica sea infructuoso, requiera al Registro Nacional de las Personas Naturales, al Tribunal Supremo Electoral, a la Dirección General de Migración y Extranjería, a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a las administradoras de fondos de pensiones Confía y Crecer, la información idónea para localizar al señor AA y, al tener conocimiento de un lugar y/o medio técnico, lleve a cabo la comunicación en la forma ordinaria.

6. *Adviértese* al señor LMAA que, en caso de plantear cualquier petición ante esta Sala, deberá señalar expresamente un lugar dentro de la circunscripción territorial de esta Sala y/o un medio técnico adecuado para la recepción de notificaciones con garantías de seguridad y confiabilidad, so pena de efectuar futuras comunicaciones procesales por medio del tablero judicial.

7. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala: *(i)* de las nuevas personas comisionadas por la abogada ********** para recibir notificaciones, así como de la observación referida a que las notificaciones se le realicen exclusivamente por medio de la Cuenta Electrónica Única de la Alcaldía Municipal

de San Salvador registrada en el Sistema de Notificación Electrónica del Órgano Judicial; y *(ii)* de la dirección y del medio técnico –Cuenta Electrónica Única de la Dirección Nacional de Obras Municipales registrada en el Sistema de Notificación Electrónica del Órgano Judicial– indicados por las abogadas ********* y ********** para recibir los actos procesales de comunicación

8. *Notifíquese* la presente resolución a las partes y al Municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, a efecto de que conozcan el contenido de esta decisión.

“”””—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H N G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS.—SECRETARIA INTERINA.—RUBRICADAS.—””

511-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las trece horas del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos: *(i)* el escrito firmado por el abogado Edwin Amílcar Hernández Méndez, mediante el cual afirma que actúa como apoderado del señor JADP, informa a este Tribunal sobre su deceso, agrega documentación y, además, requiere que se suspenda el plazo conferido para evacuar los traslados del art. 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); y *(ii)* el escrito remitido vía correo electrónico y firmado por el Fiscal de esta Corte, por medio del cual hace uso del traslado concedido de conformidad con el art. 30 de la LPC.

Previo a continuar con la tramitación del presente amparo, corresponde exponer las siguientes consideraciones:

I. *1*. El abogado Edwin Amílcar Hernández Méndez manifiesta que se le notificó el auto de 21 de diciembre de 2022 con el cual se le confirió al demandante el traslado que ordena el art. 30 de la LPC. Sobre lo expuesto, informa que el señor JADP falleció el 18 de octubre de 2022 y, en virtud de ello, advierte que el mandato otorgado a su favor quedó sin efecto, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1923 n° 5 y 1928 del Código Civil.

2. Al respecto, se advierte que el aludido profesional fue comisionado por el actor para recibir, retirar y presentar todo tipo de documentos relacionados con la tramitación de este proceso y, consecuentemente, se tomó nota de ello en el auto de 20 de julio de 2020.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el abogado en cuestión no ha intervenido como apoderado del demandante durante ninguna de las fases de este amparo y, a la fecha, no ha presentado la documentación que lo acredite como tal.

En ese sentido, *resulta innecesario que esta Sala se pronuncie sobre la finalización del mandato en los términos expresados en el escrito antes relacionado, pues, si bien en el art. 73 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) –de aplicación supletoria a los procesos de amparo– se estipulan las causas de cese de la representación en la procuración, siendo una de estas el fallecimiento del poderdante –en cuyo caso el procurador está obligado a poner el hecho en conocimiento del juez–, en este caso el abogado no ha acreditado haber actuado como tal en el transcurso de este proceso.*

II. En cuanto a la petición sobre la suspensión del plazo para evacuar el traslado conferido al actor hasta que sus herederos se muestren parte en este proceso, se advierte que, –como se ha mencionado– el aludido profesional no ha acreditado el carácter en que manifiesta comparecer en este amparo, por tanto, no se encuentra habilitado para dirigir ante este Tribunal dicha petición.

III. *1. A*. Mediante auto de 20 de julio de 2020 se admitió la demanda incoada por el señor JADP, circunscribiéndose al control de constitucionalidad de las actuaciones atribuidas al Concejo Municipal de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, por haber emitido el Decreto Municipal n° 3 de 6 de junio de 2019, publicado en el Diario Oficial n° 112, tomo n° 423 de 18 de junio de 2019, mediante el cual se decretaron reformas a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ciudad Delgado –originalmente emitida por Decreto Municipal n° 31 de 18 de mayo de 2005 y publicada en el Diario Oficial n° 157, tomo n° 368 de 26 de agosto de 2005–, específicamente, en lo relativo al art. 7 n° 12 letra s) del citado cuerpo jurídico.

Tal admisión se debió a que, a juicio del demandante, con las referidas actuaciones se habrían vulnerado sus derechos de propiedad, por una parte, por la aparente inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria y, por otra, por el vicio consistente en la infracción al principio de capacidad económica, debido a la supuesta existencia de una doble tributación.

B. Ahora bien, el abogado Hernández Méndez informa sobre el deceso del pretensor de este amparo y, para acreditar dicha afirmación, presentó copia de la partida de defunción extendida por la Jefa del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Fernando, departamento de Chalatenango, en la cual consta que el señor JADP falleció el 18 de octubre de 2022, siendo este el documento idóneo para comprobar ese hecho (folio 88).

2. Esta Sala ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el objeto del proceso de amparo radica en la pretensión, la cual persigue esencialmente que se imparta a la persona justiciable protección jurisdiccional contra

un acto de autoridad –formal o material– que estima inconstitucional y que, específicamente, considera vulnera el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados a su favor. Así las cosas, la pretensión de amparo condiciona la iniciación y eventualmente –ante el cumplimiento o no de requisitos legales y jurisprudenciales referidos a la parte actora, la autoridad demandada o el ente jurisdiccional– la tramitación del proceso.

Ahora bien, un proceso de amparo puede finalizar de forma anormal por la desaparición de alguno o algunos de los elementos configuradores de la pretensión –relativos a los sujetos o al objeto– que generen la imposibilidad para la Sala de juzgar el caso concreto. En efecto, si el sujeto activo de la relación jurídico-procesal constitutiva de la pretensión de amparo deja de existir, es dable sostener que el proceso pierde la base subjetiva sobre la que descansa y, por tanto, resulta procedente ordenar su finalización a través de la figura del sobreseimiento, de conformidad con lo prescrito en el art. 31 n° 6 de la LPC, siempre y cuando la configuración de la parte actora sea de carácter unipersonal y el acto reclamado incida únicamente en sus derechos.

3. En el presente caso, el abogado Hernández Méndez informó y acreditó que el demandante falleció el 18 de octubre de 2022. En razón de lo anterior, dado que se ha comprobado la causal de sobreseimiento referida y que en el transcurso del proceso no se arguyó que la vulneración a derechos constitucionales alegada por el actor haya incidido en los derechos de otros sujetos, *resulta procedente sobreseer el presente proceso de amparo, de conformidad con el art. 31 n° 6 de la LPC.*

POR TANTO, con fundamento en lo expuesto y en las disposiciones legales citadas, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por el señor JADP, en contra del Concejo Municipal de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, de conformidad con el art. 31 n° 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

2. *Cesen* los efectos de la medida cautelar ordenada y confirmada en los autos de 20 de julio de 2020 y 16 de junio de 2021, respectivamente.

3. *Tome nota* la Secretaría de esta Sala de que el abogado Edwin Amílcar Hernández Méndez ratificó la dirección y la cuenta electrónica única inscrita en el Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, propuestos previamente para recibir notificaciones.

4. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

306-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos: *(i)* el oficio n° 012 de 7 de julio de 2022, remitido por correo electrónico y suscrito por el Delegado Contravencional de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, mediante el cual evacúa el traslado conferido de conformidad con el art. 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); y *(ii)* el escrito remitido vía correo electrónico y firmado por el Fiscal de esta Corte, en virtud del cual hace uso del traslado otorgado de conformidad con el art. 30 de la LPC.

Previo a continuar con la tramitación del presente amparo, corresponde exponer las siguientes consideraciones:

I. *1. A.* Por resolución de 29 de septiembre de 2021 se admitió la demanda incoada por la señora MLPH contra la resolución de 18 de junio de 2021 emitida por el Delegado Contravencional de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, por medio de la cual se ordenó el inicio del procedimiento sancionador con ref. 350-OCC-06-21-16 y el cierre temporal del establecimiento propiedad de la referida señora. Ello por la presunta vulneración de los derechos de audiencia, de defensa —como manifestaciones del debido proceso—, a la libertad de empresa y a la propiedad —por la posible infracción al principio de proporcionalidad—.

B. En la misma resolución se ordenó la suspensión de los efectos de la decisión impugnada, únicamente en lo relacionado al cierre temporal del restaurante de la peticionaria, por lo que la municipalidad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, debía abstenerse de ejecutar o mantener el cierre temporal del restaurante "El Ancla de las Terrazas" y no podía impedir que la demandante continuara realizando su actividad económica por las infracciones que se le atribuyen en la resolución impugnada, mientras se tramitaba el presente proceso constitucional.

2. A. Al evacuar el traslado que le fue conferido, el Delegado Contravencional de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla reitera las afirmaciones efectuadas en sus intervenciones anteriores y, además, alega que ordenó el cierre del local como medida provisional dentro del procedimiento administrativo sancionador tramitado en contra de la actora, de conformidad con los arts. 78 y 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos, medida que no es equiparable con la sanción establecida en el art. 28 letra g de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas —el cierre definitivo—.

B. En relación con dichas afirmaciones, se advierte que en la fase probatoria de este proceso de amparo la autoridad demandada presentó una

certificación del expediente administrativo con ref. 350-OCC-06-21-16 (folios 105 al 180), en la cual constan —entre otros— los siguientes documentos: *(i)* la resolución que dio inicio al referido procedimiento administrativo (folios 108 al 110); *(ii)* el "acta de clausura provisional del establecimiento" del Restaurante El Ancla de las Terrazas (folio 119); y *(iii)* la resolución de 21 de enero de 2022 (folios 164 al 171), mediante la cual se sobreseyó a la actora respecto a las presuntas infracciones contempladas en los arts. 3 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Santa Tecla y 50 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y Bebidas Alcohólicas —que sancionan la falta de licencia para el consumo y la falta de permiso para la comercialización de bebidas alcohólicas menores al 6% en volumen de alcohol, respectivamente— y, además, se sancionó a la demandante con el pago de una multa por las infracciones tipificadas en los arts. 56 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Santa Tecla y 8 de la Ordenanza Reguladora de las Emisiones de Ruidos y Vibraciones en el Municipio de Santa Tecla.

En virtud del contenido de dicha documentación, se colige que el procedimiento administrativo sancionador tramitado en contra de la demandante ya ha concluido sin que se le haya impuesto la sanción de cierre de su establecimiento comercial y, en consecuencia, que el acto reclamado en este proceso de amparo ya no puede producir efectos en su esfera jurídica.

II. Expuestos los términos de la admisión de la demanda y los argumentos aducidos por la autoridad demandada en su defensa, es preciso analizar si es procedente sobreseer el presente amparo por la causal prevista en el art. 31 n° 5 de la LPC.

1. El art. 31 n° 5 de la LPC prevé el sobreseimiento del proceso de amparo por el cese de los efectos del acto reclamado. El legislador estableció esta causal como una forma de terminación anormal del proceso en los casos en que los efectos emanados del acto productor del agravio cesan, lo que conlleva la desaparición del agravio alegado por el sujeto activo de la pretensión. En esas circunstancias la tramitación del amparo no puede continuar y, en consecuencia, debe rechazarse la demanda en aplicación de la figura del sobreseimiento.

2. Dado que en este proceso se ha comprobado que en el procedimiento administrativo sancionador con ref. 350-OCC-06-21-16 se pronunció la resolución final de 21 de enero de 2022, en la cual se sobreseyó a la señora MLPH por la falta de permiso para el consumo de bebidas alcohólicas menores al 6% en volumen de alcohol y únicamente se le sancionó con el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de multa por haber infringido los arts. 56 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Santa Tecla y 8 de la Ordenanza Reguladora

de las Emisiones de Ruidos y Vibraciones en el Municipio de Santa Tecla, *se concluye que el acto impugnado en este proceso de amparo ha cesado en sus efectos, pues ha finalizado el procedimiento administrativo que dio origen a la medida provisional que había sido cuestionada por la demandante, de manera que debe declararse el sobreseimiento de este proceso de conformidad al art. 31 n° 5 de la LPC.*

POR TANTO, con base en lo expuesto y de conformidad con la disposición legal citada, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por el abogado **********, en calidad de apoderado de la señora MLPH, en contra del Delegado Contravencional del municipio de Santa Tecla, por la presunta vulneración de sus derechos de audiencia, de defensa —como manifestaciones del debido proceso—, a la libertad de empresa y a la propiedad —por la posible infracción al principio de proporcionalidad—, en virtud de haberse comprobado el cese de los efectos del acto reclamado.

2. *Cese* la medida cautelar ordenada y confirmada en los autos de 29 de septiembre de 2021 y de 8 de diciembre de 2021, respectivamente.

3. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

En virtud de la pandemia por el COVID-19, a fin de evitar su movilización a esta sede judicial, se advierte que cualquier documentación relacionada al presente proceso la remita a través del correo institucional sala.constitucional@oj.gob.sv

112-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos: *(i)* el escrito firmado por la abogada **********, en carácter de defensora pública y en representación de la señora INBB, parte actora en el presente proceso, por medio del cual contesta el traslado conferido a la demandante de conformidad con el art. 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC); *(ii)* el escrito suscrito por la abogada **********, en calidad de apoderada del Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, mediante el cual contesta el traslado conferido a su mandante de conformidad con el art. 30 de la LPC, informa

a esta Sala sobre el acuerdo extrajudicial al que se llegó con la pretensora el 31 de agosto de 2022 y sobre el pago total de la indemnización acordada y, finalmente, presenta documentación; y *(iii)* el escrito remitido vía correo electrónico y firmado por el Fiscal de esta Corte, en virtud del cual contesta el traslado conferido de conformidad con el art. 30 de la LPC.

Antes de continuar con el trámite de este proceso, es pertinente realizar las siguientes consideraciones:

I. *1.* Por resolución de 9 de abril de 2021 se admitió la demanda planteada por la señora INBB, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del Acuerdo Municipal n° 7, asentado en el Acta n° 22 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, el 3 de Octubre de 2019, en virtud del cual dicha autoridad decidió suprimir la plaza que ocupaba la demandante con funciones de barrendera en esa municipalidad. Tal admisión se debió a que, a juicio de la pretensora, fue separada de su cargo sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se garantizaran sus oportunidades de defensa y sin que se justificaran y comprobaran las razones que tenía la autoridad demandada para proceder a la supresión de su plaza.

En el referido auto, además, se decretó la suspensión de los efectos del acto reclamado, medida cautelar que consistió en ordenar a la autoridad municipal demandada que reinstalara inmediatamente a la pretensora en el cargo de auxiliar de proyección social del Programa del Adulto Mayor o en alguno de igual categoría y clase, siempre que no implicara una desmejora ni traslado que pudiera perjudicar sus derechos laborales. La referida medida precautoria fue revocada mediante resolución de 12 de octubre de 2022, por haberse modificado las circunstancias advertidas en el auto de admisión.

2. Mediante auto de 10 de marzo de 2023 se confirieron los traslados que ordena el art. 30 de la LPC. Al contestar dicho traslado, el Concejo Municipal de El Rosario, a través de su apoderada, la abogada **********, reitera los alegatos realizados en sus anteriores intervenciones e hizo del conocimiento de esta Sala que el 31 de agosto de 2022 llegó a un arreglo conciliatorio extrajudicial con la señora INBB en el que se acordó el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de indemnización, la cual sería cancelada en dos cuotas, el 31 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.

Con el objeto de respaldar su afirmación, presenta certificación notarial de: *(i)* el acta notarial de 31 de agosto de 2022, en la cual se hizo constar que debido a la supresión de la plaza que ocupaba la demandante en la Alcaldía Municipal de El Rosario se le ofreció una cantidad de dinero en concepto de indemnización por el tiempo laborado, la cual le sería cancelada en dos cuotas, el 31 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, y

que la actora se comprometía a retirar o desistir de la demanda de amparo interpuesta ante esta Sala, una vez recibiera el pago total de la aludida indemnización, exonerando, además, de toda responsabilidad al Concejo Municipal demandado (fs. 385); *(ii)* la certificación del Acuerdo Municipal n° 6 asentado en el Acta n° 17, de 19 de agosto de 2022, en virtud del cual el Concejo Municipal de El Rosario autorizó a la tesorera municipal para que realizara la erogación del monto correspondiente a la indemnización a favor de la pretensora y que efectuara el pago de la misma en las fechas acordadas (fs. 389); *(iii)* los cheques Serie "BFA-G" n° ***11 y n° ***93, ambos pertenecientes a la cuenta n° ********** del Banco de Fomento Agropecuario, emitidos por una determinada cantidad de dinero a favor de la peticionaria con fechas 31 de agosto de 2022 y 30 de septiembre de 2022, respectivamente, los cuales fueron recibidos por la demandante, según consta por la firma que calza al pie del recibo correspondiente a cada cheque (fs. 386 y fs. 390); y *(iv)* los documentos suscritos por la actora, por medio de los cuales se dio por recibida, de parte de la Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal de El Rosario, de cada una de las cuotas pactadas en el acta notarial de 31 de agosto de 2022 (fs. 387 y fs. 391).

3. *A*. En virtud de lo expuesto por la autoridad demandada y de la documentación aportada al proceso, se advierte una posible causal de sobreseimiento del presente amparo, concretamente, la expresa conformidad de la demandante con el acto reclamado prevista en el art. 31 n° 2 de la LPC. Dicha disposición constitucional prevé que el proceso de amparo termina por sobreseimiento en virtud de la expresa conformidad del agraviado con el acto reclamado. Esta circunstancia implica la existencia de vicios en la pretensión que generan la imposibilidad de juzgar el caso concreto y, en ese sentido, tornan inviable la tramitación completa del proceso, por lo que, al advertirse la concurrencia de la citada causal, la demanda de amparo debe ser rechazada en el transcurso de este.

Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia que un acto de autoridad se entiende expresamente consentido cuando se ha hecho, por parte del supuesto agraviado, una adhesión a aquel, de forma verbal o escrita o por medio de signos inequívocos de aceptación. En tal sentido, la conformidad con el acto reclamado se traducirá en la realización de hechos, por parte del presumible afectado, que indican claramente su disposición de cumplir dicho acto o de admitir sus efectos. Por ejemplo, la aceptación de una indemnización o la emisión de una declaración de voluntad en la cual expresamente se libere, exonere o exima a determinada autoridad de responsabilidad por una actuación.

Y es que, si bien el amparo pretende tutelar los derechos constitucionales del demandante, debe verificarse que el agravio subsiste, pues ante la expresa conformidad del peticionario con el acto reclamado, el proceso, desde la perspectiva constitucional, carece de objeto.

B. La autoridad demandada alega que le canceló a la demandante una cantidad de dinero en concepto de indemnización laboral por la supresión de la plaza que ocupaba dentro de la Alcaldía Municipal de El Rosario e incorporó al proceso los documentos con los que respalda tal afirmación. Al respecto, se observa que con la documentación presentada se han comprobado los siguientes hechos: *(i)* que el 31 de agosto de 2022, mediante acta notarial de esa misma fecha, el Concejo Municipal demandado y la pretensora llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que el primero se comprometió a pagarle a la segunda la indemnización en cuestión, bajo la modalidad de dos cuotas, y que esta última asumió el compromiso de desistir del presente proceso; *(ii)* que por medio de la anterior acta notarial la peticionaria extendió finiquito a favor de la autoridad demandada, liberándola de todo tipo de responsabilidad, una vez recibiera el pago total de la referida prestación laboral; y *(iii)* que el 31 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2022 la actora se dio por recibida de los cheques a través de los cuales el Concejo demandado le pagó las dos cuotas convenidas en el anterior acuerdo, para lo cual firmó los respectivos recibos.

C. La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido –*v. gr*., en la sentencia de 29 de febrero de 2016, amparo 628-2013– que los empleados de las instituciones oficiales autónomas se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Servicio Civil y se rigen por las leyes especiales que en estas entidades se emiten sobre la materia.

En el caso específico de las municipalidades, la normativa aplicable a sus empleados, en general, es la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM). Así, el art. 53 de la mencionada normativa establece que: "En los casos que a los funcionarios o empleados de carrera independientemente de su relación jurídico laboral, se les comunique o notifique la supresión de la plaza o cargo, éstos podrán ser incorporados a empleos similares o de mayor jerarquía o podrán ser indemnizados". De igual forma, dispone que: "La indemnización a que se refieren los incisos anteriores, sólo procederá cuando los funcionarios o empleados de carrera, cesaren en sus funciones por supresión de plaza o cargo, y tendrán derecho a recibir una indemnización equivalente al sueldo mensual correspondiente a dicha plaza o cargo, por cada año o fracción que exceda de seis meses de servicios prestados [...]".

De lo expuesto se deduce que la pretensora, al suscribir el acta notarial en la que se plasmó el acuerdo extrajudicial al que llegó con el Concejo Municipal de El Rosario y al firmar cada uno de los recibos que se emitieron al momento de entregarle los cheques a través de los cuales se le pagó la indemnización convenida, admitió los efectos y las consecuencias que ello produciría en su esfera jurídica. Es decir que, al haber aceptado la demandante el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de indemnización

y exonerar de forma expresa al Concejo Municipal demandado de toda clase de responsabilidades –tal como se constata en el acta notarial de 31 de agosto de 2022–, se evidencia que aquella emitió una declaración de aceptación voluntaria de los efectos del acto impugnado –la supresión de la plaza que ocupada dentro de esa municipalidad–.

La circunstancia antes descrita se traduce en un defecto de la pretensión que genera la imposibilidad de conocer el fondo del asunto planteado, por lo que resulta infructuosa la tramitación completa de este proceso. Y es que, además, del contenido de la disposición legal previamente citada, se colige que el pago de la indemnización en cuestión se justifica exclusivamente en la terminación de la relación laboral que existe entre el empleado y la municipalidad como consecuencia de la supresión de la plaza que aquel ocupaba. En razón de lo expuesto, resulta procedente *sobreseer el presente proceso de amparo por la supuesta vulneración de derechos fundamentales atribuida al Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, de conformidad con el art. 31 n° 2 de la LPC.*

POR TANTO, con base en lo expuesto y en las disposiciones legales citadas, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso promovido por la señora INBB contra el Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, por la supuesta vulneración de sus derechos de audiencia, de defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral, en virtud de haber manifestado la referida señora su conformidad con los efectos del acto reclamado, según lo previsto en el art. 31 n° 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

2. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

480-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibido el escrito remitido vía correo electrónico y firmado por el Fiscal de esta Corte, por medio del cual evacua el traslado conferido de conformidad con el art. 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Previo a continuar con el trámite correspondiente, se realizan las siguientes consideraciones:

I. *1*. En síntesis, los señores JRGC, JAMC, JEC, CAM, ECRH, ONRP, MCZ, XWVC, GJCAR, NCCF, AMCM, PBR, CAB, MTMC, KKVC, SRG, YCHF, MGMR, EAL, MCRP, MES, OAO, CRGC, VCOM, CMCV, SJV, GMRC, LMAS, EVSO, MTCN, SSA, SEST, JSOS, MBLSC, GOR, AQR, PRSP, ACRS, AVSR, PLSR y RCA han dirigido su reclamo en contra del Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, argumentando que la referida autoridad municipal ordenó su desalojo de la Plaza Infantil de esa ciudad, lugar donde ejercen sus actividades comerciales, sin tramitarles un procedimiento administrativo previo en el cual se les permitiera participar, a pesar de que contaban con contratos de arrendamiento de los locales que ocupaban.

2. Mediante el auto de 9 de noviembre de 2020 se admitió la demanda planteada, circunscribiéndose al control de constitucionalidad de la decisión atribuida al Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, de desalojar a los demandantes de los locales ubicados en la Plaza Infantil donde ejercían su actividad comercial. Con dicha actuación se habrían vulnerado los derechos a la libertad de empresa –en su manifestación de realizar la gestión de la empresa–, de audiencia y de defensa –como manifestaciones del debido proceso–, ya que no siguió un procedimiento administrativo previo en el que se les permitiera participar, ser escuchados y defenderse, pese a que existían contratos de arrendamiento vigentes de los referidos locales.

3. En sus respectivas intervenciones la autoridad demandada manifestó que no eran ciertas las vulneraciones constitucionales que se le atribuían. Así, señaló que en el marco del proyecto "Recuperación de espacio público, construcción del Parque Infantil y cancha de futbol rápido de la ciudad de Usulután, Municipio y Departamento de Usulután", se sostuvieron reuniones con los demandantes con el propósito de generar un acuerdo que beneficiara a ambas partes para proceder a la ejecución del referido proyecto. En dichas oportunidades se les explicó que era necesario realizar un desalojo provisional, pues no podía construirse mientras los actores permanecieran en el parque.

En ese contexto, apuntó que en la sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2020 acordó incorporar al referido proyecto municipal 42 puestos para los comerciantes, con lo cual se garantizó a los demandantes que no serían desalojados sino trasladados a las cercanías del parque infantil para que, una vez finalizado el proyecto, sean incorporados en los respectivos puestos comerciales. Al respecto, señaló que dicho acuerdo les fue notificado oportunamente a los pretensores.

Por otra parte, expresó que no existían los contratos de arrendamiento que los actores alegaron tener por la ocupación de los locales comerciales, pues estos únicamente tienen la calidad de sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal por utilizar los puestos para venta, ello de conformidad con el art. 3 letra b romano I de la Ordenanza de Tasas Municipales del Municipio de Usulután, departamento de Usulután.

II. *1. A*. Delimitados los términos de la pretensión de la parte actora, así como los argumentos sostenidos por la autoridad demandada, y analizado el contenido de la documentación agregada al proceso, es necesario, para resolver adecuadamente el caso en estudio, hacer una breve referencia al *cese de los efectos del acto reclamado* como causal de terminación anormal del proceso de amparo.

B. El art. 31 n° 5 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) establece el rechazo por sobreseimiento de la pretensión de amparo por "haber cesado los efectos del acto reclamado". Así, dicha causal ha sido estipulada como una forma de terminación anormal del proceso de amparo, en aquellos casos en los cuales los efectos de la actuación que producían el agravio cesan –ya sea porque se ha revocado la resolución que contiene dicho acto o porque la autoridad demandada ha subsanado el vicio que afectaba al peticionario– y desaparece el agravio que afectaba al sujeto activo de la pretensión, este Tribunal se ve imposibilitado de continuar con su tramitación, debiendo rechazar la demanda presentada mediante la figura del sobreseimiento por haber imposibilidad para conocer de la pretensión planteada en ella, de acuerdo con lo prescrito en dicha disposición legal.

Y es que, tomando en consideración que la base para darle trámite al proceso de amparo es la configuración de una pretensión constitucional que ataca actuaciones u omisiones administrativas o jurisdiccionales, cuando esta base se destruye por desaparecer las actuaciones u omisiones impugnadas, o sus efectos, el proceso de amparo ya no tiene razón de ser y no existe la posibilidad de terminarlo normalmente por medio de una sentencia.

2. En el presente caso, los demandantes sometieron a control constitucional la decisión emitida por el Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, mediante la cual ordenó el desalojo de los locales ubicados en la Plaza Infantil donde ejercían su actividad comercial sin que se les hubiese seguido un procedimiento administrativo previo en el que se les permitiera participar, ser escuchados y defenderse, a pesar de que existían contratos de arrendamiento vigentes de los locales en cuestión.

Ahora bien, se ha comprobado en este proceso que el Concejo Municipal de Usulután mediante acta n° 46 de 9 de noviembre de 2020 acordó, entre otras cosas, incorporar 42 puestos para comerciantes en el proyecto "Recuperación de Espacio Público, Construcción del Parque Infantil y Cancha de Futbol Rápido de la Ciudad de Usulután, Municipio y Departamento

de Usulután" y, además, reubicar de manera temporal en las cercanías del parque infantil a los afectados en aras de que continuaran ejerciendo sus actividades de comercio, para que, posteriormente, sean reubicados en sus nuevos puestos al interior de la nueva Plaza Infantil. Asimismo, se encuentran agregadas 29 notas de "18 de enero de 2020", firmadas por el Alcalde Municipal de Usulután, mediante las cuales comunicó a los aludidos comerciantes el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2020, al que se ha hecho referencia.

En ese sentido, se colige que el Concejo Municipal de Usulután revocó el acto que fue reclamado como inconstitucional, pues la orden de desalojo efectuada ha sido modificada a una medida de carácter temporal. Además, mediante acuerdo municipal les ha garantizado a los demandantes el reinstalo en los locales dispuestos para el comercio una vez finalizada la obra en la Plaza Infantil.

3. En consecuencia, resulta dable afirmar que la actuación reclamada al Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, en este amparo ha cesado en sus efectos, pues se ha subsanado la lesión constitucional alegada por los peticionarios, de manera que debe declararse un sobreseimiento en el presente caso de conformidad con el art. 31 n° 5 de la LPC.

POR TANTO, con base en lo expuesto y en la disposición legal citada, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el proceso de amparo incoado por los señores JRGC, JAMC, JEC, CAM, ECRH, ONRP, MCZ, XWVC, GJCAR, NCCF, AMCM, PBR, CAB, MTMC, KKVC, SRG, YCHF, MGMR, EAL, MCRP, MES, OAO, CRGC, VCOM, CMCV, SJV, GMRC, LMAS, EVSO, MTCN, SSA, SEST, JSOS, MBLSC, GOR, AQR, PRSP, ACRS, AVSR, PLSR y RCA en contra de la actuación atribuida al Concejo Municipal de Usulután, departamento de Usulután, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—-GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

96-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Se tienen por recibidos: *(i)* el escrito remitido vía correo electrónico y firmado por la abogada Janneth Carolina Brito Centeno, en calidad de apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE,

en Virtud del cual solicita que se sobresea el presente amparo: y *(ii)* el memorándum de 3 de julio de 2023, suscrito por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual solicita a la Secretaría de esta Sala un informe completo sobre el presente proceso de amparo.

Previo a emitir la decisión que corresponda a lo solicitado, se hacen las siguientes consideraciones:

I. 1. Por auto de 31 de mayo de 2021 se admitió la demanda planteada por el señor RARA, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del presunto despido de hecho atribuido a la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, por haber sido efectuado mientras gozaba de fuero sindical y sin tramitar un proceso previo en el que tuviera la oportunidad de participar y de defenderse. Dicha admisión se debió a que, de acuerdo con lo expresado por el actor, con tal actuación se habrían vulnerado sus derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical.

2. A. Al respecto, la autoridad demandada ha sostenido que no se vulneraron los derechos alegados por el señor RA, dado que este no era titular de los derechos que ha invocado como lesionados, pues su relación con la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE era de servicios profesionales, por lo que era contratado eventualmente como profesor hora-clase y no realizaba funciones permanentes.

B. Posteriormente, en el transcurso de la etapa probatoria la autoridad demandada expuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que el período en el cual el demandante fungió como directivo sindical finalizó el 26 de marzo de 2020, por lo que el plazo adicional de protección en dicha calidad concluyó el 26 de marzo de 2021. En consecuencia, ya no sería posible otorgar una restitución material sino un resarcimiento económico.

Asimismo, indicó que consta en el expediente de amparo que el pretensor informó al Juez de lo Laboral (2) "de la ciudad de San Salvador" que había recibido el pago de salarios no devengados por causa imputable al patrono, por lo que solicitó que se absolviera a la demandada por ese concepto. Para comprobar dicha afirmación adjuntó una serie de documentos a partir de los cuales infiere que, dado que el señor RA ya no contaba con la calidad de directivo sindical, la eventual protección que se le podría otorgar solo se traduciría en un resarcimiento económico, el cual ya recibió por la sentencia emitida en jurisdicción ordinaria.

II. *1. A.* Respecto de las circunstancias planteadas por la apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, es preciso realizar una breve referencia a la conformidad con el acto reclamado como causal de terminación anormal del proceso de amparo.

B. El art. 31 n° 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) prevé que el proceso de amparo terminará por sobreseimiento en virtud de la expresa conformidad del agraviado con el acto reclamado. Esta circunstancia implica la existencia de vicios en la pretensión que generan la imposibilidad de juzgar el caso concreto y. en ese sentido, tornan inviable la tramitación completa del proceso, por lo que, al advertirse la concurrencia de dicha causal, la demanda de amparo debe ser rechazada al inicio o en el transcurso de este.

Esta Sala ha sostenido en su jurisprudencia que un acto de autoridad se entiende expresamente consentido cuando se ha hecho. por parte del supuesto agraviado, una adhesión a aquel, de forma verbal o escrita o por medio de signos inequívocos de aceptación. En ese sentido, la conformidad con el acto reclamado se traducirá en la realización de hechos por parte del presumible afectado, que indican claramente su disposición de cumplir dicho acto o de admitir sus efectos. Por ejemplo, la aceptación de una indemnización o la emisión de una declaración de voluntad en la cual expresamente se libere, exonere o exima a determinada autoridad de responsabilidad por una actuación.

Si bien el amparo pretende tutelar los derechos constitucionales del demandante. debe verificarse que el agravio subsiste. ya que ante la expresa conformidad del peticionario con el acto reclamado el proceso desde la perspectiva constitucional, carece de objeto.

2. A. La autoridad demandada señaló que el señor RARA recibió el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de salarios no devengados por causa imputable al patrono, como efecto de la sentencia pronunciada en el proceso con ref. 762-15-10/3 tramitado en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad. Para comprobar lo expresado adjuntó la siguiente documentación: *(i)* copia de la partida contable período enero 2019 de 24 de enero de 2019, en la que consta entre otros, la partida de diario sentencia definitiva de caso laboral ref. 762-15-10/3 detallado por cuenta (...) **********3 indemnizaciones por sentencias judiciales débito 11.938.72 (folio 151); *(ii)* copia del cheque n° **********1 del Banco Agrícola de 24 de enero de 2019 por la cantidad de once mil novecientos treinta y ocho dólares con 72/100 de los Estados Unidos de América con pago a la orden de RARA (folio 152); y *(iii)* copia del escrito de 25 de enero de 2019 suscrito por el señor RARA, mediante el cual informó que ha sido satisfecho el pago de los salarios no devengados y solicitó al Juez de lo Laboral de Santa Tecla que se tenga por cumplida la sentencia pronunciada (folio 153).

B. Del análisis de los elementos probatorios anteriormente citados, además del reconocimiento efectuado por el actor en su demanda, se colige que el señor RA, al recibir el pago por los salarios no devengados por causa

imputable al patrono ordenado por el Juez de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en el proceso individual de trabajo con ref. 762-15-10/3, *admitió los efectos y las consecuencias que ello produciría en su ojera jurídica, esto es, aceptar el pago de cierta cantidad de dinero por la terminación de su relación laboral.*

La circunstancia antes descrita pone en evidencia que, al haber aceptado el aludido pago, el señor RARA emitió una declaración de aceptación de los efectos del acto impugnado y ello se traduce en un defecto de la pretensión que impide el conocimiento del fondo del asunto planteado, por lo que *resulta procedente sobreseer este proceso de amparo por la supuesta vulneración de derechos constitucionales atribuida a la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería 1TCA-FEPADE de conformidad con el art. 31 n° 2 de la LPC.*

C. Sobre las circunstancias expuestas por la apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE como posibles causales de sobreseimiento por cese de los efectos del acto reclamado, esta Sala considera innecesario hacer valoración alguna sobre los argumentos vertidos, toda vez que ya se ha sobreseído el presente proceso de amparo.

III. Con relación al informe solicitado por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, se advierte que el requerimiento ya fue respondido por la Secretaría de esta Sala mediante el oficio n° 1419 de 10 de julio de 2023, por lo cual es innecesario adoptar una decisión al respecto en el presente auto.

POR TANTO, con base en lo expuesto y en la disposición legal citada, esta Sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de amparo promovido por el señor RARA contra la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, en virtud de haber manifestado el pretensor su conformidad con el acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—GARCÍA—CANALES—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

512-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de amparo ha sido promovido por el señor CESR, en contra del Concejo Municipal de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador (CMCD), por la vulneración a su derecho a la propiedad —por inobservancia de los principios de reserva de ley y capacidad económica—.

Han intervenido en el proceso la parte actora, la autoridad demandada y el Fiscal de esta Corte.

Analizado el proceso y considerando:

I. *1.* El actor manifestó en su demanda que dirige su reclamo en contra del CMCD por haber emitido el art. 7 n° 12 letra s) de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ciudad Delgado (ORTS-MCD), mediante el Decreto n° 3 de 6 de junio de 2019, publicado en el Diario Oficial n° 112, tomo n° 423, de 18 de junio de 2019. Dicha disposición establece:

"Art. 7. Se establecen las siguientes tasas por servicio que la Municipalidad de Ciudad Delgado presta en esta ciudad, en dólares americanos, de la manera que se detalla a continuación:

[...]

12- PERMISOS Y LICENCIAS

[...]

s) Permiso por funcionamiento al mes de ventas de bebidas alcohólicas, expendios, cantinas $ 100.00".

Al respecto, indicó que es propietario de un establecimiento comercial dedicado a la "venta de bebidas alcohólicas envasadas al por menor", ubicado en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, por lo que, de conformidad con los arts. 30, 31 y 32 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas (LRPCABA), realiza el trámite de renovación de la "licencia anual para la venta de bebidas alcohólicas" dentro de los primeros quince días de cada año fiscal, que consiste en "cancelar [a la Municipalidad] el derecho correspondiente (un salario mínimo vigente al momento de la renovación)" a fin de obtener la autorización para desarrollar la mencionada actividad comercial dentro del municipio.

Ahora bien, manifestó que además de adquirir la licencia anual regulada en la LRPCABA, debe pagar una tasa municipal de periodicidad mensual en concepto de "permiso por funcionamiento de ventas de bebidas alcohólicas, expendios, cantinas", en virtud de lo dispuesto en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD.

Ante ello, arguyó que el CMCD vulneró el derecho a la propiedad del señor SR por la presunta infracción al principio de reserva de ley en materia tributaria, puesto que creó un tributo que carece de contraprestación, porque la autorización administrativa para comercializar bebidas alcohólicas es conferida de manera anual, en virtud de la licencia establecida en la LRPCABA, por lo que se configura en realidad como un impuesto y no como tasa.

Asimismo, alegó que, aún en el caso que el tributo cuestionado fuera considerado una tasa municipal, la autoridad demandada estaría afectando el derecho a la propiedad por la inobservancia del principio de capacidad económica, debido a que existe una doble imposición inconstitucional cuya única finalidad sería la exacción arbitraria del patrimonio del contribuyente. Y es que, en su opinión, tanto en los arts. 30, 31 y 32 de la LRPCABA como en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD se regula un mismo hecho generador y un mismo beneficio, es decir, ambas disposiciones están diseñadas para conceder a los comerciantes de bebidas alcohólicas la autorización para ejercer tal actividad dentro del municipio.

2. A. Mediante resolución de 31 de agosto de 2020 se admitió la demanda planteada, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD.

Tal admisión se debió a que la autoridad demandada probablemente vulneró el derecho a la propiedad del señor CESR, por la inobservancia al principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que al no existir una contraprestación se trataría de la regulación de un impuesto y no de una tasa, siendo el impuesto una categoría tributaria que únicamente puede ser creada por medio de ley formal emanada de la Asamblea Legislativa y no por medio de una ordenanza municipal.

Por otro lado, en caso de que no se configurara el mencionado vicio, presuntamente se lesionó el derecho a la propiedad por infracción al principio de capacidad económica, por existencia de una doble tributación de naturaleza inconstitucional, por lo que la tasa municipal tiene como único objetivo generar una exacción arbitraria del patrimonio del contribuyente.

B. En el mismo auto se ordenó la suspensión de los efectos de la disposición impugnada, por lo que la autoridad demandada debía abstenerse de exigir al señor SR el pago del tributo contenido en aquella y de ejercer acciones administrativas o judiciales tendentes a su cobro; además, no se generarían intereses o multas por su falta de pago.

C. Asimismo, se pidió al CMCD que rindiera el informe que establece el art. 21 de la LPC y que se pronunciara sobre el cumplimiento de la medida cautelar ordenada. Sin embargo, dicho informe se tuvo por no rendido, debido a defectos de personería de la persona que compareció en representación de la referida autoridad.

D. Finalmente, se concedió audiencia a la entonces Fiscal de esta Corte, de conformidad con el art. 23 de la LPC, pero no hizo uso de la oportunidad procesal conferida.

3. A. Por auto de 1 de marzo de 2021 se confirmó la suspensión de los efectos de la disposición controvertida y, además, se requirió al CMCD que rindiera el informe justificativo que regula el art. 26 de la LPC.

B. La autoridad demandada, al rendir el informe solicitado, manifestó que el señor CESR posee una empresa inscrita que se dedica al expendio de aguardiente, por lo que se le aplican todos los tributos correspondientes, tanto en concepto de tasas por servicios que presta la municipalidad como de impuestos por la actividad económica.

Así, señaló que, según la Unidad de Catastro y la Unidad de Gestión de Cobros, la actividad comercial desarrollada en Ciudad Delgado consiste en la distribución, venta y almacenamiento de bebidas alcohólicas, por lo que de conformidad con lo prescrito en el art. 32 inc. 30 de la LRPCABA se le realizan cobros por la licencia para vender dichas bebidas, equivalentes a un salario mínimo mensual urbano por cada puesto de venta por año.

4. Seguidamente, por resolución del 15 de octubre 2021 se confirieron los traslados que ordena el art. 27 de la LPC, respectivamente, al Fiscal de la Corte, quien expresó que emitiría su opinión técnica sobre la cuestión de fondo hasta que hubiera transcurrido la etapa probatoria; y a la parte actora, la cual sostuvo que la autoridad demandada no expuso en su informe las justificaciones en que fundamenta la legalidad de sus actuaciones y no señaló cuál era la contraprestación recibida por el pago del tributo, ya que solo hizo alusión al hecho generador de la imposición prevista en la LRPCABA y no al tributo regulado en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD, por lo que, ante ello, reiteró en esencia los argumentos expuestos en la demanda.

5. Posteriormente, mediante la resolución del 6 de mayo de 2022 se habilitó la fase probatoria por el plazo de ocho días hábiles, de conformidad con el art. 29 de la LPC, lapso en el que únicamente el demandante ofreció la prueba documental que estimó pertinente.

6. Por medio de auto de 11 de julio de 2022 se otorgaron los traslados que prescribe el art. 30 de la LPC al Fiscal de esta Corte, quien consideró que el tributo establecido es en realidad un impuesto y, además, que se está gravando el mismo hecho generador de otro tributo vigente; a la parte actora, la cual reiteró los argumentos expuestos en sus anteriores intervenciones; y a la autoridad demandada, la cual no hizo uso del traslado conferido.

7. Concluido el trámite establecido en la LPC, el presente proceso de amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

II. Establecido lo anterior, el orden con el que se estructurará esta resolución es el siguiente: se determinará el objeto de la presente controversia (III); luego, se expondrán ciertas consideraciones acerca del contenido del derecho y los principios que se alegan transgredidos y se establecerán algunos aspectos conceptuales relativos a la potestad tributaria municipal y las tasas, así como a la doble o múltiple tributación (IV); y, a continuación, se analizará el caso sometido a conocimiento de esta Sala (V).

III. *1.* De acuerdo con la demanda incoada y el auto de admisión de esta, el presente proceso constitucional reviste la modalidad de *un amparo contra ley autoaplicativa*, que es el instrumento procesal por medio del que se impugnan disposiciones que producen efectos jurídicos desde el momento de su entrada en vigencia y que vulneran derechos fundamentales.

En la sentencia del 6 de abril de 2011, amparo 890-2008, se estableció que, si se opta por la vía del amparo para cuestionar constitucionalmente una ley, dicho proceso no solo deberá cumplir con los requisitos de procedencia de los procesos de inconstitucionalidad, sino que, además, *el sujeto activo deberá evidenciar la afectación a alguno de sus derechos fundamentales, por caer en el ámbito de aplicación de la disposición considerada inconstitucional.*

2. De ahí que, en el caso que nos ocupa, el objeto estriba en determinar si el CMCD, al emitir el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD, le ha vulnerado al señor CESR: *(i)* el derecho a la propiedad por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que al no existir una contraprestación a favor del demandante se trata realmente de la regulación de un impuesto y no de una tasa, siendo el impuesto una categoría tributaria que únicamente puede ser creada por medio de ley formal emanada de la Asamblea Legislativa y no por medio de una ordenanza municipal; o *(ii)* en el supuesto de determinarse que el tributo impugnado es una tasa, el derecho a la propiedad por contravención del principio de capacidad económica, en virtud de la existencia de una doble tributación de naturaleza inconstitucional, por lo que la tasa municipal tiene como único objetivo generar una exacción arbitraria del patrimonio del contribuyente.

IV. *1. A.* El *derecho a la propiedad (art. 2 inc. 1° de la Cn.)* faculta a una persona a: *(i)* usar libremente los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y aprovechar los servicios que rinda; *(ii)* gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que deriven de su explotación, y *(iii)* disponer libremente de los bienes, que se traduce en actos de enajenación respecto a la titularidad del bien.

En suma, las modalidades del derecho de propiedad, esto es, el libre uso, goce y disposición de los bienes, se ejercen sin otras limitaciones más que aquellas establecidas en la Constitución o la ley, como la función social.

Finalmente, cabe aclarar que, en virtud del derecho a la propiedad, no solo se tutela el dominio, sino también las reclamaciones que se basen en algún otro derecho real como la herencia, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda o la hipoteca.

B. a Por otro lado, tal derecho se encuentra estrechamente relacionado con los tributos y, en razón de tal conexión, tanto los principios formales (reserva de ley y legalidad tributaria) como los principios materiales (capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación) del Derecho Constitucional Tributario funcionan como garantías en sentido amplio de ese derecho. Por ello, la inobservancia o el irrespeto a alguno de esos principios puede ocasionar una intervención ilegítima en el citado derecho fundamental; consecuentemente, su vulneración puede perfectamente controlarse por la vía del proceso de amparo, tal como dispone el art. 247 inc. 1° de la Cn.

b. Con relación al *principio de reserva de ley en materia tributaria*, en la sentencia del 23 de noviembre de 2011, amparo 311-2009, se sostuvo que este tiene como finalidad garantizar, por un lado, el derecho a la propiedad frente a injerencias arbitrarias del poder público —dimensión individual— y, por otro lado, el principio de autoimposición, esto es, que los ciudadanos no paguen más contribuciones que aquellas a las que sus legítimos representantes han prestado su consentimiento —dimensión colectiva—.

Dicho principio tiene por objeto que un tema de especial interés para los ciudadanos —el reparto de la carga tributaria— dependa exclusivamente del órgano estatal que por los principios que rigen su actividad asegura de mejor manera la conciliación de intereses contrapuestos en ese reparto. Así, en nuestro ordenamiento jurídico la reserva de ley tributaria tiene reconocimiento expreso en el *art. 131 ord 6° de la Cn*.; sin embargo, este debe integrase de manera sistemática con lo dispuesto en el art. 204 ord. 1' de la Cn., que habilita a los municipios a establecer tasas y contribuciones especiales, por lo que la reserva solo afecta a esta clase de tributos cuando son de alcance nacional.

b. En lo que concierne al *principio de capacidad económica*, en la sentencia de 5 de octubre de 2011, amparo 587-2009, se sostuvo que las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello, limitando de esa manera a los poderes públicos en el ejercicio de su actividad financiera. Dicho principio condiciona y modula el deber de contribuir de las personas, constituyéndose como un auténtico presupuesto y límite de la tributación. En todo caso, la capacidad económica es una exigencia del ordenamiento tributario globalmente considerado, así como de cada tributo.

2. A. En el ejercicio de su autonomía local, los Municipios gozan de potestad tributaria, pues se encuentran facultados conforme a lo prescrito en los arts. 204 de la Cn. y 3 n° 1 del Código Municipal (CM) para decretar tasas y contribuciones especiales. Esta potestad es ejecutada por medio de la emisión de ordenanzas Municipales, las cuales deberán cumplir con los principios básicos y el marco normativo que establecen la Constitución y la ley, en particular, la Ley General Tributaria Municipal (LGTM).

B. La jurisprudencia de esta Sala —*v. gr.*, la sentencia de 4 de noviembre de 2015, amparo 597-2014— ha sostenido que, en general, las tasas son los tributos cuyo hecho generador está integrado por una actividad o servicio divisible del Estado o Municipio, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. A partir de ello, es posible enunciar algunas características de las tasas, a saber: *(i)* se trata de una prestación que el Estado o Municipio exige en ejercicio de su poder de imperio; *(ii)* es un gravamen pecuniario, que puede regularse en una ley u ordenanza municipal y frente al cual el Estado o el Municipio se comprometen a realizar una actividad o contraprestación, la cual debe plasmarse expresamente en su texto; *(iii)* se trata de un servicio o actividad divisible, a fin de posibilitar su particularización; y *(iv)* se trata de actividades que el Estado o el Municipio no pueden dejar de prestar porque nadie más está facultado para desarrollarlas.

Así, y en concordancia con el art. 5 de la LGTM, las tasas municipales son aquellos tributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los Municipios.

3. A. En las sentencias de 9 de julio de 2010 y 19 de septiembre de 2014, inconstitucionalidades 35-2009 y 58-2010 —respectivamente—, se sostuvo que la múltiple imposición ocurre cuando diversos tributos, en un período impositivo o ante un evento, abierta o encubiertamente, inciden sobre una misma manifestación de riqueza o sobre manifestaciones de riqueza íntimamente vinculadas, en cuanto relativas a una misma actividad o situación económica.

La doble imposición normalmente se da cuando dos autoridades con potestades normativas gravan una misma actividad, aunque podría haber también múltiple tributación si una autoridad creara más de un tributo con un mismo hecho imponible, lo cual implicaría la existencia de dos o más tributos idénticos.

B. Ahora bien, es preciso aclarar que la múltiple imposición no es en sí misma inconstitucional. Es un fenómeno que, en cierto modo, es inevitable en los sistemas tributarios actuales y que solo debe contenerse para que no sobrepase el límite de la confiscatoriedad, pues las manifestaciones de riqueza u objetos de gravamen imaginables, aunque se especifiquen des-

de distintos puntos de vista, son limitados. Concretamente, existen cuatro índices generales de capacidad económica: la renta, el patrimonio, el consumo y el tráfico de bienes y de servicios.

En puridad, el único sistema tributario en el que la múltiple imposición no existiría sería aquel en el que se establecieran cuatro impuestos generales, uno por cada uno de los índices de capacidad económica mencionados. Sin embargo, tal esquema, por un lado, no respondería al problema de los Estados en que existen entes descentralizados con poder tributario y, por otro lado, no encontrarían en él su mejor forma de actuación las finalidades objetivas y funcionales a que debe dar cumplimiento la mecánica de los sistemas impositivos modernos.

C. En conclusión, la doble tributación —criterio ya establecido en la sentencia de 20 de noviembre de 2003, amparo 681-2001— "no importa necesariamente inconstitucionalidad, sino [solo] cuando se alteran, desde la perspectiva de la capacidad contributiva, los parámetros objetivos y subjetivos que el legislador debe utilizar al momento de imponer un tributo". Asimismo, según lo sostenido en la referida inconstitucionalidad 35-2009, únicamente la múltiple tributación en la que se verifique la identidad del hecho generador *"representa una exacción arbitraria del patrimonio de los contribuyentes".* Por tanto, tal como se indicó en la sentencia de 4 de noviembre de 2015, amparo 597-2014, *la doble o múltiple tributación es inconstitucional cuando se produce efectos confiscatorios o cuando, no siendo confiscatoria, genera una exacción arbitraria del patrimonio de los contribuyentes.*

V. Corresponde ahora analizar los argumentos de las partes y la prueba incorporada al proceso, a fin de determinar si la autoridad demandada se sometió a la norma fundamental.

1. *A*. El amparo contra ley no es un mecanismo procesal cuya finalidad sea la de impugnar la constitucionalidad de una disposición secundaria *en abstracto*, sino la de proteger los derechos fundamentales cuando, por la emisión de una determinada disposición legal, su titular estima que aquellos le fueron lesionados. En virtud de ello, durante la tramitación de este tipo de proceso constitucional, *la parte actora deberá comprobar que efectivamente se encuentra en el ámbito de aplicación de las disposiciones consideradas inconstitucionales y que estas lesionaron sus derechos.*

Así, la parte demandante tiene la carga de probar la existencia del hecho constitutivo que fundamenta fácticamente su pretensión, el cual consiste, en el presente caso, en la supuesta vulneración de su derecho a la propiedad por encontrarse en el ámbito de aplicación de una disposición que infringe el principio de reserva de ley o, en su caso, el principio de proporcionalidad tributaria.

B. Con base en los elementos de prueba incorporados al proceso, valorados conjuntamente y conforme a las reglas de la sana crítica, según lo dispuesto en el art. 33 de la LPC, en relación con la apreciación jurídica de la prueba y teniendo en consideración los términos del debate, se tienen por establecidos los siguientes hechos: *(i)* que mediante Decreto n° 3 de 6 de junio de 2019, publicado en el Diario Oficial n° 112, tomo n° 423, de 18 de junio de 2019, se adicionó la letra s) al art. 7 n° 12 de la ORTSMCD, con la cual se estableció un tributo con el fin de gravar el funcionamiento de establecimientos que venden bebidas alcohólicas -como cantinas o expendios- dentro de la jurisdicción de Ciudad Delgado (folios 116-119); *(ii)* que según el "expediente empresa" del Registro del Catastro Municipal de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, el señor CESR es el titular y representante de la empresa con n° ********4 en el Sistema de Información Municipal (SIM), cuya actividad económica es el expendio de aguardiente en Calle Gloria, casa n° 6, sector San Sebastián, zona 9, parcela 416, jurisdicción de Ciudad Delgado (folio 57); y *(iii)* que el señor "CERS", con cuenta SIM n° ********4, renovó la licencia para comercializar bebidas alcohólicas de forma envasada durante el año 2019 en Calle Gloria, casa n° 6, Ciudad Delgado, por lo que tuvo que pagar determinada cantidad de dinero en ese concepto, tal como consta en la "refrenda licencia bebidas alcohólicas del año 2019", emitida por el Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado el 19 de marzo de 2019 (folio 120).

De lo expuesto se colige que el demandante es, en efecto, sujeto obligado por el tributo contenido en la disposición cuya constitucionalidad se examina, ya que posee en funcionamiento un expendio de aguardiente en el municipio de Ciudad Delgado, *por lo que, en principio, está obligado al pago de cierta cantidad de dinero.*

2. Establecido lo anterior, corresponde examinar el primero de los argumentos planteados por el demandante —el relativo a la supuesta vulneración del derecho a la propiedad por infracción del principio de reserva de ley en materia tributaria— y, para ello, se debe analizar la naturaleza del tributo cuestionado con la finalidad de determinar si existe un servicio jurídico o administrativo como contraprestación por la obligación contenida en aquel y, en caso de acreditarse la existencia de tal servicio, si el contenido de este es susceptible de ser gravado mediante una tasa municipal.

A. a. El señor CESR alegó que el CMCD creó un tributo que carece de contraprestación, ya que la autorización administrativa para comercializar bebidas alcohólicas es conferida de manera anual, en virtud de la licencia establecida en la LRPCABA, por lo que se configura en realidad como un impuesto y no como una tasa.

Por otro lado, del contenido de la disposición impugnada se advierte que, en virtud de la tasa municipal que regula, el contribuyente aparentemente recibe como contraprestación un permiso por funcionamiento de lugar para venta de bebidas alcohólicas dentro del territorio de Ciudad Delgado.

b. Tal como se sostuvo en las sentencias del 15 de febrero de 2012 y 21 de agosto 2013, inconstitucionalidad 66-2005 y amparo 428-2011 –respectivamente—, el hecho generador de las tasas es una actividad material o un servicio jurídico o administrativo que el Estado presta y que está vinculado con el obligado al pago, pues obtiene un beneficio de su realización. En ese sentido, la contraprestación es la característica que diferencia las tasas de los restantes tributos. Así, dicha contraprestación puede consistir en una actividad material o tangible que implica un servicio por parte del municipio a favor de quien efectúa el pago de cierta cantidad de dinero (aseo, alumbrado público, ornato, etc.) o en un servicio jurídico o administrativo encaminado a hacer constar que, por el pago de cierta cantidad de dinero, el contribuyente está autorizado para realizar determinada actividad dentro del municipio (la emisión de una licencia, permiso, autorización, etc.).

Ahora bien, en la ordenanza correspondiente tiene que consignarse expresamente la contraprestación que se otorga por el pago de una determinada tasa. Al respecto, los arts. 5 y 129 de la LGTM prescriben que las tasas municipales se generan en virtud de aquellos servicios públicos de naturaleza jurídica o administrativa prestados por los municipios. De ello se desprende que, para justificar constitucionalmente el cobro de una tasa, la normativa respectiva deberá establecer con precisión cuál es esa actividad que se generará como contraprestación por el cobro del canon, como podrían ser la extensión de un permiso, una licencia o una autorización (servicios jurídicos o administrativos) o una actividad material que sea consecuencia directa del pago de ese tributo.

c. Según el contenido de la disposición impugnada, por cada establecimiento que comercialice bebidas alcohólicas en el municipio se otorga un permiso de funcionamiento. De lo anterior se advierte que, por el pago mensual de $ 100.00 para que dichos establecimientos puedan comercializar bebidas alcohólicas en la circunscripción territorial de Ciudad Delgado, la municipalidad se encuentra en la obligación de extender un permiso que los faculte para desarrollar sus actividades. Así, el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD regula un servicio público de carácter jurídico que los sujetos obligados al pago reciben como contraprestación.

B. a. Ahora bien, como ya se dijo, para que un tributo pueda ser constitucionalmente calificado de "tasa" no solo se debe analizar si por su pago se realiza efectivamente una contraprestación, sino también cuál es el contenido del servicio que se brinda.

En ese orden, dado que en el presente caso el hecho generador del tributo impugnado está constituido por la emisión de un permiso de funcionamiento por cada establecimiento que comercialice bebidas alcohólicas en el municipio de Ciudad Delgado, debe determinarse si la potestad de otorgar tal permiso es de los municipios o si está expresamente encomendada, en un cuerpo normativo especial, a otra autoridad.

b. De acuerdo con el art. 30 de la LRPCABA, el interesado en una "licencia para la venta bebidas alcohólicas" debe presentar una solicitud a la alcaldía municipal de la localidad donde pretende comercializar dichas bebidas. De acuerdo con lo antes mencionado, el CMCD emitió, mediante el Decreto n° 6 de 22 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial n° 16, tomo n° 342, de 25 de enero de 1999, la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Delgado (ORACBAMD) con el objeto, entre otros, de regular la emisión de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas exigible a toda persona, ya sea natural o jurídica, interesada en esa actividad.

Así, el art. 2 de la ORACBAMD establece que la licencia será extendida por el Alcalde, podrá solicitarse por primera vez en cualquier época del año y será entregada una vez que el beneficiado haya cancelado el valor de la licencia, lo cual acreditará con el recibo de ingreso correspondiente. Asimismo, según el art. 3 del mismo cuerpo jurídico, la referida licencia vencería el 31 de diciembre de cada año, debería ser renovada en los primeros quince días del mes de enero del año siguiente y su valor seria determinado de conformidad con lo establecido en el art. 31 de la LRPCABA.

En este punto es pertinente mencionar que mediante sentencia de 15 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 110-2017, se declararon inconstitucionales los arts. 31 inc. 1°, 32 inc. 3° y 33 Mes. 1° y 2° de la LRPCABA por infringir lo dispuesto en el art. 262 de la Constitución, ya que la Asamblea Legislativa carecía de competencia para establecer tasas y contribuciones especiales con base en el principio de subsidiaridad, esto es, que la sola inexistencia de una tasa o contribución municipal no habilita a la Asamblea Legislativa para emitirla por sí misma; además, tampoco podía establecer tasas o contribuciones especiales que en principio tuvieran alcance nacional, pero que en realidad se refieran a asuntos que sean estrictamente municipales y gravables por el concejo municipal respectivo. En razón de dicho pronunciamiento, el CMCD, por medio de Decreto n° 5 de 24 de octubre de 2022, publicado en el Diario Oficial n° 214, tomo n° 437, de 14 de noviembre de 2022, reformó el mencionado art. 3 de la ORACBAMD, en el sentido de determinar expresamente que el valor de la licencia que expide la municipalidad es de un salario mínimo mensual establecido para el sector comercio y servicios.

c. Aunado a lo anterior, dicho municipio prevé en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD un permiso de funcionamiento por cada establecimiento en el cual se comercialicen bebidas alcohólicas, cuya periodicidad es mensual.

Al respecto, el art. 4 n° 12 del CM confiere la facultad a los municipios de regular la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros similares, lo cual deriva de la potestad normativa que la Constitución confiere a los municipios en materia de ordenanzas —art. 204 ord. 5 ° de la Cn.—.

d. En ese sentido, el municipio de Ciudad Delgado no regula solamente la emisión de una licencia para la venta de bebidas alcohólicas, sino también de un permiso de funcionamiento para cada establecimiento en el cual se comercialicen dichas bebidas.

Ahora bien, es necesario esclarecer la diferencia entre una licencia y un permiso de funcionamiento para, así, evitar confusión al respecto: *(i) la licencia* es un medio de control sobre el ejercicio de determinadas actividades regladas que los administrados pretenden desempeñar, quienes al cumplir con los requisitos exigidos pueden desarrollarlas, ya que la propia administración les reconoce el derecho de ejercicio —sentencia de 6 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2013—, es decir, se traduce en un documento oficial emitido por una autoridad competente que autoriza a los interesados el ejercicio de una actividad específica; y *(ii)* el *permiso de funcionamiento* deviene en el documento emitido por la autoridad competente para autorizar el inicio y la operación regular de un establecimiento comercial o empresarial, previo cumplimiento de los requisitos para ello. En ese sentido, la primera se otorga en relación con la persona natural o jurídica y el segundo en relación con el bien, ya sea este mueble o inmueble.

En este orden de ideas, se advierte que la exigencia de licencia es para la persona que pretenda vender bebidas alcohólicas en el municipio de Ciudad Delgado, mientras que la exigencia del referido permiso es por cada establecimiento que la persona —que ya cuenta con la mencionada licencia— quiera abrir y operar en esa jurisdicción, para lo cual deberá cumplir requisitos más específicos.

e. Al comparar las tasas establecidas en la ORACBAMD y en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD, se colige que ambas no tienen un mismo hecho generador, pues difieren en cuanto a su elemento material.

Así, las actividades públicas que constituyen la contraprestación en ambas tasas difieren entre sí, pues en la contenida en la ORACBAMD el servicio que deberá prestar el municipio de Ciudad Delgado radica en extender la *licencia para la venta de bebidas alcohólicas*; en cambio, en la tasa regulada en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD el servicio que deberá brindar la municipalidad consiste en otorgar un permiso de funcionamiento para

el establecimiento de un lugar para comercializar bebidas alcohólicas. Además, para el otorgamiento de cada una de ellas deben cumplirse los requisitos específicos determinados en cada normativa.

En ese sentido, de la configuración normativa del tributo impugnado se advierte, por una parte, que no existe doble o múltiple imposición; y, por otra, que el sujeto pasivo obtiene por su pago una contraprestación que constituye su hecho generador.

C. En virtud de lo expuesto, se concluye que el CMCD, al emitir el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD, en el que se establece una tasa por un permiso de funcionamiento por cada establecimiento en el cual se comercialicen bebidas alcohólicas —a fin de que estos puedan operar en el municipio—, hizo uso de la potestad tributaria y normativa establecida en el art. 204 ords. 1' y 5° de la Cn., en relación con el art. 4 n° 12 del CM, donde se establece la facultad de los municipios de regular la actividad de los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros similares. Así, la autoridad demandada ha creado un tributo cuyo hecho generador lo constituye un servicio que efectivamente compete a los municipios brindar.

En consecuencia, *dado que la disposición impugnada sí presenta las características de una tasa, pues se otorga una contraprestación por su pago y, además, se trata de un servicio que se encuentra dentro de las competencias del municipio, se colige que no existe la vulneración del derecho a la propiedad del señor CESR, por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria. En razón de ello, resulta procedente declarar que no ha lugar este punto de la pretensión.*

3. *A*. Habiéndose establecido, en relación con el primero de los argumentos planteados, la inexistencia de un vicio formal de constitucionalidad en la disposición impugnada, corresponde examinar el segundo de los argumentos planteados por el demandante —el relativo a la supuesta vulneración del derecho a la propiedad por infracción del principio de capacidad económica—.

Al respecto, el señor SR consideró que existe una doble tributación inconstitucional cuya única finalidad sería la exacción arbitraria del patrimonio del contribuyente, ya que, en su opinión, tanto en los arts. 30, 31 y 32 de la LRPCABA como en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD se regula un mismo hecho generador y un mismo beneficio, es decir, ambas disposiciones están diseñadas para conceder a los comerciantes de bebidas alcohólicas la autorización para ejercer tal actividad dentro del municipio.

B. Como se dijo anteriormente, al momento de examinar la naturaleza del tributo cuestionado para determinar si existía un servicio jurídico o administrativo como contraprestación por la obligación contenida en aquel y, además, si este era susceptible de ser gravado mediante una tasa municipal, se consideró que este no incurría en doble o múltiple imposición.

Y es que la tasa establecida en la ORACBAMD fue emitida en virtud del art. 30 de la LRPCABA y con el objeto de regular, como contraprestación, la emisión de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas exigible a toda persona, ya sea natural o jurídica, interesada en esa actividad; mientras que, por su parte, la tasa prescrita en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD fue formulada para establecer un permiso de funcionamiento por cada establecimiento en el cual aquellos que ya cuentan con una licencia pueden comercializar bebidas alcohólicas, es decir, realizan sus operaciones en el municipio. Por tanto, se estimó que se trataba de tasas con hechos generadores diferentes —en razón del elemento material—, que las contraprestaciones tenían sus propios requisitos de otorgamiento y, ante ello, no existía doble o múltiple imposición.

C. Teniendo en cuenta, por un lado, el contenido del argumento formulado por el demandante y, por el otro, que esta Sala ya realizó el análisis pertinente y emitió su posición sobre este punto específico, *debe desestimarse la segunda de las pretensiones formuladas por el demandante, referida a la supuesta transgresión del derecho a la propiedad por la inobservancia del principio de capacidad económica, ya que la tasa prescrita en el art. 7 n° 12 letra s) de la ORTSMCD no incurre en doble o múltiple tributación -en razón de la existencia de regulación similar contenida en un cuerpo jurídico diferente-.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y en los arts. 2, 131 ord. 6° y 204 ord. 1° de la Cn. y 32, 33 y 34 de la LPC, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala FALLA: *(a) Declárase que no ha lugar* el amparo solicitado por el señor CESR, en contra del Concejo Municipal de Ciudad Delgado, por no existir vulneración a su derecho a la propiedad -por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria- por parte del art. 7 n° 12 letra s) de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ciudad Delgado, ya que dicha disposición sí presenta las características de una tasa, pues se otorga una contraprestación por su pago y, además, se trata de un servicio que se encuentra dentro de las competencias del municipio; *(b) Declárase que no ha lugar* el amparo solicitado por el señor CESR, en contra del Concejo Municipal de Ciudad Delgado, por no existir vulneración a su derecho a la propiedad -por inobservancia del principio de capacidad económica- por parte del art. 7 n° 12 letra s) de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ciudad Delgado, ya que dicha disposición no incurre en doble o múltiple tributación -en razón de la existencia de regulación similar contenida en un cuerpo jurídico diferente-; *(c) Cese* la medida cautelar decretada y confirmada en el presente proceso mediante los autos de 31 de agosto de 2020 y de 1 de marzo de 2021, respectivamente; y (d) Notifíquese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

189-2017

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Habiendo sido convocado el Magistrado suplente Óscar Antonio Canales Cisco, en sustitución del Magistrado Presidente Óscar Alberto López Jerez, con el fin de conformar Sala junto con los demás Magistrados propietarios se procede a conocer el proceso de amparo promovido por la señora JGMP contra la Rectora del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología, denominado "Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE", el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad, la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por la vulneración de sus derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral, a la libertad sindical y a obtener una resolución de fondo, motivada y congruente –como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional–.

Han intervenido en la tramitación de este amparo la parte actora, la autoridad demandada y el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Analizado el proceso y considerando:

I. *1*. En síntesis, la pretensora manifestó en su demanda que laboró para la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE en el cargo de docente desde el 27 de julio de 1998 hasta el 13 de noviembre de 2015, fecha en que la rectora de la referida institución le informó que su contrato había terminado, en virtud de que el ciclo lectivo ya había finalizado.

Al respecto, aseveró que al momento de su despido fungía como Secretaria de Comunicaciones de la Junta Directiva Seccional por Empresa de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE del Sindicato de Trabajadores de la Educación de El Salvador (STEES), habiendo ejercido el cargo en el período comprendido entre el 9 de abril de 2015 y el 25 de marzo de 2016. Sobre el particular, señaló que fue reelecta para conformar la aludida Junta Directiva en períodos posteriores, por lo que mantiene la calidad de directiva sindical.

En virtud de ello, apuntó que promovió el proceso con ref. 711-L-2015 en el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en el cual se pronunció sentencia parcialmente favorable a sus intereses. En ese orden, indicó que la parte demandada planteó recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, la cual revocó la sentencia venida en alzada debido a que no se logró determinar el lugar en el que se llevó a cabo el presunto despido, pues no se tomó en cuenta la

prueba testimonial que aportó al proceso. Aclaró que interpuso el recurso de casación con ref. 420-Cal-2016, el cual fue declarado inadmisible por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En ese orden, alegó que las aludidas autoridades judiciales omitieron pronunciarse sobre el pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono y su reinstalo, colocándola en una situación de inseguridad jurídica, pues sus decisiones no definieron su situación laboral y sindical.

Como consecuencia de lo expuesto, estimó que se lesionaron sus derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral y al "fuero sindical".

2. A. Mediante la resolución de 21 de marzo de 2018 se suplió la deficiencia de la queja planteada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), en el sentido de que los argumentos esgrimidos con relación a la supuesta vulneración al "fuero sindical" se referían a aspectos relacionados con la vulneración del derecho a la libertad sindical. Además, se observó que las autoridades judiciales demandadas aparentemente omitieron referirse al reinstalo solicitado por la pretensora, por lo que debía entenderse que, además de los derechos que la parte actora estimó vulnerados, también pudo haberse transgredido el derecho a obtener una resolución de fondo motivada y congruente –como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional–.

Luego de efectuada la referida suplencia se admitió la demanda incoada, circunscribiéndola al control de constitucionalidad de las siguientes actuaciones: *(i)* el presunto despido de hecho de la pretensora atribuido a la Rectora del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología denominado "Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE"; *(ii)* la resolución pronunciada por el Juez de lo Laboral de Santa Tecla en el proceso con ref. 711-L-2015, mediante la cual se condenó a la institución demandada al pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono y en la cual aparentemente se omitió efectuar un pronunciamiento sobre el reinstalo de la actora en el cargo que desempeñaba; *(iii)* la sentencia emitida por la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador en el incidente de apelación con ref. 328/16, mediante la cual se revocó la sentencia impugnada, en el sentido de absolver a la institución demandada del pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono, y en la que supuestamente también se omitió el pronunciamiento sobre la petición de reinstalo; y *(iv)* el auto de inadmisibilidad emitido por la Sala de lo Civil en el recurso de casación clasificado con la ref. 420-Cal-2016.

Dicha admisión se debió a que, de acuerdo con lo expresado por la actora, con tales actuaciones se habrían vulnerado sus derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral, a la libertad sindical y a obtener una resolución de fondo motivada y congruente –como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional–.

B. En la misma interlocutoria se suspendieron provisionalmente los efectos de los actos impugnados, en el sentido de que, durante la tramitación de este proceso, la autoridad demandada debía reinstalar a la actora en el cargo de docente del referido instituto o en otro cargo de igual categoría y clase. Asimismo, debía garantizar que las entidades administrativas correspondientes, en especial el área de recursos humanos y de pagaduría, llevaran a cabo todas las gestiones administrativas ante las autoridades competentes para la reincorporación de la peticionaria y que se procediera al pago íntegro del salario, prestaciones laborales y cualquier otro desembolso pecuniario que le correspondiera de conformidad con el trabajo que desarrollaba.

C. Además, se pidió informe a las autoridades demandadas conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la LPC. Al respecto, el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad, indicó que en el proceso laboral iniciado por la señora JGMP emitió la sentencia de 5 de abril de 2016 mediante la cual condenó a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE al pago de salarios a la trabajadora MP. Por su parte, la Cámara Segunda de lo Laboral y la Sala de lo Civil manifestaron que los hechos que les fueron atribuidos en la demanda no eran ciertos. La Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE solicitó que se declarara la improcedencia de la demanda o, en su caso que se revocara la medida cautelar ordenada, en virtud de que la pretensora no era titular de los derechos invocados, pues la relación que la unía con esa institución educativa era establecida por un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, es decir, se desempeñaba como profesora hora clase con un plazo definido.

D. Finalmente, se le confirió audiencia a la entonces Fiscal de esta Corte de conformidad con el art. 23 de la LPC, quien no hizo uso de la oportunidad procesal que le fue conferida.

3. A. Por auto de 11 de enero de 2019 se declararon sin lugar las solicitudes de revocatoria del auto de 21 de marzo de 2018 y de la medida cautelar planteadas por la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, en virtud de que sus argumentos se encontraban orientados a revelar que en el objeto en estudio no existía vulneración constitucional, situación que constituye el objeto de control del presente amparo y, en consecuencia, un asunto que debía decidirse en sentencia; se confirmó la resolución en la que se ordenó la suspensión de los efectos del acto reclamado; y, además, se pidió a la autoridad demandada que rindiera el informe justificativo que regula el art. 26 de la LPC.

B. a. En atención a dicho requerimiento, los Magistrados de la Cámara Segunda de lo Laboral expresaron que conocieron en apelación del proceso individual ordinario de trabajo que fue promovido por la señora JGMP.

Sobre los hechos atribuidos en la demanda manifestaron que dicho reclamo carecía de trascendencia constitucional, pues se trataba de una inconformidad con la sentencia pronunciada.

Al respecto, señalaron que en el planteamiento fáctico de la demanda la actora se limitó únicamente a indicar la hora y fecha en que sucedió, pero sin precisar el lugar exacto en que supuestamente se ejecutó. Así, los testigos de descargo que el juez de la causa había descalificado resultaron coincidentes en lo principal de sus deposiciones en lo referente al lugar en el que se encontraba la representante legal de la institución demandada el día y hora del supuesto despido, versión que difería con lo relatado por el testigo de cargo. De lo cual se concluye que no existió vulneración de derechos constitucionales, sino falta de prueba por parte de la señora MP.

Además, aseveraron que se requirió la comparecencia de la representante legal de la institución demandada para que rindiera declaración de parte contraria e interrogarle sobre los hechos expresados en la demanda; sin embargo, ninguno de los abogados de la demandante compareció a la cita que se programó para tal efecto, por lo cual no se pudo realizar la diligencia, perdiéndose con ello la oportunidad de fortalecer la versión de despido.

Así, afirmaron que la queja formulada por la actora estaba orientada a reclamar cuestiones de estricta legalidad ordinaria, por lo cual solicitaron que se emitiera un sobreseimiento a su favor.

b. Por su parte, el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla expuso que la señora JGMP promovió un proceso individual ordinario de trabajo en contra del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología, reclamando el pago de salarios no devengados por causa imputable al patrono. Al respecto, señaló que, agotadas las etapas procesales, pronunció sentencia favorable a los intereses de la demandante, condenando a la institución educativa al pago de cierta cantidad de dinero en concepto de salarios no devengados.

c. La apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE alegó que la demandante carecía de titularidad del derecho a la estabilidad laboral y demás derechos invocados, pues no tenía la calidad de trabajadora o empleada de esa institución educativa, en virtud de que era contratada eventualmente como profesora hora clase y no realizaba funciones permanentes.

d. Finalmente, la Sala de lo Civil arguyó que conoció del recurso de casación interpuesto por la actora, pero esta no cumplió con los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 528 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dicho recurso fue declarado inadmisible en virtud de que se alegó violación de ley e interpretación errónea, señalando para ambas infracciones el mismo precepto infringido –art. 14 del Código de Trabajo (CT)–, lo cual no

era lógico, pues ambas infracciones eran excluyentes. También alegó error de hecho en la apreciación de la prueba testimonial y como precepto infringido el inc. 2° del art. 410 del CT, pero el art. 588 n° 6° del CT no contempla el error de hecho en la apreciación de la prueba testimonial, únicamente en la prueba instrumental y sobre la confesión cuando esta ha sido valorada sin relacionarla con otras pruebas.

Asimismo, sostuvo que la recurrente alegó el motivo de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, citando como precepto infringido el art. 410 del CT, que también fue alegada como error de hecho, sin percatarse que de la forma que se alegaron las volvían excluyentes, ya que el error de hecho es haber visto prueba donde no la hay o que habiendo prueba no fue tomada en cuenta y, en cambio, el error de derecho en la apreciación de la prueba tiene como supuesto de existencia la apreciación arbitraria, abusiva o absurda de la prueba testimonial, por lo que no era congruente señalar el mismo precepto infringido. También invocó la violación de ley, señalando como norma quebrantada el art. 14 del CT, sin presentar argumentos sobre la razón por la cual consideraba que era la normativa aplicable al caso. Además, señaló que en el fallo del recurso de apelación se omitió resolver puntos que habían sido planteados, pero se advirtió que el asunto supuestamente no resuelto fue solicitado en la demanda no en la apelación, por lo que no era una infracción atribuible al tribunal de segunda instancia. Por lo expuesto, indicó que los alegatos esgrimidos por la peticionaria demostraban una inconformidad con el auto de inadmisibilidad que impugna.

4. Posteriormente, en virtud de la resolución de 12 de junio de 2019 se declaró sin lugar la solicitud de sobreseimiento planteada por los Magistrados de la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, en virtud de que sus argumentos se encontraban orientados a revelar que en el objeto en estudio no existía vulneración constitucional, situación que constituye el objeto de control del presente amparo y, en consecuencia, un asunto que debía decidirse en sentencia; se requirió a la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE que cumpliera de manera íntegra con la medida cautelar ordenada en este proceso; y, además, se confirieron los traslados que ordena el art. 27 de la LPC, respectivamente, al Fiscal de esta Corte, quien expresó que le correspondía a la pretensora probar la existencia del agravio constitucional alegado, y a la parte actora, quien no evacuó la audiencia conferida.

5. Por auto de 4 de septiembre de 2020 se previno a la abogada Janneth Carolina Brito Centeno que acreditara la personería con la que actúa; se requirió por segunda vez a la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE que cumpliera de manera inmediata la medida cautelar ordenada; y se abrió a pruebas el presente proceso por el plazo de

ocho días, de conformidad con lo prescrito en el art. 29 de la LPC, lapso en el cual las partes ofertaron y aportaron pruebas. Además, la apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE solicitó que se emitiera un sobreseimiento por la falta de titularidad del derecho a la libertad sindical y al fuero sindical de la peticionaria.

6. A. Seguidamente, en virtud de la resolución de 8 de noviembre de 2021 se tuvo por acreditada la personería con la que actúa la apoderada de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE; se dejó sin efecto la medida cautelar adoptada en el auto de 21 de marzo de 2018, debido a la modificación de las circunstancias advertidas en ese momento; se declaró sin lugar la solicitud formulada por la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE referida a que se sobreseyera este proceso, debido a que los argumentos que plantea son de fondo y de que el cargo de directiva sindical de la demandante aún se encuentra vigente.

B. En el mismo auto se otorgaron los traslados que ordena el art. 30 de la LPC, respectivamente, al Fiscal de esta Corte, quien sostuvo que no existía la vulneración de derechos alegada, pues el fuero sindical no podía invocarse en las relaciones jurídicas de tipo civil o mercantil, y, que las decisiones emitidas por las autoridades judiciales demandadas son razonables, lógicas y justificadas, por lo que considera que no se vulneraron los derechos constitucionales alegados; a la actora y a las autoridades demandadas, quienes reiteraron los argumentos expresados en sus anteriores intervenciones.

7. En este estado del proceso se recibió el oficio con ref. PADESC n° ***/2023 de 8 de marzo de 2023, dirigido al Magistrado Presidente de esta Sala, mediante el cual la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones le solicitaba que informara sobre el estado actual del presente proceso y de otros que fueron interpuestos en contra de la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE y, en caso que estos ya hubiesen finalizado, se le remitiera copia de las decisiones emitidas en cada uno de ellos.

Se advierte que dicho requerimiento ya fue atendido por la Secretaría de esta Sala mediante el oficio n° 711 de 27 de marzo de 2023, por lo cual es innecesario adoptar una decisión al respecto en la presente resolución.

8. Concluido el trámite establecido en la LPC, el presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

II. Antes de proceder al examen de fondo, se analizarán posibles causas de sobreseimiento en el presente proceso, específicamente las referidas a la falta de agotamiento de los recursos y a la falta de agravio de trascendencia constitucional.

1. A. La demandante sometió a control constitucional, entre otras, la sentencia pronunciada por el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla en el proceso con ref. 711-L-2015, mediante la cual se condenó a la institución demandada al pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono, ya que la citada autoridad judicial aparentemente omitió pronunciarse sobre la petición que le realizó referida al reinstalo en su puesto de trabajo.

B. a. La jurisprudencia constitucional ha señalado –v. gr., en las resoluciones de 10 de marzo de 2010, amparos 49-2010 y 51-2010– que el objeto del proceso de amparo está representado por la pretensión, para cuya validez es indispensable el efectivo cumplimiento de una serie de presupuestos procesales que posibilitan la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Uno de ellos es el agotamiento de los recursos que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, el cual se encuentra establecido en el art. 12 inc. 3° de la LPC. Tal requisito se fundamenta en el hecho que, dadas las particularidades que presenta el amparo, este posee características propias que lo configuran como un proceso especial y subsidiario, establecido para dar una protección reforzada a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de las personas, es decir, se pretende que sea la última vía, una vez agotada la vía jurisdiccional o administrativa correspondiente.

Así, se ha señalado que la exigencia del agotamiento de los recursos comprende, además, una carga para la parte actora del amparo de emplear en tiempo y forma los recursos que tiene expeditos conforme a la normativa de la materia. De manera que, para entender que se ha respetado el presupuesto apuntado, el pretensor debe cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas establecidas para la admisibilidad y procedencia de los medios de impugnación, ya sea que estos se resuelvan al mismo nivel o en uno superior de la administración o la jurisdicción, debido a que la inobservancia de dichas condiciones motivaría el rechazo de tales recursos en sede ordinaria y, en consecuencia, no se tendría por satisfecho el requisito mencionado.

b. Asimismo, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido –v. gr., en la resolución de 9 de diciembre de 2009, amparo 18-2004– que la exigencia del agotamiento de recursos debe hacerse de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

En ese sentido, para exigir el agotamiento de un recurso debe tomarse en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de impugnación.

C. En el presente caso, se ha comprobado que la actora solicitó al Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla que ordenara a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE el pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono y que se pronunciara sobre su reinstalo o readmisión a su cargo como docente en dicha institución; sin embargo, en la sentencia pronunciada el 5 de abril de 2016 la referida autoridad judicial condenó a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE a pagar cierta cantidad de dinero en concepto de salarios no devengados por causa imputable al patrono, sin emitir decisión alguna sobre la petición de reinstalo efectuada.

De igual forma, se ha acreditado que el apoderado de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE interpuso recurso de apelación contra la aludida sentencia ante la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad, alegando que la autoridad que conoció en primera instancia no tomó en consideración la prueba que presentó para establecer la excepción de improponibilidad de la demanda. Una vez tramitado el incidente de apelación, la aludida Cámara pronunció sentencia el 26 de julio de 2016 y revocó la decisión apelada.

En ese orden, del contenido de la documentación agregada al proceso se observa que la peticionaria no interpuso el recurso de apelación respectivo ni se adhirió a la apelación presentada por su contraparte con el objeto de controvertir la decisión emitida por el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla. En consecuencia, se advierte que la actora no planteó la solicitud de reinstalo ante la Cámara Segunda de lo Laboral de esta ciudad ni impugnó la supuesta incongruencia de la sentencia emitida en primera instancia.

Al respecto, se advierte que de conformidad con el art. 572 del CT las sentencias pronunciadas en primera instancia pueden ser controvertidas mediante el recurso de apelación, por lo que la actora debió haber interpuesto dicho recurso para expresar su inconformidad por la supuesta omisión del Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla de pronunciarse sobre su reinstalo. Además, en el caso en estudio también cabía la apelación adhesiva con base en el art. 576 del CT, toda vez que la contraparte recurrió de la sentencia en cuestión.

D. En consecuencia, se concluye que esta Sala se encuentra imposibilitada para controlar la constitucionalidad del reclamo formulado contra el Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla, *debido a la falta de agotamiento del recurso de apelación por parte de la peticionaria, situación que impide la*

terminación normal del presente proceso en relación con la actuación atribuida a dicha autoridad judicial, debiendo finalizarse por medio de la figura del sobreseimiento este extremo de la pretensión planteada.

2. A. Por otra parte, se advierte que la actora también cuestionó la constitucionalidad de las siguientes actuaciones: *(i)* la sentencia emitida por la Cámara Segunda de lo laboral de San Salvador en el incidente de apelación con ref. 328/16, mediante el cual se revocó la sentencia emitida en primera instancia, en el sentido de absolver a la institución demandada del pago de los salarios no devengados por causa imputable al patrono, y en la que supuestamente se omitió el pronunciamiento sobre la petición de reinstalo; y *(ii)* el auto de inadmisibilidad emitido por la Sala de lo Civil en el recurso de casación clasificado bajo la ref. 420-Cal-2016.

La demandante expresó que la Cámara Segunda de lo laboral de San Salvador conoció del recurso de apelación incoado por la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE y que dicha autoridad judicial no se pronunció sobre la petición de reinstalo efectuada en primera instancia, aunque revocó la sentencia impugnada. Asimismo, indicó que interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Civil, la cual declaró inadmisible dicho recurso, obviando con ello la petición de reincorporación a su lugar de trabajo.

La Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador sostuvo que el tema que debía decidirse en el recurso de apelación planteado giraba en torno a la improponibilidad de la demanda alegada por la parte apelante y que el reinstalo de la actora no fue un punto sometido a su consideración. La Sala de lo Civil, por su parte, indicó que el rechazo del recurso de casación se debió a que la actora no cumplió con los requisitos de admisibilidad de dicho medio impugnativo.

B. En el amparo las afirmaciones de la parte actora deben justificar que su reclamo posee relevancia constitucional, pues si aquella plantea aspectos puramente judiciales o administrativos que no revelan una posible vulneración de sus derechos fundamentales su queja no podría ser juzgada en esta sede. En ese sentido, desde el punto de vista de la competencia material de esta Sala, la proposición de lo que la jurisprudencia califica como "asuntos de mera legalidad" se interpreta como un defecto absoluto en la facultad de juzgar, lo que representa un óbice para examinar el fondo de la queja planteada. Y es que esta Sala es incompetente, en razón de lo establecido en su marco normativo de actuación, para conocer de cuestiones que tienen una exclusiva base infraconstitucional, dado que su regulación y determinación está prevista exclusivamente en normas de rango inferior a la Constitución.

La situación señalada motiva el rechazo de la demanda o la terminación del proceso por falta de competencia objetiva sobre el caso, ya que decidir sobre lo propuesto en ella, cuando carece de un auténtico fundamento constitucional, significaría invadir la esfera de la legalidad, obligando a esta Sala a revisar desde esa perspectiva las actuaciones de funcionarios o autoridades que han actuado de acuerdo a sus atribuciones, para lo cual no se encuentra jurídicamente habilitada.

C. Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto sometido a control constitucional versa sobre la aparente omisión por parte de la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y de la Sala de lo Civil de pronunciarse sobre el reinstalo al cargo como docente de la demandante.

Del análisis de los argumentos presentados y del contenido de la documentación incorporada a este expediente, se advierte que los alegatos por los que se pretende reclamar la supuesta omisión atribuida a la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, a pesar de que podían ser controvertidos en sede ordinaria, no fueron expuestos oportunamente ante dicha autoridad judicial. Asimismo, la vulneración constitucional que la peticionaria le atribuye a la Sala de lo Civil no es más que una circunstancia derivada del incumplimiento de los requisitos necesarios para que esa autoridad admitiera el recurso de casación que le fue presentado. En ese sentido, no puede afirmarse que exista la omisión alegada, pues la referida autoridad no conoció del fondo de dicho recurso.

En ese orden, se colige que lo expuesto por la peticionaria, más que evidenciar una supuesta transgresión a sus derechos fundamentales, se reduce a un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el contenido de las decisiones pronunciadas por la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y por la Sala de lo Civil, toda vez que sus alegatos están orientados a que se reviertan las decisiones emitidas y se conozca la petición de reinstalo planteada en primera instancia, a pesar de que ese punto de la pretensión planteada ante el juez de primera instancia no fue sometido al conocimiento de esas autoridades judiciales.

Ello, cabe aclarar, no corresponde al conocimiento del ámbito constitucional por no ser materia propia del proceso de amparo, ya que este mecanismo procesal no opera como una instancia superior de conocimiento para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las personas.

Las anteriores circunstancias ponen de manifiesto un defecto en la pretensión de amparo respecto a las supuestas omisiones atribuidas a la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y a la Sala de lo Civil, por lo que resulta procedente sobreseer este proceso respecto de dichas autoridades judiciales de conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y 31 ord. 3° de la LPC.

3. Así depurada la pretensión, el orden con el que se estructurará esta resolución es el siguiente: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente controversia (III); en segundo lugar, se hará una sucinta relación del contenido de los derechos que se alegan conculcados (IV); y en tercer lugar, se analizará el caso sometido a conocimiento (V).

III. En el presente caso el objeto de la controversia consiste en determinar si la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE vulneró los derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical de la señora JGMP, al despedirla del cargo que desempeñaba como docente en ese centro educativo sin tramitarle previamente un proceso en el cual pudiera ejercer la defensa de sus intereses y sin tener en cuenta que tenía la calidad de directiva sindical.

IV. *1.* En la sentencia de 11 de febrero de 2011, amparo 415-2009, se expresó que *el derecho de audiencia (art. 11 inc. 1º de la Cn.)* posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona, en el sentido de que las autoridades están obligadas a seguir, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicación directa de la disposición constitucional citada, un proceso en el que se brinde a las partes la oportunidad de conocer las respectivas posturas y de contradecirlas, previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en los derechos de alguna de ellas. Así, el *derecho de defensa (art. 2 inc. 1º de la Cn.)* está íntimamente vinculado con el derecho de audiencia, pues es dentro del proceso donde los intervinientes tienen la posibilidad de exponer sus razonamientos y de oponerse a su contraparte en forma plena y amplia.

Para que lo anterior sea posible, es necesario hacer saber al sujeto pasivo de dicho proceso la infracción que se le reprocha y facilitarle los medios necesarios para que ejerza su defensa. De ahí que existe vulneración de estos derechos fundamentales, por ejemplo, cuando no se tramite un proceso o se haya inobservado las formalidades esenciales legalmente establecidas para su tramitación, ocasionando que el sujeto interesado no haya contado con la oportunidad de conocer y oponerse a lo que se le reclama.

2. A. El reconocimiento del *derecho a la estabilidad laboral (art. 219 inc. 2º de la Cn.)* de los servidores públicos responde a dos necesidades: la primera, garantizar la continuidad de las funciones y actividades que ellos realizan en las instituciones públicas, debido a que sus servicios están orientados a satisfacer un interés general; y, la segunda, conceder al servidor un grado de seguridad que le permita realizar sus labores sin temor a que su situación jurídica se modifique fuera del marco constitucional y legal establecido.

El derecho a la estabilidad laboral, según las sentencias de 11 de marzo de 2011, 24 de noviembre de 2010, 11 de junio de 2010 y 19 de mayo de 2010, amparos 10-2009, 1113-2008, 307-2005 y 404-2008, respectivamente, faculta a conservar un trabajo cuando concurran las condiciones siguien-

tes: *(i)* que subsista el puesto de trabajo; *(ii)* que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; *(iii)* que las labores se desarrollen con eficiencia; *(iv)* que no se cometa falta grave que la ley considere causal de despido; *(v)* que subsista la institución para la cual se presta el servicio; y *(vi)* que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.

B. Como un caso particular, en las sentencias de 19 de diciembre de 2012, amparos 1-2011 y 2-2011, se sostuvo que para determinar si una persona es o no titular del derecho a la estabilidad laboral se debe analizar —independientemente de que esté vinculada con el Estado por medio de Ley de Salarios o de un contrato de servicios personales— si en el caso particular concurren las condiciones siguientes: *(i)* que la relación laboral es de carácter público y, por ende, el trabajador tiene el carácter de empleado público; *(ii)* que las labores pertenecen al giro ordinario de la institución, es decir, que guardan relación con las competencias de dicha institución; *(iii)* que las labores son de carácter permanente, en el sentido que se realizan de manera continua y, por ello, quien las efectúa cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutarlas de manera eficiente; y *(iv)* que el cargo desempeñado no es de confianza, circunstancia que debe determinarse con base en los criterios fijados por esta Sala.

3. A. Finalmente, el *derecho a la libertad sindical (art. 47 de la Cn.)* faculta a los patronos y trabajadores, sin distinción alguna, a asociarse libremente para la defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales y sindicatos. Estas organizaciones, a su vez, se encuentran facultadas para ejercer libremente sus funciones de defensa de los intereses comunes de sus miembros. Dicho derecho es de carácter complejo, pues su titularidad se atribuye tanto a sujetos individuales como a colectivos y requiere de los sujetos obligados la realización tanto de actuaciones concretas como de simples deberes de abstención.

B. La libertad sindical exige ser garantizada frente a todos aquellos sujetos que pudieran atentar contra ella. Una de las garantías constitucionales frente al empleador es el fuero sindical. En las sentencias de 8 de marzo de 2007 y 15 de marzo de 2013, amparos 433-2005 y 514-2010, respectivamente, se expuso que el *fuero sindical (art. 47 inc. 6° de la Cn.)* se encuentra constituido por el conjunto de medidas que protegen al dirigente contra cualquier perjuicio que pueda sufrir en ejercicio de su actividad sindical. En este sentido, el fuero sindical es considerado un presupuesto de la libertad sindical, por lo que ambos configuran pilares interrelacionados que se requieren de modo recíproco. El fuero sindical es el derecho protector y la libertad sindical es el derecho protegido. Por ello, el fuero sindical no es una simple garantía contra el despido de una persona, sino contra todo acto atentatorio de la libertad sindical –*v. gr.,* desmejora en las condiciones

de trabajo, traslado a otro establecimiento de la misma empresa sin causa justificada, etc.–, ya que si bien el despido se erige como la sanción de consecuencias más graves, no es la única que puede utilizarse en contra de los directivos sindicales.

V. Desarrollados los puntos previos, corresponde en este apartado analizar si las actuaciones de la autoridad demandada se sujetaron a la normativa constitucional.

1. Con base en los elementos de prueba incorporados al proceso, valorados conjuntamente y conforme con las reglas de la sana crítica, según lo dispuesto en el art. 33 de la LPC en relación con la apreciación jurídica de la prueba y teniendo en consideración los términos del debate, se tienen por establecidos los siguientes hechos: *(i)* que mediante contrato de arrendamiento de servicios profesionales n° 46 de 20 de julio de 2015 (folio 293), la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE contrató a la señora JGMP para que impartiera clases en esa institución durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 21 de noviembre de 2015, efectuándose el pago "por hora clase efectivamente impartida, de acuerdo a la calendarización y períodos establecidos"; *(ii)* que en la certificación de inscripción de la Junta Directiva Seccional por Empresa de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE del STEES, extendida por la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 17 de noviembre de 2015 (folio 16), se hizo constar que la señora JGMP tomó posesión como Secretaria de Comunicaciones de la citada Junta Directiva para el período comprendido entre el 9 de abril de 2015 y el 25 de marzo de 2016; *(iii)* que mediante los contratos de arrendamiento de servicios n° 72 de 17 de febrero de 2014 (folio 359), n° 33 de 17 de febrero de 2014 (folio 358), n° 106 de 21 de julio de 2014 (folio 361), n° 105 de 21 de julio de 2014 (folio 360), n° 166 de 17 de noviembre de 2014 (folio 362), n° 22 de 16 de febrero de 2015 (folio 373) y n° 5 de 21 de febrero de 2019 (folio 421), la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE contrató a la señora JGMP para que impartiera clases en la institución en los periodos comprendidos entre el 17 de febrero y el 15 de junio de 2014, el 17 de febrero y el 21 de junio de 2014, el 21 de julio y el 16 de noviembre de 2014, el 21 de julio y el 29 de noviembre de 2014, el 17 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, el 16 de febrero y el 20 de junio de 2015, y el 25 de febrero y el 14 de junio de 2019, respectivamente, efectuándose el pago "por hora clase efectivamente impartida, de acuerdo a la calendarización y períodos establecidos"; y *(iv)* que en las certificaciones de inscripción de las nóminas de la Junta Directiva Seccional del STEES de los períodos comprendidos entre el 27 de marzo de 2019 y el 26 de marzo de 2020 (folio 338) y el 20 de abril de 2021 y el 25 de marzo de 2022 (folio 516), se hizo constar que la señora JGMP formó parte de la citada Junta Directiva en períodos posteriores a su presunto despido.

2. A. a. Establecido lo anterior, corresponde determinar si la peticionaria, de acuerdo con los elementos de prueba relacionados, era titular del derecho a la estabilidad laboral al momento del presunto despido o si, por el contrario, concurría alguna de las excepciones establecidas por la jurisprudencia constitucional con relación a la titularidad de ese derecho.

Al respecto, es preciso señalar que en reiterada jurisprudencia de esta Sala –*v. gr.*, en la sentencia de 19 de diciembre de 2012, amparo 1-2011–, se ha establecido que para determinar si una persona es titular del derecho a la estabilidad laboral se debe analizar si en el caso concreto concurren las particularidades siguientes: *(i)* que la relación laboral es de carácter público y, por ende, el trabajador tiene el carácter de empleado público; *(ii)* que las labores desarrolladas pertenecen al giro ordinario de la institución, esto es, que son funciones relacionadas con las competencias de esta; *(iii)* que la actividad efectuada es de carácter permanente, en el sentido de que es realizada de manera continua y que, por ello, quien la presta cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para desempeñarla de manera eficiente; y *(iv)* que el cargo desempeñado no es de confianza.

b. En el presente caso, con los medios probatorios aportados al proceso se ha comprobado que la señora JGMP, al momento en que se le comunicó la finalización de su contrato, se desempeñaba como docente hora clase en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, vinculada con esa institución por medio de un contrato de prestación de servicios profesionales por un plazo determinado, cuya vigencia expiró el 21 de noviembre de 2015.

Sobre dicho punto, es preciso señalar que los contratos de trabajo a plazo fijo o determinado son aquellos que se celebran cuando se contrata a personas para el desarrollo de tareas eventuales y no permanentes dentro de la institución pública de que se trate. Este tipo de contratos no son por sí mismos inconstitucionales, siempre que, conforme al principio de la autonomía de la voluntad, provengan del acuerdo entre los empleadores y los trabajadores y, además, este no sea desnaturalizado o utilizado para encubrir de manera fraudulenta una relación laboral de naturaleza indeterminada, es decir, no puede disfrazarse como actividad eventual una actividad de carácter permanente y que pertenece al giro ordinario de la institución.

En otras palabras, los contratos a plazo fijo o de duración determinada se celebran para la realización de labores que no corresponden al quehacer cotidiano de una institución, es decir, se utilizan cuando se contrata a personas para el desarrollo de tareas eventuales y no permanentes. Entre los supuestos que justifican su utilización se encuentran: *(i)* la contratación para la realización de una obra o servicio determinado; *(ii)* la contratación

derivada de las circunstancias de producción; y *(iii)* la contratación de trabajadores interinos para sustituir a otros con derecho a reserva del puesto de trabajo. Ahora bien, el contrato para obra determinada o servicio específico se celebra cuando la institución necesita a un trabajador para realizar una obra o servicio con autonomía y sustantividad propia dentro de su actividad ordinaria. Es necesariamente casual, debe fundarse siempre en una necesidad transitoria, sustentada en un requerimiento objetivo, y, por lo general, se relaciona con un programa público de actuación específica que no tiene una asignación presupuestaria estable.

Esta modalidad de contratación está determinada por la excepcionalidad de las circunstancias que origina la realización de las labores, por lo que, si la tarea a realizar es una cosa concreta e identificable, cuando esta termina, finaliza el contrato sin posibilidad de prórroga, ya que su carácter temporal radica precisamente en la ejecución de una actividad concreta, finalizando la relación contractual con la terminación del objeto del contrato para cuya ejecución se había pactado la ocupación del trabajador. Ahora bien, puede estar justificada la prórroga en los supuestos en los que, fijado un término cierto y llegado este, la obra aún no ha concluido, por lo que la forma contractual explicitada en forma de prórroga no viciaría la esencia de la relación laboral, cuyo objeto se perfecciona con la conclusión de la obra o servicio.

B. En el caso concreto, la autoridad demandada señaló que el modelo pedagógico adoptado por la institución educativa que dirige se basa en las unidades de información llamadas módulos, en los cuales se desarrollan los conocimientos, habilidades y conductas necesarias para que el estudiante domine competencias específicas. Así, dependiendo de la demanda de estudiantes al momento de abrir los módulos, se identifica la necesidad de cubrir con docentes hora clase aquellos grupos que no pueden atender los docentes permanentes.

Esta fluctuación en el número de alumnos que optan por inscribirse en los cursos justifica las diversas modalidades de contratación del personal docente utilizadas por la institución educativa en cuestión, pues la carga financiera que soportaría si optase por contratar personal permanente para atender grupos cuya comparecencia es incierta resultaría irrazonable. Los docentes hora clase desarrollan actividades cuyo inicio y fin son claramente identificables en el tiempo y, por ello, la vigencia del contrato bajo tal modalidad está vinculado indisolublemente con la duración del curso o módulo a realizar por el empleador, la eventualidad es connatural al trabajo mismo y tiene carácter prácticamente universal, es decir, afecta a todas las plazas comprometidas.

Del texto del contrato celebrado entre la demandante y la Rectora de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, se advierte que la contratación de la actora se pactó por un plazo de cuatro meses, que las labores a desarrollar se enmarcaban en el giro ordinario de la institución educativa y que tales actividades se realizarían bajo la modalidad de docente hora clase, es decir, no permanente.

En ese sentido, si bien la demandante argumentó que su vínculo laboral era de naturaleza permanente porque las actividades de docencia que realizaba eran de carácter regular, continuo y del giro ordinario de esa institución educativa, los términos de su contrato demuestran que sus actividades estaban limitadas a la duración del módulo asignado y su permanencia en la institución se exigía únicamente en las horas destinadas para la clase. Asimismo, no se le había asignado salario, sino el pago de honorarios y no se contemplaban en su contrato otras prestaciones o beneficios. De ahí que, a pesar de que la actora fue contratada de forma sucesiva para impartir distintos módulos, esto no modificaba la naturaleza eventual de su contratación convirtiéndola en indefinido.

C. En consecuencia, dado que la relación que existía entre la actora y la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE no era de índole laboral, sino que derivó de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales suscrito por un plazo determinado y para la realización de una actividad específica, se concluye que la demandante no tenía la calidad de empleada pública adscrita a ese centro educativo y, por tanto, no era titular del derecho a la estabilidad laboral reconocido en el art. 219 inc. 2° de la Cn., por lo que la ruptura de ese vínculo contractual por el vencimiento del plazo pactado entre las partes no constituyó un despido y la autoridad demandada no tenía la obligación de seguir un proceso o procedimiento para justificar que no contrataría nuevamente a la pretensora como docente hora clase ni el deber jurídico de considerar que esta formaba parte de la Junta Directiva Seccional por Empresa de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE del STEES.

Por consiguiente, en virtud de que la señora JGMP no era empleada de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE y, por ello, la Rectora de ese ente educativo no pudo incurrir en el despido arbitrario que se le atribuyó en la demanda planteada en su contra, *se colige que no existió vulneración de los derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical de la referida señora, por lo que es procedente desestimar la pretensión planteada.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y en los arts. 11, 12, 47 y 219 inc. 2° de la Constitución y 31 n° 3, 32 al 34 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala **FALLA**: *(a) Sobreséese el proceso* de amparo incoado por la señora JGMP

en contra del Juez (1) de lo Laboral de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en virtud de no haberse agotado el recurso de apelación para subsanar la presunta afectación de sus derechos; *(b) Sobreséese el proceso de amparo incoado* por la señora MP contra la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador y la Sala de lo Civil por constituir su reclamo un asunto de estricta legalidad; *(c) Declárase que no ha lugar al amparo* solicitado por la señora JGMP contra la Rectora del Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología, denominado "Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE", por la supuesta vulneración de sus derechos de audiencia, de defensa, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical; y (d) Notifíquese.

"""—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—-O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARÍA MARIBEL ALAS CERNA—SECRETARIA INTERINA —RUBRICADAS—"""

1683-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de habeas corpus ha sido promovido contra el Consejo Criminológico Regional Central, por el abogado William Roberto Pacheco Cabrera, a favor de la señora *RLGM*, condenada por el delito de tráfico ilícito.

Analizada la documentación y considerando:

I. 1 . El peticionario refiere que la señora *RLGM* se encuentra cumpliendo pena de prisión dado que fue condenada por el delito de tráfico ilícito, sanción que es contratada por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, pero es el caso que, dicha autoridad practicó el cómputo de la condena impuesta, entre otros asuntos, fijó el 28 de marzo de 2022 como fecha en que la señora *GM* cumpliría las dos terceras partes de la condena, sin que a la fecha el Consejo Criminológico Regional Central rinda el informe correspondiente, no obstante haberse ordenado su práctica desde el mes de mayo de 2022.

Agrega que se ha presentado ante el referido organismo administrativo a fin de agilizar el trámite, pero se le expresa que no están atendiendo a familiares ni abogados, de lo cual considera, genera una falta de información respecto a los avances del informe solicitado, pues afirma que dicha omisión incide en el derecho de libertad de la señora *GM* dado que le impide optar al beneficio de la libertad condicional, ante ello, solicita que se dicte sentencia favorable y ordene al Consejo Criminológico Regional Central que a la brevedad posible remita al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena competente, el dictamen solicitado.

1. Al advertirse que lo planteado no reunía las condiciones necesarias para su análisis, esta sala previno al solicitante, a través de resolución de fecha 31 de julio de 2023, para que expresara:

i) desde cuándo está detenida, qué pena de prisión le fue impuesta y cuándo cumplió las dos terceras partes de la condena;

ii) en qué fecha se emitió la resolución por medio de la cual el Juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana practicó el cómputo de la condena impuesta, pues relacionaba que fue emitida el "cinco de diciembre de dos mil dieciocho veintiuno de julio de dos mil veintiuno";

iii) aclarara el nombre de la persona que pretendía favorecer, pues hay inconsistencias en el cuerpo de su escrito con respecto al apellido y género;

iv) si solicitó la aplicación del beneficio de la libertad condicional a favor de la condenada, ante quién y cuándo la requirió, a lo cual debería incorporar los documentos que lo acrediten, si los tuviere;

v) quién solicitó el informe favorable al Consejo Criminológico Regional Central y en qué fecha fue solicitada, pues afirma que fue "ordenado su práctica desde el mes de mayo del presente año", debiendo detallar las ocasiones que le ha sido requerido al citado organismo administrativo el informe en comento;

vi) cuántas ocasiones había acudido al mencionado consejo, debiendo citar las fechas y destacar las respuestas recibidas en cada una de las visitas realizadas, a lo cual debería incorporar los documentos que lo acreditara, si los tuviere;

vii) si había acudido al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena competente, para exponer el reclamo que traslada a esta sala, en qué fecha y qué le respondió, en caso de no haberlo realizado, debía explicar por qué;

viii) la condición de la justiciable respecto a su derecho de libertad personal.

Decisión que le fue notificada al peticionario por uno de los medios señalados para tal efecto, el 30 de agosto de 2023, tal como consta a folios diecinueve de este expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación.

3. Por correo electrónico recibido el 4 de septiembre de 2023, dentro del término para contestar, el peticionario remitió escrito mediante el cual manifestó que la señora *RLGM* —favorecida en este proceso— fue puesta en libertad, el día 7 de junio de 2023, por el juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, al habérsele otorgado el beneficio penitenciario de la libertad condicional ordinaria, por lo refiere su deseo de "renunciar a la pretensión procesal que en su momento fue ejercitada, ya que sería inoficiosa la continuación del trámite"; de ahí que esta sala entiende que, conforme a las instituciones jurídicas procesales reguladas en el proceso constitucional de hábeas corpus, lo que pretende el requirente es desistir de la protección constitucional solicitada a favor de la aludida señora.

II. En atención a lo manifestado por el solicitante y antes de emitir el fallo que corresponda, es procedente referirse a los escritos remitidos por correo electrónico (III.1) así como exteriorizar brevemente los fundamentos jurisprudenciales de la presente resolución (III.2), para examinar luego lo requerido (IV).

III. 1. El escrito del abogado William Roberto Pacheco Cabrera fue enviado a través de correo electrónico, al respecto, esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio —auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020—.

2. Reiteradamente se ha señalado que el hábeas corpus es un proceso constitucional que una persona promueve contra una autoridad judicial o administrativa e incluso particular cuando su libertad física, o la de la persona a cuyo favor se solicita, se encuentra inconstitucionalmente restringida, así también cuando sea inminente su producción. Esta tutela se extiende al derecho de integridad en cualquiera de sus dimensiones, física, psíquica o moral, en ocasión de la concurrencia de condiciones de reclusión que lo menoscaben -improcedencia del 9 de febrero de 2011, habeas corpus 26-2011—.

En atención a lo expresado por el requirente, es preciso señalar que la figura del desistimiento, como institución jurídica procesal, ha sido definida por la jurisprudencia. constitucional como la declaración unilateral de voluntad del peticionario o actor, o bien de la persona a cuyo favor se solicita el hábeas corpus, por la que se tiene por abandonado dicho proceso, imponiéndose un valladar al juzgamiento del fondo de lo planteado —improcedencia del 10 de junio de 2016, hábeas corpus 202-2016—.

IV. En el caso en estudio el propio peticionario ha manifestado su decisión de retirar su solicitud de tutela constitucional, desistiendo en un estadio inicial del presente proceso de hábeas corpus.

Si bien la Ley de Procedimientos Constitucionales no regula la figura de desistimiento en la etapa inicial del proceso, sí lo hace el Código Procesal Civil y Mercantil, aplicable supletoriamente al hábeas corpus en atención al artículo 20 de ese mismo cuerpo legal, siempre y cuando se ajuste a la naturaleza del precepto instituto jurídico.

Así, en el artículo 130 se señala que un planteamiento de esa naturaleza debe ser personal, claro, expreso y sin condiciones. En ese sentido, al haber manifestado el peticionario con claridad la decisión de retirar su solicitud de promover este hábeas corpus a favor de la señora *GM*, dado que esta se encuentra en libertad, es procedente aceptar su desistimiento.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta sala **RESUELVE**:

1. *Tiénese por desistido* el hábeas corpus promovido por el abogado William Roberto Pacheco Cabrera, a favor de la señora *RLGM*.

2. *Notifíquese* y *archívese*.

—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—GARCÍA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2083-2022

Relaciones:

2271-2022, 2296-2022, 2314-2022, 2478-2022, 2582-2022, 2674-2022, 2301-2022, 2379-2022, 2436-2022, 2525-2022, 3072-2022, 3112-2023, 3114-2022, 3119-2022, 3283-2022, 3286-2022, 1206-2023, 1805-2022, 1867-2022, 1970-2022, 1987-2022, 2028-2022, 2223-2022, 2254-2023, 2297-2022, 2313-2022, 2380-2022, 2476-2022, 2486-2022, 1911-2022, 1919-2022, 2196-2022, 2370-2022, 2565-2022, 3322-2022, 1812-2022, 2003-2022, 2005-2022, 2033-2022, 2262-2022, 2502-2022, 2866-2022, 3262-2022, 1912-2022, 2032-2022, 2108-2022, 2131-2022, 2133-2022, 1814-2022, 1932-2022, 2035-2022, 2047-2022, 2054-2022, 2194-2022, 2204-2022, 2412-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora JEFS, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *JATV*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor *TV* fue detenido el día 2 de septiembre de 2022, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad, por agentes policiales, no habiendo fundamento legal para su detención pues no ha cometido hechos ilícitos, nunca ha estado detenido ni se ha involucrado con grupos delictivos, además de que los agentes no tenían orden de detención por escrito, estando recluido en el "centro penitenciario Mariona", por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura

correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que no existe fundamento legal para la detención del señor *TV*, ya que –según refiere– no ha cometido ningún delito, nunca ha estado detenido ni se ha involucrado con agrupaciones ilícitas y los agentes no tenían orden de detención por escrito.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor JATV, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2141-2022

Relaciones:

2200-2022, 1708-2022, 2241-2022, 1699-2022, 1835-2022, 815-2022, 898-2022, 790-2022,

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinticinco minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ADJMV, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *MAMM*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor *MM* fue capturado el 7 de septiembre de 2022, cuando se conducía en su motocicleta a dejar a su hermano al trabajo, refiere que aquel fue abordado por agentes policiales quienes le pidieron sus documentos personales, por lo que les explicó que los había dejado en la casa, siendo detenido en ese momento por el delito de agrupaciones ilícitas sin ninguna causa justificable ni explicación.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido en la solicitud (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una

investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las

diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que su hijo MAMM fue capturado por agentes policiales, por agrupaciones ilícitas debido a que no portaba sus documentos personales.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesario el informe a la institución fiscal y la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto

de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º, de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor MAMM, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.— O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

941-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Marta Beatriz Corleto Corleto, en contra del Juez Especializado de Instrucción B-3 de San Salvador, a favor de: 1*) MAC, 2) CAR, 3) DEHB, 4) AAAR, 5) CSR, 6) HAMP, 7) JEBB, 8) OEGB, 9) OACA, 10) DDMM, 11) JECC, 12) JJAR, 13) BMC, 14) JHB, 15) JAMS, 16) DYSG, 17) EJNE y 18) OAMP.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes partes de San Salvador, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios; *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante lo expuesto afirma que el juez en un decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves y limitarse a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legitima defensa y el debido proceso regulados en nuestra Constitución.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el

derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de los procesados que derivaron en la detención provisional de sus defendidos, ya que, a su parecer, estos son insuficientes.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, ya que la misma peticionaria ha señalado las razones por las cuales cada elemento incorporado carece de valor y por qué considera que no se ha comprobado la existencia de delitos ni la participación de los procesados en los mismos.

Al respecto, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, no se mencionan actuaciones y omisiones concretas que pudiesen derivar en vulneraciones a derechos constitucionales, por lo tanto, en los términos planteados, no es posible advertir argumentos que sustenten tales aseveraciones ni afectaciones a los derechos protegidos mediante el hábeas corpus.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *) MAC, 2) CAR, 3) DEHB, 4) AAAR, 5)CSR, 6) HAMP, 7) JEBB, 8) OEGB, 9) OACA, 10) DDMM, 11) JECC, 12) JJAR, 13) BMC, 14) JHB, 15) JAMS, 16) DYSG, 17) EJNE y 18) OAMP,* por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, archívese.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1012-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora HDCRDM, en contra del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Miguel, a favor del señor *JAMR*, procesado por el delio de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria manifiesta que es madre del señor MR, quien fue detenido el 7 de abril de 2022 –en otro apartado señala que fue el 3 de abril de 2022–, en momentos en que departía con unos vecinos en una tienda cercana a su casa y que la audiencia de imposición de medidas se realizó el 30 de abril de 2022, por el Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Miguel.

Expone que las razones por las que su hijo fue privado de libertad obedecen a que cuando era menor de edad estuvo procesado por el delito de organizaciones terroristas, pero fue absuelto, pues no pertenece a ningún grupo "pandilleril", y que ha estado detenido "solo por investigación, a consecuencia de unas personas que solo quieren causarle daño"; agregando que como todo buen ciudadano, el imputado en ningún momento huiría de las medidas que le imponga la autoridad judicial respectiva y que la decisión dictada por el aludido juez especializado le causa agravio al señor MR, porque interrumpe su reinserción a la sociedad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico jurídico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para

decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria cuestiona la captura y posterior detención provisional decretada al señor *JAMR*, pues asegura que al momento de ser detenido únicamente departía con unos vecinos, afirmando que no pertenece a grupos de pandillas y no existe una condena que acredite su pertenencia a las mismas, además su restricción interrumpe su proceso de inserción social y que no incumpliría las medidas sustitutivas que podrían decretarle.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Tal consideración es aplicable respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la selección de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

En todo caso, respecto a la restricción de libertad en que se encuentra el señor *MR*, la peticionaria puede hacer uso de los mecanismos que contempla la normativa procesal penal ante el juez de la causa, incluso medios recursivos donde se planteen las discrepancias que, alude, contiene la decisión judicial que sustenta la privación de libertad del detenido.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino una cuestión de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *JAMR*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

1189-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor LEM –o M– S, contra el "Juez Especializado A-2 de Santa Ana", a favor de la señora *HVMC*, procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante manifiesta ser padre de la señora *MC*, a quien, en audiencia de imposición de medidas cautelares celebrada el día 22 de junio de 2022, la autoridad demandada le decretó instrucción formal con la imposición de la detención provisional por el delito relacionado.

Al respecto, argumenta que se vulneró el debido proceso al no motivarse la resolución que ordenó tal medida, puesto que únicamente se consignó que dicha restricción obedece a la gravedad del delito pero sin tomar en cuenta el binomio procesal establecido en el art. 329 [CPP]. En ese sentido, indica que los elementos de convicción para sostener la existencia del delito y la participación de la imputada, solamente se relacionaron "actas sin mayor investigación".

Enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con el debido proceso y solicita hábeas corpus a favor de la detenida a fin de concederle la libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha establecido que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación sobre la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Asimismo, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. El solicitante –en síntesis– reclama de la valoración que el juzgador otorgó a los elementos de convicción que constaban en el proceso penal contra la señora *MC* sobre los cuales sustentó su decisión de imponer la medida cautelar de la detención provisional a su hija.

Sin embargo, se advierte que, en los términos planteados, el peticionario no propone algún defecto de motivación en la decisión cuestionada que refleje la arbitrariedad o ilegalidad alegada, pues únicamente expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de la procesada en el mismo los cuales, considera, son insuficientes.

Debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre su suficiencia en cuanto a la imputación, pues si esta sala realizara tal análisis, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor, sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Y es que si bien el solicitante menciona que la referida medida cautelar no se encuentra motivada, también señala tal decisión se basó en unas actas que, a su parecer, resultan insuficientes para sustentar la existencia del delito. En consecuencia, al no haber argumentado el solicitante un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo que impide a este tribunal continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede

limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, podrá efectuarse por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de la señora *HVMC*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA––H.N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2113-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Vilma Estela Villalobos, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, a favor de los señores *MATS* y *AEFH*, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que los señores *TS* y *FH* fueron capturados el día 25 de abril y se les realizó audiencia de "imposición" el día 6 de mayo –sin indicar el año en ambas fechas–.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual –según indica– al ser aplicada de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en "situación de vulnerabilidad" –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y en tal sentido alega que la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué–

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama específicamente la detención provisional en la que se encuentran los señores *TS y FH*, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitante que se restablezca la libertad de los procesados por "haberse excedido el término de la detención provisional".

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los procesados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad

o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad impuesta luego de que el juez de la causa analizara los elementos de convicción incorporados los cuales, a juicio de la peticionaria, resultan insuficientes para establecer la existencia del delito y la participación de los procesados.

Y es que, si bien se alega falta de presupuestos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede revise la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada a los procesados.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y el grado de participación, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en "situación de vulnerabilidad" y pide se restablezca la libertad física de los imputados mencionando un supuesto exceso en la detención provisional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de las personas que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores *MATS y AEFH*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2499-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido contra el Director General de Centros Penales y el Consejo Criminológico Regional Occidental, por el abogado Oswaldo Ernesto Feusier Ayala, a favor del señor *LAAH*, condenado por el delito de homicidio.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. *1.* El solicitante sostiene que su representado fue condenado en 2017 por un tribunal de sentencia, a la pena de diez años de prisión por el delito antes indicado, actualmente se encuentra a la orden del Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Sonsonate, en el expediente con referencia 135-417-SEPR-3-19 y recluido en la Granja Penitenciaria de Santa Ana. Agrega que el señor AH cumplió la mitad de la pena el 24 de junio de 2021, razón por la cual reúne los requisitos exigidos por el art. 85 del Código Penal (CP) para que se le otorgara el beneficio de libertad condicional.

Refiere que el 30 de julio de 2021 solicitó al Consejo Criminológico Regional Occidental, propusiera al juez de vigilancia penitenciaria tal beneficio, no obstante, el 10 de diciembre de 2021 –cinco meses después– se le requirió el número de registro en el Sistema de Información Penitenciaria, dato que a su criterio es innecesario.

Posteriormente el 7 de febrero de 2022 fue notificado de la resolución por medio de la cual daban por reciba la petición, sin embargo, pese a haber transcurrido dieciséis meses desde la presentación de su solicitud las autoridades demandadas no se han pronunciado sobre la posibilidad de proponer el beneficio de libertad condicional a su cliente, en consecuencia, solicita hábeas corpus a favor de este por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal.

2. Por resolución del 21 de abril de 2023, este tribunal previno al peticionario para que detallara con precisión:

i) cuál es la actuación u omisión concreta que reclama, indicando la o las autoridades a las que la atribuye, y por qué razón considera que actualmente está vulnerando los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) cuál es la denominación del Consejo Criminológico Regional Occidental al que hace alusión en su solicitud, debiendo tener en cuenta, que existen en esa zona, los consejos criminológicos con denominaciones "A" y "B";

iii) qué peticiones en concreto ha realizado al equipo técnico criminológico, las respuestas obtenidas –si le han sido notificadas– y si ha existido dictamen favorable respecto al privado de libertad, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten, si los tuviere;

iv) si ha acudido al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena competente, para exponer el reclamo que traslada a esta sala, en qué fecha y qué le respondió, en caso de no haberlo realizado, debe explicar por qué;

v) la condición actual del favorecido respecto a su libertad física.

3. La referida prevención fue notificada al solicitante, por el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia el 9 de mayo de 2023 y el licenciado Oswaldo Ernesto Feusier Ayala remitió su escrito de contestación dentro del término establecido para ello, en el que expone que:

i) la actuación y omisión contra la que reclama es el "retraso injustificado" en pronunciarse sobre el beneficio de libertad condicional anticipado –si es que procede–, solicitud que realizó el 30 de julio de 2021, al Consejo Criminológico Regional Occidental.

Refiere que la autoridad a quien atribuye la omisión que vulnera los derechos fundamentales de su representado es al equipo técnico criminológico adscrito al centro penal en que se encuentra el señor *AH*, que, desde el 24 de junio de 2021, no contestó la solicitud realizada y representa "una extensión indebida de la limitación de la libertad" de la persona que se pretende favorecer.

ii) Con respecto a la denominación del consejo criminológico al que hizo referencia en su solicitud, aclara que cuando tuvo conocimiento que el condenado había sido trasladado de centro penitenciario, la petición la dirigió al Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario La Esperanza, desconociendo como se divide cada consejo. Indica que su solicitud fue contestada por este último el 7 de febrero de 2022, señalando que la "tenía por aceptada" y que en su debido momento le iba a informar lo resuelto.

iii) Menciona que las peticiones concretas realizadas al equipo técnico criminológico son las siguientes: el 30 de julio de 2021, solicitó la concesión del beneficio de libertad condicional a favor de su representado; b) el 10 de diciembre de 2021 –cinco meses después– se le solicitó el registro en el Sistema de Información Penitenciaria, para continuar con el trámite; c) el 7 de febrero de 2022 –siete meses después–, se le notificó, que su solicitud había sido recibida.

iv) Advierte que no acudió al juez de vigilancia correspondiente por dos razones: la primera porque no aseguraba una respuesta más pronta o efectiva que el hábeas corpus, además que no debe agotarse y segundo debido a que "es un hecho conocido" que la Dirección General de Centro Penales está "actuando contra lo que ordenan los tribunales de primera instancia y en general lo que plantea derecho de ejecución de pena", en consecuencia, no ofrecía más garantía que lo que esta sala puede resolver.

v) Detalla que la condición actual del señor *LAAH*, es que continúa cumpliendo pena en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, adiciona que el 2 de marzo de 2023, presentó solicitud de libertad condicional a favor del condenado ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Sonsonate, quien declaró a lugar dicha petición y ordenó librar oficio al Consejo Criminológico Central.

A su escrito agregó: copia de una nota de fecha 10 de diciembre de 2021, suscrita por el Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Centros Penales; nota del 7 de febrero de 2022, suscrita por el Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario La Esperanza; esquela de notificación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Sonsonate.

II. Una vez expresados los argumentos del peticionario, debe indicarse la estructura lógica de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia vinculada con lo propuesto (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Esta sala ha definido el hábeas corpus de pronto despacho como aquel utilizado por el interesado incidido en su libertad personal, ante el retraso de una resolución, informe o cualquier providencia que se espera le genere beneficios, para que los mismos efectivamente se produzcan, con lo cual, si bien no hay certeza de conseguirse el restablecimiento de la libertad personal, se logra una respuesta sobre lo requerido, ello dentro del marco de un proceso jurisdiccional.

La incoación de un hábeas corpus del tipo referido supone que, en ese momento, la autoridad no ha emitido pronunciamiento oportuno ante lo requerido por el favorecido, a efecto de que esta sala constate tal circunstancia, estime la pretensión por la lesión que implica a los derechos de protección jurisdiccional y libertad física y, consecuentemente, ordene a tal autoridad la emisión de su contestación –improcedencia de 29 de agosto de 2022, hábeas corpus 173-2021–.

2. También se ha sostenido que para proceder al análisis constitucional de un asunto debe verificarse sí, en el momento de plantearse la solicitud, el acto reclamado está produciendo un agravio en la esfera jurídica del favorecido pues, si al iniciarse el proceso constitucional de hábeas corpus, el acto cuestionado ya no sigue surtiendo efectos, el agravio alegado deviene en inexistente y ello vicia la petición.

Así pues, al solicitar la protección constitucional, la persona que se pretende favorecer debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad física o integridad física, psíquica o moral, derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular, que se cuestiona; así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas –improcedencia del 22 de mayo de 2019, hábeas corpus 321-2018–.

IV. 1. El peticionario expresa en síntesis que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal del señor *LAAH*, al no haberse dado seguimiento a su petición presentada el 30 de julio de 2021, en la que solicitó que el Consejo Criminológico Regional Occidental, propusiera a su representado para el beneficio de libertad condicional al juez penitenciario a efecto de que se determinara su procedencia, de la cual únicamente fue notificado el 7 de febrero de 2022 que había sido recibida. Agregó que el 2 de marzo del presente año, solicitó ante el juez penitenciario respectivo lo referido al aludido beneficio, el que declaró ha lugar dicha petición y ordenó el trámite correspondiente.

En su escrito de contestación y la documentación que adjunta, advierte esta sala que la petición realizada en un primer momento al Consejo Criminológico Regional Occidental y posteriormente al Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario La Esperanza con la finalidad de que ambas autoridades –de ser procedente– propusieran al juez penitenciario correspondiente para que se le otorgara el beneficio de libertad condicional ya fue atendida por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Sonsonate, autoridad que, según consta en la esquela de notificación presentada, mediante resolución de 22 de marzo de 2023, declaró ha lugar la petición de iniciar el trámite para conocer sobre el otorgamiento de la libertad condicional ordinaria a favor del señor *LAAH*, por lo que ordenó librar oficio al Consejo Criminológico Central de San Salvador a efecto de que se le remita dictamen respecto al privado de libertad.

En consecuencia, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Sonsonate respondió a la solicitud propuesta por el abogado Feusier Ayala de libertad condicional ordinaria para el señor *LAAH* y ordenó el inicio del trámite para determinar si procede conceder el citado beneficio penitenciario.

A partir de ello, se advierte la ausencia de una de las condiciones indispensables para efectuar el análisis constitucional solicitado –agravio efectivo en el derecho de libertad física derivado de la omisión reclamada al momento de promover el hábeas corpus– ya que la petición vinculada con el derecho de libertad física ya fue atendida por la autoridad judicial mencionada. Lo anterior impide conocer y decidir de fondo su petición, la cual será declarada improcedente.

Y es que, si bien lo propuesto podría dar lugar a la configuración de un hábeas corpus de pronto despacho, de acuerdo a la jurisprudencia expuesta; sin embargo, según lo manifestado, se le está dando trámite a lo pedido por parte de la autoridad a la que le competente legalmente determinar finalmente la procedencia o no de la concesión del aludido beneficio–*v. gr.*resolución de fecha 20 de agosto de 2010, hábeas corpus 99-2010 –.

Lo anterior no es óbice para que, en el caso de atribuirse otras omisiones, de considerarlo pertinente el peticionario pueda acudir nuevamente a esta sede.

2. Es preciso aclarar que, si bien el hábeas corpus es un proceso flexible, sin formalidades y que debe ser expedito, al formar parte de los procesos constitucionales de tutela concreta, constituye una protección reforzada a los derechos fundamentales de libertad física e integridad personal. Además, no es un exclusivo instrumento para proteger los derechos de los justiciables pues todas las autoridades (judiciales y administrativas) al ser investidas en sus cargos asumen el deber de cumplir con lo establecido en la Constitución, tal como lo dispone el artículo 235 Cn, por lo que son competentes para asegurar el ejercicio de los derechos y prevenir o reparar lesiones a los mismos –sobreseimiento del 27 de marzo de 2017, hábeas corpus 21-2017–.

En ese sentido, si bien es cierto que en el trámite del hábeas corpus no existen exigencias como, por ejemplo, en el proceso de amparo, de agotamiento de recursos y de reclamo contra actos definitivos, los cuales este tribunal no ha trasladado de uno a otro por sus distinciones en las regulaciones constitucionales y legales, sin embargo su naturaleza de proceso constitucional y la mejor tutela de los derechos que se protegen mediante el hábeas corpus, requiere que los reclamos sean lo más concretos posible y que se señalen las gestiones ante las autoridades ordinarias para así también poder identificar el comportamiento que se les reprocha; de ahí que en la incoación del proceso de hábeas corpus es necesario que se identifique al menos la actuación de la autoridad que se demanda y que se considera ha desconocido la Constitución o, en todo caso, la omisión de atender requerimientos sobre ello –inadmisibilidad del 11 de marzo de 2022, habeas corpus 733-2020–.

De ahí que esta sala no puede obviar que cada autoridad judicial de acuerdo a sus competencias debe resolver los casos que ante ellas se presentan, por tal razón es relevante que este tribunal conozca si tales autoridades han hecho o se encuentran realizando diligencias en relación con los reclamos que se trasladan a esta sede y si se han efectuado planteamientos de las partes al respecto, pues son aquellas las primeras obligadas a garantizar y proteger los derechos de los privados de libertad que se encuentran a su cargo o bajo su vigilancia por su sometimiento a la fuerza normativa de la Constitución y que, en ocasiones, están incluso en mejores condiciones de indagar y determinar algunos cuestionamientos, por la amplitud de sus competencias y su contacto directo, en este caso, con las personas condenadas.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución; y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *LAAH*, por tratarse lo propuesto de un asunto que carece de un agravio vigente que incida en el derecho de libertad física.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.— DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2524-2022

Relaciones:
2123-2022, 1457-2022, 1842-2022, 765-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con treinta y cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor ARA, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a favor del señor *LARR*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que el señor RR fue detenido el día 30 de marzo de 2022 mientras se encontraba en el Centro Escolar "**********", por agentes policiales y soldados, no habiendo fundamento legal para su detención pues no había cometido delito ni existía una orden escrita decretándola. Por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúen de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos

de apariencia delictiva, y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona —sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas córpus 141-2008—.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación —sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002—.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2° del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales —no exclusivos— promotores de la acción penal —art. 193 ord. 4° Cn—, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente —o archivarse— y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente —art. 172 Cn.—, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados —por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características—, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación —o no— del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1° Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto —al igual que el resto de derechos fundamentales—, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse, dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no <es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputa do], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del habeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *LARR* fue capturado de manera ilegal ya que —según refiere— no ha cometido ningún delito, no existía orden por escrito, ni fundamento para su detención.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden — administrativa o judicial— para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1° de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente —entre otros— a detener a las personas, sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo o sea para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta la que decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión, así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2° y 13 inc. 2° Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el habeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuenta para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado el peticionario un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan —libertad física e integridad personal de los detenidos—, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía —art. 174 Cn.—.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente —en relación con años precedentes—se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar —más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad— el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia —sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300- 2019—, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaria de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2°, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor LARR, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

371-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus inició en virtud de lo establecido en la resolución de amparo 273-2020, en la que se ordenó a la secretaría de esta sala inscribir en el registro de hábeas corpus la demanda planteada contra el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro y la Sala de lo Penal, a su favor por el señor *JGG*, condenado por el delito de cohecho propio.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario expresa que fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador el 18 de agosto de 2017 a cumplir la pena de cuatro años de prisión por el delito antes aludido. Agrega que durante la etapa de incidentes en la vista pública presentó como prueba de descargo certificación de las actas de audiencia de imposición de medidas y reconocimientos por fotografías que llevó a cabo mientras fungía como Juez Especializado de Instrucción de San Miguel con las que demostraba que se encontraba en audiencia en momentos que supuestamente tuvo una reunión con otro imputado.

Señala que dichas certificaciones fueron admitidas como prueba de descargo por el tribunal de sentencia, no obstante, en la sentencia emitida el tribunal omitió darles valor probatorio debido a que fueron extraviadas en esa sede judicial pues no constaban en el expediente ni en sus anexos.

En razón de ello, explica que uno de los motivos por los que interpuso recurso de apelación ante la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro fue la falta de valoración de los elementos de prueba de descargo. Al respecto, el tribunal de segunda instancia reconoció el vicio de la sentencia e hizo uso del método de la inclusión mental hipotética del material probatorio omitido y valoró las actas respectivas, pero concluyó que los mismos no tenían incidencia para modificar el fallo, por tanto, confirmaron la sentencia venida en apelación.

Alega que además interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Penal quien desestimó su petición de declarar la nulidad por defecto procesal de la sentencia debido a que este no conllevó a un agravio en el derecho de defensa del solicitante.

Finalmente solicita se declare la existencia de la violación a su derecho de defensa, en su manifestación a ofrecer medio probatorios y que estos se valoren, con sus consecuencias legales.

A su solicitud adjuntó copia de la sentencia emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, así como la resolución de los recursos de apelación y casación interpuestos por el peticionario y su defensa técnica, de igual manera, soporte digital en el que supuestamente consta el acto procesal de la vista pública.

2. En su segundo escrito, de fecha 22 de octubre de 2021, el señor GG reitera su petición.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (III) y posteriormente se examinará lo requerido por el imputado (IV).

III. Esta sala, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal, encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal así como el análisis de los alegatos relacionados con la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo; por tanto, la determinación sobre si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto corresponde exclusivamente al juez penal –improcedencias del 10 de enero de 2018 y del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 291-2017 y 52-2012, respectivamente–.

IV. En el caso propuesto, el peticionario alega, en síntesis, que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador no valoró algunos elementos de prueba de descargo ofrecidos porque no constaban en el expediente ni en sus anexos. Sin embargo, considera que con ellos se podía acreditar que se encontraba en ejercicio de sus funciones como juez especializado y no en una reunión con otro imputado como lo aduce la tesis fiscal, razón por la cual interpuso recurso de apelación, en el que si bien se reconoció el vicio en la sentencia utilizó la técnica de inclusión mental hipotética para hacer una valoración de las pruebas faltantes, pero determinó que estas no tenían incidencia para modificar el fallo, por otro lado, también interpuso recurso de casación, pero fue desestimado.

De lo anterior, se advierte que el peticionario pretende que este tribunal emita una resolución en la que se pronuncie sobre los documentos

supuestamente omitidos, otorgándoles un valor –supliendo al juez en su labor– y establezca a partir de los mismos el fallo condenatorio u absolutorio que se considere, sin embargo, este punto no puede ser determinado mediante el proceso constitucional que nos ocupa, pues de acceder al análisis requerido esta sala estaría valorando prueba habida en el proceso penal y actuando como una instancia más dentro de este último, lo cual está fuera de su competencia constitucional.

Así, el reclamo planteado por el pretensor está alejado de una propuesta constitucional vinculada con un tema relacionado con motivación, pues se refiere clara y exclusivamente a atacar la supuesta omisión de valoración en la sentencia de algunos de los elementos habidos en el proceso penal y que a su parecer hubieran determinado un fallo distinto, pero que, al ser objeto de inclusión para su valoración en segunda instancia, se determinó su irrelevancia. Lo cual evidencia una inconformidad con lo resuelto.

En ese sentido es de reiterar que el hábeas corpus por su naturaleza constitucional no es una instancia más dentro del proceso penal, de forma que excede las atribuciones de este tribunal revisar la actividad relacionada con la valoración de la prueba que haya determinado un juez o instancia penal, pues ello, aunado al establecimiento de la veracidad o suficiencia de los elementos probatorios dentro del proceso penal, es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. De ahí que a esta sala tampoco le compete la determinación de la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo como pretende el peticionario, de tal forma que lo propuesto constituye un asunto de mera legalidad, que por su naturaleza está excluido del conocimiento de este tribunal, razón por la cual deberá emitirse una declaratoria de improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° y 12 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala RESUELVE:

1. Declárase improcedente la petición de hábeas corpus planteada a su favor por el señor JGG, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARÍA MARIBEL ALAS CERNA—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""""

549-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinticinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por los abogados Wilfredo Martínez Iriondo y Miguel Ángel Laguán González, en contra de agentes de la Policía Nacional Civi<l y del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de Santa Ana, a favor del señor FACG, procesado por el delito de actos de terrorismo.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. Los peticionarios refieren el señor CG fue capturado el día 28 de marzo de 2022, en la calle principal de la colonia **********, cantón **********, Ahuachapán, de forma ilegal y arbitraria, por agentes policiales, quienes le manifestaron que procederían a su detención por pertenecer a una pandilla; sin embargo, agregan que su representado nunca ha formado parte de la estructura delictiva denominada "Criminales Locos Salvatruchos" ni posee el alias "G***", como lo individualiza la fiscalía en el requerimiento fiscal, existiendo una confusión al respecto, ya que a su defendido sus amigos más cercanos le dicen "C***", afirmando que el alias "G***" le pertenece a otra persona del sector que efectivamente forma parte de estructuras criminales; además, señalan que el imputado no posee tatuajes o símbolos alusivos a pandillas y fue detenido sin la orden de un juez, bajo el argumento del régimen de excepción decretado así como por el hecho de residir en una zona donde existen pandillas.

Señalan que el señor CG se encuentra recluido en el Centro Penal de Izalco, fase I, debido a que el Juez Especializado de Instrucción "A-2" de Santa Ana, en audiencia especial de imposición de medidas celebrada el día 10 de abril de 2022, le decretó detención provisional sin haber tipificado debidamente el delito por el cual tenía que ser procesado y sin que la Fiscalía General de la República presentara una robusta acusación, ya que no existen elementos o indicios mínimos para establecer la vinculación de su representado a la estructura criminal y que haya participado en tal delito, tampoco se tendrán testigos que aporten pruebas o elementos sobre el ilícito que se le atribuye porque los hechos son inexistentes.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por los peticionarios (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden

escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa los peticionarios afirman que el señor FACG fue capturado por agentes policiales de forma ilegal y arbitraria ya que –según refieren– fue detenido por el régimen de excepción en razón lugar donde reside, sin mediar orden judicial, sin que perteneciera a pandillas y sin que tuviera tatuajes alusivos a las mismas; también aducen que el juez a cargo del proceso penal decretó la detención provisional sin que

la fiscalía presentara una "robusta acusación" y sin que se tuvieran testigos o elementos de prueba sobre el ilícito que se le atribuye porque los hechos que se le imputan son inexistentes.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio

sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado los peticionarios un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor FACG, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

888-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MMCDM, contra la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la República, a favor del señor *MEMC*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor MC fue privado de libertad el día 10 de mayo de 2022, en el marco del régimen de excepción, asegura que se encuentra recluido en "Izalco" y que desconoce el juez a cuya orden se encuentra.

Refiere que acude a esta sede pues a su criterio la detención es arbitraria o ilegal, reclama que no le dicen "que juzgado lo tiene a cargo", no le dan datos pues en la procuraduría "tienen prohibido dar información", por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. *1*. Esta sala en su jurisprudencia ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el

acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 16 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de las autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de los solicitantes; de manera que estos, al efectuar sus peticiones, deben señalar con precisión dichos aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente su petición y que permiten que la misma pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal se encontraría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido jurisprudencialmente como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mínimamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal (improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020).

3. Esta sala ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes (improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018).

IV. *1*. En el caso que nos ocupa la peticionaria reclama de la privación de libertad en que se encuentra el señor *MC*, describiendo la procedencia teórica del proceso constitucional y haciendo referencia a una detención arbitraria o ilegal el "el marco régimen de excepción", sin indicar el hecho concreto del que reclama, la autoridad a la que se lo atribuye ni la vulneración constitucional de derechos del referido señor; y es que la peticionaria únicamente señala la fecha de la captura, sin exponer por qué la considera inconstitucional; asimismo, se reclama de la falta de información proporcionada por la Procuraduría General de la República sobre el proceso penal del referido señor, pues lo "tienen prohibido", alegando que no sabe a la orden de cuál juez se encuentra, a pesar de tener conocimiento del recinto penitenciario donde el detenido está recluido.

2. Al respecto, es necesario aclarar que para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido, y es que si bien el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener al menos, un acto generador de violaciones constitucionales con incidencia directa en el derecho de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer, datos que permitan la determinación de esta persona y de la autoridad a la que lo atribuye.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en la petición no se consignan –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual tampoco es atendible dicha solicitud propuesta en términos tan abstractos; de modo que la falta de estas características constituye un vicio en la petición impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

3. En cuanto al reclamo referido a la falta de información por supuestas prohibiciones por parte de la Procuraduría General de la República –sin indicar en qué contexto ocurrieron estas actuaciones o a quien concretamente las atribuye–, cabe destacar que, según la jurisprudencia constitucional, esta sala no puede analizar situaciones como la propuesta, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido irregularidades en la actuación de las autoridades, lo cual debe ser evaluado por las autoridades judiciales que conocen en materia penal, o en su caso por las autoridades administrativas correspondiente –fiscalía si se tratara de ilícitos o procuraduría si se refiere al posible cometimiento de faltas por parte de sus empleados–, a través de los mecanismos que la ley confiere para ello. Por tanto, al no revelarse un tema vinculado con posibles vulneraciones constitucionales deberá declararse improcedente la petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto

de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sede para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor MEMC, al no proponerse asuntos con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

940-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Marta Beatriz Corleto Corleto, en contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de San Salvador, a favor de los señores: *1) SECR, 2) JECA, 3) CESG, 4) LAMB, 5) IAAO, 6) EOOM, 7) EAPA, 8) JEGM, 9) PARG, 10) CJQR y 11) JLLB.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes lugares de los municipios de Cuscatlán, Soyapango, Usulután, Ilopango y San Salvador –sin indicar las fechas o los lugares concretos–, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura; según relata, tras realizar una "especie de inspección" en sus hogares y de solicitar su identificación, fueron corroborados sus datos vía radio para verificar si existía orden de captura, antecedente policial o perfil delincuencial, posteriormente se hizo constar en acta de captura "algún grado de participación en la estructura criminal", ignorando de donde se obtuvo dicha información, pues aseguran no pertenecer a estos grupos delincuenciales.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios; *i)* actas de captura y lectura de derechos, *ii)* perfil delincuencial o antecedente policial, *iii)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *iv)* entrevista de los agentes captores, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados y por tanto, a su criterio, no era procedente la detención provisional.

No obstante lo expuesto afirma que el juez relacionado, en una decisión sin fundamentación, decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun cuando no se pudiera establecer la participación de aquellos con "indicios sólidos", sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, incumpliendo con "la verificación de indicios mínimos" de motivación, ni valorar los mencionados "indicios probatorios", las circunstancias particulares de los hechos o la exposición de cada defensor –sin exponer a qué se refiere específicamente con dichas afirmaciones–, limitándose el juez a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos constitucionales de los procesados.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación en el delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación de alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente se expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de los procesados que derivaron en la detención provisional de sus defendidos, ya que, a su parecer estos, son insuficientes.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, ya que la misma peticionaria ha señalado que a su parecer los elementos incorporados no permiten comprobar la existencia del delito ni la participación de los procesados en el mismo.

Al respecto, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares o defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, no se mencionan actuaciones y omisiones concretas que pudiesen derivar en vulneraciones a derechos constitucionales, por lo tanto, en los términos planteados, no es posible advertir argumentos que sustenten tales aseveraciones ni afectaciones a los derechos protegidos mediante el hábeas corpus.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) SECR, 2) JECA, 3) CESG, 4) LAMB, 5) IAAO, 6) EOOM, 7) EAPA, 8) JEGM, 9) PARG, 10) CJQR y 11) JLLB,* por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

177-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional ha sido promovido en contra del Juez Primero de Sentencia de Santa Tecla, a su favor, por el señor *MAM*, condenado por el delito de robo agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante indica que interpone recurso de amparo en contra de la sentencia firme pronunciada por la autoridad demandada. Refiere que se encuentra privado de libertad desde el 23 de abril de 2015 y según el cómputo de su pena cumplió las dos terceras partes el 23 de diciembre de 2021 y la pena total la cumplirá el 23 de abril de 2025.

Sostiene que este tribunal emitió sentencia de inconstitucionalidad con referencia 63-2010/69-2010/77-20/11-2011/27-2011, en la que se declaró inconstitucional el numeral 4° del artículo 85 del Código Penal (CP), en consecuencia, "no se puede obligar al cumplimiento íntegro del encarcelado sin tomar en cuenta la conducta penitenciaria del condenado".

Alude que por haber cumplido las dos terceras partes de su condena, tener una conducta intachable y haber cursado el programa de acuerdo al delito, le asiste el derecho de libertad condicional ordinaria conforme lo establece el artículo 85 del CP, en ese sentido solicita a esta sala sea quien "exclusivamente definan si ha existido o no infracción a la Constitución".

II. En el presente caso, si bien es cierto en la solicitud se expresa presentar "recurso de amparo", al analizar la misma se determina que el peticionario reclama de la pena de prisión que se encuentra cumpliendo, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 12 inciso final de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Consecuentemente, se consideró pertin ente encauzar la petición por la vía procesal idónea y que se haga el análisis liminar correspondiente a la petición de hábeas corpus, maximizándose así los principios de *iura novit curia* –suplencia de la queja deficiente, art. 80 LPC– y el principio de dirección y ordenación del proceso –art. 5 LPC y 14 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)–.

III. Es preciso indicar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (IV) y luego se analizará el supuesto planteado por el peticionario (V).

IV. Este tribunal ha sostenido de forma reiterada en su jurisprudencia que la decisión de otorgar o denegar beneficios penitenciarios es un asunto cuya decisión está excluida de su competencia, pues dicha atribución les corresponde exclusivamente por ley a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, por tanto, es ante ellos que deben plantearse las peticiones de los privados de libertad vinculadas a la verificación de requisitos para su avance en el sistema progresivo penitenciario y otras relacionadas a decretos transitorios que puedan favorecerles –improcedencia del 12 de junio de 2019, hábeas corpus 21-2019–.

V. El peticionario es claro en solicitar a esta sala que decida sobre el otorgamiento del beneficio penitenciario de libertad condicional ordinaria, y a su vez, refiere las razones por las que a su criterio cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Con respecto a los beneficios penitenciarios, específicamente la libertad condicional ordinaria a la que hace alusión el peticionario, hay que decir que, según el artículo 51 de la Ley Penitenciaria (LP), los jueces de ejecución penal pueden de oficio o a petición del condenado evaluar si se han cumplido las exigencias establecidas en el art. 85 CP, correspondiendo a la referida autoridad judicial la atribución de decidir sobre ello –art. 37 nº 2 LP–.

De ahí que, lo requerido por el señor *MAM* corresponde a los jueces competentes para conocer respecto a la fase de ejecución de las penas, pues esta sala, con competencia constitucional, no puede sustituir dicha labor y determinar si una persona cumple o no con los requisitos para otorgar un beneficio penitenciario.

Y es que, el control constitucional que realiza este tribunal mediante un proceso de hábeas corpus se limita a verificar la existencia de violaciones constitucionales al derecho fundamental de libertad física de la persona a quien se pretende favorecer o, en su caso, el derecho de integridad personal de los privados de libertad y consecuentemente, a repararlos; apartarse de ello implicaría desnaturalizar el objeto de este proceso. Siendo que, en el presente caso, el peticionario no señala actuaciones u omisiones de ninguna autoridad que incidan en los aludidos derechos.

Por tanto, al constituir lo planteado un asunto de mera legalidad y no corresponder su determinación en este proceso de carácter constitucional, se deberá rechazar mediante una declaratoria de improcedencia.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada a su favor por el señor *MAM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

353-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido contra la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Tecla, a su favor por el señor JRCC, condenado por los delitos de secuestro agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario manifiesta que la autoridad demandada controla –a través del expediente con referencia 203-01-6– su pena a veintiséis años y ocho meses de prisión por el delito de secuestro agravado, impuesta por el Tribunal de Sentencia de Santa Ana.

Refiere que, según el cómputo respectivo, se estableció que la pena total de la aludida condena sería cumplida el 15 de abril de 2024, aplicando las reglas establecidas en el art. 441-A del Código Procesal Penal derogado, pero alega que se vulneró sus derechos y garantías fundamentales de libertad, seguridad jurídica y debido proceso, pues la autoridad demandada tenía conocimiento –desde el 22 de noviembre de 2016– de la existencia de una segunda condena impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador a trece años y cuatro meses de prisión por el delito de secuestro agravado, debiendo, por tanto, realizar la unificación correspondiente, tomando en consideración que su ca ptura ocurrió el 19 de octubre de 1999; sin embargo, la segunda condena fue cumplida el 19 de febrero de 2013, sin que se realizara la unificación, a pesar de haberla solicitado en múltiples ocasiones.

Señala que si se hubieran unificado sus penas, habría cumplido la mitad de estas el día 19 de octubre de 2019 y las dos terceras partes el 19 de junio de 2026, fecha en la cual "[podría] recuperar [su] libertad ambulatoria por ambos delitos".

Además, reclama que el cómputo de la pena a que hace alusión, no fue realizado en presencia suya y ello vulnera sus derechos de audiencia y defensa material puesto que no se le convocó a audiencia para la práctica respectiva, lesionando de tal forma la norma procesal contenida en el art 10 CPP y la normativa convencional atinente –Convención Americana de Derechos Humanos Arts. 8.1 y 8.2 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Arts. 14.2 y 14.3–.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se exteriorizará brevemente la jurisprudencia constitucional relacionada con la solicitud (III), y finalmente se examinará el caso concreto planteado (IV).

III. Se ha indicado que el agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, a efecto de su procedencia, de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe efectivamente encontrarse afectada en las categorías relacionadas en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución, por las actuaciones u omisiones contra las cuales se queja, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación.

Por tanto, al solicitar la protección constitucional, la persona que se pretende favorecer debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad personal, integridad física, psíquica o moral, derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se reclama; así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas –improcedencia de 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–.

Además, este tribunal en reiterada jurisprudencia ha sostenido que, para admitir a trámite una pretensión, es necesario que cumpla con determinados presupuestos, entre ellos, señalar a la autoridad demandada, la expresión clara y precisa del agravio alegado, que este sea de trascendencia constitucional y no meras inconformidades con las decisiones judiciales (o de otra índole) cuestionadas. De lo contrario, es decir, la omisión de algunos de estos elementos indispensables que posibilitan la admisión del reclamo planteado, propician su rechazo al inicio del proceso constitucional –improcedencia del 17 de febrero de 2017, hábeas corpus 26-2017–.

IV. *1*. El señor *JRCC* reclama contra la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Tecla, por la omisión de unificar sus condenas.

Manifiesta que existen dos condenas en su contra, la primera, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Ana, que le impuso una pena de veintiséis años y ocho meses de prisión y que se encontraba cumpliendo al momento de promover este proceso; y, la segunda, fue ordenada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que le impuso una pena de trece años y cuatro meses de prisión y la cual cumplió el día 13 de febrero de 2013.

Sobre ello es de indicar que al haber cumplido la totalidad de una de sus condenas –la impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador–, el agravio alegado ante esta sala pierde vigencia pues su situación jurídica se encuentra consolidada y la omisión alegada (sobre la unificación de sus penas) ya no tenía ninguna incidencia en la condena que cumplía al momento de promover este proc eso –el 28 de septiembre de 2021–.

Ante ello, frente a la ausencia de una de las condiciones indispensables para efectuar el análisis constitucional solicitado –agravio efectivo en el derecho de libertad física derivado de la omisión cuestionada– concurre un impedimento para decidir el fondo del asunto planteado. De ahí que deberá ser rechazado este punto de su solicitud mediante la figura de la improcedencia, pues se advierte con ello un vicio insubsanable consistente en la falta de agravio efectivo.

2. El peticionario también reclama la omisión de la jueza demandada de convocarle a la práctica del cómputo de su primera condena, señalando por ello vulneraciones a sus derechos de defensa y libertad.

Sobre este aspecto debe indicarse que el art 44 de la Ley Penitenciaria (LP) estipula que, al efectuarse el cómputo, su resultado, debe ser notificado al condenado y a su defensor, quienes podrán solicitar al juez revisión del mismo, dentro de tres días de su notificación.

De ahí que, la sola omisión de cita para comparecer a la diligencia mencionada, no genera –por sí– una afectación constitucional; y es que, lo que expresa el peticionario no indica que haya existido imposibilidad para conocer el resultado de las aludidas diligencias o algún impedimento para reclamar, sino por el contrario manifiesta que conoce el resultado del cómputo aludido, constituyendo su queja una mera inconformidad.

En todo caso debe indicarse que si el peticionario, lo considera oportuno, puede acudir –con base en lo estipulado en el inciso final del referido artículo– ante el juez de vigilancia penitenciaria competente, a plantear su queja y solicitarle la rectificación, dado que ello es una atribución de dicho juez –y no de esta sede–.

Así pues, debido a los motivos indicados no es posible considerar dicho planteamiento por esta vía, pues lo que objeta carece de trascendencia constitucional, siendo un asunto de estricta legalidad y en consecuencia, deberá rechazarse tal aspecto de su solicitud mediante la figura de la improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido a su favor por el señor *JRCC*, debido a la existencia de vicios en la pretensión relativos a la falta de agravio y plantear asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y oportunamente archívese.

"""""—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

777-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinticinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional ha sido promovido por la licenciada Ana Vilma Ayala de Martínez, a favor del señor *ARSM*, procesado por el delito de homicidio agravado, contra actuaciones del Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. *1*. La solicitante argumenta que, en resolución del 31 de marzo de 1993, el señor *SM* fue sobreseído definitivamente en el proceso penal instruido en su contra por el homicidio agravado en contra de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez; sin embargo, afirma que debido a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz declarada por esta sala, la causa fue "reaperturada", mediante decisión del día 12 de marzo de 2017, en la cual se dejó sin efecto dicho sobreseimiento y se solicitó el nombramiento de un defensor público.

Al respecto, menciona que el Código Penal de 1974 no reunía las garantías de las constituciones vigentes en esa época, además que existió desigualdad puesto que únicamente se procesó al referido imputado y no a otras personas que aparecen mencionadas en la investigación de la Comisión de la Verdad.

Afirma que en un proceso de tal naturaleza se afectaron derechos del justiciable puesto que nunca le fue garantizado un profesional que ejerciera su defensa; además, señala que no se agotaron todas las posibilidades para poder citar o notificar al procesado sobre la imputación, lo cual era necesario para ejercer sus derechos de defensa y audiencia.

Agrega que los anticipos de prueba consistentes en un reconocimiento de fotografías y la reconstrucción de hechos, se realizaron con inobservancias al debido proceso ya que su autorización no fue debidamente motivada por la autoridad judicial y se efectuaron sin la presencia de un defensor. Alega que el proceso no debió reabrirse por encontrarse la acción penal prescrita, debido al sobreseimiento previamente emitido.

Por lo anterior, solicita hábeas corpus preventivo pues al incoarlo no se exige que la persona se encuentre efectivamente sufriendo una detención sino que basta que sea objeto de amenazas inminentes y contrarias a la Constitución.

2. Por medio de un segundo escrito, la peticionaria solicitó pronto despacho al hábeas corpus presentado.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero es procedente exteriorizar brevemente los fundamentos jurisprudenciales de la presente resolución (III) y luego examinar las quejas de acuerdo a lo expresado por la peticionaria (IV).

III. El hábeas corpus preventivo es un mecanismo idóneo para impedir una lesión a producirse en el derecho de libertad física de la persona y, en tales casos, tiene como presupuesto de procedencia la amenaza de eventuales

detenciones contrarias a la Constitución, a fin de evitar que se materialicen. Dicha amenaza no puede ser una mera especulación, sino que debe ser real, de inminente materialización y orientada hacia una restricción ilegal, es decir que esta debe estar a punto de concretarse –improcedencia del 15 de junio de 2011, hábeas corpus 52-2011–.

De conformidad a lo anterior, se han establecido requisitos esenciales para la configuración de este tipo de hábeas corpus: *i)* que haya un atentado decidido a la libertad personal y en próxima vía de ejecución, es decir, una orden de restricción ya emitida; *ii)* que la amenaza a la libertad sea cierta, no presuntiva y *iii)* que de existir una orden de detención, esta se haya producido en vulneración de preceptos constitucionales –improcedencia del 19 de enero de 2011, hábeas corpus 201-2010–.

Por el contrario, las peticiones que presenten deficiencias –entre otras– referidas a reclamos desvinculados con los derechos protegidos por medio del proceso de hábeas corpus, carecerán de las condiciones que permitan a esta sala ordenar el trámite respectivo, con base en la propuesta que se efectúa –improcedencia de 20 de septiembre de 2017, hábeas corpus 347-2017–.

IV. *1*. Según lo planteado por la solicitante, debido a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz declarada por esta sala, el juez demandado ordenó dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo –decretado el 31 de marzo de 1993– y abrir nuevamente el proceso penal mediante resolución del 12 de mayo de 2017 en el cual, considera, se vulneraron diversos derechos fundamentales del imputado puesto que se rigió bajo el Código Procesal Penal de 1973, cuyo contenido no guarda armonía con los principios constitucionales, además, alegó que la acción penal se encuentra prescrita.

En el presente caso la peticionaria pide expresamente hábeas corpus de tipo preventivo, el cual tiene por objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental a la libertad personal, cuando se presenta una amenaza inminente e ilegítima contra el citado derecho, de forma que la privación de libertad no se ha concretado, pero existe amenaza cierta de que ello ocurra.

En cuanto a los cuestionamientos expuestos, la solicitante no refiere la existencia de una orden de detención en vías de ejecución ni que se hayan emitido contrariando la Constitución, sino únicamente señala que el proceso penal seguido en contra del señor *SM* se reabrió, es decir, en su reclamo no logra trasladar una situación latente e inminente que afecte su derecho de libertad personal, por tanto no puede considerarse amenaza –cierta– al derecho de libertad física mediante el hábeas corpus de tipo preventivo.

En esos términos, la peticionaria relata cuestiones que suceden dentro del proceso penal que no corresponde objetarse a través de este proceso constitucional en su modalidad preventivo, y es que, esta sala ya dicho que la sola tramitación del proceso penal no constituye una amenaza cierta y real a la libertad física.

Consecuentemente, la petición planteada no traslada un asunto de trascendencia constitucional que pueda ser evaluado por esta sede, debiendo ser rechazada a través de su declaratoria de improcedencia.

2. Sin perjuicio de lo dicho, cabe aclarar que en la sentencia emitida por esta sala el 13 de julio de 2016, en el proceso de inconstitucionalidad 44-2013 Ac. sobre la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, se estableció que a los hechos prohibidos por el artículo 4 del Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, no puede aplicárseles el cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal, de la pena o de los procedimientos que corresponden o corresponderían a tales hechos, y que pudieran invocarse para impedir la investigación, enjuiciamiento y sanción o el cumplimiento de la pena, en los casos en que hubiere sido determinada.

En esos términos, los hechos que quedan excluidos de la amnistía son los atribuidos a ambas partes, que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario; es decir, los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad –entre ellos el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez–, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales, por los efectos de dicho pronunciamiento y por la gravedad de los mismos, no operaría la prescripción.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones ante expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado por la abogada Ana Vilma Ayala de Martínez, a favor del señor ARSM, por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—-H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

654-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador, a favor de: *1) BBMM, 2) JFAP, 3) LEIL, 4) CADP, 5) JRER, 6) JAWA, 7) JLRR, 8) GAMS, 9) HGRA, 10) ONAD.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios de San Salvador –sin indicar las fechas o los lugares concretos–, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura; según relata, tras realizar una "especie de inspección" en sus hogares y de solicitar su identificación, fueron corroborados sus datos vía radio para verificar si existía orden de captura, antecedente policial o perfil delincuencial, posteriormente se hizo constar en acta de captura "algún grado de participación en la estructura criminal", ignorando de donde se obtuvo dicha información, pues aseguran no pertenecer a estos grupos delincuenciales.

Expone que la fiscalía solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados, presentando como indicios; *i)* actas de captura y lectura de derechos, *ii)* perfil delincuencial o antecedente policial, *iii)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, iv) entrevista de los agentes captores, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas y por tanto, a su juicio, no procedía la detención provisional.

No obstante lo expuesto afirma que el juez relacionado, en una decisión sin fundamentación, decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun cuando no se podía establecer la participación de aquellos con "indicios sólidos", sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, incumpliendo con "la verificación de indicios mínimos" de motivación, ni valorar los mencionados "indicios probatorios", las circunstancias particulares de los hechos o la exposición de cada defensor –sin exponer a

qué se refiere específicamente con dichas afirmaciones–, limitándose la autoridad judicial a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde su detención no se les ha permitido el contacto con defensores y familiares, expresando que necesitan ser atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera sus derechos constitucionales.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. El solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación en el delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación de alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente se expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de los procesados que derivaron en la detención provisional de sus defendidos, ya que, a su parecer estos, son insuficientes.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, ya que el mismo peticionario ha señalado que a su parecer los elementos incorporados no permiten comprobar la existencia del delito ni la participación de los procesados en el mismo.

Al respecto, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares o defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, no se mencionan actuaciones y omisiones concretas que pudiesen derivar en vulneraciones a derechos constitucionales, por lo tanto, en los términos planteados, no es posible advertir argumentos que sustenten tales aseveraciones ni afectaciones a los derechos protegidos mediante el hábeas corpus.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) BBMM, 2) JFAP, 3) LEIL, 4) CADP, 5) JRER, 6) JAWA, 7) JLRR, 8) GAMS, 9) HGRA, 10) ONAD,* por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

726-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Heriberto Alejandro Villalta López, en contra del "Director de Centros Penales General" y a un juez especializado (no especifica cuál), "ambos de San Salvador", a favor de la señora CJPL.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que la señora PL fue detenida el día 22 de mayo de 2022, en el marco del régimen de excepción, cuando se encontraba con sus dos hijos menores en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de San Martín, por agentes policiales de esa jurisdicción, siendo "sacada violentamente". Solicita hábeas corpus a su favor y que sean intimadas las autoridades mencionadas, "por no tener conocimiento desde su captura cual es el tribunal que conoce del presente caso".

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. *1*. Esta sala en su jurisprudencia ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 6 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de las autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de los solicitantes; de manera que estos, al efectuar sus peticiones, deben señalar con precisión dichos aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente su petición y que permiten que la misma pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal se encontraría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido jurisprudencialmente como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mínimamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal –improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020– .

3. Esta sala ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes –improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018–.

IV. *1*. En el caso que nos ocupa, el peticionario pretende que esta sala indague sobre la actuación de agentes de la corporación policial que precedió a la captura de la señora *PL*. Afirma que esta fue capturada de manera violenta cuando se encontraba con sus dos hijos menores de edad; manifiesta que no sabe a la orden de cuál juez se encuentra y solicita que se intime al "Director de Centros Penales General" y a un juez especializado, "ambos de San Salvador". En ese sentido, no queda claro a qué autoridades en concreto se refiere, el hecho concreto por el que reclama y la vulneración a los derechos constitucionales de la referida señora que atribuye a las autoridades. Se limita a señalar la fecha de la captura sin explicar por qué la considera inconstitucional.

2. Al respecto, es necesario aclarar que, para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido. Y es que, si bien el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener, al menos, un acto generador de violaciones constitucionales con incidencia directa en el derecho de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer; datos que permitan la determinación de esta persona y de la autoridad a la que se atribuye.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en la petición no se consignan –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual no es atendible dicha solicitud propuesta en términos tan abstractos; de modo que la falta de estas características constituye un vicio en la petición que impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

3. En cuanto al reclamo referido a la actuación de agentes de la corporación policial –el cual no indica detalles concretos ni a qué autoridad se atribuye–, cabe destacar que, tomando en cuenta la jurisprudencia citada, esta sala no puede analizar situaciones como la propuesta, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido irregularidades durante la detención. Estas deben ser evaluadas por las autoridades judiciales que conocen en materia penal o, en su caso, por las autoridades (Fiscalía, si se trata de ilícitos o, autoridades policiales, si se trata de faltas administrativas), sin que pueda pretenderse que esta sala sea la que analice tal circunstancia o determine su existencia, pues ello corresponde a otras instancias, a través de los mecanismos que la ley confiere, por tanto, lo alegado no revela un tema de posible vulneración constitucional, debiendo rechazarse esta petición por improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que

mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *CJPL* al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA —PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

108-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de habeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente con sede en Santa Ana, por el abogado Raúl Antonio Cortez Ramos, a favor del señor *KNLA*, procesado por los delitos de limitación ilegal a la libertad de circulación y amenazas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario afirma que, según la resolución emitida el 8 de diciembre de 2022, por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente con sede en Santa Ana, el señor *KNLA* fue detenido por orden administrativa el 26 de noviembre de 2020, por los delitos citados, y en audiencia inicial, el I de diciembre de 2020, se le decretó detención provisional.

Con relación a lo expuesto, afirma que al 26 de noviembre de 2022 el imputado había cumplido veinticuatro meses en dicha medida cautelar, plazo que fue prorrogado por doce meses más por el tribunal de segunda instancia hasta el 8 de diciembre de 2022, habiendo transcurrido desde el vencimiento de la medida hasta su ampliación, doce días sin que existiera resolución que legitimara la restricción de libertad del señor *LA*, es por ello que considera que la referida ampliación es ilegal, pues la resolución es extemporánea.

Aclara que la sentencia no se encuentra firme, pues ha recurrido en casación, encontrándose actualmente el proceso en la Sala de lo Penal. Adjunta a su escrito copia de documentos de identificación personal, de abogado y tributaria.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se hará referencia a la jurisprudencia aplicable a la petición planteada (III) y luego se abordará el caso concreto (IV).

III. Se ha señalado que el posible agravio es uno de los elementos integradores de la petición de habeas corpus, a efecto de su procedencia, de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe efectivamente encontrarse afectada en las categorías relacionadas en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución, por las actuaciones u omisiones contra las cuales se queja, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación.

Por tanto, al solicitar la protección constitucional, la persona que se pretende favorecer debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad personal, integridad física, psíquica o moral, *derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se reclama;* así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas —improcedencia del 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017—.

IV. El peticionario reclama que el señor *KNLA* cumple una detención provisional ilegal por haberse prorrogado su plazo máximo original doce días después de haber vencido.

En ese sentido, si bien es cierto, se objeta el exceso en el límite máximo de la prisión preventiva sin que hubiera ampliación, también asevera que a la fecha que fue promovido este proceso constitucional —11 de enero de 2023— la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente con sede en Santa Ana ya había ordenado la prórroga de dicha privación de libertad por resolución del 8 de diciembre de 2022.

En atención a dichos datos se tiene que, en el momento de instar la actuación ante esta sala, el favorecido no se encontraba cumpliendo la detención ilegal contra la cual reclama el pretensor, sino la extensión de la medida cautelar ordenada por el tribunal demandado. Con ello se comprueba la falta de actualidad en el agravio supuestamente producido por el comportamiento cuestionado y, consecuentemente, debe rechazarse el trámite de este proceso mediante una declaratoria de improcedencia.

Sobre ello cabe insistir en que el actor plantea una aparente vulneración constitucional que, según sus propias aseveraciones, ya no producía sus efectos en la esfera jurídica del favorecido al iniciar este proceso constitucional, pues si bien la detención provisional se excedió por doce días —según su relato—, al presentar la solicitud de hábeas corpus que nos ocupa el imputado ya no se encontraba en esa situación, sino en cumplimiento de una prórroga de dicha restricción que aún no había vencido a esa fecha. Es cierto que los tribunales competentes deben de decretar la prórroga mencionada de manera oportuna, pero una pretensión planteada cuando el agravio ha sido superado, lo convierte en un perjuicio que ha perdido su

vigencia y que, en tales condiciones, no puede ser examinado. De cualquier manera, el plazo de la referida ampliación debe contarse desde que vencieron los veinticuatro meses de la aludida privación.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido por el abogado Raúl Antonio Cortez Ramos, a favor del señor *KNLA*, por falta de actualidad en el agravio reclamado.

2. *Notifíquese*.

3.Oportunamente, *archívese*.

"""—A. L.J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

167-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Por recibido a través del correo institucional de esta sala el oficio 047/JDCO/2022, de fecha 15 de marzo de 2022, suscrito por el director del Complejo Penitenciario "La Esperanza", por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovido en contra de un juez especializado de sentencia de San Salvador –sin especificar cuál–, a su favor por el señor *JRTP*, condenado por el delito de hurto agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que la autoridad demandada en el proceso con referencia 40-C-2015-4, lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión en total, por tres delitos de hurto agravado, vulnerando –a su criterio– el principio de legalidad, presunción de inocencia y derecho de defensa.

Sostiene que la sentencia emitida "descansa básicamente en el testimonio de clave "Alex" –por lo que transcribe profusamente extractos de los interrogatorios a los que fue sometido este durante la vista pública y otros párrafos de la sentencia–, quien presuntamente era su acompañante en los hechos delictivos, circunstancia que no fue corroborada con otros medios de prueba, siendo que este fue errático en establecer los tiempos en que se dieron las acciones ilícitas, además estableció diferencias abismales entre las acciones por las que lo acusaban y las que se probaron.

Reclama que el mismo juez reconoció que existía poca concordancia entre lo declarado por el testigo con las pruebas periféricas, sin embargo, procedió a otorgarle credibilidad "con argumentos simplistas y reduccionistas" y condenarlo sin pruebas legalmente incorporadas, con base a ello –asegura– no se generó certeza de su culpabilidad.

Sostiene que sobre los hechos interpuso recursos, pero las autoridades correspondientes no se pronunciaron conforme a los mismos, siendo por ello que esta sala puede conocer su petición, no obstante, haber pasado en autoridad de cosa juzgada, en consecuencia, solicita se suspenda provisionalmente el acto reclamado.

II. Es preciso indicar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la remisión de peticiones por correo electrónico (III), luego a la jurisprudencia relacionada con el caso (IV) y luego se analizará el supuesto planteado por el peticionario (V).

III. La presente solicitud de hábeas corpus fue enviada a través de correo electrónico; al respecto, esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio –auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020–.

IV. Este tribunal ha establecido reiteradamente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

En igual sentido se ha establecido que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

De ahí que, si una persona se considera agraviada con el resultado de la valoración de los hechos y de las probanzas en lo atinente a la determinación del ilícito y la responsabilidad penal, el ordenamiento jurídico secundario contempla los mecanismos pertinentes a fin de controvertir el perjuicio ocasionado. –improcedencia del 27 de octubre de 2021, hábeas corpus 21-2021–.

V. *1*. El peticionario, en síntesis, reclama en contra de la pena de prisión impuesta en su sentencia condenatoria, en razón de que sostiene que el juzgador no debió otorgarle credibilidad a lo declarado por el testigo denominado con clave "Alex", pues a su criterio hubo inconsistencias, sin embargo, aduce que su condena "descansa básicamente" en ese testimonio.

Así, el peticionario pretende controvertir en esta sede lo dicho por el aludido testigo, transcribiendo fragmentos de la supuesta declaración, a efecto de que esta sala verifique tal situación, lo cual indefectiblemente conllevaría a la revisión de la valoración hecha por el juzgador respecto de tal elemento, para lo cual este tribunal se encuentra inhibido.

Con respecto a ello es de aclarar que lo propuesto se refiere a cuestiones que deben discutirse en el proceso penal, ante los jueces competentes en esa materia, quienes son los únicos autorizados para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal, sin que pueda pretenderse que esta sala –con competencia constitucional– conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el hábeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Y es que, el peticionario no evidencia algún defecto de motivación de la sentencia que refleje arbitrariedad o la incorporación de prueba ilícita y que, por tanto, pudiera vulnerar sus derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con el valor positivo que se otorgó a la prueba testimonial para determinar su participación en los delitos atribuidos, asunto que no corresponde estudiar a este tribunal.

Por tanto, son los jueces penales, y no esta sala, quienes deben decidir los aspectos relacionados con la imputación penal, tales como determinar si la prueba se refiere directa o indirectamente a ella o dilucidar la existencia de contradicciones entre elementos de convicción.

Se advierte, así, un impedimento para conocer sobre lo argüido por tratarse de cuestiones de estricta legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente.

2. Si bien el peticionario hace alusión a las excepciones por las que esta sala puede conocer de sentencias firmes, sosteniendo que en su caso interpuso recursos, pero las autoridades "no se pronunciaron conforme al mismo", se hace necesario acotar que dichas excepciones son requeridas cuando se alegan afectaciones constitucionales y no asuntos de mera legalidad como es en su caso.

3. Finalmente, con respecto a la petición referida a la suspensión del acto reclamado, debe aclararse que esta sala en hábeas corpus no tiene como medida cautelar la suspensión de la pena de prisión –acto restrictivo reclamado, en el presente caso–, aunado a ello la petición del señor TP

al ser declarada improcedente por plantear cuestiones sin trascendencia constitucional, en consecuencia, no procede la consideración de alguna otra medida cautelar, por lo cual deberá denegarse su petición.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus planteada a su favor por el señor *JRTP*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Declárase* no ha lugar su petición de la suspensión de la pena de prisión.

3. *Notifíquese*.

4. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

219-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con diez minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez Especializado de Sentencia "A" de Santa Ana, a su favor por el señor *DCPM*, condenado por los delitos de homicidio agravado y robo agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario señala que, en el proceso penal con referencia 87-01-2014, se celebró el juicio en fecha 9 de septiembre de 2014, en el cual el juez de sentencia relacionado lo condenó a doce años de prisión por el delito de robo agravado y fue absuelto por el de homicidio agravado; sin embargo, la fiscalía apeló esa decisión por lo que la Cámara Especializada de lo Penal, declaró la nulidad de la sentencia y ordenó una nueva vista pública, la cual se llevó a cabo el día 25 de abril de 2016, declarándolo penalmente responsable por ambos delitos referidos, siendo condenado a cuarenta y un años de prisión.

Al respecto, menciona que se ha vulnerado la prohibición de doble juzgamiento, puesto que se le condenó a once años de prisión por el delito de robo agravado, por el cual ya había sido condenado previamente a doce años en la primera sentencia, de manera que no podía volver a ser procesado y condenado por ese mismo ilícito.

Agrega que en el primera vista pública antes señalada, fue absuelto por el delito de homicidio agravado en razón de que pudo comprobar el lugar donde se encontraba al momento de los hechos y porque el testigo clave "Franco" no fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia; no obstante, en el nuevo juicio el citado juez de sentencia argumentó que la prueba de descargo no desacreditaba su participación en el delito lo cual, considera, es una incorrecta valoración de los elementos probatorios.

Alega que el referido testigo es el único elemento de convicción con el que fue condenado y que en un juicio paralelo relacionado a otro imputado pero con la misma víctima, dicho juez de sentencia concluyó que este sujeto era el autor directo del hecho y fue sentenciado a veinte años de prisión, y en su caso lo condenó como coautor; sin embargo, el juez mencionado violentó las reglas de la sana crítica puesto que "las constataciones o las conclusiones deducidas por el juez, dejan abiertas aún otras posibilidades que no consideró en su fundamento de la sentencia o no lo indujeron a demostrar y a fundamentar con más exactitud sus conclusiones" (sic).

Menciona que ya fue procesado en las causas judiciales con referencia 159-acum 189-A-2014 en el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, por los mismos delitos que en el expediente 159/189-A-2014 Acum-43-A-2017, llevado por el Juzgado Especializado de Sentencia "C" de San Salvador, en las cuales fue absuelto puesto que las acusaciones se sustentaron en el testigo clave "Franco" cuya declaración resultó ser contradictoria e incongruente.

II. *1*. Mediante resolución del 3 de octubre de 2022, se previno al peticionario expresara con precisión los siguientes aspectos:

i) por qué sostiene que existe doble juzgamiento en el proceso penal con referencia 87-01-2014, debiendo señalar cómo se configuran los requisitos de identidad de persona, objeto y causa de persecución y especialmente cuáles son los hechos, con sus detalles, fechas de comisión, que se atribuyen en uno y otro proceso;

ii) si también reclama un doble juzgamiento en los procesos penales con referencias 87-01-2014, 159-Acum 189-A-2014 y 159/189-A-2014 Acum-43-A-2017, respecto al expediente 87-01-2014, en cuyo caso debe señalar de forma precisa cómo se configuran los requisitos antes mencionados;

iii) aclarar a qué se refiere cuando expresa que el juez demandado violentó las reglas de la sana crítica puesto que "las constataciones o las conclusiones deducidas dejan abiertas aún otras posibilidades que no consideró en su fundamento de la sentencia o no lo indujeron a demostrar y a fundamentar con más exactitud sus conclusiones";

iv) por qué razones considera que se le condenó únicamente con la declaración del testigo clave "Franco", debiendo aclarar si no se valoraron más elementos probatorios en el juicio;

v) si ha expuesto los reclamos que expone ante los jueces encargados de su procesamiento, es decir, tanto en primera instancia como en apelación y, si es el caso, casación, debiendo expresar cuáles, en qué fechas y las respuestas obtenidas;

vi) por qué afirma que en el transcurso del proceso no fue posible la invocación del derecho constitucional que considera vulnerado; y

vii) en qué estado se encuentran los procesos penales que relaciona y qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos.

2. La aludida decisión le fue notificada el día 22 de noviembre de 2022 y, dentro del término establecido para ello, se presentó escrito en el cual se pronuncia sobre los cuestionamientos realizados por esta sede, refiriendo, según el mismo orden en que fue prevenido, que:

i) se trata de un homicidio agravado cometido el 1 de julio de 2012 en la Hachadura, departamento de Ahuachapán, en perjuicio de ********** y un robo agravado cometido entre el 12 al 24 de enero de 2012, en la sucursal de Almacenes Tropigas del Congo, Santa Ana, los cuales son atribuidos en los dos procesos;

ii) respecto de la referencia 159 Acum-189-A-2014 del Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, fue condenado el día 6 de marzo de 2015 a diez años de prisión por el delito de robo agravado en perjuicio de TCA de CV y por ese mismo delito había sido absuelto en el proceso con referencia 159/189-A-2014 Acum 43-A-2017, por el Especializado de Sentencia "C" de San Salvador, en el cual se determinó que el testimonio de clave "Franco" resultó "vago, impreciso, ambiguo, contradictorio e incongruente, además de no ser corroborado con otros elementos de prueba, por lo que se consideró un testigo mendaz";

iii) el juzgador, en la fundamentación de la sentencia, manifestó que "ello no descalifica o desacredita el hecho de que participara en los ilícitos que se le atribuyen (...) no pudiendo asegurar que el acusado los haya cumplido, por lo que dicha prueba por sí sola es insuficiente para desvirtuar o sacar de la escena del delito al referido acusado" y sostiene que la falta de

valoración de la prueba de descargo vulnera el principio de razón suficiente y de no contradicción, pues no se consideró la prueba de descargo "como lo era", sino de manera inversa y sin ser sometida a contradicción;

iv) no existe ningún elemento de prueba que confirme lo que el testigo clave "Franco" ha declarado tanto en su proceso como en el de otro imputado, enfatizando que las declaraciones que hace en las vistas públicas de los procesos, son contradictorias y la fiscalía no pudo presentar otro tipo de prueba que reforzara lo dicho por el testigo;

v) los reclamos expuestos los manifestó en los recursos de apelación y casación, pero fueron declarados inadmisibles por incumplimiento de requisitos formales, desconociendo fechas de interposición y de denegatoria;

vi) para llegar a comprender acerca de las vulneraciones a derechos fundamentales ha realizado un gran esfuerzo, dado que no es letrado en leyes y ahora que comprende es que decide invocar "la violación a [sus] derechos constitucionales", y;

vii) todos los procesos penales relacionados se encuentran en etapa de ejecución de la pena, de la cual ha cumplido nueve años y siete meses, al haber sido condenado con franca violación a sus derechos fundamentales.

III. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con lo reclamado (IV); y finalmente se analizarán los aspectos concretos planteados (V).

IV. *1*. La prohibición de doble juzgamiento goza de reconocimiento en el sistema jurídico salvadoreño a partir del artículo 11 inciso 1º de la Constitución. La jurisprudencia de esta Sala, por su parte, ha establecido que dicho principio consiste en la imposibilidad de que el Estado pueda procesar, dos veces o más, a una persona por el mismo hecho, ya sea en forma simultánea o sucesiva –resolución de 21 de enero de 2005, hábeas corpus 136-2004–.

Así, el análisis sobre el doble enjuiciamiento al que alude la Constitución debe ser realizado en relación con la persecución penal, de manera que lo esencial es la existencia de un acto de autoridad mediante el cual se señale a una misma persona como autora o partícipe de una infracción penal conocida previa o simultáneamente. Por tanto, la doble persecución ocurre cuando se inicia un nuevo procesamiento habiendo otro ya concluido o en trámite; es decir, cuando se desenvuelve una persecución penal idéntica a la que se quiere intentar.

En esos términos, el aludido principio tiene aplicación con independencia del estado del primer procesamiento, siendo suficiente la existencia de dos imputaciones fundamentadas en los mismos elementos –ver resolución de 22 de junio de 2009, hábeas corpus 98-2008–. Y es que el principio en

comento se traduce en un derecho a no ser juzgado dos veces por una misma causa; a la prohibición de pronunciar más de una decisión definitiva respecto de una pretensión; decisión que, por lógica, ataca el contenido esencial de la mencionada categoría constitucional.

De tal forma, puede sostenerse que la finalidad de esta figura es resguardar a las personas de las consecuencias que provoca una nueva persecución penal, cuando otro sobre el mismo objeto está en trámite o ha sido agotado.

2. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

Con base en ello, los pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial y responsabilidad penal, entre otros, corresponden en exclusiva a la autoridad judicial que conoce de la causa penal y su determinación constituye un asunto de mera legalidad que, por su naturaleza, está excluido del conocimiento de esta sala.

V. De lo expresado por el señor *DCPM*, se advierte que el reclamo está dirigido en contra de la condena que cumple por los delitos de robo agravado y homicidio agravado impuesta por el Juez Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, la cual considera atentatoria a sus derechos constitucionales, en virtud de: *i)* vulnerarse la garantía de prohibición de doble juzgamiento, al haber sido condenado a doce años de prisión por el delito de robo agravado y absuelto por el de homicidio agravado por el mismo hecho por el Juez Especializado de Sentencia "C" de San Salvador, en forma previa y *ii)* por haber sido condenado a cuarenta y un años de prisión, por los delitos referidos, con fundamento en el valor que el Juez Especializado de Sentencia "A" de San Salvador dio a la declaración del testigo "Franco" cuando este había sido rechazado en el primer juicio, sin que en el segundo fuera corroborado con otros elementos de prueba y de la falta de valoración de la prueba de descargo "como lo era".

1. A partir de la información proporcionada por el solicitante se colige la existencia de un proceso penal con referencia judicial 159/189-A-2014 Acum-43-A-2017, seguido ante el Juez Especializado de Sentencia "C" de San Salvador, en el cual se le condenó a la pena de doce años de prisión por el delito de robo agravado y fue absuelto por el delito de homicidio agravado, fallo del cual la representación fiscal interpuso recurso de apelación, conocido por la Cámara Especializada de lo Penal, la que declaró la nulidad de dicha sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio, que fue clasificado con referencia judicial 159-acum 189-A-2014, ante en el Juez Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, quien al conocer emitió sentencia declarando penalmente responsable por ambos delitos al señor DCPM, a la pena de cuarenta y un años de prisión, encontrándose en etapa de cumplimiento de sentencia.

En ese sentido, a partir de las propias aseveraciones del solicitante no es posible determinar la concurrencia de los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para conocer de una vulneración constitucional a la prohibición de doble juzgamiento, pues los hechos acusados en un mismo proceso penal fueron conocidos primero por el Juez Especializado de Sentencia "C" de San Salvador, cuya decisión fue impugnada y al haberse ordenado un nuevo juicio conoció en reenvío el Juez Especializado de Sentencia "A" de San Salvador.

Ciertamente, la protección que otorga la prohibición de doble juzgamiento implica la imposibilidad que una misma conducta delictiva generada a partir de un mismo hecho pueda ser conocida a través de más de un proceso penal. Sin embargo, de la lectura de la pretensión de este proceso constitucional se evidencia que lo expuesto se aleja del ámbito de protección de esta garantía, pues lo reclamado parte de la errónea percepción del peticionario sobre lo acontecido dentro de un mismo proceso penal, aduciendo que se trata de dos juicios que devienen de dos procesos penales distintos, pero lo que ha ocurrido es que se trata de una misma causa penal pero que, en razón del trámite legal de un recurso, han conocido dos autoridades diferentes; lo anterior, acontece, cuando la sentencia dictada inicialmente fue anulada –ya sea total o parciamente– por la cámara que conoció en apelación.

En esos términos lo planteado no guarda relación con una posible vulneración a la prohibición de doble juzgamiento de acuerdo a la jurisprudencia relacionada y, por tanto, deberá declararse improcedente este punto de la pretensión.

2. Con relación al reclamo por el valor otorgado a la declaración del testigo "Franco" y de la falta de valoración a su favor de la prueba de des-

cargo, se advierte que su petición está orientada a que esta sala revise los resultados de la ponderación probatoria hecha por la autoridad judicial demandada en la sentencia condenatoria dictada en su contra, controvirtiendo ante esta sede los elementos probatorios, de los cuales alega contradicciones e insuficiencias.

Debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre su suficiencia en cuanto a la imputación, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Y es que el pretensor no evidencia algún defecto de motivación de la sentencia que refleje arbitrariedad u otra circunstancia que pudiera vulnerar los derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con el valor probatorio que el juez le otorgó en el segundo juicio a la declaración del testigo "Franco" y sobre el rechazo que supuso la prueba de descargo –al ser "insuficiente para desvirtuar o sacar de la escena del delito al referido acusado"–, siendo este un asunto que no corresponde estudiar a este tribunal, así como tampoco puede analizar los elementos de prueba para hacer conclusiones sobre la certeza de los hechos acusados. La evaluación de la prueba, su valor y confiabilidad, así como las conclusiones que se extraen de ella en cuanto al establecimiento de la responsabilidad criminal son asuntos de discusión y determinación en el enjuiciamiento penal, en todas sus fases e instancias y no en esta sede constitucional.

Así, al no aportarse argumentos que describan vulneración de normas constitucionales con afectación al derecho de libertad personal del señor *PM*, sino referir asuntos de estricta legalidad, lo cual evidencia únicamente su inconformidad con la sentencia condenatoria dictada en su contra, deberá emitirse una declaratoria de improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor DCPM, en virtud de plantearse aspectos carentes de trascendencia constitucional, siendo de estricta legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

33-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Oscar Ernesto Argueta Alvarenga, contra el Juez de Instrucción de Santa Ana, a favor del señor *MGP o MDGP o GP.*

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario refiere que esta sala conoció en revisión del proceso de hábeas corpus iniciado en la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, el cual fue marcado bajo la referencia 31-2020R y en el que se emitió sentencia el 15 de diciembre de 2021, por medio de la cual se revocó la resolución pronunciada por los magistrados de esa cámara únicamente en lo relativo a los efectos y se ordenó a la autoridad que tuviera a su cargo el proceso del favorecido procediera a ponerlo en libertad, si este no estaba sometido a otra restricción de libertad o autoridad distinta por otro delito o que su sentencia haya adquirido firmeza.

Alega que, no obstante, la sentencia en comento "el perjuicio constitucional persiste", pues la sentencia emitida en contra de su representado dictada por el Juez Especializado de Sentencia de Santa Anta el 30 de septiembre de 2019 y confirmada por la Sala de lo Penal, está fundada en la vulneración de los derechos de defensa y audiencia, en consecuencia, no es legítima y tampoco válida, por lo que así debe declararse.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional relacionada al tema en discusión (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo con lo expresado por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha considerado que el agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, a efecto de su procedencia; de forma que, para brindar la protección constitucional, la persona que se pretende favorecer debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad física, dignidad o integridad física, psíquica o moral, derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se reclama. Así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales derechos.

Por ende, no es posible conocer respecto a un acto que ya no sigue surtiendo efectos; esto produce un vicio pues el agravio ha desaparecido, volviéndose innecesaria la continuación del proceso constitucional –improcedencia de 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–.

IV. En este caso el solicitante reclama que, no obstante haberse emitido una sentencia en el proceso constitucional de hábeas corpus que esta sala conoció en revisión, a su criterio, el perjuicio constitucional persiste –vulneración de los derechos de defensa y audiencia–, por ende, la sentencia emitida por el Juez Especializado de Sentencia de Santa Anta y confirmada por la Sala de lo Penal, carece de legitimidad y validez.

Al respecto, debe señalarse que de acuerdo con el registro de expedientes que lleva esta sala, tal como lo refiere el solicitante, se promovió recurso de revisión marcado en esta sede con la referencia 31-2020R, interpuesto contra la resolución emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, en el proceso constitucional de hábeas corpus presentado a favor del señor *MGP o MDGP o GP*, contra actuaciones del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, en el que se reclamaba –en revisión– únicamente de los efectos de la sentencia, por haber omitido la cámara ordenar la libertad del favorecido, pese al haber reconocido la vulneración constitucional.

Consta en dicho expediente que esta sala el 15 de diciembre de 2021, decidió sobre el aludido recurso y revocó la sentencia venida en revisión solo en el punto alegado, asimismo ordenó a la autoridad judicial que tuviera a cargo el proceso penal procediera a su inmediata libertad siempre que este no se encontrara sometido a otra restricción de libertad o a la orden de una autoridad distinta por otro delito o que su sentencia no hubiera adquirido firmeza.

Con posterioridad, también en ese hábeas corpus, se emitió resolución el 4 de julio de 2023, mediante la cual se tuvo por informada la situación jurídica del favorecido, luego de que el secretario de la Sala de lo Penal de esta Corte señaló que el 26 de mayo de 2021 fue declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto y, por su parte, el Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana comunicó –con relación a lo decidido por esta sala en ese proceso– que no fue posible poner en libertad al favorecido en razón de que la situación jurídica del señor *MGP o MDP o GP* se encontraba definida por haberse declarado firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria, mediante auto del 10 de noviembre de 2021 y que actualmente se encuentra a la orden del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena cumpliendo la pena impuesta.

Con base en lo anterior es posible afirmar que, cuando se promovió el presente hábeas corpus –26 de enero de 2022– reclamando la ilegalidad de la detención provisional en la que se encontraba el señor *MGP o MDP o GP*, la sentencia condenatoria emitida en su contra ya estaba firme desde el año 2021. Así pues, el acto restrictivo de libertad del cual se quejaba el peticionario ya no estaba surtiendo efectos, pues la privación de libertad del aludido señor depende de la pena de prisión impuesta en la sentencia

ejecutoriada; y, por tanto, el cuestionamiento expuesto presenta un vicio por la falta de actualidad en el agravio alegado, lo que impide conocer y decidir sobre su solicitud por medio de sentencia de fondo, debiendo rechazarse en este estado por medio de una improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *MGP MDP o GP*, por falta de agravio constitucional efectivo en su derecho de libertad física derivado de la detención provisional cuestionada.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

465-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio 2210, de fecha 21 de diciembre de 2021, procedente de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovida por el abogado Douglas Ernesto Portillo Lemus, contra actuaciones de los magistrados de la Sala de lo Penal, a favor del señor *BJMD*, procesado por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. De acuerdo a la resolución del 17 de diciembre de 2021 pronunciada por la cámara remitente, el traslado de la solicitud de este proceso constitucional a esta sala se fundamenta en la declaratoria de incompetencia territorial para conocerla, pues se demanda a una autoridad judicial cuya sede está en San Salvador.

Tal decisión está sustentada en la sentencia del 18 de septiembre de 2013, hábeas corpus 260-2013R, en la que se determinó que, para definir la competencia territorial de las cámaras que no residen en la capital debe emplearse el art. 33 del Código Procesal Civil y Mercantil que señala que "será competente por razón del territorio, el tribunal del domicilio del demandado".

El criterio citado es de aplicación general y permite una distribución de la competencia constitucional para conocer del proceso de hábeas corpus, entre las sedes judiciales que la misma Ley Suprema ha designado para tal efecto en el artículo 247.

Acorde con lo anterior, al haberse planteado la petición constitucional en contra de los magistrados de Sala de lo Penal, con sede en San Salvador, efectivamente dicho tribunal de segunda instancia carece de competencia territorial para conocer la solicitud de hábeas corpus relacionada y, consecuentemente, es a esta sede a la que le corresponde ejercer su función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Judicial.

II. El solicitante alega que su representado fue capturado por agentes policiales en horas de la madrugada del 13 de diciembre de 2018, y durante la tramitación del proceso penal en la etapa de recursos, la cámara respectiva amplió por doce meses más el plazo de la detención provisional (anexa copia de la resolución); por lo que, a la fecha de presentación del hábeas corpus, hay exceso de treinta y seis meses en el plazo de la prisión preventiva sin que la sentencia se encuentre firme violando su derecho de libertad física.

III. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará brevemente la jurisprudencia constitucional concerniente al reclamo planteado (IV) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a lo expresado por el peticionario (V).

IV. *1*. En reiterada jurisprudencia, esta sala ha sostenido que la detención provisional es la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico y debe atender a sus características de provisionalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, entre otras. Su plazo máximo, señalado por el legislador en el art. 8 del CPP, tiene relevancia constitucional a partir de la reserva de ley dispuesta en el art. 13 Cn. y en relación con los derechos de libertad personal y presunción de inocencia –arts. 2 y 11 Cn.–.

2. Dado que existe reserva de ley para privaciones de libertad, la suspensión de los plazos de la prisión preventiva exige que también se realice a través de una norma de esa naturaleza y que sea excepcional, proporcional y justificada.

3. El Salvador ha enfrentado una pandemia por COVID-19 en cuyo contexto el Órgano Legislativo emitió decisiones que incidieron en los derechos de las personas privadas de libertad y, en concreto, de quienes cumplen detención provisional.

Así, se elaboraron plurales decretos legislativos que suspendieron tanto los plazos en materia penal como los de detención provisional, con vigencia desde el 20 de marzo hasta el 29 de mayo y del 1 al de 10 de junio de 2020 –decretos legislativos 599, 622, 631, 634, 644 y 649 respectivamente–.

Esa suspensión ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional, considerando que no lesiona el derecho de libertad personal, por tratarse de una decisión adoptada por el Órgano Legislativo y ser una medida limitada temporalmente en el contexto de un escenario extraordinario: una pandemia.

Lo anterior se ha desarrollado extensamente en las improcedencias 319-2020 y 409-2020, ambas del 3 de marzo de 2021 y 502-2020 del 17 de mayo de 2021.

V. En este caso el peticionario reclama el vencimiento del plazo máximo que regula la ley para el cumplimiento de la detención provisional por delitos graves –veinticuatro meses y su respectiva prórroga para la interposición de recursos–, sin que al momento de promover hábeas corpus –14 de diciembre de 2021– se haya hecho cesar la prisión preventiva del señor *BJMD*, quien fue capturado el 13 de diciembre de 2018 y a quien se le decretó la detención provisional en audiencia inicial el 18 de diciembre de 2018, ello según la resolución anexa al escrito de hábeas corpus.

Ahora bien, la suspensión de los plazos procesales judiciales y el de la detención provisional que se ordenó fue realizada por medio de decretos legislativos, es decir mediante una ley en sentido formal, en los que se indicó que durante un cierto lapso el plazo de la detención provisional estaba interrumpido en su contabilización, cumpliendo así con la reserva estipulada en el art. 13 Cn.

En el caso concreto, el D.L. 599 que contiene la reforma al art. 9 del D.L. 593 –que señalaba la suspensión de plazos de algunas materias y que con ello se incluyó la penal– entró en vigor desde su publicación el 20 de marzo de 2020. En ese sentido, hubo una interrupción de la contabilización desde esa fecha hasta el 24 de mayo de 2020 que se extendió hasta el día 29 de mayo y, posteriormente, el 1 de junio de 2020 se emitió el decreto 649, que culminó el 10 de ese mismo mes y año.

En ese sentido, según consta en este proceso, aquel se habría encontrado en detención provisional desde el 18 de diciembre de 2018 y desde esa fecha hasta el 19 de marzo de 2020, habían transcurrido quince meses con dos días; luego se suspendió la contabilización del plazo por dos meses con veinte días –hasta el 10 de junio–, según lo que ya se ha indicado,

habiendo sido prorrogado el plazo de la detención provisional por doce meses más, según resolución emitida el 11 de enero de 2021, por un juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana.

Ha de agregarse entonces que hasta la presentación del escrito de hábeas corpus ante la cámara remitente –14 de diciembre de 2021– habían transcurrido treinta y tres meses con seis días, por lo que el límite legal de treinta y seis meses que establece el artículo 8 inciso tercero del Código Procesal Penal no había sido superado.

De manera que lo alegado por el peticionario parte de su errónea percepción sobre el cómputo del plazo legal de la detención sin la consideración del lapso de suspensión dispuesto por los decretos aludidos. De ahí que, lo propuesto no revela una circunstancia con trascendencia constitucional capaz de vulnerar los derechos tutelados mediante este proceso, debiendo declararse improcedente el hábeas corpus solicitado.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido por el abogado Douglas Ernesto Portillo Lemus a favor del señor *BJMD*, por reclamar un asunto sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese* y *archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS–SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

1121-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Miguel, por el señor JSRM, a favor de la señora *RMRG*, procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario señala que es padre de la señora RG, quien fue capturada el 7 de junio de 2022 y se encuentra recluida, de forma injusta, en el Centro Penitenciario de Ilopango; refiriendo que el 20 de junio de 2022 se celebró la audiencia especial de imposición de medidas, en el proceso penal que se sigue en su contra, clasificado con la referencia 82-01-22-2(C2).

Afirma que al momento de la captura su hija no se encontraba esperando el auto bus para ir a su trabajo y no estaba reunida con nadie, lo que se "puede investigar con los vecinos del lugar y otras personas< ", además nunca ha estado detenida, asimismo indica que es una buena hija que lo cuida por ser una persona mayor.

Expresa que se han violentado derechos fundamentales de la detenida, privándola de su "libertad ambulatoria" ya que –a su criterio– no pertenece a ningún grupo delictivo y fue acusada por "personas que solo quieren hacerle daño" "porque es un mujer de bien".

Considera que "está comprobado que en ningún momento" ella "va huir de las medidas", siendo que "las cumple mes a mes" presentándose a cualquier llamado que se le haga, como buena ciudadana.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido reiteradamente que la imposición, sustitución o cese de las medidas cautelares previstas en el proceso penal –entre ellas, la detención provisional–, es una facultad conferida a las autoridades competentes en esa materia y, por tanto son estas quienes, dentro de los límites y bajo los supuestos configurados legal y constitucionalmente, han de decidir todo lo que al respecto concierna.

El hábeas corpus, por su naturaleza constitucional, no es una instancia más dentro del proceso penal, de forma que excede las atribuciones de este tribunal revisar la actividad de valoración que lleve a un juez a tener por establecida la concurrencia de los requisitos de las medidas cautelares en el proceso penal (improcedencia del 28 de agosto de 2019, hábeas corpus 140-2019).

Por otra parte, ha establecido que no le compete valorar la idoneidad de la documentación con la que se pretende acreditar los arraigos de los imputados y determinar si procede la adopción de medidas cautelares distintas a la detención provisional, pues este tipo de peticiones deben ser dilucidadas ante las autoridades judiciales penales correspondientes para efectuar la revisión de las medidas precautorias impuestas durante el desarrollo de un proceso penal –improcedencia del 6 de octubre de 2017, hábeas corpus 346-2017–.

IV. El solicitante –en síntesis– reclama de la privación de libertad en que se encuentra la procesada, pretendiendo que esta sede revise la decisión

emitida por la autoridad judicial en audiencia especial de revisión de medidas, alegando que su hija no se encontraba reunida con nadie al momento de la captura, que no pertenece a grupos delictivos y que no va huir de las medidas que le sean impuestas.

Sobre ello cabe aclarar que la decisión sobre el valor de los elementos de juicio que constan en el proceso penal, para el análisis de los presupuestos procesales que requiere una medida cautelar, corresponde únicamente al juez penal, y no a esta sala. Y es que el juez de instancia, según los planteamientos que se le hagan y los diferentes elementos de convicción que consten en el proceso, puede determinar, incluso en aquellos casos donde se presenten arraigos, si considera que el imputado no se someterá a la causa o afectará la investigación impidiendo la averiguación de la verdad, con lo cual estaría habilitada su imposición –toda vez que también se motive el otro presupuesto procesal–. Esto, además, puede ser objeto de discusión a través del recurso de apelación –art. 341 del Código Procesal Penal– o de la revisión de medidas cautelares, regulada en los artículos 343 y 344 de la misma normativa.

En ese sentido, su reclamo, en la forma en que ha sido planteado, no revela una propuesta de vulneración al derecho fundamental de libertad física de la señora RG, por el contrario, únicamente expone un asunto de mera legalidad referido a su inconformidad con la decisión judicial, pues, a su criterio, su hija no pertenece a grupos delictivos y tampoco evadirá el proceso penal. Como consecuencia al existir un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, deberá declararse improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de la señora RMRG, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

1571-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora GJAN, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, a favor del señor *JJRC*.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor RC es su esposo, quien fue detenido el 5 de mayo de 2022, cuando se conducía a bordo de una motocicleta rumbo a su trabajo, por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes verificaron en el sistema una detención previa por el delito de "posesión de drogas", acusación por la que fue absuelto; agrega que, pese a ello, lo arrestaron por el delito de agrupaciones ilícitas, sin haber sido encontrado junto con otras personas y tampoco "se dio a la fuga". Por ello, considera que la detención es arbitraria e ilegal y que lo consignado en las actas de captura elaboradas por policías es falso.

Además, expone que el detenido se encuentra procesado en el Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, estando recluido en el "Penal de Mariona"; al respecto expone que dicha detención adolece de falta de fundamentación y que se ha vulnerado "la garantía constitucional de la libertad ambulatoria", puesto que aquel no ha cometido ningún delito ni fue capturado en flagrancia. Por tales razones solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego, se examinará lo requerido por la solicitante (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° Cn. le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito, lo cual, junto con las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, cuyas limitantes son el apego a la ley y el respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito. Tal diligencia está vinculada con una investigación, y no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de la posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

En ese sentido, los agentes fiscales serán los principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn.–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Finalmente, es ante el juez respectivo –art. 172 Cn.– donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, siendo este quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar correspondiente. Así, la selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

Por tanto, el derecho a la libertad personal no puede ser concebido como un derecho absoluto –como tampoco lo son el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Ahora bien, durante las limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Entonces, si bien es cierto que el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, en este debe plantearse alguna contradicción con la ley suprema, incluso con su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de la libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, de conformidad con las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Ello, puesto que determinar tal cuestión les compete exclusivamente a otras autoridades, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha señalado, por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, que "esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado".

Entonces, cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que "excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determi-

nado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso" (improcedencia de 2 de marzo de 2012, hábeas corpus 40-2012).

IV. En el caso que nos ocupa, la solicitante señala que no hay fundamento legal para la detención del señor RC, pues afirma que este no ha cometido delitos y no fue privado de libertad junto a otras personas –como afirma que consta en las actas de captura– o en flagrancia, sino que fue detenido luego que los agentes captores verificaran una detención previa, de la cual ya había sido absuelto.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y la participación delincuencial de una persona son actividades que corresponden exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio, a la policía; luego, a la fiscalía y finalmente, a los tribunales penales –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1749-2022–.

Estas consideraciones también son aplicables a las detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus sigue teniendo vigencia como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, tanto en relación con estas propuestas, como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde otorgar a esta sala –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1759-2022–.

En ese sentido, determinar que se ha configurado de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la imposición de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes. Por tanto, a esta sede no le corresponde pronunciarse en

principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal, pues si bien es cierto que la peticionaria alega la falta de motivación contra la decisión que impuso la detención, sus alegatos se centran en desvirtuar los hechos que constan en el acta de captura, lo cual corresponde analizar al juez penal competente.

Así, se advierte que la solicitante no ha argumentado un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, en consecuencia, su petición debe declararse improcedente.

2. Por otra parte, la peticionaria alega que el señor RC no fue capturado como la policía hizo constar en las actas respectivas, por lo que se reflejaron situaciones que no son reales. Sobre ello, debe decirse que esta sala no puede analizar situaciones como la mencionada, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido irregularidades en la actuación de las autoridades, sino que tales circunstancias deben ser evaluadas por las autoridades judiciales que conocen en materia penal, o en su caso, por las autoridades administrativas –fiscalía, si se trata de ilícitos; o policiales, si se refiere al posible cometimiento de faltas–, a través de los mecanismos que la ley confiere para ello –improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018–.

V. En cuanto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito, dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas

referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto del tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos. Se tiene por comisionado al licenciado Jhonni Melvin Calderón Pineda para recibir notificaciones.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inciso 3°, 172, 193 ordinal 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *JJRC*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARÍA MARIBEL ALAS CERNA—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

251-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio 2161-22, fecha 4 de abril de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito mediante el cual se promueve

hábeas corpus contra uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, a su favor por el señor *FRG*, condenado por el delito de extorsión agravada continuada.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad demandada a veinte años de prisión, la pena máxima del delito, mediante sentencia del 8 de febrero de 2018, la cual actualmente se encuentra firme y ejecutoriada, no obstante, contiene vulneraciones a garantías constitucionales como lo son el debido proceso, principio de legalidad y derecho de defensa.

Alega que en la cobertura policial relacionada con la entrega controlada en la que se le vincula, no existió direccionamiento funcional por parte de la Fiscalía General de la República como lo exigen los arts. 75 y 276 inc. 2° del Código Procesal Penal (CPP) y 8 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión –los cuales transcribe–, asimismo como lo ha dejado sentado esta sala en un precedente, dado que las actividades indagatorias de la policía deben sujetarse a control fiscal.

Indica que ha existido una errónea calificación en el delito por el cual fue condenado, pues la teoría fáctica no se enmarca dentro del contexto legal, no habiéndose demostrado el dominio funcional que exige el ilícito, a lo cual agrega la falta de certificación de Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) a la víctima y testigo clave "Polonia".

Afirma que el acta de reconocimiento en rueda de personas no está firmada por los defensores, por ello señala que el tribunal no debió haberla admitido como prueba, pues con ella se rompió el principio de contradicción, advierte que, al momento de ser privado de libertad, no le fue mostrada orden de captura emitida por el juez competente, dado que no fue detenido en flagrancia, ni tampoco ha sido agregada al proceso.

En conclusión, todas las circunstancias antes descritas –a su criterio– deben ser analizadas por esta sala y se podría modificar su condena o declarar la nulidad de la sentencia condenatoria y se ordenar su inmediata libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión III y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia del 10 de enero de 2018, hábeas corpus 291-2017–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

IV. Esta sala advierte que las afirmaciones del peticionario están encaminadas a que esta sede analice la prueba habida en el proceso penal y que fue valorada por la autoridad judicial para condenarlo de los hechos acusados, en ese sentido, señala la falta de dirección funcional de la Fiscalía General de la República –sin agregar más datos sore ello–, asimismo, sostiene que el delito no se enmarca en los hechos acusados por no demostrarse su dominio funcional; cuestiona la falta de certificación por parte de la UTE para la víctima denominada con clave "Polonia", además la admisión y valoración del acta del reconocimiento de personas como prueba, debido a que según él en ella no constan las firmas de los defensores y finalmente refiere que no fue privado de libertad en flagrancia, pero cuando fue detenido no se le mostró orden de captura emitida por la autoridad competente.

De ahí que señala que al ser analizada la sentencia puede declararse nula y, en consecuencia, ordenarse su libertad.

Esta sala advierte que el peticionario no expone argumentos que evidencien alguna afectación a sus derechos tutelados a través del hábeas corpus derivados de la actuación de la autoridad que demanda, sino solo refiere su mera inconformidad con la calificación jurídica del hecho –la que a su criterio fue errónea– y con el valor otorgado a los elementos de prueba –específicamente el reconocimiento de personas– por no constar, según asevera, algunas firmas, asunto que no corresponde estudiar a este tribunal.

Así, con respecto a la falta de direccionamiento funcional de la fiscalía el peticionario se limita a afirmar tal situación sin indicar los argumentos que sustentan su reclamo y de qué forma eso ha vulnerado los derechos protegidos en el hábeas corpus; y es que, ciertamente, la falta de dirección funcional en la investigación, podría representar un tema de transgresión constitucional, no obstante, en los términos propuestos no es posible extraer una descripción que configure por sí una pretensión de esa trascendencia.

En cuanto al cuestionamiento de la falta de orden de captura al momento de su privación de libertad por parte de agentes policiales, sin que a su parecer existiera flagrancia, es dable señalar que el peticionario ya está en el cumplimiento de su pena de prisión lo que significa que a este momento ha tenido pleno conocimiento de la imputación por la cual fue detenido sin que manifieste haber alegado oportunamente dicha circunstancia a la

autoridad respectiva y sin trasladar a esta sala algún agravio vigente que esté incidiendo en su derecho de libertad física, derivado de la supuesta omisión. Pero, además no corresponde a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema.

Finalmente, con respecto a lo referido a la falta de certificación de la víctima denominado "Polonia" por parte de la UTE, el solicitante no refleja una situación de carácter constitucional que pueda ser verificada por este tribunal sino únicamente su desacuerdo con la forma en que se tuvo por acreditado en el proceso penal tal calidad.

De modo que todo lo planteado, son cuestiones que deben ser discutidas en el proceso penal, ante los jueces competentes en esa materia, quienes son los únicos autorizados, entre otras cuestiones, para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal o el grado de participación del imputado, así como acreditar o no la calidad de las personas que intervienen dentro del proceso penal. Por tanto, no puede pretenderse que esta sala –con competencia constitucional– conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el proceso de hábeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Se advierte, así en todos sus argumentos, un impedimento para conocer sobre lo argüido por tratarse de asuntos de mera legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente su petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones ante expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus solicitado a su favor por el señor *FRG*, por alegarse asuntos de mera legalidad sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""""

41-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio sin número, con fecha 28 de enero de 2022, suscrito por la Jueza Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador, por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovida en contra de un juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a su favor por el señor *DAMA*, condenado por el delito de violación en menor o incapaz agravada en su modalidad continuada.

Analizado el proceso y considerando:

I. *1*. El peticionario manifiesta que mediante sentencia que se encuentra firme, fue condenado por la autoridad demandada por el delito de violación en menor o incapaz agravada en su modalidad continuada a la pena de treinta y dos años de prisión.

Reclama que el juez sentenciador vulneró los principios de inocencia, legalidad y *"ne bis in ídem"*, al haberle condenado en la modalidad continuada y, por tanto, "duplicarle" la pena por "un mismo hecho" y no aplicar lo establecido en el art. 7 numeral 3 del Código Penal (CP) referente al concurso aparente de leyes y específicamente el principio de consunción, regla que determina "[...] la realización de un tipo penal de mayor gravedad, absor[b]e a los supuestos de hecho de menor gravedad, de ahí que siempre se aplica el precepto más grave [...] uno de los fundamentos del concurso aparente de leyes, radica en la prohibición de penalizar doblemente o múltiplemente un único hecho [...] cuando el hecho generador es uno sólo [...]" (sic).

Afirma que se debió condenarle únicamente por el delito de violación en menor o incapaz agravada y que debió subsumirse conforme al concurso aparente de leyes [...], en ese sentido, solicita que se adecue su pena.

Además manifiesta invocar como segundo motivo de "revisión" de la sentencia condenatoria, el regulado en el art. 489 No. 7 del Código Procesal Penal (CPP).

Respecto a ello, afirma que la víctima miente en sus deposiciones y por ello debe solicitarse a la fiscalía y al juez que le condenó, que manifiesten si el 16 de abril de 2016 se detuvo en flagrancia a una persona por el delito en comento, ya que lo han incriminado a él, sin ser quien lo cometió.

2. Es necesario acotar que de acuerdo con el registro de expedientes que lleva esta sala, se advierte que a favor del señor *DAMA* se promovió el proceso de hábeas corpus con número de referencia 127-2018, el cual fue rechazado por improcedente, al plantear asuntos de mera legalidad.

Ahora bien, al cotejar ambas solicitudes se determina que los puntos propuestos por el solicitante, aunque guardan relación al cuestionar la misma decisión –sentencia condenatoria– no poseen plena identidad, por lo cual se procederá a realizar el estudio liminar de la solicitud que dio origen a este proceso, en los términos siguientes.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Se ha indicado jurisprudencialmente que los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia de una doble o múltiple persecución son: *i)* identidad en la persona, *ii)* identidad del objeto de la persecución y *iii)* identidad de la causa de persecución.

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate de la misma persona perseguida penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona –sobreseimiento del 23 de junio de 2009, hábeas corpus 223-2007–.

2. Esta sala ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

3. En sintonía, se ha establecido como uno de los límites a las atribuciones conferidas constitucionalmente a esta sala, el analizar los elementos de convicción que rodean al hecho y que fundamentan las decisiones que adoptan jueces y tribunales penales, pues ello es atribución exclusiva de ellos y su arrogación implicaría convertirse en un tribunal de instancia más, capaz de revisar las actuaciones del resto de autoridades judiciales bajo esas circunstancias –improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014–.

En tal sentido, este tribunal se encuentra excluido de revisar lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y de realizar el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

IV. En el presente proceso lo planteado por el señor *DAMA* está orientado a que esta sala *(i)* determine que en su condena ha existido doble persecución, ya que señala que en su proceso debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 del CP, dado que la autoridad demandada lo condenó por un delito bajo la modalidad de continuado y, *(ii)* revise su sentencia condenatoria analizando la prueba incorporada al proceso, tomando como base el supuesto del art. 489 No. 7 del CPP con la finalidad de determinar su inocencia.

i. Como se ha referido, la protección recogida en la prohibición de doble juzgamiento implica la imposibilidad que una misma conducta delictiva generada a partir de un mismo hecho pueda ser conocida a través de más de un proceso penal. Sin embargo, de la lectura de la solicitud de este proceso constitucional se evidencia que lo expuesto por el peticionario se aleja del contenido de esta garantía, en la medida en que se trata de un solo proceso penal en el que se le atribuyó el delito de violación en menor o incapaz agravada –y agresión sexual en menor o incapaz agravada, el cual fue indicado en el hábeas corpus previo– que el juez consideró en modalidad continuada.

Entonces, lo argumentado por el peticionario para fundamentar su pretensión en este hábeas corpus sobre la identidad de hechos acusados parte de su errónea concepción sobre los requisitos exigibles para establecer la existencia de la inobservancia a la garantía de prohibición de doble juzgamiento y evidencia únicamente su desacuerdo con lo decidido por el juzgador en cuanto a la modalidad de ejecución dada al delito y con que no se haya utilizado la regla jurídica contemplada en el art. 7 número 3 del CP, aplicable cuando el precepto penal complejo pueda absorber a los preceptos que sancionan las infracciones consumidas en este.

En todo caso, debe reiterarse que el análisis y determinación de procedencia sobre dicha norma se encuentra reservada al ámbito de competencia de jueces y tribunales penales en el marco del enjuiciamiento de conductas delictivas, con base en los elementos de prueba incorporados y, como consecuencia, no puede conformar el objeto de análisis de este proceso constitucional, el cual, como se dijo supra, se encuentra limitado a un examen exclusivamente constitucional de acciones u omisiones que transgredan o amenacen el derecho de libertad física o integridad personal –véase al respecto resolución de improcedencia de 27 de marzo de 2023, hábeas corpus 101-2022–.

Es así que en dicho reclamo no se advierte alguna circunstancia vulneradora de derechos constitucionales sino una mera inconformidad con la condena emitida y con las apreciaciones judiciales sobre los hechos atribuidos y en razón de ello deberá declararse improcedente.

ii. En cuanto a la revisión de la sentencia condenatoria, es preciso referir que la legislación procesal penal –art. 491 CPP– establece de forma determinante que corresponde a la autoridad judicial que haya dictado la sentencia condenatoria el conocimiento de los recursos de revisión en contra de estas, cuando adquieran firmeza y para ello se ha dispuesto una serie de presupuestos procesales que deben verificarse para su admisión y posterior tramitación, análisis que corresponde exclusivamente a tales jueces. –véase al respecto resolución de improcedencia de 24 de octubre de 2022, hábeas corpus 307-2021–

En tal sentido, dicha revisión –de ser ejecutada por esta sala– implicaría realizar un análisis sobre la responsabilidad penal del imputado, lo que indefectiblemente conlleva la valoración de la prueba que consta en el proceso penal –tal como lo propone el peticionario–, pero que insistentemente se ha señalado está fuera de la competencia constitucional de este tribunal, pues dicha facultad está atribuida legalmente de forma exclusiva a los juzgadores competentes en materia penal, así como la emisión de pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial, responsabilidad penal, valoración de prueba, entre otros y su determinación constituye un asunto de mera legalidad, por lo que no puede ser objeto de control de este proceso y, en consecuencia, tal planteamiento deberá ser rechazado mediante la declaratoria de improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución, 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *DAMA*, por tratarse de asuntos de estricta legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA––H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

1478-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido a su favor por la señora *DCFA*, sin especificar contra qué autoridad.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que su compañero de vida, señor RJOB fue privado de libertad el día 2 de abril de 2022, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad, encontrándose recluido en "Centro Penal la esperanza", –sin exponer ningún reclamo al respecto–.

Al mismo tiempo, refiere que solicita hábeas corpus preventivo a su favor debido a que, por el hecho de ser compañera de vida del detenido, alguien realizó una publicación desde un perfil anónimo vinculándola con pandillas, asegurando que en ningún momento ha pertenecido a estas y que ha denunciado este hecho ante la Fiscalía General de la República, por ser una publicación falsa. Adjunta copia de escrito presentado en dicha sede.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Esta sala ha sostenido jurisprudencialmente que el hábeas corpus preventivo tiene por objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental a la libertad personal, cuando se presenta una amenaza inminente e ilegítima contra el citado derecho, de forma que la privación de libertad no se ha concretado, pero existe amenaza cierta de que ello ocurra –improcedencia de 15 de junio de 2011, hábeas corpus 52-2011–.

Además, se ha indicado que la sola existencia de diligencias de investigación o más aún, la sola instrucción de un proceso penal, no implica per se, restricción a la libertad individual de una persona, pues las mismas salvaguardan en todo caso la operatividad del principio de presunción de inocencia, que acompaña a la persona a quien se le imputa un delito, desde el inicio de estas diligencias hasta la producción de un pronunciamiento definitivo condenatorio –improcedencia de 14 de junio de 2017, hábeas corpus 113-2017–.

2. También se ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 6 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

3. Sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus, la jurisprudencia ha establecido como parámetros los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mininamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal –improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020–.

IV. 1. En el caso que nos ocupa la peticionaria pretende promover hábeas corpus preventivo en razón de que –según refiere– por ser compañera de vida de una persona que ha sido detenida, se le vincula erróneamente con pandillas, situación que ya ha denunciado en sede fiscal para su investigación.

Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, para dar trámite a una solicitud de hábeas corpus preventivo, es indispensable que se exponga, no solo la existencia de un atentado decidido a la libertad física que esté en vías de ejecución, sino que además dicha amenaza revele un agravio de carácter constitucional.

En el presente caso, se advierte que la peticionaria no indica cuál es la vulneración constitucional del hecho que reclama, pues no expone si existe una amenaza cierta de una privación de libertad en su contra que se encuentre en vías de ejecutarse y que represente una amenaza inminente e ilegítima contra su libertad física; es decir, no indica la existencia de una restricción que lesione su derecho de libertad física, pues únicamente se limita a mencionar la referida publicación, que ya ha denunciado ante la fiscalía por considerarla falsa, lo cual, en todo caso, debe ser expuesto ante las autoridades correspondientes.

Así, la petición planteada en esos términos imposibilita a este tribunal efectuar un análisis de lo expuesto, debiendo declararse improcedente la petición.

2. Aunado a ello y considerando el examen que este tribunal debe realizar de la petición inicial, respecto al cumplimiento de las condiciones mínimas para emitir una decisión sobre lo requerido, en el caso que nos ocupa, no se consignan –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual tampoco es atendible la propuesta en términos tan abstractos; de modo que la falta de estas características constituye un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –senten-

cia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por la señora *DCFA*, al no proponerse asuntos con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

2000-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción A3 de San Salvador, a favor de: *1) GGMP, 2) EGB, 3) VNMT, 4) DEZA, 5) BJMZ, 6) JDQG, 7) AJHP y 8) JMFD.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios de San Salvador, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados, presentando como indicios: *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se estableció la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante, afirma que el juez en una decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves, limitándose a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legítima defensa y el debido proceso.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción A3 de San Salvador.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, no presentando razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional. Así, la peticionaria señala, como elementos cruciales para que esta sede compruebe la existencia o no del tipo penal atribuido, los siguientes: *i)* que la existencia de la flagrancia no es comprobable con la sola relación del acta de captura; *ii)* que algunos de los detenidos no tenían antecedentes penales y los otros habían sido procesados y condenados por delitos diferentes del de agrupaciones ilícitas y *iii)* que varios de los detenidos, aun cuando no poseían antecedentes policiales ni penales, fueron perfilados como pandilleros o colaboradores.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, en los términos planteados no se aportan argumentos que sustenten tales aseveraciones y que permitan advertir alguna afectación constitucional.

En consecuencia, al no haber argumentado un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado por la abogada ********** a favor de los señores: *1) GGMP, 2) EGB, 3) VNMT, 4) DEZA, 5) BJMZ, 6) JDQG, 7) AJHP y 8) JMFD*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2117-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada *********, en contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, a favor del señor *DEHH*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor *HH* fue capturado el día 25 de abril y se les realizó audiencia de "imposición" el día 6 de mayo –sin indicar el año en ambas fechas–.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual –según indica– al ser aplicada de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en situación de vulnerabilidad –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y alega que en tal sentido, la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué motivos lo alega–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera

que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentra el señor *HH*, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitante que se restablezca la libertad de los procesados por "haberse excedido el término de la detención provisional".

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del procesado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad impuesta luego de que el juez de la causa analizara los elementos de convicción incorporados los cuales, a juicio de la peticionaria, resultan insuficientes para establecer la existencia del delito y la participación del justiciable.

Y es que, si bien se alega falta de presupuestos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede revise la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada a los procesados.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y el grado de participación, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en "situación de vulnerabilidad" y pide se restablezca la libertad física de los imputados mencionando un supuesto exceso en la detención provisional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de las personas que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor DEHH, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2127-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con diez minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ALM, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *JEMM*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor *MM*, fue detenido el día 25 de abril de 2022, en Colonia ******* de San Salvador, por agentes policiales, no habiendo fundamento legal para su detención pues no ha cometido delito y los agentes captores actuaron sin orden judicial por escrito para realizar su detención, encontrándose recluido en el "Centro Penal de Izalco", por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es

cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que la detención del señor *JEMM* carece de fundamento legal, ya que, según refiere, no ha cometido delito y no existía orden judicial por escrito para realizar su detención.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno,

siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala :

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *JEMM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

615-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora SVFR, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y el "Juez Especializado de San Miguel", a favor de la señora *KPMF*.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que es madre de la señora *MF*, quien presumiblemente se encuentra recluida en "el penal de Ilopango". Añade que fue detenida el 30 de marzo de 2022, en el Puerto El Triunfo, Usulután, por agentes policiales, considerando que esa captura fue ilegal y arbitraria, pues "no llevaron orden judicial ni fiscal, ni siquiera orden administrativa, mucho menos la encontraron en flagrancia", tampoco "se supo si había una investigación contra ella, fue llevada con engaños solo por vivir en una zona donde una pandilla domina", aunque no hay indicios ni motivos de que haya cometido algún delito. Alega que la policía es auxiliar de la Fiscalía, por lo que no está facultada para "llevarse a una persona".

Asimismo, expone que la justiciable se encuentra a la orden del Juzgado Especializado de San Miguel, pues dicha autoridad le ordenó detención provisional, pero en la audiencia de imposición de medidas el juez no observó que la detención era ilegal, dado que no verificó si cumplía los estándares judiciales. Por ello, sostiene que, con solo celebrar dicha audiencia, pese a que la detención la realizó la policía sin orden escrita y sin flagrancia, se transgredió la libertad, pues ese accionar contrarió los requisitos legales respectivos.

En ese sentido, considera que el juez no respetó las garantías para la defensa de la señora *MF*, "por haber coexistido, simultáneamente las actividades de juez y de acusador", sin observar cómo fue capturada la aludida. Por tales razones solicita hábeas corpus a su favor.

II. La presente solicitud de hábeas corpus fue enviada a través de correo electrónico; al respecto, esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio –auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020–.

III. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego, se examinará lo requerido por la solicitante (IV).

IV. 1. Esta sala ha estipulado que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer, o en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral de los privados de libertad; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia del 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

2. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas, que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúen de conformidad con la ley y que consten por escrito. Sin embargo, en esta disposición también existe habilitación para detener a una persona sin mediar orden escrita, atendiendo a la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir, que se estén realizando hechos de apariencia delictiva; y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 141-2008–.

Además, es necesario considerar que el art. 159 inc. 3° Cn. le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito, lo cual, junto con las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, cuyas limitantes son el apego a la ley y el respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito. Tal diligencia está vinculada con una investigación, y no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de la posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

En ese sentido, los agentes fiscales serán los principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn.–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Finalmente, es ante el juez respectivo –art. 172 Cn.– donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, siendo este quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar correspondiente. Así, la selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

Por tanto, el derecho a la libertad personal no puede ser concebido como un derecho absoluto –como tampoco lo son el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Ahora bien, durante las limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Entonces, si bien es cierto que el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, en este debe plantearse alguna contradicción con la ley suprema, incluso con su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de la libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, de conformidad con las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Ello, puesto que determinar tal cuestión les compete exclusivamente a otras autoridades, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

V. 1. En el caso que nos ocupa, la solicitante señala que la señora *MF* se encuentra detenida de forma ilegal y arbitraria, pues alega que los agentes captores carecían de orden judicial o administrativa ni existió flagrancia, tampoco había certeza sobre la existencia de una investigación contra ella o sobre la comisión de un delito. Además, sostiene que fue llevada con engaños y que la policía es auxiliar de la Fiscalía, por lo que no está facultada para aprehender a una persona. También sostiene que el juez no observó que la detención era ilegal, dado que no verificó si cumplía los estándares judiciales. Entonces, con solo celebrar dicha audiencia, pese a las condiciones de la detención, se transgredió la libertad, pues ese accionar contrarió los requisitos legales respectivos. Por ello, considera que el juez no respetó las garantías para la defensa de la señora *MF*, y que fue juez y acusador simultáneamente.

2. En cuanto a la captura hecha por la policía sin una orden de detención, debe señalarse que la sola mención de la inexistencia de esta –administrativa o judicial– para aprehender a una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno,

siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quien decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión, así como acerca de la situación de su libertad física –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1517-2022–. Esto de conformidad con los arts. 13 inc. 1° Cn., 271, 323, 326 y 327 CPP.

3. En cuanto a la afirmación de que no hubo "indicios ni motivos de que [la procesada] haya cometido algún delito" ni flagrancia, es preciso señalar que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y la participación delincuencial de una persona son actividades que corresponden exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables a las detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus sigue teniendo vigencia como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, tanto en relación con estas propuestas, como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde otorgar a esta sala.

En ese sentido, determinar que se ha configurado de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la imposición de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes. Por tanto, a esta sede no le corresponde pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

4. Por otra parte, se observa que la peticionaria menciona que la procesada fue llevada con engaños por parte de los agentes captores. Sobre ello, debe decirse que esta sala no puede analizar situaciones como las mencionadas, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido

irregularidades en la actuación de las autoridades, sino que tales circunstancias deben ser evaluadas por las autoridades judiciales que conocen en materia penal, o en su caso, por las autoridades administrativas –fiscalía, si se trata de ilícitos; o policiales, si se refiere al posible cometimiento de faltas–, a través de los mecanismos que la ley confiere para ello –improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018–.

5. Por último, sobre los cuestionamientos hechos a la autoridad judicial por haber celebrado la audiencia inicial pese a las condiciones de la detención, lo cual muestra que no respetó las garantías para la defensa de la señora *MF*, y que actuó como juez y acusador simultáneamente, se advierte que, tal como la peticionaria lo hizo contar en su escrito, todos sus objeciones se basan en la idea de que la policía no tenía facultad para realizar la detención, pues carecía de una orden de detención. Sin embargo, como se mencionó previamente, contrario a lo interpretado por la solicitante, esta sala ha reiterado que la inexistencia de una orden detención –administrativa o judicial–no implica por sí misma una vulneración constitucional, pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Así, se observa que, aunque la solicitante menciona una supuesta infracción al derecho de defensa y que la autoridad judicial intervino como juez y acusador al mismo tiempo, no expone argumentos que sustenten tales afirmaciones, únicamente menciona situaciones relacionadas con la captura. Por tanto, lo alegado no se refiere a algún posible defecto en la actuación judicial objetada que pudiera vulnerar los derechos de la señora *MF*, sino que se limitan a mostrar su disconformidad con el hecho de que la policía haya capturado a la justiciable sin contar con una orden para ello. En ese orden, se observa que todo lo cuestionado se circunscribe dentro de la competencia de los jueces penales.

En conclusión, se advierte que la solicitante no ha argumentado algún asunto de carácter constitucional, sino aspectos de mera legalidad. En consecuencia, su petición debe declararse improcedente.

VI. En cuanto al tiempo transcurrido para resolver esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito, dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Así, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto del tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VII. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inciso 3°, 172, 193 ordinal 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *KPMF*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""""

945-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado *********, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y agentes auxiliares del Fiscal General de la República, a favor del señor *JCM*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El solicitante expresa que el señor *M* fue detenido el día 24 de abril de 2022, por agentes policiales en su lugar de residencia, quienes al presentarse manifestaron que realizarían una visita de rutina, pero al ingresar procedieron a capturarlo por el referido delito.

Sostiene que, no obstante haberse mostrado parte como defensor en sede policial y "habiendo sido agregado dicho documento a las diligencias iniciales", se presentó "a diario" en los juzgados especializados para saber a la orden de cuál había sido puesto su representado. También afirma haber indagado en diferentes sedes fiscales, entre ellas la de San Marcos, donde en su segunda visita le informaron que la audiencia de imposición de medidas en contra del señor *M* se había realizado el día anterior en el Juzgado Especializado de Instrucción "B2" de San Salvador.

Añade que, al no haberse tenido como parte en la sede policial, presentó un escrito mostrándose parte "una vez más" ante la autoridad judicial, la cual resolvió acceder a su petición y le aclaró que para la audiencia especial de imposición de medidas se tuvo por parte a los defensores consignados por la fiscalía, lo cual, a juicio del peticionario, vulneró el derecho a la libertad y las garantías constitucionales de audiencia y defensa del señor *M*. Adjunta a su escrito copia de la resolución pronunciada por la autoridad judicial.

2. En su segundo escrito, el solicitante reitera su petición, agregando que ya ha pasado un tiempo considerable para que exista pronunciamiento por parte de esta sala, de igual manera expresa que, a pesar de haber solicitado audiencia especial de imposición de medidas a favor de su defendido, "todo ha sido denegado" por el juez especializado demandado.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido en la solicitud (IV).

III. Se ha señalado que el posible agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, a efecto de su procedencia,

de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe efectivamente encontrarse afectada en las categorías relacionadas en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución, por las actuaciones u omisiones contra las cuales se queja, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación.

Por tanto, al solicitar la protección constitucional, la persona que se pretende favorecer debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad personal, integridad física, psíquica o moral, derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se reclama; así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas –improcedencia de 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–.

IV. El peticionario, en síntesis, alega que se mostró parte en sede policial como defensor particular del señor *JCM* y –asume– que los agentes policiales remitieron el acta respectiva junto con las demás diligencias iniciales de investigación a sede fiscal, pero esta no fue agregada por los agentes fiscales a la solicitud de imposición de medidas y, en consecuencia, no fue citado para comparecer a la audiencia de imposición de medidas donde la autoridad judicial le decretó detención provisional al justiciable.

No obstante lo expuesto, el mismo solicitante ha agregado documentación donde consta que en dicha audiencia el procesado fue representado por un defensor consignado por la fiscalía en su solicitud respectiva, dentro de los cuales no se encontraba el peticionario, razón por la cual no fue convocado. De manera que, de la redacción de la presente pretensión, no se observa vulneración a los derechos de defensa y audiencia del imputado, pues tales derechos fueron garantizados por un abogado que compareció a la referida diligencia.

Aunado a lo anterior, consta en la documentación adjuntada, que el Juez Especializado de Instrucción "B2" de San Salvador emitió resolución donde se le tiene al peticionario como defensor particular del procesado y se le notificó audiencia especial de revisión de medidas señalada para el día 26 de mayo de 2022.

En consecuencia, el profesional ha podido ejecutar su labor como abogado particular desde la fecha en que se le tuvo por parte en sede judicial, para el asesoramiento técnico y custodia de los derechos del procesado, pudiendo controlar las resoluciones judiciales a través de los medios de impugnación que señala la normativa procesal penal; además, consta que el juez demandado señaló audiencia de revisión de medidas en auto del 13 de mayo de 2022, por lo que tal diligencia no ha sido denegada así como asegura el solicitante.

Por lo tanto, tal como se encuentra planteada la petición, no se advierte que el señor *M* se encuentre sufriendo una restricción a sus derechos protegidos por el hábeas corpus a raíz de la decisión cuestionada; consecuentemente, ante la ausencia de una de las condiciones indispensables para efectuar el análisis constitucional solicitado –agravio– no es posible conocer y decidir de fondo la solicitud la cual será declarada improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaria de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus promovida a favor del señor *JCM*, por falta de agravio en los derechos protegidos a través del hábeas corpus.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

124-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1048-22 de fecha 17 de febrero de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito por medio del que se promueve hábeas corpus contra uno de los jueces del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, a su favor por el señor *GBM*, condenado por delito no especificado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad que demanda a la pena de cincuenta y tres años de prisión y, a la fecha, la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.

Promueve "juicio de demanda de inconstitucionalidad" porque considera que con la pena impuesta no se respeta el art. 27 incs. 2º y 3º de la Constitución (Cn), donde se prohíben las penas perpetuas y en su lugar se le deja de manera indefinida en prisión, vulnerando el principio de razonabilidad y desnaturalizando el espíritu mismo de rehabilitación y reinserción social, atentando así contra los principios de dignidad humana, legalidad e igualdad.

Considera, además, que ello transgrede los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que El Salvador ha suscrito.

En consecuencia, pide que se modifique la cuantía de la pena máxima a veinte años de prisión y se declare inconstitucional el artículo 45 numeral 1º del Código Penal (CP), para que todo gobernado tenga la oportunidad de una reinserción social y rehabilitación.

II. En el presente caso, si bien es cierto en la solicitud se expresa presentar "juicio de demanda de inconstitucionalidad", al analizar la misma se determina que el peticionario reclama de la pena de prisión que se encuentra cumpliendo, alegando que su condena a cincuenta y tres años, basada en el art. 45 CP, vulnera derechos fundamentales con especial énfasis en su libertad física, dada la privación de esta, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 12 inciso final de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Consecuentemente, se consideró pertinente encauzar la petición por la vía procesal idónea y que se haga el análisis liminar correspondiente a la petición de hábeas corpus, maximizándose así los principios de *iura novit curia* –suplencia de la queja deficiente, art. 80 LPC– y el principio de dirección y ordenación del proceso –art. 5 LPC y 14 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)–

III. Es preciso indicar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (IV) y luego se analizará el supuesto planteado por el peticionario (V).

IV. Esta sala ha sostenido en diversas resoluciones que los jueces penales no pueden imponer condenas que excedan los límites legalmente establecidos, en este sentido, las penas privativas de libertad no pueden superar los sesenta años de prisión y deben reputarse constitucionales conforme la valoración legislativa las que se encuentren dentro de este rango.

Si bien no pueden existir penas que vuelvan imposible la ejecución de un tratamiento penitenciario, esta sala no considera que ello incida en una inconstitucionalidad de las penas de larga duración como acontece con el art. 45 numeral 1 CP, ya que la modificación legislativa no cierra la posibilidad de acceder a los permisos de salida, la concesión de la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la pena [ordinaria] o la mitad [anticipada], o brindar su otorgamiento por razones humanitarias, aún y cuando se acceda a ello en un tramo considerable del cumplimiento de la condena –auto del 16 de mayo de 2022, inconstitucionalidad 8-2022–.

Acorde con lo anterior, esta sala ha declarado que en el artículo 45 número 1 CP, reformado mediante el Decreto Legislativo número 1009, del 29 de febrero de 2012, y publicado en el Diario Oficial número 58, tomo número 394, del 23 de marzo de 2012, no existe la inconstitucionalidad alegada, por la supuesta vulneración del artículo 27 incisos 2° y 3° Cn –auto del 13 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 5-2001–.

V. El peticionario –en extendidas líneas– alega que su condena de cincuenta y tres años de prisión vulnera sus derechos derivados del art. 27 Cn, porque estaría de manera indefinida privado de libertad, considerando además que el art. 45 numeral 1) CP es inconstitucional y debe minimizarse el monto de la pena.

Al respecto debe señalarse que, en la sentencia de inconstitucionalidad 5-2001 del 23 de diciembre de 2010, este tribunal declaró que la pena de setenta y cinco años de prisión es inconstitucional pues la magnitud prevista por el legislador vuelve nugatoria la función resocializadora de la pena contemplada en los incs. 2° y 3° del artículo 27 Cn.

Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de los máximos de las penas previstas en los artículos 45, 71 y 129 CP consistieron en que la Asamblea Legislativa, en uso de su libertad de configuración, determinara las sanciones penales a imponer en sustitución de los referidos montos, cumpliendo con las exigencias constitucionales impuestas en la sentencia.

El Órgano Legislativo, a través del decreto número 1009, del 29 de febrero de 2012, reguló la sanción máxima de sesenta años de prisión y, según lo indicado en el apartado precedente, este tribunal ha determinado que se tiene una nueva valoración en cuanto al referido monto máximo en el ordenamiento jurídico penal salvadoreño y que dicha pena no es perpetua sino una sanción de larga duración que no es contraria al artículo 27 incisos 2° y 3° Cn.

Al tener establecido un máximo de la pena privativa de libertad a imponer y estar, la del solicitante, dentro de este rango legal punitivo, puede afirmarse que en el caso que ha expuesto no se está en presencia de una sanción que vulnera su derecho a rehabilitarse como expresa, ya que la característica esencial de las penas perpetuas es la nula posibilidad de recobrar la libertad, perdurando hasta la muerte del condenado, situación en la que no se encuentra el señor *GBM* dado que la sanción de cincuenta y tres años de prisión asignada constituye una condena con posibilidades para el recluso de acceder a beneficios y cuotas de libertad que acorten su tiempo en prisión.

En consecuencia, esta sede se encuentra impedida para tramitar el planteamiento expuesto por el peticionario, ya que se evidencia una mera inconformidad con la condena decretada por la autoridad demandada, que carece de trascendencia constitucional, razón por la cual deberá declararse improcedente.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

Por las razones expuestas y los artículos 11 inciso 2º, 27 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada por el señor *GBM*, por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

317-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cincuenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido contra el Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, por el señor OEAA, a favor de los señores: *1) JEHG, 2) NFPR y 3) EACC,* condenados por el delito de homicidio agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que en la causa penal con referencia 295 B 09 5, el Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador condenó a los señores *HG, PR y CC* a treinta y cinco años de prisión por el delito en mención, quienes se encuentran cumpliendo dicha pena en el Complejo Penitenciario La Esperanza.

De lo anterior, colige que la sentencia condenatoria se fundamentó sobre la base de una coautoría inexistente, pues la autoridad judicial afirmó que existió una distribución de funciones entre los procesados con un mismo fin, lo que les permitió que incurrieran con la acción típica, a pesar de eso, no se estableció quien de los participantes portó y disparó el arma de fuego, adicionalmente, no existió prueba pericial, como es el caso de un peritaje balístico sobre dicho objeto.

Por lo expuesto, concluye que a los señores *JEHG, NFPR y EACC*, se les han vulnerado los principios del debido proceso, legalidad, unidad del ordenamiento jurídico y de tipicidad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrán-

dose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

De ahí que, si una persona se considera agraviada con el resultado de la valoración de los hechos y de la probanza en lo atinente al establecimiento del ilícito y la responsabilidad penal, el ordenamiento jurídico secundario contempla los mecanismos pertinentes a fin de controvertir el perjuicio ocasionado –improcedencia del 27 de octubre de 2021, hábeas corpus 21-2021–.

Con base en ello, los pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial y responsabilidad penal, entre otros, corresponden en exclusiva a la autoridad judicial que conoce de la causa penal y su determinación constituye un asunto de mera legalidad que, por su naturaleza, está excluido del conocimiento de esta sala.

IV. El solicitante aduce que hubo omisiones por parte del tribunal sentenciador al no determinar correctamente la participación criminal de los imputados, pues todos fueron condenados en calidad de coautores por el delito de homicidio agravado y sancionados a una pena de treinta y cinco años de prisión, sin identificar roles específicos de los imputados y además, señala que no se hizo una prueba pericial.

De manera que, lo propuesto, descansa en una inconformidad con la valoración efectuada por el Juzgado Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, al sustentar la participación delincuencial de aquellos; de ahí que, sus argumentos están orientados a controvertir los elementos probatorios que fueron valorados por el juzgador para fundamentar su decisión, por lo cual no se advierte la concurrencia de argumentos que describan vulneraciones de normas constitucionales con afectación directa en los derechos de libertad física o integridad física, psíquica o moral de los imputados, derivadas de la actuación de la autoridad judicial contra la que reclama. Tal circunstancia no puede ser sometida a control constitucional por medio de un hábeas corpus, pues los jueces penales son los facultados para determinar reclamos como el expuesto.

Así pues, como se ha indicado, la facultad de establecer de la participación delincuencial de una persona y la fijación de la correspondiente sanción penal, son atribuciones legales que les competen a los jueces penales decidir, ya que ello supone valorar las pruebas habidas en el proceso penal, lo cual es una labor que les ha sido otorgada exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales competentes en materia penal, y cuya consideración, en definitiva, constituye un asunto de mera legalidad que por su

naturaleza está excluido del conocimiento de esta sala y ante la imposibilidad de examinar su solicitud en los términos expuestos, deberá declararse improcedente su petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° y 12 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada por el señor OEAA, a favor de los señores: *1) JEHG, 2) NFPR y 3) EACC*, en virtud de que el planteamiento expuesto constituye un asunto de estricta legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1626-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con quince minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de Santa Ana, a favor del señor *DEML*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario alega que la detención provisional en la que se encuentra el señor *ML* es ilegal e injusta, en razón de que fue capturado el 18 de mayo de 2022, en el taller en el que laboraba como mecánico, ubicado en *********, municipio de Salcoatitán, Sonsonate, por agentes policiales que ingresaron al mismo, quienes le levantaron la camisa y con tono prepotente le preguntaron si pertenecía a una pandilla, respondiendo su representado que no, pero, por el hecho de tener tatuajes (que no son alusivos a pandillas), le dijeron que quedaría detenido por el delito de agrupaciones ilícitas, sin tener orden administrativa y sin estar cometiendo ningún hecho ilícito.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el solicitante (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona (sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008).

Además, el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación (sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002).

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico jurídico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es

de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que no ocupara el peticionario sostiene que la detención provisional que cumple el señor *DEML* es ilegal e injusta, ya que –según refiere– su captura se realizó por agentes policiales sin contar con orden administrativa que la decretara y sin que estuviera cometiendo algún delito, sino solamente por tener tatuajes en su cuerpo (que no son alusivos a pandillas).

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inc. 1º Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Asimismo debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesario el informe a la institución fiscal y la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus

como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado el solicitante un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas

referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia (sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019), tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *DEML*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1629-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas con diez minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado NFH, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *RVV*.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que la señora *VV*, fue privada de libertad al ser "sustraída de su lecho o morada" por agentes de la Policía Nacional Civil en el contexto del estado de excepción "teniendo como base subjetiva la estigmatización en atención al estereotipo y sus márgenes de vulnerabilidad de cierta colectividad"; considera que, debido a que la señora *VV* es comerciante, se le han vulnerado los derechos a la libertad y al trabajo. Por tales razones solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego, se examinará lo requerido por el solicitante (IV).

III. 1. Jurisprudencialmente se ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 16 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de las personas a favor de quienes se requiere; de manera que, al efectuar las peticiones, deben señalarse con precisión tales aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente la petición y que permiten que pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal estaría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mininamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal –improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020–.

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario únicamente afirma que la señora *VV* fue privada de libertad debido a la estigmatización de ciertos sectores y que se vulneraron sus derechos de libertad y trabajo puesto que era comerciante, sin indicar el hecho concreto que reclama ni las razones por las que considera inconstitucional la detención.

Para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido, y es que si bien el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener, al menos, un acto generador de violaciones constitucionales –con incidencia directa en el derecho de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer–, así como datos que permitan la determinación del favorecido y de la autoridad a la que atribuye tal acto.

Sin embargo, en este caso no se consignan en la petición –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual, en términos tan abstractos, tampoco es atendible la solicitud propuesta; constituyendo tales omisiones un vicio en la petición impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del

caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *RVV*, al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G–O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2115-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, a favor del señor *JEFC*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor FC fue capturado el día 5 de agosto de 2022 y se le realizó audiencia de "imposición" el día 15 del citado mes y año.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados no llenaban los

requisitos para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual, al ser aplicada de manera discrecional, constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en "situación de vulnerabilidad" –sin plantear ningún reclamo específico al respecto– y, en tal sentido, alega que la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor del detenido a fin de concederle la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama por la detención provisional en la que se encuentra el señor *JEFC*, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por la Fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitando que se restablezca la libertad del procesado por "haberse excedido el término de la detención provisional".

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del procesado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad impuesta luego de que el juez de la causa analizara los elementos de convicción incorporados, los cuales, a juicio de la peticionaria, resultan insuficientes para establecer la existencia del delito y la participación del procesado.

Y es que, si bien se alega falta de presupuestos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede revise la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada al procesado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y el grado de participación, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en "situación de vulnerabilidad" y pide se restablezca la libertad física del imputado, mencionando un supuesto exceso en el término de la detención provisional, sin embargo, en la forma planteada, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de la persona que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de

las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *JEFC*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2118-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinticinco minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada *********, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, a favor de los señores *CATG y MJTG*, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que las personas que pretende favorecer fueron capturadas el día 27 de junio de 2022 y se les realizó audiencia de "imposición" el día 8 de julio del citado año.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados no llenaban los requisitos para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual, al ser aplicada de manera discrecional, constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en "situación de vulnerabilidad" –sin plantear ningún reclamo específico al respecto– y, en tal sentido, alega que la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué–

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama por la detención provisional en la que se encuentran los señores *CATG y MJTG*, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por la Fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitando que se restablezca la libertad de los procesados por "haberse excedido el término de la detención provisional".

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los procesados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad impuesta luego de que el juez de la causa analizara los elementos de convicción incorporados los cuales, a juicio de la peticionaria, resultan insuficientes para establecer la existencia del delito y la participación de los procesados.

Y es que, si bien se alega falta de presupuestos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede revise la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada a los procesados.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y el grado de participación, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en "situación de vulnerabilidad" y pide se restablezca la libertad física de los imputados mencionando un supuesto exceso en el término de la detención provisional, sin embargo, en la forma planteada, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de las personas que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo

de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores *CATG y MJTG*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

965-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada BAPS, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, a favor de: *1) JIBM, 2) JAAF, 3) GAVM, 4) JAMR, 5) JEMQ, 6) EHH, 7) CRSG, 8) MGNM, 9) WALV, 10) HGCM, 11) VMRM, 12) JEGF, 13) EECR, 14) CINP, 15) JOCS, 16) HVTM, 17) CACH, 18) JABM, 19) HGGR, 20) JJFM, 21) JHGM, 22) AAVQ, 23) BSFV, 24) AECH, 25) RASC, 26) OAGC, 27) TV, 28) JLRH, 29) OAMC, 30) DGVA, 31) AYAA, 32) AMEO, 33) CMCA, 34) CGRV, 35) KRAB, 36) DYCH, 37) VMMS, 38) RMMC, 39) KSLH, 40) JLG y 41) JBLG.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios del departamento de San Salvador, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios; *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante lo expuesto afirma que el juez en un decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves y limitarse a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legitima defensa y el debido proceso regulados en nuestra constitución.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación de alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente se expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de los procesados que derivaron en la detención provisional de sus defendidos, ya que, a su parecer estos, son insuficientes.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, ya que la misma peticionaria ha señalado que a su parecer los elementos incorporados no permiten comprobar la existencia del delito ni la participación de los procesados en el mismo.

Al respecto, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares o defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, no se mencionan actuaciones y omisiones concretas que pudiesen derivar en vulneraciones a derechos constitucionales, por lo tanto, en los términos planteados, no es posible advertir argumentos que sustenten tales aseveraciones ni afectaciones a los derechos protegidos mediante el hábeas corpus.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: 1*) JIBM, 2) JAAF, 3) GAVM, 4) JAMR, 5) JEMQ, 6) EHH, 7) CRSG, 8) MGNM, 9) WALV, 10) HGCM, 11) VMRM, 12) JEGF, 13) EECR, 14) CINP, 15) JOCS, 16) HVTM, 17) CACH, 18) JABM, 19) HGGR, 20) JJFM, 21) JHGM, 22) AAVQ, 23) BSFV, 24) AECH, 25) RASC, 26) OAGC, 27) TV, 28) JLRH, 29) OAMC, 30) DGVA, 31) AYAA, 32) AMEO, 33) CMCA, 34) CGRV, 35) KRAB, 36) DYCH, 37) VMMS, 38) RMMC, 39) KSLH, 40) JLG y 41) JBLG*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1024-2022

Relaciones:

1837-2022, 1073-2022, 1364-2022, 1259-2022, 1834-2022, 1838-2022, 2994-2022, 3026-2022, 1361-2022, 2230-2022, 2231-2022, 2237-2022, 2244-2022, 2261-2022, 2474-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cincuenta minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora AFS, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *NASF*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala ser madre del señor SF, quien fue detenido el día 30 de abril de 2022, por agentes policiales, a pesar de no poseer tatuajes alusivos a alguna estructura criminal.

Posteriormente realiza un análisis de los requisitos que, a su criterio, deben concurrir para la existencia del aludido delito y refiere que, según consta en el acta de captura y relación circunstanciada de los hechos, no se ha comprobado que su compañero de vida se encontrara "agrupado" en algún lugar con la finalidad de delinquir. Además, alega que el poseer tatuajes artísticos no constituye un elemento indiciario suficiente para presumir que se es parte de una estructura organizada para cometer delitos y, en este caso, debe existir la declaración de un testigo que corrobore "la acción de los agentes policiales", por lo que la conducta del señor *SF*, en relación con el delito que se le atribuye, es atípica y su detención es ilegal

y arbitraria. Por tal razón solicita que se valore su estado de salud –sin proponer un reclamo al respecto– y se anule el proceso penal o la detención provisional en que su compañero de vida se encuentra o le sean impuestas otras medidas.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

2. Así también, esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor *SF* fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según refiere– poseer tatuajes artísticos no es suficiente para presumir que se es parte de una estructura criminal, por lo que considera que la conducta que se le atribuye es atípica.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la captura de una persona no implica por sí misma vulneraciones a garantías constitucionales, pues los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales

competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

La naturaleza de proceso constitucional del hábeas corpus y la mejor tutela de los derechos que se protegen mediante este, requiere que los reclamos sean lo más concretos posible y que se señalen las gestiones ante las autoridades ordinarias para así también poder identificar el comportamiento que se les reprocha –resolución del 11 de marzo de 2022, habeas corpus 733-2020–.

Por las razones expuestas, la peticionaria puede avocarse a las autoridades que ordenaron o controlan la privación del señor SF, para exponer de manera clara su reclamo.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º, de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *NASF*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1048-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora IOHM, en contra del Juez Especializado de Instrucción "C-2" de San Miguel, a favor del señor *JAVH*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere ser madre del señor **VH**, quien fue detenido el día 11 de junio de 2022, por el delito aludido, cuando se encontraba trabajando en su lugar de residencia y no estaba reunido con nadie. Agrega

que el 23 del mismo mes y año se realizó audiencia especial de imposición de medidas en el "Juzgado Especializado C2 de la Ciudad de San Miguel", por lo que considera que se le está vulnerando su derecho a la "libertad ambulatoria".

Indica que su hijo no pertenece a pandillas y se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión, presentándose semanalmente a firmar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Miguel, en relación con una condena en procedimiento abreviado de tres años.

Señala que el referido juez de instrucción le causó agravio al remitirlo injustamente al "Centro de la Esperanza Mariona", pues su reinserción a la sociedad se interrumpió y no se le permite que desarrolle sus actividades. Por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico jurídico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria cuestiona la captura y posterior detención provisional decretada al señor *VH*, considerando que se le ha causado agravio, pues, además de no pertenecer a pandillas, se encontraba con medidas sustitutivas a la prisión y la actual restricción interrumpió su reinserción a la sociedad y le impide el desarrollo de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a la libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Tal consideración es aplicable respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la selección de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Debe mencionarse que la solicitante demanda a una autoridad judicial en su escrito, sin embargo, no señala actuación u omisión concreta de esta o algún defecto de motivación que pueda generar vulneración a derechos constitucionales, evidenciándose únicamente una mera inconformidad con la prisión preventiva que actualmente cumple el señor *VH*, principalmente por haber interferido con el cumplimiento de las medidas alternas que cumplía en otro proceso penal, lo cual no constituye un reclamo de trascendencia constitucional.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino una cuestión de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el

Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *JAVH*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1756-2022

Relaciones:

1865-2022, 2053-2022, 2067-2022, 2166-2022, 2208-2022, 2376-2022, 2458-2022, 879-2022, 1653-2022, 1664-2024, 1675-2022, 1880-2022, 2071-2022, 2077-2022, 2093-2022, 2094-2022, 2097-2022, 2100-2022, 2107-2022, 2109-2022, 2135-2022, 2234-2022, 2414-2022, 2070-2022, 2153-2022, 2155-2022, 910-2022, 1720-2022, 1754-2022, 1757-2022, 2171-2022, 2175-2022, 2282-2022, 1900-2022, 1901-2022, 2179-2022, 2183-2022, 2185-2022, 2187-2022, 2220-2022, 2332-2022, 2428-2022, 2435-2022, 2464-2022, 2688-2022, 1609-2022, 1742-2022, 1976-2022, 2174-2022, 2260-2022, 2378-2022, 2446-2022, 2453-2022, 2483-2022, 1800-2022, 2184-2022, 2207-2022, 2217-2022, 2394-2022, 2438-2022, 2488-2022, 2494-2022, 2520-2022, 2696-2022, 2756-2022, 1874-2022, 1988-2022, 2008-2022, 2140-2022, 2277-2022, 2287-2022, 2291-2022, 2295-2022, 2304-2022, 2305-2022, 2329-2022, 2402-2022, 2504-2022, 2510-2022, 2513-2022, 2522-2022, 2526-2022, 2541-2022, 2902-2022, 1892-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor SAZ, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *AZM*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que es padre del señor *ZM*, quien fue capturado en el contexto del régimen de excepción el 17 de julio de 2022, en su casa de habitación, por agentes policiales, no habiendo fundamento legal para su detención pues no ha cometido delito ni existe una orden escrita decretándola, únicamente le manifestaron que lo detenían por agrupaciones ilícitas.

Considera que su captura es ilegal y arbitraria al vulnerar garantías judiciales como el debido proceso y atentar contra "su dignidad física, moral y la de su familia" pues la restricción de libertad se sustenta en percepciones subjetivas de los captores –sin plantear argumentos que sustenten sus afirmaciones–.

Sostiene de forma general que se han denunciado detenciones sin fundamento "de muchas personas", "al ser incomunicadas, sin registros y sin informar a las familiares de su situación", lo cual podría constituir casos de "desaparición forzada". Por todo lo cual solicita hábeas corpus a fin que se decrete la libertad del detenido, por tal razón solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable

que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *AZM* fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según refiere–no existía orden por escrito, ni fundamento para su detención. Asimismo, señala de forma general que a su criterio existen vulneraciones al debido proceso, atentados contra la dignidad personal y falta de información que en muchos casos podría constituir desaparición forzada.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

En todo caso y respecto a la obtención de información sobre la situación jurídica del señor *AZM*, deben avocarse a la autoridad judicial a cargo de su proceso penal a requerirla.

Es así que al no haber argumentado el solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *AZM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

265-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, a su favor por el señor *LJRR*, condenado por el delito de robo agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que fue condenado a pena de prisión por el juez demandado quebrantando las garantías del debido proceso, principio de legalidad, presunción de inocencia y seguridad jurídica, al incorporar al elenco probatorio a un testigo "criteriado", cuya declaración –según el peticionario– constituyó la principal prueba de cargo y el juez demanda-

do fundamentó su sentencia condenatoria en ella, sin haberse observado un control del cumplimiento de los requisitos "legales procesales", pues a su criterio no se incorporó toda la documentación que respalda el procedimiento para otorgarle criterio de oportunidad a dicho testigo, pues el desconoce las negociaciones que se hicieron entre el supuesto testigo y la representación fiscal.

Así, alega que en dicho procedimiento no se respectaron reglas procesales ni se sometió a control judicial la legalidad de las actuaciones, diligencias y una serie de "documentación procesal de carácter esencial del debido proceso" a cargo de fiscalía, gerencia de programas de protección a víctimas, y testigos, entre otros, lo que –según el peticionario- causó indefensión de las partes.

En consecuencia, pide que una vez verificado el quebrantamiento de las garantías constitucionales alegadas se ordene su inmediata libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal ha establecido que en el hábeas corpus se carece de competencia para analizar las valoraciones que los juzgados con competencia penal hagan del material probatorio que se presenta por las partes, tanto de cargo como de descargo en el trámite de un proceso de esa materia. La valoración que este tribunal hiciera de las pruebas presentadas en sede penal invadiría la competencia de aquellos jueces, quienes son los únicos legitimados legalmente para pronunciarse sobre ellas. Para lo que esta sala tiene competencia, entre otros, es para verificar si se ha utilizado como fundamento probatorio para la condena un elemento que no reviste de tal naturaleza –sentencia del 15 de abril de 2015, hábeas corpus 490-2014–.

Pretender la revisión de los fundamentos consignados en una sentencia condenatoria emitida por un juez en materia penal, y que ya se encuentra firme y ejecutoriada, carece de trascendencia constitucional al no revelar un presupuesto de hecho habilitante para ejercer el control para el cual ha sido creada esta jurisdicción –improcedencia del 9 de junio de 2021, hábeas corpus 64-2021–.

De ahí que, si una persona se considera agraviada con el resultado de la valoración de los hechos y de la probanza en lo atinente al establecimiento del ilícito y la responsabilidad penal, el ordenamiento jurídico secundario contempla los mecanismos pertinentes a fin de controvertir el perjuicio ocasionado. –improcedencia del 27 de octubre de 2021, hábeas corpus 21-2021–.

IV. El solicitante específicamente reclama la incorporación de un testigo con criterio de oportunidad al elenco probatorio y la valoración que el juez de sentencia otorgó a su declaración, lo cual, a su criterio, no cumple con los requisitos del debido proceso.

Lo expuesto, en esos términos, consiste en cuestiones que deben discutirse en el proceso penal, ante el juez competente en esa materia, quien ejerce el control legal sobre la acreditación de la calidad de testigo a quien se le ha otorgado criterio de oportunidad y las solicitudes que ejerce la representación fiscal respecto de ello. Y es que, si bien la inobservancia de los estándares probatorios que exige la ley –art. 6 del CPP–, podrían configurar un tema con trascendencia constitucional, sin embargo, el peticionario no refiere ningún argumento de lo reclamado, sino que se limita a señalar su inconformidad con la calidad otorgada al declarante y el valor que el juez le dio a dicho elemento probatorio, pero sin trasladar ninguna circunstancia vulneradora de los derechos tutelados mediante este proceso.

De igual forma compete a dicho juzgador, valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal o el grado de participación del imputado, sin que pueda pretenderse que esta sala –con competencia constitucional– conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el proceso de hábeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Y es que el peticionario tampoco evidencia algún defecto de motivación de la sentencia que refleje alguna arbitrariedad que pudiera controlarse en esta sede a través del hábeas corpus, sino solo expone su inconformidad con la admisión y valoración de la declaración de un testigo a quien se le otorgó criterio de oportunidad con la cual se fundamentó la sentencia condenatoria en su contra.

De modo que, se evidencia un impedimento para conocer sobre lo argüido por tratarse de un asunto de mera inconformidad sin trascendencia constitucional que versa en el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido a su favor por el señor *LJRR*, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen una mera inconformidad sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

489-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinte minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el licenciado **********, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y el Juez Especializado de Instrucción C-2 de San Salvador, a favor de: *1) KVM –o M– F, 2) BSAA, 3) JASO, 4) WGNA, 5) SMB, 6) DEFG, 7) FAHL, 8) JSGV, 9) JARR, 10) JBSD, 11) MCR, 12) DRGV, 13) FMRO, 14) JJRM, 15) JGMD, 16) MAVR, 17) MAGC, 18) AJB, 19) JMAV, 20) JEGS, 21) JHLS, 22) CAPG, 23) AIBC, 24) JFCL, 25) LASM, 26) WAPA, 27) RARP, 28) CAAV, 29) WEAV, 30) MACD, 31) HV, 32) C –o C– AMV, 33) AMUC, 34) JFMV, 35) AAMV, 36) IOM, 37) MAHV, 38) ARV, 39) JEAM, 40) AAMR, 41) RAGH, 42) COCV, 43) NAGG, 44) CALR, 45) WAPP, 46) SEGM, 47) JCOC, 48) JASL, 49) RJP, 50) JIVV, 51) BFMS, 52) LBV, 53) CAGV, 54) JHMG, 55) SAVA, y 56) JMVV.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El solicitante señala que los 56 privados de libertad detallados anteriormente, fueron capturados de forma ilegal en abril de 2022, la mayoría en sus lugares de residencia, por agentes de la Policía Nacional Civil quienes, en la mayoría de los casos, no se identificaron y no portaban su número de ONI en lugar visible, dichas capturas fueron realizadas en diferentes municipios como San Marcos, San Salvador, Panchimalco, Santo Tomás, luego fueron presentados al Juzgado Especializado de Instrucción C-2 de San Salvador, identificándose la causa con la referencia 05-C2-2022(5).

Alega que desde que fueron detenidos no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, y "necesitan ser atendidos para determinar su estado físico y de salud" pero que ya estando judicializado el caso y en el momento de emitir "la interlocutoria" la jueza "no valoró las argumentaciones de sus abogados" quienes explicaban las circunstancias y situación jurídica de cada uno, entre ellos muchos no poseen tatuajes y los que tienen no son alusivos a pandillas o estructura alguna, también carecen de historial delictivo, no mediaron órdenes de captura por escrito que hayan emanado de un juez o por resolución fiscal fundamentada, pues no se cumplen los presupuesto contenidos en los arts. 324, 325, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP).

En las detenciones de las personas aludidas, asegura, no concurren los presupuestos legales que las deben motivar, por tal razón indica que se argumentó en la audiencia de imposición de medidas el cambio de medida, pues la decisión rompe con los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. De forma generalizada se ordenó su internamiento provisional y en todos los casos no se cumple el "binomio procesal" establecido en el art. 329 CPP, no se puede establecer el vínculo a una estructura terrorista o delincuencial, "no existen los elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia de un delito y la probabilidad de la participación" de cada uno de los detenidos. Si bien los delitos por los que están procesados sobrepasan los 3 años de prisión, la jueza no consideró ni atendió las circunstancias de los hechos y menos si alguno de ellos se encontraba gozando de otra medida cautelar. Por las anteriores razones, solicitó hábeas corpus a favor de las personas aludidas.

2. Por otro lado, el señor JJMV presentó escrito mediante el cual indica que el joven *DRGV* fue detenido el 6 de abril de 2022, en su vivienda ubicada en Cantón *********, Panchimalco, cuando regresada de su trabajo en la Alcaldía de Panchimalco, por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes no portaban orden de captura, no se conducían en un vehículo institucional si no particular. Además de ser detenido, fue llevado a otras viviendas de la comunidad, mostrándolo y preguntándole a las personas si lo conocían, posteriormente fue subido al vehículo y fue conducido a un destino desconocido.

El día de la detención, la madre del joven *GV* fue a las bartolinas policiales ubicadas en Panchimalco para preguntar los detalles sobre la detención, saber si se encontraba allí y la razón de su captura, manifestándole que la detención era a efecto de verificar si existían cargos y no le dieron más información. El 8 de abril del mismo año, la madre fue al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Izalco a solicitar información, pero no le brindaron información alguna. También se presentó a la Procuraduría General de la República para que le asignaran un defensor público, solamente le han indicado que ya le fue asignado, pero no ha recibido más información sobre su proceso.

Agrega que no se tiene conocimiento del paradero del joven *GV* ni de las medidas que se tomaron en relación a su libertad, tampoco sobre su situación.

Finalmente, indica que no hay fundamento legal para su detención, ha sido totalmente arbitrario el proceder de los agentes, habiéndose negado a brindar información sobre su paradero, con lo que se violenta su libertad ambulatoria y presunción de inocencia, desconociéndose, a la fecha de presentación de su escrito, su paradero.

Por lo anterior, solicitó hábeas corpus a favor de *DRGV*.

3. También fue presentado escrito por la señora BLBD a favor de *SMB*, señalando que fue detenido el 5 de abril de 2022, en el municipio de Santo Tomás, por agentes de la Policía Nacional Civil. Se encuentra presumiblemente en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Pena de Izalco, de manera arbitraria e ilegal. Añade que no ha habido fundamento legal para su detención dado que no ha cometido delito alguno y no existió orden de detención por escrito para su captura. Por esa razón solicitó hábeas corpus a favor del detenido.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por los peticionarios (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el artículo 13 de la Constitución (Cn.) establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir, que se estén realizando hechos de apariencia delictiva, y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia del 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 141-2008–.

Debe indicarse que el artículo 159 inc. 3° de la Cn., le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito la cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forma parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia del 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 CPP facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares

de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del artículo 323 –ya citado– o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn.–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 del CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el artículo 12 inc. 1º de la Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia del 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. 1. En el caso que nos ocupa, el primer peticionario afirma que las 56 personas detalladas en el prefacio de esta resolución, fueron capturadas sin orden de detención, por agentes policiales, sin permitirles contacto con defensor ni familiares, y la jueza al decretar la detención provisional no valoró los argumentos de la defensa, tampoco cumplió con los presupuestos de dicha medida cautelar (apariencia de buen derecho y peligro de fuga) pues los elementos de convicción fueron insuficientes y no valoró las circunstancias de los hechos ni si alguno tenía medidas cautelares.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el artículo 13 inciso 1º de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los artículos 13 inciso 1° de la Cn., 271, 323, 326 y 327 del CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están

suspendidas, en lo pertinente y con base en el artículo 29 de la Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º de la Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

De ese modo, en este caso, tal como lo plantea el primer peticionario, la sola expresión de insuficientes elementos de convicción que sostengan razonablemente los presupuestos de la detención provisional, que vinculen a las 56 personas capturadas a una estructura delincuencial, no representa una cuestión de trascendencia constitucional que pueda ser analizada por este tribunal, dado que, como se indicó, la valoración de los elementos que obren en el proceso penal seguido contra las personas acusadas, es una exclusiva tarea del juez que tiene a cargo la causa, y no es competencia de esta sala ese tipo de análisis, será aquel quien finalmente determine la ponderación de los indicios y evidencia que existan para sostener la medida cautelar, pero en los términos aludidos por el solicitante es inviable su examen a través de un proceso como este.

Por otra parte, respecto a la falta de valoración de los argumentos de la defensa para adoptar la medida cautelar, por parte de la autoridad demandada, el solicitante, a su vez, expresa que dichos argumentos se refieren a la falta de historial delincuencial de las personas detenidas, a que no tienen tatuajes alusivos a pandillas, a que fueron capturados sin orden motivada y escrita; sin embargo, la consideración o no de esos argumentos, contrastados con los elementos de convicción, es una facultad de jueces y tribunales penales, son ellos quienes determinan el valor que conferirán a los argumentos de las partes, así como la suficiencia o no de estos, lo cual excede del ámbito de competencia de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado el primer peticionario un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

2. Por otra parte, el segundo solicitante, señor MV, refiere que el joven *DRGV*, quien se encuentra dentro del grupo de personas a favor de quienes se promovió este proceso de hábeas corpus por el primer peticionario, fue detenido sin orden de detención, y como dato adicional añade que se desconoce el paradero de dicho joven.

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con lo indicado por el licenciado ********* (primer peticionario), el joven *GV* se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Izalco, y que él es su defensor público designado por el Procurador General de la República.

En consideración de lo anterior, lo señalado por el señor MV, por un lado, no contiene un agravio que pueda ser analizado por este tribunal, pues se ha corroborado con la información brindada por el primer solicitante cuál es el paradero del joven GV y que lo tiene designado como defensor público; y, por otro lado, el resto de señalamientos, en los mismos términos que la primera petición, carecen de trascendencia constitucional y le son aplicables los mismos motivos de rechazo indicados para la petición anterior.

Por tanto, también deberá rechazarse la petición del señor MV, por improcedente.

3. Finalmente, en cuanto al tercer escrito presentado por la señora BLBD, a favor de *SMB*, en el que indica que no existe fundamento legal para su captura por no haber cometido delito alguno y no existir orden de captura; este tribunal advierte que la peticionaria recoge dos aspectos que fueron reclamados previamente por el primer solicitante, los cuales han sido declarados improcedentes.

En tal sentido, la petición de la señora BD deberá ser declarada improcedente por los mismos motivos que la primera solicitud de hábeas corpus.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de: *1) KVM –o M– F, 2) BSAA, 3) JASO, 4) WGNA, 5) SMB, 6) DEFG, 7) FAHL, 8) JSGV, 9) JARR, 10) JBSD, 11) MCR, 12) DRGV, 13) FMRO, 14) JJRM, 15) JGMD, 16) MAVR, 17) MAGC, 18) AJB, 19) JMAV, 20) JEGS, 21) JHLS, 22) CAPG, 23) AIBC, 24) JFCL, 25) LASM, 26) WAPA, 27) RARP, 28) CAAV, 29) WEAV, 30) MACD, 31) HV, 32) C –o C– AMV, 33) AMUC, 34) JFMV, 35) AAMV, 36) IOM, 37) MAHV, 38) ARV, 39) JEAM, 40) AAMR, 41) RAGH, 42) COCV, 43) NAGG, 44) CALR, 45) WAPP, 46) SEGM, 47) JCOC, 48) JASL, 49) RJP, 50) JIVV, 51) BFMS, 52) LBV, 53) CAGV, 54) JHMG, 55) SAVA, y 56) JMVV,* por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada por el señor JJMV, a favor del joven *DRGV*, por tratarse de un asunto que carece de trascendencia constitucional.

3. Declárase improcedente la petición de hábeas corpus incoada por la señora BLBD, a favor del señor *SMB*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

4. *Notifíquese*.

5. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

648-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Fredesvinda Álvarez Bonilla, contra el Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, a favor de los señores *1) TMRA, 2) AAML, 3) HRP, 4) DERG, 5) VELN, 6) AELR, 7) JECS, 8) JESS, 9) LEMM, 10) CATM, 11) LOHL, 12) LFPF, 13) JFJR, 14) FAAA, 15) FAVG, 16) MAPR, 17) IEHT, 18) JLRO, 19) GRR, 20) LEPDC, 21) KGRV, 22) VECQ, 23) LHG, 24) AGGV, 25) ABPT, 26) RIPC, 27) AEO, 28) APC, 29) FAOP, 30) JECT, 31) EAMM, 32) AAVA, 33) RDCB, 34) RHMM, 35) MEOG, 36) JRGR, 37) JEMM, 38) GOHG, 39) JAVV, 40) HJVV, 41) JRMC, 42) JBLR, 43) JCM, 44) ARMV, 45) DAVR, 46) CMAR y 47) HALH*, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios del departamento de San Salvador, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios; *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante lo expuesto afirma que el juez en un decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves y limitarse a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legitima defensa y el debido proceso regulados en nuestra constitución.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con la pri-

vación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual pues no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, y es que el peticionario señala: *i)* que la existencia de la flagrancia no es comprobable con la sola relación del acta de captura; *ii)* la inexistencia de antecedentes penales en algunos detenidos y que otros si bien fueron procesados y condenados, fue por delitos diferentes y alejados de las agrupaciones ilícitas y *iii)* muchos de los detenidos no poseían antecedentes policiales ni penales, pero estaban perfilados como pandilleros o colaboradores, como elementos cruciales para que esta sede compruebe la existencia –o no– del tipo penal acusado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de las personas que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) TMRA, 2) AAML, 3) HRP, 4) DERG, 5) VELN, 6) AELR, 7) JECS, 8) JESS, 9) LEMM, 10) CATM, 11) LOHL, 12) LFPF, 13) JFJR, 14) FAAA, 15) FAVG, 16) MAPR, 17) IEHT, 18) JLRO, 19) GRR, 20) LEPDC, 21) KGRV, 22) VECQ, 23) LHG, 24) AGGV, 25) ABPT, 26) RIPC, 27) AEO, 28) APC, 29) FAOP, 30) JECT, 31) EAMM, 32) AAVA, 33) RDCB, 34) RHMM, 35) MEOG, 36) JRGR, 37) JEMM, 38) GOHG, 39) JAVV, 40) HJVV, 41) JRMC, 42) JBLR, 43) JCM, 44) ARMV, 45) DAVR, 46) CMAR y 47) HALH*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

950-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con treinta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MERC, en contra de la Jueza Especializada de Instrucción de San Salvador (sin especificar cuál), a favor del señor *ARCR*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. La peticionaria refiere que su hijo, el señor *CR*, fue capturado el día "20 de abril de 2022" y que el día 10 de junio del mismo año se celebró audiencia especial de revisión de medidas en el "Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador", en la que la defensa técnica de su hijo presentó todos los arraigos laborales, domiciliares y familiares para que se le sustituyera la detención provisional, ya que no es pandillero y no posee antecedentes penales ni policiales, lo cual se acreditó con las respectivas constancias. Sin embargo, la jueza denegó el otorgamiento de dichas medidas porque el inmueble donde aquel habitaba no se encontraba registrado a su nombre, sino que estaba inscrito a nombre de su abuela ya fallecida y, para dicha autoridad judicial, era necesario que el imputado fuera dueño y poseedor del inmueble para gozar de medidas distintas a la privación de libertad.

Agrega que la defensa propuso a la jueza volver a celebrar la audiencia especial de revisión de medidas para ampliar el arraigo domiciliar, puesto que es permitido por la ley, pero la autoridad demandada le dijo que ya no había más oportunidades. Respecto a este punto, la peticionaria no plantea un reclamo concreto.

Por todo lo anterior solicita hábeas corpus a favor de su hijo y anexa a su escrito certificación de partida de nacimiento del imputado y fotocopia de una declaración jurada.

2. La solicitante presentó un segundo escrito en la secretaría de esta sala el día 16 de agosto de 2022, en la que aclara que la detención del señor *CR* se llevó a cabo el día 29 de marzo de 2022, no en la fecha señalada en su primer escrito, y agrega en original la declaración jurada arriba mencionada.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o en su caso el derecho de integridad física, psíquica o moral de los privados de libertad; por tanto, esta sede se encuentra normativamente impedida para examinar situaciones que no se refieran a preceptos constitucionales que se vinculen con los referidos derechos o cuya determinación se encuentre preestablecida en normas de rango inferior a la Constitución y le corresponda dirimirlas a otras autoridades, siendo estos últimos los denominados asuntos de mera legalidad (improcedencia del 27 de julio de 2015, hábeas corpus 196-2015).

También se ha indicado que es facultad de los jueces penales valorar si los elementos probatorios habidos en un proceso penal son suficientes para establecer la tipicidad, la participación preliminar del incoado y la necesidad de imponerle una restricción a su libertad, debiendo el juzgador, en cada caso, justificar la medida cautelar a decretar (improcedencia del 6 de diciembre de 2017, hábeas corpus 452-2017).

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria pretende que esta sala revise la valoración que hizo la autoridad demandada, durante la audiencia especial de revisión de medidas, de la documentación presentada por la defensa técnica para acreditar el arraigo domiciliar del señor ARCR; afirmando además, que en la misma audiencia se demostró que este no era pandillero y no poseía antecedentes penales y policiales, pretendiendo con tales argumentos que se sustituya su detención provisional.

Sin embargo, se advierte que, en los términos planteados, la peticionaria no propone algún defecto de motivación en la decisión cuestionada que refleje la arbitrariedad o ilegalidad alegada, sino que únicamente denota su inconformidad con la valoración que la autoridad judicial hizo de la documentación presentada para acreditar el arraigo del imputado arriba indicado.

De ahí, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la imposición, sustitución o cese de las medidas cautelares previstas en el proceso penal, pues, si esta sala realizara tal análisis, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor, sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos. En todo caso, de existir inconformidad con la valoración de los arraigos, la credibilidad o suficiencia de las pruebas analizadas para imponer la detención –como en el presente caso–, la ley procesal penal es-

tablece mecanismos para reclamar de ello, como el recurso de apelación, pero no puede pretenderse que esta sala, a partir de argumentos como los planteados, sustituya una medida cautelar por otra.

Cabe agregar que la posibilidad de una audiencia especial de revisión de medidas no es automática, sino que, de conformidad con los artículos 343 y 344 del Código Procesal Penal, una vez presentada la solicitud, el juez califica su pertinencia y que no sea dilatoria o repetitiva, es decir, verificar que se cumplan los presupuestos para tal efecto.

Es así que, al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia

del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *ARCR*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1670-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora BIMDP, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y el Juez Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, a favor del señor *NAMP*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante, quien señala ser tía del señor *MP*, refiere que él fue detenido por agentes policiales el día 28 de junio de 2022, cuando se dirigía a su trabajo y bajo el argumento de que, al tener en el sistema una detención de setenta y dos horas por el delito de resistencia, poseía antecedentes, encontrándose actualmente guardando prisión en la Penitenciaría Central La Esperanza, a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana, en la causa número CP-20-2022-9-C2.

Refiere que la detención del citado señor es ilegal y arbitraria debido a que no se siguió el proceso correcto para su captura, ya que "no se dieron los hechos de la detención como lo exige la ley". Afirma que su sobrino no

fue perseguido ni detenido junto a otras personas y tampoco había cometido un ilícito al momento de su captura, no existiendo flagrancia, por lo que el delito por el que se le acusa no existe; en ese sentido cuestiona que lo que reflejan las actas de detención es "una mentira elaborada" por la policía para atribuirle un ilícito, pues el señor *MP* no pertenece a pandillas ni tiene un solo tatuaje; por ello, pide hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Así, primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); posteriormente se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Esta sala ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa– o, en su caso, de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes (improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018).

2. Este tribunal también ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente

para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. 1. La peticionaria cuestiona la actuación de agentes de la corporación policial, pues afirma que estos plasmaron en las actas de detención "una mentira elaborada" a efectos de capturar al señor *MP*.

Tomando en cuenta la jurisprudencia citada, debe decirse que esta sala no puede analizar situaciones como la propuesta, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido irregularidades en la actuación de las autoridades, lo cual debe ser evaluado por las autoridades judiciales que conocen en materia penal, o en su caso por las autoridades administrativas –fiscalía si se trata de ilícitos o policiales si se refiere al posible cometimiento de faltas–, a través de los mecanismos que la ley confiere para ello. Por tanto, este aspecto de la petición no revela un tema de posible vulneración constitucional, debiendo declararse improcedente.

2. También la solicitante afirma que el señor *MP* fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según sus argumentos– el delito atribuido no existe debido a que su sobrino no pertenece a pandillas y tampoco tiene tatuajes, además que no había delinquido y tampoco existía flagrancia.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de flagrancia o de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno,

siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–,

el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía–art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172 y 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *NAMP*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1718-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cinco minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora TCPC, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción A3 de San Salvador, a favor del señor *IOGP*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante, quien señala ser madre del señor *GP*, refiere que él fue detenido el día 2 de abril de 2022 –no señala la localidad– , encontrándose actualmente guardando prisión en la Penitenciaría Central La Esperanza, a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción A3 de San Salvador, en la causa número A3-004-2022-4C.

Refiere que la detención del citado señor ilegal y arbitraria debido a que no se siguió el proceso correcto para su captura, ya que su hijo no fue perseguido ni detenido junto a otras personas, sino que lo detuvieron a pesar de que manifestó que no era pandillero, por ello afirma que el delito por el que se le acusa no existe. Asimismo, expone que su hijo nunca había estado detenido, que no había cometido ningún delito al momento de su captura y tampoco había flagrancia, por lo que pide hábeas corpus a su favor.

II. La presente solicitud de hábeas corpus ha sido remitida sin firma de la solicitante, pues únicamente plasmó una huella dactilar. Sobre ello ya se ha indicado en la regulación legal del hábeas corpus que cualquier persona puede promoverlo a favor de otra y sus características de celeridad y antiformalismo permiten que la falta de firma no sea un obstáculo para decidir solicitudes de esta naturaleza –improcedencia del 11 de febrero de 2022, hábeas corpus 450-2020–

III. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Así, primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (IV); posteriormente se examinará lo requerido por la peticionaria (V).

IV. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable

que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

V. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor *GP* fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según sus argumentos– el delito atribuido no existe debido a que su hijo no fue perseguido ni detenido junto con otras personas, nunca había estado detenido, no había delinquido y tampoco existía flagrancia.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de flagrancia o de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

VI. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del

caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VII. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172 y 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *IOGP*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

1945-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado PRS, en contra del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Miguel, a favor del señor SAS.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que el señor *AS*, fue detenido el 10 de abril de 2022, sin existir delito, por el hecho de encontrarse en "un lugar de grupos pandilleriles", lo cual no implica su colaboración con esos grupos, por ello consideró que la privación de libertad es ilegal.

Además, expone que el detenido se encuentra procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, en la causa B2-04-01-22-7/8 ante el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Miguel; al respecto indica que en el proceso sólo cuenta con el acta de detención y con ese elemento se decretó la detención provisional del favorecido. Por tales razones solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego, se examinará lo requerido por el solicitante (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° Cn. le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito, lo cual, junto con las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, cuyas limitantes son el apego a la ley y el respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito. Tal diligencia está vinculada con una investigación, y no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de la posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

En ese sentido, los agentes fiscales serán los principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn.–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Finalmente, es ante el juez respectivo –art. 172 Cn.– donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, siendo este quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar correspondiente. Así, la selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

Por tanto, el derecho a la libertad personal no puede ser concebido como un derecho absoluto –como tampoco lo son el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Ahora bien, durante las limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Entonces, si bien es cierto que el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, en este debe plantearse alguna contradicción con la ley suprema, incluso con su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de la libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, de conformidad con las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Ello, puesto que determinar tal cuestión les compete exclusivamente a otras autoridades, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha señalado, por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, que "esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado".

Entonces, cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que "excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso" (improcedencia de 2 de marzo de 2012, hábeas corpus 40-2012).

IV. En el caso que nos ocupa, el solicitante señala que no hay fundamento legal para la detención del señor *AS*, pues afirma que no había cometido delito, que el hecho encontrarse en un lugar considerado de grupos pandilleriles no es motivo suficiente para la privación de libertad. Además sostiene que la detención provisional se fundamentó únicamente con el acta de detención que obra en el expediente.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y la participación delincuencial de una persona son actividades que corresponden exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio, a la policía; luego, a la fiscalía y finalmente, a los tribunales penales –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1749-2022–.

Estas consideraciones también son aplicables a las detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus sigue teniendo vigencia como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, tanto en relación con estas propuestas, como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde otorgar a esta sala –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1759-2022–.

En ese sentido, determinar que se ha configurado de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la imposición de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes. Por tanto, a esta sede no le corresponde pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal, pues si bien el peticionario alega que un único elemento fue considerado para decretar la detención provisional, sus alegatos se centran en los motivos de la captura, lo cual corresponde analizar al juez penal competente.

Así, se advierte que el solicitante no ha argumentado un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, en consecuencia, su petición debe declararse improcedente.

V. En cuanto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito, dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto del tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos. Se tiene por comisionado al licenciado JMCP para recibir notificaciones.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inciso 3°, 172, 193 ordinal 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor SAS, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

258-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 2178-22, de fecha 5 de abril de 2022, suscrito por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovido en contra de un juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, a su favor por el señor *EMPZ*, condenado por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y siembra y cultivo –de drogas–.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta que, a través de sentencia que se encuentra firme, fue condenado por la autoridad demandada a una pena total de once años de prisión, por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico –cinco años– y siembra y cultivo –seis años–.

Reclama que el juez sentenciador vulneró los principios de inocencia, legalidad y *ne bis in ídem*, al haberle condenado en la modalidad de concurso real y, por tanto, duplicarle la pena por un mismo hecho y no aplicar lo establecido en el art. 7 numeral 3 del Código Penal (CP) referente al concurso aparente de leyes y específicamente el principio de consunción, regla que determina "[...] la realización de un tipo penal de mayor gravedad, absor[b]e a los supuestos de hecho de menor gravedad, de ahí que siempre se aplica el precepto grave [...] uno de los fundamentos del concurso aparente de leyes, radica en la prohibición de penalizar doblemente o múltiplemente un único hecho [...] cuando el hecho generador es uno sólo [...]" (sic).

Concluye afirmando que se le debió condenar únicamente por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, a la pena de cinco años de prisión y que el delito de siembra y cultivo debió ser subsumido.

En ese sentido, solicita que se adecue su pena conforme al concurso aparente de leyes.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Esta sala ha estipulado que el ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se

propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

2. También, se ha establecido como uno de los límites a las atribuciones conferidas constitucionalmente a esta sala, el impedimento de analizar los elementos de convicción que rodean al hecho y que fundamentan las decisiones que adoptan jueces y tribunales penales, pues ello es atribución exclusiva de dichos jueces y su arrogación implicaría convertirse en un tribunal de instancia más, capaz de revisar las actuaciones del resto de autoridades judiciales bajo esas circunstancias –improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014–.

De modo que, la falta de señalamiento expreso del agravio generado por la autoridad contra quien se reclama, con las características antes mencionadas, o pretender que este tribunal revise los elementos de convicción que llevan a las autoridades a adoptar las decisiones en torno a las causas penales, constituyen vicios en la pretensión e impiden que pueda continuarse con su trámite normal.

3. Además, se ha indicado que los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia de una doble o múltiple persecución son: identidad en la persona, identidad del objeto de la persecución e identidad de la causa de persecución.

De manera que para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate de la misma persona perseguida penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada.

Para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona –sobreseimiento del 23 de junio de 2009, hábeas corpus 223-2007–.

IV. De acuerdo a lo expuesto se advierte que lo planteado por el señor *EMPZ* está orientado a que esta sala determine que en su condena ha existido doble persecución pues señala que debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 del CP, pero la autoridad demandada lo condenó por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y siembra y cultivo en concurso real, en ese sentido pretende que se adecue su pena.

Como se ha referido, la protección recogida en la prohibición de doble juzgamiento implica la imposibilidad que una misma conducta delictiva generada a partir de un mismo hecho pueda ser conocida a través de más de un proceso penal. Sin embargo, de la lectura de la solicitud de este proceso constitucional se evidencia que lo expuesto por el peticionario se aleja del contenido de esta garantía, en la medida en que se trata de un solo proceso penal en el que se le atribuyó los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y siembra y cultivo, que el juez consideró ocurrieron en concurso real.

Entonces, lo argumentado por el peticionario para fundamentar su pretensión en este hábeas corpus sobre la identidad de hechos acusados parte de su errónea concepción sobre los requisitos exigibles para establecer la existencia de la inobservancia a la garantía mencionada y evidencia únicamente su desacuerdo con lo decidido por el juzgador al señalar el concurso de delitos y con que no se haya utilizado la regla jurídica contemplada en el art. 7 número 3 del CP, aplicable cuando el precepto penal complejo pueda absorber a los preceptos que sancionan las infracciones consumidas en este.

No obstante, se reitera, que el análisis y determinación de procedencia sobre dicha norma, así como la determinación de la pena o su adecuación, son cuestiones que encuentran reservadas al ámbito de competencia de jueces y tribunales penales en el marco del enjuiciamiento de conductas delictivas, con base en los elementos de prueba incorporados y, como consecuencia, no puede conformar el objeto de análisis de este proceso constitucional, el cual, como se dijo arriba, se encuentra limitado a un examen exclusivamente constitucional de acciones u omisiones que transgredan o amenacen los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Es así que en el reclamo planteado no se advierte alguna circunstancia vulneradora de derechos constitucionales sino una mera inconformidad con la condena emitida y con las apreciaciones judiciales sobre los hechos atribuidos, en razón de ello deberá declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *EMPZ*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

268-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 2194-22, con fecha 4 de abril de 2022, suscrito por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador, por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovida en contra de un tribunal sentencia de San Salvador, a su favor por el señor *JCG*, condenado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada en su modalidad continuada.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta que mediante sentencia que se encuentra firme, fue condenado por la autoridad demandada –a la cual relaciona como integrante del Tribunal "Tercero" y en otro apartado como del "Primero", de Sentencia de San Salvador– a la pena de veintiséis años y seis meses de prisión.

Reclama que el juez sentenciador vulneró los principios de inocencia, legalidad y *ne bis in ídem*, al haberle condenado en la modalidad continuada y, por tanto, "duplicarle" la pena por "un mismo hecho" y no aplicar lo establecido en el art. 7 numeral 3 del Código Penal (CP) referente al concurso aparente de leyes y específicamente el principio de consunción, regla que determina "[...] la realización de un tipo penal de mayor gravedad, absor[b]e a los supuestos de hecho de menor gravedad, de ahí que siempre se aplica el precepto más grave [...] uno de los fundamentos del concurso aparente de leyes, radica en la prohibición de penalizar doblemente o múltiplemente un único hecho [...] cuando el hecho generador es uno sólo [...]" (sic).

Concluye afirmando que se debió condenarle únicamente por el delito de agresiones sexuales agravadas, a la única pena de prisión por un solo delito y así "[...] la modalidad continuada debe ser subsumido [...]"

En ese sentido, solicita que se adecue su pena conforme al concurso aparente de leyes por un solo delito.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. En el marco del examen liminar que debe realizar esta sala a los planteamientos efectuados por el solicitante, se considera necesario referirse: 1) al objeto de control de un proceso constitucional como este; 2) los límites que tiene el tribunal con respecto a los temas que son sometidos a su conocimiento, vinculados con atribuciones de otras autoridades judiciales; y, 3) los requisitos para tener por establecido la inobservancia del principio de única persecución –*non bis in ídem*– de acuerdo a la jurisprudencia.

1. Esta sala ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

2. Se ha establecido como uno de los límites a las atribuciones conferidas constitucionalmente a esta sala, le impide analizar los elementos de convicción que rodean al hecho y que fundamentan las decisiones que adoptan jueces y tribunales penales, pues ello es atribución exclusiva de ellos y su arrogación implicaría convertirse en un tribunal de instancia más, capaz de revisar las actuaciones del resto de autoridades judiciales bajo esas circunstancias –improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014–.

De modo que, la falta de señalamiento expreso del agravio generado por la autoridad contra quien se reclama, con las características antes mencionadas, o pretender que este tribunal revise los elementos de convicción que llevan a las autoridades a adoptar las decisiones en torno a las causas penales, constituyen vicios en la pretensión e impiden que pueda continuarse con su trámite normal.

3. Además se ha indicado que los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia de una doble o múltiple persecución son: i) identidad en la persona, ii) identidad del objeto de la persecución y iii) identidad de la causa de persecución.

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate de la misma persona perseguida penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona –sobreseimiento del 23 de junio de 2009, hábeas corpus 223-2007–.

IV. De acuerdo a lo expuesto se advierte que lo planteado por el señor *JCG* está orientado a que esta sala determine que en su condena ha existido doble persecución, ya que señala que en su proceso debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 del CP, dado que la autoridad demandada lo condenó por un delito bajo la modalidad de continuado.

Como se ha referido, la protección recogida en la prohibición de doble juzgamiento implica la imposibilidad que una misma conducta delictiva generada a partir de un mismo hecho pueda ser conocida a través de más de un proceso penal. Sin embargo, de la lectura de la solicitud de este proceso constitucional se evidencia que lo expuesto por el peticionario se aleja del contenido de esta garantía, en la medida en que se trata de un solo proceso penal en el que se le atribuyó el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada que el juez consideró en modalidad continuada.

Entonces, lo argumentado por el peticionario para fundamentar su pretensión en este hábeas corpus sobre la identidad de hechos acusados parte de su errónea concepción sobre los requisitos exigibles para establecer la existencia de la inobservancia a la garantía de prohibición de doble juzgamiento y evidencia únicamente su desacuerdo con lo decidido por el juzgador en cuanto a la modalidad de ejecución del delito y con que no se haya utilizado la regla jurídica contemplada en el art. 7 número 3 del CP, aplicable cuando el precepto penal complejo pueda absorber a los preceptos que sancionan las infracciones consumidas en este.

No obstante, se reitera, que el análisis y determinación de procedencia sobre dicha norma se encuentra reservada al ámbito de competencia de jueces y tribunales penales en el marco del enjuiciamiento de conductas delictivas, con base en los elementos de prueba incorporados y, como consecuencia, no puede conformar el objeto de análisis de este proceso constitucional, el cual, como se dijo arriba, se encuentra limitado a un examen exclusivamente constitucional de acciones u omisiones que transgredan o amenacen el derecho de libertad física o integridad personal.

Es así que en el reclamo planteado no se advierte alguna circunstancia vulneradora de derechos constitucionales sino una mera inconformidad con la condena emitida y con las apreciaciones judiciales sobre los hechos atribuidos y en razón de ello deberá declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor JCG, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

992-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día nueve de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado *********, en contra del Juez Especializado de Instrucción "C-2" de San Salvador, a favor del señor *AAAP*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que el señor *AP* fue capturado en el municipio de Cuscatancingo, departamento de San Salvador en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su detención y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para el imputado presentando como indicios: *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se estableció la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de su representado.

No obstante, afirma que con fecha 16 de mayo de 2022, el juez, en una decisión sin motivación, decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquel, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves, limitándose a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fue privado de libertad no se le ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no ha sido atendido para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legítima defensa y el debido proceso.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras

autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. El solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentra el señor *AAAP*, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del imputado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción "C-2" de San Salvador.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual pues no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional; y es que el peticionario señala: *i)* que la existencia de la flagrancia no es comprobable con la sola relación del acta de captura; *ii)* la inexistencia de antecedentes penales ni policiales y *iii)* a pesar de no tener los mencionado antecedentes, en las delegaciones policiales se encuentra perfilado como pandillero o colaborado, como elementos cruciales para que esta sede compruebe la existencia –o no– del tipo penal acusado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal del detenido.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto del detenido con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que requiera atención médica, en los términos planteados, no se trasladan argumentos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se adviertan alguna afectación constitucional.

En consecuencia, al no haber argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *AAAP*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—–O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

275-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a su favor por el señor *NJFC*, condenado por el delito de homicidio.

Analizada la solicitud presentada se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario manifiesta que de su condena interpuso recurso de casación el cual fue conocido por la autoridad demandada según referencia 249C2018 en el que emitió "sentencia de reenvío". Sostiene que planteó una segunda casación en la que además solicitó la excusa de los magistrados de la Sala de lo Penal –con referencia con referencia 504C2020–, quienes justificaron su conocimiento del recurso en que en la primera sentencia "no resolvieron sobre el objeto del proceso" sino únicamente respecto de la transgresión a las reglas de la sana crítica, pero a su juicio esto sucedió porque ya sabían que su detención provisional había sobrepasado los treinta y seis meses y a fin de no cesar la misma por el tiempo que tardaría el trámite de la excusa admitieron el recurso.

Alega que lo referido por los magistrados no es cierto debido a que estos "sí conocieron del objeto del proceso; pero no resolvieron sobre todo", sin embargo, hicieron valoraciones sobre la prueba, en consecuencia, a su criterio han comprometido su objetividad y vulnerado lo establecido en el art. 16 Cn concerniente a la imparcialidad del juzgador, por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Esta sede también ha recibido hábeas corpus clasificado con el número 434-2021, mediante oficio número 2093, de fecha 30 de noviembre de 2021, procedente de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, por medio del cual se remite la solicitud presentada a su favor por el señor NJFC, contra los ex magistrados de la Sala de lo Penal, en la que refiere que fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, habiendo sido confirmada la decisión

por la cámara respectiva, de la cual presentó recurso de casación su defensa técnica –marcado con la referencia 249C2018–, en el que la autoridad demandada resolvió que el recurso de apelación fuera conocido por la Cámara de la Segunda Sección de Occidente con sede en Sonsonate.

Sostiene que la cámara en mención también confirmó la sentencia definitiva, razón por la cual le corrió nuevamente término para la interposición del recurso de casación y al presentarlo solicitó que los ahora ex magistrados de la Sala de lo Penal que previamente habían conocido se excusaran y se nombraran a los suplentes en el "incidente casacional" con referencia 504C2020.

Reclama que los ex magistrados de la Sala de lo Penal argumentaron que la primera decisión que tomaron se basó en la falta de fundamentación por inobservancia a las reglas de la sana crítica de la sentencia emitida por la cámara y no resolvieron el objeto del proceso, por lo tanto, no existía impedimento para examinar el medio impugnativo, sin embargo, a su juicio estos debieron excusarse "por sanidad procesal" y evitar conocer dos veces del mismo asunto, por lo que considera que se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el art. 16 Cn, pues ya habían emitido criterio al que llegaron luego de analizar la prueba.

Antes de verificar si es procedente analizar la petición presentada ante la cámara, deben hacerse las consideraciones siguientes:

1. De acuerdo a resolución del 29 de noviembre de 2021, pronunciada por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, el traslado de la solicitud de este proceso constitucional se fundamenta en la declaratoria de incompetencia territorial para conocerla, debido a que la autoridad demandada tiene su sede en San Salvador, por lo tanto corresponde a una circunscripción fuera de los límites territoriales de aquel tribunal, ello en atención a la jurisprudencia emitida por esta sala en el hábeas corpus 260-2013R, considerando que es a este tribunal al que le corresponde conocer del reclamo planteado.

2. La jurisprudencia constitucional, en cuanto a la competencia territorial de las cámaras de segunda instancia que no residían en la capital, para conocer de hábeas corpus ha indicado que deben aplicarse las reglas dispuestas en el art. 33 del Código Procesal Civil y Mercantil que regula: "Será competente por razón del territorio, el Tribunal del domicilio del demandado..."

En la solicitud presentada, se reclama vulneración constitucional en perjuicio del señor NJFC, atribuida a los ex magistrados de la Sala de lo Penal; por lo que al haberse planteado la petición constitucional en contra de la mencionada sala cuya sede se encuentra en la capital de la República –artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica Judicial–, efectivamente la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente carece de competencia territorial

para conocer y decidir la solicitud de hábeas corpus en relación con esa autoridad y, consecuentemente, es a este tribunal al que le corresponde ejercer su función jurisdiccional en este caso.

Esto es así porque, de conformidad con el artículo 247 de la Constitución, el hábeas corpus puede plantearse ante esta sala y ante las cámaras de segunda instancia que no residan en la capital sin que, en el primero de los casos, exista restricción relativa al ámbito territorial; en ese sentido, las reglas indicadas únicamente están dispuestas para las referidas cámaras con el objeto de delimitar, conforme a la normativa, aplicable el ejercicio de su función jurisdiccional en materia constitucional.

III. Determinado lo anterior, es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la acumulación de procesos (IV), luego a la jurisprudencia relacionada con el caso (V) y posteriormente se examinará lo requerido por el peticionario (VI).

IV. Como se advierte, las dos solicitudes han sido presentadas a su favor por el señor NJFC, en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal, en ambos casos se refiere a los mismos recursos de casación presentados marcados bajo la referencia 249C2018 y 504C2020, proporcionando el mismo cuadro fáctico, adicionando información complementaria en el 434-2021; así, en ambos hábeas corpus se reclama en común de la vulneración al principio de imparcialidad del juzgador en la pena de prisión.

De modo que carece de sentido su tramitación independiente o separada, en sendos procesos, pues ambas solicitudes tienen por objeto cuestionar la pena de prisión del señor FC.

Para estos casos existe la acumulación de procesos, con la que se pretende asegurar la uniformidad o consistencia en los criterios de resolución de las distintas peticiones, evitando el riesgo de decisiones contradictorias, además de concentrar el trámite en un solo expediente y economizar las gestiones procesales, reduciéndolas a las que sean indispensables –auto del 30 de octubre de 2015, hábeas corpus 119-2014–.

La Ley de Procedimientos Constitucionales no regula dicha figura y por ello debe aplicarse de forma supletoria el trámite establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, –artículos 105 y siguientes–. En vista del peso objetivo de las razones para acumular, de la menor relevancia del principio dispositivo en los procesos constitucionales (o la obligación de impulso oficioso o por iniciativa del tribunal), y de la exigencia citada de economía procesal, es innecesario generar otra actividad jurisdiccional antes de ordenar la tramitación conjunta de las solicitudes.

En consecuencia, se ordenará la acumulación del hábeas corpus 434-2021 al presente.

V. 1. Este proceso constitucional tiene por objeto controlar actuaciones u omisiones de las autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad personal de los solicitantes, de

manera que estos, al efectuar sus peticiones, deben señalar con precisión dichos aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente su petición y que permiten que la misma pueda ser analizada en esta sede. De lo contrario, al plantearse reclamos que constituyan meras inconformidades con decisiones adoptadas por autoridades judiciales, este tribunal se encontraría imposibilitado para continuar con el examen de la queja –improcedencia del 18 de febrero de 2011, hábeas corpus 53-2011–.

2. Esta sala ha señalado que, en relación con actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad e independencia judiciales, existen procedimientos establecidos en la ley para cuestionar este tipo de asuntos en el proceso penal. Adicionalmente, hay un régimen disciplinario para funcionarios judiciales y autoridades administrativas. Ya ha dicho esta sala que determinar asuntos como los alegados se encuentra a cargo de otras autoridades –improcedencia del 1 de septiembre de 2021, hábeas corpus 346-2019–.

VI. El peticionario centra su reclamo en el desacuerdo con la resolución emitida por los ex magistrados de la Sala de lo Penal en donde decidieron conocer del recurso de casación justificando que en la primera sentencia no resolvieron sobre el objeto del proceso sino únicamente de la transgresión a las reglas de la sana crítica, circunstancia que para el solicitante compromete la imparcialidad de la autoridad demandada.

El señor NJFC, se limita a exponer su mera inconformidad con las razones brindadas por la autoridad demandada en la decisión cuestionada, haciendo conjeturas sobre las razones de su decisión, y por otra parte, el peticionario en sus escritos también relaciona extractos de la resolución emitida, los cuales se advierte resultan coherentes con los limites dispuestos por la legislación procesal penal para esta figura legal, es decir, justificaron la no admisión de la recusación por los motivos incoados ya que ellos indicaron que no resolvieron sobre el fondo del asunto.

Por ende, el rechazo de la recusación planteada, en los términos expuestos, no revela argumentos que evidencien un tema de posible vulneración en el derecho de libertad física del condenado, sino un asunto de mera legalidad derivado de la actuación de la autoridad que demanda, pues de entrar a conocer implicaría que esta sala actué como un tribunal de instancia; por lo cual, lo planteado carece de trascendencia constitucional que deberá declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad a lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respetivos.

POR TANTO, con base en las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Acumúlese* al presente proceso el hábeas corpus clasificado con la referencia 434-2021.

2. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada a su favor por el señor *NJFC*, por alegarse asuntos de mera legalidad.

3. *Notifíquese*.

4. *Archívese* oportunamente.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

1013-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de habeas corpus ha sido promovido por la señora WMEF en contra del Juez Especializado de Instrucción "C-2" de San Miguel, a favor de la señora *EAF*, procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones·

I. La solicitante refiere ser hija de la señora AF, quien fue detenida el día 26 de abril de 2022 por el delito aludido, cuando se encontraba en su lugar de trabajo y no estando reunida con nadie. Agrega que posteriormente se realizó audiencia de imposición de medidas en el -Juzgado Especializado C2 de la ciudad de San Miguel". Considera que se le está vulnerando su derecho a la "libertad ambulatoria", pues no pertenece a pandillas y, si bien realizaba trabajo de utilidad pública por condena de tres años (aceptó un procedimiento abreviado), es una persona trabajadora y responsable que -no se mete con nadie".

Señala que el referido juez de instrucción le causó agravio al remitirla injustamente al Centro de Penitenciario de Jucuapa", pues su reinserción a la sociedad se interrumpió y no podrá desarrollar las actividades laborales que cada día realizaba. Por tal razón solicita habeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva

y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, los artículos 323. 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional. por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales —no exclusivos— promotores de la acción penal —art. 193 ord. Cn—, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente —o archivarse— y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente —art. 172 Cn.—, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados —por su imparcialidad, su carácter técnico jurídico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características—, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación —o no— del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1° Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto —al igual que el resto de derechos fundamentales—, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el habeas corpus. este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el habeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado. pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y. en consecuencia, la tramitación del habeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria cuestiona la captura y posterior detención provisional decretada a la señora *AF*, considerando que se le ha causado agravio, pues, además de no pertenecer a grupos de pandillas, se encontraba en cumplimiento de trabajo de utilidad pública y la actual restricción interrumpe su reinserción a la sociedad y le impide el desarrollo de sus actividades.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Tal consideración es aplicable respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc.2º y 13 inc.2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la selección de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la

existencia o no de un delito. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Debe mencionarse que la solicitante demanda a una autoridad judicial en su escrito, sin embargo, no señala actuación u omisión concreta de esta o algún defecto de motivación que pueda generar vulneración a derechos constitucionales, evidenciándose únicamente una mera inconformidad con la prisión preventiva que actualmente cumple la señora AF, principalmente por interferir con el trabajo de utilidad pública que cumplía en otro proceso penal, lo cual no constituye un reclamo de trascendencia constitucional.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino una cuestión de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan —libertad física e integridad personal de los detenidos—, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del habeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía —art. 174 Cn.—.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas. cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente -en relación con años precedentes- se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de habeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del

caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar -más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad- el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia -sentencia del 30 de mayo de 2022, habeas corpus 300- 2019-, tal como ocurre con las solicitudes de habeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2°, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4° de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de habeas corpus incoada a favor de la señora *EAF*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3 *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1807-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora KMBV, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, a favor del señor *EEBV*.

Analizada la petición, se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor KMBV es su hermano, quien fue detenido el 5 de abril de 2022, cuando ambos se conducían a bordo de una motocicleta y fueron interceptados por una patrulla policial, ordenándoles los agentes orillarse, afirma que les realizaron una requisa y, luego de consultar el sistema, señalaron que el capturado "estuvo detenido por drogas cuando era menor de edad", situación por la que estuvo en prisión por dos años; agrega que los agentes decidieron detenerlo sin ninguna explicación y le atribuyeron el delito de agrupaciones ilícitas, a pesar de no haber cometido ningún ilícito, pues no había flagrancia, ni fue perseguido

o detenido junto a otras personas. Por ello, considera que la detención es ilegal y que lo consignado en las actas de captura elaboradas por policías no es cierto.

Además, expone que el detenido es procesado en el Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, en el proceso marcado bajo la referencia 02-2022-C2-A2, y se encuentra recluido en el "Centro Penal de Izalco"; al respecto expone que se ha vulnerado "la garantía constitucional de la libertad ambulatoria". Por tales razones solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero, se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego, se examinará lo requerido por la solicitante (IV).

III. 1. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° Cn. le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito, lo cual, junto con las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, cuyas limitantes son el apego a la ley y el respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito. Tal diligencia está vinculada con una investigación, y no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de la posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

En ese sentido, los agentes fiscales serán los principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn.–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Finalmente, es ante el juez respectivo –art. 172 Cn.– donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, siendo este quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar correspondiente. Así, la selección de la medida precautoria de la

detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

Por tanto, el derecho a la libertad personal no puede ser concebido como un derecho absoluto –como tampoco lo son el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Ahora bien, durante las limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Entonces, si bien es cierto que el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, en este debe plantearse alguna contradicción con la ley suprema, incluso con su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de la libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, de conformidad con las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Ello, puesto que determinar tal cuestión les compete exclusivamente a otras autoridades, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha señalado, por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, que "esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado".

Entonces, cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que "excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso" (improcedencia de 2 de marzo de 2012, hábeas corpus 40-2012).

2. Esta sala ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes (improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018).

IV. En el caso que nos ocupa, la solicitante señala que no hay fundamento legal para la detención del señor *KMBV*, pues afirma que este no ha cometido delito, ni fue perseguido o privado de libertad junto a otras personas –como afirma que consta en las actas de captura– o en flagrancia.

Al respecto, debe señalarse que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y la participación delincuencial de una persona son actividades que corresponden exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio, a la policía; luego, a la fiscalía y finalmente, a los tribunales penales –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1749-2022–.

Estas consideraciones también son aplicables a las detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus sigue teniendo vigencia como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, tanto en relación con estas propuestas, como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde otorgar a esta sala –improcedencia de 13 de marzo de 2023, hábeas corpus 1759-2022–.

En ese sentido, determinar que se ha configurado un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la imposición de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes. Por tanto, a esta sede no le corresponde pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal, pues si bien es cierto que la peticiona-

ria alega la falta de motivación contra la decisión que impuso la detención, sus alegatos se centran en desvirtuar los hechos que constan en el acta de captura, lo cual corresponde analizar al juez penal competente.

Finalmente, respecto a la mención genérica que la peticionaria realiza sobre la consulta de antecedentes penales de menores de edad por agentes policiales al momento de la detención, no se traslada un reclamo concreto, por lo tanto, no se propone una queja de carácter constitucional que pueda ser analizada en esta sede.

Así, se advierte que la solicitante no ha argumentado un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, en consecuencia, su petición debe declararse improcedente.

2. En cuanto al reclamo referido a supuestas discordancias entre la forma en que ocurrió la captura y el relato de los hechos presentado por los agentes policiales, cabe destacar que, según la jurisprudencia constitucional, esta sala no puede analizar situaciones como la propuesta, pues no es parte de sus competencias determinar si han existido irregularidades en la actuación de las autoridades, lo cual debe ser evaluado por las autoridades judiciales que conocen en materia penal, o en su caso por las autoridades administrativas –fiscalía si se tratara de ilícitos o policiales si se refiere al posible cometimiento de faltas–, a través de los mecanismos que la ley confiere para ello. Por tanto, este aspecto de la petición no revela un tema de posible vulneración constitucional, debiendo declararse improcedente.

V. En cuanto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito, dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas

referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto del tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos. Se tiene por comisionado al licenciado Jhonni Melvin Calderón Pineda para recibir notificaciones.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inciso 3°, 172, 193 ordinal 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *EEBV*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1885-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora SMCM, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción B3 de San Salvador, a favor del señor *EEGC*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor *GC* fue detenido el 3 de abril de 2022, en la colonia ********** municipio de Soyapango, junto a OAVC, luego de correr al ver a una patrulla que se estacionó frente a ellos. Refiere que la madre del joven VC consultó a los policías si los dejarían libres y le contestaron que no, ya que habían denunciado, vía telefónica, que dos pandilleros estaban molestando en el lugar y que, al consultar el sistema, dichas personas aparecían perfiladas como pandilleras, lo cual refiere que es falso, pues aquel no tiene relación con las pandillas.

Expone que el señor *GC* fue procesado por el delito de posesión y tenencia, por lo que estaba yendo a firmar al Departamento Prueba y Libertad Asistida, siendo dicho antecedente por el que han pretendido vincularlo con pandillas, a lo cual el juez accedió. Finalmente expresa que, posterior a dicha situación, aquel no tuvo ningún problema con la ley. Por esas razones considera ilegal la detención provisional impuesta. Adjunta a su solicitud documentos para comprobar las afirmaciones realizadas.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha referido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico jurídico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala

revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria se limita a afirmar que la captura del señor *EEGC* es ilegal, ya que –según refiere– no pertenece a pandillas y su detención se fundamenta en el antecedente judicial del referido señor por el delito de posesión y tenencia.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes.

Además, la misma peticionaria refiere que el juez de instrucción decretó detención provisional en contra del señor EEGC, respecto de la cual no expone algún defecto de motivación o de otra índole que pudiera vulnerar los derechos del procesado tutelados a través del hábeas corpus. Más bien expresa una mera inconformidad con la captura y la medida privativa de libertad impuesta, por considerar que esta se ordenó como consecuencia de un posible antecedente judicial, asunto cuyo análisis es delegado legalmente al juez con competencia penal; no correspondiendo a esta sede pronunciarse sobre la existencia o no de un ilícito penal o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema. Además existen recursos en la normativa procesal penal para que se planteen desacuerdos con la medida cautelar decretada, inclusive aquellos sin trascendencia constitucional, como el alegado.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *EEGC*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

207-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1770-22, fecha 21 de marzo de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la

Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito mediante el cual se promueve hábeas corpus contra uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, a su favor por el señor *RAMC*, condenado por el delito de violación en menor e incapaz agravada.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad demandada a la pena de veinte años de prisión por el delito antes mencionado y que desde su captura a la fecha de la presentación de la solicitud ha cumplido ocho años y dos meses de reclusión en el Complejo Penitenciario La Esperanza, a la orden el Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Miguel.

Sostiene que, con la sentencia antes relacionada se vulneró su presunción de inocencia y el principio de lealtad por parte de la fiscalía, quienes no investigaron a profundidad los hechos por los que fue "condenado injustamente".

Reclama que ha enviado un escrito al Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, por medio del cual ha solicitado "audiencia previa de revisión de caso con el perdón de la víctima", conforme a lo establecido en los artículos del 489 al 497 y 440 del Código Procesal Penal (CPP) y 96 y 107 del Código Penal (CP), sostiene que su hijo fue la víctima del delito por el cual está condenado y –a su criterio– si este interviene en el proceso dirá la verdad "[...] al contar todo lo que la tía materna le metió en su mente para hacer[l]e daño [...] por problemas familiares económicos, entre la antes mencionada y [su] persona [...]".

Finalmente solicita se nombre juez ejecutor a efecto que intervenga a la tía de su hijo y a este, para que ambos relaten la verdad, de igual manera se entreviste a sus hijas para que den fe de su comportamiento en el tiempo que vivió con ellas, pues se considera una persona honesta y trabajadora.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión III y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal ha establecido como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mininamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal (improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020).

IV. El solicitante, en síntesis, refiere que ante la autoridad demandada ha solicitado "audiencia previa de revisión de caso con el perdón de la víctima", asimismo, sostiene que de intervenir su hijo –la víctima– dirá la verdad de cómo sucedieron los hechos y que el proceso se debió a la manipulación de una persona que buscaba hacerle daño al condenado.

Esta sala advierte que el peticionario se limita a referir que presentó un escrito por medio del cual solicitó "audiencia previa de revisión de caso con el perdón de la víctima", sin embargo, no indica la fecha de la petición o si esta ha sido resuelta o no y los términos de su planteamiento; es decir, no identifica de forma clara una actuación u omisión de la autoridad que pretende demandar que esté incidiendo en los derechos tutelados mediante este proceso, así tampoco refiere los argumentos que sustentan su reclamo y que evidencien situaciones de trascendencia constitucional.

Por tanto, en los términos propuestos no se trasladan posibles violaciones constitucionales que puedan ser verificadas por este tribunal, pues el peticionario intenta objetar en esta sede los hechos que fueron tenidos por válidos en su proceso penal aceptándolos por un lado, al requerir el perdón de la víctima y, luego, contradiciéndolos, haciendo de esa forma aseveraciones imprecisas sobre lo que señala fue requerido ante el juez.

Por lo cual, lo propuesto se refiere a cuestiones que no pueden ser conocidas por este tribunal por ser meras inconformidades con la condena impuesta y que carecen de relevancia constitucional; en consecuencia, se emitirá declaratoria de improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *RAMC*, por reclamar un asunto sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2114-2022

Relaciones:
2358-2022, 2119-2022, 2353-2022. 1676-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Vilma Estela Villalobos, en contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, a favor de los señores *OATC y JDTC*, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que los señores *TC* fueron capturados el día 10 de julio de 2022 y se les realizó audiencia de "imposición" el día 20 del mismo mes y año.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual –según indica– al ser aplicada de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en situación de vulnerabilidad –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y alega que en tal sentido, la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué motivos lo alega–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentran los señores *TC*, por considerar que la misma se aplicó de manera discrecional, vulnerando su derecho de libertad física, pues los indicios aportados por fiscalía "no llenan los requisitos" para su imposición y pide que se restablezca la libertad de los procesados por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin detallar nada sobre esto último–.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los procesados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del juez de la causa.

Y es que, si bien se alega falta de requisitos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede determine la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada a los procesados.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en situación de vulnerabilidad y pide se restablezca la libertad física de los imputados mencionando un supuesto exceso en la detención provi-

sional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de las personas que se pretende favorecer.

En todo caso, respecto a la restricción de libertad en que se encuentran los señores *TC*, la peticionaria puede hacer uso de los mecanismos que contempla la normativa procesal penal ante el juez de la causa, incluso también de los medios recursivos respectivos para plantear las discrepancias que, alude, contiene la decisión judicial que sustenta la privación de libertad de los detenidos.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del

caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores *OATC y JDTC*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

672-2022

Relaciones:

767-2022, 1713-2022, 2547-2022, 2612-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora YEDDA, contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a favor del señor *CDAD*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria refiere ser madre del señor AD, quien fue detenido el día 19 de junio de 2022, en su lugar de residencia ubicado en Huizúcar, La Libertad, por miembros del ejército y agentes policiales, quienes al presentarse al lugar manifestaron que se lo llevarían detenido, sin expresarle por qué motivo, y a pesar de los reclamos y súplicas de la familia los captores señalaron que "se encontraba en la lista negra".

Expone que el detenido es una persona trabajadora y su captura se realizó bajo el régimen de excepción decretado a nivel nacional, siendo ilegal, arbitraria y sin fundamento, vulnerándose garantías judiciales como el debido proceso y, además, afirma que se ha atentado contra "su dignidad física, moral y la de su familia" pues la detención se sustenta en percepciones subjetivas de los captores, por todo lo cual solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido en la solicitud (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamenta-

das, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor AD fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según refiere– no le fueron manifestados los motivos, por lo cual esta carece de fundamento,

basándose en percepciones subjetivas de los captores, alegando que se han vulnerado garantías judiciales, así como su integridad física, moral y la de su familia –sin exponer las razones de ello–.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesario el informe a la institución fiscal y la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º, de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *CDAD*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1175-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora BAGR, contra el Juez Especializado de Instrucción "B3" de San Salvador, a favor de la señora *MNGR*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que la señora MN fue detenida el día 25 de abril de 2022, en su lugar de trabajo ubicado en el municipio de Soyapango, de manera arbitraria o ilegal, sin tener una orden de detención o pruebas en su contra.

Adjunta escrito de "formulario de registro", en el que afirma que la referida no posee antecedentes penales o vínculo alguno con estructuras, que se han presentado todos los amigos y pruebas de su inocencia "pero sigue en detención en la cárcel de Apanteos" y que es madre soltera de tres hijos.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura

correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona (sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008).

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación (sentencia de 30 de septiembre de 2002, habeas corpus 115-2002).

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2° del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales —no exclusivos— promotores de la acción penal — art. 193 ord. 4° Cn—, quienes harán las valoraciones tácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente —o archivarse— y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente —art. 172 Cn.—, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados —por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características—, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación —o no— del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1° Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto —al igual que el resto de derechos fundamentales—, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el habeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el habeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme olas diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera 1egalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, habeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del habeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)",

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que la detención de la señora *MNGR* es ilegal o arbitraria pues —según refiere— fue detenida en su lugar de trabajo sin tener una orden de detención o pruebas en su contra, ya que no posee antecedentes penales o vínculo alguno con estructuras, agrega que han presentado arraigos y pruebas de su inocencia y que es madre soltera de tres hijos.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de que la detención de una persona es "arbitraria o ilegal" no implica por sí misma una vulneración a las garantías dispuestas en los art. 12 y 13 inciso 1°. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dichas exigencias y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente —entre otros— a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quien decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271,323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2° y 13 inc. 2° Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el habeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona.

En relación con lo anterior, la peticionaria afirma que la detenida es madre soltera de tres hijos al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que debe atenderse el interés superior cuando niñas o niños se vean involucrados en las decisiones que se adopten respecto de sus progenitores o cuidadores principales encarcelados. Sin embargo, debe mencionarse que son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios. los habilitados para analizar las condiciones subjetivas para imponer una medida cautelar, como por ejemplo la consideración de las personas que están bajo el cuidado del detenido y, oportunamente, esa decisión que afecte la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal. No obstante ello, tal y como se ha planteado el presente habeas corpus, no se advierte una decisión de autoridad que pueda ser controlada mediante este proceso constitucional.

Es así que al no haber argumentado la peticionaria un asunto de carácter constitucional, sino revelarse un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de habeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan —libertad física e integridad personal de los detenidos—, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del habeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía —art. 174 Cn.—.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente —en relación con años precedentes—se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de habeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar —más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad— el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia —sentencia del 30 de mayo de 2022, habeas corpus 300-2019—, tal como ocurre con las solicitudes de habeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2°, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4°, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

l. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *MNGR*, por tratarse de un asunto de legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

118-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1048-22, de fecha 17 de febrero de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito mediante el cual se promueve hábeas corpus contra los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, a su favor por el señor *CORC*, condenado por el delito de homicidio agravado tentado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que la autoridad demandada, mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, la cual se encuentra firme y carece de fundamentación, lo condenó a doce años y seis meses de prisión por el delito

antes aludido, la cual cumple en el Complejo Penitenciario La Esperanza, vulnerando –a su criterio– el derecho de libertad y los principios de legalidad y presunción de inocencia al realizar una errónea valoración de las pruebas producidas en el juicio.

Cuestiona que el juzgador otorgó credibilidad a la víctima/testigo denominado "Ozuna", como único medio de prueba, quien en su declaración fue "mendaz, carente de credibilidad, con muchas incongruencias con la prueba científica recabada en la inspección", asimismo, su dicho no fue corroborado con otros medios de prueba pues no es congruente con estos. Sostiene que los agentes que realizaron la inspección en el lugar donde supuestamente sucedieron los hechos, en sus deposiciones no concordaron respecto la ubicación geográfica, pues ambos se contradijeron.

Detalla una serie de circunstancias por las cuales considera que a su favor existe duda razonable y por las cuales refiere que debió haberse absuelto, en consecuencia, solicita que sea esta sala quien examine la prueba "erróneamente valorada por el juez", se modifique la calificación jurídica de los hechos y se orden su inmediata libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal, encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

IV. El solicitante, en síntesis, menciona una serie de circunstancias por las cuales considera que se hizo una errónea apreciación de la prueba, detallando situaciones por las que afirma que existía duda razonable a su favor, además, porque –en su opinión– el juzgador valoró positivamente el dicho del testigo/víctima el cual no fue corroborado con otros medios de prueba, asimismo, porque los agentes policiales que realizaron la inspección no fueron congruentes en la ubicación geográfica, pues ambos se contradijeron.

Lo expuesto, en esos términos, consiste en cuestiones que deben discutirse en el proceso penal, ante los jueces competentes en esa materia, quienes son los únicos autorizados para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal, sin que pueda pretenderse que esta sala –con competencia constitucional– conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el hábeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Y es que el peticionario no evidencia algún defecto de motivación de la sentencia que refleje arbitrariedad o la incorporación de prueba ilícita y que, por tanto, pudiera vulnerar sus derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con el valor positivo que se otorgó a la prueba testimonial para determinar su participación en el delito atribuido, asunto que no corresponde estudiar a este tribunal.

Por tanto, son los jueces penales, y no esta sala, quienes deben decidir los aspectos relacionados con la imputación penal, tales como determinar si la prueba se refiere directa o indirectamente a ella o dilucidar la existencia de contradicciones entre elementos de convicción.

Todos los asuntos planteados por el solicitante son de aquellos que deben proponerse en el enjuiciamiento penal, ante el juez celebrante de la vista pública o ante otros competentes en la misma materia, a través de los recursos de apelación y casación que regula la normativa procesal respectiva, por ejemplo.

Se advierte, así, un impedimento para conocer sobre lo argüido por tratarse de cuestiones de estricta legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *CORC*, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2149-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MCVS, en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Miguel, a favor del señor *EOSV*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que es madre del señor SV, a quien la representación fiscal en la acusación erróneamente le atribuyó acciones pandillerile-les, por lo que en la audiencia especial de imposición de medidas cautelares se le decretó detención provisional. Refiere que dicha decisión carece de motivación, ya que aquel jamás ha estado vinculado con dichos grupos y no tiene participación en los hechos delictivos que se le imputan, ya que se dedica al trabajo de estructuras metálicas.

Aunado a lo anterior, afirma que aquel no fue detenido en flagrancia o cometiendo delito al momento de su captura, no fue informado de los motivos ni se le mostró orden girada por un juez, por lo que su privación de libertad es injusta y le ha causado "daño en la libertad, vida y seguridad" de su hijo y su familia.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Esta sala ha establecido que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o en su caso el derecho de integridad física, psíquica o moral de los privados de libertad; por tanto, esta sede se encuentra normativamente impedida para examinar situaciones que no se refieran a preceptos constitucionales que se vinculen con los referidos derechos o cuya determinación se encuentre preestablecida en normas de rango inferior a la Constitución y le corresponda dirimirlas a otras autoridades, siendo estos últimos los denominados asuntos de mera legalidad (improcedencia del 27 de julio de 2015, hábeas corpus 196-2015).

También se ha indicado que es facultad de los jueces penales valorar si los elementos probatorios habidos en un proceso penal son suficientes para establecer la tipicidad, la participación preliminar del incoado y la necesidad de imponerle una restricción a su libertad, debiendo el juzgador, en cada caso, justificar la medida cautelar a decretar (improcedencia del 6 de diciembre de 2017, hábeas corpus 452-2017).

2. Se ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o

no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad –improcedencia del 17 de agosto de 2022, hábeas corpus 519-2022–.

V. 1. En el caso que nos ocupa, la peticionaria sostiene que la decisión que impuso la detención provisional al señor *SV* carece de motivación, ya que este jamás ha estado vinculado con grupos pandilleriles, no tiene participación en los hechos delictivos que se le imputan y se dedica al trabajo de estructuras metálicas.

Sin embargo, se advierte que, en los términos planteados, esta parte de la petición no propone algún defecto de motivación en la resolución cuestionada que refleje la arbitrariedad o ilegalidad alegada, sino que únicamente denota su inconformidad con la decisión de la autoridad judicial que decretó la detención provisional, señalando algunas circunstancias que, a su parecer, desvirtúan la existencia del delito imputado y la participación de aquel en los hechos que se le imputan.

De ahí que, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la imposición, sustitución o cese de las medidas cautelares previstas en el proceso penal, pues si esta sala realizara tal análisis, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor, sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los

detenidos. En todo caso, de existir disconformidad sobre la ponderación de los arraigos, la credibilidad o suficiencia de las pruebas analizadas para imponer la detención, la ley procesal penal establece mecanismos para reclamar de ello, pero no puede pretenderse que esta sala a partir de los argumentos como los planteados sustituya una medida cautelar por otra.

En consecuencia, al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional sino un aspecto de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide a este tribunal continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar esta parte de su pretensión mediante su declaratoria de improcedencia.

2. Respecto a que el señor *EOSV* fue detenido sin haber cometido ningún delito ni existir orden escrita para su captura, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al ser también esta parte de lo argumentado un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede

limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *EOSV*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2203-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con diez minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado AUPE, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, a favor de: *1) AAHS, 2) SABR, 3) BAMS, 4) KAMS, 5) AGGG, 6) JSMC y 7) JAMA*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios del departamento de San Salvador, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados, presentando como indicios; *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agen-

tes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se estableció la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante, afirma que el juez en una decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal y sin valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves, limitándose a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que, desde el día en que fueron privados de libertad, no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legítima defensa y al debido proceso.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. El solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación, pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que, en los términos planteados en la petición, no se propone algún defecto en la motivación de alguna decisión concreta, emitida por parte de la autoridad judicial, que esté afectando la libertad personal de los imputados, de manera que refleje arbitrariedad o ilegalidad; por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad derivada del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador.

Si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración de los mismos por parte del juez, lo cual no ofrece razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional. Y es que la peticionaria señala, como elementos cruciales para que en esta sede se compruebe la existencia o no del tipo penal atribuido: *i)* que la existencia de la flagrancia no es comprobable con la sola relación del acta de captura; *ii)* que algunos detenidos carecían de antecedentes penales y que otros, si bien habían sido procesados y condenados, había sido por delitos diferentes del de agrupaciones ilícitas y *iii)* que varios de los detenidos, a pesar de que no poseían antecedentes policiales y penales, fueron perfilados como pandilleros o colaboradores.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, en los términos planteados no se ofrecen argumentos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna afectación constitucional.

En consecuencia, al no haber argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de

las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) AAHS, 2) SABR, 3) BAMS, 4) KAMS, 5) AGGG, 6) JSMC y 7) JAMA*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2347-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Vilma Estela Villalobos, en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, a favor del señor *JHCG*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor CG fue capturado el 5 de julio de 2022 y se realizó audiencia de "imposición" el día 19 del citado mes y año.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados no llenaban los requisitos para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual, al ser aplicada de manera discrecional, constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en "situación de vulnerabilidad" –sin plantear ningún reclamo específico al respecto– y, en tal sentido, alega que la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, solicita hábeas corpus a favor del detenido para que se le conceda libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el

derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama contra la detención provisional en la que se encuentra el señor *JHCG*, alegando que tal medida, al aplicarse de manera discrecional, constituye una vulneración al derecho de libertad física, pues, a su criterio, los indicios aportados por la Fiscalía no reúnen los presupuestos para su imposición, solicitando que se restablezca la libertad del procesado por "haberse excedido el término de la detención provisional".

A pesar de lo anterior, se advierte que, en los términos planteados en la petición, no se propone algún defecto en la motivación de alguna decisión concreta, emitida por parte de la autoridad judicial, que esté afectando la libertad personal del procesado, de manera que refleje arbitrariedad o ilegalidad. Por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad impuesta luego de que el juez de la causa analizara los elementos de convicción aportados, los cuales, a juicio de la peticionaria, resultan insuficientes para establecer la existencia del delito y la participación del procesado.

Si bien se alega falta de presupuestos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración de los mismos por parte del juez, lo cual no ofrece razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que en esta sede se revise la procedencia o no de la medida cautelar aplicada a los procesados.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y el grado de participación, pues, si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor, sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución, especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en "situación de vulnerabilidad" y pide se restablezca la libertad física del imputado, mencionando un supuesto exceso en el término de la detención provisional; sin embargo, en la forma planteada, no se ofrecen argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de la persona que se pretende favorecer.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *JHCG*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

538-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora CJGM en contra de la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador y del Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario La Esperanza, a favor del señor *MHGG*, procesado por el delito de violación en menor o incapaz agravada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La solicitante manifiesta que el señor *GG* cumple una pena de prisión de trece años y seis meses por el referido delito y es controlada por la jueza de ejecución penal que demanda, autoridad a la que se ha realizado peticiones con el fin de obtener el beneficio penitenciario de libertad condicional anticipada, pero que en el trámite de dichas peticiones transcurre mucho tiempo –alrededor de un año– y tal retraso se debe –según le han manifestado en el juzgado– a la sobrecarga laboral, a que la colaboradora designada se encontraba incapacitada y por motivos de la pandemia [por COVID 19].

Sostiene que el equipo técnico criminológico demandado no emite el dictamen indispensable para que el juez pueda realizar la respectiva audiencia y así verificar la petición del beneficio penitenciario, la cual no se ha programado. Agrega que el juez ha pedido dicho dictamen, pero el aludido equipo no contesta.

Refiere, por tanto, vulneración a los derechos de petición y respuesta y de audiencia, adjuntando a su solicitud, cuatro folios útiles.

2. Este tribunal por resolución del 23 de junio del año en curso, previno a la solicitante para que expresara:

i) si existen escritos presentados por ella o las abogadas del señor *MHGG* que no han sido resueltos por la jueza de ejecución penal, de ser así identificar las peticiones concretas que realizaron, su fecha de presentación y adjuntar una copia de los mismos –con su respectiva razón de recibido por la autoridad judicial–;

ii) en qué fechas ha solicitado, el juez al Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario La Esperanza, el dictamen respectivo, si se ha contestado y en qué sentido;

iii) contra qué autoridades –en concreto– dirige sus reclamos y por qué motivos;

iv) cuál es la situación actual del señor GG respecto a su derecho de libertad física, determinando si le ha sido concedido el beneficio de libertad condicional y, de ser así, desde qué fecha o si sigue guardando prisión, en cuyo caso deberá determinar el lugar en qué se encuentra recluido.

3. La referida decisión fue notificada a través del medio técnico señalado para tal efecto el día 13 de julio de 2023 y, dentro del término establecido para ello, la peticionaria remitió escrito en el que manifiesta:

i) Sobre los escritos presentados, menciona:

Escritos del 24 de marzo de 2021 y del 1 de septiembre de 2021, relativos a nombramiento de abogado defensor y aceptación del cargo, así como solicitud de audiencia especial, cuya respuesta fue obtenida el 15 de octubre de 2021, es decir casi siete meses posterior al primer documento.

Además refiere que el 25 de febrero de 2022 se le comunicó la resolución del día 18 de los mismos mes y año, donde se resolvió sobre la recepción de varios oficios, se tuvo por parte a la defensa y se otorgó la redención de la pena, entre otros.

Escrito del 26 de octubre de 2021, en el que se evacuó prevención y expuso duda sobre el pago de la responsabilidad civil, lo cual fue respondido el 25 de febrero de 2022, pero sin resolver la duda planteada –pero se adjunta auto del 18 de febrero de 2022 donde se resuelve sobre pago parcial en concepto de responsabilidad civil–, a pesar de ello transcurrieron casi cuatro meses para recibir una contestación.

Escrito del 2 de marzo de 2022, en el que se solicitó audiencia especial de libertad condicional a favor del imputado. "(...) Da respuesta el día tres de marzo de dos mil veintidós. Se resuelve el día cuatro de enero del año dos mil veintitrés donde se programa audiencia (...)" (sic.)

Escrito –sin determinar fecha– presentado al Consejo Criminológico Regional Occidental, solicitando dictamen criminológico y otros, cuya respuesta se obtuvo el 9 de noviembre de 2022 y se remitió el dictamen solicitado a la jueza de ejecución penal.

Escrito –sin determinar fecha– solicitando a la jueza nuevo oficio para el consejo criminológico a fin de emitir dictamen, cuya respuesta fue dada el 18 de octubre de 2022.

El día 5 de enero de 2023 se notificó la recepción de dos oficios y se convocó a la celebración de la audiencia especial de libertad condicional ordinaria.

El día 31 de marzo –sin especificar año– se presentó escrito solicitando nuevamente la celebración de la audiencia especial relacionada, el cual fue respondido el 27 de abril de 2023.

Escrito –sin determinar fecha– informando a la jueza sobre la gestión de publicación de edictos, previo a la celebración de audiencia especial.

Adjunta la documentación relacionada.

ii) Respecto a las solicitudes de dictamen criminológico al equipo técnico, manifiesta que el juez lo solicitó en el mes de febrero de 2022 y fue remitido hasta el 9 de noviembre del mismo año.

iii) En cuanto a las autoridades que demanda, manifiesta que a la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, por no dar respuesta a las diferentes peticiones en un tiempo prudencial y por tanto, se queja de su inactividad al no acceder a celebrar audiencia especial de libertad condicional ordinaria, la cual se solicitó desde febrero de 2021 y al Consejo Criminológico Regional Central, por la tardanza en proporcionar el dictamen criminológico del señor MHGG, pues ello atrasó en casi nueve meses la celebración de la audiencia especial solicitada.

Aclara que por error había consignado que su reclamo era contra el Equipo Técnico Criminológico del Complejo Penitenciario la Esperanza, cuando lo correcto es al consejo criminológico que ahora relaciona.

iv) Sobre la situación jurídica del imputado, refiere que el día 6 de junio de 2023 se realizó audiencia especial de libertad condicional ordinaria, en la que se otorgó dicho beneficio al señor *MHGG* y se encuentra en libertad desde el 15 de junio de 2023.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se hará referencia a la jurisprudencia constitucional relacionada con el caso **(III)** y luego se analizará lo propuesto por el peticionario **(IV)**.

III. Esta sala reiteradamente ha sostenido que es posible, para el hábeas corpus, la aplicación analógica del artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, a efecto de realizar el examen liminar de la pretensión con la finalidad de detectar al inicio del referido proceso constitucional la existencia de vicios formales o materiales en la propuesta, los cuales evitan el conocimiento de fondo del asunto o tornan inoperante la tramitación completa del proceso –improcedencias de 18 de marzo de 2010 y de 16 de julio de 2010 hábeas corpus 24-2010 y 117-2010, respectivamente–.

En ese sentido, en el estudio liminar que este tribunal realiza, se analiza que la solicitud manifieste el agravio de carácter constitucional, siendo este uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, de forma que, cuando se requiera la protección constitucional, la persona debe encontrarse afectada en los derechos relacionados en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución –libertad personal o integridad física, psíquica o moral de los detenidos–, por las actuaciones u omisiones contra las cuales reclama, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación. Así, si se emite una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas –improcedencia del 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–.

Por el contrario, las peticiones que presenten deficiencias, entre otras las referidas a la falta de agravio efectivo en los derechos protegidos por medio del proceso de hábeas corpus, carecerán de las condiciones que permitan a esta sala evaluar la propuesta que se efectúa –improcedencia de 20 de septiembre de 2017, hábeas corpus 347-2017–.

IV. En el caso en estudio, la solicitante reclama por la demora con la cual la Jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador tramita las peticiones efectuadas a favor del señor *MHGG*, así como de la falta de respuesta del Consejo Criminológico Regional Central –según lo rectificado por la solicitante– en emitir el dictamen necesario para analizar en audiencia especial el otorgamiento del beneficio penitenciario de la libertad condicional ordinaria, lo cual vulnera los derechos del imputado.

Sin embargo, a partir de sus propios argumentos, se advierte que dichas situaciones ya no están incidiendo en el derecho de libertad física del imputado, pues cada uno de los escritos que relacionó –según también ella misma indica– fueron resueltos y además, el día 6 de junio del presente año, se realizó la audiencia especial en la que se otorgó al señor *GG* el beneficio penitenciario de la libertad condicional ordinaria, encontrándose en libertad desde el 15 de junio de 2023, de modo que se advierte la falta de agravio efectivo –actualmente– en los derechos del señor *MHGG*, derivado del acto reclamado –cumplimiento de pena de prisión sin evaluarse libertad condicional–.

En ese sentido, al no evidenciar en su planteamiento una circunstancia vulneradora de derechos constitucionales que incida en los derechos de aquel y que, al momento de requerir la tutela de esta sala, esté surtiendo efectos, dicha situación impide a este tribunal tramitar su solicitud, puesto que, como se ha referido, esta sala, en el ejercicio de su labor de control constitucional realizada en el hábeas corpus, se limita a verificar la existencia de violaciones constitucionales al referido derecho fundamental –o al de integridad física, psíquica o moral de los detenidos–, y consecuentemente, a repararlos.

Por lo anterior, dado que no se evidencia un agravio efectivo derivado del acto reclamado, deberá rechazarse su solicitud a través de la declaratoria de improcedencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus planteada por la señora CJGM, a favor del señor *MHGG*, por falta de agravio efectivo actual, derivado del acto reclamado.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

963-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora *BRAG*, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a su favor.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante considera que se encuentra "amenazada de ser detenida", pues en dos ocasiones agentes policiales han llegado a su negocio, ubicado en la comunidad Tutunichapa, Barrio San Miguelito, San Salvador, lugar donde vive con sus hijos.

En la primera ocasión –de la cual no proporciona más información–, los agentes la trasladaron a la delegación del centro, donde le tomaron fotografías e interrogaron; sin embargo la "despacharon", advirtiéndole que "tenía suerte que no habían encontrado nada".

Posteriormente, el 11 de julio de 2022, los mismos agentes volvieron a visitarla en su negocio, tomándole datos a sus hijos.

Expone que se siente amenazada de que dichos agentes se vuelvan a presentar y quieran capturarla por "agrupaciones ilícitas"; además, considera que no hay justificación para que la policía la retenga o interrogue, pues no existe delito que perseguir. Afirma que el régimen de excepción podría dar lugar a violación de derechos y garantías, amenazando su libertad física, pues en la delegación policial le interrogaron si tenía un hijo detenido, siendo esta información falsa, ya que sus hijos son "personas de bien".

Por lo anterior solicita hábeas corpus, a fin de que la sala proporcione a la policía lineamientos para que realice sus investigaciones de conformidad a la ley.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido jurisprudencialmente que el hábeas corpus preventivo tiene por objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental a la libertad personal, cuando se presenta una amenaza inminente e ilegítima contra el citado derecho, de forma que la privación de libertad no se ha concretado, pero existe amenaza cierta de que ello ocurra –improcedencia de 15 de junio de 2011, hábeas corpus 52-2011–.

Además, se ha indicado que la sola existencia de diligencias de investigación o más aún, la sola instrucción de un proceso penal, no implica per se, restricción a la libertad individual de una persona, pues las mismas salvaguardan en todo caso la operatividad del principio de presunción de inocencia, que acompaña a la persona a quien se le imputa un delito, desde el inicio de estas diligencias hasta la producción de un pronunciamiento definitivo condenatorio –improcedencia de 13 de marzo de 2019, hábeas corpus 340-2018–.

IV. En el presente caso la peticionaria cuestiona la intervención realizada por agentes policiales en dos ocasiones –una el 11 de julio de 2022 y la otra sin determinar la fecha–, donde la interrogaron y requirieron datos de sus hijos; sin embargo, no refiere que exista una orden de detención en vías de ejecución que esté a punto de materializarse.

De igual forma, alega que se siente amenazada por la sola entrada en vigencia del régimen de excepción, ya que podría ser víctima de una detención arbitraria, sin que proponga alguna vulneración constitucional o reclamo concreto contra alguna autoridad al respecto.

Y es que las actuaciones descritas en la petición no son aptas para ser consideradas amenazas al derecho de libertad física mediante el hábeas corpus de tipo preventivo, pues se trata de situaciones que carecen de capacidad para generar indefectiblemente la restricción de la libertad física de una persona.

Es decir, la peticionaria no propone hechos que amenacen de manera cierta e inminente su libertad personal y que deban hacerse cesar por esta sala, por haberse emitido contrariando la Constitución, sino que relata actuaciones policiales que, aunque podrían no estar justificadas, no corresponde objetarlas a través de este proceso constitucional, sino, si así lo deseara la persona agraviada, ante las autoridades policiales o fiscales correspondientes.

Consecuentemente, la petición planteada contiene un vicio insubsanable en su elemento objetivo, el cual imposibilita continuar con su trámite normal, debiendo ser rechazada a través de su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la solicitud de hábeas corpus incoada por la señora *BRAG* a su favor, por alegar asuntos que carecen de trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

1328-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada *********, en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador, a favor de: *1) FAMG, 2) AMC, 3) SICG, 4) KEAR, 5) MALA, 6) CDCC, 7) JMHM, 8) RAAV, 9) EVMG conocido por EVMG, 10) JAMS, 11) MJAM, 12) WEPG, 13) MJMM, 14) YLAA, 15) JRM, 16) BACP,17) AJPT, 18) EAPR, 19) DGRR, 20) COMP, 21) JARA, 22) FAPS, 23) EAGG, 24) WBNP, 25) KVGM, 26) FARM, 27) RFRA, 28) MEHL, 29) JOMH, 30) KESC, 31) LAGM, 32) MLCG, 33) VEMC, 34) JSR, 35) IAMM, 36) DBMG, 37) WAGF, 38) KMMA, 39) DBMF, 40) ESSS, 41) METM, 42) MYRC, 43) LFFE, 44) FNFC, 45) RARA, 46) LDCM, 47) HDMV, 48) MADM, 49) CARF, 50) CYRB, 51) YCRC, 52) BECR, 53) RGVM, 54) OODR, 55) CMCP, 56) JOAA, 57) GEGO,58) BVV, 59) ACVO, 60) FARL, 61) AVV, 62) MACO, 63) OABR, 64) DEMR, 65) MGMV, 66) EAMV, 67) KTRC, 68) RAG, 69) SARM, 70) ANZA, 71) NOZH, 72) MAFP, 73) CJSC, 74) JCMM, 75) ARGT, 76) BZR, 77) MABM, 78) DAHA, 79) JSHA, 80) AEVB, 81) EVP, 82) DPVS, 83) EAMA, 84) BNJRF, 85) YBPG, 86) GMCF, 87) AECR, 88) JAM, 89) DABE, 90) BAGH, 91) MARA, 92) EAAC, 93) AERC, 94) HDNM, 95) SAJR, 96) BEHM, 97) AYVJ, 98) JCOP, 99) MJBS, 100) JJCH, 101) SACG, 102) JAAM, 103) EOPG, 104) MOPG, 105) JDLA y 106) PM.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en entre el 6 y 20 de abril de 2022 y en audiencia de imposición de medidas, celebrada el 12 de mayo de 2022, se les decretó detención provisional. Señala que la decisión del juez es ilegítima ya que impuso la

medida privativa de libertad basándose únicamente en las actas de captura, declaraciones de los agentes policiales y las fichas delincuenciales que fueron realizadas días antes de las capturas, por lo que solicita hábeas corpus a favor de dichas personas.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante reclama de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, según afirma, el juez se basó únicamente en las actas de captura, declaraciones de los agentes policiales y las fichas delincuenciales que fueron realizadas días antes de las capturas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual pues no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia

del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) FAMG, 2) AMC, 3) SICG, 4) KEAR, 5) MALA, 6) CDCC, 7) JMHM, 8) RAAV, 9) EVMG conocido por EVMG, 10) JAMS, 11) MJAM, 12) WEPG, 13) MJMM, 14) YLAA, 15) JRM, 16) BACP,17) AJPT, 18) EAPR, 19) DGRR, 20) COMP, 21) JARA, 22) FAPS, 23) EAGG, 24) WBNP, 25) KVGM, 26) FARM, 27) RFRA, 28) MEHL, 29) JOMH, 30) KESC, 31) LAGM, 32) MLCG, 33) VEMC, 34) JSR, 35) IAMM, 36) DBMG, 37) WAGF, 38) KMMA, 39) DBMF, 40) ESSS, 41) METM, 42) MYRC, 43) LFFE, 44) FNFC, 45) RARA, 46) LDCM, 47) HDMV, 48) MADM, 49) CARF, 50) CYRB, 51) YCRC, 52) BECR, 53) RGVM, 54) OODR, 55) CMCP, 56) JOAA, 57) GEGO,58) BVV, 59) ACVO, 60) FARL, 61) AVV, 62) MACO, 63) OABR, 64) DEMR, 65) MGMV, 66) EAMV, 67) KTRC, 68) RAG, 69) SARM, 70) ANZA, 71) NOZH, 72) MAFP, 73) CJSC, 74) JCMM, 75) ARGT, 76) BZR, 77) MABM, 78) DAHA, 79) JSHA, 80) AEVB, 81) EVP, 82) DPVS, 83) EAMA, 84) BNJRF, 85) YBPG, 86) GMCF, 87) AECR, 88) JAM, 89) DABE, 90) BAGH, 91) MARA, 92) EAAC, 93) AERC, 94) HDNM, 95) SAJR, 96) BEHM, 97) AYVJ, 98) JCOP, 99) MJBS, 100) JJCH, 101) SACG, 102) JAAM, 103) EOPG, 104) MOPG, 105) JDLA y 106) PM.*

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2126-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora AYGDJ, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *RUH*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que es madre del señor *RUH*, quien fue capturado en el marco del régimen de excepción, el 24 de abril de 2022, en el municipio de Soyapango, por agentes policiales, no habiendo fundamento legal para su detención pues no se detuvo en el término de la flagrancia, no se realizó investigación previa ni existe una orden escrita decretándola. Relata que en una ocasión previa la policía solicitó información sobre su identidad, lo que a su criterio originó la captura, presumiendo que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario La Esperanza, por tal razón solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúen de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía interna-

cional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor *RUH* fue capturado de manera ilegal o arbitraria ya que –según refiere– no se ha detenido en flagrancia, no existe investigación previa u orden por escrito, ni fundamento para su detención.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención

administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha

sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *RUH*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2404-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinticinco minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Sigfredo Martínez, en contra del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador, a favor de: *1) FIRR, 2) EADO, 3) JFGR, 4) JBPR, 5) JCCE, 6) JAPG, 7) TG, 8) MDJDR, 9) JETM, 10) JJTG, 11) OWMM, 12) HGCM, 13) GGR, 14) JBADH, 15) MLGR, 16) JECL, 17) "C*" AGA, 18) IEPR, 19) JLC, 20) RMM, 21) JMRR, 22) MMMT, 23) EJMN, 24) JDCC, 25) CMRT, 26) MSLJ, 27) JFLG, 28) MMEM y 29) ADR.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que las personas que pretende favorecer fueron capturadas en diferentes municipios del departamento de Chalatenango en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios: *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se estableció la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante, afirma que el juez en una decisión sin motivación decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal y sin valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves, limitándose a manifestar que para él sí existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legítima defensa y el debido proceso.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. El solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del Juez Especializado de Instrucción A2 de San Salvador.

Si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez de los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional. Y es que la peticionaria señala, como elementos cruciales para que en esta sede se compruebe la existencia o no del tipo penal atribuido: *i)* que la existencia de la flagrancia no es comprobable con la sola relación del acta de captura; *ii)* que algunos detenidos no tienen antecedentes penales y que otros habían sido procesados y condenados por delitos diferentes del de agrupaciones ilícitas y *iii)* que varios de los detenidos, a pesar de que no poseían antecedentes policiales ni penales, fueron perfilados como pandilleros o colaboradores.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares y defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, en los términos planteados no se trasladan argumentos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna afectación constitucional.

En consecuencia, al no haber argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) FIRR, 2) EADO, 3) JFGR, 4) JBPR, 5) JCCE, 6) JAPG, 7) TG, 8) MD-JDR, 9) JETM, 10) JJTG, 11) OWMM, 12) HGCM, 13) GGR, 14) JBADH, 15) MLGR, 16) JECL, 17) "C*" AGA, 18) IEPR, 19) JLC, 20) RMM, 21) JMRR, 22) MMMT, 23) EJMN, 24) JDCC, 25) CMRT, 26) MSLJ, 27) JFLG, 28) MMEM y 29) ADR*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2531-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, a su favor por el señor *JEBV*, condenado por los delitos de extorsión agravada, denuncia o acusación calumniosa, privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública y privación de libertad.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que, en el proceso con referencia 22-B-16-7, la autoridad demandada mediante sentencia del 23 de agosto de 2017 lo condenó a la pena total de treinta y un años de prisión por los delitos aludidos, misma que se encuentra firme y ejecutoriada desde el 22 de mayo de 2018, cuestionando que esta contiene vulneraciones a su derecho de defensa y los principios de seguridad jurídica y legalidad del proceso.

Específicamente detalla que el testigo con régimen de protección denominado con clave "Killer" mediante diligencias de reconocimiento una por medio de fotografía en sede fiscal y la otra de personas, lo reconoció, sin embargo, las víctimas no lo identificaron, situación que según la autoridad demandada pudo deberse a "circunstancias psicológicas" ya que estas estaban alteradas, siendo suficiente el reconocimiento que hizo el testigo "ya que el mismo tuvo participación activa dentro de los hechos", condenándolo sin que existiera certeza probatoria. A efecto de argumentar este punto el solicitante transcribe extractos de resoluciones emitidas por una cámara de segunda instancia de San Salvador.

Agrega que el juez de sentencia "no valoró correctamente" la prueba documental en la que constaba entre otros que su única participación en los hechos del 18 de noviembre de 2014 fue conducir el vehículo y que el

24 de ese mismo mes y año se encontraba descansando en su casa, documentos que refiere no fueron inmediados y sujetos a contradicción por encontrarse en sobre cerrado, vulnerando el principio de legalidad y su derecho de defensa, ya que con estos se extraía del escenario de dos de los delitos, por lo que el juzgador debió aplicar lo establecido en el artículo 7 del Código Procesal Penal (CPP).

Reclama que, según la teoría fáctica de la fiscalía en las declaraciones de las víctimas y el testigo, su participación en los hechos fue "únicamente la de conducir el vehículo", siendo sólo esa su función, con respecto a ello cita jurisprudencia de un tribunal de sentencia y la Sala de lo Penal, referida a la participación del cómplice no necesario en un hecho delictivo.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

De ahí que, si una persona se considera agraviada con el resultado de la valoración de los hechos y de la probanza en lo atinente al establecimiento del ilícito y la responsabilidad penal, el ordenamiento jurídico secundario contempla los mecanismos pertinentes a fin de controvertir el perjuicio ocasionado –improcedencia del 27 de octubre de 2021, hábeas corpus 21-2021–.

Al respecto, los pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial, responsabilidad penal, valoración de prueba, entre otros, corresponden en exclusiva a la autoridad judicial que conoce de la causa penal y su determinación constituye un asunto de mera legalidad que, por su naturaleza, está excluido del conocimiento de esta sala.

IV. El solicitante cuestiona la valoración probatoria que realizó el juzgador con respecto a las diligencias de identificación en las que compareció el testigo protegido, las que considera debieron descartarse, debido a que las víctimas no lo reconocieron, aunado a lo anterior, cuestiona que la prueba documental de descargo con la que se extraía de los hechos señalando que debió aplicarse lo establecido en el artículo 7 CPP o imponerle la pena establecida para el cómplice no necesario, contradiciendo su participación en los delitos atribuidos pues señala que solo fue conducir el vehículo.

Al respeto es de indicar que los asuntos referidos a verificar el grado de participación delincuencial, la motivación respecto a la conducta del peticionario y la valoración de la prueba con la que se concluyó en la imposición de la condena, es competencia de las autoridades en materia penal y no de esta sala.

De manera que el reclamo planteado radica en una mera inconformidad con el grado de intervención en el ilícito que se le asignó en la sentencia condenatoria y la valoración que el juez le otorgó a la prueba –concretamente a la testimonial– para tal efecto; contrariándola en esta sede, de ahí que pretender que este tribunal revise el aludido proveído como una instancia más dentro del proceso penal para evaluar, con base en la prueba, la responsabilidad atribuida, es una cuestión de estricta legalidad que debe resolverse en el proceso penal. También corresponde a los jueces y tribunales de esa naturaleza determinar si hay contradicciones entre los elementos de prueba y decidir el valor de los mismos, aunque estuvieran en esas condiciones, así como analizar si un testigo proporciona información relevante y veraz, así como directa sobre alguna circunstancia relativa a los hechos, no siendo esa la función constitucional de esta sala.

Por tanto, al advertirse obstáculos insuperables en los argumentos expuestos por el peticionario, esta sala se encuentra imposibilitada de conocer del fondo de lo planteado, debiendo declarase improcedente el hábeas corpus.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido a su favor por el señor *JEBV*, en virtud de que sus planteamientos constituyen una mera inconformidad carente de trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

79-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio 1048-22 de fecha 17 de febrero de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito mediante el cual se promueve habeas corpus contra uno de los jueces del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla —sin determinar cuál—, a su favor por el señor *DAJB*, condenado por el delito de extorsión agravada continuada.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad demandada a veinte años de prisión, la pena máxima del delito, mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, la cual actualmente se encuentra firme y ejecutoriada, no obstante, contiene vulneraciones a garantías constitucionales como lo son el debido proceso, principio de legalidad, presunción de inocencia y derecho de defensa.

Alega que en la cobertura policial relacionada con la entrega controlada en la que se le vincula, no existió direccionamiento funcional por parte de la Fiscalía General de la República como lo exigen los arts. 75 y 276 inc. 2° del Código Procesal Penal (CPP) y 8 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión —los cuales transcribe—, asimismo como lo ha dejado sentado esta sala en un precedente, dado que las actividades indagatorias de la policía deben sujetarse a control fiscal.

Indica que ha existido una errónea calificación en el delito por el cual fue condenado, pues la teoría láctica no se enmarca dentro del contexto legal, no habiéndose demostrado el dominio funcional que exige el ilícito, a lo cual agrega la falta de certificación de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) a la víctima y testigo clave "Polonia".

Afirma que el acta de reconocimiento en rueda de personas no está firmada por los defensores, por ello señala que el tribunal no debió haberla admitido como prueba, pues con ella se rompió el principio de contradicción, advierte que, al momento de ser privado de libertad, no le fue mostrada orden de captura emitida por el juez competente, dado que no fue detenido en flagrancia, ni tampoco ha sido agregada al proceso.

En conclusión, todas las circunstancias antes descritas —a su criterio— deben ser analizadas por esta sala para modificar su condena o declarar la nulidad de la sentencia condenatoria y ordenar su inmediata libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de habeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo— improcedencia del 10 de enero de 2018, habeas corpus 291-2017—.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal —improcedencia del 29 de febrero de 2012, habeas corpus 52-2012—,

IV. Esta sala advierte que las afirmaciones del peticionario están encaminadas a que esta sede analice la prueba habida en el proceso penal y que fue valorada por la autoridad judicial para condenar al señor *DAJB* de los hechos acusados, en ese sentido. señala la falta de dirección funcional de la Fiscalía General de la República —sin agregar más datos sobre ello— asimismo. sostiene que el delito no se enmarca en los hechos acusados por no demostrarse su dominio funcional: cuestiona la falta de certificación por parte de la UTE para la víctima denominada con clave "Polonia", además la admisión y valoración del acta del reconocimiento de personas como prueba, debido a que según él en ella no constan las firmas de los defensores y, finalmente, refiere que no fue privado de libertad en flagrancia, pero cuando fue detenido no se le mostró orden de captura emitida por la autoridad competente.

De ahí que —señala— al ser analizada la sentencia puede declararse nula y, en consecuencia, ordenarse su libertad.

Esta sala advierte que el peticionario no expone argumentos que evidencien alguna afectación a sus derechos Iniciados a través del habeas corpus derivados de la actuación de la autoridad que demanda, sino solo refiere su mera inconformidad con la calificación jurídica del hecho la que a su criterio fue errónea— y con el valor otorgado a los elementos de prueba— específicamente el reconocimiento de personas— por no constar, según asevera, algunas firmas. asunto que no corresponde estudiar a este tribunal.

Así, con respecto a la falta de direccionamiento funcional de la fiscalía el peticionario se limita a afirmar tal situación sin indicar los argumentos que sustentan su reclamo y de qué forma eso ha vulnerado los derechos protegidos en el habeas corpus; y es que. ciertamente, la falta de direc-

ción funcional en la investigación, podría representar un tema de transgresión constitucional, no obstante, en los términos propuestos no es posible extraer una descripción que configure por sí una pretensión de esa trascendencia.

En cuanto al cuestionamiento de la falta de orden de captura al momento de su privación de libertad por parte de agentes policiales, sin que a su parecer existiera flagrancia, es dable señalar que el peticionario ya está en el cumplimiento de su pena de prisión lo que significa que a este momento ha tenido pleno conocimiento de la imputación por la cual fue detenido sin que manifieste haber alegado oportunamente dicha circunstancia a la autoridad respectiva y sin trasladar a esta sala algún agravio vigente que esté incidiendo en su derecho de libertad física, derivado de la supuesta omisión. Pero, además, no corresponde a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema.

Finalmente, con respecto a lo referido a la falta de certificación de la víctima denominado "Polonia" por parte de la UTE, el solicitante no refleja una situación de carácter constitucional que pueda ser verificada por este tribunal sino únicamente su desacuerdo con la forma en que se tuvo por acreditado en el proceso penal tal calidad.

De modo que todo lo planteado, son cuestiones que deben ser discutidas en el proceso penal, ante los jueces competentes en esa materia, quienes son los únicos autorizados, entre otras cuestiones, para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal o el grado de participación del imputado, así como acreditar o no la calidad de las personas que intervienen dentro del proceso penal. Por tanto, no puede pretenderse que esta sala —con competencia constitucional— conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el proceso de habeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Se advierte, así en todos sus argumentos, un impedimento para conocer sobre lo argüido por tratarse de asuntos de mera legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente su petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2ª de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el habeas corpus solicitado a su favor por el señor *DAJB*, por alegarse asuntos de mera legalidad sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

60-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Adolfo Enrique Ramírez López, en contra del Juez Segundo de Instrucción de la Unión y de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a favor del señor JGLS, procesado por el delito de estafa agravada.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante, quien manifiesta ser el defensor particular del señor *LS*, indica que, ante el Juez de lo Civil de La Unión, se llevó un proceso que concluyó el 22 de mayo de 2017 declarando la nulidad absoluta del instrumento con el que el procesado adquirió dos inmuebles, así como aquel con el que dicho imputado transfirió los inmuebles a la sociedad "Nueva San Francisco, S.A. de C.V."

Manifiesta que la fiscalía formuló imputación en contra del señor *LS* ante el Juez Segundo de Paz de la Unión, por del delito de estafa agravada, a través de requerimiento presentado el 27 de agosto de 2018.

Expresa que, al celebrarse la audiencia inicial, alegó la excepción perentoria de extinción de la acción penal por prescripción –art. 412 No. 3 Código Procesal Penal (CPP)–, pero se declaró sin lugar y se continuó con la celebración de la audiencia, ordenándose la instrucción formal sin aplicación de medidas cautelares.

Refiere que interpuso recurso de apelación contra la decisión citada y la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente de San Miguel resolvió ha lugar la excepción alegada, declarando que la acción penal había

prescrito, por tanto sobreseyó al imputado. La fiscalía interpuso casación y la Sala de lo Penal, por medio de resolución del 9 de noviembre de 2021, casó la resolución recurrida al determinar que la acción penal fue promovida en tiempo.

En consecuencia, se remitió el proceso al Juez Segundo de Instrucción de La Unión, para continuar con su trámite y aquel señaló el 28 de marzo de 2022 para la celebración de la audiencia preliminar.

Sostiene que la acción se encuentra prescrita, sin embargo, en el proceso penal se ha aplicado de forma incorrecta las normas procesales atinentes, en ese sentido señala que la estafa se consumó cuando la víctima entregó las cantidades de dinero pactadas y no cuando se declaró la nulidad absoluta en el juicio civil, de forma que la prescripción se dio el 16 de febrero de 2017 –conforme a la normativa procesal derogada como a la vigente– y el requerimiento fiscal se presentó dos años, seis meses y nueve días después de extinguida la acción penal.

Además, recalca que las víctimas tienen conocimiento de estar en presencia de un ilícito desde el año 2011, por lo cual –considera– es contradictorio que la Sala de lo Penal afirme que estas se enteraron de la existencia de los injustos penales hasta declararse ejecutoriada la sentencia en el proceso civil, ya que incluso se alegó prejudicialidad penal.

También manifiesta que ha reclamado la vulneración constitucional que ahora alega en todas las instancias existentes, agotando todos los medios contemplados en la ley y por tanto, la vulneración a la libertad del procesado habilita a conocer de sus planteamientos a través de hábeas corpus.

Manifiesta que, aunque el señor LS no se encuentra sujeto a "medidas de coerción", el delito por el cual se le procesa es sancionado con pena de prisión y, por tanto, es susceptible que se adopte en su contra la detención provisional u otra medida cautelar de las mencionadas en el art. 332 CPP, lo cual supone una limitación a su libertad, por ello solicita hábeas corpus preventivo y cita jurisprudencia relacionada.

Por último, solicita que se emita una medida cautelar a favor del señor LS, consistente en ordenar la suspensión de la sustanciación del proceso penal mientras se tramita el presente hábeas corpus.

Agrega a su solicitud resolución de apelación del 23 de octubre de 2019, resolución de casación del 9 de noviembre de 2021 y auto del 31 de enero de 2022 en el que se ordena la reprogramación de la audiencia preliminar.

II. Una vez expresados los argumentos del peticionario, debe indicarse la estructura lógica de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia vinculada con lo propuesto (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Jurisprudencialmente se ha expuesto que el agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe encontrarse afectada en los derechos relacionados en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución –libertad personal o integridad física, psíquica o moral de los detenidos–, por las actuaciones u omisiones contra las cuales reclama, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación. Así, si se emite una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas –improcedencia del 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–. Por el contrario, las peticiones que presenten deficiencias en su planteamiento, carecerán de las condiciones que permitan a esta sala evaluar la propuesta que se efectúa –improcedencia de 20 de septiembre de 2017, hábeas corpus 347-2017–.

2. Esta sala ha sostenido que el hábeas corpus preventivo tiene por objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental a la libertad personal, cuando se presenta una amenaza inminente e ilegítima contra el citado derecho, de forma que la privación de libertad no se ha concretado, pero existe amenaza cierta de que ello ocurra –improcedencia de 15 de junio de 2011, hábeas corpus 52-2011–.

Además, se ha indicado que la sola existencia de diligencias de investigación o más aún, la sola instrucción de un proceso penal, no implica per se, restricción a la libertad personal, pues las mismas salvaguardan en todo caso la operatividad del principio de presunción de inocencia, que acompaña a la persona a quien se le imputa un delito, desde el inicio de estas diligencias hasta la producción de un pronunciamiento definitivo condenatorio –improcedencia de 14 de junio de 2017, hábeas corpus 113-2017–.

3. En cuanto a la prescripción de la acción penal, se ha indicado que su determinación corresponde a los jueces competentes en materia penal; sin embargo, cuando la restricción al derecho de libertad ha sido dictada en el contexto de un proceso que tiene como base una acción prescrita, es decir, en el que no se han respetado las condiciones procesales legales para el ejercicio de la acción penal, la jurisdicción constitucional está habilitada para examinar el asunto a efecto de determinar si dicha decisión efectivamente provoca alguna vulneración al mencionado derecho –resolución de 11 de febrero de 2011, hábeas corpus 161-2010–.

IV. En concreto, el peticionario pretende que esta sala analice, por medio de hábeas corpus preventivo, la situación del señor *JGLS*, quien no cumple restricciones a su libertad personal pero –a criterio del solicitante– es posible que las sufra, ya que se tramita proceso penal ante el Juez Segundo de Instrucción de la Unión, del cual alega extinta la acción, por prescripción.

Sostiene que reclamó en cada una de las etapas procesales la excepción respectiva, pero la Sala de lo Penal emitió decisión en la que determinó que la acción penal fue promovida en tiempo.

1. De la documentación agregada se extrae que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el plazo para establecer la prescripción de la acción penal inició el 22 de junio de 2018, fecha en que se declaró ejecutoriada la sentencia del Juez de lo Civil de La Unión, por sostener que el delito de estafa se consumó cuando las víctimas se vieron despojadas de los inmuebles sobre los cuales creían tener una propiedad legítima, lo cual ocurrió luego de dictado el fallo del juez relacionado.

No obstante, el peticionario difiere de tal planteamiento y estima que el plazo debió contarse desde el 16 de febrero de 2009, o sea, desde la fecha en que supuestamente el imputado vendió por medio de instrumento público los inmuebles a las víctimas. Este criterio, en su momento, lo sostuvo el tribunal que resolvió la apelación.

Debe aclararse que esta sala no es competente para determinar en todos los supuestos si en un proceso penal ha transcurrido el plazo legal para hacer cesar la persecución penal de un individuo a través de la figura de la prescripción, pues tal situación es exclusiva del juez penal; únicamente es posible hacerlo, cuando con ello se vulnere el derecho fundamental de libertad física, pues desde la perspectiva constitucional se puede establecer si un acto u omisión de la autoridad judicial ocasiona violación constitucional.

Sin embargo, el señor *LS* no se encuentra privado o restringido de libertad y el peticionario tampoco revela alguna vulneración constitucional que permita conocer su planteamiento mediante hábeas corpus, ya que su queja consiste en no estar de acuerdo con el criterio adoptado por el tribunal de casación.

No se plantea, además, amenaza de restricción de libertad personal, pues tal y como esta sala lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, la sola tramitación del proceso penal no representa un atentado decidido al derecho tutelado –improcedencia de 14 de junio de 2017, hábeas corpus 113-2017, ya citada–.

En ese sentido, de lo relacionado no se advierte la concurrencia de un argumento que describa vulneraciones de normas constitucionales con afectación en los derechos de libertad física o integridad física, psíquica o moral del procesado, derivada de las actuaciones de la autoridad judicial contra la que reclama.

En consecuencia, la propuesta se limita a revelar una mera inconformidad con el contenido de la decisión que cuestiona y solicita expresamente a este tribunal –con competencia constitucional– una actuación que, en los términos manifestados por el peticionario, no puede ser sometida a control constitucional por medio de hábeas corpus.

Además, el mismo demandante ha planteado que se contó la oportunidad de acceder a los recursos respectivos en cada fase procesal, donde no solo se pudo exponer el argumento que ahora manifiesta sino también controvertir el planteamiento de la fiscalía sobre la imputación y –concretamente– sobre la fecha de la comisión del ilícito. De allí que se descarte una aparente lesión a derechos constitucionales que deba ser conocida.

Por lo anterior, deberá rechazarse este punto de su pretensión mediante la declaratoria de improcedencia.

2. En cuanto a la medida cautelar solicitada es preciso advertir que el presente caso finaliza con la declaratoria de improcedencia, por las razones que fueron expuestas en el apartado anterior; en ese sentido, dado que la petición ha sido rechazada de manera liminar, tampoco es procedente ordenar medida cautelar alguna.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *JGLS*, por tratarse, lo propuesto, de un asunto sin trascendencia constitucional y no plantearse agravio en el derecho fundamental de libertad física.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

724-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor RDSBR, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Miguel, a favor del señor *JCLM*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que el señor *LM* fue capturado por agentes policiales y miembros del ejército el día 11 de mayo de 2022, en la ciudad de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, sin que estos contaran con una orden escrita de detención y sin que el detenido se encontrara en flagrante delito, por lo que cuestiona la ilegalidad y arbitrariedad de dicha captura.

Asimismo alega que el imputado fue enjuiciado en el proceso bajo referencia 019-2022-US-R1 y se le decretó la detención provisional, sin observarse lo establecido en el art. 329 Código Procesal Penal (CPP), careciendo la medida precautoria de fundamento y prueba, pues el detenido no tenía antecedentes penales, no está tatuado, no fue detenido en flagrancia y el delito es de mera actividad, por tanto debió establecerse "la permanencia de la acción del ciudadano". Finalmente hace alusión, de forma analógica, al amparo contra ley heteroaplicativa, sin plantear ningún reclamo al respecto.

Por lo anterior requiere hábeas corpus a favor del señor *LM*, quien –afirma– se encuentra recluido en el Centro Penal de Izalco Fase I.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. 1. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona (sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008).

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación (sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002).

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales,

en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respec-

to a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

2. Esta sala también ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. 1. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *LM* fue capturado de manera ilegal ya que –según refiere– no existe una orden escrita o detención o flagrancia que avale dicha captura.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia flagrancia o de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inc. 1º Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inc. 1° Cn. y 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

2. El peticionario también arguye que la detención provisional impuesta al detenido carece de motivación "y de prueba"; sin embargo, en los términos en que ha sido expuesto dicho reclamo, más allá de alegar una falta de motivación de la decisión cuestionada, se proponen aspectos vinculados a la inocencia del señor *LM* respecto al ilícito que se le atribuye, pues se resalta la carencia de antecedentes penales, así como de tatuajes del detenido, además de indicar que no existió flagrancia y que el delito es de mera actividad, así como de señalar lo relativo a la permanencia o no este en una estructura criminal.

En ese sentido debe reiterarse que lo anterior es un asunto cuyo análisis ha sido delegado legalmente a los jueces con competencia penal, con apoyo en los indicios probatorios, quienes son los habilitados para determinar la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con

los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad; existiendo, en la normativa procesal penal, recursos para que se planteen tales discrepancias con las decisiones judiciales, inclusive aquellas que no tienen trascendencia constitucional como en este caso se ha alegado.

Es así que al no haber argumentado el solicitante asuntos de carácter constitucional, sino aspectos de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *JCLM*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—–O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

439-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas y veinte minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por los abogados Hebert Omar Romero Orellana y Edwin Oseas Mejía Castaneda en contra de uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, a favor del señor *CDAO*, condenado por el delito de extorsión agravada.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. Los peticionarios manifiestan que a su representado la autoridad demandada lo condenó, mediante sentencia emitida el 27 de julio de 2015, a la pena de quince años de prisión en calidad de autor directo, misma que se encuentra firme desde el 23 de enero de 2017, pues el recurso de apelación presentado fue declarado inadmisible.

Reclaman que la sentencia vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que carece de motivación, pues se sustentó en la transcripción de la declaración de los agentes investigadores, asimismo, expresan que al imponer la pena el juzgador valoró la participación de los involucrados de forma errónea, ya que aplicó la misma pena a todos, sin embargo, –a su criterio– al señor *AO* se le debió condenar en el grado de cómplice no necesario porque su participación se estableció en que únicamente daba seguridad.

Añadieron que el 18 de mayo de 2021 interpusieron recurso de revisión ante la autoridad demandada en el que alegaban la vulneración a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, en consecuencia, solicitaban que la sentencia fuera anulada o se redujera la pena de quince años de prisión, a la pena de complicidad no necesaria o necesaria, este fue resuelto el 24 de junio de ese mismo año, resolución mediante la cual el juzgador "aceptó de manera tácita" lo alegado, sin embargo, fue declarado inadmisible indicándose que no se habían logrado establecer las vulneraciones a garantías constitucionales.

Finalmente solicitan que esta sala anule la sentencia condenatoria o en su caso, como segunda pretensión, se valore la participación del señor *AO* como cómplice no necesario y se modifique la pena impuesta.

A su solicitud agregaron escrito de fecha 8 de febrero de 2022, por medio del cual la persona que se pretende favorecer les nombra como sus defensores particulares, así como las copias de sus documentos personales, además de la sentencia de la cual reclaman, también de la emita por la cámara en apelación y de la resolución por medio de la cual se declara no ha lugar el recurso de revisión presentado.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta de los peticionarios (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Dentro de la competencia de este tribunal no se encuentra la facultad para examinar si los elementos probatorios habidos en el proceso son suficientes para establecer la tipicidad de un hecho, la participación del imputado y la necesidad de imponerle una restricción en su libertad, porque el objeto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de aquellas circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen el derecho de libertad física y no los denominados asuntos de mera legalidad –improcedencia de 6 de diciembre de 2017, hábeas corpus 452-2017–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

2. Esta sala ha señalado que en el artículo 491 del Código Procesal Penal (CPP) se regula que el análisis sobre la admisibilidad de un recurso de revisión establece una serie de supuestos frente a los cuales la misma autoridad judicial que emitió la sentencia condenatoria debe determinar la procedencia de modificar tal decisión en beneficio de la persona declarada culpable penalmente, lo cual exige al recurrente expresar en su escrito,

bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda, las disposiciones legales aplicables y el ofrecimiento de la prueba pertinente –improcedencia del 20 de junio de 2016, hábeas corpus 208-2016–.

En tal sentido, la verificación del cumplimiento de tales requisitos constituye una competencia exclusiva del tribunal sentenciador que conoce del recurso de revisión, esto es: comprobar que el recurso incoado se funda en alguno de los casos contemplados en la disposición legal citada.

IV. De lo manifestado en la solicitud, se advierten, en síntesis, cuestionamientos referidos a la falta de fundamentación de la sentencia con respecto a la insuficiencia y valoración de las pruebas –concretamente la transcripción de la declaración de los agentes investigadores– y a que, de forma errónea, se le consideró al condenado coautor en el delito acusado, pues su única participación fue la de dar seguridad, en consecuencia, su grado de autoría y por ende la pena debió adecuarse a la de cómplice, tal como lo solicitaron en el recurso de revisión

En ese orden, verificar el grado de participación delincuencial y la valoración de la prueba con la que se concluyó en la imposición de la condena, es competencia de las autoridades en materia penal y no de esta sala.

De manera que el reclamo planteado radica en una mera inconformidad con el grado de intervención en el ilícito que se le asignó al imputado en la sentencia condenatoria y la valoración que el juez le otorgó a la prueba, para tal efecto, de ahí que pretender que este tribunal revise el aludido proveído como una instancia más dentro del proceso penal para evaluar, con base en la prueba, la responsabilidad atribuida, es una cuestión de estricta legalidad que debe resolverse en el proceso penal. También corresponde a los jueces y tribunales de esa naturaleza determinar si hay contradicciones entre los elementos de prueba y decidir el valor de los mismos, aunque estuvieran en esas condiciones, así como analizar si un testigo proporciona información relevante y veraz, así como directa sobre alguna circunstancia relativa a los hechos, no siendo esa la función constitucional de esta sala.

Con respecto al recurso de revisión que refieren los solicitantes interpusieron ante la autoridad demandada, el cual fue declarado inadmisible porque no se logró establecer la causal pretendida, debe reiterarse que la determinación acerca del cumplimiento de los requisitos para la admisión del aludido recurso es competencia exclusiva de la autoridad judicial que pronunció la condena y no de este tribunal constitucional que esta inhibido para conocer tal asunto en los términos propuestos.

Por tanto, al advertirse un vicio en los argumentos expuestos por los peticionarios, esta sala se encuentra imposibilitada de conocer del fondo de lo planteado, por ser un asunto de legalidad, debiendo declarase improcedente el hábeas corpus.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *CDAO*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

799-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinticinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el señor *MAAC* a su favor y de *más de cincuenta veteranos y excombatientes del "FMLN-HISTÓRICO" y cuarenta familias agricultoras del caserío Barra Salada, cantón Salinas de Ayacachapa del municipio de Sonsonate* —sin ser identificados—, en contra del Fiscal General de la República, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, la señora MSGDV o MSGVDV y agentes de la Policía Nacional Civil.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que él junto a otras personas han venido cultivando en un área de aproximadamente veintiséis manzanas de terreno, de lo cual posteriormente tuvieron conocimiento que es parte de un área natural protegida del Complejo Los Cóbanos, en Sonsonate, ante ello, el 23 de marzo de 2022 solicitaron al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales que les concediera el derecho de propiedad de dicha área de terreno, la cual fue denegada; sin embargo, el 10 de junio de ese mismo año solicitaron a dicha autoridad les concediera un permiso para continuar trabajando en un área de ciento cincuenta manzanas de dicho inmueble, misma que fue rechazada también.

No obstante, señala que la señora MSGDV o MSGVDV, es vecina del inmueble al que hace alusión, pero les manifestó que también es propietaria del terreno en el que han venido trabajando, habiéndolos denunciado por el delito de usurpación (sic), de ello, afirma que la supuesta propietaria cuenta con el respaldo del Centro Nacional de Registros de Sonsonate, pues el 1 de julio de 2022, un funcionario de dicha institución presentó un mapa y les manifestó que ella era la propietaria del bien y que deben desocuparlo, siendo amenazados que, en caso de que no se retiren serán detenidos, otorgándoles la supuesta propietaria cuatro días para la desocupación del inmueble.

Agrega que hubo presencia de "presuntos" miembros de la corporación policial en el inmueble —sin determinar fecha—, quienes "posiblemente haciéndose valer" del régimen de excepción les manifestaron tener la autoridad de capturarlos e incluso llegar a altas horas de la noche a irrumpir el lugar y botar puertas.

De lo anterior, considera que se les ha vulnerado los derechos de libertad, inviolabilidad de la morada, propiedad, defensa y seguridad jurídica. Adjunta a su solicitud documentos de identificación personal, peticiones dirigidas al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, documentación catastral, listado de veteranos, excombatientes y campesinos sin tierra, informe de reinvestigación de propiedades y fotografías.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional relacionada con la solicitud (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a lo expresado por el peticionario (IV).

III. 1. El agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe encontrarse afectada en los derechos relacionados en el artículo 11 inciso 2° de la Constitución —libertad personal o integridad física, psíquica o moral de los detenidos—, por las actuaciones u omisiones contra las cuales reclama, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal situación. Así, si se emite una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales categorías jurídicas —improcedencia del 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017—.

Por el contrario, las peticiones que presenten deficiencias —entre otras— referidas a reclamos desvinculados con los derechos protegidos por medio del proceso de hábeas corpus, carecerán de las condiciones que permitan a esta sala evaluar la propuesta que se efectúa —improcedencia de 20 de septiembre de 2017, hábeas corpus 347-2017—.

Asimismo, esta sala ha dispuesto que puede conocer de peticiones en las que no se ha ejecutado el acto restrictivo de libertad y de esa forma impedir una lesión a producirse —hábeas corpus en su modalidad preventiva—;

sin embargo, en tales casos, para su procedencia se exige que la amenaza a la libertad (que se objeta) debe ser real, de inminente materialización y orientada hacia una restricción ilegal, es decir que esta debe estar a punto de concretarse, en razón de haber sido emitida y estar por ejecutarse —improcedencia de 2 de septiembre de 2016, habeas corpus 310-2016—.

2. Esta sala ha estipulado que su ámbito de competencia en el habeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen directamente el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda Favorecer o en su caso el derecho de integridad física, psíquica o moral de los privados de libertad; por tanto, esta sede se encuentra normativamente impedida para examinar situaciones que no se refieran a preceptos constitucionales que se vinculen con los referidos derechos o cuya determinación se encuentre preestablecida en normas de rango inferior a la constitución y le corresponda dirimirlas a otras autoridades, siendo estos últimos los denominados asuntos de mera legalidad —improcedencia del 20 de abril de 2020, habeas corpus 176-2020—.

IV. De acuerdo a lo anterior, el peticionario fundamenta su petición a partir de las amenazas de privación de libertad recibidas por la aparente propietaria del bien inmueble donde él junto a otras personas han realizado diversos cultivos, en caso de que no desocupen dicho inmueble, dicha acción afirma es respaldada por un funcionario del Centro Nacional de Registros de Sonsonate dado el acompañamiento que ha realizado y haber manifestado que serán capturados en caso que no desalojen el bien —inmueble—, por el Fiscal General de la República al haber recibido la denuncia sin pruebas y por agentes de la Policía Nacional Civil al llegar al inmueble y afirmarles —según indica— que bajo el decreto del régimen de excepción tienen la autoridad de detenerlos, irrumpir el lugar y botar las puertas del mismo.

Sin embargo, de lo expuesto, no se evidencia una restricción a la libertad personal ni una amenaza cierta a dicho derecho, pues el peticionario no refiere la existencia de una orden de captura en vías de ejecución, ya que centra su reclamo en que han sido demandados por la supuesta propietaria del inmueble en cuestión y por ello intenta desvirtuar en esta sede los hechos por los cuales se les denunció, aseverando que el área —los terrenos— donde ellos han cultivado es protegida cuestionando así la veracidad de lo dicho por la aludida señora GDV o MSGVDV, alegando por ello vulneración al derecho de libertad física y otros derechos que no son objeto de tutela por medio del habeas corpus.

De igual forma, en su relato se limita a indicar que se apersonaron supuestos agentes de la policía, pero sin describir fechas, las veces que estos llegaron y las actuaciones que consideran pudiesen constituir acoso, ni las razones por las cuales aseveran que dichas personas forman parte de la corporación policial, no llegando a evidenciar en sus argumentos alguna situación que pueda ser controlada por este tribunal.

En ese sentido, es de referir que la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en esta sede no es posible determinar si ha existido o no una actuación de autoridad, o en su caso de un particular, que pueda conllevar a una falta administrativa o a la comisión de un ilícito penal —entre otros—, pues estas son circunstancias que deben investigarlas y decididas las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República y los jueces que conocen en materia penal, en el supuesto de estimar que las actuaciones reclamadas son generadoras de delitos o faltas de tal naturaleza.

Sobre ello se ha sostenido que, en esos casos, la legislación secundaria otorga los mecanismos adecuados para que el agraviado se dirija ante las autoridades competentes a fin de denunciar lo acontecido, sin que pueda pretenderse que este tribunal sea el que investigue y determine aspectos como el referido, ya que no constituye parte de sus atribuciones (improcedencia de 8 de junio de 2016, habeas corpus 192-2016)

Además, no se cumple con el requisito ineludible de la existencia de una restricción a la libertad física que, al momento de requerir la actividad de esta sala, esté surtiendo efectos en el derecho de libertad personal del imputado o se encuentre ya en vías de ejecución; en consecuencia, este tribunal se encuentra inhibido de evaluar lo propuesto, pues la labor de control realizada en un habeas corpus se limita a verificar la existencia de violaciones constitucionales al referido derecho fundamental —o al de integridad física, psíquica o moral de los detenidos—, y consecuentemente, a repararlos.

Finalmente, es de indicar que si bien el peticionario desmiente lo relativo a quién pertenece la propiedad del inmueble al que hace alusión, reconoce que él ni las personas que pretende favorecer tienen algún documento que respalde mantenerse en dicho lugar, pues las autoridades les han rechazado su solicitud. De ahí que su propuesta no se encuentra vinculada con los derechos tutelados a través de un proceso de esta naturaleza, pues dirimir dicha situación corresponde a otras autoridades.

Por tanto, al carecer lo propuesto de argumentos que descansen en vulneraciones constitucionales susceptibles de ser analizadas mediante el proceso de hábeas corpus y siendo que este es un requisito indispensable para la correcta configuración de la pretensión, existen vicios insubsanables que impiden su conocimiento, con lo cual vuelve improcedente su tramitación, por alegarse asuntos que competen a otras autoridades —de estricta legalidad— y que no pueden ser dilucidados mediante este proceso por carecer de trascendencia constitucional.

POR TANTO, con base en las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la pretensión planteada por el señor MAAC, a su favor y de más de cincuenta veteranos y excombatientes del FMLN-HISTÓRICO, y cuarenta familias agricultoras del caserío Barra Salada, cantón Salinas de Ayacuchapa del municipio de Sonsonate, por alegarse asuntos que no pueden ser conocidos a través del habeas corpus y que carecen de trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—–O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1376-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Juan Manuel Chávez, en contra del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana y de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *HSCZ*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que la detención provisional decretada por el aludido juez especializado de instrucción al señor Z es ilegal e injusta, debido a que fue detenido el 12 de agosto de 2022, en su lugar de trabajo ubicado en **********, Santa Ana, por agentes policiales, quienes le preguntaron su nombre, le pidieron su documento único de identidad y luego de identificarlo procedieron a detenerlo, subiéndolo a la patrulla sin contar con orden de captura en su contra, pues solo le manifestaron a su madre que se lo llevaban en vías de investigación y aproximadamente una hora después le informaron en la "delegación policial del IVU" que dicho joven "tiene una ficha".

Señala que su representado trabaja en la elaboración de pan junto a su familia, siendo de dicha actividad que obtiene sus ingresos económicos, no es miembro ni colaborador de pandillas y tampoco tiene en su cuerpo tatuajes alusivos a estas, por lo que solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúen de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia de 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o

no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *HSCZ* fue capturado y se encuentra en detención provisional de manera ilegal e injusta ya que –según refiere– los agentes policiales no contaban con orden para su detención, no es miembro ni colaborador de pandillas y tampoco tiene en su cuerpo tatuajes alusivos a estas.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inciso 1º. de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad

son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado el peticionario un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *HSCZ*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1992-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Heriberto Alejandro VL, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *JLMG*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que la señora *JLMG* fue capturada el 12 de agosto de 2022, en su casa de habitación ubicada en San Martín; también refiere que la detenida se encuentra en control por su cuarto mes de embarazo en el "Seguro Social de Ilopango" –de lo cual no se menciona ni se realiza ningún reclamo en su solicitud– y que los documentos que acreditan su estado se los entregó a un agente de la delegación policial de San Bartolo para que se adjuntara al acta de captura.

Expone que se están vulnerando los derechos fundamentales de la señora *MG*, especialmente el de libertad, puesto que se le capturó con "fundamento ilegal por el decreto del régimen de excepción", con el cual se detiene a cualquier persona sin una investigación previa de su conducta pública y privada como ocurre en el presente caso, por lo que en razón de lo expuesto y del estado de embarazo de su representada solicita que se

le brinde una pronta y cumplida justicia. A su petición adjunta documentación de la imputada relacionada a una condena derivada de un proceso judicial anterior, por el cual se le había concedido el beneficio de la libertad condicional ordinaria y algunos diplomas.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. 1. Jurisprudencialmente se ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 16 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de las personas a favor de quienes se requiere; de manera que, al efectuar las peticiones, deben señalarse con precisión tales aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente la petición y que permiten que pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal estaría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mininamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal (improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020).

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario únicamente afirma que la señora *JLMG* fue privada de libertad con "fundamento ilegal por el decreto del régimen de excepción" y que está en "control de su embarazo de cuarto meses"; sin embargo, no indica el hecho concreto del que reclama, la autoridad a la que se lo atribuye, ni la vulneración constitucional de derechos de la detenida protegidos mediante hábeas corpus; es decir, más allá de la fecha y el lugar de su captura, no se expone por qué la considera inconstitucional.

Para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido; y es que si bien, el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener al menos, un acto generador de violaciones constitucionales con incidencia directa en el derecho de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer, datos que permitan la determinación de esta persona y de la autoridad a la que lo atribuye.

Sin embargo, en este caso no se consignan en la petición –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual, en términos tan abstractos, tampoco es atendible la solicitud propuesta por el señor VL; constituyendo tales omisiones un vicio en la petición que impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

Cabe agregar que aunque se menciona el estado de embarazo de la detenida, en la petición no se plantea, sobre este punto, ninguna vulneración constitucional o reclamo concreto contra autoridad alguna.

No obstante, se reitera que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos de los internos, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

De ahí que, de considerarlo pertinente, puede avocarse también a las autoridades que ordenaron y controlan la privación de libertad, a exponer de manera clara sus argumentos, en caso que tuviere algún reclamo relacionado con la condición embarazo de la señora MG.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *JLMG*, al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1999-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Concepción Margarita Bonilla de Paz, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y el Juez Especializado de Instrucción C-2 de San Salvador, a favor de: *1) FJLM, 2) GARB, 3) JRRD, 4) JERM, 5) HAPH, 6) LABR, 7) LGPC, 8) MTCC, 9) MGH, 10) YAQ, 11) MJC, y 12) JEGR*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que las personas referidas, fueron capturadas de forma ilegal en agosto de 2022, en diferentes municipios del departamento de Chalatenango, en el marco del régimen de excepción, desconociendo los motivos de su captura y sin que existiera algún antecedente o perfil delincuencial ni orden de captura.

Expone que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional para todos los imputados presentando como indicios; *i)* actas de captura, *ii)* perfil delincuencial, *iii)* acta de entrevista de los agentes captores, *iv)* acta de abstención y nombramiento de defensor público, *v)* hoja de chequeo clínico y *vi)* acta de inspección corporal; documentos con los que no se lograba establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas de los imputados.

No obstante lo expuesto afirma que, el juez en un decisión sin motivación, decretó la medida cautelar privativa de libertad, aun sin haber indicios sólidos de la participación de aquellos, sin considerar lo que establece el art. 329 del Código Procesal Penal, ni valorar la posibilidad de imponer otro tipo de medidas cautelares menos graves y limitarse a manifestar que para él si existían elementos para decretar la detención provisional.

Refiere que desde el día en que fueron privados de libertad no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, expresando que no han sido atendidos para determinar su estado físico y de salud –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, situación que vulnera los derechos a la legitima defensa y el debido proceso regulados en nuestra constitución.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en

el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la privación de libertad en la que se encuentran los imputados, alegando que la misma carece de fundamentación pues, a su criterio, con los indicios aportados no se logró establecer la participación, pertenencia o cometimiento del delito de agrupaciones ilícitas.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación de alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario únicamente se expone su inconformidad con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación de los procesados que derivaron en la detención provisional de sus defendidos, ya que, a su parecer estos, son insuficientes.

Y es que, si bien se alega falta de fundamentación de la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, ya que la misma peticionaria ha señalado que a su parecer los elementos incorporados no permiten comprobar la existencia del delito ni la participación de los procesados en el mismo.

Al respecto, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Finalmente, si bien se alegan aspectos referidos al contacto de los detenidos con sus familiares o defensores y se especula sobre la posible necesidad de que algunos requieran atención médica, no se mencionan actuaciones y omisiones concretas que pudiesen derivar en vulneraciones a derechos constitucionales, por lo tanto, en los términos planteados, no es posible advertir argumentos que sustenten tales aseveraciones ni afectaciones a los derechos protegidos mediante el hábeas corpus.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia

del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor de los señores: *1) FJLM, 2) GARB, 3) JRRD, 4) JERM, 5) HAPH, 6) LABR, 7) LGPC, 8) MTCC, 9) MGH, 10) YAQ, 11) MJC, y 12) JEGR*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, archívese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

89-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1048-22, de fecha 17 de febrero de 2022, suscrito por la Jueza Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador, por medio del cual se remite la solicitud de hábeas corpus promovido en contra del Tribunal de Sentencia de Chalatenango, a su favor por el señor *MASL*, condenado por los delitos de violación en menor o incapaz y agresión sexual en menor e incapaz.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta que mediante sentencia del 25 de octubre de 2021, que se encuentra firme, fue condenado por la autoridad demandada a la pena total de veintidós años de prisión, por los delitos relacionados.

Reclama que el juez sentenciador vulneró los principios de inocencia, legalidad y "ne bis in ídem", al duplicarle su pena de prisión por un mismo hecho inobservando lo regulado en el art. 7 numeral 3 del Código Penal (CP) referente al concurso aparente de leyes y específicamente el principio de consunción, regla que determina "[...] la realización de un tipo penal de mayor gravedad absorve a los supuestos de hechos de menor gravedad de

ahí que siempre se aplica el precepto más grave [...] ya que unos de los fundamentos del concurso real de leyes radica en la prohibición de penalizar doblemente o multiplemente un unico hecho [...] cuando el hecho generador es uno solo [...]" (sic).

Concluye afirmando que la sentencia le ha causado agravio ya que se le debió condenar únicamente por el delito de violación en menor o incapaz, a la única pena de catorce años de prisión y el otro delito de agresión sexual en menor e incapaz debió ser subsumido conforme al concurso aparente de leyes.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. En el marco del examen liminar que debe realizar esta sala a los planteamientos efectuados por el peticionario, se considera necesario referirse: 1) al objeto de control de un proceso constitucional como este; 2) los límites que tiene el tribunal con respecto a los temas que son sometidos a su conocimiento, vinculados con atribuciones de otras autoridades judiciales; y, 3) los requisitos para tener por establecido la inobservancia del principio de única persecución –*non bis in ídem*– de acuerdo a la jurisprudencia.

1. Esta sala ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

2. Se ha establecido como uno de los límites a las atribuciones conferidas constitucionalmente a esta sala, le impide analizar los elementos de convicción que rodean al hecho y que fundamentan las decisiones que adoptan jueces y tribunales penales, pues ello es atribución exclusiva de ellos y su arrogación implicaría convertirse en un tribunal de instancia más, capaz de revisar las actuaciones del resto de autoridades judiciales bajo esas circunstancias –improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014–.

De modo que, la falta de señalamiento expreso del agravio generado por la autoridad contra quien se reclama, con las características antes mencionadas, o pretender que este tribunal revise los elementos de convicción que llevan a las autoridades a adoptar las decisiones en torno a las causas penales, constituyen vicios en la pretensión e impiden que pueda continuarse con su trámite normal.

3. Además se ha indicado que los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia de una doble o múltiple persecución son: *i)* identidad en la persona, *ii)* identidad del objeto de la persecución y *iii)* identidad de la causa de persecución.

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate de la misma persona perseguida penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona –sobreseimiento del 23 de junio de 2009, hábeas corpus 223-2007–.

IV. De acuerdo a lo expuesto se advierte que el señor *MASL* considera que debió ser condenado por un solo delito y no por dos, con base en su apreciación sobre los hechos y su consideración de la existencia de un concurso aparente de leyes.

Como se ha referido, la protección recogida en la prohibición de doble juzgamiento implica la imposibilidad que una misma conducta delictiva generada a partir de un mismo hecho pueda ser conocida a través de más de un proceso penal. Sin embargo, de la lectura de la solicitud de este proceso constitucional se evidencia que lo expuesto por el peticionario se aleja del contenido de esta garantía, en la medida en que se trata de un solo proceso penal en el que se le atribuyeron dos delitos diferentes en modalidad de concurso real mientras que a su criterio un delito debió ser subsumido por el otro.

Al respecto se advierte que lo que traslada el peticionario es su desacuerdo con las valoraciones que realizó el juez sobre los hechos que se le atribuyeron en el proceso penal y que, a su criterio, estos no tenían la entidad suficiente para juzgarse por separado, sino subsumidas sus acciones en un solo delito, cuya evaluación, según se indicó, no forma parte de la competencia constitucional de esta sala, sino que representa un asunto que corresponde ser determinado por el juez que conoció del proceso penal

seguido en su contra y, si hubiere alguna inconformidad con lo resuelto, el ordenamiento jurídico secundario contempla los mecanismos recursivos pertinentes a fin de impugnar dicha sentencia con base en el agravio que esta le pudiera haber ocasionado.

Es así que en el reclamo planteado no se advierte alguna circunstancia vulneradora de derechos constitucionales sino una mera inconformidad con la condena emitida y con las apreciaciones judiciales sobre los hechos atribuidos y en razón de ello deberá declararse improcedente.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución, 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *MASL*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

962-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con diez minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido a su favor por la abogada *NAQV*, contra el Director de la Policía Nacional Civil y el Fiscal General de la República.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria refiere que en el año 2017 fue contratada por una persona en San Vicente para que ejerciera la defensa técnica de su hijo; siendo en una reunión celebrada en su oficina jurídica, ubicada en el barrio San Miguelito de San Salvador, que se le otorgó un poder para el ejercicio de su cargo y que se pactaron sus honorarios.

Relata que, posteriormente, presentó su nombramiento en el Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Vicente y, llegado el día de recibir

el pago de sus honorarios, su mandante le efectuó una llamada diciéndole que no podía trasladarse a esa ciudad y que le haría el pago por una remesa a través de Tigo Money, a lo cual ella accedió; sin embargo, luego de un año, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa porque tenían una orden administrativa en su contra, atribuyéndole el delito de extorsión, por lo que procedieron a capturarla, dando así inicio al proceso penal en su contra que finalizó con una sentencia absolutoria.

En razón de lo anterior, considera que, por el simple hecho de tener antecedentes policiales y la entrada en vigencia del régimen de excepción, se encuentra en peligro de ser víctima de una captura ilegal y arbitraria sin necesidad de que exista una orden de captura girada en su contra por autoridad administrativa o judicial, pues basta aparecer en los registros policiales o que se diga que una persona es miembro activo de maras o pandillas para justificar la captura de una persona, aunque no pertenezca a tales grupos criminales; por lo que solicita hábeas corpus preventivo a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido jurisprudencialmente que el hábeas corpus preventivo tiene por objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental a la libertad personal, cuando se presenta una amenaza inminente e ilegítima contra el citado derecho, de forma que la privación de libertad no se ha concretado, pero existe amenaza cierta de que ello ocurra.

Para configurar una exhibición personal preventiva se requiere necesariamente que la amenaza al derecho de libertad física sea real y no conjetural; es decir, que la previsibilidad de la restricción no puede devenir de sospechas o presunciones, sino de la existencia de una actuación concreta generadora del agravio inminente, evidenciada, por ejemplo, a partir de una orden de restricción decretada por cualquier autoridad y que la misma no se haya ejecutado aún pero sea próxima su realización –improcedencia de 15 de junio de 2011, hábeas corpus 52-2011–.

IV. En el presente caso la peticionaria, aunque expresamente menciona que no se ha girado en su contra una orden de detención de carácter administrativo o judicial, sostiene que su derecho de libertad física se encuentra amenazado ya que puede ser capturada arbitrariamente durante la vigencia del régimen de excepción debido a que tiene antecedentes policiales por el delito de extorsión.

Al respecto se aclara que, sobre la base de un hábeas corpus preventivo, esta sala no puede adelantarse a impedir la emisión de una restricción de libertad física que puede incluso nunca llegar a ordenarse, puesto que, con la mencionada modalidad de hábeas corpus, lo que se pretende es evitar que restricciones inconstitucionales al derecho de libertad física ya ordenadas se ejecuten y efectivamente provoquen un menoscabo material al aludido derecho.

De manera que, al no fundamentar la abogada *QV* su petición en una orden de detención ya decretada y en vías de ejecución, cuya constitucionalidad pueda ser enjuiciada por esta sala con el objeto de evitar que se concretice, sino que en la mera posibilidad de que dicha actuación eventualmente llegue a efectuarse, deberá rechazarse su propuesta a través de la declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por la abogada *NAQV* al proponer un asunto que carece de trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—-GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1996-2022

Relaciones:

2178-2022, 2256-2022, 2339-2022, 2361-2022, 2387-2022, 2389-2022, 2393-2022, 2397-2022, 2401-2022,2407-2022, 2416-2022, 2514-2022, 2550-2022, 2552-2022, 2554-2022, 2597-2022, 2598-2022, 2600-2022, 2615-2022, 2620-2022, 2734-2022, 2746-2022, 1870-2022, 2130-2022, 2400-2022,2415-2022, 2423-2022, 2441-2022, 2455-2022, 2457-2022, 2465-2022, 2473-2022, 2475-2022, 2500-2022, 2610-2022, 2732-2022, 2906-2022, 3211-2022, 3230-2022, 3235-2022, 3248-2022, 3363-2022, 3365-2022, 3366-2022, 3368-2022, 1878-2022, 1990-2022, 2042-2022, 2164-2022, 2410-2022, 2477-2022, 2479-2022, 2481-2022, 2485-2022, 2491-2022, 2503-2022,2505-2022, 2508-2022, 2515-2022, 2519-2022, 2624-2022, 2803-2022, 2865-2022, 2886-2022, 2892-2022, 2895-2022, 2900-2022, 3015-2022, 3030-2022, 3036-2022, 3064-2022,03153-2022, 2190-2022, 2212-2022, 2268-2022, 2284-2022, 2392-2022, 2555-2022, 2563-2022, 2567-2022, 2573-2022, 2579-2022, 2581-2022, 2601-2022, 2607-2022, 2676-2022, 2820-2022, 2832-2022, 2868-2022, 2880-2022, 3046-2022, 3082-2022, 03108-2022, 3146-2022, 3202-2022, 3257-2022, 3260-2022, 3264-2022, 3273-2022, 3278-2022, 3293-2022, 3295-2022, 3319-2022, 3330-2022, 2290-2022, 2398-2022, 2454-2022, 2528-2022, 2653-2022, 2685-2022, 2695-2022, 2705-2022, 2748-2022, 2754-2022, 2757-2022, 2758-2022, 2761-2022, 2764-2022, 3204-2022, 3331-2022, 2298-2022, 2390-2022, 2646-2022, 2672-2022, 2675-2022, 2678-2022, 2693-2022, 2707-2022, 2708-2022, 2711-2022, 2908-2022, 1846-2023, 1860-2023, 1862-2023, 2072-2022, 2280-2022, 2709-2022, 2719-2022, 2725-2022, 2733-2022, 2752-2022, 2794-2022, 2818-2022, 2834-2022, 3252-2022, 3334-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el señor RFBG, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *MAAR*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario señala que el señor *AR* fue privado de libertad el 16 de abril de 2022, en San Luis Talpa, departamento de La Paz, por agentes policiales, estando a la orden del juzgado especializado de Instrucción A3 de San Salvador, no habiendo fundamento legal para su detención pues no ha cometido delito en flagrancia ni existe una orden escrita decretándola, por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el artículo 13 de la Constitución (Cn) establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona –sentencia del 9 de marzo de 2011, hábeas 141-2008–.

Debe indicarse que el artículo 159 inc. 3° de la Cn, le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia del 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito

en los términos del inciso 2º del artículo 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 del CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el artículo 12 inc. 1º de la Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia del 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *MAAR* fue capturado de manera arbitraria o ilegal ya que –según refiere– no ha cometido delito en flagrancia, no existe orden por escrito, ni fundamento para su detención.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden –administrativa o judicial– para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el artículo 13 inciso 1º de la Cn, pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los artículos 13 inciso 1° de la Cn, 271, 323, 326 y 327 del CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el artículo 29 de la Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º de la Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas

de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado el peticionario un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha

sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *MAAR*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. Notifíquese.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""""""""""""

2092-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora SMRV, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *ECVR*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que es madre de la señora *VR*, quien fue privada de libertad el día 12 de junio de 2022, en su casa de habitación, en el

municipio de Zacatecoluca, cuando descansaba junto a su familia. Refiere que solicita hábeas corpus a favor de la referida señora por considerar que su captura es arbitraria, asimismo señala que desconocen los motivos de su detención.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Jurisprudencialmente se ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 16 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de las personas a favor de quienes se requiere; de manera que, al efectuar las peticiones, deben señalarse con precisión tales aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente la petición y que permiten que pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal estaría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mininamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal (improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020).

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria únicamente afirma que la señora *ECVR* fue privada de libertad el día 12 de junio de 2022, desconociendo los motivos de su captura, sin indicar el hecho concreto que reclama ni las razones por las que considera inconstitucional la detención.

Para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido, y es que si bien el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener, al menos, un acto generador de violaciones constitucionales –con incidencia directa en el derecho

de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer–, así como datos que permitan la determinación del favorecido y de la autoridad a la que atribuye tal acto.

Sin embargo, en este caso no se consignan en la petición –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual, en términos tan abstractos, tampoco es atendible la solicitud propuesta; constituyendo tales omisiones un vicio en la petición impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

En todo caso y respecto a la situación jurídica de la señora *ECVR*, deben avocarse a la autoridad judicial a cargo de su proceso penal a requerir la información respectiva.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia

del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *ECVR*, al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""""

2337-2022

Relaciones:

1312-2022, 2228-2022, 2439-2022, 2240-2022, 2497-2022, 2170-2022, 2586-2022, 3038-2022, 1393-2022, 2238-2022, 2242-2022, 2648-2022, 1379-2022, 2225-2022, 2655-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ARMC, en contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a favor del señor *AVGM*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que el señor *AVGM* fue capturado el 11 de abril de 2022, en su casa de habitación, por agentes policiales y miembros de la fuerza armada; relata que dichas autoridades "en un operativo" le solicitaron el documento de identidad y se lo llevaron no obstante nunca había sido detenido, considera que esto contraviene la constitución pues no ha cometido ningún delito ni existe razón legal para justificar la captura, por tal razón solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor *AVGM* fue capturado arbitrariamente ya que –según refiere– no ha cometido ningún delito, no ha estado detenido ni existe fundamento legal para su detención.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesario el informe a la institución fiscal y la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe

o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete

el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *AVGM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2356-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las dieciséis horas del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana, a favor del señor *EESC*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante indica que el señor *SC* fue capturado el día 10 de julio de 2022 y se le realizó audiencia de "imposición" el día 20 del mismo mes y año.

Expone que en la referida audiencia se argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación y participación del imputado, ni la existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para imponer la detención provisional, por lo cual –alega que– al aplicarse de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en situación de vulnerabilidad –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y alega que en tal sentido, la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal. Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor del detenido a fin de concederle la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué motivos lo alega–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –resolución del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el

derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentra el señor *SC*, por considerar que la misma se aplicó de manera discrecional, vulnerando su derecho de libertad física, pues los indicios aportados por fiscalía "no llenan los requisitos" para su imposición y pide que se restablezca la libertad del procesado por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin detallar nada sobre esto último–.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del procesado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del juez de la causa.

Y es que, si bien se alega falta de requisitos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede determine la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada al procesado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de las personas detenidas.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en situación de vulnerabilidad y pide se restablezca la libertad física del imputado mencionando un supuesto exceso en la detención provisional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de la persona que pretende favorecer.

En todo caso, respecto a la restricción de libertad en que se encuentra el señor *SC*, la peticionaria puede hacer uso de los mecanismos que contempla la normativa procesal penal ante el juez de la causa, incluso también de los medios recursivos respectivos para plantear las discrepancias que, alude, contiene la decisión judicial que sustenta su privación de libertad.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VII. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *EESC*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

2413-2022

Relaciones:
2562-2022, 1362-2022.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diecisiete horas con diez minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora DMV, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del ejército, a favor del señor *BFVV*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante refiere que el señor *VV* es su hijo, quien fue capturado por agentes policiales y soldados el día 25 de agosto de 2022, en su vivienda ubicada en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Al respecto, alega que no existe fundamento legal para su detención, pues el citado señor no ha cometido ningún delito, además, los agentes captares actuaron sin tener orden judicial de captura por escrito, por ello, requiere hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 13 de la Constitución establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir que se estén realizando hechos de apariencia delictiva y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencia] de la persona (sentencia de 9 de marzo de 2011, habeas 141-2008).

Debe indicarse que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación (sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002).

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2° del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales —no exclusivos— promotores de la acción penal —art. 193 ord. 4° Cn—, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente —o archivarse— y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente —art. 172 Cn.—, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados —por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características—, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación —o no— del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1° Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto —al igual que el resto de derechos fundamentales—, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es

cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autovía o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que el señor *VV* fue capturado de manera ilegal ya que —según refiere— no ha cometido ningún delito, además, no existe una orden judicial escrita que avale dicha captura.

Al respecto, debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden —administrativa o judicial— para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el art. 13 inc. 1° Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Desde esa perspectiva, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente —entre otros— a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno,

siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inc. 1° Cn. y 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2° y 13 inc. 2° Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencia! y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, *finalmente, ante los jueces penales competentes, no correspondiendo a esta sede pronunciarse en principio sobre la existencia o no de un delito o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema y, oportunamente, su decisión sobre la libertad física de la persona podría ser sometida a control de este tribunal.

Es así que al no haber argumentado la solicitante un asunto de carácter constitucional, sino un aspecto de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan —libertad física e integridad personal de los detenidos—,

el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía —art. 174 Cn.—.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente —en relación con años precedentes—se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar —más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad— el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia —sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 3002019—, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2°, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4°, 172 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *BFVV*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

245-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio 062/JDCO/2022, de fecha 4 de abril de 2022, suscrito por el Director del Complejo Penitenciario La Esperanza, por medio del cual remite la solicitud de hábeas corpus, promovido contra los jueces del Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, a su favor por el señor *MAPC*, condenado por los delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana lo condenó a ocho años de prisión por el delito de robo agravado y a cuatro años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, sin embargo, afirma que la decisión final se fundamentó con la deposición del testigo con régimen de protección clave "Simón", prueba documental y pericial, elementos probatorios que considera son insuficientes, equívocos e incongruentes con el hecho atribuido.

En cuanto a la deposición del testigo protegido, señala que es inconsistente, pues estableció fechas distintas al día en que acontecieron los hechos, además, no determinó el momento específico en que ocurrió el mismo; también, manifiesta que no existe otra declaración con la que se pueda corroborar lo dicho por el único deponente, considerando que dicha circunstancia no es suficiente para relacionar su participación en el hecho.

Adiciona que, si se hubiese practicado reconocimiento de persona o fotografía, se habría desvirtuado la presunción de inocencia, asimismo, alega que la identificación que realizó la víctima no se hizo bajo control jurisdiccional, por lo que refiere que, no se tiene certeza de su identificación, lo cual no permita acreditar su participación y responsabilidad en el hecho.

Indica que al no utilizarse elementos de pruebas certeros o legalmente establecidos para identificarlo y que permitieran desvirtuar su presunción de inocencia, la sentencia carece de relevancia probatoria, por lo que el

juez no debe darle valor, estableciendo que toda decisión judicial debe estar revestida del fundamento necesario y suficiente para que la misma tenga validez, sin embargo, indica que la sentencia no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 395 del Código Procesal Penal.

Aclara que no recurrió por cuestiones económicas, aunado a que la ley únicamente otorga un plazo de diez días hábiles para interponer los recursos correspondientes, lo cual le impidió utilizar cualquier mecanismo procesal orientado a reclamar sobre dicha vulneración alegada.

Por lo anterior, considera que se le han vulnerado los derechos de libertad y defensa, así como los principios de legalidad y de presunción de inocencia, por lo que solicita que se suspenda el acto reclamado, que se declare ha lugar el hábeas corpus promovido y que se le absuelva de toda responsabilidad penal.

II. Es preciso señalar la estructura lógica de la presente resolución: Así, primero se hará una consideración sobre la remisión de solicitudes por medio de correo electrónico (III); luego se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (IV); y posteriormente se examinará lo requerido por el peticionario (V).

III. La presente solicitud de hábeas corpus fue enviada a través de correo electrónico; al respecto, esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio –auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020–.

IV. 1. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

Con base en ello, los pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial y responsabilidad penal, entre otros, corresponden en exclusiva a la autoridad judicial que conoce de la causa penal y su determinación constituye un asunto de mera legalidad que, por su naturaleza, está excluido del conocimiento de esta sala.

2. Esta sala ha señalado que la configuración del proceso penal permite que el imputado que alegue falta de recursos económicos para nombrar a un defensor particular, la ley franquea la posibilidad que se le proporcione un defensor público designado por la Procuraduría General de la República, profesionales que, de acuerdo a la Constitución y la mencionada normativa, se encuentran obligados a ejercer sus cargos debidamente y de forma proba –improcedencia del 28 de mayo de 2014, hábeas corpus 204-2014–.

V. **1**. Como parte de su petición, el solicitante reclama de la valoración que el tribunal sentenciador otorgó a la prueba que sustentó su condena, pues considera que la prueba testimonial, documental y pericial son insuficientes, equívocos e incongruentes, asimismo, referir que la deposición del testigo con régimen de protección fue contradictoria entre sí y con el resto de la prueba presentada y no existir otros elementos probatorios que permitieran su individualización en el hecho, por lo que a su criterio, la participación en el hecho delictivo atribuido en su contra debió generar una duda a su favor, aclarando que no interpuso recurso en contra de ella por cuestiones económicas.

En esos términos, los argumentos del peticionario se basan en cuestiones que deben discutirse en el proceso penal ante el juez competente en la materia, a quien le corresponde valorar la prueba y la participación del imputado, y –de existir alguna inconformidad con lo resuelto–, la persona que se considera agraviada puede hacer uso, si así lo estima pertinente, de los mecanismos recursivos planteados en la legislación penal vigente; sin embargo, el peticionario alegó que no presentó ningún recurso por cuestiones económicas y por el plazo legal, sin referir que fuera por la falta de defensa técnica u otro impedimento.

Ahora bien, respecto a ello, también es preciso indicar que de conformidad con el artículo 452 Código Procesal Penal el imputado puede impugnar directamente la resolución final emitida en su contra o, de ser el caso, puede hacer de conocimiento a la autoridad judicial el desacuerdo con la labor del defensor nombrado, a fin de que emita las decisiones correspondientes al asunto reclamado.

De lo anterior, se concluye que los aspectos propuestos constituyen asuntos de mera legalidad sin trascendencia constitucional, de los cuales esta sala se encuentra inhibida de conocer, pues de hacerlo estaría arrogándose competencias que por ley corresponden a otras autoridades, actuando como un tribunal de instancia, lo cual desnaturalizaría el proceso de hábeas corpus, excediendo su ámbito de control, que se encuentra circunscrito exclusivamente a la tutela de derechos fundamentales.

En consecuencia, al proponerse aspectos que son competencia de otras autoridades, sin plantearse transgresiones a derechos fundamentales, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada por el señor *MAPC*, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen aspectos de legalidad, sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2583-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora VAH, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de *MJGH*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que la persona que pretende favorecer fue capturada el 28 de abril de 2022, de forma arbitraria e ilegal, "en el marco del régimen de excepción", cuando agentes policiales llegaron al puesto de venta de verduras de su madre y le interrogaron hacia dónde se dirigía y sobre el contenido de su mochila. Refiere que, luego de responderles, le manifestaron que le iban a revisar los tatuajes y, sin mayor explicación, se la llevaron detenida; atribuyéndole el delito de agrupaciones ilícitas.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. 1. Jurisprudencialmente se ha señalado que en materia constitucional la incoación de un proceso viene determinada por la presentación de una solicitud o demanda, según sea el caso, caracterizada como el acto procesal de postulación que debe llevar implícita una pretensión de naturaleza constitucional. Esta condiciona la iniciación, el desarrollo y la conclusión del proceso –improcedencia 16 de junio de 2010, hábeas corpus 104-2010–.

Además, mediante el proceso de hábeas corpus se controlan actuaciones u omisiones de autoridades o particulares, que inciden o amenacen el derecho de libertad física o integridad –física, psíquica o moral– de las personas a favor de quienes se requiere; de manera que, al efectuar las peticiones, deben señalarse con precisión tales aspectos configurativos del agravio que hacen constitucionalmente trascendente la petición y que permiten que pueda ser analizada, de lo contrario este tribunal estaría imposibilitado para continuar con su examen –improcedencia de 10 de abril de 2015, hábeas corpus 83-2015–.

2. Aunado a ello, se ha establecido como parámetros sobre la correcta configuración de la petición en materia de hábeas corpus los sujetos –autoridad demandada o particular y agraviado–, el acto reclamado y la vulneración constitucional generada por este; por lo que, la concreción en el planteamiento, bajo la expresión clara y precisa de esos requerimientos, es indispensable en este tipo de proceso constitucional.

De manera que, si lo planteado no traslada –al menos mínimamente– de manera verosímil y concreta tales aspectos no puede ser analizado por este tribunal (improcedencia de 26 de febrero de 2021, hábeas corpus 145-2020).

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria únicamente afirma que la señora *MJGH* fue privada de libertad, de forma arbitraria e ilegal, en "el marco del régimen de excepción" y que se le atribuye el delito de agrupaciones ilícitas; sin embargo, no indica el acto concreto por el que reclama, la autoridad a la que lo atribuye y la vulneración de derechos constitucionales protegidos mediante el hábeas corpus a la referida persona. Es decir, aparte de la fecha y del lugar de captura, no expone por qué la considera inconstitucional.

Para realizar un pronunciamiento sobre la petición propuesta, este tribunal realiza un examen inicial de la solicitud, verificando en ella el cumplimiento de un mínimo de condiciones necesarias para emitir una decisión sobre lo requerido; y es que si bien, el hábeas corpus tiene una naturaleza sencilla, la solicitud que la impulsa debe contener al menos, un acto generador de violaciones constitucionales con incidencia directa en el derecho de libertad física de la persona a quien se pretenda favorecer, datos que permitan la determinación de esta persona y de la autoridad a la que lo atribuye.

Sin embargo, en este caso no se consignan en la petición –ni siquiera mínimamente– tales requisitos, por lo cual, en términos tan abstractos, no es atendible la solicitud propuesta; constituyendo tales omisiones un vicio en la petición que impide que se controle la privación de libertad a la que se hace referencia, por lo que deberá declararse improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia (sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019), tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *MJGH* al no proponerse un asunto con trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2348-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada *********, en contra de un Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana –sin especificar cuál–, a favor del señor *JEPJ*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante señala que el señor PJ fue capturado el día 21 de junio de 2022 y se le realizó audiencia de "imposición" –sin indicar fecha–.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual –según indica– al ser aplicada de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en situación de vulnerabilidad –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y alega que en tal sentido, la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué motivos lo alega–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–.

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentra el señor *PJ*, por considerar que la misma se aplicó de manera discrecional, vulnerando su derecho de libertad física, pues los indicios aportados por fiscalía "no llenan los requisitos" para su imposición y pide que se restablezca la libertad del procesado por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin detallar nada sobre esto último–.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del procesado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del juez de la causa.

Y es que, si bien se alega falta de requisitos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede determine la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada al procesado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como

un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de las personas detenidas.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en situación de vulnerabilidad y pide se restablezca la libertad física del imputado mencionando un supuesto exceso en la detención provisional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de la persona que pretende favorecer.

En todo caso, respecto a la restricción de libertad en que se encuentran el detenido, la peticionaria puede hacer uso de los mecanismos que contempla la normativa procesal penal ante el juez de la causa, incluso también de los medios recursivos respectivos para plantear las discrepancias que, alude, contiene la decisión judicial que sustenta la privación de libertad de aquel.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *JEPJ*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

82-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1048-22, de fecha 17 de febrero de 2022, suscrito por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, por medio del cual remite solicitud de hábeas corpus promovido en contra del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, a su favor por el señor *BFFM*, procesado por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta que se le decretó detención provisional con base en la declaración de un testigo con criterio de oportunidad denominado "Falcon", el cual es mendaz y "está utilizando a la Fiscalía General de la República, para pedirnos dinero a cambio de la libertad en dicho proceso penal".

Al respecto, sostiene que estuvo recluido con ese testigo quien manifestó que él y otros procesados iban a atentar contra la vida de la Jueza Especializada de Instrucción "A" de San Salvador, lo cual es falso, pidiéndole dinero a cambio de retractarse en su declaración; por lo anterior, solicita hábeas corpus a su favor y que tanto fiscalía como los órganos de la administración de justicia no le den credibilidad al referido testigo.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que lo relativo a los elementos de convicción considerados para determinar la procedencia de la restricción al derecho de libertad de una persona procesada por la comisión de un hecho delictivo que se le impute, es un asunto atribuido de manera exclusiva a la autoridad judicial que conoce del proceso penal (improcedencia de 29 de julio de 2016, hábeas corpus 178-2016).

Además se ha señalado que corresponde a los jueces penales efectuar el análisis de la validez e idoneidad de las diligencias de investigación incorporadas a una causa a fin de determinar si estas son capaces de sustentar la imputación penal y la medida cautelar a imponer (improcedencia del 17 de noviembre de 2017, hábeas corpus 401-2017).

Por otra parte, jurisprudencialmente se ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares o que puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes, como la policía y la fiscalía (improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018).

IV. En el caso que nos ocupa, el peticionario se centra en cuestionar la validez y suficiencia del medio de prueba tenido en cuenta –declaración del testigo protegido "Falcon"– para la imposición de la detención provisional, la cual alega es "mendaz", no brindando argumentos que describan vulneración de normas constitucionales con afectación a su derecho fundamental de libertad física, por tanto su queja se traduce en un asunto de mera legalidad pues, como se detalló con anterioridad, son los jueces penales quienes deben valorar asuntos como el propuesto.

Además, la legislación secundaria otorga los mecanismos adecuados para que el agraviado se dirija ante las autoridades correspondientes a fin de referirse a la supuesta falsedad en la declaración de un testigo y a la alegada exigencia de dinero a cambio de alterar su dicho, sin que pueda pretenderse que este tribunal sea el que investigue y determine dichos aspectos, ya que no constituye parte de sus atribuciones.

En consecuencia, habiéndose alegado asuntos de estricta legalidad deberá declararse improcedente la presente petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *BFFM*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese*, oportunamente.

"""""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

949-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce horas con veinticinco minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Juan Manuel Chávez, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del "Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana", a favor del señor *REMF*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que el señor *MF*, quien actualmente se encuentra en detención provisional en la Penitenciaría Central La Esperanza, fue capturado el 14 de junio de 2022 cuando regresaba de realizar labores agrícolas en su vivienda, ubicada en el cantón **********, municipio de Ahuachapán. Refiere que tres agentes policiales lo registraron y luego le indicaron que quedaría detenido por estar identificado como colaborador de pandillas; sin embargo, cuestiona que dicha detención es ilegal e injusta, ya que el citado señor trabaja en San Salvador, los fines de semana se dedica a realizar labores agrícolas y cuenta con arraigos familiares y laborales –de los cuales anexa copias–.

Además señala que agentes policiales indicaron a los familiares del imputado, cuando se apersonaron a consultar los motivos de su captura, que debían firmar "unos documentos" porque, de lo contrario ellos quedarían detenidos (no ahonda o aclara qué tipo de documentos).

Por lo anterior requiere hábeas corpus a favor del señor *MF*, a efectos de que se ordene su libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor MF fue capturado de forma ilegal pues el citado señor trabaja en San Salvador, los fines de semana se dedica a realizar labores agrícolas y cuenta con arraigos familiares y laborales, siéndole decretada la detención provisional por el juez instructor.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes.

Desde ese punto de partida ha de agregarse que el mismo peticionario en su escrito refiere que la autoridad judicial demandada decretó detención provisional en contra del señor *MF*, de la cual el pretensor no evidencia algún defecto de motivación o de otra índole en la decisión judicial que pudiera vulnerar los derechos del procesado tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con la captura; no correspondiendo a esta sede pronunciarse sobre la existencia o no de un ilícito penal o de todas las condiciones de la flagrancia al momento de la captura

de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema; además existen recursos en la normativa procesal penal para que se planteen desacuerdos con la medida cautelar decretada, inclusive aquellos sin trascendencia constitucional.

Es así que al no haber argumentado el solicitante un asunto de carácter constitucional, sino revelarse una cuestión de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4º, de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *REMF*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

98-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio 1048-22 de fecha 17 de febrero de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito mediante el cual se promueve hábeas corpus contra uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, a su favor por el señor *MAPR*, condenado por el delito de homicidio agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario –en síntesis– refiere que fue condenado por la autoridad demandada a veinte años de prisión, mediante sentencia del 12 de agosto de 2015, la cual ha vulnerado el debido proceso, principio de legalidad, presunción de inocencia y seguridad jurídica.

Afirma que la condena únicamente se fundamentó en la declaración del testigo denominado "Invierno", misma con la que se determinó la participación criminal que le fue atribuida, alegando que no se estableció una corroboración mínima ni existen otros elementos que la acrediten.

Sostiene que el reconocimiento médico forense del cadáver, autopsia, álbumes fotográficos, inspección ocular de la policía, así como el análisis

balístico y de serología, únicamente tienen fines de investigación científica y nunca configuran una "imputación subjetiva", tal como relaciona de forma equivocada el juez sentenciador. En ese sentido, las declaraciones de los agentes policiales no son prueba, únicamente acreditan las circunstancias de realización del hecho.

Asevera que el análisis balístico del arma incautada "...no corresponde y no [h]a sido realizado con el arma y el calibre no corresponde."

Además, alega que el reconocimiento en "rueda de personas" no es suficiente para acreditar su supuesta participación criminal pues proviene de la misma fuente incriminatoria y "la declaración de la víctima no menciona a ninguna persona como autor". Así afirma que no forma parte de alguna organización de pandillas ni se posee evidencia sobre tal situación.

Cita pasajes de normativa convencional relacionada con la exigencia de la valoración integral de la prueba para la emisión de una sentencia.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal; encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia del 10 de enero de 2018, hábeas corpus 291-2017–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso penal, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

IV. El solicitante, en síntesis, refiere que la autoridad demandada lo condenó indebidamente al fundamentar su imputación con el solo dicho del testigo denominado "Invierno", sin existir medios de prueba corroborativos sobre lo afirmado y que algunos elementos que enuncia no poseen valor probatorio, además, sostiene que no forma parte de pandillas.

Se advierte que las afirmaciones del peticionario están encaminadas a que esta sala realice un análisis de la prueba habida en el proceso penal que fue valorada por la autoridad judicial y determine su insuficiencia para condenarlo por los hechos acusados.

Es de indicar que lo expuesto, en esos términos, consiste en cuestiones que deben discutirse en el proceso penal, ante los jueces competentes en esa materia, quienes son los únicos autorizados para valorar la prueba y decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, sin que pueda pretenderse que esta sala –con competencia constitucional– conozca de aspectos puramente legales como los planteados, pues de hacerlo estaría actuando como un tribunal de instancia lo cual desnaturalizaría el hábeas corpus pues supondría exceder su ámbito de control, circunscrito a la tutela de derechos fundamentales.

Y es que el peticionario no evidencia algún defecto de la sentencia que pudiera vulnerar los derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con el valor positivo que se otorgó a la prueba testimonial para determinar su participación en el delito y a aquellas otras que alude, las cuales a su criterio no poseen valor probatorio o son insuficientes, pero ello es un asunto que no corresponde estudiar a este tribunal.

Debe reiterarse que son los jueces penales, y no esta sala, quienes deben decidir los aspectos relacionados con la imputación penal, tales como determinar si la prueba se refiere directa o indirectamente a ella, si es suficiente para sostener una imputación o para descartarla, dilucidar la existencia de contradicciones entre elementos de convicción o la ausencia de estos últimos y evaluar el peso de los hallazgos, en consecuencia, los asuntos planteados por el solicitante son de aquellos que deben proponerse en el enjuiciamiento penal, ante el juez celebrante de la vista pública o ante otros competentes en la misma materia, a través de los recursos que regula la normativa procesal respectiva, de ser el caso.

Se advierte, así, un impedimento para tramitar lo argüido por tratarse de cuestiones de estricta legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo declararse improcedente la solicitud del señor *MAPR*.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *MAPR*, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. Archívese oportunamente.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2352-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada **********, en contra de un Juez Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, a favor del señor *MORP*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante indica que el señor *RP* fue capturado el día 24 de abril de 2022 y que se le realizó audiencia de "imposición" el día 6 de mayo del mismo año.

Expone que en la referida audiencia argumentó que no se contaba con los elementos necesarios para determinar la identificación, participación y existencia del delito, ya que los indicios presentados "no llenan los requisitos" para la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, la cual –según indica– al ser aplicada de manera discrecional constituye una clara violación al derecho de libertad física.

Agrega que en la "guía práctica para la reducción de la prisión preventiva" se mencionan los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional y enuncia jurisprudencia de esta sala relacionada con personas en situación de vulnerabilidad –sin plantear ningún reclamo específico al respecto–, y alega que en tal sentido, la medida cautelar impuesta no se puede justificar de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la Constitución y 8 del Código Procesal Penal.

Finalmente, refiere que solicita hábeas corpus a favor de los detenidos a fin de concederles la libertad por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin especificar por qué motivos lo alega–.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –resolución del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020–

Además, se ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal respecto del hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda

favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

IV. La solicitante –en síntesis– reclama principalmente de la detención provisional en la que se encuentra el señor RP, por considerar que la misma se aplicó de manera discrecional, vulnerando su derecho de libertad física, pues los indicios aportados por fiscalía "no llenan los requisitos" para su imposición y pide que se restablezca la libertad del procesado por "haberse excedido el término de la detención provisional" –sin detallar nada sobre esto último–.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del procesado, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del juez de la causa.

Y es que, si bien se alega falta de requisitos para decretar la detención, su reclamo se centra en una inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional, pretendiendo que esta sede determine la procedencia –o no– de la medida cautelar aplicada al procesado.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de las personas detenidas.

Finalmente, si bien en su solicitud cita jurisprudencia relativa a personas en situación de vulnerabilidad y pide se restablezca la libertad física del imputado mencionando un supuesto exceso en la detención provisional, en los términos planteados, no se trasladan argumentos concretos que sustenten tales aseveraciones y de los cuales se advierta alguna posible afectación de carácter constitucional respecto de la persona que pretende favorecer.

En todo caso, respecto a la restricción de libertad en que se encuentra el señor *RP*, la peticionaria puede hacer uso de los mecanismos que contempla la normativa procesal penal ante el juez de la causa, incluso también de los medios recursivos respectivos para plantear las discrepancias que, alude, contiene la decisión judicial que sustenta la privación de libertad de aquel.

En consecuencia, al no haberse argumentado un asunto de carácter constitucional sino de mera legalidad, existe un obstáculo insubsanable que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que siga el procedimiento legal respectivo para la comunicación de este pronunciamiento, utilizando de ser necesario cualquier medio eficaz de comunicación y una vez agotados los demás procedimientos disponibles en la ley o en la jurisprudencia constitucional, por medio del tablero judicial.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus planteado a favor del señor *MORP*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1177-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora **********, contra el Juez Especializado de Instrucción de San Salvador –sin especificar cuál–, a favor del señor *SYRH*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria refiere, en síntesis, que el señor *RH* se encuentra siendo procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y que fue restringido de su libertad por personal de la Policía Nacional Civil. Agrega que el juez especializado de instrucción le decretó la detención provisional "[...] cuya fundamentación [...] no tiene la suficiente robustez jurídica para someterlo a una decisión tan grave [...]", quedando expuesta "al parafraseo", lo cual se aleja a lo que la ley dispone.

Sostiene que en la audiencia de imposición de medidas se encontraba el juez, el secretario y un defensor a quien únicamente se le otorgaron tres minutos para su escasa exposición "sólo para cumplir el requisito de que tuvo el derecho de defensa", con lo que –a su criterio– "fue un acto que reviste las características de un modelo procesal penal inquisitivo" resolviendo de acuerdo al expediente, razones por las que considera que se ha transgredido el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica, por lo cual solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (III) y posteriormente se examinará lo requerido por la peticionaria (IV).

III. Esta sala ha estipulado que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer, o en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral de los privados de libertad; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia del 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La peticionaria centra sus reclamos en la "falta de robustez" de la decisión que ordena la detención provisional, así como el tiempo otorgado por el juez demandado al defensor del imputado para exponer su caso, lo cual generó, a su criterio, vulneración al derecho de defensa y al principio de seguridad jurídica del señor *RH*.

Respecto a la primera actuación reclamada, en los términos expuestos por la peticionaria, se plantea una inconformidad con la medida cautelar porque a su criterio las razones de la autoridad demandada para imponerla no serían suficientes, sin embargo, pese a su afirmación, no traslada argumentos que evidencien algún defecto de motivación o de otra índole en la decisión judicial que pudiera vulnerar los derechos del señor *RH*, tutelados a través del hábeas corpus; por el contrario, esto refleja únicamente un desacuerdo con la detención provisional decretada, por lo que se trata de asunto cuyo análisis es delegado legalmente a los jueces con competencia penal, con apoyo en los indicios probatorios, quienes son los habilitados para decidir sobre el tema.

En ese sentido, debe acudirse a los recursos existentes en la normativa procesal penal, para plantear tales discrepancias con las decisiones judiciales, inclusive aquellas que no tienen trascendencia constitucional como la que en este caso se ha alegado.

En cuanto al segundo de los cuestionamientos, la peticionaria no aporta elementos que caractericen violaciones a normas constitucionales que afecten el derecho a la libertad personal como consecuencia del tiempo que la autoridad demandada otorgó al abogado defensor para exponer su caso, pues la misma no describe agravios concretos generados por una supuesta obstaculización del derecho, tales como la imposibilidad de plantear todos los argumentos preparados, hacer solicitudes o presentar elementos probatorios a favor del imputado que, adicionalmente, pudieran impactar la restricción de libertad impuesta al procesado. Es decir, más allá de su consideración de que el tiempo otorgado es demasiado breve, no hay una descripción sobre cómo habría impactado los derechos de defensa y libertad personal del imputado.

En consecuencia, al no haber argumentado la solicitante asuntos de carácter constitucional, sino de mera legalidad debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, se advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaria de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir con tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *SYRH*, por tratarse asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—GARCÍA—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

278-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 2172-22, de fecha 4 de abril de 2022, suscrito por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, por medio del cual remite la solicitud de hábeas corpus promovido en contra del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, a su favor por el señor *FRM*, condenado por el delito de hurto agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta que se encuentra cumpliendo la pena de veintiocho años de prisión por sentencia condenatoria firme emitida el 22 de noviembre de 2012, sin que se configuraran los presupuestos de ley para el tipo penal ni se le acreditara la calidad de coautor.

Dicha decisión, sostiene, tiene fundamento en la declaración de los testigos con criterio de oportunidad denominados "Sonia y Rabi", quienes mintieron en algunos casos por lo que pudieron haber dado falso testimonio en los de él pues no tiene vinculación con lo que lo involucran. Esa situación debió generar duda en el juez y, por ende, una resolución más favorable a los imputados dado que, adicionalmente, se desconoce el acuerdo de negociación del criterio referido, el cual no consta en autos ni actas, por lo cual podría presentar vicios de legitimidad.

Por lo anterior, considera que se han vulnerado sus derechos de defensa, presunción de inocencia, seguridad jurídica y el debido proceso, encontrándose ilegal y arbitrariamente privado de su libertad.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. Este tribunal, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal, encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal y el análisis de los alegatos relacionados con la tipicidad así como la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo –improcedencia 26 de enero de 2011, hábeas corpus 205-2010–.

En ese orden se ha sostenido que, para determinar si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, el juez penal ineludiblemente debe valorar los elementos probatorios agregados al proceso, ciertamente solo mediante este examen es posible establecer si las acciones que le son atribuidas al imputado se adaptan al supuesto de hecho contenido en la norma penal –improcedencia del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 52-2012–.

Con base en ello, los pronunciamientos sobre la existencia del delito, participación delincuencial y responsabilidad penal, entre otros, corresponden en exclusiva a la autoridad judicial que conoce de la causa penal y su determinación constituye un asunto de mera legalidad que, por su naturaleza, está excluido del conocimiento de esta sala.

Por otra parte, jurisprudencialmente se ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes –improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018–.

IV. Según lo expresado, el solicitante alega que, en su condena, no se cumplen los elementos del tipo penal, no se acreditó su calidad de coautor y se basa en la declaración de testigos a los que se les ha otorgado criterio de oportunidad a través de un acuerdo que no está agregado al proceso penal y que, además, pudieron haber dado falso testimonio.

El escenario idóneo para discutir aspectos relacionados con la tipicidad de los hechos acusados, el grado de participación delincuencial e impugnar la legitimidad de la prueba, es la causa penal, en cada una de sus etapas e instancias, mas no en este proceso constitucional, pues aquel proporciona las oportunidades para debatir ampliamente los hechos, la prueba y la responsabilidad penal.

Y es que lo expuesto, en esos términos, constituyen aspectos de mera legalidad, por tratarse de asuntos estrictamente penales, vinculados a los juicios de valor que los jueces de instancia, particularmente los sentenciadores, deben realizar conforme a sus funciones y en el marco del sistema de valoración probatoria que el Código Procesal Penal establece, así como a los juicios de derecho que aquellos realizan al momento de encuadrar determinadas conductas en un tipo penal. De tal forma, lo que el peticionario pretende con dichos cuestionamientos es que esta sala analice las valoraciones y consideraciones referidas a la prueba que sirvió para determinar la tipicidad y la participación criminal, lo cual constituye un mero desacuerdo con los razonamientos que sustentan el fallo dictado en su contra.

Es también ante los jueces competentes en materia penal que se debe requerir las diligencias consideradas pertinentes para evaluar el dicho de los testigos, como aquellas en las que consta el otorgamiento de criterio de oportunidad, y su ausencia no implica, por sí, vulneración a algún derecho fundamental del imputado.

Y es que, además, la legislación secundaria otorga los mecanismos adecuados para que el agraviado se dirija ante las autoridades correspondientes a fin de referirse a la falsedad en la declaración de un testigo, sin que pueda pretenderse que este tribunal sea el que investigue y determine dichos aspectos, ya que no constituye parte de sus atribuciones. En ese orden de ideas, se advierte que los reclamos aludidos, tal como los ha expuesto el

peticionario, constituyen una mera inconformidad sin trascendencia constitucional con la sentencia condenatoria que cumple, encontrándose esta sede inhibida de dar trámite a lo propuesto y deberá ser rechazado mediante una declaratoria de improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *FRM*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—GARCÍA–O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2851-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente hábeas corpus ha sido promovido por la señora VEO contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, a favor de la señora *ANAO*, procesada por el delito de tráfico ilegal de personas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La solicitante manifiesta que la señora AO está siendo procesada por la autoridad que demanda por atribuírsele el delito referido y alega que se le han vulnerado sus derechos constitucionales, especialmente el de seguridad jurídica ya que se le está procesando por un delito grave, en el cual ella no ha tenido la mínima participación, ya que su única labor en el "automotel" ********, era atender a los usuarios que asisten al lugar, sin tener ningún tipo directo con ellos; por lo que la vinculación en el proceso penal que se le sigue en su contra es ilegal e injusta porque nunca se ha dedicado a actividades de tráfico ilegal de personas, ni actividades similares.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. Esta sala ha reiterado que los asuntos sometidos a control por medio del proceso de hábeas corpus deben fundarse en la existencia de vulneraciones a derechos fundamentales con incidencia en la libertad física e integridad personal, es decir deben de tener un contenido constitucional.

Así, aquellas peticiones que presenten deficiencias referidas a la falta de vinculación entre el acto reclamado y los derechos fundamentales protegidos a través del hábeas corpus o que propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los demandantes con lo decidido –entre otras–, carecerán de las condiciones que permitan a este tribunal evaluar la propuesta que se efectúa y deberá rechazarse la pretensión al inicio del proceso, por medio de una declaratoria de improcedencia (improcedencia de 9 de junio de 2017, hábeas corpus 132-2017).

IV. En el caso que nos ocupa la peticionaria afirma que la señora *AO* está siendo procesada por un delito grave, en el cual ella no ha tenido participación pues su labor en el "automotel" es atender a los usuarios que asisten al lugar sin tener contacto directo con ellos, por lo que aquella no se ha dedicado a realizar labores de tráfico ilegal de personas.

En esos términos esta sala se encuentra imposibilitada de ejercer un control constitucional por medio del proceso de hábeas corpus, pues únicamente se expone una inconformidad con el procesamiento penal que se le sigue a la señora *AO*, intentando acreditar en esta sede su inocencia al señalar argumentos que a su parecer la desvinculan del hecho por el que está siendo juzgada sin revelar alguna circunstancia que evidencie lesiones a derechos constitucionales. En ese sentido, es de reiterar que la autoría y participación en el delito atribuido es un tema que compete a los jueces penales quienes deciden sobre ello a partir del análisis y valoración probatoria que ejecutan, siendo el escenario idóneo para la discusión de estos aspectos el proceso penal y no esta sala con competencia constitucional.

En suma, este tribunal advierte que lo expuesto por la solicitante no propone reclamos capaces de evidenciar circunstancias vulneradoras de derechos constitucionales protegidos a través del hábeas corpus, circunscribiéndose lo expuesto a meras inconformidades con lo decidido en el proceso penal. Por tanto, se deberá declarar su improcedencia.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a favor de la señora *ANAO*, en virtud de que el planteamiento que la fundamenta constituye una mera inconformidad con lo decidido en el proceso penal.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—GARCÍA–O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

348-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido a su favor por el señor *CAMV*, quien señala se encuentra procesado por el delito de robo, sin indicar la autoridad responsable de las actuaciones u omisiones que expone.

Analizada la petición se hacen las siguientes consideraciones:

I. El peticionario afirma que fue privado de libertad del 16 de noviembre de 2021, en San Salvador, por agentes policiales, mientras laboraba en la plataforma UBER con su vehículo. Refiere que fue llevado a una delegación policial y un tiempo después llegaron unas personas acusándolo de haberles robado dinero y un celular, con arma de fuego, por lo que fue trasladado al "penalito de la naval".

Sostiene que su abogado le expresó que, según el requerimiento fiscal, se le estaba procesando por "robo con arma de fuego", sin embargo, al momento de su captura no le encontraron ninguna arma, ni el celular presuntamente robado, sostiene que los hechos no fueron así, sino que tuvo problemas con unos pasajeros, quienes finalmente lo denunciaron, lo cual le ha dañado su patrimonio pues perdió su vehículo al no poder pagarlo más.

Reclama que, el 21 de diciembre de 2021, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas a la detención provisional –sin indicar qué sede judicial se las otorgó– entre las que destaca la presentación cada quince días al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, prohibición de cambiarse de domicilio y de salir del país, con las cuales considera se han vulnerado sus derechos.

A su escrito adjuntó un folio en el que consta su registro en el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que la imposición, sustitución o cese de las medidas cautelares previstas en el proceso penal –entre ellas, la detención provisional–, es una facultad conferida a las autoridades competentes en esa materia y, por tanto, son estas quienes, dentro de los límites y bajo los supuestos configurados legal y constitucionalmente, han de decidir todo lo que al respecto concierna –improcedencia del 15 de diciembre de 2021, hábeas corpus 849-2020–.

El hábeas corpus, por su naturaleza constitucional, no es una instancia más dentro del proceso penal, de forma que excede las atribuciones de este tribunal analizar los hechos, las pruebas presentadas y la actividad de valoración que realiza el juez sobre dichos elementos que le permiten tener por establecida la concurrencia de los requisitos legales de las medidas cautelares en el proceso penal –improcedencia de 24 de noviembre de 2021, hábeas corpus 776-2020–.

IV. El peticionario centra su reclamo en su desacuerdo con las medidas sustitutivas a la detención provisional decretadas debido a que, según su criterio, no ha cometido el delito que se le atribuye y hay falta de elementos probatorios en su contra.

Tal como el solicitante ha planteado su petición no se trasladan argumentos que describan vulneraciones a normas constitucionales con afectación a los derechos tutelados mediante este proceso constitucional, sino que únicamente muestra su inconformidad con las medidas sustitutivas decretadas, pues considera que no existen pruebas para su imputación, debido a que no le encontraron el celular –supuestamente robado– ni el arma de fuego con la que aparentemente cometió el ilícito, asimismo, que menciona que se ha visto dañado en su patrimonio dado que perdió su herramienta de trabajo –vehículo– por no poder pagar las cuotas correspondientes.

De forma que, todo lo expuesto por el señor *CAMV*, se trata de asunto cuyo análisis es delegado legalmente a los jueces con competencia penal, a quienes les corresponde evaluar lo incorporado en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar y las medidas cautelares a imponer, existiendo, en la normativa procesal penal, recursos para que se planteen tales discrepancias con las decisiones judiciales, inclusive aquellas que no tienen trascendencia constitucional como en este caso se ha alegado.

Se advierte así, un impedimento para tramitar lo argüido por tratarse de cuestiones de mera legalidad respecto a las medidas sustitutivas a la detención provisional decretadas, debiendo declararse improcedente la pretensión.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente el hábeas corpus promovido a su favor por el señor *CAMV*, por alegarse asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—GARCÍA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2006-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor GJBC, en contra agentes de la delegación de la Policía Nacional Civil de San Agustín, Usulután, a favor del señor *EWBM*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que su hijo, el señor *BM*, fue capturado el 30 de abril de 2022, en su casa de habitación ubicada en el barrio **********, municipio de San Agustín, Usulután, por agentes policiales de la delegación arriba mencionada, quienes le manifestaron que se amparaban en el régimen de excepción y que solamente le tomarían una fotografías, pero procedieron a su detención sin causa justificada ya que no le decomisaron ningún objeto ilícito, no ha pertenecido a grupos delictivos, no posee tatuajes alusivos a pandillas, tampoco se ha involucrado en ningún delito, por lo que solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

Añade que su hijo es un hombre trabajador y se encuentra recluido en la Penitenciaría Central La Esperanza, a la orden del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Miguel.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (III); luego se examinará lo requerido por el peticionario (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el art. 159 inc. 3° de la Constitución le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito lo cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forman parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación –sentencia de 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002–.

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 del Código Procesal Penal (CPP) facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2º del art. 323 ya citado o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales –no exclusivos– promotores de la acción penal –art. 193 ord. 4º Cn–, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente –o archivarse– y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente –art. 172 Cn.–, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados –por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características–, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación –o no– del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto fáctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el art. 12 inc. 1º Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto –al igual que el resto de derechos fundamentales–, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia de 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa el peticionario afirma que el señor *EWBM* fue capturado sin causa justificada ya que –según refiere– no le decomisaron ningún objeto ilícito, no ha pertenecido a grupos delictivos, no posee tatuajes alusivos a pandillas, tampoco se ha involucrado en ningún delito.

Al respecto, debe señalarse que los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente –entre otros– a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así como para prevenir la comisión de uno, siendo necesario el informe a la institución fiscal y la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los arts. 13 inciso 1° de la Constitución, 271, 323, 326 y 327 CPP.

Y es que la valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona es una actividad que corresponde exclusivamente a los entes normativamente facultados para ordenar una restricción a su libertad personal: en principio a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el art. 29 Cn, las garantías de los artículos 12 inc. 2º y 13 inc. 2º Cn, es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa. En un estado de excepción, cabe agregar, el hábeas corpus como mecanismo especialmente relevante para asegurar que los detenidos sean llevados, en los plazos habilitados normativamente, ante un juez que se pronuncie sobre la continuación o cesación de la privación de libertad, sigue teniendo vigencia, tanto en relación con estas propuestas como con aquellas que respondan a la protección que, según la Constitución, le corresponde a esta sala otorgar.

En ese sentido, la determinación de la configuración de un ilícito penal, su existencia, su calificación, el análisis de participación delincuencial y la valoración de los elementos con los que se cuentan para la procedencia del proceso y la determinación de una medida de restricción de libertad son asuntos que deben ser dilucidados, finalmente, ante los jueces penales competentes.

Desde ese punto de partida ha de agregarse que el mismo peticionario en su escrito refiere que su hijo se encuentra a la orden una autoridad judicial, sin que plantee sobre ello algún defecto de motivación o de otra índole en las decisiones emitidas por este, de manera que pudiera evidenciarse alguna vulneración a los derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con la captura por no haber cometido delito, asunto cuyo análisis es delegado legalmente al juez con competencia penal, no correspondiendo a esta sede pronunciarse

en principio sobre la existencia o no de un ilícito penal o de las condiciones de la flagrancia al momento de la captura de una persona. Son los jueces, con apoyo en los indicios probatorios, los habilitados para decidir sobre el tema, además existen recursos en la normativa procesal penal para que se planteen desacuerdos con la medida cautelar decretada, inclusive aquellos sin trascendencia constitucional.

Es así que al no haber argumentado el solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos. Se tiene por comisionado al licenciado ********** para recibir notificaciones.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º, 13, 159 inc. 3°, 193 ord. 4º, 172 de la Constitución, 13 y 79 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada a favor del señor *EWBM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

148-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra de uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, a su favor por el señor *JAS*, condenado por el delito de extorsión agravada.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario refiere que el 30 de junio de 2016 fue condenado a quince años de prisión por haber sido declarado responsable del delito relacionado, fallo del cual reclama porque sufre la imposición de una pena excesiva al haberse inobservado el principio de necesidad y proporcionalidad del art. 27 de la Constitución, pues, al momento de determinar la condena, el juez que demanda no fundamentó el monto a imponer.

Manifiesta que en la vista pública el testigo de descargo declaró que ambos fueron víctimas de un robo en el que se despojó –al imputado– de su teléfono celular, sus documentos y se le obligó a entregar el "PIN" de su cuenta bancaria; no obstante, se le devolvieron las cosas, pero poco tiempo después fue acusado de extorsión agravada.

Alega que la situación señalada no fue tomada en cuenta por el juez al determinar la "dosimetría de la pena", volviéndose una "venganza" "al no haber observado [su] grado de culpabilidad" siendo el caso que "no sería capaz de cometer un hecho tan vil".

En consecuencia, solicita que se modifique "el quantum [de la pena] por una menos lesiva o gravosa".

Por último, cita jurisprudencia de esta sala relativa a los casos en los que es posible conocer en hábeas corpus de sentencias firmes e indica que lo alegado consiste en un "defecto sobreviniente al fallo y que por escases de recursos económicos no [tuvo] la oportunidad de impugnar tal sentencia a través de los recursos ordinarios".

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (III) y posteriormente se examinará lo requerido por el imputado (IV).

III. Esta sala, mediante el proceso de hábeas corpus, tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal, encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal así como el análisis de los alegatos relacionados con la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo; por tanto, la determinación sobre si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto, así como la determinación de su pena, corresponde exclusivamente al juez penal –improcedencias del 10 de enero de 2018 y del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 291-2017 y 52-2012, respectivamente–.

IV. En el caso propuesto el peticionario alega –en síntesis– que el juez no fundamentó el monto de su pena a imponer porque omitió considerar la prueba de descargo, de forma que se inobservó el art. 27 de la Constitución al momento de determinar la condena. Por lo cual solicita que esta sede modifique, a su favor, la sanción.

El peticionario pretende que este tribunal emita una resolución en la que se pronuncie sobre la presunta falta de fundamentación del monto de su pena y la modifique por una menos lesiva tomando en consideración elementos derivados de medios probatorios presentados en juicio, como la declaración del testigo de descargo que refiere detalles de un robo que el condenado manifiesta sufrió, de manera que pretende se establezca, a partir de los mismos, una cantidad inferior de años de condena; sin embargo, este punto no puede ser determinado mediante el hábeas corpus, pues de acceder al análisis requerido esta sala estaría valorando prueba habida en el proceso ordinario y actuando como una instancia más dentro de este último al determinar la sanción que corresponde a un imputado, lo cual está fuera de su competencia constitucional.

Así, el reclamo planteado por el pretensor está alejado de una propuesta constitucional vinculada con un tema relacionado con motivación, pues se refiere clara y exclusivamente a atacar la supuesta omisión de valoración positiva, en la sentencia, de algunos de los elementos habidos en el enjuiciamiento criminal y que a su parecer hubieran determinado un fallo distinto y por tanto, establecer con ello un monto menor de la pena impuesta. Lo cual únicamente evidencia una inconformidad con lo resuelto.

En ese sentido es de reiterar que el hábeas corpus por su naturaleza constitucional no es una instancia más dentro de la causa penal, de forma que excede las atribuciones de este tribunal revisar la actividad relacionada con la valoración de la prueba que haya llevado a un juez o instancia penal a deducir la responsabilidad de un acusado, pues ello, aunado al establecimiento de la veracidad o suficiencia de los elementos probatorios dentro del juicio, es de exclusiva competencia de las autoridades de instancia. De ahí que a esta sala tampoco le compete la determinación de la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo y su pena, como pretende el peticionario, de tal forma que lo propuesto al constituir un asunto de mera legalidad, que por su naturaleza está excluido del conocimiento de este tribunal, deberá ser rechazado por medio de la declaratoria de improcedencia.

En todo caso, también debe indicarse que el peticionario ha manifestado que su sentencia se encuentra firme y la queja ahora planteada no fue denunciada ante los tribunales respectivos ni en los recursos correspondientes por tratarse de un "defecto sobreviniente al fallo" y que "por escases de recursos económicos no tuvo la oportunidad de impugnar la sentencia a través de los recursos ordinarios"; sin embargo, se constata que ello no reúne los requisitos que habilitan conocer de un caso donde existe una sentencia condenatoria firme –sentencia de 10 de noviembre de 2010, hábeas corpus 190-2008– de manera que su solicitud, también desde esta consideración, deberá ser rechazada.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus planteada a su favor por el señor *JAS*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.––GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

206-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 1770-22 de fecha 21 de marzo de 2022, procedente del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, a través del cual se remite escrito por medio del que se promueve hábeas corpus contra el Juez Especializado de Sentencia "B" de San Salvador, a su favor por el señor *WAMT*, condenado por el delito de secuestro.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad que demanda a la pena de cuarenta y cinco años de prisión y, a la fecha, la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada.

Promueve "juicio de demanda de inconstitucionalidad" porque considera que con la pena impuesta no se respeta el art. 27 incs. 2º y 3º de la Constitución (Cn), donde se prohíben las penas perpetuas y en su lugar se le deja de manera indefinida en prisión, vulnerando el principio de razonabilidad y desnaturalizando el espíritu mismo de rehabilitación y reinserción social, atentando así contra los principios de dignidad humana, legalidad e igualdad.

Considera, además, que ello transgrede los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que El Salvador ha suscrito.

En consecuencia, pide un pronunciamiento respecto de lo estipulado en los arts. 149 Código Penal (CP) –sobre el delito de secuestro y de la prohibición legal de acceder al beneficio penitenciario de libertad condicional o libertad condicional anticipada, por la comisión de dicho ilícito– y 150 CP –agravantes sobre los atentados contra la libertad individual–, se modifique la cuantía de la pena máxima a treinta años de prisión y se declare inconstitucional el artículo 45 numeral 1º CP, para que todo gobernado tenga la oportunidad de una reinserción social y rehabilitación.

II. En el presente caso, si bien es cierto en la solicitud se expresa presentar "juicio de demanda de inconstitucionalidad", al analizar la misma se determina que el peticionario reclama de la pena de prisión que se encuentra cumpliendo, alegando que su condena a cuarenta y cinco años, basada en el art. 45 CP, vulnera derechos fundamentales con especial énfasis en su libertad física, dada la privación de esta, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 12 inciso final de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Consecuentemente, se consideró pertinente encauzar la petición por la vía procesal idónea y que se haga el análisis liminar correspondiente a la petición de hábeas corpus, maximizándose así los principios de *iura novit curia* –suplencia de la queja deficiente, art. 80 LPC– y el principio de dirección y ordenación del proceso –art. 5 LPC y 14 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)–.

III. Es preciso indicar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el caso (IV) y luego se analizará el supuesto planteado por el peticionario (V).

IV. 1. Esta sala ha sostenido en diversas resoluciones que los jueces penales no pueden imponer condenas que excedan los límites legalmente establecidos, en este sentido, las penas privativas de libertad no pueden superar los sesenta años de prisión y deben reputarse constitucionales conforme la valoración legislativa las que se encuentren dentro de este rango.

Si bien no pueden existir penas que vuelvan imposible la ejecución de un tratamiento penitenciario, esta sala no considera que ello incida en una inconstitucionalidad de las penas de larga duración como acontece con el art. 45 numeral 1 CP, ya que la modificación legislativa no cierra la posibilidad de acceder a los permisos de salida, la concesión de la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la pena [ordinaria] o la mitad [anticipada], o brindar su otorgamiento por razones humanitarias, aún y cuando se acceda a ello en un tramo considerable del cumplimiento de la condena –auto del 16 de mayo de 2022, inconstitucionalidad 8-2022–.

Acorde con lo anterior, esta sala ha declarado que en el artículo 45 número 1 CP, reformado mediante el Decreto Legislativo número 1009, del 29 de febrero de 2012, y publicado en el Diario Oficial número 58, tomo número 394, del 23 de marzo de 2012, no existe la inconstitucionalidad alegada, por la supuesta vulneración del artículo 27 incisos 2° y 3° Cn –auto del 13 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 5-2001–.

2. Además mediante la jurisprudencia de este tribunal se ha indicado que el legislador está habilitado para constituir prohibiciones a la concesión de beneficios penitenciarios, a partir de ciertos riesgos que se pretendan contrarrestar; entre ellos, se ha considerado la condena por un delito específico, con lo cual, en principio, no se puede optar a este tipo de beneficios.

Ante normas de ese tipo, este tribunal ha señalado que disposiciones legales de esta naturaleza se entenderán conforme a la Constitución siempre que el juez de ejecución penal evalúe el cumplimiento de los requisitos legales para determinar si es o no procedente el otorgamiento del beneficio penitenciario; caso contrario, implicaría aplicar de manera automática la prohibición del citado artículo.

En ese sentido, la constitucionalidad de la norma en discusión subsiste y se sostiene en la función del juez quien al decidir sobre la solicitud del beneficio de libertad condicional garantice el deber de motivación, concediendo la posibilidad de tener conocimiento de las razones fundadas que le llevan a otorgarle o negarle tal prerrogativa, para tener a su vez la oportunidad de impugnar la decisión en caso de considerar que le genera agravio –sentencias del 10 de abril de 2015 y del 20 de marzo de 2020, hábeas corpus 355-2013 y 455-2019, respectivamente–.

V. El peticionario –en extendidas líneas– alega que su condena de cuarenta y cinco años vulnera sus derechos derivados del art. 27 Cn, porque estaría de manera indefinida en prisión (1), volviendo nula la posibilidad de reintegrarse en la sociedad ya que el art. 149 CP prohíbe el acceso al beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada (2) y, por ello, pide que se determine una cuantía inferior para el cumplimiento de su pena (3).

1. Al respecto debe señalarse que, el Órgano Legislativo, a través del decreto número 1009, del 29 de febrero de 2012, reguló la sanción máxima de sesenta años de prisión y este tribunal ha determinado que se tiene una nueva valoración en cuanto al referido monto máximo en el ordenamiento jurídico penal salvadoreño y que dicha pena no es perpetua sino una sanción de larga duración que no es contraria al artículo 27 incisos 2° y 3° Cn.

En ese sentido, al tener establecido un máximo de la pena privativa de libertad a imponer y estar, la del solicitante, dentro de este rango legal punitivo puede afirmarse que en el caso expuesto no se está en presencia de una sanción que vulnera su derecho a rehabilitarse como expresa, ya que la característica esencial de las penas perpetuas es la nula posibilidad de recobrar la libertad, perdurando hasta la muerte del condenado, situación en la que no se encuentra el peticionario dado que la sanción de cuarenta y cinco años de prisión asignada constituye una condena de larga duración con posibilidades para el recluso de acceder a beneficios y cuotas de libertad que acorten su tiempo en prisión siempre que cumpla con los requisitos legales.

De allí que, su propuesta deberá ser rechazada por plantear un asunto que no posee trascendencia constitucional, deviniendo en improcedente.

2. Con relación al reclamo de la proscripción legal contenida en el art. 149 CP, este tribunal mediante el proceso de inconstitucionalidad 119-2016 determinó que la prohibición aludida no se puede analizar de forma aislada por los jueces de ejecución penal y deben evaluar de manera sistemática, con los requisitos contenidos en los arts. 85 y 86 CP o aquellos regulados en los arts. 39-A y siguientes de la Ley Penitenciaria, en su defecto, si a partir de las circunstancias particulares de cada caso resulta indispensable aplicar la prohibición prescrita, o si, por el contrario, puede otorgarse la libertad condicional o la libertad condicional anticipada, en cuyo caso deberán argumentar los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada.

Así, se ha indicado que dicha disposición no debe ser entendida como una norma que vulnera los derechos de los condenados por su contenido prohibitivo, pues su interpretación debe ser realizada conforme al derecho a la resocialización de las personas privadas de libertad y entendida desde una óptica integral.

En ese sentido, la prohibición legal solo abarca aquellos casos en los que el juez de ejecución penal no advierte cumplimiento del fin de la pena en el condenado, ni de los requisitos previstos en la legalidad vigente y no existen medios que acrediten la evaluación favorable del condenado en el tratamiento penitenciario.

En consonancia, al no advertirse de la propuesta del solicitante la existencia de vulneraciones a los derechos tutelados mediante hábeas corpus, esta sede se encuentra impedida para analizar el planteamiento expuesto, ya que carece de trascendencia constitucional su reclamo, razón por la cual deberá declararse improcedente.

3. Por último, sobre su petición de que se determine una cuantía inferior para el cumplimiento de su pena, debe indicarse que esta sala se encuentra imposibilitada para realizar este tipo de actuaciones por ser de exclusiva competencia de los jueces penales –en principio– y de los jueces de ejecución penal –en el transcurso del cumplimiento de la pena–.

En todo caso, son las aludidas autoridades quienes pueden determinar con apego a la ley la existencia de situaciones particulares de los privados de libertad que podrían originar beneficios y verse modificada su pena; sin embargo, el examen respectivo compete únicamente a ellos y no a esta sede.

Y es que en su propuesta lo que traslada es un desacuerdo con la determinación del monto de su pena y no una situación vulneradora a sus derechos fundamentales protegible mediante hábeas corpus. De ahí que, la decisión de lo expuesto, al ser competencia de otras sedes y no de este tribunal constitucional, deviene en improcedente.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

Por las razones expuestas y los artículos 11 inciso 2º, 27 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la petición de hábeas corpus planteada por el señor *WAMT*, por tratarse de asuntos sin trascendencia constitucional y de estricta legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.––GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2731-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora RDZD, en contra del Juez Especializado de Instrucción "A2" de San Salvador, a favor del señor *IDF*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria señala que el señor DF es su esposo, quien fue capturado el 12 de mayo de 2022, en su casa ubicada en *********, municipio y departamento de Chalatenango, por agentes policiales, quienes, según acta de registro con prevención de allanamiento, le atribuyeron el delito de agrupaciones terroristas, sin encontrarle nada ilícito; agrega que esa privación de libertad es ilícita, pues no pertenece a pandillas, sino que trabaja en la compra, venta y destazo de reses y ocasionalmente realizaba viajes al aeropuerto.

Afirma que fue puesto a la orden del citado juzgado, y que el día 25 mayo de 2022, en audiencia de imposición de medidas cautelares, se ordenó instrucción formal con detención provisional, inicialmente por seis meses y luego fue ampliado por igual periodo; al respecto, considera que no existen suficientes indicios de prueba que acrediten la certeza de su

participación en el delito de agrupaciones ilícitas que le imputan, pues los elementos aportados por la representación fiscal, consistieron únicamente en: *i)* entrevista de agentes captores, *ii)* acta de identificación, lectura de derechos y nombramiento de defensor, y *iii)* perfil delincuencial, sobre este último señala que el señor *DF*, tuvo un proceso en el cual fue absuelto y no se relacionaba a pandillas; por lo cual considera que la medida decretada es ilegal, pues no ha cometido el ilícito atribuido y tampoco fue encontrado con personas que pertenezcan a pandillas.

Agrega, que el detenido se encuentra en el "Centro Penal de Mariona"; por los motivos antes señalados considera que detención carece de fundamento y vulnera el derecho de libertad ambulatoria, el principio de legalidad, debido proceso y principio de seguridad jurídica; por lo cual solicita hábeas corpus a su favor y que sea puesto en libertad.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada con la solicitud (III) y luego de ello se examinará el caso concreto planteado (IV).

III. Esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (resolución del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

Este tribunal ha estipulado que su ámbito de competencia en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o

amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso (improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020).

IV. La solicitante –en síntesis– reclama contra la decisión que decretó la privación de libertad del imputado, alegando que la misma carece de fundamentación pues a su criterio se cuenta con insuficientes indicios para sustentar la participación del procesado en el delito acusado.

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición, no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal del imputado, emitida por parte de la autoridad judicial relacionada, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario, únicamente expone su inconformidad

con el valor positivo que la autoridad judicial otorgó a los elementos de convicción presentados para acreditar la existencia del delito y la participación del procesado que derivaron en la detención provisional impuesta.

Y es que, si bien alega falta de fundamento legal para la detención, su reclamo se centra en su inconformidad con los indicios aportados por la representación fiscal, y la valoración del juez sobre los mismos, lo cual no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional. En ese orden, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre su suficiencia en cuanto a la imputación, pues si esta sala realizara tal análisis, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor, sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

En consecuencia, al haber argumentado la peticionaria un asunto sin trascendencia constitucional, existe un obstáculo que impide continuar con el trámite de la petición, debiendo finalizar mediante su declaratoria de improcedencia.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan –libertad física e integridad personal de los detenidos–, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía –art. 174 Cn.–.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente –en relación con años precedentes– se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar –más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia –sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019–, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad a lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respetivos.

POR TANTO, con base en las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *IDF*, por alegarse asuntos sin trascendencia constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—GARCÍA—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

678-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de habeas corpus ha sido promovido por la abogada **********, en contra del "Tribunal Especializado para Crimen Organizado A 3 de San Salvador", a favor de *1) FACM, 2) DEAG, 3) LMAV, 4) LACH, 5) CELT, 6) EVPM, 7) EAGR, 8) EEHE, 9) BEHA, 10) MJRC, 11) AARM, 12) OAAF, 13) FCT, 14) INGG, 15) XERR, 16) JCA, 17) VMVP, 18) NVN, 19) RAB, 20) AMMP, 21) JVPM, 22) AVGM, 23) MJJM, 24) OAPP, 25) GARP, 26) REDC, 27) OAHG, 28) NAMR, 29) EAGD, 30) MCGC, 31) LAPG, 32) MARR, 33) EEOT, 34) WDGO, 35) RAVO, 36) AAHT, 37) EDPS, 38) IGVH, 39) FACR, 40) JAP —o P— G, 41) MAAT, 42) JFMM, 43) JALJ, 44) ENC, 45) GAPP, 46) JAOR, 47) EGMG, 48) KAGG, 49) VAGP y 50) JBMM.*

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. La solicitante refiere que las personas detalladas anteriormente, fueron capturadas el 11 de abril de 2022, en hechos distintos, por agentes de la Policía Nacional Civil y que, en audiencia celebrada el 25 de abril de 2022, la autoridad judicial demandada les decretó detención provisional.

Señala que la decisión del juez carece de motivación y es contraria al ordenamiento jurídico vigente en materia penal, ya que la misma se deriva de especulaciones de supuestas personas que nunca fueron identificadas, además de no haber existido una investigación previa que diera lugar a una orden administrativa de detención, siendo la conducta atribuida atípica y habiéndose decretado dicha medida sin valorar los indicios mínimos para acreditar el delito y participación delincuencial ni aquellos a favor de los detenidos.

Expone además, que en el caso particular señor *OAPP*, este había sido condenado a la pena de siete años seis meses de prisión por delito de extorsión agravada en el grado de tentativa, sin embargo, al momento de la captura este goza de libertad condicional, situación que, según manifiesta, no fue valorada por juez al momento de decretar la detención provisional, por lo que solicita hábeas corpus a favor del señor *PP* y del resto personas mencionadas.

2. Por otro lado, el señor OPG presentó escrito mediante el cual indica que el señor *OAPP* fue detenido por agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada, en su casa –sin especificar lugar o municipio–, habiéndosele requerido su documento de identidad y siendo cuestionado sobre si había estado detenido anteriormente, señalando este que sí y mostrando "una carta de libertad que estuvo en fase de confianza", no obstante, los agentes insistieron en su captura. Al respecto, cuestiona que no existe fundamento legal para la detención del referido procesado, quien no ha cometido ningún delito, por lo que pide hábeas corpus a su favor.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con el tema en discusión (III) y luego se examinará lo requerido por los peticionarios (IV).

III. Esta sala ha sostenido que el artículo 13 de la Constitución (Cn.) establece garantías fundamentales para el derecho de libertad física, entre ellas que la emisión y mantenimiento de órdenes de detención o prisión se efectúe de conformidad con la ley y que consten por escrito. En esta disposición también existe habilitación para detener a una persona, sin mediar orden escrita, la cual tiene su razón de ser en la urgencia y necesidad de evitar consecuencias ulteriores del delito ante la imposibilidad de acudir inmediatamente a la autoridad judicial para obtener el mandamiento de captura correspondiente. Para que opere dicha habilitación es necesario que concurran dos elementos: el temporal, es decir, que se estén realizando

hechos de apariencia delictiva, y el motivacional, referido a la necesidad de que existan razones para sostener la probable participación delincuencial de la persona —sentencia del 9 de marzo de 2011, hábeas corpus 141-2008—.

Debe indicarse que el artículo 159 inc. 3° de la Cn., le encomienda a la Policía Nacional Civil la función de colaborar en la investigación del delito la cual, junto a las otras actividades de prevención delictiva y asistencia a la comunidad, forma parte de la seguridad ciudadana, con las limitantes de apego a la ley y respeto de los derechos humanos. Así, la institución policial está facultada para llevar a cabo la paralización momentánea de la actividad cotidiana de una persona, a efecto de determinar la posibilidad de participación en un delito, diligencia vinculada a una investigación que no debe entenderse como una afectación del derecho de libertad, siempre y cuando se realice en el tiempo mínimo necesario, para contar con los elementos suficientes para poder hacer una imputación —sentencia del 30 de septiembre de 2002, hábeas corpus 115-2002—

Por su parte, los artículos 323, 326 y 327 CPP facultan a la policía a aprehender personas en el contexto de posible comisión de hechos delictivos: en ejecución de órdenes fiscales y judiciales, en cumplimiento de notificaciones rojas de instituciones de policía internacional, por fuga de lugares de detención, debido a existir flagrante delito en los términos del inciso 2° del artículo 323 —ya citado— o por la tenencia de objetos o existencia de huellas o señales en la persona que indiquen participación en aquellos.

Son los agentes fiscales, principales —no exclusivos— promotores de la acción penal —art. 193 ord. 4° Cn.—, quienes harán las valoraciones fácticas y jurídicas del caso para determinar si debe presentarse ante el juez competente —o archivarse— y efectuar las peticiones que consideren procedentes sobre la libertad física del procesado.

Es el juez finalmente —art. 172 Cn.—, y aquí es donde reside la mejor garantía de los derechos de los imputados —por su imparcialidad, su carácter técnico, la amplitud de sus facultades legales, entre otras características—, quien debe decidir sobre el peso de la imputación para la continuación —o no— del proceso penal y la determinación de la medida cautelar. La selección de la medida precautoria de la detención provisional, a diferencia de la captura policial, exige que el juez exprese razones fuertes y fundamentadas, tanto Táctica como jurídicamente, sobre los presupuestos del artículo 330 del CPP, esto para ser compatible con la presunción de inocencia reconocida en el artículo 12 inc. 1° de la Cn.

El derecho a la libertad personal, por tanto, no puede ser concebido como un derecho absoluto —al igual que el resto de derechos fundamentales—, siendo posible limitarle durante la investigación y procesamiento por hechos delictivos.

Cabe añadir que, durante estas limitaciones al referido derecho fundamental tutelado por el hábeas corpus, este tribunal puede controlar aquellas que se aleguen contrarias a los postulados constitucionales. Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso expedito y sencillo, también lo es que, por enmarcarse dentro de los procesos constitucionales cuya competencia corresponde a esta sala, debe advertirse del planteamiento alguna contradicción con la ley suprema, aún en su característica simplicidad. Y es que hay aspectos de restricciones de libertad que esta sede no está habilitada para decidir, verbigracia, si se ha configurado o no, conforme a las diligencias penales, un hecho delictivo por el cual se ha ejecutado una restricción o privación de libertad en contra de una persona. Esta determinación es exclusiva competencia de otras autoridades por tratarse de asuntos de mera legalidad.

Por ejemplo, en la improcedencia del 5 de febrero de 2014, hábeas corpus 493-2013, esta sala sostuvo: "Por tanto, esta sala no es competente para pronunciarse en relación con el desacuerdo de los solicitantes respecto a la determinación o no de tales extremos [existencia del delito y participación del imputado], pues de hacerlo así actuaría como un tribunal de instancia, lo que le está vedado (ver al respecto resolución HC 13-2009, de fecha 8/4/2011).

Cuando la pretensión presenta un vicio como el referido, debe declararse improcedente, tal como este tribunal lo ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia, al indicar que excede las atribuciones de esta sala revisar la actividad de valoración de la prueba que haya determinado a una autoridad a tener por establecida la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del incoado, pues la valoración probatoria es de exclusiva competencia de las autoridades encargadas de dirimir el proceso penal. Además, se ha aseverado que el mismo es un vicio insubsanable que imposibilita a este tribunal efectuar un análisis constitucional de los argumentos expuestos y, en consecuencia, la tramitación del hábeas corpus se vuelve inútil, deviniendo imposible jurídicamente su terminación tras el desarrollo completo del proceso (improcedencia 180-2009 de 26/3/2010)".

IV. En el caso que nos ocupa se reclama de la detención provisional que le fue impuesta a las cincuenta personas detalladas al inicio de esta resolución, respecto a lo expresado por la primera peticionaria, por considerar que el juez se basó únicamente en especulaciones de personas que no fueron identificadas, además por no existir una investigación previa que diera lugar a una orden administrativa de detención y por no valorarse los indicios mínimos para acreditar el delito y participación delincuencia' de los procesados y, en cuanto a lo expresado por el señor PG, por omitir la autoridad judicial considerar que uno de los imputados contaba con una orden de libertad condicional al momento de la captura.

1. Al respecto, esta sala ha establecido insistentemente que no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación (improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2020).

A pesar de lo anterior, se advierte que en los términos planteados en la petición no se propone un defecto de motivación en alguna decisión concreta que esté afectando la libertad personal de los imputados, emitida por parte de la autoridad judicial, de manera que se refleje arbitrariedad o ilegalidad, por el contrario los peticionarios únicamente exponen su inconformidad con la privación de libertad producto del conocimiento del proceso penal por parte del juez demandado.

Y es que, si bien se alega falta de motivación al decretar la detención provisional, la supuesta falta de acreditación de los extremos procesales y la omisión de considerar la prueba de descargo, su reclamo se centra en una inconformidad con la valoración de los elementos probatorios del juez sobre los mismos, lo cual pues no presenta razones que permitan advertir una vulneración de carácter constitucional.

En todo caso, debe aclararse que es al juez penal al que corresponde evaluar lo vertido en el proceso y pronunciarse sobre la suficiencia en cuanto a la imputación, así como determinar el tipo penal a aplicar, pues si esta sala revisara, en los términos propuestos, lo reclamado, actuaría como un tribunal de instancia, no siendo esa su labor sino el estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos.

Es así que al no haber argumentado la primera solicitante un asunto de carácter constitucional, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente su petición de hábeas corpus.

2. Por otra parte, respecto a la captura del señor *OAPP*, a pesar de tener una "carta de libertad", debe señalarse que la sola manifestación de la inexistencia de una orden —administrativa o judicial— para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración a la garantía dispuesta en el artículo 13 inciso 1° de la Cn., pues la norma suprema permite supuestos de excepción a dicha exigencia y el CPP también los contempla.

Así, los agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente —entre otros— a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, así corno para prevenir la comisión de uno, siendo necesaria

la remisión a la autoridad judicial competente para que sea esta quién decida si existe o no delito y se pronuncie sobre la procedencia de un proceso judicial para el sujeto en cuestión así como respecto a la situación de libertad física. Esto de conformidad con los artículos 13 inciso 1° de la Cn., 271, 323, 326 y 327 del CPP.

Estas consideraciones también son aplicables respecto a detenciones en el contexto de régimen de excepción como el emitido por la Asamblea Legislativa a partir del decreto N° 333, del 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, tomo 434, de la misma fecha, en el cual están suspendidas, en lo pertinente y con base en el artículo 29 de la Cn., las garantías de los artículos 12 inc. 2° y 13 inc. 2° de la Cn., es decir, algunas que rodean la detención de la persona y el plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa.

Es así que al no haber argumentado un asunto de carácter constitucional respecto a la captura del señor *PP*, sino de mera legalidad, debe declararse improcedente.

V. Respecto al tiempo transcurrido para la resolución de esta solicitud, esta sala advierte que, si bien el proceso constitucional de hábeas corpus se caracteriza por ser expedito dada la naturaleza de los derechos que mediante él se tutelan —libertad física e integridad personal de los detenidos—, el constituyente encomendó a este tribunal el control concentrado de constitucionalidad, por lo que, además del hábeas corpus, también le compete el conocimiento de las demandas de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como dirimir las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo referidas a la inconstitucionalidad de los proyectos de ley y resolver las causas de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de ciudadanía —art. 174 Cn.—.

De manera que la misma Constitución ubica a esta sala como el único tribunal con competencia especializada, exclusiva y máxima en materia constitucional, extendiendo su conocimiento a ámbitos diversos y respecto de procesos complejos que muestran características variadas, cuyo análisis parte de la aplicación directa de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales y la normatividad constitucional.

Es así que, si bien la cantidad de resoluciones emitidas por esta sala ha aumentado considerablemente en el año 2022 y lo que va del presente —en relación con años precedentes—se advierte que el número de demandas referidas a hechos acontecidos en el contexto del régimen de excepción ha sido el factor preponderante para el incremento de la carga laboral del tribunal respecto al proceso de hábeas corpus, lo cual ha impedido que este mecanismo de control constitucional se resuelva de forma expedita.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que debe considerarse la carga laboral como un parámetro objetivo respecto al tiempo que pueden demorarse los tribunales para pronunciarse sobre determinados temas, ello debe ponderarse según las circunstancias particulares del caso, puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer puede limitar —más allá de todos los esfuerzos que haga la autoridad— el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia —sentencia del 30 de mayo de 2022, hábeas corpus 300-2019—, tal como ocurre con las solicitudes de hábeas corpus que esta sede se encuentra recibiendo y resolviendo.

VI. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2°, 13, 159 inc. 3°, 172, 193 ord. 4° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada por la señora **********, a favor de los señores: *1) FACM, 1) DEAG, 3) LMAV, 4) LACH, 5) CELT, 6) EVPM, 7) EAGR, 8) EEHE, 9) BEHA, 10) MJRC, 11) AARM, 12) OAAF, 13) FCT, 14) INGG, 15) XERR, 16) JCA, 17) VMVP, 18) NVN, 19) RAB, 20) AMMP, 21) JVPM, 22) AVGM, 23) MJJM, 24) OAPP, 25) GARP, 26) REDC, 27) OAHG, 28) NAMR, 29) EAGD, 30) MCGC, 31) LAPG, 32) MARR, 33) EEOT, 34) WDGO, 35) RAVO, 36) AAHT, 37) EDPS, 38) IGVH, 39) FACR, 40) JAP —o P— G, 41) MAAT, 42) JFMM, 43) JALJ, 44) ENC, 45) GAPP, 46) JAOR, 47) EGMG, 48) KAGG, 49) VAGP y 50) JBMM*, por tratarse de un asunto de mera legalidad.

2. *Declárase* improcedente la petición de hábeas corpus incoada por el señor OPG, a favor del señor *OAPP*, por tratarse de un asunto que carece de trascendencia constitucional.

3. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ.—SECRETARIO.—RUBRICADAS—

En virtud de la pandemia por el Covid-19, a fin de evitar su movilización a esta sede judicial, se advierte que cualquier documentación relacionada al presente proceso la remita a través del correo institucional sala.constitucional@oj.gob.sv.

277-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinticinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Por recibido el oficio número 2171-22, de fecha 4 de abril de 2022, suscrito por la Jueza Cuarta de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, por medio del cual remite solicitud de hábeas corpus promovido en contra del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, a su favor por el señor *JCMG*, procesado por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario manifiesta –en síntesis– que se le decretó detención provisional con base en la declaración de un testigo con criterio de oportunidad denominado "Falcon", el cual es mendaz y "está utilizando a la Fiscalía General de la República, para pedirnos dinero a cambio de la libertad en dicho proceso penal".

Sostiene que estuvo recluido con ese testigo y este manifestó que él y otros procesados iban a atentar contra la vida de la Jueza Especializada de Instrucción "A" de San Salvador, pero ello es falso.

Afirma que el testigo le exige pago económico a cambio de no declarar en su contra en ese caso, lo cual realiza con el objeto de "sacar ventaja personal, económica y en sus procesos penales".

Por lo anterior, solicita hábeas corpus a su favor y que tanto fiscalía como los órganos de la administración de justicia no le den credibilidad al referido testigo.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que lo relativo a los elementos de convicción considerados para determinar la procedencia de la restricción al derecho de libertad de una persona procesada por la comisión de un hecho delictivo que se le impute, es un asunto atribuido de manera exclusiva a la autoridad judicial que conoce del proceso penal –improcedencia de 29 de julio de 2016, hábeas corpus 178-2016–.

En consonancia con ello se ha señalado que corresponde a los jueces penales efectuar el análisis de la validez e idoneidad de las diligencias de investigación incorporadas a una causa a fin de determinar si estas son capaces de sustentar la imputación penal y la medida cautelar a imponer –improcedencia del 17 de noviembre de 2017, hábeas corpus 401-2017–.

Asimismo, se ha estipulado que este tribunal no tiene competencia para revisar o verificar el valor otorgado por el juez a cada uno de los elementos de prueba en los que basa su decisión, pues la determinación acerca de la existencia del delito atribuido y la participación de una persona en el mismo, se deriva de la estimación que exclusiva y oportunamente realizan los jueces penales a partir de su inmediación –improcedencia del 13 de mayo de 2022, hábeas corpus 662-2022–.

También, se ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares o que puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben investigarlas y decidirlas las autoridades competentes, como la policía y la fiscalía –improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018–.

IV. En el caso que nos ocupa, el peticionario cuestiona la validez y suficiencia del medio de prueba tenido en cuenta –declaración del testigo protegido denominado como "Falcon"– para la imposición de la detención provisional, el cual alega es "mendaz", no brindando argumentos que describan vulneración de normas constitucionales con afectación a su derecho fundamental de libertad física. Y es que, el peticionario únicamente expone su inconformidad con el valor positivo que el juez otorgó a la declaración de dicha persona, presentada para acreditar la posible existencia del delito, su participación en el mismo e imponerle la cautela de detención provisional, cuando a su parecer el dicho de esta no debería gozar de credibilidad.

En ese sentido se reitera que corresponde al juez penal evaluar los elementos probatorios habidos en el proceso penal y determinar a partir de ellos la imposición o no de una medida cautelar, pues si esta sala realizara tal análisis y revaluara la prueba no solo actuaría como un tribunal de instancia sino también excedería las facultades legales conferidas, las cuales se circunscriben al estudio de posibles vulneraciones a la Constitución y especialmente a los derechos de libertad física e integridad personal de los detenidos. De ahí que su queja constituye un asunto de mera legalidad pues, como se detalló en la jurisprudencia referida, es atribución de los jueces penales analizar asuntos como el propuesto.

En cuanto a que el citado testigo le exige dinero para modificar lo que ha dicho, debe indicarse que la legislación secundaria otorga los mecanismos adecuados para que la persona que se considere agraviada se dirija ante las autoridades correspondientes a fin de referirse a la supuesta falsedad en su declaración y a la alegada exigencia de dinero a cambio de alterar su dicho, sin que pueda pretenderse que este tribunal sea el que investigue y determine tales aspectos, ya que no constituye parte de sus competencias constitucionales.

En consecuencia, habiéndose alegado asuntos de estricta legalidad deberá declararse improcedente la presente petición.

V. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición del presente hábeas corpus incoada a su favor por el señor *JCMG*, por tratarse de asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese*, oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

3258-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra los jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia, ambos con sede en San Salvador, a su favor por el señor *MNMO*, condenado por varios delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante refiere que fue condenado a la pena de catorce años de prisión por los jueces del Tribunal Primero de Sentencia, mediante sentencia del 31 de julio de 2007, en el proceso con referencia 144-3-2007, y por los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia, a la pena de treinta y nueve años de prisión, el 17 de abril de 2009; sentencias que actualmente se encuentran firmes y que, a su criterio, inobservan derechos y garantías constitucionales.

Advierte que en sus condenas hay una multiplicidad de penas de prisión, siendo que los delitos fueron cometidos bajo la modalidad de concurso ideal conforme al artículo 40 del Código Penal (CP), cuya penalidad se encuentra en el artículo 70 CP –la correspondiente al delito más grave aumentada hasta una tercera parte–.

Agrega que, por su parte, el artículo 7 CP reconoce el concurso aparente de leyes e indica los supuestos por los cuales los ilícitos pueden ser subsumidos, entre ellos interesa –en su caso– el numeral tres relativo a que "[...] el precepto penal complejo absorberá a los preceptos que se sancionaran, sancionan, las infracciones consumidas en aquel [...]" (sic), en ese sentido, cuando en un solo delito se comprenden todas las conductas de relevancia penal, no es necesario nominarlas con distintas calificaciones jurídicas, por consiguiente, las autoridades demandadas inobservaron la aplicación del concurso ideal "lo cual hubiera dado vida a la prohibición de múltiple persecución penal".

Añade que la prohibición de no ser enjuiciado múltiplemente comprende, entre otros, las diversas imputaciones de los concursos aparente de leyes –como es su caso–, dado que se es posible identificar que se trata de la misma persona, hechos y motivo de persecución –en este punto hace una relación de cómo estas tres identidades son aplicables a los procesos a los que fue sometido–. Sostiene que dicho yerro judicial no fue hecho del conocimiento de las autoridades demandadas pues fue un hecho sobreviniente al fallo y por ser de escasos recursos económicos para contratar un abogado particular que haga uso de los medios impugnativos.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la propuesta del peticionario (III) y luego se analizarán los aspectos concretos planteados (IV).

III. 1. Esta sala ha estipulado que el ámbito de competencia de este tribunal en el hábeas corpus es el conocimiento y decisión de circunstancias que vulneren normas constitucionales y lesionen o amenacen el derecho de libertad de la persona a quien se pretenda favorecer o, en su caso, el derecho de integridad física, psíquica o moral, de los detenidos; de manera que, cuando se propongan cuestiones que deban ser resueltas por otras autoridades y que por lo tanto no trasciendan de ser inconformidades de los requirentes con lo decidido, su tramitación será infructuosa y deberá rechazarse al inicio del proceso –improcedencia 27 de abril de 2020, hábeas corpus 164-2020–.

2. También se ha establecido como uno de los límites a las atribuciones conferidas constitucionalmente a esta sala, analizar los elementos de convicción que rodean al hecho y que fundamentan las decisiones que adoptan jueces y tribunales penales, pues ello es atribución exclusiva de ellos y su arrogación implicaría convertirse en un tribunal de instancia más, capaz de revisar las actuaciones del resto de autoridades judiciales bajo esas circunstancias –improcedencia del 20 de junio de 2014, hábeas corpus 269-2014–.

De modo que, la falta de señalamiento expreso del agravio generado por la autoridad contra quien se reclama, con las características antes mencionadas, o pretender que este tribunal revise los elementos de convicción que llevan a las autoridades a adoptar las decisiones en torno a las causas penales, así como determinar el delito y la modalidad de comisión, constituyen vicios en la pretensión e impiden que pueda continuarse con su trámite normal.

3. Además se ha indicado que los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia de una doble o múltiple persecución son: *i)* identidad en la persona, *ii)* identidad del objeto de la persecución y *iii)* identidad de la causa de persecución.

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate de la misma persona perseguida penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar, en este punto, que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona –sobreseimiento del 23 de junio de 2009, hábeas corpus 223-2007–.

IV. De acuerdo a lo expuesto, se advierte que lo planteado por el señor MO está orientado a que esta sala determine que en su condena ha existido doble persecución, ya que señala que en su proceso debió aplicarse el concurso aparente de leyes del art. 7 número 3 CP, dado que las autoridades demandadas en sus sentencias lo condenaron por hechos sucedidos por ser este parte de una agrupación ilícita dedicada a robos agravados, en consecuencia, se debió aplicar criterios de subsunción.

Así los cuestionamientos realizados por el peticionario no revelan un argumento referido a la infracción al principio constitucional de única persecución, en tanto de su reclamo no es posible advertir que haya existido una posible identidad fáctica entre las imputaciones que le fueron atribuidas, sino un desacuerdo con que varias acciones hayan sido identificadas como parte de un concurso de delitos y no un concurso aparente de leyes, cuestión que corresponde determinar al juez penal y no a esta sala.

Si bien es cierto, la regla jurídica contemplada en el art. 7 número 3 del Código Penal es aplicable para los casos de concurso aparente de leyes, cuando el precepto penal complejo pueda absorber a los que sancionan las infracciones consumidas en este, su análisis y determinación de procedencia se encuentra reservada al ámbito de competencia de jueces y tribunales penales en el marco del enjuiciamiento de conductas delictivas, con base en los elementos de prueba incorporados y, como consecuencia, no puede conformar el objeto de análisis de un proceso constitucional de hábeas corpus, el cual, como se dijo antes, se encuentra limitado a un examen exclusivamente constitucional de acciones u omisiones que transgredan o amenacen el derecho de libertad física o el derecho de integridad personal de los detenidos.

En definitiva, al no advertirse, de lo expresado por el peticionario, la infracción constitucional que reclama y considerando que la sola inaplicación del concurso aparente de leyes no sugiere una posible inobservancia del principio de única persecución, la pretensión sometida a conocimiento constituye un asunto de mera legalidad y debe ser rechazada declarándola improcedente.

V. Se autoriza a la secretaria de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase improcedente* la petición de hábeas corpus incoada a su favor por el señor *MNMO*, en virtud de que los planteamientos expuestos constituyen asuntos de mera legalidad.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

179-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Norman Hugo Claros Rodríguez, en contra del Juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla licenciado José Alberto Franco Castillo, a favor del señor *GESG*, condenado por el delito de violación en menor o incapaz.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario manifiesta que su representado al momento de rendir declaración en vista pública ofreció prueba testimonial que le fue declarada inadmisible por el juez demandado, vulnerando con ello los derechos de defensa y libertad, al referir que la finalidad de dicho ofrecimiento era acreditar que el procesado se encontraba en otro lugar al momento de la comisión del delito por el que se emitió en su contra una sentencia condenatoria; indica que dicha decisión fue apelada y posteriormente confirmada por la cámara correspondiente.

Agrega que en el año dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria aludida el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, expresa que dentro de dicho proceso penal solicitó le fuera practicado reconocimiento de salud que no le fue realizado.

Señala que a su escrito adjunta cierta documentación, pero no la incorporó.

II. Mediante resolución del 29 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara algunos aspectos incompletos de su petición.

La referida resolución fue notificada al solicitante el 12 de junio de 2023, a través del Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema de Justicia, según consta a folio 11, asimismo se dio aviso acerca de dicha notificación mediante el correo indicado en su escrito, por tanto, al hacerse efectivo dicho acto procesal de comunicación y haber transcurrido el plazo legal para la contestación de los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, sin que el peticionario se manifestara sobre los mismos a fin de completar en debida forma su planteamiento, es por tal motivo que la presente solicitud deberá declararse inadmisible.

III. Se autoriza a la secretaría de esta sala para que notifique esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo establecido en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado Norman Hugo Claros Rodríguez a favor del señor *GESG*, al no haber contestado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2689-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Celia del Carmen Segovia Quintanilla, contra el Director del Complejo Penitenciario La Esperanza, a favor del señor *SADCC*, procesado por el delito de organizaciones terroristas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria expone que el 31 de marzo de 2022 se celebró audiencia ante el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, en el proceso penal clasificado con la referencia 43-01-18-1, donde se condenó en procedimiento abreviado al señor *SADCC*, a la pena de tres años de prisión, la cual se reemplazó por trabajos de utilidad pública, y como efecto se ordenó su inmediata libertad, siempre que no se encontrara a la orden de otro tribunal.

Afirma que, ese mismo día, la autoridad judicial entregó a personal del Centro Penal de Izalco el oficio número 1524 que contenía la respectiva orden de libertad y también lo remitió vía fax al director de dicho recinto penitenciario; no obstante, asegura que el justiciable no fue puesto en libertad, a pesar de no estar siendo procesado por otro delito ni tener otra causa pendiente.

Relata que la madre del señor *DCC* se ha presentado al aludido centro penal para preguntar por la libertad de su hijo, pero le manifestaron que "tuviera paciencia que lo tenían que pasar con la trabajadora social", sin embargo, en el mes de agosto lo trasladaron al Complejo Penitenciario La Esperanza, donde le manifestaron a la señora que "no tenían ninguna orden de libertad de ese detenido" y al mostrarles la copia del oficio le solicitaron el original del mismo, pues en caso contrario continuaría detenido.

En ese sentido se le solicitó al Juez Especializado de Instrucción de San Miguel que remitiera nuevamente el oficio y, el 31 de octubre de 2022, se emitió el oficio número 4248 –del que anexa copia– dirigido al director de tal centro penal, remitiéndolo vía fax y entregando un original a la madre del imputado, sin embargo al presentarlo le manifestaron que tenía que pasar primero "con la trabajadora social y después le van a avisar si lo dejan en libertad o no", ello a pesar de existir una orden judicial.

II. Mediante resolución del 17 de abril de 2023, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) si la omisión por parte de la autoridad demandada de ejecutar la orden de libertad emitida a favor del señor *DCC* fue informada al Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, de ser así, aclare qué gestiones ha llevado a cabo el juez para ejecutar su decisión, detallando las fechas en que se realizó y los resultados obtenidos;

ii) cuándo fue presentada la orden de libertad a la autoridad demandada y cuánto tiempo ha transcurrido sin ser cumplida;

iii) si ha planteado solicitudes concretas al director del centro penal donde actualmente se encuentra el justiciable en relación con la orden de libertad que no ha ejecutada y qué le ha contestado; y

iv) si se le ha iniciado una nueva causa penal al señor *DCC*, de ser así deberá especificar, qué delito se le imputa, ante qué autoridad se tramita y si se ha decretado alguna medida cautelar.

La referida prevención fue notificada al solicitante mediante el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de abril de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *SADCC*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente archívese.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2112-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora FFDM, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *HAMA*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante únicamente señala que su esposo, el señor *MA*, actualmente se encuentra detenido en "el Penal La Esperanza". Añade que fue detenido por agentes policiales el 13 de diciembre de 2022, en Ilopango, San Salvador, pero considera que no hay fundamento legal para su detención, pues no ha delinquido, no está tatuado ni pertenece a pandillas, no se hallaba en flagrancia ni presentaba algún "tipo de peligrosidad para la sociedad", que son los únicos supuestos para detener a una persona.

Por otra parte, sostiene que ya se celebró la primera audiencia "en la fase de presentación" y que su abogada particular está "a la espera para presentar solicitud de audiencia para revisión de medidas por la mala salud en la que se encontraba el privado de libertad en el momento de la captura. Manifiesta preocupación "por no saber nada de su esposo que se encuentra en condiciones de mala salud desde antes de la captura".

Asimismo, expresa que el "reclamo concreto que se desea plantear [...] es la detención arbitraria realizada por agentes policiales, además de la violación de los derechos relativos a la salud pública [...] ya que por motivos del Régimen de Excepción, no se les está permitiendo conocer de forma ágil el estado de salud de la persona detenida a los familiares". Además, se desconoce si al señor *MA* "se le ha aplicado algún tipo de medida cautelar, luego de la detención [...] y se está atentando contra su dignidad física, moral y la de su familia, al ser sometido a una detención sin fundamento,

arbitraria e ilegal", ya que la "ley exige presupuestos válidos, para determinar la existencia del delito y la participación del imputado en su comisión; por ende [se está] ante un caso de restricción indebida a la Libertad Ambulatoria de la persona detenida".

II. 1. Mediante resolución del 31 de julio de 2023, se previno a la solicitante para que aclarara los siguientes aspectos:

i) ante qué autoridad judicial se tramita actualmente el proceso penal en contra del señor *MA*, si le han impuesto alguna medida cautelar, desde qué fecha, cuál es el estado actual de su causa penal y en qué centro de reclusión se encuentra; si desconoce dicha información, qué acciones ha realizado para obtenerla, ante qué autoridad, en qué fechas y cuáles han sido las respuestas obtenidas; debiendo adjuntar la documentación que lo respalde;

ii) si pretende exponer alguna queja relacionada con el estado de salud del detenido, cuál es su reclamo específico y a qué autoridad se lo atribuye, debiendo determinar cuál era el diagnóstico médico del señor MA al momento de su captura y si debe recibir algún tratamiento; lo que deberá acreditar con una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) qué acciones se han realizado para conocer la condición de salud del señor *MA*, ante qué autoridad, en qué fecha y cuáles han sido las respuestas recibidas, debiendo agregar la documentación que lo compruebe;

iv) si se ha solicitado el ingreso de los medicamentos prescritos o que sea llevado a consultas médicas; si alguna autoridad se lo ha negado o impedido y por qué motivos; y, de ser el caso, detallar las circunstancias concretas y agregar la documentación que respalde sus afirmaciones;

v) si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió esta y las conclusiones de dicho estudio, debiendo agregar la documentación que lo acredite, si la tuviere;

vi) si se informó al juez sobre la condición de salud del señor *MA* y si esto fue tomado en cuenta en el análisis de la medida cautelar decretada –si fuera el caso–, debiendo mencionar los fundamentos de la decisión;

vii) si se ha solicitado audiencia de revisión de medidas por la salud del privado de libertad, en qué fecha lo hizo y qué respuesta se obtuvo, debiendo presentar la documentación correspondiente; y

viii) si plantea alguna objeción constitucional a la detención del señor *MA*, con relación a los presupuestos para determinar la existencia del delito y la participación del imputado; y, si es el caso, argumentar la trascendencia constitucional de ello.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante, por medio del correo electrónico que señaló para tal efecto el 9 de agosto de 2023, según consta en acta agregada al presente proceso de hábeas corpus, por tanto,

se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *HAMA*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. Notifíquese y oportunamente *archívese*.

"""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—GARCÍA-–PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

2049-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con quince minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora RESDC, contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada, a favor de su hijo *ACS*.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante refiere que su hijo fue capturado el 16 de abril de 2022, en su casa de habitación, cuando agentes policiales y dos soldados solicitaron permiso para ingresar a su hogar, preguntándole si el señor *CS* pertenecía a pandillas; sostiene que ella les permitió entrar y les explicó que aquel anteriormente había sido procesado por agrupaciones ilícitas pero que, en el año 2021, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida informó sobre el cierre de suspensión condicional de la ejecución de la pena, según consta en el oficio correspondiente que intentó mostrar a la policía, pero que no quisieron revisarlo.

Reclama que se le está juzgado nuevamente por el mismo delito y afirma que su hijo sufre de un padecimiento cardiaco que no pudo ser tratado debido a su captura, asegurando que presentaba síntomas de dolores agudos en el pecho, por lo que "solicita un peritaje" y "exámenes médicos".

Asimismo, manifiesta que desconoce a la orden de qué juzgado se encuentra, informando que el referido señor está detenido en el Complejo Penitenciario La Esperanza.

II. 1.Mediante resolución del 23 de diciembre de 2022, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) especificar cuál es la autoridad que demanda en el presente proceso constitucional y los reclamos concretos que le atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) señale en qué consiste el tratamiento y medicamentos determinados por el médico respectivo para la enfermedad que, según afirma en su petición, padece su hijo, lo cual deberá acompañar de una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) determine si pretende proponer un reclamo sobre la desatención de la salud de su hijo aclarando, de ser el caso, si durante la detención del señor CS alguna autoridad –indicando cuál– se ha negado o ha impedido que se ingrese la medicina prescrita, se realicen chequeos o se le proporcione los tratamientos hospitalarios correspondientes, detallando las circunstancias concretas;

iv) manifieste si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió y las conclusiones de dicho estudio;

v) respecto a que se le esta juzgado nuevamente por el mismo delito, deberá indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, si atribuye algún reclamo referido a la prohibición de doble juzgamiento, en cuyo caso tendrá identificar a la autoridad que considera responsable y realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa en cada uno de los procesos judiciales a los que se refiere, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución– y si esto ha sido alegado ante las autoridades judiciales correspondientes, manifestando cuál ha sido la respuesta otorgada –si existiere–, debiendo incorporar la documentación que lo compruebe;

vi) indique si los reclamos propuestos a esta sala han sido expuestos ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta para cada uno de ellos, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

vii) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal de su hijo, por qué delito, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa penal e indique si continúa en el mismo centro de reclusión que señala o, en su defecto, qué autoridad se ha negado a proporcionarle tal información, indicando las fechas de las solicitudes hechas al respecto.

La referida prevención fue notificada de manera personal a la solicitante el 23 de diciembre de 2022, en la secretaría de este tribunal, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y

que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *ACS*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente archívese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G— O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

326-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con diez minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Nelson Miguel Zepeda Gómez, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de las señoras *SECA* y *JCBH*, procesadas por el delito de agrupaciones ilícitas ante el Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. En su primer escrito el peticionario, quien es defensor de las señoras *CA y BH*, señaló que ellas están siendo procesadas por el delito de agrupaciones ilícitas, ante la sede judicial ya referida, en la causa penal referencia C4-45-2020/AV, en la cual se encuentran bajo medidas sustitutivas a la detención provisional. Sin embargo, cuestiona que en el contexto del régimen de excepción, sufren persecución por parte de agentes policiales del municipio de Mejicanos, quienes buscan atribuirles nuevamente el delito de agrupaciones ilícitas, sin existir ninguna línea previa de investigación o direccionamiento funcional de parte del ente fiscal. En ese sentido, alega que existe una vulneración al principio de doble persecución, requiriendo hábeas corpus a favor de ambas.

2. Mediante escrito presentado el día 6 de septiembre de 2022, el abogado Zepeda Gómez informa que la señora *BH* fue capturada el 1 de septiembre de 2022, sin orden de captura o flagrante delito, por lo que reitera su solicitud de hábeas corpus a favor de aquella, a fin de evitar un doble enjuiciamiento.

II. 1. Mediante resolución del 29 de marzo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si tiene conocimiento de la existencia de una orden administrativa o judicial decretada en contra de la señora *CA*, que esté a punto de ejecutarse, en caso negativo, cuál es en concreto la amenaza contra su libertad personal que pretenda someter a control de este tribunal o por qué refiere que a la citada señora se le quiere atribuir nuevamente el delito de agrupaciones ilícitas;

iii) los hechos por los que se le acusa a la señora BH en cada uno de los procesos judiciales a los que se alude; es decir, en el que tiene referencia C4-47-2020/AV y el actual, debiendo detallar tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

iv) señale en qué estado se encuentran los procesos penales en contra de la señora *BH* y qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos –debiendo detallar fechas, autoridades y decisiones–;

v) de haberse decretado detención provisional en contra de la señora *BH*, en cualquiera de las causas penales que se siguen en su contra, si se ha presentado algún medio impugnativo que se encuentre pendiente de tramitación, debiendo especificarlo;

vi) si ha expuesto el reclamo de doble juzgamiento ante las autoridades judiciales correspondientes y –de ser el caso– en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite.

2. La referida prevención fue notificada al solicitante el 21 de abril del año en curso, mediante el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia, según consta en acta agregada al expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de las señoras *SECA y JCBH*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

387-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez de Paz de Panchimalco, a su favor por el señor AMBG, procesado por el delito de actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario refiere que fue capturado el 8 de agosto de 2018 y que la audiencia inicial se celebró en el Juzgado de Paz de Panchimalco, el día 12 de los mismos mes y año, en la que se le decretó instrucción formal con detención provisional, pero señala que lleva más de doce meses privado de libertad, sin que a la fecha de instar la actuación de esta sala se le hubiera realizado la vista pública, por lo que alega exceso en el plazo de restricción establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal.

II. Mediante resolución del 6 de enero de 2020, se previno al peticionario para que especificara a esta sala:

El nombre del tribunal de sentencia a cuyo cargo se encuentra su causa penal, al cual atribuye la inconstitucionalidad de la detención provisional que cumple por no haberse celebrado aún el juicio.

La aludida decisión le fue notificada al peticionario mediante cooperación judicial el 12 de abril de 2023 en su casa de habitación previas gestiones para obtener su dirección domiciliar, al informarse que no se encontraba en resguardo en el centro penal que señaló para recibir los actos de comunicación, sino en libertad, la cual se realizó a través de su hermana; luego fue reiterada por medio de su padre, el 5 de mayo del corriente año. Ambas diligencias constan en actas agregadas al presente expediente sin que se justifiquen las razones de que se efectuara nuevamente dicho acto procesal en la última fecha.

No obstante ello, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que ya transcurrió el plazo legal sin que el solicitante se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a su favor, por el señor *AMBG*, al no haberse contestado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

39-2019

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, a su favor por el señor *RACM*, condenado por el delito de homicidio agravado.

Analizada la documentación y considerando:

I. 1. El solicitante alega, como primer aspecto, que su condena se basa en una prueba ilegal, haciendo alusión a la confesión extrajudicial del

testigo denominado "Holanda", a la cual no tuvo acceso por no haber sido puesta a su disposición por el juez de instrucción, ni por el aludido juez de sentencia, ya que después de presentada la acusación fue incorporada al proceso y admitida como prueba en un sobre cerrado, vulnerándose así su derecho de defensa técnica y material.

2. Por resolución del día 3 de junio de 2019, este tribunal previno al peticionario para que señalara con precisión:

i) si el testigo denominado "Holanda" declaró durante la vista pública;

ii) la fecha en que se dictó su sentencia condenatoria y si esta se encuentra firme –a partir de cuándo–;

iii) si la vulneración constitucional que expone fue reclamada ante los tribunales penales respectivos y, en su caso, cuál fue la respuesta que obtuvo u otra circunstancia que permita inferir que por la propia configuración del proceso penal se imposibilitó alegar dicha afectación.

3. La referida decisión le fue notificada al solicitante el día 12 de abril de 2023, a través de cooperación del Juez de Paz de Ayutuxtepeque, según consta en acta agregada en el presente expediente.

II. 1. Por medio de correo electrónico el Juez de Paz de Ayutuxtepeque remitió escrito del peticionario el cual fue presentado el 12 de abril de 2023, dentro del término establecido para ello –sin sello del centro penal donde se encuentra recluido, debido a que las autoridades penitenciarias no lo plasmaron, según informó dicha autoridad– en el cual, en su contenido, respecto a la primera prevención señaló que el testigo denominado "Holanda" sí declaró durante la vista pública; en cuanto a la segunda prevención, únicamente citó una fecha 16 de agosto de 2016; y respecto a la tercera prevención, indicó que, expuso la vulneración alegada a través de este proceso constitucional, sin embargo, se le expresó que debía presentar el proceso donde correspondiera dado que "su función había terminado".

2. Al respecto se advierte que el peticionario no ha superado adecuadamente todos los aspectos prevenidos por este tribunal, pues señaló una fecha específica, pero no indicó si se trata de aquella en que la se dictó la sentencia condenatoria o si a partir de ese día se encuentra firme dicha decisión; a su vez se limitó a señalar que si reclamó la vulneración constitucional alegada a través del presente proceso constitucional pero sin constancia de la respuesta brindada y sin establecer ante que autoridad la alegó –ni instancia– ni quien le contestó.

Consecuentemente, en vista de que no se subsanaron las prevenciones realizadas en los términos exigidos por este tribunal y siendo que los aspectos que no fueron esclarecidos son necesarios para decidir si se debe dar trámite a este hábeas corpus, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declarar inadmisible su propuesta.

POR TANTO, con base en las razones ante expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible el hábeas corpus planteado por el peticionario *RACM*, a su favor, por no haber subsanado las prevenciones en los términos requeridos por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—H.N.G.--PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

965-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el señor JPS, contra el Juez Especializado de Instrucción A4 de San Salvador, a favor del señor *JRS*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante señala que el señor *JRS* fue capturado el 30 de octubre de 2022 y, en audiencia de imposición de medidas, dicha autoridad judicial le decretó la detención provisional sin verificar que tiene padecimientos graves de salud –diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica– ni existir indicios de que aquel pertenece a pandillas.

Refiere que la primera enfermedad era controlada en el Hospital Nacional de San Bartolo –detallando el tratamiento proporcionado– y que, durante su privación de libertad en las bartolinas de Ilopango, el procesado desarrolló insuficiencia renal crónica debido a las complicaciones que la diabetes ocasiona.

Menciona que el justiciable ha sido trasladado de emergencia en diferentes ocasiones al referido hospital, por lo cual la detención provisional impuesta vulnera su derecho a la salud e integridad personal, pues por su condición médica es posible que su vida se encuentre en riesgo.

2. Mediante resolución del 24 de abril de 2023, se previno al peticionario para que expresara con precisión los siguientes aspectos:

i) cuál es el cuestionamiento concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si reclama de la falta de atención médica, en cuyo caso debe especificar los argumentos fácticos que sustentan tal situación y a qué autoridad le atribuye dicha omisión, tomando en cuenta los derechos tutelados en el hábeas corpus;

iii) indique si el reclamo en comento –omisión de atención médica– ha sido expuesto ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de su hermano, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

iv) si se ha solicitado el ingreso de los medicamentos prescritos o que sea llevado a consultas médicas, si alguna autoridad se ha negado o impedido y por qué motivos, detallando las circunstancias concretas de ser el caso y agregando la documentación que respalde sus afirmaciones;

v) manifieste si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió y las conclusiones de dicho estudio, debiendo agregar la documentación que lo acredite si la tuviere;

vi) indique si se informó al juez sobre la condición de salud del señor *JRS* y si esto fue tomado en cuenta en el análisis de la medida cautelar debiendo explicar los fundamentos de la decisión y anexar copia de la misma si la tuviere;

vii) en atención a la decisión judicial que decretó la detención, señale si esta fue impugnada mediante apelación o si se solicitó la revisión de la misma con los argumentos que propone a esta sala, de ser así, en qué fecha y la respuesta obtenida, debiendo agregar copia de los documentos que posea al respecto; y

viii) cuál es el estado actual de la causa penal y el lugar donde se encuentra recluido el señor S o si ya fue puesto en libertad.

3. La aludida decisión le fue notificada mediante correo electrónico, el día 19 de mayo de 2023 y dentro del término establecido para ello, presentó escrito en el que se manifiesta sobre los cuestionamientos realizados por esta sede, refiriendo que:

i) El reclamo concreto es sobre la vulneración del derecho a la salud de su hermano quien desde antes de la detención padecía diabetes mellitus tipo II y que las autoridades han hecho caso omiso de dicha situación. Por una parte señala que en la Procuraduría General de la República no le dan ninguna información, solo que el abogado está incapacitado y por otra afirma que el Juez Especializado de Instrucción A4 de San Salvador le decretó la detención provisional cuando es evidente que el peligro de fuga se desvanece cuando una persona está enferma. Finaliza este punto expresando que no le dan información debido a que el caso tiene reserva y que no se le brinda el tratamiento médico correspondiente;

ii) respecto a la atención médica, señal que por su grave estado de salud no había sido trasladado a un centro penal, lo que era confirmado por los agentes policiales de las bartolinas de Ilopango; atribuyendo dicha vulneración a la Procuraduría General de la República por no hacer las gestiones necesarias para que se le de tratamiento médico;

iii) expuso de forma verbal a los agentes policiales y en la Procuraduría General de la República, el estado de salud de su hermano, pero le manifestaron que no pueden hacer nada ya que los procesos van para largo, desconociendo si el abogado hizo saber dicha situación al juez de la causa;

iv) en la bartolina donde estaba detenido en ocasiones le pasaban medicamentos, pero no tiene seguridad sobre si se los entregaban y que en ocasiones fue ingresado en el Hospital de San Bartolo;

v) desconoce si se ha realizado un peritaje de salud ya que no le han informado nada al respecto;

vi) desconoce si se le ha informado al juez sobre la situación de salud del señor *JRS*;

vii) desconoce si se hizo uso de algún medio de impugnación; y

viii) aquel se encuentra en detención provisional y el 22 de mayo de 2023, le informaron que había sido trasladado a un centro penal.

II. 1. De lo expresado por el señor JPS al pretender evacuar las prevenciones hechas por esta sala se advierte que, no obstante alega vulneraciones a los derechos de integridad física y libertad personal del señor *JRS*, las cuales atribuye a la Procuraduría General de la República y al Juez de Instrucción A4 de San Salvador, no identifica de forma concreta ninguna actuación u omisión por parte de dichas autoridades que vulnere alguno de los derechos protegidos mediante el hábeas corpus, más allá de la poca información que aquel refiere haber recibido.

Asimismo, se advierte que el peticionario refiere de forma general que el procesado fue privado de libertad por agentes policiales y que posteriormente se le decretó la detención provisional, indicando que no se le proporciona atención médica; sin embargo, en sus escritos no aporta argumentos fácticos que describan hechos específicos de tales afirmaciones, ni aclara cómo tuvo conocimiento de que esa situación esté ocurriendo, al contrario, expresa que no se le proporciona información de ningún tipo, también omite señalar por qué afirma que no le están proporcionando el tratamiento médico correspondiente y qué autoridad es la responsable de tal circunstancia, tampoco especifica si ha realizado alguna petición concreta al respecto y si las autoridades se han negado a dar una respuesta.

Asimismo, sostiene que "un Juez Especializado de Instrucción" le decretó la detención provisional aun cuando está enfermo, pero no traslada a esta sala ningún razonamiento que sustente cómo la sola imposición de la medida privativa de libertad vulnera la integridad física de aquel, pues no menciona que tal incidencia haya sido expuesta al juez de la causa al momento de decretar dicha medida cautelar; asimismo, expresa que no tiene información del proceso, sobre si se le ha realizado un peritaje de salud o si se recurrió de la decisión que impuso la medida privativa de libertad, lo cual torna confusos e incompletos sus alegatos.

Consecuentemente, en vista que no se subsanaron las prevenciones realizadas y siendo que los aspectos que no fueron esclarecidos son necesarios para dar trámite a su petición, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declarar inadmisible la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones ante expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JRS*, por no haberse evacuado la prevención en los términos requeridos por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G-–O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1176-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinticinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora DB, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor JAB, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizado el proceso y considerando:

I. La peticionaria refiere ser hermana del señor B, quien fue detenido por agentes policiales en su lugar de trabajo el día 26 de junio de 2022, por ser señalado como colaborador de una pandilla, sin haber verificado los agentes la información que se les brindó, por lo cual afirma que es una detención arbitraria e ilegal, basada en "una falsa información publicada con mala intención", y que existen contradicciones, ya que señalan que tiene antecedentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión y posesión y tenencia, cuando nunca ha estado detenido y los únicos registros que tiene son en calidad de víctima debido a que sufrió atentados contra su patrimonio y vida por negarse a pagar la renta a pandilleros. Asegura que el detenido no pertenece a organizaciones criminales ni posee tatuajes alusivos a ellas.

Agrega que no cuenta con el acta de la audiencia de imposición de medidas cautelares celebrada el 9 de mayo de 2022, por lo cual desconoce los motivos de la detención y el lugar donde se encuentra recluido, considerando que al procesado se le han vulnerado los derechos al debido proceso, "retardación de justicia" y libertad. Señala que es un buen padre de familia, trabajador y respetuoso de las leyes. Por tal razón solicita hábeas corpus a su favor y se le conceda la libertad. Adjunta documentación sobre arraigo familiar.

II. 1. Mediante resolución del 13 de marzo de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) qué solicitudes han realizado para obtener el acta de la audiencia de imposición de medidas cautelares, ante qué autoridades y en qué fechas y cuál ha sido la respuesta, debiendo especificar si se les ha denegado dicha información y cuáles son las razones, a lo que deberá adjuntar los documentos que lo acrediten;

iii) por qué afirma desconocer el lugar donde se encuentra recluido el señor B, debiendo aclarar, qué gestiones ha realizado para localizarlo, ante qué instituciones, en qué fechas y qué respuestas ha recibido, en caso, haya sido ubicado el privado de libertad, señale en qué lugar en específico se encuentra guardando detención;

iv) si cumple una medida restrictiva de libertad, indique cuáles son los motivos por los que se ordenó dicha restricción y si desea plantear alguna inconstitucionalidad al respecto, debiendo exponer las razones;

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor B, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, lugar donde se encuentra recluido y el estado actual de su causa penal.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante vía fax el 29 de marzo del año en curso, según consta en acta agregada al expediente (fs. 23), por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JAB*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PEREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2044-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado *********, contra agentes de la Policía Nacional Civil y el Juez Especializado de Instrucción "C3" de San Salvador, a favor de la señora *ASPC*, procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante señala que la señora PC estaba siendo procesada, previo a la entrada en vigencia del régimen de excepción, por el delito de agru-

paciones ilícitas, en el Juzgado Especializado de Instrucción "A-1" de San Salvador, bajo la referencia A1-24-2021, proceso penal respecto del cual gozaba de medidas alternas a la detención provisional, las cuales le fueron decretadas en la audiencia especial de revisión de medidas celebrada el 9 de agosto de 2021.

Sin embargo, el día 9 de abril de 2022, agentes policiales capturaron a la referida en su casa de habitación ubicada en el Cantón ********, del departamento de La Libertad, solicitándole mediante engaño que saliera para realizarle unas preguntas y al hacerlo, le manifestaron que la capturaban por "otras cositas que le habían salido en la investigación que ya se tenía sobre ella", sin brindar explicaciones ni presentar orden escrita para su restricción.

Agrega que la procesada solicitó a sus familiares que entregaran a los agentes el oficio donde constaba que se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas a la detención, quienes al recibirlo exteriorizaron desconocer su contenido y procedieron a destruirlo, trasladando a la señora PC a la delegación policial de Conchalío en el Puerto de La Libertad, donde al consultar los motivos de su detención manifestaron que se le atribuía el delito de agrupaciones ilícitas, siendo puesta a la orden del Juez Especializado de Instrucción C-3 de San Salvador, bajo la referencia 3C-36-2022 (6), por lo que afirma que se trata del mismo ilícito por el cual se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas en el proceso penal inicialmente referido, vulnerándose la garantía de prohibición de doble juzgamiento, pues estima que en el presente caso se cumple con la identidad de sujetos, objeto y causa.

En razón de lo anterior, considera que a la señora PC se le han vulnerado los derechos a la libertad, debido proceso, audiencia, defensa y seguridad jurídica, por tal razón solicita hábeas corpus y se decrete su libertad.

II. Mediante resolución del 24 de abril de 2023, se previno al peticionario para que especificara a este tribunal:

i) cuál es la autoridad que considera responsable de la vulneración a la prohibición de doble juzgamiento, debiendo describir los hechos por los que se acusa a la señora PC en cada uno de los procesos judiciales a los que se refiere, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

ii) si ha expuesto los reclamos que indica ante los jueces encargados de su procesamiento, es decir, tanto en primera instancia como en apelación y, si es el caso, casación, debiendo expresar cuáles, en qué fechas y las respuestas obtenidas, si fuere el caso, e incorporar la documentación que lo acredite;

iii) en qué estado se encuentran las causas penales que relaciona, qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos, en

caso que se le haya impuesto alguna medida cautelar a partir de la última detención realizada, señale si tiene algún cuestionamiento constitucional respecto a la decisión judicial sobre su libertad.

La aludida decisión fue notificada el día 13 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado *********, a favor de la señora *ASPC*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

948-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Juan Manuel Chávez, en contra el Juez Especializado de Instrucción de San Salvador –sin especificar cuál–, a favor del señor *MJEV*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante señala que el señor *EV* fue detenido el 29 de mayo de 2022, en su casa de habitación ubicada en cantón **********, municipio de Tonacatepeque, San Salvador y se encuentra cumpliendo detención provisional en el Centro Penal de Izalco.

Manifiesta que su representado trabaja como vigilante en la finca **********, situada en el municipio de San Martín, no tiene tatuajes alusivos a pandillas en su cuerpo ni pertenece a esos grupos delictivos. Agrega que el referido imputado padece de gastritis y cálculos en las vías urinarias, por lo que solicita hábeas corpus a su favor.

II. 1. Mediante resolución del 17 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) aclare a qué se refiere con señalar que el señor *MJEV* padece "de gastritis y cálculos en las vías urinarias", y si tiene algún reclamo que plantear al respecto, en cuyo caso deberá especificarlo, debiendo indicar si al momento de la captura estaba diagnosticado con alguna enfermedad y cuál tratamiento médico tenia indicado; lo cual deberá acompañar de una copia legible e íntegra de la documentación médica que respalde sus afirmaciones con relación a este punto;

iii) indicar si ello ha sido expuesto ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta obtenida, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

iv) si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, ante qué autoridad, qué resolvió y cuáles han sido las conclusiones de dicho estudio;

v) indique si se ha solicitado la revisión judicial de la misma con base en los argumentos que expone a esta sede y qué decidió el juez penal;

vi) especifique el estado actual de la causa penal seguida en contra del imputado y la condición en que se encuentra respecto a su libertad personal, debiendo manifestar si continúa cumpliendo la medida cautelar cuestionada y en qué lugar.

La aludida decisión le fue notificada el 31 de mayo de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *MJEV*, al no haberse evacuado lo prevenido por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

456-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MEA, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *JJSA*.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante señala que el señor SA fue detenido por agentes policiales el día 1 de abril de 2022, cuando venía de cobrar su sueldo en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, quienes al solicitar su documento único de identidad –el cual no portaba– empezaron a golpearlo y lo acusaron de prófugo de la justicia.

Afirma que el privado de libertad trabaja en la Cooperativa Nueva Esperanza del cantón ********** y realizaba actividades agrícolas, siendo el que ayuda económicamente al hogar, además menciona que fue llevado a las bartolinas ubicadas en el centro de gobierno de Usulután pero luego fue trasladado al "Penal de Izalco", según un listado que le proporcionaron en la sede policial. Señala que fue capturado erróneamente en el marco del régimen de excepción, por el delito de "agrupaciones terroristas" pero que nunca ha tenido problemas con nadie, no tiene antecedentes penales.

Agrega que cuando su hermano tenía dos años de edad tuvo una caída y desarrolló un problema del habla, por lo que adolece de una "incapacidad". Por lo anterior considera que existe una restricción arbitraria y solicita hábeas corpus a su favor.

II. 1. Mediante resolución del 25 de noviembre de 2022, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) en qué consiste la discapacidad que, afirma, padece el detenido y si al respecto pretende exponer algún reclamo, de ser así, debe especificarlo, detallando a qué autoridad se lo atribuye y por qué estima que vulnera sus derechos constitucionales tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si al momento de la detención el señor SA, este presentaba alguna condición médica vulnerable o enfermedad relacionada con su discapacidad y, en caso afirmativo, indique cuál es el diagnóstico determinado por el médico respectivo, así como el tratamiento y medicamentos prescritos, lo que deberá acreditar con una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) si en atención a la discapacidad que alude, se ha requerido un trato especializado a favor del privado de libertad en el lugar en el que se encuentra recluido, de ser así, ante qué autoridad se hizo y qué se resolvió sobre ello;

iv) si pretende reclamar de los golpes sufridos al momento de su captura, detallando a qué autoridad los atribuye, qué tipos de golpes recibió, en qué contexto ocurrieron y si tuvieron repercusiones en su integridad personal;

v) si sus reclamos han sido expuestos ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

vi) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor SA, por qué delito, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa penal;

vii) cuáles son las autoridades que demanda y los reclamos en concreto que les atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante, vía electrónica el 30 de noviembre de 2022, tal como consta en el expediente y si bien la peticionaria remitió un correo electrónico a esta sede, el 7 de diciembre de 2022, con el nombre "HC 456-2022 SUBSANANDO PREVENCIONES", al cual anexó copia de la esquela de notificación, no adjuntó ningún escrito en el que evacuara las prevenciones efectuadas por este tribunal. Así, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que

transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, consecuentemente, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declarar inadmisible su petición.

Se aclara que la referida decisión implica el rechazo de la petición por motivos formales, de ahí que la interesada tiene expedita la posibilidad de dar inicio a un nuevo proceso de hábeas corpus, en cuyo caso, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para habilitar su control (inadmisibilidad de 8 de diciembre de 2017, hábeas corpus 277-2017).

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JJSA*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA —H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

630-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cincuenta minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado JMC, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, a favor del señor *HETC*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario alega que la detención provisional en la que se encuentra el señor *TC* es ilegal e injusta, en razón de que fue capturado el 12 de junio de 2022, mientras se encontraba con su familia en su vivienda ubicada en colonia La Chacra, Ahuachapán, por agentes policiales quienes no contaban con orden de registro ni de captura y solamente dijeron que se lo llevarían detenido por el régimen de excepción ordenado por el gobierno.

Afirma que su representado no posee tatuajes alusivos a pandillas, ni se encontraba haciendo nada ilícito al momento de su captura, además presenta una serie de documentación con la que pretende acreditar los arraigos del mismo, por tal razón pide hábeas corpus a favor del citado señor.

II. Mediante resolución del 17 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando actuación u omisión específica, la autoridad a la que lo atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) cuándo se celebró la audiencia especial de imposición de medidas, especificando ante qué autoridad se llevó a cabo la misma;

iii) a qué se refiere cuando expresa que la policía capturó al señor TC en su vivienda sin contar con orden de registro; asimismo, si pretende proponer un reclamo relacionado con ello, debe aclarar de qué manera la actuación que señala se encuentra vinculada con la decisión de privarlo de su libertad;

iv) si el reclamo anterior ha sido planteado ante la autoridad que conoce del proceso penal –incluso a través de los medios impugnativos previstos por la ley– y, de ser así, deberá expresar qué alegó, en qué fecha y cuál fue la respuesta brindada, adjuntando la documentación donde se respalden sus afirmaciones;

v) el estado actual de la causa penal y el lugar donde se encuentra recluido.

La aludida decisión le fue notificada el 7 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *HETC* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

899-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora FMGT, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *JETG*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La solicitante señala que su hijo *JETG*, fue detenido el 26 de abril de 2022, en su vivienda ubicada en el cantón **********, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, por agentes policiales, quienes se presentaron a su casa de habitación "con violencia, entraron a la casa sin pedir permiso, no pidieron ningún tipo de documentación [...] golpearon a mi hijo [..], lo esposaron y se lo llevaron", sin que le hayan manifestado los motivos de la detención.

Sobre ello, afirma que el señor TG trabaja como electricista y también realiza actividades agrícolas, alegando que su detención es arbitraria e ilegal pues no existe fundamento para ella y está basada solamente en percepciones subjetivas de sus captores, por ello pide hábeas corpus a su favor.

II. 1. Mediante resolución del 24 de mayo de 2023, se previno la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) a qué se refiere cuando expresa que la policía, sin pedir permiso, entraron a la casa donde se encontraba el señor *TG*, aclarando si se refiere a la falta de orden de captura o de allanamiento; asimismo, si pretende proponer un reclamo relacionado con ello, debe aclarar de qué manera las actuaciones que señala se encuentran vinculadas con la decisión de privarlo de su libertad;

iii) manifieste si lo anterior ha sido reclamado ante el juez de la causa penal que se instruye en contra del detenido, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iv) describa el contexto y los golpes que afirma recibió el señor *TG*, si los mismos le han generado alguna consecuencia en su salud y si tales hechos se hicieron del conocimiento del juez penal que tramita la causa;

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor *TG*, por qué delito, si le han impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa y el lugar donde se encuentra recluido.

2. La aludida decisión le fue notificada a la señora GT, vía electrónica, el día 8 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la señora FMGT, a favor del señor *JETG*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

En virtud de la pandemia por el Covid-19, a fin de evitar su movilización a esta sede judicial, se advierte que cualquier documentación relacionada al presente proceso la remita a través del correo institucional sala.constitucional@oj.gob.sv.

589-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado HAVL, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil y el Director General de Centros Penales, a favor del señor *WERL*.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario refiere que el señor *RL* fue capturado aproximadamente a las seis de la mañana (no señala fecha), frente a su domicilio en cantón **********, municipio de San Martín, cuando se dirigía a trabajar. Sobre ello expone que elementos policiales "sin mediar palabra lo introdujeron violentamente a la unidad policial" y que, desde ese instante, su madre, la señora SERL, no ha sabido nada de su situación legal.

Afirma que el referido señor se graduó como bachiller general, con lo cual queda demostrado "que no es un vago". Además, manifiesta que aquel colabora con la manutención del hogar y carece de antecedentes penales. Por ello y en razón de que se desconoce a cuál "Tribunal de los Especializados lo han remitido", pide hábeas corpus para que se constate la arbitrariedad cometida en perjuicio del señor *RL*.

II. 1. Mediante resolución del 29 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es la autoridad que demanda en el presente proceso constitucional y los reclamos concretos que le atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) realice una narración precisa de los hechos en cuyo contexto ocurrió la detención del señor RL, especificando, el día y la hora –al menos aproximadamente–;

iii) las razones por las que estima que se ha cometido una "arbitrariedad" en contra del señor *RL*;

iv) si pretende plantear un reclamo sobre la falta de información de la detención, en cuyo caso deberá indicar si ha acudido ante instituciones o autoridades a obtener datos respecto del paradero y situación jurídica del detenido, qué ha solicitado, en cuáles fechas y qué respuestas ha obtenido, adjuntando la documentación que acredite sus afirmaciones;

v) si el privado de libertad ha sido puesto a la orden de alguna autoridad judicial, en cuyo caso debe señalar si los anteriores reclamos han sido expuestos ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de él, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo presentar el respaldo documental respectivo;

vi) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor WERL, por qué delito, si le han impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa y en qué centro de reclusión se encuentra detenido actualmente o si fue puesto en libertad.

2. La referida prevención fue notificada al solicitante el 13 de junio del año en curso mediante el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia, según consta en acta agregada al expediente. Por tanto, se tiene que efec tivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado HAVL a favor del señor *WERL* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*

"""""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

En virtud de la pandemia por el Covid-19, a fin de evitar su movilización a esta sede judicial, se advierte que cualquier documentación relacionada al presente proceso la remita a través del correo institucional sala.constitucional@oj.gob.sv.

625-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MIMM, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *NARD*.

I. La solicitante, quien refiere ser compañera de vida del señor *RD*, señala que este fue capturado por agentes policiales el 11 de junio de 2022, en su vivienda, sin que se encontrase cometiendo ningún delito. Refiere que el citado señor se encontraba con medidas distintas a la detención provisional "presentándose a firma" al Departamento de Prueba y Libertad Asistida y que "por tener registro policial" es que se lo detuvieron. De ahí que, bajo el entendido de que existe un doble juzgamiento, solicita hábeas corpus a su favor.

II. 1. Mediante resolución del 24 de mayo de 2023, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) a qué se refiere cuando señala que el señor *RD* está bajo medidas distintas a la detención provisional "presentándose a firma" al Departamento de Prueba y Libertad Asistida. Es decir deberá aclarar si el mismo tiene la calidad de procesado o condenado, señalando el delito y a la orden de qué autoridad se encuentra;

iii) si pretende proponer un reclamo relacionado con la prohibición de doble juzgamiento, en cuyo caso, deberá indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, a la autoridad que considera responsable y realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa en cada uno de los procesos judiciales, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

iv) si lo anterior ha sido alegado ante las autoridades judiciales correspondientes, manifestando –de ser el caso– en qué fecha y cuál ha sido la respuesta otorgada;

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor *RD*, por el que fue capturado el 11 de junio de 2022, por qué delito, el estado actual de la causa, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, si tiene algún cuestionamiento constitucional sobre ella y en qué centro de reclusión se encuentra detenido actualmente el citado señor o si ha sido puesto en libertad.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante el 30 de mayo del año en curso, de forma personal, según consta en acta agregada al expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *NARD*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

292-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción "B" de San Salvador, a favor de la señora *KJGO*, procesada por el delito de extorsión agravada.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante manifiesta que se intentó citar a la señora *GO* en la dirección proporcionada por la fiscalía pero el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos no lo pudo llevar a cabo por falta de datos y además, su representada a esa fecha ya era del domicilio de Atiquizaya, Ahuachapán. Es así que la audiencia de imposición de medidas cautelares se realizó el 29 de julio de 2013 con los imputados presentes, dejando la situación jurídica de su clienta para otra audiencia, previa cita a través de edictos judiciales, los cuales se publicaron los días 20, 21 y 22 de agosto de 2013; por lo que ante la ausencia de aquella en la audiencia fijada para el 17 de septiembre de 2013, se le declaró rebelde, se decretó la detención provisional y se giró la orden de captura.

Agrega que se hizo una segunda publicación de edictos para citar a la señora *GO* a la audiencia preliminar fijada para el 22 de noviembre de 2013, por lo que las publicaciones fueron los días 13, 14 y 15 de noviembre

de 2013; no obstante dicha audiencia se suspendió y se señaló el 13 de enero de 2014, fecha para la cual su clienta no fue citada, dando como resultado la apertura a juicio para los imputados presentes.

Al respecto sostiene que se vulneró el debido proceso y el derecho de libertad física porque a su defendida no se le permitió estar presente en el Juzgado Especializado de Instrucción "B" de San Salvador, a pesar de haber sido citada por edictos porque estos no garantizan que se diera cuenta de que estaba siendo requerida por la autoridad judicial; por lo que solicita hábeas corpus para que quede sin efecto la orden de captura y la imputada pueda ser procesada en libertad.

II. 1. Mediante resolución del 17 de mayo 2023, se previno al peticionario para que aclarara a este tribunal ciertos aspectos incompletos de su petición.

La aludida decisión le fue notificada el 5 de junio de 2023, por el medio señalado para tal efecto, según consta en acta agregada a folio 8 del presente expediente.

2. El licenciado ********* presentó escrito, el día 5 de julio de este año, manifestando desistir del hábeas corpus promovido a favor de *KJGO* dado que ya no es su abogado defensor en el proceso penal.

3. El solicitante, entonces, ha desistido de su requerimiento de hábeas corpus y ha presentado su escrito extemporáneamente sin contestar la prevención, por tanto, la solicitud de hábeas corpus debe declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de la señora *KJGO*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

392-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, contra actuaciones de los magistrados de la Sala de lo Penal, a favor del señor *JEMC*, procesado por los delitos de robo agravado y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante alega que a su representado le fue decretada la detención provisional en audiencia inicial celebrada el día 16 de julio de 2019, por el Juez Primero de Paz de Metapán, sin que se haya resuelto su situación jurídica, y encontrándose el proceso ya en la Sala de lo Penal por haberse recurrido en casación; por lo que se ha excedido el plazo legal máximo para la detención provisional pues ha transcurrido más de veintisiete meses con dieciséis días privado preventivamente de libertad.

II. Mediante resolución del 26 de abril 2023, se previno al peticionario para que aclarara a este tribunal ciertos aspectos incompletos de su petición.

La aludida decisión le fue notificada el 14 de junio de 2023, por el medio señalado para tal efecto, según consta en acta agregada a folio 32 del presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JEMC*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

121-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, a su favor por el señor *TAME*.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario refiere que fue condenado por la autoridad que demanda a la pena de sesenta y cinco años de prisión, misma que se encuentra firme y ejecutoriada.

Manifiesta promover "juicio de demanda de inconstitucionalidad" porque considera que con la pena total impuesta no se respeta el Art. 27 incs. 2º y 3º de la Constitución (Cn), donde se prohíben las penas perpetuas y en su lugar se le deja de manera indefinida en prisión, vulnerando el principio de razonabilidad y desnaturalizando el espíritu mismo de rehabilitación y reinserción social, atentando así contra los principios de dignidad humana, legalidad e igualdad.

Considera además que ello transgrede los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que El Salvador ha suscrito.

En consecuencia, pide que se modifique la cuantía de la pena máxima a veinte años de prisión y se declare inconstitucional el artículo 45 numeral 1º del Código Penal (CP), para que todo gobernado tenga la oportunidad de una reinserción social y rehabilitación.

II. 1. Mediante resolución del 27 de marzo de 2023, se previno al peticionario para que señalara:

i) cuáles son los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuaciones u omisiones concretas–, las autoridades a las que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) cuál de los dos tribunales de sentencia de Santa Tecla emitió la condena en su contra (primero o segundo), así mismo, determine el delito o los delitos por los cuales fue condenado, especificando por cada uno las penas impuestas;

iii) respecto de los años de prisión que deberá cumplir, manifieste si la vulneración constitucional que expone ha sido reclamada ante el juez que lo condenó o ante el que supervisa su condena, inclusive a través de los medios impugnativos previstos en la ley, en qué fecha y cuál fue la respuesta obtenida;

iv) desde qué fecha se declaró firme la condena que cumple y a cargo de cuál juzgado de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena se encuentra;

v) si ha solicitado la adecuación de su pena, en qué fecha y cuál fue la respuesta que obtuvo, así como el resultado del cómputo respectivo o rectificación de la misma –de haberse realizado– y de ser posible adjuntar copia de este y de la sentencia condenatoria.

2. La referida prevención fue notificada al solicitante de manera personal el día 28 de abril de 2023, según consta en acta agregada a folios dieciocho de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el señor *TAME*, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—""

1738-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor JMDR, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *GADM*.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante refiere que su hijo, el señor DM, fue capturado el 23 de junio de 2022, en la 4ª Calle Oriente N° 3 y 18 Avenida Sur, municipio de San Salvador, por agentes policiales del 911, siendo acusado del delito de agrupaciones ilícitas. Al respecto, alega que dicha detención es arbitraria y basada en percepciones subjetivas de sus captores pues su hijo no ha cometido ningún delito, ni ha pertenecido a grupos terroristas, tampoco posee tatuajes alusivos a pandillas (solo artísticos), tiene un negocio propio de comida rápida y de pizzas, siendo el caso que los agentes policiales actuaron sin tener orden de captura, por ello, pide hábeas corpus a su favor.

Agrega que su hijo "es quebrado de la mano derecha" y está detenido y "desaparecido", pues desde su captura no saben nada de él, lo que provoca temor sobre su estado de salud, ya que el citado señor además tiene "deficiencias físicas en su cuerpo".

II. 1. Mediante resolución del 22 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) los reclamos concretos que desea plantear ante este tribunal –tomando en cuenta los derechos tutelados por medio del hábeas corpus– y las autoridades a quienes se los atribuye;

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si pretende cuestionar la falta de información sobre la situación del detenido, debe señalar ante qué instituciones o autoridades ha acudido a obtener datos al respecto, qué ha solicitado, en qué fechas y qué respuestas ha obtenido;

iii) a qué se refiere con señalar que el señor *DM* tiene "deficiencias físicas de su cuerpo", si tiene algún reclamo que plantear al respecto, en cuyo caso deberá especificarlo, debiendo indicar si al momento de la captura estaba diagnosticado con alguna enfermedad o discapacidad y si tenía indicado algún tratamiento médico o terapia; lo cual deberá acompañar de una copia legible e íntegra de la documentación médica que respalde sus afirmaciones con relación a este punto;

iv) si los anteriores reclamos han sido expuestos ante alguna autoridad –encargada del lugar de detención del privado de libertad o ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra–, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta obtenida, debiendo incorporar la documentación que lo acredite, si lo tuviere;

v) si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, ante qué autoridad, qué resolvió y cuáles han sido las conclusiones de dicho estudio;

vi) indique ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal, por qué delito, si le han impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa penal, precisando en qué centro de reclusión se encuentra el señor *DM*, si lo supiere.

2. La aludida decisión le fue notificada al solicitante, vía electrónica, el día 12 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el señor DR se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

3. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las me-

didas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el señor JMDR, a favor del señor *GADM* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

1746-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora JOM, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *CEAO*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La solicitante, quien refiere ser madre del señor *AO*, señala que este fue capturado por agentes policiales el día 14 de junio de 2022, en su vivienda ubicada en Santa Tecla, departamento de la Libertad, por el delito de agrupaciones ilícitas, estando presumiblemente detenido en la Penitenciaría Central la Esperanza. Al respecto, alega que dicha detención es arbitraria e ilegal pues su hijo no ha cometido ningún delito, además que los agentes de autoridad actuaron sin tener orden de detención escrita.

Agrega que el citado señor "ha sufrido una intervención quirúrgica en su cuerpo; necesitando en este momento de atenciones médicas, clínicas y hospitalarias; por lo cual se encuentra en peligro su vida". Por ello, solicita hábeas corpus a su favor.

II. 1. Mediante resolución del 24 de mayo de 2023, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuyen y por qué razón considera que actualmente está vulnerando los derechos tutelados mediante el hábeas corpus –libertad física y/o integridad personal–;

ii) qué tipo de intervención quirúrgica se le ha realizado al señor AO y en qué consisten las atenciones médicas, clínicas y hospitalarias que requiere; debiendo adjuntar la documentación médica que respalde el diagnóstico, el tratamiento o curaciones, las citas o exámenes prescritos;

iii) si se ha hecho del conocimiento de las autoridades penitenciarias a cargo del privado de libertad su situación de salud y si ellas han incurrido en alguna vulneración constitucional;

iv) si ha planteado solicitudes concretas, en relación con la situación de salud mencionada –intervención quirúrgica que requiere de ciertas atenciones médicas–, tanto a las autoridades que conocen del proceso penal como a quienes tienen bajo custodia al procesado; qué le han contestado y por qué lo estima contrario a los derechos fundamentales del procesado protegidos mediante el hábeas corpus;

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor AO, por qué delito, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa penal y si se le han hecho de su conocimiento los reclamos señalados con anterioridad, debiendo detallar en qué fechas y cuál ha sido la respuesta brindada, incorporando la documentación que acredite sus afirmaciones.

2. La aludida decisión le fue notificada a la solicitante, vía electrónica, el día 12 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la señora Molina se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

3. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la señora JOM, a favor del señor *CEAO* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

1922-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ACAM, contra el Juez Especializado de Instrucción "C-3" de San Salvador y a favor del señor *VEMR*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. La solicitante, quien afirma ser cónyuge del señor *MR*, señala que este fue capturado en el año 2022 y que en audiencia especial de imposición de medidas cautelares el Juez demandado decretó detención provisional en su contra sin que existiesen elementos de convicción que determinaran de forma indiciaria que el citado señor perteneciera a una estructura terrorista. Al respecto señala que la representación fiscal solicitó la imposición de la detención provisional presentando como indicios; *i)* acta de captura, *ii)* ficha delincuencial, *iii)* perfil delincuencial, *iv)* acta de lectura de derechos, *v)* hoja de chequeo clínico donde consta el estado de salud al momento de su detención y *vi)* acta de entrevista de agentes captores; sin embargo la detención provisional impuesta carecía de la fundamentación de los presupuestos procesales para su imposición.

Aunado a ello afirma que su cónyuge padece hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia mixta y obesidad mórbida, enfermedades que están bajo control médico, siendo el caso que el juez de la causa no verificó el estado de salud del detenido en relación con el hacinamiento, lo cual puede provocarle un deterioro en su salud.

II. 1. Mediante resolución del 31 de mayo de 2023, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que actualmente está vulnerando los derechos tutelados mediante el hábeas corpus –libertad física y/o integridad personal–;

ii) si pretende exponer alguna queja relacionada con el estado de salud del detenido, en cuyo caso debe indicar cuál es su cuestionamiento específico y a qué autoridad se lo atribuye, debiendo determinar cuál era el diagnóstico médico de aquél al momento de su captura, así como detallar si el detenido necesita algún medicamente o control en razón de sus padecimientos, lo que deberá acreditar con una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) si ha efectuado ante alguna autoridad –penitenciaria o judicial– peticiones a favor del enjuiciado respecto al ingreso de medicamentos, práctica de exámenes, traslado a consultas y/o cuidados médicos especiales, de ser así, indique el contenido de estas, a quién lo solicitó y las decisiones emitidas al respecto; agregando la documentación que respalde sus afirmaciones;

iv) si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió y las conclusiones de dicho estudio, debiendo agregar la documentación que lo acredite si la tuviere;

v) si se informó al juez de la causa sobre la condición de salud del señor MR y si esto fue tomado en cuenta en el análisis de la medida cautelar, debiendo detallar por qué afirma que no se configuran los elementos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora de la detención provisional ordenada en contra del imputado, así como agregar copia de la decisión en la que consten los argumentos de la detención provisional y de la hoja de chequeo clínico –si pudiere–;

vi) si ha presentado solicitud de revisión de medida cautelar o recurso de apelación de la decisión que impuso la detención provisional, de ser así en qué fechas y qué ha respondido la respectiva autoridad;

vii) cuál el estado actual del proceso seguido contra el señor *MR* y en qué centro de detención se encuentra o si fue puesto en libertad.

2. La aludida decisión le fue notificada a la solicitante, vía electrónica, el día 8 de junio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

3. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la señora ACAM, a favor del señor *VEMR*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

2029-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con quince minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora BEDM, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *MAG*.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante refiere que el señor *G* fue capturado el 22 de septiembre de 2022, en Santiago de María, Usulután. Según señala, agentes policiales le solicitaron su documento de identidad pero no lo portaba ya que, por el estado crítico de salud en que se encuentra, "pierde los documentos"; además, afirma que se lo llevaron para investigarlo pero al preguntar por él en

las bartolinas del Centro de Gobierno de Usulután, les manifestaron que estaba detenido por colaborar con las pandillas "lo cual es totalmente falso".

Indica que el privado de libertad fue trasladado para el penal de Ilopango, el 26 de septiembre de 2022, pero que ese mismo día lo regresaron a las bartolinas pues su estado de salud era "bastante crítico". Al respecto, señala que "unas personas conocidas" lo vieron mientras lo ingresaban "en estado de gravedad" al Hospital Nacional San Pedro de Usulután, sin embargo al preguntar por su cuñado en las bartolinas "no le dan referencia".

Manifiesta que el señor G estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico, debido a algunas adicciones, por eso "tiene crisis de ansiedad y depresión severa" lo cual le produce "ataques de pánico constantes", siendo necesario que permanezca en control médico.

Relata que en el año 2019, mientras se encontraba en una parada de buses con otras personas para vender sus productos, una patrulla policial los detuvo por "asociaciones ilícitas", sin embargo solo estuvo detenido "setenta y tres horas" y fue liberado ya que no había pruebas de la causa de su detención.

Expone que el referido señor tiene tres hijos menores de edad, que es una persona trabajadora, respetuosa, dedicada a su trabajo, nunca ha estado involucrado con grupos terroristas, ni posee tatuajes alusivos a la pandilla, por lo que considera su detención arbitraria e injusta.

II. 1.Mediante resolución del 23 de diciembre de 2022, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) especificar cuál es la autoridad que demanda en el presente proceso constitucional y los reclamos concretos que le atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus.

ii) señale en qué consiste el tratamiento y medicamentos determinados por los médicos respectivos para las enfermedades que, según afirma en su petición, padece su cuñado, lo cual deberá acompañar de una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) determine si pretende proponer un reclamo sobre la desatención de la salud de su cuñado aclarando, de ser el caso, si durante la detención alguna autoridad –indicando cuál– se ha negado o ha impedido que se ingrese la medicina prescrita, se realicen chequeos o se le proporcione los tratamientos hospitalarios correspondientes, detallando las circunstancias concretas;

iv) manifieste si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió y las conclusiones de dicho estudio;

v) detalle si pretende reclamar sobre que "no le dan referencia" y "no le avisaron", indicando a qué autoridad lo atribuye y las fechas en las cuales se le ha negado la información;

vi) indique si los reclamos propuestos han sido expuestos ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta para cada uno de ellos, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

vii) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal, por qué delito, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa penal e indique si continúa en el mismo centro de reclusión que señala, o en su defecto qué autoridad se ha negado a proporcionarle tal información, indicando las fechas de las solicitudes hechas al respecto.

La referida prevención fue notificada a la solicitante en el medio electrónico señalado para tal efecto el 13 de enero de 2023, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *MAG*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

1918-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora FERB, en contra de Juez Especializado de Instrucción A4 de San Salvador, a favor del señor *JFDM*.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante refiere que su esposo fue procesado, en el Juzgado Especializado B de Instrucción de San Salvador, bajo la referencia 61-b-2019-4, siendo absuelto mediante sentencia que no fue recurrida por fiscalía, por lo que fue declarada firme; sin embargo, afirma que el 14 de julio de 2022 fue capturado en su domicilio por el mismo delito. Señala que en la audiencia especial de imposición de medidas cautelares se le decretó detención provisional, siendo que en la petición fiscalía solo se detalló que su captura se debió al antecedente de agrupaciones ilícitas por el que fue absuelto.

Por lo anterior, estima que se está invocando una causa fenecida, ya que en la resolución no se le señala como miembro o colaborador, sino solo el antecedente por el que fue absuelto, motivo por el que considera ilegal la restricción de libertad que le fue impuesta.

II. 1. Mediante resolución del 21 de junio de 2023, se previno a la peticionaria para que expresara:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) por qué sostiene que en este caso acontece una vulneración a la prohibición de doble juzgamiento, debiendo indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, a la autoridad que considera responsable y realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa en cada uno de los procesos judiciales, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

iii) indicar si la vulneración constitucional –doble persecución– alegada en este hábeas corpus fue planteada a los jueces encargados de su procesamiento, incluyendo los mecanismos recursivos, debiendo expresar en qué consistieron los cuestionamientos y qué respuesta obtuvieron de cada autoridad o si existe alguno pendiente de resolver e incorporar la documentación que lo acredite; y

iv) señale en qué estado se encuentran los procesos penales que relaciona, qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos –debiendo detallar fechas, autoridades y decisiones– y en qué lugar se encuentra actualmente recluido.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante vía electrónica el 17 de julio de 2023, según consta en acta agregada al expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JFDM*, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

918-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con veinte minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de habeas corpus ha sido promovido por el señor ASSA, en contra del Director de la Policía Nacional Civil y del Juez Especializado de Instrucción "A2" de San Salvador, a favor del señor *CMME*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario refiere que el señor ME fue detenido el 7 de junio de 2022, en su vivienda ubicada en San Juan Opico, departamento de La Libertad, por agentes policiales, a quienes les expresó que había sido procesado por el delito de homicidio y les mostró la orden de libertad. Sin embargo, lo capturaron sin dar mayor explicación, limitándose a indicar que lo trasladarían a la delegación para "hacer un papeleo". Posteriormente su esposa supo, mediante redes sociales, que aparecía como miembro de la

"pandilla MS", lo cual —asegura— no es cierto porque él es un hombre trabajador y en su tiempo libre es presidente de un club de motociclistas que ayuda a los más necesitados.

Asimismo, refiere que el detenido tenía aproximadamente ocho años de haber cumplido "su condena", por lo que su restricción constituye una violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Sostiene que en audiencia de imposición de medidas la autoridad judicial demandada le decretó detención provisional, pese a que presentó arraigos, y no valoró que dicha persona había sido detenida de forma arbitraria e ilegal, ya que los agentes policiales no tenían orden de captura vigente y no estaba cometiendo ningún delito.

Finalmente alega que al señor ME se le ha vulnerado el principio de legalidad al ser procesado en una sede judicial creada "con posterioridad a la entrada del régimen", lo que riñe con lo establecido en el art. 15 de la Constitución, porque los jueces ad hoc no son jueces naturales.

II. Mediante resolución del 4 de julio de 2023, se previno al peticionario para que especificara a este tribunal:

i) si cuando menciona que "nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa", pretende plantear algún reclamo referido a la prohibición de doble juzgamiento, en cuyo caso tendrá que indicar la autoridad que considera responsable de tal vulneración, debiendo describir los hechos por los que el detenido es acusado en cada proceso judicial que ha referido, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos -personas, objeto de persecución y causa de persecución-;

ii) indique si ha expuesto el reclamo que propone ante la autoridad judicial correspondiente y -de ser el caso- en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, a lo cual deberá incorporar la documentación que lo acredite;

iii) si se le ha impuesto alguna medida restrictiva de la libertad y si se encuentra pendiente la tramitación de algún medio impugnativo contra esa resolución; debiendo especificarlo;

iv) por qué razón vincula la última captura del señor ME con la entrada en vigor del régimen de excepción;

v) señale en qué estado se encuentran los procesos penales que relaciona, qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos -detallando fechas, autoridades y decisiones- y en qué lugar se encuentra actualmente recluido.

La aludida decisión fue notificada el día 13 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspec-

tos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declarase* inadmisible la petición de habeas corpus planteada por el señor ASSA a favor del señor *CMME*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

216-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado WAAZ, en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal, a favor de los señores *RVMB, EOUM y CIUM*, procesados por el delito de extorsión agravada.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario refiere que a los señores *RVMB y EOUM* se les impuso la detención provisional el 30 de enero de 2018, siendo ampliado tal periodo por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente por doce meses más, en auto de 12 de febrero de 2020; sin embargo, afirma que la sentencia no se encuentra firme por encontrarse el proceso en la Sala de lo Penal en razón del recurso de casación interpuesto, habiéndose superado el límite máximo de treinta y seis meses que establece el artículo 8 del Código Procesal Penal (CPP). Además, señala que han transcurrido más de dos años sin que se defina la situación jurídica del señor *CIUM*.

II. Mediante resolución del 29 de mayo de 2023, se previno al peticionario para que señalara:

i) cuándo se le decretó la detención provisional al imputado *CIUM* y por qué autoridad;

ii) si se ha prorrogado por alguna autoridad judicial la prisión preventiva, según lo regulado en el art. 8 CPP., en qué fecha y cuándo termina la ampliación;

iii) el estado actual del proceso penal y la condición de los justiciables respecto a su derecho de libertad personal, debiendo manifestar si continúan cumpliendo la medida cautelar cuestionada y;

iv) si la Sala de lo Penal ha resuelto la casación interpuesta, cuándo y qué tipo de decisión ha pronunciado.

La referida prevención fue notificada al solicitante por el medio electrónico señalado para tal efecto, el 8 de junio de 2023; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado WAAZ, a favor de los señores *RVMB, EOUM y CIUM,* al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

270-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido en contra del Juez de Instrucción de San Luis Talpa y los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, a su favor por el señor *MARR*, condenado por el delito de violación en menor e incapaz agravada continuada.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario refiere que el día 18 de septiembre de 2020 fue condenado a la pena de veinte años de prisión por el delito antes mencionado, decisión que está firme y fue fundamentada en la declaración anticipada de la víctima realizada en cámara Gesell, sin la comparecencia del señor *RR*, es decir, sin contemplar las reglas de la vista pública aplicables a

dicho acto, no obstante este es parte en la misma; manifiesta que el juez instructor debió asegurarse que dicho testimonio se recibiera con su presencia y el juez de sentencia debió advertir que no participó en la misma, aún y cuando se contó con la defensa técnica tanto en ese acto como en el juicio, por lo que considera que no tenía que valorarla.

Con ello considera que dichas actuaciones judiciales vulneran el derecho de seguridad jurídica con relación al principio de legalidad –al inobservarse la necesidad de su comparecencia a fin de ejercer su derecho de defensa material–, así como el derecho de defensa en función del deber de motivación respecto al que debe cerciorarse que las razones expuestas se hagan a partir de elementos de pruebas revestidos de suficiente legalidad.

II. Mediante resolución del día 23 de junio de 2023, se previno al peticionario para que aclarara:

i) si fue convocado a la declaración anticipada de la víctima y las razones de su inasistencia, en caso negativo, expusiera los motivos del juez para no convocarlo;

ii) si en la referida declaración su abogado requirió su aplazamiento debido a la inasistencia del imputado y qué resolvió el juez;

iii) si había expuesto el reclamo que trasladaba a esta sala ante los jueces encargados de su procesamiento, es decir, tanto en la vista pública como en apelación y, si es el caso, casación, debiendo expresar en qué consistieron los cuestionamientos y qué respuestas había obtenido de cada autoridad;

iv) explicara por qué consideraba disminuido su derecho de defensa aun con la presencia de su defensor en la declaración de la víctima y en la vista pública, así como indique si pudo rebatir personalmente dicha prueba en la mencionada audiencia.

La referida prevención fue notificada al solicitante el 19 de julio de 2023 por uno de los medios proporcionados para tal efecto, según los folios 7 y 10; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el señor *MARR*, a su favor, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

387-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional ha sido promovido contra el Juez Décimo Quinto de Paz de San Salvador y una agente auxiliar del Fiscal General de la República perteneciente a la Unidad Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, por los abogados ********* y *********, a favor del señor *JLFS*, procesado por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en modalidad continuada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. Los solicitantes señalan que, el señor *JLFS* fue capturado por orden administrativa fiscal el 3 de noviembre de 2021, quedando a la orden de la autoridad judicial demandada quien decretó en su contra detención por el término de inquirir sin "controlar la actuación fiscal y sin realizar fundamento intelectivo", refieren que el juez aplicó de forma mecánica la detención y señaló audiencia inicial.

Argumentan que la orden de detención administrativa –a su criterio– fue emitida teniendo como único fundamento el dicho de la víctima sin corroborar con otros elementos periféricos, en consecuencia, carece de fundamentación y ha transgredido el principio de legalidad y garantía del debido proceso con incidencia en el derecho de libertad física del señor *FS*.

Agregan que el 3 de noviembre de 2021 en la red social twitter específicamente en la cuenta de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil fueron publicadas fotos del señor *FS* junto a otros sujetos bajo el epígrafe "agresores sexuales capturados", además constaba en dicha publicación el nombre completo de su defendido, con lo cual se ha vulnerado su presunción de inocencia y el derecho a la propia imagen debido a que no existe sentencia condenatoria firme en su contra, en consecuencia, solicitan se decrete como medida cautelar el cese inmediato y eliminación de la imagen y publicación de las cuentas oficiales de las instituciones mencionadas.

A su escrito adjuntaron copia simple del requerimiento fiscal, así como las capturas de pantalla de la red social twitter en la que supuestamente consta la imagen del procesado.

2. En su escrito del 10 de noviembre de 2021, el abogado *********, reafirma lo sostenido en la solicitud inicial y adjunta copia simple de la resolución por medio de la cual se decretó la detención por el término de inquirir.

3. Mediante resolución del 19 de mayo de 2023, se previno a los peticionarios que expresaran con precisión los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando actuación u omisión específica, la autoridad a la que lo atribuyen y por qué razón consideran que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) de qué manera inciden en los derechos objeto de protección de este proceso las publicaciones a las que hace referencia;

iii) indiquen si lo reclamado ha sido expuesto ante el juez de la causa que se instruye en contra del procesado –incluyendo los mecanismos de impugnación–, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

iv) en qué estado se encuentra el proceso penal, a la orden de qué autoridad judicial está el procesado, qué restricciones de libertad física existen en contra de este y el delito que a la fecha se le atribuye, de ser el caso.

4. La aludida decisión les fue notificada a los solicitantes, por el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia el 2 de junio de 2023, según consta a folio 23 y, dentro del término establecido para ello, mediante correo electrónico el abogado *********, remitió escrito en el que con relación a los cuestionamientos realizados por esta sede, señaló que:

a) El reclamo concreto es la violación a la garantía del debido proceso, en razón a que el juez de paz, no realizó el control judicial para determinar si se cumplían los requisitos legales para decretar la detención por el término de inquirir, sin que dicha privación de libertad haya sido motivada y justificada, ya que esta no puede ser utilizada de manera automática y mecánica.

b) En cuanto a la publicación de la fotografía del señor FS en la que se revela que había sido capturado como agresor sexual, sostiene que no está amparada por la libertad de expresión porque fue realizada por uno de los elementos coercitivos del Estado de Derecho, quien debe garantizar y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos, "por lo que al haber sido restringido de su libertad física el procedimiento que se efectúo vulneró su derecho de presunción de inocencia como su dignidad humana".

c) Indicó que lo reclamado en su solicitud fue expuesto ante el juez de paz "en su momento", sin embargo, desconoce si al juez de sentencia se le han hecho saber las afectaciones, debido a que fueron sustituidos en la fase de instrucción por voluntad del justiciable, en consecuencia, no subsana el romano iv) referido al estado actual del proceso.

III. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se hará referencia al envío de solicitudes y escritos por medio de correo electrónico a esta sala (IV), y luego se verificará lo prevenido (V).

IV. El escrito mediante el cual se pretende dar respuesta a la prevención fue enviado a través de correo electrónico; al respecto, esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio –auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020–.

V. De lo expresado por el peticionario en su escrito, se colige que no expresa de manera clara quien es o son las autoridades demandadas en este proceso, así como sus actuaciones u omisiones que les atribuye, sino que de manera genérica menciona que la orden de detención administrativa restringió el derecho de libertad física y que el juez de paz no fundamentó la detención por el término de inquirir vulnerando –a su criterio– el debido proceso, sin precisar los argumentos facticos de su reclamo y como esto afectaba los derechos tutelados en el hábeas corpus –libertad física o integridad personal– de la persona que se desea beneficiar, sobre todo porque tampoco aclara en que estado está el proceso.

En ese mismo sentido, el peticionario se limitó a reiterar lo relativo a las supuestas publicaciones realizadas en redes sociales del imputado omitiendo indicar de qué manera estas inciden en los derechos protegidos en este proceso constitucional.

Tampoco refirió las autoridades a quienes según expuso trasladó el reclamo realizado a esta sala, únicamente se limitó a referir, que sí lo había dado a conocer "en su momento"– sin adjuntar documentación que lo acreditara, ni siquiera la respuesta obtenida–, pero ignoraba si al juez de sentencia fue informado de las afectaciones. Dado que el imputado los sustituyó como defensores particulares, en ese sentido, tampoco se pronunció sobre la situación jurídica actual del mismo.

En razón de que persisten las deficiencias en la pretensión pues los aspectos prevenidos no fueron esclarecidos, los cuales son necesarios para dar trámite a su reclamo, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), declarar inadmisible su petición.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JLFS*, por no haberse subsanado en los términos requeridos por este tribunal los aspectos prevenidos.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

2081-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cinco minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MADQ, contra agentes de la Policía Nacional Civil y el Juez Especializado de Instrucción B-2 de San Miguel, a favor del señor *MDJQA*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La solicitante señala que es madre del señor *QA*, quien fue capturado el día 26 de abril de 2022, mientras se encontraba durmiendo en su vivienda ubicada **********, Jucuapa, Usulután, por agentes policiales, quienes expresaron que, en aplicación del régimen de excepción, se llevarían detenido a su hijo, sin que este perteneciera a ninguna estructura criminal ni estuviera realizando ninguna actividad ilícita.

Manifiesta que su hijo fue puesto a la orden del Juez Especializado de Instrucción B-2 de San Miguel y que el 9 de mayo de 2022 se realizó audiencia de imposición de medidas en la que se le decretó detención provisional, sin que dicha autoridad valorara los documentos aportados al proceso por la abogada defensora, con los que se acreditaban los arraigos laborales, familiares y domiciliares del imputado, ni tomara en consideración las constancias emitidas por diversas autoridad judiciales de Jucuapa y de Usulután, con las que se establecía que el imputado no era miembro de pandillas, no había sido procesado por algún delito y no poseía antecedentes penales.

Indica que su hijo, días antes de su captura, se encontraba mal de salud, pues padece de hipertensión arterial y se "sentía mal del corazón". Agrega que, para el ingreso de medicamentos, le solicitan la constancia médica brindada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que tenía programado un electrocardiograma el día 30 de mayo de 2022.

II. 1. Mediante resolución del 21 de junio de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) señale por qué razón afirma que el juez no valoró los arraigos familiares y laborales ni las constancias emitidas por diversas autoridades judiciales que fueron presentados por la abogada defensora en favor del procesado;

iii) en caso de objetar la motivación de la detención provisional deberá señalar en qué argumentos se basó el juez para decretarla, debiendo incorporar copia del documento donde conste tal decisión;

iv) señale si impugnó la resolución que decretó la detención provisional, de ser así, en qué fecha y la respuesta obtenida, debiendo agregar copia de los documentos que posea al respecto;

v) aclare si pretende reclamar de la falta de atención médica, en cuyo caso debe especificar los argumentos fácticos que sustentan tal situación y a qué autoridad le atribuye dicha omisión, tomando en cuenta los derechos tutelados en el hábeas corpus;

vi) indique si el reclamo en comento –omisión de atención médica– ha sido expuesto ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de su hijo, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

vii) si se ha solicitado el ingreso de los medicamentos prescritos o que sea llevado a consultas médicas, si alguna autoridad se ha negado o impedido y por qué motivos, detallando las circunstancias concretas de ser el caso y agregando la documentación que respalde sus afirmaciones;

viii) manifieste si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud al privado de libertad, a cuál autoridad, qué resolvió y las conclusiones de dicho estudio, debiendo agregar la documentación que lo acredite si la tuviere;

ix) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, señale el estado actual del proceso penal e indique si todavía se encuentra detenido o si fue puesto en libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 19 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *MDJQA* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

47-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido a su favor por el señor *RGSP* –condenado por el delito de tráfico ilícito–, en contra de omisiones de uno de los jueces del Tribunal de Sentencia de Chalatenango.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante reclama de la sentencia condenatoria de doce años de prisión que le fue impuesta por la autoridad demandada (no detalla en qué fecha), pues manifiesta que en la misma se valoró una experticia física química realizada el 11 de abril de 2018, por una perito de la Sección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de San Salvador.

Al respecto alega que el juez de la causa incorporó dicha prueba a la vista pública celebrada el 4 de febrero de 2019, de manera ilegal, pues lo hizo mediante lectura, con fundamento en el artículo 372 N° 3 del Código Procesal Penal (CPP), señalando que fiscalía había prescindido de dicha declaración, sin embargo, de conformidad al artículo 377 CPP ello solo es posible cuando se justifique por el perito que no le es posible comparecer a dicha audiencia.

Además, reclama que dicha experticia se realizó cuando él ya estaba capturado, un día antes de que se presentase requerimiento fiscal ante el juzgado de paz competente, pero sin informarle a su defensa técnica de su práctica ni justificarse la urgencia de su realización pues al material vegetal encontrado ya se le había realizado prueba de campo.

En consecuencia, estima vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y libertad física en relación con los principios de legalidad y debido proceso, requiriendo hábeas corpus a su favor.

II. Mediante resolución del 27 de enero de 2021, se previno al peticionario para que aclarara a este tribunal ciertos aspectos incompletos de su petición.

La aludida decisión le fue notificada el 8 de mayo de 2023, de manera personal en el Centro Industrial y Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, según consta en acta agregada a folio 50 del presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *RGSP*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.-—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1257-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora CMPM, en contra de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a favor del señor *DARP*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La peticionaria refiere que su hijo, el señor *RP*, fue capturado el día 14 de mayo de 2022, en su vivienda ubicada en *********, San Juan Opico, La Libertad, por soldados, quienes, luego de preguntar cuántas personas vivían en la casa, se dirigieron adonde estaba su hijo, lo sacaron a la calle, le pidieron su teléfono celular (pese a que no tiene) y otros soldados registraron la vivienda. Luego dijeron que se lo llevarían para realizarle unas preguntas y que después de eso lo dejarían en libertad; sin embargo quedó detenido. Señala que teme por la vida de su hijo, ya que por ser joven lo están condenando y ahora es un desaparecido porque no saben nada de él, desconociendo en qué condiciones se encuentra.

Expresa que el señor *RP* es inocente y fue privado de libertad en el contexto del régimen de excepción, sin manifestarle "la causa de su detención", por lo que considera que su captura es ilegal, arbitraria y viola garantías judiciales pues no está recibiendo un debido proceso –sin exponer por qué– y se está atentando contra su dignidad física, moral y la de su familia, sometido a una detención basada en percepciones subjetivas de sus captores. Esto en un contexto donde se ha empezado a denunciar detenciones sin fundamento e incomunicaciones que pueden constituir desapariciones forzadas.

II. Mediante resolución del 29 de mayo de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es la actuación u omisión concreta que reclama, indicando la o las autoridades a las que la atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si pretende cuestionar las condiciones en las que se dio la captura del señor RP, de quiénes la llevaron a cabo o por el ingreso a su vivienda, deberá argumentar porqué tales situaciones generan afectaciones de naturaleza constitucional en los derechos de aquel;

iii) si los reclamos antes señalados han sido expuestos ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de su hijo, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iv) por qué afirma que teme por la vida del señor *RP* y que se trata de un desaparecido, pues desconocen en qué condiciones se encuentra, de lo cual deberá exponer qué acciones ha realizado para obtener información de él y qué respuestas ha recibido de las autoridades respectivas o si se le ha negado, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

v) si tiene algún cuestionamiento específico en torno a sus afirmaciones referidas a posibles vulneraciones del debido proceso y de su dignidad física y moral –así como de su familia–, asimismo sobre la detención basada en percepciones subjetivas e incomunicación que podría ser constitutiva de

desaparición forzada, en cuyo caso deberá determinar detalladamente los hechos ocurridos, a que autoridad las atribuye y la afectación constitucional concreta.

vi) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal del señor *DARP*, por qué delito, si le han impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa y en qué centro de reclusión se encuentra detenida actualmente o si fue puesta en libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 13 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *DARP*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.--O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

790-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor MOAJ, contra el Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana, a favor del señor *CEAJ*, condenado por el delito de organizaciones terroristas.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El peticionario indica que es hermano del señor *AJ*, quien fue privado de libertad el 26 de noviembre de 2019 en la Embajada de Estados Unidos, en momentos que tramitaba su visa de turista, en este lugar se percataron que tenía una orden de captura vigente "lo cual fue una sorpresa porque nunca se recibió alguna notificación de un juzgado para que él se presentara ante la justicia" no obstante viven en el mismo domicilio, sostiene que el imputado nunca ha pertenecido a ninguna organización criminal.

Refiere que, durante la audiencia preliminar, una juez especializada de instrucción decretó la detención de su hermano por considerar que los arraigos presentados no eran suficientes para otorgarle medidas sustitutivas, asimismo, ordenó la apertura a juicio.

Reclama que la vista pública inició el 6 de julio de 2020 y duró dos semanas "ya que había más imputados en el mismo caso" y el Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a su hermano a ocho años de prisión "sin mayores pruebas" y con la palabra de un testigo con criterio de oportunidad, quien no pudo ubicarlo "en espacio, lugar y tiempo del delito", ni pudo indicar su nombre solo lo señaló como "hijo del M***", vulnerando el principio de inocencia. Además, el juez no valoró que el señor AJ hasta antes de su detención era estudiante universitario y que si fuera pandillero no solicitaría una visa de turista, sino que hubiera salido del país por un punto ciego.

Dado lo anterior afirma que han interpuesto apelación ante la Cámara Especializada de lo Penal con sede en Santa Tecla y que desde la sentencia hasta la fecha de "revisión" del recurso han pasado cuatro meses, por lo que solicita se exhorte a los magistrados analicen en detalle la sentencia, porque considera que su hermano se encuentra en el Centro Penal de Apanteos, condenado injustamente.

2. Por resolución del día 13 de febrero de 2023, este tribunal previno al peticionario para que señalara con precisión:

i) por qué sostenía que su hermano "nunca recibió alguna notificación", debiendo narrar cómo se intentó convocarlo al proceso penal o si esta se omitió por completo;

ii) cómo la falta de citación del señor *CEAJ* afectó la condena que hoy cumple y si este reclamo se expuso ante los jueces encargados de su procesamiento, es decir, tanto en primera instancia como en apelación y casación, debiendo expresar qué respuestas se había obtenido de cada autoridad;

iii) si deseaba reclamar de problemas de motivación sobre la participación del imputado en el delito atribuido, en cuyo caso debía trasladar los fundamentos del juez de sentencia, así como los tribunales de apelación y casación, y con base en ellos argumentar su reclamo constitucional;

iv) el estado actual del proceso penal y la situación de libertad del señor *AJ*.

3. La aludida decisión le fue comunicada al solicitante por medio del correo electrónico señalado, el día 10 de marzo de 2023, según consta en acta agregada a folio 8 del presente expediente.

4. El señor MOAJ, en su contestación presentada el 15 de marzo de 2023, señaló que:

i) El 8 de septiembre de 2017, su casa fue allanada por agentes policiales y fiscales, quienes buscaban a su hermano por supuestamente colaborar con una pandilla, refiere que ese día el señor *AJ* fue maltratado y

sacado semidesnudo de la vivienda, lo tuvieron hincado como treinta minutos, revisaron sus documentos y la familia presentó constancia que este era estudiante universitario activo, posteriormente el fiscal les dijo que se habían equivocado, que no era a él a quien buscaban y se retiraron.

Sostiene que después de ese allanamiento "nunca recibió algún citatorio", incluso fue registrado en retenes, tramitó su pasaporte, no cambió de domicilio, no evadió la justicia, por lo que considera injusto que dos años después fuera capturado, asimismo, reitera la forma en que se realizó la privación de libertad de su hermano y que este era estudiante universitario.

ii) Advierte que la falta de citación afectó a su hermano en el sentido que se tildó de ser "un prófugo de la justicia", que a los jueces y magistrados de las diferentes instancias se les mencionó ese punto "pero fue omitida o ignorada dicha petición".

iii) Con respecto a la falta de motivación en la participación del imputado en el delito, insiste en que este fue condenado por el relato de un testigo con criterio de oportunidad que ni se sabía el nombre de su hermano y se inventó un apodo, además, no lo ubicó en lugar, tiempo ni espacio para comprobar su participación en el delito. Indica que este fue condenado "sólo por ser joven" y el juez nunca argumentó de manera clara su decisión, explica que no puede transcribir lo dicho por el juzgador porque no tiene los archivos.

iv) Finalmente manifiesta que su hermano está cumpliendo condena de ocho años y seis meses de prisión en el Centro Penal de Santa Ana.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se hará una consideración sobre la remisión de solicitudes por medio de correo electrónico y sin firma (III); luego se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales y normativos de la presente decisión (IV); posteriormente se examinará lo requerido por el peticionario (V).

III. 1. El escrito de contestación de prevenciones fue enviado a través de correo electrónico. Esta sala ya ha reconocido reiteradamente la posibilidad de recibir peticiones por el referido medio –auto del 11 de diciembre de 2020, hábeas corpus 359-2020–.

2. Además, el aludido escrito ha sido remitido sin firma del señor MOAJ. Sobre ello ya se ha indicado que la regulación legal del hábeas corpus que señala que cualquier persona puede promoverlo a favor de otra y sus características de celeridad y antiformalismo, permiten que la falta de firma no sea un obstáculo para decidir solicitudes de esta naturaleza, especialmente en este caso pues el escrito de contestación de prevención fue remitido del correo electrónico señalado por el peticionario para recibir notificaciones y –improcedencia del 24 de mayo de 2021, hábeas corpus 549-2020–.

IV. La jurisprudencia constitucional ha establecido que mediante el proceso de hábeas corpus, este tribunal tiene competencia para conocer únicamente sobre aquellas situaciones de carácter constitucional que incidan en el derecho a la libertad personal, encontrándose excluida de sus potestades la revisión de lo consignado en una sentencia condenatoria emitida por un juez penal así como el análisis de los alegatos relacionados con la valoración y ponderación que merezcan las pruebas presentadas en un caso concreto, a efecto de establecer la responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo; por tanto, la determinación sobre si una persona es inocente o culpable de un hecho delictivo concreto corresponde exclusivamente al juez penal –improcedencias del 10 de enero de 2018 y del 29 de febrero de 2012, hábeas corpus 291-2017 y 52-2012, respectivamente–.

V. 1. Al contestar la prevención efectuada, el señor AJ agregó hechos que sucedieron en 2017, previos a la captura del señor *CEAJ*, además reiteró los planteamientos expuestos en su escrito inicial referidos a la falta de citación de su hermano, sosteniendo que "nunca recibió el acto de comunicación", indicando que dicha omisión lo afectó pues durante todo el proceso se le tildó de ser un prófugo de la justicia, que a los jueces y magistrados encargados de su procesamiento se les mencionó ese punto, pero ello fue "omitido o ignorado".

Al realizar el examen de admisibilidad de la solicitud se identifican falencias las cuales no son superadas al contestar la prevención efectuada, pues, aunque refiere la falta de citación del privado de libertad al proceso, lo que conllevó a su captura, lo hace de manera general, dado que solo alega que no fue citado ni notificado, además de objetar que fue catalogado como prófugo, sin especificar cómo se intentó la citación, si ello se objetó por medio de apelación o de casación y cómo esa omisión afectó la condena que hoy cumple, es decir, si no tuvo acceso a defensor –público o particular– o por el contrario el profesional participó activamente dentro del proceso en las audiencias que se llevaron a cabo, haciendo solicitudes ante los jueces y magistrados e interponiendo los recursos que franquea la ley.

En ese orden, no se detallan aquellos elementos que son necesarios para determinar la procedencia de su reclamo, ya que no traslada argumentos que expliquen, con claridad y en los términos requeridos, cuáles son los hechos –actuación u omisión concreta– que a su criterio generan vulneración en los derechos de audiencia y defensa con incidencia en la libertad física del señor *CEAJ*.

Si bien es cierto el hábeas corpus es un proceso flexible, que puede promoverse con peticiones sencillas a favor del afectado en sus derechos, el planteamiento de los asuntos de forma adecuada es indispensable porque permite no solo verificar la apariencia verdadera del reclamo, sino también

dirigir adecuadamente la tutela de los derechos fundamentales. De manera que si, no existe claridad en lo cuestionado, la protección efectiva que debe brindar esta sede no se logra.

Así se tiene que las falencias señaladas representan un valladar a la hora de determinar la concreción y verosimilitud del reclamo expuesto por el señor *AJ* y consecuentemente, en vista de que no se subsanó la prevención realizada en los términos exigidos por este tribunal y siendo que los aspectos que no fueron esclarecidos son necesarios para decidir si se debe dar trámite a este hábeas corpus, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declarar inadmisible su propuesta.

2. Por otra parte, en atención al resto de argumentos expuestos, el reclamo se centra en la valoración que el tribunal sentenciador realizó sobre la prueba que sustenta la condena del señor *CEAJ*, dado que manifiesta que se otorgó credibilidad a un testigo con criterio de oportunidad que no lo identificó por su nombre, además se inventó un apodo y no pudo ubicarlo en lugar, tiempo y espacio para acreditar su participación en el delito.

Al respecto, tal como se dijo en la jurisprudencia citada, es facultad del juez que conoce del caso –y no de este tribunal– examinar la prueba incorporada en el proceso y determinar si con ella se establece o no el delito atribuido al incoado y su participación en el mismo, pues si a través de este proceso se entrase a verificar aspectos como los aludidos, se produciría una desnaturalización del hábeas corpus, convirtiendo a esta sala en una instancia más dentro de la causa iniciada en sede penal, lo cual no es pues la tutela que se brinda en esta sede es constitucional.

Debe decirse que el peticionario no manifiesta algún defecto de motivación de la sentencia que refleje arbitrariedad o alguna inconstitucionalidad relacionada con los elementos probatorios que menciona y que, por tanto, pudiera vulnerar los derechos tutelados a través del hábeas corpus, sino solo expone su mera inconformidad con el valor positivo que se otorgó a la prueba testimonial para determinar la participación del imputado en el delito, asunto que, como se ha reiterado, no corresponde estudiar a este tribunal por ser un asunto de legalidad sobre el desacuerdo con la condena, debiendo en tal sentido declarar improcedente la presente solicitud.

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución, 13 y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *CEAJ*, por no haberse subsanado la prevención efectuada por este tribunal en los términos requeridos en cuanto a la falta de citación al proceso del privado de libertad.

2. *Declárase* improcedente en lo relativo a los cuestionamientos de la prueba que sustenta la sentencia, por tratarse de asuntos de asuntos de mera legalidad.

3. *Notifíquese*.

4. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1135-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora JERC, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *EARC*.

Analizada el proceso y considerando:

I. 1. La solicitante señala que el señor *RC* fue detenido el día 8 de abril de 2022, en San Pedro Nonualco, La Paz, por agentes policiales, no habiendo fundamento legal para su detención pues no ha cometido delito ni existe una orden escrita decretándola, por tal razón solicita hábeas corpus a su favor.

2. En su segundo escrito presentado el 28 de octubre de 2022, la peticionaria sostiene estar "preocupada" por no saber nada de su hijo desde que lo "sacaron" de la casa, "si está vivo o qué", porque únicamente le dicen –sin indicar quien– que está en "mariona", además que la abogada le ha manifestado que ha solicitado revisión de medidas, pero aun no le han señalado fecha. Añade que es madre soltera, sin trabajo y al cuidado de su hijo con "capacidades especiales".

Al escrito anterior adjunta otro –sin firma– en el que amplía el sustrato fáctico de la captura del señor *RC*, narrando que este fue detenido en horas de la madrugada del 8 de abril de 2022, en su casa de habitación, por agentes policiales que llegaron, "revisaron todo" y le preguntaron quien más dormía ahí, ella les dijo que su hijo, pero estaba dormido, procediendo los policías a empujar la puerta, cuando él despertó lo hincaron, esposaron y cuando preguntó que pasaba le dijeron "lo vamos a llevar".

Agrega que fue trasladado al puesto policial –sin especificar cuál– donde le informaron que su hijo fue capturado por el delito de agrupaciones ilícitas, luego tuvo conocimiento que lo reubicaron en Zacatecoluca y después en "mariona" y desde su detención no ha visto a su hijo".

2. Esta sala, mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2022, previno a la solicitante para que expresara:

i) cuál es la autoridad que demanda en el presente proceso constitucional y los reclamos concretos que le atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) por qué afirma desconocer el paradero del referido señor y a su vez que aquel se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario la Esperanza, de lo cual deberá exponer qué acciones ha realizado para ubicar al capturado y comunicarse con él y qué respuestas ha recibido de las autoridades respectivas, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iii) si los reclamos en comento han sido expuestos ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de él o ante autoridad administrativa, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo presentar el respaldo documental respectivo;

iv) manifieste si la defensora del señor RC ha hecho uso de los mecanismos de denuncia por demora en el trámite establecidos en el art. 173 del Código Procesal Penal por la falta de señalamiento de audiencia de revisión de medidas; de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta recibida, debiendo incorporar la documentación que lo acredite, si la tuviera

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal, si le han impuesto alguna medida cautelar –exponiendo si tiene algún cuestionamiento constitucional contra ella– y el estado actual de su causa, si tuviera conocimiento.

3. La referida decisión fue notificada a la peticionaria vía electrónica el 10 de enero de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente y la solicitante presentó escrito dentro del término establecido para ello, en el que manifestó lo siguiente:

i) que el imputado está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción B-3 de San Salvador, en el proceso bajo referencia B-3-23-22 (4);

ii) que le ha sido manifestado –no indica por quién– que señor RC se encuentra recluido en la Penitenciaría Central La Esperanza, pero como no lo ha visto no sabe si ello es verdad y desconoce si se encuentra enfermo o no.

iii) que la defensora pública le ha manifestado que ha pedido revisión de medidas y le comenta que han entregado un escrito de pronto despacho –no señala la fecha– pero aún no hay respuesta y por ello pide que se le ayude a se deje en libertad al imputado "aunque sea con medidas", para que pueda estar en el hogar. Añade que el señor RC es inocente y trabajaba para una empresa de comida rápida, encontrándose descansando en su vivienda cuando lo capturaron con lo cual no es posible que lo acusen por agrupaciones ilícitas.

II. De lo expresado por la señora JERC al pretender evacuar la prevención hecha por esta sala, se advierte que, no obstante alega vulneración al derecho de libertad personal del señor *RC*, no identifica, de forma concreta, ninguna actuación u omisión de alguna autoridad que efectivamente esté provocando afectación en el citado derecho.

Y es que la solicitante únicamente identifica la autoridad judicial ante la cual se está procesando al detenido, es decir al Juez Especializado de Instrucción B-3 de San Salvador, y luego de ello procede a señalar que la defensora le indicó que se presentó un escrito de revisión de medidas sin haberse realizado la respectiva audiencia, pero no expone más detalles al respecto.

También indica que se ha presentado un pronto despacho, pero nuevamente, no detalla la fecha ni la autoridad donde fue presentado el respectivo. De ahí que no se logre configurar un reclamo que habilite el conocimiento del tribunal sobre la falta de respuesta de una petición que pueda incidir en restricción en la que el imputado se encuentra, sobre todo si se toma en cuenta que la señora RC es clara en manifestar que lo que pretende mediante su solicitud de hábeas corpus es que este Tribunal "le ayude" a que dejen en libertad al imputado "aunque sea con medidas", para que pueda permanecer en el hogar pues es inocente; sin embargo dicho aspecto solo puede ser dilucidado por las autoridades que conocen el proceso penal quienes son las facultadas para determinar la probable comisión de un hecho delictivo y la autoría o participación del procesado, a efectos de imponer o sustituir una medida cautelar.

Además, en relación al reclamo vinculado al supuesto desconocimiento del paradero del señor *RC*, la misma peticionaria indica que sabe que el procesado está recluido en la Penitenciaría Central La Esperanza, especulando sobre la certeza de dicha afirmación pues "no sabe" si eso es cierto ya que no lo ha visto, agregando de forma escueta que por esa misma razón desconoce si el detenido padece alguna enfermedad, pero sin brindar argumentos fácticos que indiquen que efectivamente esté siendo afectado en su integridad física, psíquica o moral.

Consecuentemente, en vista de que no se subsanó la prevención realizada en los términos exigidos por este tribunal y siendo que los aspectos que no fueron esclarecidos son necesarios para decidir si se debe dar trámite a este hábeas corpus, es pertinente, en aplicación del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declarar inadmisible su propuesta.

POR TANTO, con base en las razones ante expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible el hábeas corpus planteado por la señora JERC, a favor del señor *EARC*, por no haberse subsanado la prevención en los términos requeridos por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1515-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado *********, en contra del Juez Especializado de Instrucción "C-3" de San Salvador, a favor del señor *CAAA*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario señala que el señor AA fue procesado en el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, causa penal CP-23-A-2010-(3), por el delito de agrupaciones ilícitas, siendo absuelto en este proceso; sin embargo, en el contexto del régimen de excepción, su representado fue detenido por el mismo delito el 23 de mayo de 2022 debido a aparecía en el sistema que ya había sido capturado por ese ilícito en el año 2010.

Posteriormente, en audiencia especial de imposición de medidas, el Juez Especializado de Instrucción "C-3" de San Salvador le decretó detención provisional. Por consiguiente, considera que ha existido un doble juzgamiento; solicitando, por ello, hábeas corpus a favor de su defendido.

II. Mediante resolución del 10 de julio de 2023, se previno al peticionario que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) aclarar a qué se refiere cuando expresa que el imputado fue capturado "en aplicación del derecho penal del enemigo", detallando las situaciones concretas que podrían vulnerar los derechos protegidos mediante el hábeas corpus;

iii) si pretende proponer un reclamo relacionado con la prohibición de doble juzgamiento, en cuyo caso, deberá indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, a la autoridad que considera responsable y

realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa en cada uno de los procesos judiciales, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto y causa de persecución–;

iv) si ha expuesto el reclamo que propone ante las autoridades judiciales correspondientes y –de ser el caso– en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

v) en qué fecha se llevó a cabo la audiencia especial de imposición de medidas y si en contra de la resolución que decretó la detención provisional que su representado cumple se encuentra pendiente la tramitación de algún medio impugnativo; debiendo especificarlo;

vi) señale en qué estado se encuentran los procesos penales que relaciona, indique qué restricciones de libertad física existen en su contra en cada uno de estos –debiendo detallar fechas, autoridades y decisiones– y si continua en el mismo centro penal o fue puesto en libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 24 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *CAAA* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—-O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

925-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado DOMM, en contra del Juez Especializado de Instrucción "A-2" de San Salvador, a favor del señor *JANH*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El solicitante señala que el señor JANH fue capturado el 13 de mayo de 2022, en un retén policial ubicado en San Martín; afirma que los agentes policiales le requisaron y detuvieron por el delito de agrupaciones ilícitas.

Expone que el 26 de mayo de 2022, se celebró la audiencia especial de imposición de medidas, en el proceso penal clasificado con la referencia 20-P-2022-2-A2, donde se ordenó su detención provisional; considera que tal decisión es ilegal pues "no ha[bía] prueba indiciaria" que lo vinculara con el ilícito del que se le acusa, situación que la autoridad judicial valoró, procediendo a decretar la detención, sin fundamento legal o un "mínimo de prueba indiciaria".

Sostiene que no existía una investigación, orden judicial o administrativa al momento de su captura y que se están vulnerando los derechos constitucionales del procesado "dadas las condiciones de internamiento" a los que se encuentran sometidos los procesados –sin que sobre ello se haga referencia a hechos concretos–.

Por otra parte, sostiene que no "tiene certeza" del centro penitenciario donde se encuentra detenido o "si se encuentra con vida o no" pues no ha sido posible que la familia o la defensa pueda visitarlo, desconociendo el centro penal donde fue recluido –no obstante indica la autoridad judicial que se encuentra a cargo–, además "preocupa grandemente que se ha activado el sistema de información penitenciaria" sin que el señor *NH* haga uso de él, por tal razón solicita hábeas corpus a favor del referido señor.

II. Mediante resolución del 12 de junio de 2023, se previno al peticionario para que aclarara los siguientes aspectos:

i) los reclamos concretos que deseaba plantear ante este tribunal –tomando en cuenta los derechos tutelados por medio del hábeas corpus– y las autoridades a quienes atribuye cada uno de ellos;

ii) si pretende cuestionar la detención provisional impuesta, de la cual refiere se ordenó sin fundamento o sin que se valorara la inexistencia de un "mínimo de prueba", en cuyo caso deberá detallar los argumentos de la autoridad judicial y aclarar si le entregó copia de acta o algún documento donde consten por escrito, el cual deberá incorporar en su caso;

iii) indique si interpuso recurso de apelación de dicha decisión, de ser así, en qué fecha y la respuesta obtenida; además, deberá señalar si posterior a ello la medida cautelar ha sido revisada o modificada, agregando de todo lo anterior copia de los documentos que lo respalden;

iv) si tiene algún cuestionamiento específico en cuanto al desconocimiento del estado y ubicación actual del señor *NH* –no obstante señala la autoridad judicial a cargo de su proceso penal–, indicando los datos espe-

cíficos que ha solicitado al respecto, en qué fechas, a qué instituciones los ha requerido y qué respuestas ha recibido, debiendo incorporar los documentos que lo acredite y señalar como esto genera una afectación constitucional concreta;

v) a qué se refiere al indicar que "preocupa grandemente que se ha activado el sistema de información penitenciaria" sin que el señor *NH* haga uso de él, además, al afirmar que no ha sido posible visitarlo por parte de la familia o defensa y si sobre estos aspectos pretende realizar algún reclamo, señalando quien lo atribuye –judicial o administrativa–, la fecha y circunstancias en que ha ocurrido, así como la afectación a los derechos fundamentales que generó; y

vi) señale el estado actual de la causa penal y el centro penal donde se encuentra si tuviera conocimiento.

La referida prevención fue notificada al solicitante en el medio técnico señalado para tal efecto, el día 12 de julio de 2023, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *JANH*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

865-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido la señora GHML, contra el Juez Especializado de Instrucción C-2 de San Miguel, a favor del señor *CAAM*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. 1. La solicitante manifiesta ser madre del señor *AM*, quien fue detenido el 25 de abril de 2022, cuando llegaba a su lugar de trabajo en el rastro municipal de Usulután, siendo procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Al respecto señala que la acusación que hace fiscalía es falsa pues su hijo únicamente se dedica a laborar y a su familia y posee tatuajes que son decorativos pero no alusivos a pandillas.

Además, sostiene que, en el proceso bajo referencia EDA 10-02-22-1 que se lleva ante la sede judicial demandada, le fue decretada la detención provisional en audiencia de imposición de medida cautelar –no señala fecha–, cuestionando que tal medida se impuso únicamente por la gravedad del delito sin ninguna prueba que relacione a su hijo con el ilícito cometido. En tal sentido, alega que el juez en su resolución "no establece fundamentos fuertes de convicción de la apariencia de buen derecho y de peligro en la demora o peligro de fuga", afirmando que la decisión que restringe la libertad personal del imputado no reúne los requisitos mínimos exigidos por la Constitución, tratados internacionales y legislación, por lo que requiere hábeas corpus a su favor. Agrega a su escrito certificación de partida de nacimiento y copias de su Documento Único de Identidad y del imputado.

2. La peticionaria presentó escrito el 21 de julio de 2022, en el que anexa certificación de los Documentos Únicos de Identidad de ella y del detenido, señalando que no se habían certificado adecuadamente las primeras copias anexas.

II. 1. Mediante resolución del 21 de junio de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es la o las actuaciones u omisiones concretas que reclama, indicando la o las autoridades a las que las atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) a qué se refiere cuando señala que la detención provisional impuesta al detenido no establece fundamentos fuertes de convicción de la apariencia de buen derecho y de peligro en la demora o peligro de fuga y en qué sostiene tales aseveraciones; para ello deberá detallar los motivos de sus afirmaciones, así como agregar copia de la decisión en la que consten los argumentos de la detención provisional;

iii) indique si ha presentado revisión de medida cautelar o ha apelado de la decisión que decretó dicha medida y de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta de las respectivas autoridades, debiendo incorporar la documentación que lo acredite;

iv) señale cuál el estado actual del proceso seguido contra el señor *AM* y en qué centro de detención se encuentra en la actualidad o si fue puesto en libertad.

2. La aludida decisión le fue notificada a la solicitante, vía fax, el día 13 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la señora GHML, a favor del señor *CAAM*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

912-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora EADL, contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, a favor del señor *CACV*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La peticionaría refiere que el señor *CV* fue detenido el día 8 de abril de 2022, cuando se encontraba en el beneficio **********, que es su lugar de trabajo y está ubicado en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, por agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada, quienes en principio se presentaron a su vivienda, registrando camas, mesas, sillas"; y, al preguntar por el imputado, su madre les respondió que se encontraba trabajando, por lo cual los agentes fueron a sacarlo del lugar mencionado, Agrega que, al no contar con información sobre él, lo consideran -persona desaparecida".

Expone que el señor *CV* fue privado de libertad bajo el régimen de excepción. A pesar de que la orden del Estado es "darle fin a las pandillas", nunca se le manifestó la causa de su detención. Afirma que su captura conllevó una restricción ilegal y arbitraría al vulnerar garantías judiciales como

el debido proceso y atentar contra "su dignidad física, moral y la de su familia", pues la restricción de libertad se sustentó en percepciones subjetivas de los cantores.

Agrega que se han denunciado detenciones sin fundamento de muchas personas al ser incomunicadas, sin registros y sin informar a los familiares de su situación", lo cual podría constituir casos de desapariciones forzadas. Por todo lo anterior solicita habeas corpus, a fin que se decrete la libertad del detenido. Adjunta a su petición documentos relacionados con sus arraigos.

II. Mediante resolución del 10 de julio de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara a este tribunal:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados -actuación u omisión concreta-, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el habeas corpus;

ii) si pretende cuestionar la falta de información sobre la situación del señor *CV*, debe señalar ante qué instituciones o autoridades ha acudido a obtener datos al respecto, qué ha solicitado, en cuáles fechas y qué respuestas ha obtenido, adjuntando a su respuesta la documentación que acredite sus afirmaciones;

iii) si el reclamo en comento ha sido expuesto ante el juez de la causa penal que se instruye en contra del detenido; de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo presentar el respaldo documental respectivo, y;

iv) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal seguido en contra del referido señor, por qué delito, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, el estado actual de su causa y en qué lugar se encuentra recluido actualmente, si lo sabe.

La aludida decisión fue notificada el día 31 de julio de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que, en consecuencia, deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de habeas corpus planteada por la señora EADL a favor del señor *CACV* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA— O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

239-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día doce de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus fue promovido contra los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente, con sede en Usulután, a su favor por el señor *WABC*, condenado por el delito de homicidio agravado.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. El peticionario señala que el Tribunal de Sentencia de Usulután concluyó que la prueba del testigo con régimen de protección presentado por fiscalía dejaba dudas razonables por lo que se resolvió lo más favorable al imputado; no obstante, la fiscalía apeló y los magistrados de la cámara se excedieron en sus límites al revocar la decisión y sancionarlo a la pena de veinte años de prisión, cuando lo que se esperaba es que se anulara la sentencia o la confirmara pero en ningún momento una condena sin dar derecho a las partes materiales y técnicas de discutirlas a través del principio de contradicción de la prueba.

Agrega que tampoco le notificaron esa decisión de manera personal sino que a otra persona y su abogado aun siendo particular, de manera temeraria, no interpuso ningún recurso, vulnerando su derecho al no notificársele de manera directa. Adjuntó certificación de la resolución en la que los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente revocan la sentencia absolutoria y declaran penalmente responsable al señor *BC*.

II. Mediante resolución del 17 de julio de 2023, se previno al peticionario para que aclarara a este tribunal ciertos aspectos incompletos de su petición.

La aludida decisión le fue notificada el 11 de agosto de 2023, por el medio señalado para tal efecto, según consta a folio 43 del presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *WABC*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1537-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el señor JRSS, contra el jefe de las bartolinas de la Policía Nacional Civil del municipio de Chalatenango, a favor del señor *JMSS*, procesado por el delito de feminicidio agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. El solicitante señala que el señor *JMSS*, su hermano según indica, está siendo procesado penalmente y, en audiencia inicial celebrada ante el Juzgado de Paz de Nueva Trinidad, Chalatenango, se le decretó detención provisional; sin embargo, la defensa del imputado solicitó audiencia especial de revisión de medidas y, el día 21 de febrero del año en curso, la Jueza Especializada Segunda de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador –en adelante Jueza Especializada Segunda de Instrucción LEIV–, ordenó: 1) sustituir la detención provisional del procesado por arresto domiciliar en Cantón **********, Chalatenango, y; 2) el uso de brazalete electrónico. Por lo cual se requirió a la autoridad demandada realizara el traslado del señor SS hacia el lugar indicado y la instalación del dispositivo electrónico, a la autoridad respectiva.

Indica que la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador confirmó las medidas que sustituyeron la detención provisional de su hermano, por medio de resolución del 3 de marzo de 2023.

Por su parte, el coordinador del Centro de Monitoreo de Medios de Vigilancia Electrónica indicó que no era factible la instalación del brazalete en el señor SS, por lo cual la Jueza Especializada Segunda de Instrucción

LEIV decidió prescindir de su imposición, manteniendo la medida de arresto domiciliar, lo cual fue comunicado a la autoridad demandada el 28 de abril del presente año; sin embargo, a la fecha no ha sido trasladado al lugar anteriormente referido para el cumplimiento del arresto domiciliar.

Finalmente indica que el señor JMSS posee discapacidad visual y según un reporte médico del 19 de enero de este año, el cual relaciona, se ha indicado que el procesado "está ciego de ambos ojos", por eso –considera– se están vulnerando los derechos de libertad e integridad física de su hermano.

II. Mediante resolución del 9 de junio de 2023, se previno al peticionario para que aclarara algunos aspectos imprecisos de la pretensión. La referida resolución fue notificada al solicitante de manera personal, el día 26 de junio de 2023, tal como consta a folios cuarenta y siete de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el señor *JRSS*, a favor del señor JMSS, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1264-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinticinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor JPR, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *LCRR*.

Analizada la documentación y considerando:

I. 1. El solicitante señala que es padre de la señora *LCRR*, quien fue capturada el día 5 de mayo de 2022, en su casa de habitación ubicada en **********, municipio de Cojutepeque, por agentes policiales que llegaron y los mantuvieron en el interior de la vivienda, luego sacaron a su hija y le manifestaron que se la llevaban para hacerle unas preguntas.

Relata que su hija había sido sentenciada por el delito de extorsión, pero fue puesta en libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cojutepeque, luego de estar privada de libertad por seis años; sin embargo desconoce el motivo, la razón o el delito por el cual nuevamente ha sido detenida, ya que no tiene cuentas pendientes con la justicia y el artículo 11 inciso 1º de la Constitución prohíbe que las personas puedan ser enjuiciadas dos veces por la misma causa.

2. Posteriormente, el solicitante presentó un segundo escrito en la secretaría de esta sala el día 15 de noviembre de 2022, mediante el cual presenta documentación con la cual pretende acreditar los arraigos domiciliares y familiares de la señora RR y reitera la petición de hábeas corpus a su favor.

II. Mediante resolución del 19 de julio de 2023, se previno al peticionario que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) a qué se refiere concretamente cuando afirma que los agentes policiales que llegaron los mantuvieron en el interior de la vivienda, luego sacaron a su hija y le manifestaron que se la llevaban para hacerle unas preguntas, debiendo aclarar si pretende proponer un reclamo relacionado con dichas actuaciones durante la captura, aclarando de qué manera estas se encuentran vinculadas con la decisión de privar de su libertad a la señora *RR*;

iii) si pretende proponer un reclamo relacionado con la prohibición de doble juzgamiento, en cuyo caso, deberá indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, a la autoridad que considera responsable y realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa a la señora RR en cada uno de los procesos judiciales, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

iv) si lo anterior ha sido alegado ante las autoridades judiciales correspondientes, manifestando –de ser el caso– en qué fecha y cuál ha sido la respuesta otorgada;

v) ante qué autoridad judicial se tramita el proceso penal de la señora RR, por el que fue capturada el 5 de mayo de 2022, por qué delito, el estado actual de la causa, si se le ha impuesto alguna medida cautelar, si tiene algún cuestionamiento constitucional sobre ella y en qué centro de reclusión se encuentra detenido actualmente la mencionada señora o si ha sido puesta en libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 15 de agosto de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. Declárase inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de la señora *LCRR*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.––GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

1615-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ELMDM, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *MAMM*.

Analizado el proceso y considerando:

I. La solicitante expresa que el señor *MM* fue detenido sin fundamento por agentes policiales, el 18 de mayo de 2022, cuando salía del trabajo ubicado en el municipio de San Martín, San Salvador, debido a que actuaron sin llevar una orden de captura escrita, tampoco estaba cometiendo delito alguno y no tiene tatuajes.

Sostiene que a este "lo golpearon en la bartolina de la policía" porque en redes sociales "estaba bien morado de la cara". Agrega que el señor MM es una persona honrada, educada y trabajadora que "tuvo problemas antes y cumplió tiempo", por lo que solicita hábeas corpus a su favor.

Expresa que fue detenido en el contexto del régimen de excepción, considera que su captura es ilegal, arbitraria y que violenta garantías judiciales pues no está recibiendo un debido proceso –sin exponer por qué– y se está atentando contra su dignidad física, moral y la de su familia, sometido a una detención basada en percepciones subjetivas de sus captores, esto en un contexto donde se ha empezado a denunciar detenciones sin fundamento e incomunicaciones que pueden constituir desapariciones forzadas.

A su escrito la solicitante adjuntó una serie de documentos, entre los que se encuentran una constancia y orden de libertad emitida por la jueza Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador por el cumplimiento de condena por parte del señor MM el 22 de mayo de 2021 por el delito de tenencia, portación o conducción de arma de guerra –sin realizar sobre ellos ninguna acotación concreta–.

II. 1.Mediante resolución del 27 de marzo de 2022, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) especificar cuál es la actuación u omisión concreta que reclama, indicando la o las autoridades a las que la atribuye, y cómo está incide negativamente en los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) exponga si pretende proponer un reclamo relacionado con los golpes al momento de su captura a los que hace referencia, detallando a qué autoridad se atribuye, en qué contexto ocurrieron, la manera en que acaecieron los hechos y por qué consideran que estas tienen repercusiones en su integridad personal;

iii) si lo reclamado ha sido expuesto ante la autoridad administrativa correspondiente o ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, indicando qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iv) manifieste si tiene conocimiento que se haya requerido la práctica de algún peritaje de salud o evaluación médica al privado de libertad a raíz de los hechos que reclama, ante qué autoridad, qué resolvió y cuáles han sido las conclusiones de dicho estudio;

v) detalle si posterior a la captura del señor MM se le realizó chequeo clínico y sí ha tenido acceso a este;

vi) si tiene algún cuestionamiento específico referido a las actuaciones realizadas al momento de la captura, o en torno a sus afirmaciones referidas a posibles vulneraciones del debido proceso y de su dignidad física y moral –así como de su familia–, asimismo sobre la detención basada en percepciones subjetivas e incomunicación que podría ser constitutiva de desaparición forzada, en cuyo caso deberá determinar detalladamente los hechos ocurridos, a que autoridad las atribuye y la afectación constitucional concreta;

vii) precise si la privación de libertad de la que reclama se encuentra relacionada de alguna manera con el ilícito por el cual, refiere, cumplió pena de prisión –según la documentación remitida–;

viii) el estado actual de su o sus procesos penales, el delito por el cual se instruyen, si le han impuesto alguna medida cautelar y si tiene algún cuestionamiento constitucional respecto a la decisión judicial sobre su libertad, debiendo exponer las razones.

2. La referida prevención fue notificada a la solicitante en el medio electrónico señalado para tal efecto el 28 de abril de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *MAMM*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

166-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora YGRC, contra el Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena y los miembros del Consejo Criminológico Regional –sin especificar las circunscripciones territoriales de cada uno–, a favor del señor *MECR*, condenado por el delito de posesión y tenencia.

Analizado el proceso y considerando:

I. La peticionaria manifiesta que el señor *CR* es su hijo y fue condenado por el delito referido a seis años de prisión, por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador y cumplió las dos terceras partes de su pena el 20 de febrero de 2021.

Arguye que el juez de ejecución penal ha incurrido en dilaciones indebidas "al no dar respuesta a las diferentes peticiones, enviar con tardanza la petición del correspondiente dictamen criminológico y afectando consecuentemente el derecho de audiencia, al no tener acceso a su audiencia especial" y por tanto, el condenado, "no tiene acceso al beneficio de libertad condicional", lo cual lo justifica –el juez– al indicar que tiene "una enorme carga laboral y [por los] efectos de la pandemia del Covid-19".

Señala que su hijo dirigió escritos en múltiples ocasiones solicitando audiencia especial para obtener el beneficio de libertad condicional y contrató una abogada, la cual realizó petición el 22 de febrero de 2021 y la reiteró el 12 de enero de 2022, apersonándose dicha profesional al juzgado y a la Dirección General de Centros Penales, sin obtener respuesta.

Así mismo indica que el reclamo contra el Consejo Criminológico Regional es debido a que no envía el dictamen respectivo.

II. Mediante resolución del 16 de junio de 2023, se previno a la peticionaria para que señalara:

i) desde cuándo está detenido el señor *MECR* y cuánto tiempo ha pasado del cumplimiento de la pena, señalando en qué etapa se encuentra;

ii) en qué fechas se realizaron las peticiones de las que refiere no se ha emitido respuesta, en qué consistían concretamente y si a la fecha han sido resueltas, también debe especificar las autoridades a quienes las ha planteado, indicando su circunscripción territorial y;

iii) la situación actual del señor *CR* respecto a su derecho de libertad física, así como señalar en qué lugar se encuentra recluido o si fue puesto en libertad.

La referida prevención fue notificada a la solicitante en el lugar señalado para tal efecto, el 11 de julio de 2023, tal como consta a folios seis de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la señora YGRC, a favor del señor *MECR*, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—GARCÍA–O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

448-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el licenciado **********, contra el Juez Especializado de Instrucción "C-3" de San Salvador, a favor de la señora *SEAL*, procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El peticionario refiere que la señora *AL* fue capturada el 26 de abril de 2022 en su casa de habitación ubicada en colonia **********, del municipio de San Martín, por agentes policiales que tocaron la puerta de su vivienda de forma violenta y cuando ingresaron la revisaron sin darle ninguna explicación, luego le manifestaron únicamente que se la llevarían detenida porque era colaboradora de pandillas.

Posteriormente se programó audiencia inicial para el día 12 de mayo de 2022, sin embargo debido a que no pudo ser intimada por parte del Juzgado Especializado de Instrucción C-3 de San Salvador, por haber sido trasladada al Centro Penal de Jucuapa, un colaborador de ese juzgado le dijo que la audiencia se haría con las reglas de reo ausente y que a la imputada se le decretaría instrucción formal sin ninguna medida cautelar, por lo que le solicitó el oficio respectivo para que la imputada fuera puesta en libertad, pero el colaborador solamente le respondió que se le notificaría la programación de la audiencia especial de revisión de medidas.

Menciona que la audiencia especial mencionada se llevó a cabo de forma virtual el 16 de mayo de 2022, sin que para la misma pudiera tener comunicación con su representada porque tenían problemas de conexión en el lugar en el que estaba recluida y a pesar que alegó que tal situación generaba violación al derecho de defensa material de la enjuiciada, el juez dio apertura a la audiencia y al finalizar la misma le decretó detención provisional a la imputada sin razonamiento jurídico y de forma automática, sin considerar los arraigos familiares, laborales y domiciliares que le fueron presentados –los cuales describe–, tampoco tomó en cuenta la edad de la imputada y que no tiene antecedentes penales; menciona que en contra de esa resolución interpuso recurso de revocatoria pero fue confirmada.

Agrega que su defendida es viuda desde el año 2019 y tiene tres hijos (situación que afirma, acreditó con las respectivas partidas de nacimiento y de defunción) por lo que es la única que le provee alimentación, educación y otras necesidades del hogar. Además estaba diagnosticada con cefaleas migrañosas y colitis nerviosa, por lo que estaba bajo prescripción de medicamentos, en razón de todo lo cual solicita a este tribunal que tome en consideración sus arraigos así como su condición de salud a fin de que se ordene su libertad.

II. 1. Mediante resolución del 17 de abril de 2023, se previno al peticionario que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, señalando actuación u omisión específica, la autoridad a la que lo atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) señale si, al momento de su detención, la señora *AL* estaba diagnosticado con las enfermedades a la que hace referencia, y de ser así indique el diagnóstico, tratamiento y medicamentos determinados por el médico respectivo, debiendo adjuntar una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde;

iii) determine si durante la detención alguna autoridad –y cuál– se ha negado o ha impedido que se proporcione medicamentos o se realicen tratamientos médicos a la señora *AL*;

iv) si reclama alguna desatención de salud en el lugar donde se encuentra recluida respecto a los padecimientos que, asegura, padece la detenida y, de ser así, especifique la autoridad que demanda así como la actuación u omisión concreta de la que se considera responsable y que, a su parecer, están incidiendo negativamente en sus derechos de integridad personal y salud;

v) manifieste si se ha requerido que se practique algún peritaje de salud a la privada de libertad, ante qué autoridad, qué resolvió y cuáles han sido las conclusiones de dicho estudio;

vi) aclare cuál es el reclamo concreto que desea plantear respecto a la condición de la imputada como madre a cargo de tres hijos, la omisión del juez de valorar su edad y que carece de antecedentes penales, debiendo explicar por qué razón estima que tales situaciones vulneran los derechos constitucionales protegidos mediante hábeas corpus de la referida señora;

vii) por qué señala que la autoridad demandada decreto detención provisional a la imputada sin razonamiento jurídico y forma automática, debiendo detallar los motivos de sus afirmaciones, aclarando si sobre ello propone algún reclamo de carácter constitucional;

viii) en atención a la decisión judicial en comento, señale si interpuso recurso apelación, de ser así, en qué fecha, los motivos alegados y la respuesta obtenida, debiendo agregar copia tanto de la decisión en la que consten los argumentos de la detención provisional como del resto de documentos que posea al respecto;

ix) informe el estado actual de su causa, la autoridad que la tiene a cargo e indique en qué centro de reclusión se encuentra detenida o si fue puesta en libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 26 de abril de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de la señora *SEAL*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

461-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Edwin Ofilio Vásquez, contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a favor de la señora *JVGA o JVGDP*, condenada por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

Analizado el proceso y considerando:

I. El peticionario alega que la señora *GA o GDP* fue capturada el 24 de diciembre de 2005 por el delito de tráfico ilícito, sin embargo, el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca celebró vista pública hasta el 24 de febrero de 2020 –quince años después de su captura–, considerando que para esta última fecha ya había prescrito la acción penal, sin embargo, la misma fue condenada por el delito de posesión y tenencia a tres años de prisión, pero el tribunal sentenciador reemplazó dicha pena de prisión por la prestación de trabajo de utilidad pública.

De lo anterior, para la lectura de dicha sentencia, el tribunal convocó a las partes para el 5 de marzo de 2020, en razón de ello, el 18 de marzo de ese mismo año, fiscalía interpuso recurso de casación, mismo que fue resuelto por la Sala de lo Penal hasta el 9 de septiembre de 2021, aduciendo que al resolver dicho recurso vulneró los derechos de la condenada, pues resolvió dieciséis años después de haberse iniciado el proceso penal y modificó la calificación jurídica de posesión y tenencia a posesión y tenencia con fines de tráfico, lo que provocó la supresión de la prestación de trabajo de utilidad otorgado a favor de la señora *GA o GDP*, encontrándose próxima a ser privada de libertad.

Al respecto, considera que a la señora *JVGA o JVGDP* se le han vulnerado sus derechos de libertad, audiencia, defensa, debido proceso, trabajo, familia y, los principios de presunción de inocencia, juicio previo y seguridad jurídica; por lo cual solicita que esta sala ordene la libertad de la condenada y modifique definitivamente la calificación jurídica del delito de posesión y tenencia con fines de lucro a posesión y tenencia.

II. Mediante resolución del 7 de agosto de 2023, se previno al peticionario para que aclarara algunos aspectos incompletos de su pretensión, siendo que la referida resolución le fue notificada por uno de los medios señalados para tal efecto, el 31 de agosto de 2023, tal como consta a folios 15 de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el solicitante se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado Edwin Ofilio Vásquez, a favor de la señora *JVGA o JVGDP*, al no haber contestado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

516-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora RCG, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *FYMG*.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. La peticionaria indica que su hijo el señor *MG* fue detenido el 6 de abril de 2022, frente a la iglesia de las asambleas de Dios, en Tamanique, por parte de agentes policiales; afirma que en el lugar de la captura la policía estaba "bajando a los jóvenes de los microbuses" para llevarlos a la delegación de esa localidad, pues investigaban un accidente. Al presentarse a dicho puesto policial les manifestaron que quedarían detenidos en vías de investigación.

Señala que su hijo se encuentra enfermo y "por días le da Disipela", además de padecer de asma, "con lo que corre el riesgo de enfermar más", agregando –entre la documentación que anexa– copia de carnet de identificación y citas realizadas en el Hospital Nacional Rosales, de los años 2018 y 2019. También argumenta que "no tiene noticia de él".

Expresa que fue detenido en el contexto del régimen de excepción, considera que su captura es arbitraria y que violenta garantías judiciales pues no está recibiendo un debido proceso –sin exponer por qué– y se está atentando contra su dignidad física, moral y la de su familia, al ser sometido a una detención basada en percepciones subjetivas de sus captores, en un contexto donde se han denunciado detenciones sin fundamento e incomunicaciones que pueden constituir desapariciones forzadas.

II. 1.Mediante resolución del 19 de abril de 2023, se previno a la peticionaria para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es la actuación u omisión concreta que reclama, debiendo indicar la o las autoridades a las que la atribuye, y cómo ésta incide negativamente en los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) si al momento de la detención su hijo se estaba diagnosticado con una enfermedad concreta –específicamente sobre las alegadas– y en ese caso, indicar el diagnóstico, tratamiento y medicamentos prescritos por el médico respectivo –anexando la documentación que lo respalde–;

iii) si pretende proponer un reclamo relacionado con alguna desatención de salud respecto a los posibles padecimientos que sufre su hijo, en cuyo caso deberá aclarar si el reclamo ha sido expuesto ante la autoridad encargada del lugar de detención del privado de libertad y ante el juez de la causa penal que se instruye en su contra, de ser así en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iv) manifieste si tiene conocimiento que se haya solicitado la práctica de algún peritaje de salud al privado de libertad, ante qué autoridad, qué resolvió y cuáles han sido las conclusiones de dicho estudio;

v) sobre su alegato de que "no tiene noticia de él", debe aclarar a qué se refiere específicamente, detallando las accion es realizadas para su ubicación, proporcionando datos o características de las autoridades que se negaron a darle información y las respuestas obtenidas ante ellas –de ser el caso–, debiendo incorporar la documentación que lo acredite, si lo tuviere;

vi) si tiene algún cuestionamiento específico referido a las actuaciones realizadas al momento de la captura, o en torno a sus afirmaciones referidas a posibles vulneraciones del debido proceso y de su dignidad física y moral –así como de su familia–, asimismo sobre la detención basada en percepciones subjetivas e incomunicación que podría ser constitutiva de desaparición forzada, en cuyo caso deberá determinar detalladamente los hechos ocurridos, a que autoridad las atribuye y la afectación constitucional concreta;

vii) el estado actual de su proceso penal, el delito por el cual se instruye, si le han impuesto alguna medida cautelar y si tiene algún cuestionamiento constitucional respecto a la decisión judicial sobre su libertad, debiendo exponer las razones.

La referida prevención fue notificada a la solicitante en el medio técnico señalado para tal efecto, el 5 de mayo de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de privación de libertad no significa –para las personas que la afrontan– la anulación de la salvaguarda de su integridad personal en su dimensión más completa, siendo un deber de la administración penitenciaria –o de la autoridad que lo tenga recluido– tutelar los derechos del privado de libertad, como garantes directos de su protección personal, con especial énfasis en su salud.

Así pues, se insiste en la posición especial de garante que tienen las autoridades respecto a las personas que se hallan bajo su custodia o cuidado, en virtud del cumplimiento de la privación de libertad que se ha dictado, lo cual aplica de forma especial en relación con aquellos que se encuentran recibiendo atención médica, en cuyos casos se exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de su condición y optimizar su salud, así como también contestar las solicitudes vinculadas con tales aspectos en los plazos de ley o aquellos razonables –sentencia del 14 de julio de 2021, hábeas corpus 400-2019–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor FYMG, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—GARCÍA—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

66-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada ********** en contra de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a favor del señor CERS, procesado por el delito de homicidio agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. La peticionaria manifiesta que el señor *RS* fue aprehendido el 30 de octubre de 2018, misma fecha en que fue decretada la detención provisional en su contra, habiendo transcurrido más de tres años.

También señala que, el 2 de mayo de 2019, el Juez de Paz de Izalco le decretó la detención provisional al señor *RS* y remitió el proceso al Juez de Instrucción de Sonsonate, el cual en audiencia preliminar ordenó la apertura a juicio, remitiendo el proceso al Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, quien celebró vista pública el 10 de agosto de 2020.

Refiere que se interpuso apelación y de su resultado se presentó recurso de casación, por ello, dicha sentencia aún no está firme y el proceso está en la Sala de lo Penal.

Alega que han transcurrido treinta y nueve meses desde el inicio de la detención, sin que se haya resuelto la situación jurídica del imputado, excediendo el plazo de ley, por ello pide el cese de la restricción.

Sostiene que, en virtud del Decreto legislativo 649 del 31 de mayo de 2020, se estableció la suspensión de términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales y se debe tomar en cuenta la excepción planteada en el sentido que están excluidos de tal suspensión el plazo de la detención administrativa, el término de inquirir y las audiencias derivadas de este último, siendo el último de los casos aplicable a lo que expone.

Pide se decrete exhibición personal ya que el señor RS tiene más de tres años en detención decretada por el Juez de Paz de Armenia, vencida el 31 de octubre de 2020.

II. Mediante resolución del 2 de junio de 2023, se previno a la peticionaria para que señalara:

i) ante cuál autoridad –Juez de Paz de Izalco o Juez de Paz de Armenia– se inició el proceso penal contra el señor *CERS* y qué sede decretó la detención provisional;

ii) la fecha en la cual fue ordenada la referida medida cautelar contra aquel –30 de octubre de 2018 o 2 de mayo de 2019–;

iii) en qué fecha fue interpuesto el recurso de casación y desde cuándo se encuentra el proceso en la Sala de lo Penal, si alguna autoridad judicial ha prorrogado la detención provisional, de ser así en qué fecha y por cuánto tiempo;

iv) aclare si se ha expuesto el cuestionamiento que traslada a esta sala ante la autoridad encargada de la tramitación de la casación, debiendo expresar en qué consistió el reclamo y qué respuestas ha obtenido o si no se han emitido; y

v) señale cuál es el estado actual del proceso penal, especialmente si la sala demandada ha resuelto el recurso respectivo y en qué sentido.

La referida prevención fue notificada a la solicitante por el medio electrónico señalado para tal efecto, el 26 de julio de 2023, tal como consta a folios veinte de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por la abogada *********, a favor del señor *CERS*, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1543-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la señora LELL, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *EALH*.

Analizada la documentación y considerando:

I. La peticionaria refiere que la señora *EALH* fue capturada en razón del régimen de excepción el día 30 de mayo de 2022, en la colonia Cimas de San Bartolo, municipio de Tonacatepeque, por agentes policiales, quienes posteriormente la trasladaron a la subdelegación de la Policía Nacional Civil que se encuentra en la colonia Alta Vista.

Menciona que en la Procuraduría General de la República le han informado que a la señora *LH* no le han señalado audiencia, esto a pesar de que ninguna persona puede estar privada de libertad por más de quince días sin que sea puesta a la orden de un juez; también señala que la imputada había sido detenida en el 2010, cuando tenía diecisiete años de edad y estudiaba en el Instituto Nacional Francisco Menéndez, por el delito de agrupaciones ilícitas, sin embargo, nunca ha pertenecido a ninguna mara o pandilla, por lo que, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución, no puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa; debido a lo anterior solicita hábeas corpus a su favor.

II. Mediante resolución del 24 de julio de 2023, se previno a la peticionaria que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el o los reclamos concretos que desea plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión concreta–, la autoridad a la que los atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) a qué se refiere cuando señala que a la señora LH no se le ha señalado audiencia y, si tiene algún reclamo que plantear sobre ello, deberá indicar cuál es el cuestionamiento constitucional al respecto, si ya fue puesta a la orden de un juez –debiendo especificarlo– y en qué fecha, si ya se efectuó la audiencia inicial o de imposición de medidas, según corresponda, y cuál fue el resultado de la misma con relación a su derecho de libertad física;

iii) si pretende proponer un reclamo relacionado con la prohibición de doble juzgamiento; en cuyo caso deberá indicar, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia citada, a la autoridad que considera responsable y realizar una descripción de los hechos por los que se le acusa a la señora *LH* en cada uno de los procesos judiciales, tanto fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto de persecución y causa de persecución–;

iv) si lo anterior ha sido alegado ante las autoridades judiciales correspondientes, manifestando –de ser el caso– en qué fecha y cuál ha sido la respuesta otorgada;

v) en qué estado se encuentran las causas penales que relaciona, qué restricciones de libertad física existen en contra de la señora LH en cada una de estas; en caso de que se le haya impuesto alguna medida cautelar a partir de la última detención realizada, debe señalar si tiene algún cuestionamiento constitucional respecto a la decisión judicial sobre su libertad.

La aludida decisión le fue notificada el 30 de agosto de 2023, según consta en acta agregada al presente expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que la peticionaria se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de la señora *EALH*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, *archívese*.

"""—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

709-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con veinticinco minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por los abogados ********** y **********, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil de la Delegación Centro, a favor del señor *GEGC*, procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y extorsión.

Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. Los solicitantes refieren que el señor *GC* fue procesado en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador en la causa penal con referencia 53-9-2022 (EG), en la que fue sobreseído provisionalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, sin embargo, por el ilícito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, el juez ordenó apertura a juicio, en consecuencia, el proceso pasó a la orden del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador bajo la refe rencia 12-3-2022, únicamente por el segundo delito.

Cuestionan que en la fecha que se había programado la continuación de la vista pública en contra de su representado, este no compareció en razón de haber sido capturado en la entrada del centro judicial mediante orden administrativa por los mismos delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y según información brindada por el privado de libertad a sus familiares "los hechos que le mencionaron son los mismos que ya están siendo conocidos en el proceso".

Con base a lo anterior reclaman que la captura del señor *GC* es arbitraria e ilegal y por tanto se le está vulnerando su derecho a la libertad.

A su escrito adjuntaron copia simple de sus tarjetas de identificación de la abogacía, del auto de apertura a juicio y del señalamiento de vista pública, así como fotografías de las fichas proporcionadas a los familiares del procesado por la Procuraduría General de la República.

2. En su segundo escrito de fecha 27 de febrero de 2023, los peticionarios para efectos de "probidad" solicitan se agregue al proceso la constancia de antecedentes penales de la persona que se pretende beneficiar.

3. Mediante escrito del 10 de marzo de 2023, el abogado **********, refiere que ese día se realizó la vista pública en contra de su defendido y se acumularon los procesos con referencias 53-9-2022 y 36-2023-5-PO.

Detalla que según los requerimientos presentados la relación de los hechos es la misma, así como también la hora, día y lugar en que fue capturado el señor *GC*, siendo la única diferencia la forma en que se hizo la

privación de libertad, pues en el requerimiento con referencia 814-UDST-2022-SS se indica que se realizó a través de un patrullaje preventivo y en el requerimiento con referencia 00085-UEA-2022-SS se consigna que fue capturado cuando se conducía a bordo de una motocicleta.

II. 1. A través de auto de fecha 21 de abril de 2023, se previno a los solicitantes para que expresaran:

i) cuál es la o las autoridades que demandan en el presente proceso constitucional y los reclamos concretos que les atribuyen, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) cuál es la autoridad que consideran responsable de la vulneración a la prohibición de doble juzgamiento, y por qué sostienen que esta existe en este caso, debiendo describir los hechos por los que se acusa al señor en cada uno de los procesos judiciales a los que se refieren, tanto en fechas, perjudicados y acontecimientos concretos que evidencien la identidad que supuestamente existe en cada uno de ellos –personas, objeto y causa de persecución–;

iii) indicar si la vulneración constitucional –doble persecución– alegada en este hábeas corpus fue planteada a los jueces encargados de su procesamiento, incluyendo los mecanismos recursivos, debiendo expresar en qué consistieron los cuestionamientos y qué respuesta obtuvieron de cada autoridad o si existe alguno pendiente de resolver e incorporar la documentación que lo acredite;

iv) señalen en qué estado se encuentran los procesos penales que relacionan, indiquen qué restricciones de libertad física existen en contra de su representado en cada uno de estos –debiendo detallar fechas, autoridades y decisiones–.

2. La referida decisión fue notificada el día 13 de junio de 2023, mediante el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia y el licenciado Funes Alvarado presentó escrito dentro del término establecido para ello, señalando:

a) que las autoridades demandadas en el presente proceso son la agente fiscal que presentó requerimiento en contra de su cliente por el delito de extorsión agravada con referencia 36-2023-5P, así como el Juez Primero de Paz de San Salvador, por dar continuidad a la solicitud fiscal, decretar detención provisional en contra del señor *GC* y denegar las medidas sustitutivas solicitadas por la defensa.

b) con respecto a la descripción de los hechos para evidenciar la supuesta existencia de doble persecución indicó que en el proceso con referencia judicial 12-3-2023, agentes policiales destacados en la división antiextorsiones, capturaron en flagrancia al señor *GC*, por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, el día 16 de abril del 2022, a quien durante el respectivo registro

le encontraron un arma de fuego sin la documentación respectiva, asimismo, un paquete que contenía en su interior trescientos dólares de los cuales no brindó explicación y un teléfono celular.

Por su parte en el requerimiento fiscal con referencia 00085-UEA-2022-SS, por el delito de extorsión consta que una víctima con régimen de protección denunció el 14 de abril de 2022, que sujetos pertenecientes a la pandilla dieciocho, bajo amenazas contra su vida, la de su familia y de los empleados, le exigieron la cantidad de quinientos dólares, sin embargo, logró acordar que solo entregaría trescientos dólares mensuales.

De lo anterior el peticionario afirma que en ambos casos se ha presentado "la misma relación de hechos", siendo la única diferencia la forma en que fue detenido su representado el 16 de abril de 2022, ya que en el primero se establece que fue durante un patrullaje preventivo en la colonia Monserrat y en el segundo frente a la casa sin número, ubicada en las inmediaciones de la final cincuenta y una avenida sur de la colonia Monserrat, San Salvador, por lo que –a su criterio– se puede considerar que "fue detenido a la misma hora, día, lugar y por el agente inspector jefe José Antonio Hurtado Cruz".

c) indica que el reclamo no ha sido planteado ante los jueces encargados del procesamiento del imputado "en virtud que la ley permite la protección constitucional, mediante el control concentrado difuso para salvaguardar derechos constitucionales", de tal manera que –indica– no es requisito necesario ejercerlo ante los jueces.

d) detalla que actualmente el proceso con referencia 12-3-2023, en el que se le imputa al señor *GC* el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, lo condenó a la pena de tres años de prisión, la cual fue reemplazada por ciento cuarenta y cuatro jornadas de trabajo de utilidad pública "ratificando las medidas sustitutivas en que se encuentra", que de dicho fallo se ha interpuesto recurso de apelación.

En el caso del proceso con referencia 53-9-2023, mediante auto del 14 de marzo de 2023, se encuentra en instrucción formal.

III. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a los fundamentos jurisprudenciales de la presente decisión (IV); luego se examinará lo requerido por el peticionario (V).

IV. La prohibición de doble juzgamiento o *ne bis in idem* está reconocida en el artículo 11 inciso 1° de la Constitución. A partir de ello, la jurisprudencia de esta sala ha establecido que dicha garantía constitucional consiste en la imposibilidad de que el Estado pueda procesar, dos veces o más, a una persona por el mismo hecho, ya sea en forma simultánea o sucesiva.

En el análisis de la existencia de una doble o múltiple persecución deben concurrir los siguientes requisitos: i) identidad en la persona, ii) identidad del objeto de la persecución, e iii) identidad de la causa de persecución.

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate del mismo sujeto perseguido penalmente en uno y otro caso. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así, se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior.

Es preciso enfatizar en este punto que la prohibición de doble juzgamiento no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes, sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Asimismo, se ha expresado que las acusaciones por delitos distintos no afectan la garantía de *ne bis in idem* cuando es el resultado de que en el mismo contexto histórico se hayan ejecutado comportamientos ilícitos diferentes.

Finalmente, para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona. –improcedencia del 23 de abril de 2018, hábeas corpus 132-2018–

V. 1. Según lo expresado, los peticionarios consideran que los procesos seguidos en contra del señor *GEGC*, se encuentran afectados por la prohibición de doble juzgamiento.

Sin embargo, tanto en su escrito inicial como en los posteriores el peticionario alude indistintamente las referencias de los procesos penales 12-3-2022, 53-9-2022, 36-2023-5-PO acumuladas al 12-3-2023, así como las referencias fiscales 814-UDST-2022-SS y 00085-UEA-2022-SS y los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y extorsión, sin precisar de manera específica los hechos, conductas y autoridades judiciales a cargo.

Así, su único argumento descansa en el hecho de que en los requerimientos fiscales presentados –814-UDST-2022-SS y 00085-UEA-2022-SS– se deduce que su defendido "fue detenido a la misma hora, día, lugar y por el agente inspector jefe José Antonio Hurtado Cruz", pero omite brindar insumos para conocer cuáles son las conductas atribuidas en cada uno de los procesos, además no se indica la identidad de estos con relación a mo-

mentos históricos y espacios físicos en los que hayan acontecido, tampoco se señala la identidad de la causa de persecución en el contraste de la compatibilidad de los sustratos fácticos y fundamentos jurídicos en cada uno de los procesos a los que hace alusión.

De modo que se advierte que el reclamo del peticionario parte de su errónea percepción sobre los elementos que configuran la garantía de prohibición de doble juzgamiento, pues los argumentos de su queja se basan en que se trata de la misma persona perseguida y que coincide la fecha de su captura en ambos requerimientos fiscales, lo cual no constituye por sí mismo los presupuestos exigidos en reclamos de esta naturaleza. Y es que, según se advierte al procesado se le atribuyen diferentes ilícitos penales –agrupaciones ilícitas; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y, extorsión–, que se refieren a conductas diversas y tutelan bienes jurídicos distintos, sin que se brinden elementos suficientes que evidencien la posible existencia de una múltiple persecución penal en contra del señor *GEGC*, lo cual sería el presupuesto habilitante para el estudio del reclamo planteado en este hábeas corpus.

Es así que, que verifica este tribunal que no se han superado los aspectos que fueron prevenidos; en ese sentido, existe una imposibilidad para este tribunal de analizar los argumentos propuestos a su conocimiento, pues no se revela un agravio en relación con la prohibición constitucional de doble o múltiple juzgamiento en los términos indicados en la jurisprudencia de esta sala y, por tanto, deberá declararse inadmisible.

2. Con relación a que el peticionario alude que no es necesario en el hábeas corpus el agotamiento previo de las instancias para requerir la tutela de esta sala, es de señalar que, si bien este es un proceso flexible, sin formalidades y que debe ser expedito, al formar parte de los procesos constitucionales de tutela concreta, constituye una protección reforzada a los derechos fundamentales de libertad física e integridad personal –sobreseimiento del 27 de marzo de 2017, hábeas corpus 21-2017–.

Por tal razón cabe mencionar que el planteamiento previo ante las autoridades judiciales o administrativas de las vulneraciones constitucionales no es un requisito para la tramitación de un hábeas corpus, por lo que este tribunal no está realizando esa exigencia en este caso; sin embargo no debe perderse de vista que la distribución de competencias entre esta sala y las autoridades judiciales y administrativas, requiere que se identifique al menos la actuación de estos últimos que han desconocido la Constitución o, en todo caso, la omisión de atender solicitudes sobre ello, pues son aquellas las primeras obligadas a garantizar y proteger los derechos de los privados de libertad que se encuentran a su cargo o bajo su vigilancia por su sometimiento a la fuerza normativa de la Constitución y en ocasio-

nes están incluso en mejores condiciones de indagar y determinar algunos cuestionamientos, por la amplitud de sus competencias, su cercanía con la prueba relativa a los hechos y asuntos relacionados con la responsabilidad penal y su contacto directo con los mismos imputados.

Por ello, de considerarlo pertinente, los peticionarios pueden avocarse también a las autoridades encargadas del procesamiento del imputado, para exponer de manera clara sus reclamos y solicitarles las actuaciones que sean necesarias conforme a las atribuciones legales que dichas instancias posean.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus promovida a favor del señor *GEGC*, por no configurarse un agravio constitucional en relación con la prohibición de doble juzgamiento.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.--GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

1105-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veinticinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el señor JSQM, contra agentes de la Policía Nacional Civil, a favor de la señora *WYHQ*.

Analizado el proceso y considerando:

I. El solicitante manifiesta la señora *HQ* es su esposa, quien fue detenida el 18 de julio de 2022, en la Colonia Amatepec, Soyapango. Añade que su detención se debe únicamente a que aquella, mientras se llevaban detenida a su mamá, le pidió a los policías "que por favor no se la llevaran", por lo que también se la llevaron detenida a ella, sin explicarle por qué.

Afirma que él y su esposa trabajan en una pequeña tienda, de la cual obtienen los ingresos para sostenerse a sí mismos y a sus hijas, de uno y siete años de edad, pero, desde la captura la señora *HQ*, "no [tienen] manera de sobrellevar la tiendita y el cuido de [sus] hijas al mismo tiempo", pues al solicitante se le dificulta trabajar debido a que debe cuidar a sus hijas.

Por otra parte, sostiene: "mi esposa [...] no ha cometido delito alguno, tampoco tiene vínculo alguno con pandillas [...], no existe un motivo legal para su captura. Cuando se la llevaron comunicaron que iban para Cárcel de Mujeres en Ilopango. Sin embargo, actualmente se nos informó que se encuentra en el Centro Penal de Mariona [...]. Esto representa un peligro y riesgo para la vida de mi esposa, pues está privada de libertad en un lugar que no tiene las condiciones para protegerla y cuidar de sus necesidades como mujer, duerme en el suelo dentro de la celda donde está y es un reclusorio donde también se encuentran hombres capturados". Considera que "las condiciones y circunstancias de su detención vulnera sus derechos de libertad física e integridad personal [...]". Por lo tanto, solicita la libertad de su esposa.

II. 1. Mediante resolución del 14 de agosto de 2023, se previno al solicitante para que aclarara los siguientes aspectos:

i) las actuaciones u omisiones específicas por las que reclama ante esta sala, la autoridad a la que las atribuye y por qué razón considera que vulneran los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) por qué sostiene que el centro penal donde se encuentra su esposa no está diseñado para albergar a mujeres y no tiene las condiciones para su protección y el cuido de sus necesidades como mujer, así como cuál es el peligro específico para la vida de ella;

iii) si plantea alguna queja específica relacionada con el hecho de que su esposa se encuentra detenida en "un reclusorio donde también se encuentran hombres";

iv) si plantea algún reclamo constitucional por la captura de la señora HQ a pesar de que "no ha cometido delito alguno, tampoco tiene vínculo alguno con pandillas" y "no existe un motivo legal para su captura"; y, si es el caso, argumentar la trascendencia constitucional de ello;

v) si sus reclamos fueron expuestos ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de la señora *HQ* –incluyendo los mecanismos de impugnación utilizados–; de ser así, en qué fecha lo hizo y cuál fue la respuesta; debiendo incorporar la documentación que lo acredite; y

vi) el centro de reclusión en que se encuentra detenida la mencionada señora, si se mantiene en detención provisional o le han impuesto alguna otra medida cautelar, desde qué fecha y cuál es el estado actual de su proceso penal.

2. La referida prevención fue notificada al solicitante, por medio del correo electrónico señalado para tal efecto el día 04 de septiembre de 2023, según consta en acta agregada al presente proceso de hábeas corpus, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara

sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de la señora *WYHQ*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, archívese.

""""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—GARCÍA—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

650-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra del Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, a favor de los señores *DIRH, JACO, OAS, GBGD, EASC, JCAM, GAEE, CAGC, JMVA, EEMG, EOMC y MAIV*, procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizada la documentación y considerando:

I. El solicitante manifiesta que las personas aludidas fueron detenidas "en diferentes partes de la zona norte de El Salvador", entre el 30 de mayo y el 5 de junio de 2022, a la vez, afirma que fue en "diferentes Municipios del Departamento de San Salvador, "entre el día dieciséis de abril" de 2022.

Considera que sus detenciones son ilegales por las siguientes razones: los agentes captores no se identificaron y no portaban su número de ONI en un lugar visible; el juez demandado les impuso la detención provisional sin observar ningún precepto constitucional, ni valoró "las exposiciones de cada defensor en la que solicitaba un cambio de medida para que estos hagan su defensa material de una manera más digna", tampoco los indicios de descargo, ni las circunstancias jurídicas de cada uno, ni formuló "una argumentación lógico-coherente para decretar la detención"; y el fiscal del caso argumentó que los procesados no trabajaban, no tenían familia y que los que tenían, eran parte las estructuras.

Añade que la mayoría de los detenidos han sido capturados en sus domicilios, sin órdenes de captura, además, el fiscal del caso "no ha presentado suficientes elementos para tener la probabilidad de que los ciudadanos [...] sean partícipes del delito"; agregando que desde el día de su detención no se les ha permitido el contacto con defensores ni familiares. Asimismo refiere que dentro del término administrativo la fiscalía ha sometido a los detenidos a una serie de diligencias, entre ellas las inspecciones corporales, lo cual se relaciona con el "Principio de Dignidad Humana", afirmando que los favorecidos están sometidos a detención "sin haber establecido la acción u omisión de un delito" y ninguno fue detenido en flagrancia. Indica que se les acusa de pertenecer a una estructura, pero dentro del proceso no se establece como "cuándo y dónde", lo cual se relaciona con el Principio de Lesividad del Bien Jurídico"; finalmente refiere que, entre ellos, hay algunos que padecen de enfermedades crónicas, necesitando ser atendidos para determinar su estado de salud.

II. Mediante resolución del 24 de julio de 2023, se previno al peticionario para que especificara a este tribunal:

i) cuál es la o las actuaciones u omisiones concretas que reclama en relación con cada una de las personas favorecidas en el presente proceso, indicando la o las autoridades a quien la atribuye, tomando en cuenta los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) aclare si pretende plantear alguna infracción constitucional por el supuesto hecho de que los agentes captores no se identificaron y ni portaban "su número de ONI" en un lugar visible, en cuyo caso, deberá fundamentarlo en relación con alguno de los derechos tutelados mediante el hábeas corpus, especificar respecto de cuáles favorecidos ha ocurrido y adjuntar la documentación de respaldo;

iii) esclarezca si plantea alguna queja respecto del "Principio de Dignidad Humana" en relación con las supuestas "inspecciones corporales" realizadas durante la detención administrativa, en cuyo caso, deberá señalar a qué autoridad se le atribuyen dichas actuaciones, quiénes fueron las personas objeto de ello y de qué forma se vulneró alguno de los derechos tutelados mediante el hábeas corpus y agregar la documentación que lo acredite;

iv) aclare si pretende formular un reclamo en relación con el "Principio de Lesividad del Bien Jurídico" en relación con las afirmaciones de que los favorecidos están en detención "sin haber establecido la acción u omisión de un delito", que ninguno fue detenido en flagrancia, que "se les acusa de pertenecer a una estructura pero dentro del proceso no se establece como cuando y donde", y de ser así, deberá explicar por qué afirma cada una de esas circunstancias, la transcendencia constitucional de ello, su relación con los derechos tutelados mediante el hábeas corpus e incorporar la documentación que respalde sus afirmaciones;

v) por qué afirma que el Juez Especializado de Instrucción C2 de San Salvador "jamás observó ningún precepto constitucional" ni valoró "las exposiciones de cada defensor en la que solicitaba un cambio de medida", tampoco los indicios de descargo ni las circunstancias jurídicas de cada uno ni formuló "una argumentación lógico-coherente para decretar la detención"; asimismo, señale cómo dichas circunstancias infringen la presunción de inocencia, el debido proceso y los principios de legalidad y de "Lesividad del Bien Jurídico, debiendo agregar la documentación que sustente sus argumentos;

vi) aclare si pretende plantear alguna infracción constitucional en relación con el derecho de defensa material, en cuyo caso, deberá explicar por qué considera que se ha dado dicha afectación y cómo ello se relaciona con alguno de los derechos tutelados mediante el hábeas corpus, especificando respecto de cuáles favorecidos ha ocurrido y adjuntando la documentación correspondiente;

vii) aclare por qué sostiene que a los favorecidos no se les ha permitido tener contacto con defensores ni familiares, qué acciones se han realizado para comunicarse con ellos y qué respuestas han recibido de las autoridades respectivas o si se les ha negado, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten respecto de cada una de dichas personas;

viii) señale si pretende plantear algún reclamo en relación con las supuestas detenciones de los favorecidos en sus domicilios sin órdenes de captura, en cuyo caso, deberá tomar en consideración la jurisprudencia constitucional emitida acerca de ello dentro del actual régimen de excepción;

ix) exprese si pretende plantear alguna queja relacionada con el estado de salud de los detenidos, y de ser así, debe indicar respecto de quiénes, cuáles son los reclamos específicos y a qué autoridad se los atribuyen; asimismo, debe señalar cuál era el diagnóstico médico de cada una de las personas afectadas de salud al momento de su captura y si deben recibir algún tratamiento o alimentación especial; todo lo cual deberá acreditar con una copia legible e íntegra de la documentación médica que así lo respalde, junto con la documentación oficial correspondiente;

x) especifique si se ha solicitado algún peritaje de salud a los privados de libertad, respecto de quiénes concretamente, a cuál autoridad, qué resolvió esta y las conclusiones de dichos estudios, debiendo presentar la documentación que lo compruebe;

xi) indique si los anteriores reclamos han sido expuestos ante el juez de la causa que se instruye contra las personas mencionadas en el encabezado de esta resolución –incluyendo los mecanismos de impugnación–, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo incorporar la documentación que lo acredite; y,

xii) señale cuál es el estado actual del proceso seguido contra los favorecidos, en qué centro de detención se encuentra cada uno de ellos o si han sido puestos en libertad.

La aludida decisión fue notificada el día 10 de agosto de 2023, según consta en esquela agregada al presente expediente, a folio 8; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor de los señores *DIRH, JACO, OAS, GBGD, EASC, JCAM, GAEE, CAGC, JMVA, EEMG, EOMC y MAIV,* al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente archívese.

"""—A. L. J. Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA–PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

572-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, a favor del señor *FASG*.

Analizado el proceso y considerando:

I. El solicitante sostiene que el señor *SG* fue detenido el 22 de mayo de 2022 por agentes policiales, porque al momento de ser requisado les contestó alegando sus derechos, "esto los enfureció y vapulearon al joven y molestos los agentes, lo capturaron sin tener motivación legal, desconociendo al momento cuál es su condición y en donde guarda prisión". Asimismo, afirma que la captura es arbitraria porque el favorecido no tiene antecedentes penales ni policiales, tampoco tatuajes alusivos a estructuras delictivas ni vínculos con padillas.

Por otro lado, el peticionario cuestiona las prórrogas del actual régimen de excepción, pues considera que riñe con el art. 30 Cn., ya que ha desa-

parecido la amenaza que le dio origen. También sostiene que el estado de excepción solo es aplicable al derecho administrativo relacionado con la policía y la fiscalía, por lo que no se vincula con el término de inquirir, pues la protección jurisdiccional no puede estar subordinada a otros poderes.

II. 1. Mediante resolución del 24 de julio de 2023, se previno al solicitante para que aclarara los siguientes aspectos:

i) cuál es el reclamo concreto que desea plantear ante esta sala, cuáles son los hechos alegados –actuación u omisión específica–, la autoridad a la que lo atribuye y por qué razón considera que vulnera los derechos tutelados mediante el hábeas corpus;

ii) por qué afirma que actualmente se desconoce el paradero del señor *SG*, qué acciones ha realizado para obtener información de él y qué respuestas ha recibido de las autoridades respectivas o si se le ha negado, debiendo incorporar los documentos que lo acrediten;

iii) si el señor SG ha sido puesto a la orden de alguna autoridad judicial, en cuyo caso debe señalar si el reclamo en comento ha sido expuesto ante el juez de la causa penal que se instruye en contra de él, de ser así, en qué fecha y cuál ha sido la respuesta, debiendo presentar el respaldo documental respectivo;

iv) si sabe ante qué autoridad judicial se tramita actualmente el proceso penal en contra del señor SG, qué delito se le atribuye, si se mantiene bajo detención provisional o si le ha impuesto alguna otra medida cautelar, desde qué fecha y cuál es el estado actual de su causa penal; y

vi) si pretende plantear algún reclamo relacionado con la vigencia y los efectos del régimen de excepción, de ser así, deberá vincularlo con alguno de los derechos tutelados mediante el hábeas corpus, específicamente en relación con el señor *SG* y adjuntar la documentación que acredite sus afirmaciones.

2. La referida prevención fue notificada al solicitante, por el sistema de notificación electrónica de la Corte Suprema de Justicia el 5 de septiembre de 2023, según consta en acta de notificación agregada al presente proceso de hábeas corpus, por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada a favor del señor *FASG*, al no haberse evacuado la prevención efectuada por este tribunal.

2. *Notifíquese* y oportunamente archívese.

""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—GARCÍA––O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

734-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, contra el Consejo Criminológico Regional Central, a favor del señor *MACG*, condenado por el delito de tráfico ilícito.

Analizado el proceso y considerando:

I. El solicitante alega que el Tribunal de Sentencia de La Unión condenó al señor *MACG* a diez años de prisión por el delito citado, cumpliendo dicha pena en el Centro de Detención Menor de Zacatecoluca y a la orden del Juez Tercero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Miguel.

Señala que ha solicitado, al Consejo Criminológico Regional Central, constancia de actividad laboral, así como informe de los cursos y programas culminados por el interno y que, el 25 de agosto de 2022, también requirió al equipo técnico criminológico del centro penitenciario en mención, remitiera al consejo criminológico la constancia arriba aludida. Ese mismo día, además, pidió a dicho consejo que remitiera al juez de ejecución de la pena de San Miguel, el último documento mencionado, a fin de que el interno opte al beneficio de la redención de la pena, sin embargo manifiesta que, al 8 de diciembre de 2022, sin tener respuesta de las entidades penitenciarias en comento, informó de dicha circunstancia al Director General de Centros Penales.

De lo anterior, considera que al señor MACG se le han vulnerado sus derechos de libertad y petición, así como el principio de seguridad jurídica, al no obtener una respuesta ante las solicitudes planteadas, es por ello que solicita a esta sala que ordene al Consejo Criminológico Regional Central que remita al juzgado de ejecución de la pena en mención, constancia de la actividad laboral e informe de los cursos y programas culminados por el señor *CG* y se ubique de forma inmediata el expediente único de la persona privada de libertad.

II. Mediante resolución del 16 de agosto de 2023, se previno al peticionario para que señalara:

i) cuál es la autoridad a la que pretende demandar en este proceso constitucional –ya que los escritos anexos se encuentran dirigidos a autoridades distintas, mismos que también son mencionados en la solicitud que promueve este proceso– y si ha obtenido alguna respuesta de ellas;

ii) desde cuándo está detenido el señor *CG* y cuánto tiempo ha pasado del cumplimiento de la pena;

iii) aclare qué solicitó al Consejo Criminológico Regional Central, al Equipo Técnico Criminológico del Centro de Detención Menor de Zacatecoluca y a la Dirección General de Centros Penales, de las cuales refiere no ha recibido respuesta, pues lo expuesto en la solicitud difiere –en parte– con lo detallado en los escritos presentados ante dichas instituciones penitenciarias;

iv) si expuso al Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena correspondiente el reclamo que traslada a esta sala, de ser así, en qué fecha y qué le respondió, en caso de no haberlo realizado, debe explicar por qué;

v) en qué lugar se encuentra recluido actualmente el señor CG, pues señala en la solicitud como en la documentación anexa que está en el Centro de Detención Menor de Zacatecoluca y en el Complejo Penitenciario La Esperanza, lo cual difiere;

vi) aclare su petición relacionada a "ubicar de forma inmediata el expediente único de la persona privada de libertad", es decir, si debe ser requerida a alguna institución y con qué finalidad, pues en su solicitud no ha realizado pronunciamiento al respecto;

vii) la condición actual del favorecido respecto a su libertad física.

La referida prevención fue notificada al solicitante por uno de los medios señalados para tal efecto, el 30 de agosto de 2023, tal como consta a folios 12 de este expediente; por tanto, se tiene que efectivamente se realizó el acto procesal de comunicación y que transcurrió el plazo legal sin que el peticionario se manifestara sobre los aspectos prevenidos, los cuales son indispensables para que este tribunal pueda pronunciarse sobre su solicitud, la que en consecuencia deberá declararse inadmisible.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad a lo estipulado en los artículos 11 inciso 2° de la Constitución y 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Declárase* inadmisible la petición de hábeas corpus planteada por el abogado **********, a favor del señor *MACG*, al no haberse evacuado las prevenciones efectuadas por este tribunal.

2. *Notifíquese* y, oportunamente, archívese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

160-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional ha sido promovido por el señor KJGO, contra la Juez de Instrucción de Mejicanos y los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, a favor del señor *JRGR*, procesado por los delitos de violación en menor o incapaz y agresión sexual en menor e incapaz.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante manifiesta que el imputado cumple detención provisional desde el 27 de agosto de 2019 y que la juez de instrucción fijó tres meses como plazo de instrucción, sin embargo, la representación fiscal no presentó la acusación y, luego de intimado el fiscal superior, fue entregada el 3 de enero de 2020.

Afirma que la juez, a petición de la fiscalía, dejó sin efecto la audiencia preliminar y la reprogramó para cuatro meses después, en virtud que no se había podido realizar algunas diligencias, no obstante, ya habían transcurrido siete meses y catorce días desde que el plazo de instrucción finalizó, en tal sentido reclama que no se puede ampliar dicho plazo de forma antojadiza, lo que se hizo del conocimiento a la juzgador "antes y durante la audiencia preliminar" que finalmente se celebró los días 10 y 19 de marzo de 2021.

Agrega que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador amplió el plazo de la detención provisional por ochenta y tres días, excediendo el plazo máximo legal, sufriendo el proceso dilaciones indebidas injustificadas, aclarando que el plazo de la detención provisional se vio afectado por la suspensión ordenada en decretos legislativos en el año 2020.

En la misma resolución consta que, tras una larga espera a las partes, el tribunal no pudo celebrar la vista pública porque, entre otros aspectos, la defensa particular del imputado –a criterio de la autoridad judicial– no actuó de forma diligente pues omitió comunicar su imposibilidad de presentarse y, como consecuencia, tuvo por injustificada su inasistencia, señalando también que dicha audiencia se encontraba pendiente de realizar.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales se emitió auto de exhibición personal. Además, se prescindió del nombramiento de juez ejecutor y se pidió informes a las autoridades demandadas.

3. El Juez de Instrucción de Mejicanos, mediante oficio 3516 de fecha 7 de diciembre de 2021, remitió documentación e informó que el proceso penal fue recibido en esa sede el 6 de septiembre de 2019, luego de lo cual se dictó auto el 20 del mismo mes y año, donde se otorgó el plazo de instrucción de tres meses, mismo que concluiría el 10 de diciembre de 2019.

Así, al haber finalizado el plazo legal para presentar cualquiera de los dictámenes del artículo 355 del Código Procesal Penal, se intimó al fiscal superior el 18 de diciembre de 2019, decisión que fue notificada el 20 del mismo mes y año. Como consecuencia de ello, el fiscal presentó la acusación el 3 de enero de 2020 –tras el asueto de la vacación que del 23 de diciembre al 2 de enero–; dándole trámite a la misma el 7 de enero y ordenándose la realización de la audiencia preliminar en modalidad presencial para el 4 de mayo de 2020 –fecha más próxima según saturación de agenda de trabajo–; sin embargo, dicha diligencia no se llevó a cabo ante las medidas de prevención provocadas por la emergencia nacional por contagio de la COVID-19.

En ese sentido, al finalizar las aludidas medidas, con fecha 7 de julio de 2020 se reprogramó la audiencia preliminar para celebrarse en modalidad videograbación el día 24 de julio de 2020, sin embargo, a petición de la representación fiscal, para realizar una diligencia ofertada previamente en el dictamen de acusación, se volvió a reprogramar para el 19 de noviembre de 2020, en modalidad virtual. No obstante, lo anterior, dicho señalamiento se dejó sin efecto para realizar entrevistas solicitadas por la defensa y por manifestar que no podría asistir a la diligencia. Por ello, se reprogramó para el 14 de enero de 2021, pero la defensa solicitó que se dejara sin efecto la diligencia por ser nexo de COVID-19, reprogramándose nuevamente para el 3 de marzo de 2021.

La defensa particular solicitó que la audiencia no se llevara a cabo por no contar con las entrevistas solicitadas a la representación fiscal, fijándose como nueva fecha el 10 de marzo de 2021, misma en la que se celebró la audiencia preliminar, luego se emitió auto de apertura a juicio y se ratificó la detención provisional el 24 de marzo de 2021, remitiéndose ese mismo día el expediente al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.

Alega que la audiencia preliminar se frustró por diversos motivos que no son atribuibles a la autoridad judicial y que las reprogramaciones se realizaron según la disponibilidad de la agenda que se encuentra saturada por la carga laboral.

4. A. Uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador remitió oficio 1074-3 de fecha 10 de diciembre de 2021, mediante el cual adjuntó documentación e informó que el proceso penal fue recibido en esa sede el 24 de marzo de 2021.

Expone que se señaló como fecha para la vista pública el 29 de junio de 2021, según disponibilidad de audiencias de forma virtual, la cual no pudo llevarse a cabo pues el defensor particular no llegó pese a su legal notificación, asimismo la fiscal informó que se encontraba mal de salud y por tanto no podría comparecer. La diligencia se reprogramó para el 23 de agosto de 2021, solicitándose la asistencia de defensor público en defecto de la defensa particular.

El 18 de agosto de 2021 se tuvo como defensor particular al abogado EEHV, quien actuaría en sustitución de cualquier otro nombrado con anterioridad, este solicitó nuevo señalamiento de la vista pública por no tener conocimiento del caso, petición que fue reiterada el 20 de agosto de 2021, declarada no ha lugar en ambas ocasiones.

No obstante, la audiencia no se celebró pues la defensa particular no se presentó, por lo que se le previno para que justificara su inasistencia, la fiscalía informó que llegaría tarde por encontrarse la oficina fiscal sometiéndose a una prueba para detectar COVID-19, por lo que se le esperó hasta las once horas; sin embargo, aun cuando se contaba con defensor público presente, no se pudo esperar más pues tenía otras diligencias, señalándose como nueva fecha el 4 de noviembre de 2021.

Aclara que el 30 de agosto de 2021 se tuvo por no justificada la inasistencia del defensor particular, en el mismo proveído se amplió el plazo de la detención provisional por ochenta y tres días más –en virtud de la suspensión de los plazos procesales–, por lo que la medida cautelar vencería el 18 de noviembre de 2021. El día señalado para la audiencia también estuvo ausente la defensa particular, por lo que se reprogramó para el 11 de noviembre de 2021, fecha en que tampoco se presentó la defensa –particular ni pública– fijándose el día 17 de noviembre de 2021, en el cual efectivamente se instaló la audiencia de forma presencial, pero a petición de la defensa se suspendió por la ausencia de un testigo de descargo, reanudándose el 19 de los mismos mes y año, donde se dio a conocer el fallo condenatorio, notificándose en dicho acto la sentencia mediante la entrega de copia de la misma.

En la sentencia se resolvió ampliar el plazo de la detención provisional por dos meses más para la tramitación de los recursos que se interpusieren. Aclara que dicha autoridad judicial ha cumplido con los términos procesales, dentro de lo que la pandemia por la COVID-19 ha permitido, tomando en consideración la disponibilidad de salas de audiencia virtuales, reiterando que los motivos por los que la vista pública no se instaló en las fechas decididas responde a causas ajenas a la sede judicial y atiende mayormente a las inasistencias de la defensa particular. Asimismo, informa que se presentó recurso de apelación de la sentencia, por lo que se procedió a emplazar a la representación fiscal para su contestación.

B. Mediante oficio 682-3, de fecha 20 de junio de 2023, el mismo juez informó que el recurso de apelación al que había hecho referencia fue resuelto por los magistrados de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, el 6 de mayo de 2022, quienes confirmaron la sentencia condenatoria y ampliaron la detención provisional del favorecido por doce meses, la cual vencería el 27 de noviembre de 2022. Agrega que fue interpuesto recurso de casación, declarado inadmisible por los magistrados de la Sala de lo Penal el 18 de noviembre de 2022.

Indica que, el 8 de diciembre de 2022, declaró firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria contra el señor *GR*, quien actualmente se encuentra a la orden del Juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada con la cesación de los efectos del acto reclamado (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. Se ha señalado que la existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación *o cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. 1. El cuestionamiento del peticionario consiste, básicamente, en la existencia de dilaciones injustificadas, alegando una serie de acontecimientos que retrasaron la celebración de la audiencia preliminar y la vista pública en contra de la persona favorecida, mientras esta cumplía detención provisional, impactando así el procesamiento penal.

Ahora bien, de lo informado y los datos contenidos en la certificación del proceso penal agregada a este hábeas corpus se constata que la detención provisional del señor *JRGR* fue cesada al haber variado su condición ju-

rídica, de imputado a condenado, debido a la resolución emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de noviembre de 2022, en la cual se declaró inadmisible el recurso de casación presentado, por lo que la sentencia emitida en su contra adquirió firmeza el 8 de diciembre de ese año e inició el cumplimiento de la pena de prisión, después de haberse promovido este hábeas corpus, ante ello, la restricción de libertad en la que ahora se encuentra el señor *GR* depende de la sanción impuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal del beneficiado reclamada en este hábeas corpus –la detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin su objeto, generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad a lo estipulado el artículo 31 No. 5 de la LPC.

2. No obstante, debe recordarse a las autoridades judiciales que el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 Cn.–, garantiza que todo procesado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas no solo coartan desproporcionalmente el derecho constitucional de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa impidiendo al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal.

Aunque no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional, pues la jurisprudencia ha determinado algunos presupuestos para calificar los conceptos de plazo razonable o dilación indebida, la autoridad judicial debe procurar no exceder los términos de los procesos a través de los denominados "plazos muertos" –que no constituyen un mero incumplimiento al plazo procesal sino aquellos que tengan como característica su falta de justificación–, ya que su existencia vulnera el derecho de defensa –12 Cn.–, al no permitir al interesado, ante el estado de suspensión del proceso, hacer uso de los mecanismos que se encuentran a su alcance para definir su situación jurídica –sentencia del 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018–.

Asimismo, si bien esta sala ha reconocido que la carga laboral de un tribunal puede ser considerada como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, ello solo aplica para algunos supuestos, según las circunstancias comprobables de cada proceso; en todo caso, deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece el justiciable para ponderar la naturaleza de

la demora de la autoridades en responder o decidir los litigios sometidos a su conocimiento –sentencia de 24 de noviembre de 2021, hábeas corpus 368-2019–.

V. Cabe añadir como aspecto final que en el presente caso se ha verificado que en el Juzgado de Instrucción de Mejicanos se recibió el proceso penal el 6 de septiembre de 2019, otorgándose un plazo de instrucción de tres meses que concluiría el 10 de diciembre de 2019, presentándose la acusación el 3 de enero de 2020.

Asimismo, consta el señalamiento para audiencia preliminar el 4 de mayo de 2020 –casi cuatro meses después– por ser la fecha más próxima que se encontraba disponible en la agenda de trabajo; posteriormente, atendiendo a la emergencia nacional por COVID-19 y la suspensión de plazos procesales, esta se reprogramó para el 24 de julio de 2020, señalamiento que también fue dejado sin efecto a petición de la representación fiscal en virtud de existir una diligencia pendiente, reprogramándose para el 19 de noviembre de 2020 –casi cuatro meses después– y luego para el 24 de los mismos mes y año.

De igual forma, la audiencia no se realizó y se reprogramó –a solicitud de la defensa, por requerir entrevistas de testigos en dos ocasiones– para el 14 de enero de 2021, luego para el 3 de marzo de 2021 y finalmente se celebró el 10 de marzo de 2021, suspendiéndose para emitir la resolución el 19 de marzo de 2021, transcurriendo –por tanto– desde que el proceso fue recibido en el Juzgado de Instrucción de Mejicanos y se dictó auto de instrucción formal –6 de septiembre de 2019– hasta que se celebró la audiencia preliminar –10 y 19 de marzo de 2021–más de dieciocho meses.

Debido a las irregularidades señaladas y con el objeto que se indague si lo acontecido tiene o no justificación por parte de las juzgadoras que han fungido en los periodos señalados como juezas instructoras en Mejicanos, es procedente certificar la presente resolución a la Directora de Investigación Judicial de esta Corte.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución, 31 y 65 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el señor KJGO a favor del señor *JRGR*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. Certifíquese la presente resolución a la Directora de Investigación Judicial de esta Corte, para los efectos legales correspondientes.

3. *Notifíquese*

4. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

557-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día cuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los licenciados Silvia Carolina Ordoñez García y José Manuel Álvarez Aguirre, a favor del señor *DEDM*, procesado por el delito de robo agravado.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. Los solicitantes refieren que el imputado se encuentra privado de libertad en el Centro Penal de Apanteos, en virtud de que fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán el día 9 de noviembre de 2018, pero al no estar de acuerdo con dicha sentencia interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, Ahuachapán, el 22 de febrero de 2019, confirmado la decisión.

Por lo que, aún inconformes, interpusieron recurso de casación el 20 de marzo de 2019, el cual a la fecha no ha sido resuelto por la Sala de lo Penal, no obstante haber transcurrido más de un año desde su presentación.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), se emitió auto de exhibición personal, se prescindió del nombramiento de juez ejecutor y a la autoridad demandada se le requirió informe de defensa, certificación de ciertos pasajes del proceso penal e informara sobre el estado actual de la causa y la situación jurídica del imputado.

3. El secretario de la Sala de lo Penal, licenciado Francisco Martell, con fecha 27 de mayo de 2021, informó que el proceso con referencia 187C2019, instruido contra el imputado *DEDM*, cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, por lo que su situación jurídica se encuentra definida, ya que el fallo está firme. Adjunta a su informe, certificación de: *i)* resolución que resuelve el recurso de casación interpuesto por los defensores particulares del procesado *DM* y *ii)* los actos de comunicación realizados.

En informe del 31 de mayo de 2023, el aludido secretario reiteró los términos de lo indicado.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional relacionada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestima-

toria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto,* después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. 1. Según la prueba incorporada a este hábeas corpus, en el proceso penal del señor *DEDM* consta que, los magistrados de la Sala de lo Penal de esta corte, emitieron resolución el 26 de octubre de 2020, en la cual declararon inadmisible el segundo motivo alegado en el recurso interpuesto por la defensa técnica del favorecido y se declaró no ha lugar a casar la sentencia condenatoria dictada en contra del justiciable por un tribunal de sentencia y confirmada por la Cámara de la Tercera Sección de Occidente con sede en Ahuachapán, de la cual se asevera adquirió firmeza.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal y sin información contraria a lo antes detallado, debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal del beneficiado, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por los peticionarios y, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el artículo 31 No. 5 LPC.

2. No obstante, debe recordarse a las autoridades judiciales que el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 Cn.–, garantiza que todo procesado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas no solo coartan desproporcionalmente el derecho constitucional de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa impidiendo al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal.

Aunque no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional, pues la jurisprudencia ha determinado algunos presupuestos para calificar los conceptos de plazo razonable o dilación indebida, la autoridad judicial debe procurar no exceder los términos de los procesos a través de los denominados "plazos muertos" –que no constituyen un mero incumplimiento al plazo procesal sino aquellos que tengan como característica su falta de justificación–, ya que su existencia vulnera el derecho de defensa –12 Cn.–, al no permitir al interesado, ante el estado de suspensión del proceso, hacer uso de los mecanismos que se encuentran a su alcance para definir su situación jurídica –sentencia del 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018–.

Asimismo, si bien esta sala ha reconocido que la carga laboral de un tribunal puede ser considerada como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, ello solo aplica para algunos supuestos, según las circunstancias comprobables de cada proceso; en todo caso, deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece el justiciable para ponderar la naturaleza de la demora de la autoridades en responder o decidir los litigios sometidos a su conocimiento –sentencia de 24 de noviembre de 2021, hábeas corpus 368-2019–.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por los abogados Silvia Carolina Ordoñez García y José Manuel Álvarez Aguirre, a favor del señor *DEDM*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L.J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

640-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado *********, en contra de una juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla y los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, a favor del señor *DJEM*, procesado por el delito de privación de libertad agravada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante refiere que el señor *EM* fue detenido el 28 de junio de 2018, la vista pública se realizó los días 12 y 19 de septiembre de 2019, se emitió sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en apelación, siendo que los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro pronunciaron decisión el 19 de marzo de 2020, declararon nula la sentencia en cuanto a la fundamentación y ordenaron el reenvío del proceso penal al tribunal de origen para que elaborara una nueva sentencia.

Agregó que, al cumplirse los veinticuatro meses de plazo máximo de la detención provisional, solicitó a la juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla audiencia especial para cesar la medida cautelar, la cual fue denegada por no tener el proceso.

Añadió que la cámara, por medio de oficio 559, le ordenó a la juez de sentencia analizar si procede o no extender el plazo de la detención provisional tomando en cuenta el tema de la suspensión de plazos procesales causado por la emergencia nacional de la pandemia del COVID19, consecuentemente, la autoridad judicial extendió por doce meses más la privación de libertad, ya que estaba pendiente si las partes harían uso del recurso de casación.

Al respecto, considera que se vulnera el derecho de libertad física del señor *EM* porque la decisión que amplió el plazo de la medida cautelar carece de debida fundamentación, realizándola "de manera antojadiza" y, además, se negó a celebrar audiencia de cesación de detención provisional, privándole del derecho de impugnar si la decisión no fuera favorable a su representado. Por otra parte, considera que los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro debieron conocer de la audiencia de revisión de la medida precautoria, ya que ellos tenían el expediente judicial.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) se emitió auto de exhibición personal y se prescindió del nombramiento de juez ejecutor, requiriendo de forma directa este tribunal informes a las autoridades correspondientes, junto con la documentación pertinente.

3. A. Uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, por informe de fecha 27 de mayo de 2021, manifestó —en lo pertinente— que en cumplimiento de orden de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, por decisión del 21 de julio de 2020 extendió por doce meses más la detención provisional, por estar pendiente el recurso de casación. Esto lo hizo pese a considerar que la competencia para dicha actuación era del tribunal de alzada.

La cámara anuló la sentencia condenatoria y ordenó su fundamentación, siendo que de esta nueva decisión se interpuso apelación, remitiéndose el proceso al tribunal respectivo; por lo que considera que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del señor *EM*.

B. Posteriormente, el juez remitió oficio 2626 por medio del cual informó —entre otros aspectos— que por resolución del 3 de febrero de 2022 declaró ejecutoriada la sentencia condenatoria, remitiéndose la certificación al Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de La Libertad; por lo cual el proceso penal se encuentra en fase de ejecución penal y la situación jurídica del condenado, definida.

4. Los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, por medio de informe de fecha 27 de mayo de 2021, expresaron que existe norma expresa que no ha sido declarada inconstitucional, donde el legislador establece que es el juez o tribunal de sentencia a quien le corresponde resolver todas aquellas cuestiones distintas al recurso de apelación (art. 477 inc. 2° del Código Procesal Penal, CPP); por lo que no es competencia de la cámara revisar cuestiones atinentes a la imposición o sustitución de medidas cautelares.

En ese sentido, se le ordenó a la juez de sentencia que resolviera lo que correspondía sobre dicho aspecto, habiendo ampliado el plazo de la detención provisional por doce meses más por resolución del 21 de julio de 2020.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional referida al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado —como elemento de la pretensión— es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o cese de los efectos del acto, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal —acto impugnado— cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión —que la origina, mantiene y concluye—, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019, respectivamente).

IV. En el presente caso se alega la falta de fundamentación de la ampliación de la detención provisional del favorecido; al respecto, uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla manifestó que, por auto del 3 de febrero de 2022, se declaró firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria dictada en contra del beneficiado, por lo que la condición jurídica del señor *DJEM* varió de imputado a condenado, dependiendo actualmente su restricción de libertad de la pena de prisión impuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal cuestionada —detención provisional—, este proceso constitucional se queda sin su objeto, generando la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario y, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

Sobreséese el presente proceso habeas corpus promovido a favor del señor *DJEM*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

744-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el abogado DEPL a favor del señor *JMAM*, procesado por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas.

Analizada la documentación se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El peticionario alega que su defendido fue capturado el 18 de junio de 2018 y posteriormente condenado, decisión contra la que se interpuso recurso de apelación y posteriormente el de casación. Considera que aquel se encuentra en una privación de libertad ilegal por haberse excedido el plazo de veinticuatro meses de la detención provisional sin que exista sentencia condenatoria firme ni prórroga de la citada medida cautelar.

2. El 10 de enero de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió informe de defensa a la autoridad demandada, junto con el estado actual del proceso y situación jurídica del imputado.

3. El secretario de la Sala de lo Penal remitió oficio por medio del cual informó que el proceso con referencia 408C2020, seguido contra *JMAM*, ya cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, por lo que la situación jurídica del referido condenado se encuentra definida, al encontrarse firme el fallo por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Adjunto al mismo remite certificación de la sentencia pronunciada por dicha sala y diligencias de notificación.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado, en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación *o cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimiento de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 110-2019–.

IV. De lo informado por la autoridad relacionada y según la documentación que consta en el expediente, se verifica que, luego de promovido el presente proceso constitucional y durante el trámite del mismo, la Sala de lo Penal emitió resolución el 23 de septiembre de 2021, en la cual declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa del señor *JMAM* confirmando, así, la condena del imputado por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado.

En consecuencia de lo anterior, la actual restricción de su libertad corresponde al cumplimiento de la pena de prisión y no a la detención provisional de la cual se reclamó el exceso en su límite máximo legal.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal objetada en este hábeas corpus –detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin objeto; generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad con el art. 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el abogado DEPL a favor del señor *JMAM*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese*.

"""—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

182-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el licenciado LAAP, en contra de los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador y de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a favor de los señores: *1) CGLR, 2) CRER, 3) ARM, 4) DMHC, 5) DFRA, 6) FECG,* procesados por el delito de cooperación en el tráfico de drogas; *7) RDGQ, 8) EDES y 9) KEAL,* procesados por el delito de tráfico ilícito.

Analizada la documentación se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El peticionario refiere que, a sus defendidos, el Juez de Paz de San Luis La Herradura les decretó detención provisional el día 15 de diciembre de 2017, decisión que fue ratificada por un juez de primera instancia. Posteriormente, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, mediante resolución de fecha 11 de diciembre de 2019, amplió dicha medida cautelar por doce meses más sin estar facultado para ello, pues aún no se había habilitado la fase de los recursos debido a que la sentencia no se había dictado, sino que se emitió hasta el 17 del mismo mes y año.

Relata que el proceso fue remitido a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde, el 22 de marzo de 2021, solicitó el cese de la privación de libertad por haber superado los treinta y seis meses que regula el artículo 8 inciso 3° del Código Procesal Penal, pero no ha recibido respuesta y tampoco se ha definido la situación jurídica de los imputados.

2. El 12 de agosto de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió cierta documentación del expediente penal así como informe de defensa a las autoridades demandadas, del estado actual del proceso y la situación jurídica de los imputados.

3. El secretario de la Sala de lo Penal, licenciado Francisco Martell, remitió el oficio de fecha 26 de agosto de 2022, por medio del cual informó que el proceso con referencia 75C2021, ya cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, indicando además, que la situación jurídica de los señores *CGLR, CRER, ARM, DMHC, DFRA, FECG, RDGQ, EDES y KEAL,* se encuentra definida, ya que dicho fallo está firme. Adjuntó al informe certificación de ciertos pasajes del proceso penal.

4. La jueza suplente del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, licenciada MLSA, mediante el oficio 6206 del 30 de agosto de 2022, informó –en lo pertinente– que la causa penal fue recibida por resolución del 11 de marzo de 2019, llevándose a cabo la vista pública hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, luego de múltiples reprogramaciones. La sentencia condenatoria emitida fue recurrida y la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó dicha decisión; posteriormente, por resolución del 28 de abril de 2021, la Sala de lo Penal emitió decisiones de inadmisibilidad y de no ha lugar a casar la sentencia impugnada.

En razón de ello, por proveído del 9 de agosto de 2021 se declaró firme dicha sentencia y, el 10 de agosto de 2021, se remitió certificación al Juez Quinto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador.

Concluyó que los imputados se encuentran cumpliendo la condena impuesta, la cual es controlada por el citado juez de ejecución penal. Adjuntó a su informe ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado, en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestima-

toria; en ese sentido, la desaparición, invalidación *o cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimiento de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 110-2019–.

IV. De lo informado por las autoridades relacionadas y según la documentación que consta en el expediente, se verifica que, la detención provisional de los señores *CGLR, CRER, ARM, DMHC, DFRA, FECG, RDGQ, EDES y KEAL* fue cesada al haber variado su condición jurídica, de imputados a condenados, debido a la resolución emitida por la Sala de lo Penal el 28 de abril de 2021 –un día después de promovido este hábeas corpus–, en la cual declaró inadmisible el primer motivo alegado por la defensa de los procesados y declaró no ha lugar a casar la resolución impugnada, por el segundo motivo, confirmando, así, la condena de los imputados por los delitos de cooperación en el tráfico de drogas y tráfico ilícito. La sentencia se declaró firme el 9 de agosto de 2021.

En razón de lo anterior, la actual restricción de su libertad corresponde al cumplimiento de la pena de prisión y no a la detención provisional de la cual se reclamó el exceso en su límite máximo legal.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal objetada en este hábeas corpus –detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin objeto; generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad con el artículo 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el abogado LAAP a favor de los señores: *1) CGLR, 2) CRER, 3) ARM, 4) DMHC, 5) DFRA, 6) FECG, 7) RDGQ, 8) EDES y 9) KEAL*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

357-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cinco minutos del día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el licenciado Hugo Alberto Ibarra Benítez, a favor de la señora *DAA*, procesada por el delito de extorsión agravada.

Analizada la documentación se realizan las siguientes consideraciones:

I. 1. El peticionario refiere que su defendida fue capturada el 3 de abril de 2019 y condenada por un juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, decisión que fue recurrida en apelación ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, en donde mediante resolución pronunciada el 5 de octubre de 2020 se confirmó su condena; posteriormente, interpuso recurso de casación el cual a la fecha no ha sido resuelto, por lo que alega que su representada tiene más de veinticuatro meses en detención provisional, excediendo así el plazo máximo que la ley establece para dicha medida cautelar.

2. El 14 de noviembre de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió informe de defensa a la autoridad demandada, además, del estado actual del proceso y la situación jurídica de la imputada en relación con su libertad personal, así como de los documentos solicitados por este tribunal.

3. El secretario de la Sala de lo Penal, licenciado Francisco Martell, mediante el oficio de fecha 7 de diciembre de 2022, informó que el proceso con referencia 454C2020, seguido contra la señora *DAA*, ya cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, indicando, además, que la situación jurídica de la imputada se encuentra definida, ya que dicho falló está firme. Junto a su informe, remite certificación de ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado, en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación *o cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimiento de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 110-2019–.

IV. De lo informado por la autoridad relacionada y según la documentación que consta en el expediente, se verifica que, con fecha 18 de julio de 2022, los magistrados de la Sala de lo Penal emitieron resolución en la cual se declaró no ha lugar a casar la sentencia confirmatoria de condena emitida por el tribunal de segunda instancia, en el recurso de casación planteado por la defensa de la señora *AA*, confirmando, así, la condena de la imputada por el delito de extorsión agravada.

A razón de lo anterior, la actual restricción de su libertad corresponde al cumplimiento de la pena de prisión y no a la detención provisional de la cual se reclamó el exceso en su límite máximo legal por no estar definida su situación jurídica al encontrarse pendiente la decisión del aludido medio impugnativo.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, con la resolución del recurso de casación en el cual se desestimó lo planteado, la situación jurídica de la persona varió a condenada y, consecuentemente, la restricción a la libertad personal objetada en este hábeas corpus –detención provisional– cesó, lo anterior trae como consecuencia que este proceso constitucional se quede sin objeto; generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad con el artículo 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el abogado Hugo Alberto Ibarra Benítez a favor de la señora *DAA*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARÍA MARIBEL ALAS CERNA—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""""

56-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido contra los Jueces Primero de Paz y de Primera Instancia, ambos de Sensuntepeque, a su favor por el señor *JBC*, procesado por el delito de lesiones graves agravadas.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante expone que fue detenido el 10 de julio de 2018 y que la audiencia inicial se llevó a cabo el 13 de julio de 2018; sin embargo, desde esa fecha ha permanecido privado de libertad sin que se haya realizado la audiencia preliminar.

2. El 29 de junio de 2022 se decretó auto de exhibición personal a favor del beneficiado y conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), se nombró como jueza ejecutora a la licenciada **********, quien intimó a las autoridades demandadas y a las Jueces Especializadas de Instrucción y de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador –en adelante Jueza de Instrucción y Sentencia LEIV de San Salvador, respectivamente–.

En este sentido, en su informe expresó que la fiscalía presentó requerimiento ante el Juez Primero de Paz de Sensuntepeque, quien señaló audiencia inicial en la cual se ordenó la continuación del proceso, por ello, fue remitido al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción en mención, sin embargo, dicha autoridad se declaró incompetente y el 20 de julio de 2018 envió la causa a la Jueza de Instrucción LEIV de San Salvador, quien por auto del 10 de enero de 2020 recibió el proceso, aclarando que fue hasta esa fecha por la alta carga laboral.

Agrega que, mediante el auto del 22 de enero de 2021, la jueza de instrucción revocó la detención provisional e impuso medidas cautelares al imputado y, por resolución del 15 de marzo de ese mismo año, ordenó su inmediata libertad, señalando el 8 de abril de 2021 para la celebración de la audiencia preliminar, en la que se resolvió auto de apertura a juicio.

Con relación a lo anterior, por auto del 30 de junio de 2021, la jueza de sentencia recibió el proceso, ordenó que el imputado continuara con las medidas sustitutivas impuestas a su favor y señaló la vista pública para el 15 de julio de 2021, sin embargo, se celebró hasta el 28 del referido mes y año, en la que se cambió la calificación jurídica de feminicidio agravado imperfecto a lesiones graves agravadas, declaró responsable al imputado, le impuso una pena de tres años de prisión pero se le concedió la suspensión condicional de su ejecución por el período de dos años, ordenando que el señor C se mantuviera en la libertad en la que se encontraba; en razón de lo anterior, por resolución del 2 de septiembre de 2021 se declaró firme y ejecutoriada la sentencia citada.

De lo expuesto, concluyó que existió vulneración al derecho de libertad del señor JBC. Agrega a su informe certificación de ciertos pasajes del proceso penal.

3. La Jueza Primera de Paz de Sensuntepeque –interina–, licenciada **********, mediante el oficio 79-07 del 21 de julio de 2022 reiteró lo informado por la jueza ejecutora sobre el trámite del proceso y dijo desconocer su estado actual.

Agrega únicamente copia simple de determinados pasajes del proceso penal, pues el expediente original fue remitido al Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque.

4. La Jueza de Primera Instancia de Sensuntepeque –interina–, licenciada *********, mediante el oficio 1576 del 22 de julio de 2022, informó –en lo pertinente– que la causa penal 63-2018-1 se llevó contra el favorecido, indicando que mediante auto del 20 de julio de 2018 se ordenó la modificación del delito de homicidio agravado tentado a feminicidio agravado tentado, a consecuencia de ello, se declaró incompetente para conocer del caso y lo remitió a la Jueza de Instrucción LEIV de San Salvador.

Aclara que se encuentra fungiendo como jueza interina desde el 15 de octubre de 2021, por lo que no suscribió ninguna actuación del proceso. Anexa copias simples de ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada con la cesación de los efectos del acto reclamado (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. Se ha señalado que la existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación *o cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. 1. En el supuesto en análisis se alega vulneración al derecho de libertad física en virtud de que el imputado *JBC* ha permanecido en detención provisional sin que se haya realizado la audiencia preliminar.

En atención a lo informado y los datos contenidos en la certificación del proceso penal agregada a este hábeas corpus se constata que la detención provisional del señor *C* fue cesada al ordenarse medidas cautelares distintas a esta y su puesta en libertad, según resolución del 15 de marzo de 2021. Además, el 28 de julio de 2021 la Jueza de Sentencia LEIV de San Salvador dictó en su contra sentencia condenatoria, concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de dos años e indicó que el acusado se mantuviera en libertad, decisión declarada firme y ejecutoriada el 2 de septiembre de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal del beneficiado reclamada en este hábeas corpus –la detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin su objeto, generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad a lo estipulado el artículo 31 No. 5 LPC.

2. No obstante, debe recordarse a las autoridades judiciales que el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 Cn.–, garantiza que todo procesado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas no solo coartan desproporcionalmente el derecho constitucional

de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa impidiendo al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal.

Aunque no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional, pues la jurisprudencia ha determinado algunos presupuestos para calificar los conceptos de plazo razonable o dilación indebida, la autoridad judicial debe procurar no exceder los términos de los procesos a través de los denominados "plazos muertos" –que no constituyen un mero incumplimiento al plazo procesal sino aquellos que tengan como característica su falta de justificación–, ya que su existencia vulnera el derecho de defensa –12 Cn.–, al no permitir al interesado, ante el estado de suspensión del proceso, hacer uso de los mecanismos que se encuentran a su alcance para definir su situación jurídica –sentencia del 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018–.

Asimismo, si bien esta sala ha reconocido que la carga laboral de un tribunal puede ser considerada como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, ello solo aplica para algunos supuestos, según las circunstancias comprobables de cada proceso; en todo caso, deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece el justiciable para ponderar la naturaleza de la demora de la autoridades en responder o decidir los litigios sometidos a su conocimiento –sentencia de 24 de noviembre de 2021, hábeas corpus 368-2019–.

V. Como aspecto final debe indicarse que, desde que el Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque remitió el proceso penal –23 de julio de 2018– a la Jueza de Instrucción LEIV de San Salvador, esta última tardó diecisiete meses con dieciocho días en recibirlo –a través de resolución del 10 de enero de 2020–, sin que se denote la complejidad del proveído emitido –auto de instrucción–, de lo cual, únicamente se alegó alta carga laboral.

Además, el 10 de enero de 2020 la jueza de instrucción emitió auto que señaló como fecha de finalización del plazo de instrucción el 11 de mayo de 2020, no constando la prórroga del citado plazo ni que la fiscalía haya presentado el dictamen correspondiente, sino que fue hasta el 22 de enero de 2021 que dicha jueza intimó al fiscal superior para que lo presentara, sin que se impulsara de oficio el procedimiento en ese período de tiempo –10 de enero de 2020 al 22 de enero de 2021, habiendo transcurrido nueve meses y diecinueve días.

De lo expuesto, se tiene que el imputado se encontró restringido de su libertad y en ese lapso de tiempo se omitió emitir una resolución de fondo o adoptar las medidas adecuadas para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las partes.

Por otra parte, desde que la Jueza de Instrucción LEIV de San Salvador –licenciada Amelia Carolina Velásquez Murillo– recibió el proceso y dictó el auto de instrucción formal –10 de enero de 2020– hasta que celebró la audiencia preliminar –8 de abril de 2021– transcurrió doce meses y siete días, sin que se justificara la complejidad de la causa penal.

Asimismo, se verifica que desde que se celebró la audiencia preliminar –8 de abril de 2021– hasta que fue remitido el proceso penal al juez de sentencia mediante el oficio de fecha 28 de junio de 2021, transcurrieron dos meses y veinte días más.

Debido a las irregularidades señaladas y con el objeto que se indague si lo acontecido tiene o no justificación, es procedente certificar la presente resolución a la Directora de Investigación Judicial de esta Corte.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución, 31 y 65 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente hábeas corpus promovido a su favor por el señor *JBC*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Certifíquese* la presente resolución a la Directora de Investigación Judicial de esta Corte, para los efectos legales correspondientes.

3. *Notifíquese* esta resolución de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente y la jurisprudencia constitucional, utilizando cualquier medio eficaz de comunicación y realizando las gestiones indispensables para cumplir tal fin, pudiendo incluso hacerlo a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

4. Oportunamente, *archívese*.

"""-A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARÍA MARIBEL ALAS CERNA—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

26-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional ha sido promovido contra omisiones del Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador y del Director del Complejo Penitenciario La Esperanza, a su favor por el señor *JCGL*, condenado por el delito de extorsión.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante expuso que, habiendo cumplido con los requisitos regulados en el art. 85 del Código Penal (CP), ha dirigido tres escritos al

juez penitenciario que demanda –aproximadamente en julio de 2018, en el año 2019 y agosto 2020–, para obtener la libertad condicional, sin que se le diera respuesta.

Agrega que, debido a un proyectil alojado en el lado derecho de su columna, se ve imposibilitado de movilizarse de forma normal y si bien recibe terapia para ello "[...] el tratamiento es irregular y requiero de acceso a un servicio de salud estable [...]" (sic).

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) se emitió auto de exhibición personal y se prescindió del nombramiento de juez ejecutor. Esta sala también ordenó como medida cautelar que el Director de la Penitenciaría Central La Esperanza garantizara que al favorecido se le proporcionara, de manera ininterrumpida, el tratamiento médico prescrito para su padecimiento de columna.

3. El Director del Complejo Penitenciario La Esperanza, por medio de oficio D-27-1, de fecha 9 de abril de 2021, en síntesis, señaló que el señor *JCGL* ingresó al sistema penitenciario el 28 de junio de 2008 y desde esa fecha se le realizaron las correspondientes evaluaciones médicas para establecer su estado de salud y tomar las acciones necesarias, concretamente que [...] se le ha brindado la atención médica oportuna y de acuerdo a los diagnósticos consultados [...]". Anexó copia del expediente clínico.

4. *A*. La jueza interina del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, licenciada *********, informó – mediante oficio número 4961, de 9 de abril de 2021 – que el señor *JCGL* se encuentra a su orden. Sostuvo que, mediante auto de 2 de diciembre de 2019, recibió escrito suscrito por el favorecido, por medio del cual solicitaba el inicio del proceso para la concesión del beneficio de libertad condicional, asimismo, requería se le notificara lo resuelto; en vista de la petición solicitó el dictamen al Consejo Criminológico Regional Central.

De manera que, al recibir el dictamen, en fecha 16 de septiembre de 2020, verificó que era desfavorable, por lo que no se reunían los requisitos del art. 85 CP, no obstante, era procedente –por el tiempo transcurrido– solicitar nuevo dictamen al mencionado consejo –conforme lo establece el art. 350 del Reglamento de la Ley Penitenciaria– e iniciar el trámite de libertad condicional ordinaria por el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena.

En cuanto a lo alegado por el peticionario respecto a que remitió tres solicitudes sobre el beneficio penitenciario, la juzgadora aclara que al realizar una búsqueda exhaustiva únicamente se encontró un escrito, el cual fue resuelto en los términos antes indicados, asimismo, aclara que por un "error puramente humano" no se le realizaron las notificaciones al favorecido de la resolución respectiva, sin embargo, mediante resolución del 9 de abril de 2021, se ordenó realizar personalmente tal comunicación.

Finalmente informa que, con respecto a la condición de salud del señor *JCGL*, no ha tenido conocimiento, por lo que no cuenta con el expediente clínico de este y solicita se declare no ha lugar la vulneración de los derechos fundamentales de integridad física y salud de aquel.

B. Mediante oficio 8463, de fecha 3 de julio de 2023, la misma jueza informó que el 25 de mayo de este año, se ordenó la libertad del señor *GL*, asimismo, que el 16 de junio este se presentó a esa sede judicial para iniciar el trámite de cierre del expediente y el 29 de los mismos mes y año, le entregaron "oficios de extinción de responsabilidad penal y rehabilitación de derechos de ciudadano", por tanto, ya no existe expediente activo a su nombre. Anexó a su oficio copia certificada de los pasajes pertinentes.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional relacionada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. 1. Según la documentación incorporada a este hábeas corpus, en el proceso de ejecución penal del señor *JCGL*, consta que: *i)* mediante oficio número 7006 de fecha 25 de mayo de 2023, la Jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, ordenó la libertad del favorecido a partir de las primeras horas del día 14 de junio de ese año, en virtud que su pena se cumpliría el 13 de junio, según el cómputo realizado en esa sede judicial; *ii)* por auto del 16 de junio de 2023, se tuvo por

cumplida la pena de quince años impuesta al señor *GL*, asimismo se declaró extinguida la responsabilidad penal y *iii)* según auto del 29 de junio de 2023, le fueron rehabilitados los derechos de ciudadano al favorecido y se libraron los oficios respectivos, en consecuencia, se archivó el expediente.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal del beneficiado reclamada –la pena de prisión–, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

2. No obstante, debe recordarse a las autoridades judiciales que el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho a la protección jurisdiccional –artículo 2 Cn.–, garantiza que todo procesado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las dilaciones indebidas no solo coartan desproporcionalmente el derecho constitucional de libertad física, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa impidiendo al procesado conseguir –con la celeridad que el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga fin del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de libertad, que puede comprender el enjuiciamiento penal.

Aunque no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con trascendencia constitucional, pues la jurisprudencia ha determinado algunos presupuestos para calificar los conceptos de plazo razonable o dilación indebida, la autoridad judicial debe procurar no exceder los términos de los procesos a través de los denominados "plazos muertos" –que no constituyen un mero incumplimiento al plazo procesal sino aquellos que tengan como característica su falta de justificación–, ya que su existencia vulnera el derecho de defensa –12 Cn.–, al no permitir al interesado, ante el estado de suspensión del proceso, hacer uso de los mecanismos que se encuentran a su alcance para definir su situación jurídica –sentencia del 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018–.

Asimismo, si bien esta sala ha reconocido que la carga laboral de un tribunal puede ser considerada como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, ello solo aplica para algunos supuestos, según las circunstancias comprobables de cada proceso; en todo caso, deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece el justiciable para ponderar la naturaleza de la demora de la autoridades en responder o decidir los litigios sometidos a su conocimiento –sentencia de 24 de noviembre de 2021, hábeas corpus 368-2019–.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado a su favor por el señor *JCGL*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L.J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

555-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido a su favor por el abogado *LASR*, en contra de actuaciones del Fiscal General de la República.

Analizado el proceso y considerando:

I. El solicitante expone que en el proceso con referencia fiscal 1273-UDV-2015 seguido contra el señor EAAC y otros, por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, compareció como defensor en el anticipo de prueba consistente en la declaración del testigo clave "Mirely", iniciado el día 11 de junio de 2019 en el Juzgado Especializado de Instrucción *C* de San Salvador, en cuyo desarrollo realizó objeciones a diversas preguntas realizadas por la fiscal del caso, impidiendo que el interrogatorio se desarrollara según lo esperado por aquella; agrega que el acto continuó el día siguiente, teniendo que ausentarse por otros compromisos profesionales y al incorporarse fue informado que el mencionado testigo había atribuido a "un abogado S" conductas ilícitas relacionadas con la divulgación de la identidad de víctimas a pandilleros, lo cual resultó con la muerte del testigo clave "Cojute".

Afirma que él es el único abogado con ese apellido y que nunca tuvo contacto con dicha persona fallecida, por lo que la vinculación con ese señalamiento fue producto "del malestar aparentemente experimentado por la fiscal del caso".

Indica que denunció ese señalamiento "falso y abusivo" ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ante la Unidad de Auditoría Fiscal de la Fiscalía General de la República, exigiendo que se descartara una eventual investigación penal en su contra, sin embargo sus planteamientos fueron desestimados.

Al respecto menciona que la actuación que reclama se ha materializado en la resolución del día 27 de febrero de 2020 dictada por el Auditor Fiscal –que declara sin lugar su demanda contra la fiscal Georgina Trejo de Sánchez y ordena que se inicie una investigación penal "en contra de quien resultare responsable" – y en la decisión del recurso de apelación contra dicho proveído, pronunciada por el despacho del Fiscal General de la República del día 11 de junio de 2020, en la cual se confirma la resolución referida.

En ese orden, alega que al iniciarse una investigación penal "supuestamente indeterminada" de hechos referidos a su persona, se vulnera su derecho a la libertad física no solo en cuanto a la posibilidad de ser sujeto a una orden administrativa de detención, sino también en cuanto a que tal actuación fue ordenada sin examinar previamente el contexto de su función como defensor de derechos, lo cual puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de esa labor que también afectaría el desempeño de otros defensores ante la utilización de declaraciones de coimputados o "criteriados" como aparente reacción fiscal contra el trabajo de los abogados en los procesos penales, con lo que se estaría criminalizando tal profesión.

Indica que conoce que esta sala ha rechazado otorgar protección mediante un hábeas corpus ante meras iniciaciones de investigaciones penales, pero su caso es diferente pues el acto reclamado "se ha ordenado omitiendo aplicar los controles exigidos por la Constitución para salvaguardar la función de defensa de derechos que, como otros defensores de derechos en distintas materias (ambiental, LGBTI, mujeres, etc.), ejercemos en el proceso penal quienes somos designados como defensores técnicos de confianza".

Al respecto señala que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el 8o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se orientan a prevenir que la criminalización de la defensa técnica funcione como un mensaje de inseguridad para todos los abogados que ejercen la defensa penal "que ante cualquier susceptibilidad de los profesionales de la acusación, estos podrían recurrir a formas impropias de imputación para perseguir a los abogados como supuestos colaboradores de la actividad delictiva atribuida a otras personas, con base exclusiva en un coimputado que los incrimine sin ningún elemento corroborativo".

Además refiere que la ONU, en sus Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal ha establecido que: "El Estado no debe injerirse en la organización de la defensa del beneficiario de la asistencia jurídica, ni en la independencia del proveedor de asistencia jurídica" y que "Los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar su trabajo de manera eficaz, libre e independiente".

Por lo anterior, solicita como medida cautelar que esta sala ordene al Fiscal General de la República que se abstenga de realizar la investigación penal en su contra, en tanto se tramita el presente proceso constitucional.

II. 1. Por resolución del 28 de septiembre de 2020, se decretó auto de exhibición personal a favor del abogado *LASR*, se nombró como jueza ejecutora a ********** y se emitió medida cautelar consistente en que el Fiscal General de la República, en caso de, realizar cualquier investigación relacionada con el peticionario, debía hacerlo de acuerdo a los principios y directrices citados en el auto de exhibición personal y conforme a la jurisprudencia de esta sala.

2. La delegada de este tribunal intimó a la autoridad demandada e indica que inicialmente dicha diligencia no se pudo realizar pues la recepcionista de la fiscalía le manifestó que para ser recibida tenía que pasar por proceso de análisis de los colaboradores jurídicos, no obstante completó su diligencia el día posterior, siendo atendida por la apoderada del Fiscal General de la República, quien le proporcionó el expediente fiscal con referencia 195-AFUP-2019-4, en el que verificó los escritos del solicitante en relación a la "abstención de uso institucional en su contra", así como las resoluciones respectivas.

Además solicitó al Juez Especializado de Instrucción "C" de San Salvador la documentación señalada en el auto de exhibición personal.

Concluye su informe indicando que a la fecha no existe un proceso o investigación contra el licenciado *SR*, pero existe una orden dirigida a la Unidad de Recepción de Denuncias de la Oficina Fiscal de San Salvador, para que abra expediente de investigación penal en contra de quien resulte responsable.

3. El Juez Especializado de Instrucción "*C*" de San Salvador por medio del oficio 2940-C4-60-018, de fecha 1 de diciembre de 2020, remitió la documentación que le fue requerida en el auto de exhibición personal.

4. El día 2 de diciembre de 2020 el Fiscal General de la República rindió el informe que le fue requerido e indicó que consultó el registro que posee la fiscalía sobre las investigaciones penales a nivel nacional y no existe registro de investigación penal en contra del abogado *SR*. Además, señala que consultó a la Unidad Fiscal de Delitos de Administración de Justicia sobre la existencia de algún expediente en contra del aludido profesional por el delito de divulgación de la imagen o revelación de datos de personas protegidas y dicha unidad indicó que si bien existe una investigación penal iniciada debido a una indagación preliminar de la Unidad de Auditoría Fiscal, dicho expediente se encuentra en fase de investigación para deducir responsabilidad penal en contra de quien se logre individualizar, de manera que no existe imputación en contra del referido abogado ni se ha girado una orden administrativa de detención.

Adjuntó a su informe la documentación de respaldo.

III. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional referida a la falta de agravio efectivo (IV) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (V).

IV. Esta sala ha sostenido que el proceso constitucional de hábeas corpus está destinado a brindar una protección reforzada al derecho fundamental de libertad personal ante restricciones, amenazas o perturbaciones ilegítimas por ser contrarias a la Constitución, ejercidas por parte de autoridades judiciales o administrativas o particulares.

Por tanto, se exige que la pretensión contenga una posible afectación al derecho aludido, que esté aconteciendo al momento de promoverse –o que esté a punto de acontecer– y que se deba a una actuación u omisión proveniente de alguno de los sujetos señalados. Pero de advertirse la falta de dicho presupuesto en el transcurso del proceso la petición deberá sobreseerse –sobreseimiento del 8 de octubre de 2021, hábeas corpus 80-2019–.

V. En este hábeas corpus el abogado *LASR* alega que se inició una investigación penal "supuestamente indeterminada" de hechos referidos a su persona, por la probable existencia del delito de divulgación de la imagen o revelación de datos de personas protegidas, lo cual, en su momento reclamó al Fiscal General de la República –por medio de apelación–, pero fue desestimada su queja, por lo que, considera, con ello se vulnera su derecho a la libertad física no solo en cua<nto a la posibilidad de ser sujeto a una orden administrativa de detención, sino también en cuanto a que la actuación ordenada puede producir un efecto disuasorio en el ejercicio de su labor profesional.

Sin embargo, al verificar la documentación incorporada, así como el informe rendido por el Fiscal General de la República, se tiene que, contrario a lo manifestado por el abogado SR, se ha constatado que a nivel nacional no existe investigación administrativa o proceso penal alguno en su contra. De manera que, tanto al momento de promover este hábeas corpus –1 de julio de 2020, como de manera posterior (por no haberse informado a esta sede lo contrario) no existe la afectación al derecho de libertad derivada de las actuaciones atribuidas a la autoridad demandada.

Es así que el acto cuestionado en este proceso –orden de detención en vías de ejecución–, es inexistente. Aunado a ello, tampoco se ha informado de manera posterior alguna situación contraria que desvirtué los términos en los cuales la autoridad demandada se ha referido en su informe o que indique que ha variado la situación manifestada y que, por tanto, se requiera del control constitucional que esta sala provee.

De manera que, al no existir una orden de detención en vías de ejecución cierta cuya constitucionalidad pueda ser enjuiciada por esta sala, con el objeto de evitar que se materialice, es preciso rechazar en este estado la pretensión planteada, pues sobre la base del hábeas corpus preventivo este tribunal no puede adelantarse a suspender la emisión de una restricción de libertad física que pudiese ni siquiera llegar a ordenarse, pues dicha modalidad del aludido proceso lo que pretende es evitar que restricciones inconstitucionales ya emitidas efectivamente se ejecuten y provoquen un menoscabo material en el derecho tutelado a través de este proceso constitucional, constituyéndose así estas en el objeto de control del tribunal.

En ese sentido, en aplicación supletoria del art. 31 LPC, al existir un impedimento para decidir la pretensión de fondo, al carecer de un acto restrictivo de libertad que pueda ser controlado, por lo cual corresponde emitir un sobreseimiento.

Y es que, debe reiterarse que esta sala ha sostenido de manera consistente que en todo caso la sola tramitación de un proceso penal, no implica por sí, una limitación a la libertad de una persona, pues la operatividad del principio de presunción de inocencia, salvaguarda a quien se le imputa un delito, desde el inicio de las diligencias de investigación hasta la producción de un pronunciamiento definitivo –improcedencia del 23 de noviembre de 2016, hábeas corpus 449-2016–.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de hábeas corpus solicitado a favor del abogado *LASR* dada la inexistencia de un acto restrictivo de libertad que se derive de lo cuestionado. En consecuencia, cese la medida cautelar ordenada en este proceso constitucional.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

578-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado **********, en contra de un juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de

San Salvador, a favor del señor *WMLM*, procesado por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada y violación en menor e incapaz agravada continuada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El peticionario refiere que el señor *LM* fue condenado, el 11 de noviembre de 2019, a treinta y dos años de prisión por un juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador pero que dicha decisión fue recurrida en apelación y los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección del Centro resolvieron, el 17 de marzo de 2020, declarar nula la sentencia condenatoria por falta de fundamentación y ordenaron al juez que la pronunció la reprogramación de la audiencia, sin que se haya señalado fecha para ello.

Al respecto, el solicitante considera que no existe sentencia firme, ni medida cautelar impuesta por ningún tribunal, hechos o fundamentos donde se establezca que el señor *LM* deba estar guardando prisión, pues no ha sido oído ni vencido en juicio; por lo que se le vulnera su derecho a la libertad física.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales se emitió auto de exhibición personal y se prescindió del nombramiento de juez ejecutor, requiriendo de forma directa, este tribunal, informes a las autoridades correspondientes, junto con la documentación pertinente.

3. Uno de los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador rindió informe de defensa por medio de oficio 1880, de fecha 27 de mayo de 2021, informó que la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro por resolución del 15 de agosto de 2019 ordenó la reposición del juicio seguido en contra del señor *WMLM*, la cual se celebró el 11 de noviembre del mismo año en la que se dictó sentencia condenatoria en su contra; de esa decisión se recurrió en apelación y el imputado pasó a la orden de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, quien declaró nula la sentencia por falta de fundamentación y ordenó su reposición, omitiendo pronunciarse sobre la medida cautelar puesto que el plazo de la misma había finalizado el 3 de agosto de 2020.

Luego de emitida la sentencia condenatoria, la defensa particular interpuso nuevamente el recurso de apelación sin manifestar ninguna petición sobre la detención de su representado, por lo que el proceso se remitió a la cámara correspondiente. Por lo anterior, señaló que el fundamento de la detención provisional del señor *LM* deviene de las etapas anteriores al conocimiento de esa sede judicial.

4. El magistrado presidente de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro informó que no era posible remitir la certificación solicitada por esta sala porque el proceso penal se encontraba materialmente en la Sala de lo Penal, en virtud del recurso de casación interpuesto.

5. El secretario de la Sala de lo Penal informó, por oficio de 1 de junio de 2023, que la causa penal instruida contra el imputado *WMLM* cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, por lo que su situación jurídica se encuentra definida, ya que el fallo está firme.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional referida al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o cese de los efectos del acto, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019, respectivamente).

IV. 1. En el presente caso se alega la falta de pronunciamiento judicial sobre la detención provisional del favorecido; sin embargo, de lo informado y los datos contenidos en la documentación agregada a este hábeas corpus se constata que por resolución del 17 de mayo de 2022, los magistrados de la Sala de lo Penal declararon no ha lugar el recurso de casación interpuesto, por lo que la condena adquirió firmeza de ley siendo que la situación jurídica del señor *WMLM* varió de imputado a condenado, dependiendo actualmente su restricción de libertad de la pena de prisión impuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal cuestionada –detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin su objeto, generando la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por los peticionarios y, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

2. No obstante, debe recordarse la obligación de las autoridades de motivar sus providencias, sobre todo cuando impliquen restricción a derechos constitucionales. En ese orden, la imposición de la detención provisional exige la comprobación de ciertos presupuestos: apariencia de buen derecho y peligro en la demora, cuya concurrencia debe ser analizada por el juez competente, considerando circunstancias particulares en cada caso, por ejemplo la información objetiva de cargo y de descargo así como los arraigos que se acrediten, cuya fundamentación alcanza su máxima exigencia dada la presunción de inocencia del justiciable –sentencia del 19 de agosto de 2019, hábeas corpus 373-2018–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso hábeas corpus promovido a favor del señor *WMLM*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

455-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día siete de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora MVBM, a favor de la señora *AGMB*, contra actuaciones del Jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ilopango ubicada en boulevard San Bartolo, cantón San Bartolo.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La peticionaria afirma que el 13 de abril del corriente año, como a las 9 de la mañana, agentes policiales sin identificar se presentaron en su lugar de residencia, desde afuera de la casa llamaron a la señora *MB* y al salir la detuvieron; sostiene que le informaron que "era por trámites de investigación" y que pronto estaría de regreso en casa, pues la situación no era grave y estaba relacionada con su incomparecencia a tres citatorios. Según expresa al momento de la detención los agentes no mostraron ninguna documentación que la justificara y desconocen a qué citatorios se referían pues no han recibido ninguno.

Además, manifiesta que su hija continúa detenida en la delegación policial de Ilopango, lugar al que se han presentado y se les niega la información referida a los motivos de la detención y autoridad judicial a cargo, en dicho lugar les remitieron a la Procuraduría General de la República donde se les informó que la señora *MB* no aparece en sus registros, es decir no se le ha nombrado un defensor.

2. Por auto del 19 de junio de 2020 se decretó auto de exhibición personal a favor de la beneficiada y, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), se nombró como juez ejecutor al licenciado **********, quien intimó a las autoridades demandadas. La sala también ordenó como medida cautelar que, de manera prioritaria la favorecida fuera puesta, por parte de la policía, a la orden de la autoridad judicial o administrativa que ordenó su captura y le fuera designado abogado, asimismo, de no contarse con orden escrita de autoridad competente que la justifique debía verificar su inmediata libertad.

3. En su informe el juez ejecutor señaló que el Jefe de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Ilopango, le manifestó que la señora *AGMB* fue capturada por orden del Juez Segundo de Instrucción de Soyapango, a cuya disposición fue puesta luego de su detención. Afirmó que también intimó al juez instructor quien le expresó que la favorecida se encontraba a su orden, por atribuírsele el delito de homicidio agravado y recluida en las bartolinas de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Ilopango.

4. El comisionado EFAL, en su calidad de jefe de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Soyapango (Ilopango), mediante escrito del 30 de junio de 2020, informó que la favorecida fue capturada el 13 de abril de 2020, por orden judicial emitida por el Juez Segundo de Instrucción de Soyapango mediante oficio 601 del 19 de marzo de 2018, agregó que a la señora *MB*, se le hizo saber que poseía orden de captura, le leyeron sus derechos y le solicitaron un defensor público. Aclaró que la favorecida fue puesta a disposición del Juez Segundo de Instrucción de Soyapango, hasta el 27 de abril de 2020, debido a que por la pandemia de COVID-19 la sede judicial no se encontraba laborando con normalidad. Añadió que no ha existido vulneración constitucional alegada, pues su actuación fue dentro del marco legal.

A su oficio anexó documentación certificada que estimó pertinente.

5. Con respecto a la situación jurídica actual de la señora *AGMB*, la Jueza Segundo de Instrucción de Soyapango, licenciada **********, mediante oficio número 1798 de fecha 31 de marzo de 2023, informó que en audiencia preliminar celebrada el 21 de julio de 2020, se dictó auto de apertura a juicio, habiendo remitido el proceso junto con la favorecida al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

6. Por su parte uno de los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, licenciado **********, por medio de oficio número 3978 de fecha 20 de junio de 2023, hizo del conocimiento de esta sala que la señora AGMB, fue condenada mediante sentencia del 13 de abril de 2021 en calidad de cómplice no necesario en el delito de homicidio agravado, a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, la cual fue declarada firme y ejecutoriada el 23 de junio de ese año, en razón a ello actualmente se encuentra en la etapa de ejecución de la pena a la orden del Juez Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

Asimismo, adjuntó a su informe certificación de ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada con la cesación de los efectos del acto reclamado (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. Se ha señalado que la existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. En el presente caso se alega vulneración a los derechos de presunción de inocencia, defensa y libertad física de la señora *AGMB* porque presuntamente fue capturada para cumplir detención provisional sin documentación que amparara la misma, asimismo, porque a los familiares no se les brindó información en la delegación policial y en la Procuraduría General de la República les expresaron que esta no aparecía en sus registros.

Ahora bien, de lo informado y los datos contenidos en la certificación del proceso penal agregada a este hábeas corpus se constata que la señora *AGMB* fue capturada por tener orden de detención decretada por el Juez

Segundo de Instrucción de Soyapango, mediante acta del 19 de marzo de 2018, dada su incomparecencia a la audiencia preliminar señalada para esa fecha. La favorecida posteriormente a su aprehensión fue puesta a la orden de la aludida autoridad judicial.

Cabe añadir que, de ese proceso penal resultó condenada a pena de prisión en calidad de cómplice no necesaria en el delito de homicidio agravado, por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, el que mediante sentencia del 13 de abril de 2021 –que se encuentra firme–. De manera que, la restricción de libertad en la que ahora se encuentra la señora *MB* depende de la sanción impuesta y no de la detención provisional objetada.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal de la beneficiada reclamada en este hábeas corpus –detención provisional, la cual se alegó fue sin orden escrita–, este proceso constitucional se queda sin su objeto, generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por la peticionaria, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad a lo estipulado el artículo 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente hábeas corpus promovido a favor de la señora AGMB, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

303-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El presente hábeas corpus ha sido promovido en contra del director del Complejo Penitenciario La Esperanza, por el abogado NMZG, a favor del señor *KECS*, procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante alega que en audiencia inicial celebrada el 13 de abril de 2022, la Jueza de Paz de Ayutuxtepeque ordenó que el proceso penal instruido en contra de su representado pasara a instrucción pero con medidas

alternas a la detención provisional, librando ese mismo día los oficios al centro penal aludido para que se ejecutara su inmediata libertad; sin embargo, el director penitenciario demandado ha omitido dar cumplimiento a dicha orden, manteniendo al señor *CS* restringido de su libertad, sin que exista justificación para ello.

2. En la forma prescrita por la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), se emitió auto de exhibición personal, se nombró como jueza ejecutora a *********, se requirió informe de defensa a la autoridad demandada e información a la autoridad judicial y se decretó medida cautelar.

3. El día 12 de julio de 2022, la Jueza de Paz de Ayutuxtepeque remitió oficio 3409, en el que informó que dicho juzgado conoció del proceso penal del señor *KECS*, procesado por agrupaciones ilícitas, quien no fue presentado a dicha sede judicial por encontrarse recluido en el Complejo Penitenciario La Esperanza; no obstante, en audiencia inicial celebrada el 13 de abril de 2022, el procesado estuvo presente a través de videoconferencia y, en la misma, se resolvió ordenar la instrucción formal del proceso decretando medidas alternativas a la detención provisional; en consecuencia, se remitió el proceso al Juez de Instrucción de Mejicanos y se comunicó al director del centro penitenciario referido la orden de poner en libertad del señor *CS*.

Indicó que al revisar el libro de entradas de procesos penales de dicha sede no se encontró causa pendiente o fenecida en contra del aludido imputado.

Adjuntó a su informe documentación de respaldo.

4. El 14 de julio de 2022, la jueza ejecutora remitió las diligencias encomendadas, entre ellas el acta de intimación de la autoridad penitenciaria, la cual no contiene sello ni firma de los funcionarios del centro penitenciario, pero tampoco se indica un motivo sobre ello, aunque refirió que se le manifestó que debido a motivos de sobrecarga laboral y confidencialidad no era posible entregarle de inmediato la documentación requerida; no obstante, señala que de forma posterior no se le proporcionó ninguna información.

5. El día 26 de julio de 2023 se recibió oficio SDT-1300-2023, suscrito por el licenciado *********, Director del Complejo Penitenciario La Esperanza, quien, en virtud de segundo requerimiento de información realizado por la secretaría de este tribunal mediante oficio número 1345 del 15 de junio de 2023, informa que el imputado *KECS* fue puesto en libertad el 29 de abril de 2022, por haberse decretado a su favor medidas sustitutivas a la detención provisional por parte de la Jueza de Paz de Ayutuxtepeque.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada con el sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado en el proceso de hábeas corpus (III) y por último, se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o cesación de los efectos del acto, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC).

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer aquel, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019–

IV. 1. Según lo informado y lo que consta en el presente expediente, mediante audiencia inicial celebrada el día 13 de abril de 2022, la Juez de Paz de Ayutuxtepeque ordenó la instrucción formal del proceso en contra del señor *KECS* y otros, imponiendo medidas cautelares alternativas a la privación de libertad y, por tanto, ordenó su puesta en libertad.

Por su parte, el director del Complejo Penitenciario La Esperanza informó que el aludido procesado fue puesto efectivamente en libertad el día 29 de abril de 2022, en cumplimiento de la orden citada.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que al ponerse en libertad al favorecido, la restricción reclamada en este proceso cesó –orden de libertad no ejecutada–, en ese sentido al cesar la restricción reclamada en este hábeas corpus, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario y, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

2. Sin perjuicio de lo dicho, se considera necesario hacer una acotación sobre las actuaciones de la autoridad demandada reflejadas en este expediente.

Se advierte que el trámite de este proceso constitucional se vio retrasado debido a las gestiones adicionales realizadas por la secretaría de este tribunal a efecto de obtener la información requerida a la autoridad demandada –director del Complejo Penitenciario La Esperanza–, la cual era necesaria para resolver este hábeas corpus, pero no fue entregada a la jueza ejecutora ni tampoco fue remitida en su oportunidad.

Además el referido director omitió informar en el plazo establecido para ello –veinticuatro horas– sobre el cumplimiento de la medida cautelar dictada en este proceso.

Al respecto es de enfatizar que las decisiones judiciales pronunciadas en los procesos de tutela de derechos fundamentales y los requerimientos hechos en ellas por esta sede son de carácter obligatorio y de inmediato cumplimiento, aun cuando sean expresadas con la mesura propia de un tribunal constitucional –auto del 25 de marzo de 2022, hábeas corpus 784-2020–.

En ese sentido, si bien la excesiva carga laboral que posee dicha autoridad y que alegó ante la jueza ejecutora podría constituir un obstáculo para brindar una respuesta oportuna a este tribunal, ello no lo exime de cumplir y remitir la información solicitada –aunque sea– con posterioridad al plazo indicado.

En consideración de lo anterior, se deberá prevenir al director del Complejo Penitenciario La Esperanza que, en lo sucesivo, cumpla diligentemente las órdenes dictadas por esta sede en el marco de los procesos constitucionales –en este u otros procesos– y de las órdenes judiciales que le sean dadas por otras autoridades, so pena de incurrir en las responsabilidades a que diere lugar.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 No. 5 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el abogado NMZG, a favor del señor *KECS*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Previénese* al director del Complejo Penitenciario La Esperanza, que en lo sucesivo, cumpla diligentemente las órdenes dictadas por esta sede en el marco de los procesos constitucionales y de las órdenes judiciales que le sean dadas por otras autoridades.

3. *Notifíquese*.

4. *Archívese*, oportunamente.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

256-2022

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas con veinticinco minutos del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a su favor por el señor *VEGF*, procesado por el delito de violación en menor o incapaz agravada.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante refiere que fue capturado el 18 de enero de 2019 y el 24 de esos mismos mes y año, el Juez de Paz de Ciudad Delgado ordenó instrucción formal con detención provisional; por su parte, el Juez Segundo de Instrucción de Ciudad Delgado resolvió apertura a juicio, por lo que el 29 de octubre de 2019, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador lo condenó a veintiséis años y ocho meses de prisión.

El 7 de enero de 2020 presentó, ante la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución que aún no está firme por encontrarse en la etapa recursiva ante la Sala de lo Penal, debido a que la primera autoridad se declaró incompetente para conocer del mismo en razón "al tiempo en que se cometió el delito y cuya aplicación requiere legalización a través del Código Procesal Penal derogado", habiendo transcurrido treinta y seis meses de detención provisional, el cual sobrepasa el plazo establecido en la ley, encontrándose en una detención ilegal.

2. El 8 de agosto de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor y a la autoridad demandada se le requirió informe de defensa, así como cierta documentación del expediente penal e indicara el estado actual del proceso y la situación jurídica del imputado.

3. El secretario de la Sala de lo Penal, licenciado Francisco Martell, remitió oficio de fecha 26 de agosto de 2022, por medio del cual informó que el proceso con referencia 454C2020, ya cuenta con resolución debidamente notificada a las partes acreditadas, indicando, además, que la situación jurídica del señor VEGF, se encuentra definida, ya que dicho fallo está firme. Adjuntó a su informe ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional referida a la falta de agravio efectivo (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. El agravio es uno de los elementos integradores de la petición de hábeas corpus, a efecto de su procedencia; de forma que, cuando se requiere la protección constitucional, la persona debe efectivamente encontrarse afectada en los derechos relacionados en el artículo 11 inciso 2° de

la Constitución –libertad personal e integridad personal de los detenidos–, por las actuaciones u omisiones contra las cuales reclama, o bien, debe encontrarse pronta o inminente a sufrir tal lesión. Así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, se hagan cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales derechos.

Por ende, cuando se inicia un hábeas corpus respecto a un acto que ya no está surtiendo efectos, se produce un vicio, pues el agravio ha desaparecido, volviéndose innecesaria la tramitación del proceso constitucional –improcedencia de 17 de enero de 2018, hábeas corpus 495-2017–.

IV. En el presente caso se alega que se ha sobrepasado el plazo de la detención provisional establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal; sin embargo, según lo informado por la autoridad judicial y los datos que se extraen de la documentación remitida, al momento de promover este proceso constitucional –5 de abril de 2022– en contra del favorecido ya había una sentencia condenatoria firme y cumplía pena de prisión debido a que la Sala de lo Penal, el 17 de julio de 2020, declaró no ha lugar a casar la sentencia, en virtud del recurso presentado por el señor VEGF.

Así, al tornarse firme la decisión supuso la cesación de la medida cautelar decretada dentro del proceso penal y el inicio del cumplimiento de la pena de prisión, todo lo cual aconteció antes de iniciar este proceso constitucional.

De manera que se ha verificado que, cuando se promovió el hábeas corpus a favor del señor *VEGF*, ya no estaba en la prisión preventiva que se consideraba inconstitucional, al encontrarse su condena firme, por lo que la pretensión carecía desde su planteamiento de una de las condiciones indispensables para efectuar el análisis constitucional solicitado –agravio efectivo en el derecho de libertad física derivado de la omisión cuestionada–; así, al concurrir un impedimento para decidir el fondo del asunto, deberá sobreseerse la solicitud de hábeas corpus.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el presente proceso de hábeas corpus promovido por el señor *VEGF*, a su favor, por no existir un agravio en su derecho de libertad física generado por la detención provisional, cuando se promovió este proceso.

2. *Notifíquese*.

3. Oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

184-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido contra el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, a su favor por el señor *RAVV*, procesado por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación con agravación especial.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante refiere que el Juez de Paz de Panchimalco le decretó detención provisional, la cual fue confirmada por el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador en el proceso 42-2021, llevando un mes detenido.

Señala que el 20 de abril de 2021 solicitó al juez de instrucción audiencia de revisión de la medida cautelar, petición que fue denegada sin motivación alguna, dado que no se argumentó por qué sería impertinente, dilatoria o repetitiva, y sin que se le permitiera la revisión de los arraigos presentados.

Por ello considera que se han vulnerado sus derechos de presunción de inocencia, defensa y libertad física.

2. El 29 de junio de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió cierta documentación del expediente penal, así como informe de defensa a la autoridad demandada, del estado actual del proceso y la situación jurídica del imputado.

3. *A*. El Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador –interino–, licenciado *********, mediante el oficio 1614 del día 26 de julio de 2022, informó que el Juez de Paz de Panchimalco ordenó instrucción formal con detención provisional contra el imputado, en atención a ello, en la fase de instrucción, la defensa técnica solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares, petición que fue declarada sin lugar.

La anterior decisión fue impugnada, sin embargo, la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador la declaró inadmisible, a pesar de ello, la defensa técnica reiteró dicha solicitud, pero nuevamente fue declarada sin lugar, en razón de ello, denota por parte del solicitante una real inconformidad, pues verificó que en su oportunidad se fundamentó la denegatoria de la audiencia.

Agrega que el 22 de septiembre de 2021 se celebró la audiencia preliminar, en la que se ordenó auto de apertura a juicio y se ratificó la detención provisional decretada contra el procesado, designándose al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador para continuar con la tramitación de la causa penal. Adjunta a su informe copias de ciertos pasajes del proceso penal.

B. Luego, dicho juez mediante el oficio 1637, del día 28 de julio de 2022, comunicó que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió al señor *VV*, pero la fiscalía recurrió, ante ello, la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro anuló dicha sentencia y designó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador para que continuara con la tramitación del juicio. Anexó, a su informe, el oficio 3800 del 27 de julio de 2022, emitido por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.

4. Uno de los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, licenciado José Mauricio Cortés Mercadillo, mediante el oficio 01115-3B del día 16 de agosto de 2022, informó que, en la vista pública celebrada el 25 de octubre de 2021, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió al procesado, ordenando su inmediata libertad y para tal efecto libró los oficios correspondientes, sin embargo, la sentencia fue impugnada por la fiscalía, ante ello, el tribunal de segunda instancia la anuló, ordenando que la sede conociera de la causa penal, por lo que, la vista pública se intentó llevar a cabo el 14 de julio de 2022, pero se frustró y se declaró rebelde al señor *RAVV*, dado que no compareció a la audiencia, no obstante haber sido citado y notificado, por lo que libró la orden de captura y restricción migratoria correspondiente –aclarando que es para efectos de que comparezca a la actuación judicial– sin que haya sido capturado, por lo que la causa penal se encuentra archivada.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado, en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimiento de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 110-2019–.

IV. De lo informado por las autoridades relacionadas y según la documentación que consta en el expediente, se verifica que la detención provisional del señor *RAVV* fue cesada, pues en la vista pública celebrada el 25 de octubre de 2021, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador lo absolvió, ante ello, ordenó su inmediata libertad, librando el oficio 5153 del 28 de octubre de 2021, dirigido al Director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos, para hacer efectiva la orden emitida.

También se tiene que dicha sentencia fue apelada, por lo que el tribunal de segunda instancia la anuló y ordenó que se practique nuevamente el juicio, pero el mismo no se ha llevado a cabo debido a que el favorecido no ha comparecido a dicha convocatoria, por lo que se declaró rebelde y, consecuentemente, se libró orden de captura y restricción migratoria en su contra.

A partir de ello se determina que el favorecido no se encuentra en la detención que ha sido reclamada en esta sede, pues se afirmó que esta cesó al haber sido puesto en libertad, ello pese a que posteriormente se libró orden de captura por motivos distintos –rebeldía por incomparecencia a audiencia–, restricción que no ha sido sometida a enjuiciamiento de esta sala.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal, debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal objetada en este hábeas corpus –detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin objeto; generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad con el artículo 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado a su favor por el señor *RAVV*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese* oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

465-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con diez minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado ********* a favor del señor *WARM*, procesado por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, contra el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El peticionario reclamó vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal del favorecido pues se alegó que es un adulto mayor con padecimientos como diabetes mellitus, hipertensión arterial y posiblemente insuficiencia renal, por lo que requiere atención en un centro médico privado y la revisión de su medida cautelar, solicitudes cuya decisión está siendo aplazada por la exigencia de un dictamen médico forense y sin considerar las condiciones de urgencia de la situación del justiciable tanto por sus enfermedades previas como el riesgo que estas ahora representan ante el brote de COVID-19.

2. En la forma prescrita por la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) se emitió auto de exhibición personal y se nombró juez ejecutor a ********, quien manifestó que "en cuanto al estado de salud del señor RM, existe un traslado del centro penal de san miguel hacia el hospital san juan de Dios para ser atendido por su problema de salud, exámenes, consulta externa con medicina interna y tratamiento de medicamento brindado por el centro penal. Por lo que el juzgado especializado de instrucción de Santa Ana, tuvo conocimiento del estado de salud del favorecido previo a esto los médicos han declarado que el señor [...] se encuentra estable de salud y puede llevar el tratamiento normal dentro del centro penal sin necesidad de recurrir a un centro médico privado" (mayúsculas suprimidas)(sic).

Agregó que el abogado del favorecido señaló que este ha presentado un nuevo problema de salud que es la insuficiencia renal por lo que solicitó una audiencia especial de revisión de medidas para que pueda cumplir la detención provisional siendo atendido en un hospital privado, pero el juez requirió exámenes forenses para determinar dichos aspectos el 20 de mayo de 2020, existiendo demora en la realización de los mismos por lo que dicha circunstancia podría afectar su salud de manera significativa.

3. El Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana remitió informes de defensa, de fechas 2 de julio, 5 y 15 de octubre de 2020, 3, 8, 15 y 29 de junio de 2021, mediante los cuales hacía un resumen detallado de las diligencias realizadas en torno al estado de salud del señor RM, los traslados solicitados para brindar tratamiento médico al imputado, informaba sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por esta sala, la situación jurídica de aquel y del proceso penal.

4. *A*. En cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por esta sala, la directora del Centro Penal de San Miguel por medio de informe de fecha 27 de junio de 2020, manifestó que el favorecido ingresó el 20 de

noviembre de 2019, fue evaluado inmediatamente por el médico del centro y a la fecha se encuentra clínicamente estable. Agregó que el señor RM ha sido atendido en la clínica penitenciaria una vez al mes desde su llegada, se alimenta con dieta especializada acorde a sus enfermedades desde diciembre de 2019. Por tanto considera que en ningún momento se le han vulnerado los derechos de salud e integridad física.

B. Informe médico del estado de salud del señor *WARM*, de fecha 20 de agosto de 2020, por medio del cual el doctor del Centro Penal de San Miguel informa que el referido se encuentra recibiendo tratamiento médico.

C. Oficio número 255-01 de fecha 11 de septiembre de 2020, por medio del cual la directora de Centro Penal de San Miguel informó que el favorecido fue trasladado hacia el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor Casa Linda para consulta médica, el día 7 de septiembre de 2020, regresando el mismo día y se procedió a mantenerlo en cuarentena 15 días.

D. Informe de la directora del Centro Penal de San Miguel, de 29 de octubre de 2020, en el que manifiesta que el señor *WARM* fue llevado el 28 de octubre de 2020 a pasar consulta al centro asistencial Casa Linda, quedando ingresado.

E. Correo electrónico remitido por el Centro Penal de San Miguel, de fecha 3 de junio de 2021, por medio del cual informan que el señor *WARM*, fue trasladado al Centro Penal de Sensuntepeque.

5. Escritos suscritos por el abogado **********, recibidos el 16 de julio y 16 de septiembre de 2020, 19 de enero y 19 de febrero de 2021, por medio de los cuales informaba sobre el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por esta sala y del seguimiento de las mismas.

6. Esta sala ordenó a personal del Instituto de Medicina Legal la realización de un peritaje médico al señor *WARM*, por medio del cual concluyen que el examinado padece de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que son las primeras causas de la insuficiencia renal crónica.

7. Un juez del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, por medio de auto de fecha 3 de agosto de 2023, informó que por auto del 19 de octubre de 2021 se recibió la resolución dictada por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente en el cual declararon ha lugar el hábeas corpus a favor del señor *WARM*, por lo cual en cumplimiento de ello se le impuso medidas sustitutivas a la detención provisional y se ordenó su puesta en inmediata libertad por medio de oficio 2510, de 19 de octubre de 2021, dirigido al Director del Centro Penal de Sensuntepeque.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto en el proceso de hábeas corpus (III) y, luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019, respectivamente–.

IV. Según consta en este proceso, la privación de libertad del señor *WARM*, cesó al haberse modificado la detención provisional por medidas alternas, decisión que se ordenó por resolución del 19 de octubre de 2021, emitida por el antes Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana, según oficio número 2510, de la misma fecha, encontrándose el favorecido en libertad.

Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al sustituirse la detención provisional por otras medidas cautelares, cesó la restricción del beneficiado que se consideraba inconstitucional por no brindársele las condiciones adecuadas para preservar su integridad personal, así, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario y, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución, 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado a favor del señor *WARM*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. *Archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

361-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado Francisco René Cortez Vaquerano, en contra del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, a favor del señor *DDFA*, condenado por los delitos de posesión y tenencia, resistencia, extorsión y evasión.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El peticionario expuso que el 14 de enero de 2020 la autoridad judicial emitió resolución en la cual denegó al señor *FA* el beneficio de libertad condicional anticipada por considerar que no cumplía con el supuesto establecido en el artículo 85 del Código Penal (CP), argumentando que el informe del consejo criminológico regional era desfavorable; según refirió, el interno fue condenado a catorce años de prisión por diversos delitos, misma que cumplirá el 26 de julio de 2021, no obstante tal circunstancia, la juez denegó el beneficio sin conceder la audiencia respectiva por lo que ha sido imposible controlar y controvertir dichos argumentos.

2. El 11 de diciembre de 2020 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió cierta documentación del expediente de ejecución penal, así como informe de defensa a la autoridad demandada, del estado actual del proceso y la situación jurídica del condenado.

3. *A*. El Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, licenciado **********, informó mediante oficio número 1467-137-2-2005, de fecha 11 de marzo de 2021, que el favorecido se encuentra a su orden según expediente número 137-2-05, condenado a la pena total de catorce años con seis meses, por diferentes delitos.

Sobre el reclamo del peticionario afirmó que posterior a unas dificultades con el Consejo Criminológico de la zona central, este le remitió el respectivo dictamen del favorecido, el cual fue recibido el 30 de agosto de 2017 y convocó a audiencia para el 6 de septiembre de ese año, habiendo sido notificado el peticionario, quien presentó escrito solicitando el aplazamiento por tener otra audiencia el mismo día, en ese sentido, se reprogramó para el 12 de septiembre y en la misma se denegó el beneficio de libertad condicional al interno, por haber sido desfavorable el dictamen criminológico y no cumplir con los requisitos del art. 85 inciso 2° CP.

Afirmó que por los mismos motivos también fue denegado el beneficio mediante resoluciones de fechas 14 de enero y 11 de noviembre de 2020, sin convocar a audiencias orales, según el criterio de la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, pues el juez puede rechazar la audiencia en casos reiterativos y que las peticiones sean dilatorias, siendo ese el caso del favorecido, ya que al verificar los dictámenes criminológicos eran desfavorables, con diagnóstico criminológico alto, en consecuencia, –aseguró– no se ha vulnerado el derecho de audiencia del interno.

Además, señaló que el 10 de marzo de 2021 se desarrolló a favor del señor *FA* y en presencia de su abogada "audiencia para verificar las condiciones generales y particulares de reclusión" en la que comprobó que persistían las carencias que lo llevaron a cometer los delitos por los que cumplía condena, con respecto a su salud el mismo favorecido expresó estar bien.

Incorporó a su informe la documentación de respaldo.

B. Mediante oficio 6122/137-2-05, de fecha 28 de junio de 2023, la Jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, licenciada Meliza Grande Barrera, informó que el señor *DDFA*, cumplió la pena de catorce años con seis meses de prisión, el 26 de julio de 2021 y giró la orden de libertad respectiva. Anexó a su oficio copia certificada de los pasajes pertinentes.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional relacionada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto*, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el art. 31 No. 5 LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha indicado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus, determinando que cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus (sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019).

IV. Según la documentación incorporada a este hábeas corpus, en el proceso de ejecución penal del señor *DDFA*, consta que: *i)* mediante oficio número 17596/137-2-05 de fecha 25 de mayo de 2021, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, ordenó la libertad del favorecido a partir del 27 de julio de ese año, en virtud que su pena se cumpliría el 26 de julio, según el cómputo realizado en esa sede judicial y, *ii)* por auto del 27 de julio de 2021, se tuvo por cumplida la pena de catorce años con seis meses de prisión impuesta al señor *FA* por diversos delitos, asimismo se declaró extinguida la responsabilidad penal.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal del beneficiado reclamada –pena de prisión–, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséase* el hábeas corpus solicitado a su favor por el señor *DDFA*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*

3. *Archívese* oportunamente.

"""—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O.CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ÁRÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

138-2021

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el licenciado **********, en contra de la Jueza Séptima de Instrucción de San Salvador, a favor del señor *NWA*, procesado por el delito de siembra y cultivo, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante, luego de relatar aspectos vinculados con la notificación al señor *NWA* de la decisión en la que se le decretó detención provisional, especifica que el objeto de su solicitud de hábeas corpus es la

resolución dictada por la Jueza Séptima de Instrucción de San Salvador, a las doce horas del día 12 de marzo de 2021, en la que declaró no ha lugar la solicitud de audiencia especial de revisión de medidas requerida a favor del enjuiciado.

Al respecto expone que tal decisión carece de fundamentación porque obvió la obligación de pronunciarse sobre si la petición es pertinente, dilatoria o repetitiva, tal como lo establece el artículo 344 del Código Procesal Penal, sino únicamente plasmó: "Con base a los argumentos planteados en su escrito, adjuntando una serie de documentos a fin de acreditar arraigos familiar, domiciliar y social del indiciado en comento, no obstante, la documentación que presenta la representación de la defensa y con la cual pretende acreditar la necesidad de la sustitución de la medida cautelar no dota de los insumos necesarios a esta Juzgadora, para poder efectuar un juicio de apreciación respecto a la necesidad de llevar a cabo la celebración de la Audiencia Especial de Revisión de Medidas [...]" (sic).

Esto implica, según el peticionario, una denegatoria automática de medidas alternas, debiendo ponderarse otros aspectos que no se pudieron someter al análisis judicial en audiencia, debido al rechazo injustificado de la petición.

2. El 6 de julio de 2022 se decretó auto de exhibición personal, conforme lo dispone la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), prescindiendo del nombramiento de juez ejecutor, se requirió cierta documentación del expediente penal, así como informe de defensa a la autoridad demandada, del estado actual del proceso y la situación jurídica del imputado.

3. El Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador –interino–, licenciado *********, mediante el oficio 1571 del 19 de julio de 2022, informó que el Juez Séptimo de Paz de San Salvador, en la audiencia inicial celebrada el 1 de febrero de 2021, ordenó instrucción formal con detención provisional contra el imputado. El 11 de marzo de 2021, la defensa técnica solicitó se practicara audiencia especial de revisión de la medida cautelar impuesta al procesado, la cual fue denegada por auto del 12 de marzo de 2021, al considerar que la documentación anexa a la petición no dotaba de los insumos necesarios para efectuar un juicio de apreciación respecto a la necesidad de llevar a cabo la diligencia solicitada; en ese sentido, señala que se trata de una inconformidad del solicitante pues refiere que la denegatoria a su petición se fundamentó.

Agregó que el 24 de junio de 2021 se celebró la audiencia preliminar en la que, entre otras situaciones, se modificó la calificación jurídica del delito de siembra y cultivo al de posesión y tenencia, se ordenó apertura a juicio y se ratificó la detención provisional impuesta contra el procesado, designándose al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador para el conocimiento de dicha causa.

En adición, señala que comunicó a dicho tribunal de sentencia del requerimiento realizado por esta sala a fin de que rindiera el informe correspondiente, respecto a la situación jurídica actual del imputado; además, anexó copia de documentación.

4. La jueza del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, licenciada *********, mediante el oficio 827-2 del 26 de julio de 2022, informó que en la vista pública celebrada el 11 de octubre de 2021, el imputado fue condenado a tres años de prisión, pena que fue reemplazada por la prestación de trabajo de utilidad pública, a consecuencia de ello, se ordenó su libertad, afirmando que la sentencia quedó ejecutoriada por auto del 18 de noviembre de 2021, estando su ejecución a cargo del Juez Tercero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. Anexó a su informe certificación de ciertos pasajes del proceso penal.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o cesación de los efectos del acto, después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimiento de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 110-2019–.

IV. De lo informado por las autoridades relacionadas y según la documentación que consta en el expediente, se verifica que la detención provisional del señor *NWA* fue cesada, pues en la vista pública celebrada el 11 de octubre de 2021 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a la pena de tres años de prisión por el delito calificado definitivamente como posesión y tenencia, la cual se remplazó por trabajo de utilidad pública. En consecuencia, se ordenó su puesta en libertad, librán-

dose el oficio 647-2 de fecha 14 de octubre de 2021, dirigido al Director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana para hacerlo efectivo.

En la sentencia emitida el 28 de octubre de 2021, también se indicó que el imputado A debía continuar en la libertad en la que se encontraba, en virtud de la orden emitida en el juicio, decisión declarada firme y ejecutoriada el 18 de noviembre de 2021.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal, debe decirse que al cesar la restricción a la libertad personal objetada en este hábeas corpus –detención provisional–, este proceso constitucional se queda sin objeto; generándose así la imposibilidad de emitir una sentencia en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, por lo que deberá sobreseerse el presente proceso de conformidad con el artículo 31 No. 5 de la LPC.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus solicitado por el abogado **********, a favor del señor *NWA*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. Archívese oportunamente.

"""""—A.L.J.Z.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.––GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

459-2019AC

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado ********** a favor de la señora *GCHQ*, condenada por el delito de hurto agravado, contra omisiones del Juez Tercero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador y del Consejo Criminológico Central.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. *A*. Mediante auto del 17 de julio de 2020 se acumularon las peticiones de hábeas corpus que se relacionan a continuación:

i. 459-2019: el solicitante sostiene que su defendida fue condenada a cinco años de prisión de los cuales estuvo tres años con dos meses y dos

días en detención provisional, periodo en el cual nunca tuvo la oportunidad de realizar trabajo penitenciario. Afirma que ha solicitado al citado juez de vigilancia penitenciaria, en diversas ocasiones, se le otorgue a aquella el beneficio de la libertad condicional anticipada; sin embargo, dicho juzgador ha resuelto que el beneficio procede única y exclusivamente a propuesta del consejo criminológico y que el cómputo de la pena de su representada no se ha realizado ya que tiene una orden de captura pendiente de ejecutarse.

Considera que la exigencia de que vuelva estar detenida para cumplir con el tiempo que le falta –un mes y veintiocho días– para optar a la libertad condicional vulnera los derechos constitucionales de aquella, ya que por la realidad jurídica de nuestro país pasará por lo menos un año más privada de libertad hasta poder optar por el mencionado beneficio.

ii. 446-2020: el peticionario reitera lo expresado en la solicitud anterior, agrega que su defendida fue capturada el 1 de enero de 2020 y que en el cómputo de la pena se estableció que cumpliría las dos terceras partes de la pena el 29 de febrero de 2020. Asimismo, afirma que solicitó al juez demandado, el 2 de marzo de 2020, que requiriera los informes de conducta e ingreso del régimen penitenciario y que, una vez recibidos, señale fecha para la audiencia que decidirá el otorgamiento o no de la libertad condicional. El 5 de los mismos mes y año, el juez solicitó el dictamen al Consejo Criminológico Central A e indicó que una vez recibido señalaría audiencia.

Finalmente expresa que el 12 de mayo de 2020, presentó otro escrito al juez en el que reiteró su petición, señaló la falta de convocatoria para la audiencia que decidirá el otorgamiento o no del citado beneficio y que por el hacinamiento existente en los centros penales no es posible cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.

B. En ambos casos, se afirma que se ha solicitado la libertad condicional a favor de la señora *HQ*, en el primero expresa que su solicitud fue rechazada y en el segundo que, a pesar de haberse requerido y cumplido el tiempo exigido por el legislador para optar por dicho beneficio penitenciario, no se ha realizado la audiencia que decidirá si se le otorga o no.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) se emitió auto de exhibición personal, se prescindió del nombramiento de juez ejecutor y se requirió informe de defensa a las autoridades demandadas, además, al funcionario judicial, se le requirió informe de la situación jurídica de la condenada, en relación con el cumplimiento de la ejecución de la pena; también se ordenó medida cautelar a favor de la señora *GCHQ*.

3. Al respecto se recibieron los informes siguientes:

A. La Jueza Tercera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, licenciada **********, en su informe de defensa, remitido mediante oficio 5663 del 17 de septiembre de 2020, en síntesis mani-

festó que, cuando se aperturó el expediente de ejecución contra la señora *HQ* no se practicó el cómputo de la pena respetivo pues la favorecida aún no había sido capturada, a pesar de ello, la defensa técnica inicialmente solicitó la libertad condicional anticipada y, luego, audiencia especial; pero refirió que ambas peticiones fueron declaradas no ha lugar.

Posterior a ello, la señora *HQ* fue capturada el 1 de enero de 2020, y se estableció que cumpliría su penal total el 29 de octubre de 2021, es así que, nuevamente la defensa solicitó el beneficio de la libertad condicional a favor de la interna, en razón de ello, se requirió el dictamen criminológico, recibido que fue el mismo y en atención a la medida cautelar dictada por este tribunal se programó audiencia a fin de resolver el otorgamiento o no de la libertad condicional, sin la presencia de la interna, en virtud de la cuarentena en el que se encontraban los privados de libertad debido a la emergencia sanitaria generado por el COVID-19.

Conforme lo expuesto, considera que se desvirtúan los señalamientos realizados por el solicitante y que se ha demostrado que no se han generado omisiones a las solicitudes planteadas, pues fueron resueltas en tiempo; en cuanto a la falta de señalamiento oportuno de la audiencia en mención, indica que no es responsabilidad de la autoridad judicial, pues refiere que el Consejo Criminológico Regional Central no remitió en el plazo legal el dictamen criminológico. Agrega ciertos pasajes del proceso penal y de ejecución de la pena.

B. Con posterioridad la autoridad antes citada mediante oficio número 5873 del 24 de septiembre de 2020, informó que llevó a cabo la audiencia para decidir sobre el otorgamiento o no de la libertad condicional ordinaria de la condenada *HQ*, en la que se le denegó tal beneficio. Anexó a su informe ciertos pasajes del proceso de ejecución de la pena.

C. La Jueza Tercera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, licenciada **********, mediante oficio número *** del 30 de agosto de 2023, informó entre otros asuntos que, por auto del 7 de septiembre de 2021, ordenó al Director del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres Ilopango que el 29 de octubre de 2021 pusiera en libertad a la señora *HQ* por haber cumplido la pena total, para tal efecto, se libró la orden de libertad; en razón de ello, por auto del 1 de noviembre de 2021 tuvo por cumplida la pena total impuesta a la condenada, además, declaró extinguida la responsabilidad penal; y por resolución del 11 de noviembre de 2021 se rehabilitaron los derechos de la ciudadana, encontrándose actualmente el proceso fenecido y archivado. Anexó a su informe copia certificada de los pasajes pertinentes.

D. Por su parte, los miembros del Consejo Criminológico Regional Central, mediante su informe de defensa, remitido por medio del oficio 923 C.C.R.C./2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, señalaron que el aludido

juzgado penitenciario les solicitó la remisión del dictamen criminológico de la interna *HQ* y por ello los días 12 de marzo, 7 de julio y 18 de agosto, todos de 2020, solicitaron al centro penal respectivo el expediente único de la privada de libertad, el cual fue recibido hasta la última fecha y el dictamen fue remitido a la sede judicial el 9 de septiembre de 2020, cumpliendo lo solicitado.

Aclararon que tal dictamen les fue requerido cuando iniciaba la amenaza de la pandemia del COVID-19, sin embargo, reconocieron que hubo cierta demora. A su informe agregaron ciertos pasajes del expediente administrativo.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada al sobreseimiento por cesación de los efectos del acto reclamado en el proceso de hábeas corpus (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a los documentos incorporados (IV).

III. La existencia del acto reclamado –como elemento de la pretensión– es un requisito indispensable para el desarrollo y la finalización normal del proceso de hábeas corpus mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria; en ese sentido, la desaparición, invalidación o *cesación de los efectos del acto,* después de admitida la demanda, vuelve infructuosa la tramitación completa del proceso y justifica su finalización, facultad estipulada en el artículo 31 No. 5 de la LPC.

Aunque esta última disposición se refiere al proceso de amparo, este tribunal, reiteradamente, ha determinado la posibilidad de aplicarla analógicamente para el proceso de hábeas corpus; así cuando el acto restrictivo de la libertad personal –acto impugnado– cesa, se ha sostenido que procede sobreseer dicho proceso por carecer de objeto material la pretensión que se está conociendo. En otras palabras, existe una relación directa entre la subsistencia del acto impugnado y la subsistencia de la pretensión –que la origina, mantiene y concluye–, por lo que, al desaparecer el acto, carece de objeto la pretensión y ello conduce a sobreseer el hábeas corpus –sobreseimientos de 30 de enero de 2002 y de 26 de mayo de 2021, hábeas corpus 8-2001 y 110-2019, respectivamente–.

IV. Según la documentación incorporada a este hábeas corpus, en el proceso de ejecución penal de la señora *GCHQ*, consta que: *i)* mediante el oficio 7909 del 7 de septiembre de 2021, la Jueza Tercera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, ordenó la libertad de la favorecida a partir del 29 de octubre de 2021, en virtud de que su pena la cumpliría ese día, según el cómputo realizado en esa sede judicial y *ii)* por auto del 1 de noviembre de 2021, se tuvo por cumplida la pena total de cinco años de prisión, impuesta a la señora *HQ*, por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, por el delito de hurto agravado, asimismo se declaró extinguida la responsabilidad penal.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de este tribunal debe decirse que, al cesar la restricción a la libertad personal de la beneficiada reclamada –pena de prisión–, este proceso constitucional se queda sin su objeto; ello genera la imposibilidad de emitir una sentencia de fondo en la que se examine la constitucionalidad de la situación expuesta por el peticionario, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el art. 31 No. 5 LPC.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso 2º de la Constitución y 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Sobreséese* el hábeas corpus promovido por el abogado *********, a favor de la señora *GCHQ*, en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado.

2. *Notifíquese*.

3. Oportunamente *archívese*.

"""—A- L- J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

59-2022R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas y cincuenta y cinco minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

Procedente de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, se conoce en revisión el proceso constitucional de hábeas corpus iniciado por el señor MBD contra la Jueza de Paz de Perquín, Morazán, a favor del señor *RABR*, procesado por el delito de violación en menor o incapaz en modalidad continuada.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En el escrito de promoción de este hábeas corpus el peticionario –quien manifiesta ser el padre del imputado– reclamó: *i)* que la Jueza de Paz de Perquín decretó la detención provisional del señor *BR* con la sola vista del requerimiento, sin citar al procesado en el lugar indicado por la fiscalía en el requerimiento, sino que en la dirección donde previamente se realizó un registro con prevención de allanamiento, en ese sentido, se omitió cumplir los parámetros legales, incluso aquellos establecidos para la cita y notificación de personas con paradero desconocido y; *ii)* que la jueza demandada vulneró el derecho de defensa del señor *BR*, al no asegurar la asistencia de un defensor en la celebración de la audiencia inicial, siendo oportuno realizar una interpretación sistemática de los arts. 88 y 101 del Código Procesal Penal (CPP), en el sentido que era necesario designar un defensor de oficio. Pero –afirma– le nombró defensor particular hasta el 1 de julio de 2021, ya que el imputado no sabía nada de la imputación en su contra.

En ese sentido, reclamó que la autoridad demandada no realizó las diligencias respectivas a fin de obtener información personal en los registros públicos y oficinas privadas para ubicar al procesado.

2. Por medio de resolución del 22 de diciembre de 2021, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente pronunciaron auto de exhibición personal y, en fecha 21 de enero de 2022, declararon no ha lugar el hábeas corpus solicitado, en virtud de no existir la vulneración al derecho de libertad alegada, tal decisión se emitió luego de haberse determinado que el imputado, a pesar de que fue citado en legal forma por la autoridad demandada, la cual efectuó los mecanismos necesarios para que compareciera a la audiencia inicial, no compareció y tampoco justificó su inasistencia, pero se garantizó su derecho de defensa y audiencia al contar con abogado defensor.

3. Inconforme con la resolución de hábeas corpus el peticionario interpuso recurso de revisión para ser conocido por esta sala.

4. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) relativos a la existencia de una resolución denegatoria de libertad emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

5. El peticionario aduce en el recurso que existe contradicción en la resolución del proceso constitucional ya que la cámara afirma que el procesado sí "...fue citado en legal forma y no compareció a la diligencia judicial, ni tampoco su defensor particular nombrado, no obstante haber sido notificado y citado con fecha primero de junio del año dos mil veintiuno, para que concurriera a la audiencia inicial...", pero también manifiesta que "...no fue posible citar al imputado en la dirección proporcionada por la fiscalía en el requerimiento, ni en el lugar de residencia que consta en su Documento Único de Identidad de este...".

Además, afirma que dicha sede "...pasó por inadvertido el procedimiento que hizo el citador-notificador para citar a [su] hijo en casa de [su] otra hija [, lo] cual a todas luces no [es] conforme a derecho..." y omitió tomar en cuenta "... el paradero desconocido de [su] hijo, por no contar [con] lugar para citarlo, ni por el hecho de ser ubicado con los registros realizados...".

Arguye que no consta cita y notificación para la audiencia inicial del 3 de junio de 2021 y que la cámara no se pronunció sobre la falta de gestión de la jueza demandada para asegurar la comparecencia de un abogado en la audiencia inicial.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: primero se hará referencia a la jurisprudencia relacionada con la citación del imputado y su vinculación con los derechos fundamentales de audiencia, defensa y libertad personal (III), para luego analizar el reclamo pertinente al recurso de revisión sometido a conocimiento de este tribunal (IV).

III. Esta sala ha sostenido en su jurisprudencia que los actos de comunicación deben cumplir con el fin que tienen dentro del proceso penal –hacer saber una decisión a una persona que se ve afectada por ella–, confiriéndole así la oportunidad para disponer lo conveniente en relación a la defensa de sus derechos que pudiesen estar en juego en la controversia de que se trate.

Por consiguiente, los actos procesales de comunicación se encuentran íntimamente relacionados tanto con la imposición de la detención provisional como con la declaratoria de rebeldía, las cuales implican una incidencia en el derecho de libertad física del imputado –art. 2 Cn–, pues la aplicación

de la prisión preventiva se habilita en la medida que el justiciable se encuentre en posición de conocer la imputación y poder controvertirla, y la rebeldía es el estado que adquiere el inculpado, cuando ha desobedecido el llamado judicial o incumplido su deber de disponibilidad como imputado, lo que tiene como consecuencia la emisión de una orden de captura cuyo objeto es hacerlo concurrir a la sede judicial mediante el uso de la seguridad pública, a partir de la certeza que se tenga de su resistencia a hacerlo de manera voluntaria –sentencia del 4 de junio de 2021, hábeas corpus 443-2018–.

Lo anterior, no implica que el único medio para garantizar tal finalidad consista en la constancia de que la esquela de citación sea recibida de manera personal por el procesado –y que se cumplan con los requisitos de forma que exige la disposición respectiva–, sino que basta con la certeza de la utilización de los mecanismos legalmente dispuestos para tener por realizada dicha diligencia; tal es así que, atendiendo al principio finalista de los actos de comunicación procesal, la circunstancia a evaluar no es que tales actos se realicen de una o de otra forma, sino que la comunicación se consiga a efecto de generar las posibilidades reales y concretas de defensa, en atención a los derechos de audiencia y defensa reconocidos en los arts. 11 inc. 1º y 12 inc. 1º Cn –sobreseimiento de 13 de septiembre de 2017, hábeas corpus 287-2016–.

IV. 1. En el recurso de revisión interpuesto por el señor MBD se reclama que la Cámara en su pronunciamiento –en el cual controló las actuaciones ocurridas en sede de paz– indicó por una parte que el procesado fue citado en legal forma pero también afirmó que no fue posible citar al imputado en la dirección proporcionada por la fiscalía, lo cual es contradictorio y cuestiona también el procedimiento que el citador realizó para comunicar al imputado el proceso seguido en su contra, siendo que el señor *BR* es de paradero desconocido. Además, alega que no consta la cita y notificación para la audiencia inicial del 3 de junio de 2021 y que la cámara no se pronunció sobre la falta de gestión de la jueza demandada para asegurar la comparecencia de un abogado en la audiencia inicial.

De acuerdo a los datos que se tienen en el expediente, se tiene que en cuanto a la supuesta contradicción de la cámara sobre la citación del señor *RABR*, se tiene que en el proceso consta la copia de la esquela de citación efectuada en barrio el Centro, Perquín, Morazán, a las dieciséis horas y treinta minutos del día 27 de mayo de 2021, en la que se convocó al señor *RABR* para audiencia inicial programada para las diez horas del día 31 de mayo de 2021 y se dejó constancia que la cita fue recibida por la señora NB, hermana del procesado quien también suscribió junto con el citador la referida acta.

Esto aconteció luego de que el citador consignó haberse apersonado de forma previa a la casa sin número en el cuarto pasaje de la Colonia Morazán, San Francisco Gotera y al caserío La Tejera, cantón Casa Blanca de Perquín, con el propósito de citar y notificar al imputado, según los datos proporcionados para ello por la representación fiscal; sin embargo, en dichas viviendas no encontró persona alguna y los vecinos manifestaron que el procesado no residía en esos lugares y que no podían recibir algún tipo de documentación. Por ello –indicó– el referido citador en la respectiva acta, que se constituyó a la vivienda ubicada en barrio el Centro, Perquín, Morazán, debido a que es otro de los lugares de residencia del señor *BR*, según la orden de registro con prevención de allanamiento que constaba en el proceso.

Asimismo, consta copia de otra esquela de citación ejecutada en barrio el Centro, Perquín, Morazán, a las doce horas del día 31 de mayo de 2021, en la que se convocó al procesado para que compareciera a la celebración de audiencia inicial reprogramada para las diez horas del día 2 de junio de 2021, la cual también fue recibida por la señora NB.

Además, se encuentra agregado escrito de fecha 26 de mayo de 2021, presentado el 1 de junio de 2021 en la sede de paz, suscrito por el señor MBD, padre del procesado, en el que nombró al licenciado Jonathan Leonidas Lovos Chávez como defensor particular de aquel. En el último día referido el citado abogado presentó escrito en el cual manifestó aceptar el cargo. Sobre ello se tiene resolución de la misma fecha, en la que la Jueza de Paz de Perquín dio por recibidos los citados escritos y tuvo por parte al referido profesional y, a su vez, fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial. Dicho auto se le hizo del conocimiento al referido profesional ese mismo día por medio del "acta de aceptación de defensor particular", la cual suscribió el mencionado profesional.

2. A partir de ello se ha verificado que, lo acontecido en el proceso penal fue que, cuando se intentó citar al imputado en el lugar indicado por la fiscalía este no pudo ser ubicado, por lo cual, el notificador se apersonó a otra dirección que constaba también en el proceso en la cual ya se había efectuado una diligencia previamente, fue ahí donde pudo dejar la esquela con la hermana del justiciable. Dicha comunicación fue efectiva y propició la participación del acusado en el proceso pues luego de ello se nombró abogado particular.

Es de destacar que –en el proceso cuestionado– al intervenir la defensa mostró una participación activa y realizó actuaciones consecuentes, tales como: la solicitud de aplazamiento para la toma de declaración de la víctima en calidad de prueba anticipada; planteamiento de incidente de nulidad; participación en la declaración de la víctima en Cámara Gesell; solicitudes de reprogramación de la audiencia preliminar con motivo de

coincidir en fechas con otras audiencias a las cuales fue citado y, por último, escrito del 22 de noviembre de 2021 con el cual el abogado Jonathan Leonidas Lovos Chavez renunció del cargo por manifestar haber perdido comunicación con el señor *BR*; por lo cual es posible constatar que el acto de comunicación objetado se ejecutó y desplegó sus efectos, es decir propició el ejercicio de la defensa del imputado y por ello se descarta una lesión a su derecho constitucional de defensa.

Por consiguiente, no es posible sostener la tesis del desconocimiento de la cita a la audiencia inicial –ni del proceso penal– por parte del imputado y de su paradero desconocido, aún en la versión del recurrente –que no tiene respaldo probatorio en el hábeas corpus– pues incluso el escrito mediante el cual se nombró defensor data del 26 de mayo de 2021, pese a ello el imputado no ha comparecido en lo que va del proceso ni para justificar su ausencia.

En ese sentido, se tiene la resolución de las quince horas del 3 de junio de 2021 en la que la Jueza de Paz de Perquín, decretó instrucción formal con detención provisional con la sola vista del requerimiento fiscal, en contra del señor *BR*, ordenando su captura. En la misma expone que el acusado fue citado en tres ocasiones, sin atender los llamados y que el señor MBD le nombró abogado defensor, el cual fue citado en debida forma y tampoco compareció ni justificó su ausencia, exponiendo que por dicho motivo y amparado en los arts. 168 y 298 numeral 2º e inc. 2º CPP, procedió a resolver lo concerniente.

Así, esta sala determina que la actuación judicial referida no se aparta de las facultades conferidas por el legislador –art. 298 numeral 2º e inc. 2º CPP– al juez de paz, siendo que este resolvió con la sola vista del requerimiento ante la incomparecencia del imputado y su defensa luego de que estos fueron legalmente citados y, por ello, se cumple también con los parámetros constitucionales, pues el imputado tenía un defensor particular nombrado, luego de que se ejecutara el acto de citación, lo que indica el conocimiento de este acerca de su proceso penal.

Vale indicar que el abogado defensor renunció a la representación del señor *BR*, ante la pérdida de contacto con el imputado, según lo informó posteriormente al juez instructor, pero luego de efectuar actuaciones de las cuales es posible colegir que sí mantuvo contacto con aquel y por lo tanto era de su conocimiento el proceso penal existente.

Y es que, no se debe perder de vista que el defensor cumple un rol de asesoramiento técnico y de custodia de los derechos del procesado, al ser su representante en el desarrollo de la causa y tener el conocimiento de las decisiones que se pronuncian contra aquel. Esta función que ejerce le permite controlar las resoluciones judiciales a través de cualquiera de los medios de impugnación que señala la normativa procesal penal. No puede,

por lo tanto, verse la actividad que el defensor realiza dentro del proceso penal desligada de la labor para la cual ha sido instituido tal sujeto procesal en la legislación: como alguien destinado a planear conjuntamente con el imputado su estrategia de defensa y llevarla a cabo a través de los mecanismos dispuestos en el proceso (sentencia de fecha 30 de octubre de 2017, hábeas corpus 238-2016).

De manera que lo acontecido concretamente en este caso, donde se citó al favorecido en múltiples ocasiones en los lugares que se tenía conocimiento de su residencia habitual, antes de la audiencia inicial, luego a través de su abogado defensor –quien ejerció dicho cargo– y este decidió no comparecer ni justificar su ausencia, permite concluir que no ha existido vulneración a los derechos fundamentales de audiencia, defensa y libertad personal del imputado.

Al respecto es importante reiterar que, como se ha sostenido a nivel jurisprudencial, la finalidad de los actos de comunicación es constatar que la persona acusada efectivamente haya tenido conocimiento de proceso penal en su contra y haya contado con la posibilidad de ejercer su defensa, lo cual se evidencia aconteció en el proceso venido en revisión.

Y es que, en este proceso constitucional, no se controlan meros incumplimientos de requisitos formales en vinculación con los actos de comunicación –ese control compete al juez penal–, pues a partir de su función constitucional lo que corresponde es evaluar si, según lo sucedido en el caso específico planteado, ha existido indefensión para el imputado y lesión a su libertad personal; lo cual se ha descartado.

Procede, entonces, confirmar la decisión de fondo de la cámara respectiva que declaró no ha lugar el hábeas corpus por no haberse vulnerado los derechos fundamentales del favorecido que fueron reclamados.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11, 12 inc. 2°, 247 de la Constitución y 72 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; a nombre de la República de El Salvador, esta sala **FALLA**:

1. *Confírmase* la decisión venida en revisión que determinó la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales de defensa, audiencia y libertad personal del señor *RABR*, por parte de la Jueza de Paz de Perquín, Morazán.

2. *Certifíquese* la presente resolución y remítase, con las diligencias del hábeas corpus, a la cámara relacionada.

3. *Notifíquese*. De existir alguna circunstancia que imposibilite ejecutar la notificación señalada, se autoriza a la secretaría de este tribunal para que realice todas las gestiones pertinentes para realizarla por cualquiera de

los otros mecanismos dispuestos en la legislación procesal aplicable y en la jurisprudencia constitucional, debiendo efectuar las diligencias necesarias en cualquiera de dichos medios para cumplir tal fin, inclusive a través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.

4. *Archívese*.

""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

220-2021R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

El presente recurso de revisión ha sido interpuesto por el abogado ********* en contra de la resolución emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, en el proceso de hábeas corpus promovido a favor del señor *MACP* –procesado por el delito de robo agravado–; contra actuaciones del Juez de Paz de Coatepeque y del Juez Segundo de Instrucción de Santa Ana.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En la solicitud de exhibición personal el peticionario expuso que, en audiencia inicial, al señor *CP* se le decretó detención provisional de forma automática, por ministerio de ley, sin que se cumpliera con los presupuestos procesales de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, pues no se acreditó cómo podía evadir la acción de la justicia o influir en los testigos o peritos, por lo que considera dicha medida cautelar arbitraria.

Por tal razón y dado que el imputado tenía arraigos suficientes –domiciliar, laboral y familiar–, en la fase de instrucción solicitó audiencia de revisión de medida cautelar para desvanecer el peligro de fuga u obstaculización del proceso, en la cual ofreció una fianza de tres mil dólares y pidió la aplicación de dispositivos electrónicos.

Reclamó que, en la referida audiencia, el juez se limitó a decir que los arraigos eran insuficientes y por consiguiente mantendría la detención provisional, sin exponer razones objetivas, así como sin respetar el principio de proporcionalidad y sin cumplirse con los sub-principios de idoneidad, estricta necesidad y ponderación, pues se trató de una aplicación automática de la medida, sin motivación.

2. Por medio de resolución del 9 de abril de 2021, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, pronunciaron auto de exhibición personal y, el día 26 de abril del cita-

do año, concluyeron que la motivación del juez de paz y el de instrucción eran suficientes, pues tomaron en cuenta los elementos indiciarios derivados de la investigación, razonando los presupuestos que deben reunirse mínimamente: la existencia del ilícito acusado, la participación del imputado en el mismo y, con respecto a los peligros procesales, sostuvieron que se trata de un delito grave y que no se presentaron por parte de la defensa arraigos ni la presunta caución ofrecida. Así, declararon no ha lugar el hábeas corpus y ordenaron mantener la privación de libertad.

3. Inconforme con lo resuelto por la referida cámara, el peticionario requirió su revisión, al considerar que los magistrados "básicamente justificaron la decisión del juez instructor" pero que en la audiencia de revisión de medida cautelar dicho juez no fundamentó la continuación de la que cumplía el imputado y la mantuvo de manera automática, lo que –a su criterio– no es motivación, pues omitió valorar los elementos de prueba aportados para determinar si se materializan los presupuestos procesales respectivos. Afirma que en el hábeas corpus no se consideró que la autoridad demandada únicamente reseñó los estándares y presupuestos requeridos para la privación de libertad, es decir, no se brindó razones objetivas, concretas e individualizadas de los presupuestos procesales, por lo que –a su juicio– la medida cautelar no satisface las exigencias constitucionales y convencionales.

4. Por resolución del 8 de agosto de 2022, esta sala solicitó información para mejor proveer, la que fue remitida por el Juez Segundo de Instrucción de Santa Ana, mediante oficio número 4366 de fecha 12 de septiembre de 2022, en el cual –en síntesis– informó que el señor *MACP* que el plazo de instrucción respectivo finalizó el 17 de mayo de 2021. Refirió que, el 25 de marzo de 2021, se llevó a cabo audiencia en la que el juez suplente ratificó la detención provisional.

Añade que la situación jurídica del señor *CP* no había sido definida dado que la fiscalía solicitó reconocimiento de personas, el cual ha sido señalado en tres ocasiones sin llevarse a cabo. Similarmente ha sucedido con los señalamientos de audiencia preliminar, convocada en cinco ocasiones y aplazada por la falta de traslado del imputado o la incomparecencia de la defensa, siendo el último señalamiento para el 6 de diciembre de 2022.

Finalmente refiere que al imputado se le ha respetado el debido proceso, su dignidad humana y libertad personal, por lo que ninguno de sus derechos y garantías constitucionales ha sido vulnerado.

5. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) relativos a la existencia de una resolución denegatoria de libertad emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

II. La jurisprudencia de esta sala se ha referido a la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales, por su vinculación con el derecho fundamental de defensa reconocido en el artículo 12 Cn., en tanto la consignación de las razones que llevaron a una autoridad judicial a emitir una decisión en determinado sentido permite examinar su razonabilidad, controlarla mediante los mecanismos de impugnación y hacer evidente la sumisión del juez o cualquier autoridad a la Constitución –sentencia de 6 de octubre de 2010, hábeas corpus 152-2008–; dicha motivación es particularmente relevante en materia de prisión preventiva.

La imposición de la detención provisional implica la comprobación de ciertos presupuestos, mismos que se encuentran dispuestos en el art. 329 del Código Procesal Penal (CPP): apariencia de buen derecho y los peligros procesales. La concurrencia de ambos debe ser analizada por la autoridad judicial a la que compete la adopción de la medida cautelar, en cada caso concreto.

El primero consiste en un juicio de imputación o fundada sospecha de participación del imputado en un hecho punible; el segundo, en un fundado peligro de fuga u obstaculización de la investigación por parte del imputado. Así, sin una razonada sospecha sobre ambos aspectos mencionados no puede justificarse la detención provisional, dado que solo así sería compatible con la presunción de inocencia –sentencia del 19 de agosto de 2019, hábeas corpus 373-2018–.

Sin embargo este deber de motivar no exige una exposición detallada y extensa de las razones que llevaron al juzgador a resolver en determinado sentido, mucho menos se requiere la expresión completa del proceso lógico que el juez utilizó para llegar a su decisión; basta con exponer, en forma clara y concisa, los motivos de la decisión jurisdiccional, permitiendo mediante los mismos que la persona a quien se dirige la resolución logre comprender las razones que la informan –sentencia del 19 de febrero de 2018, hábeas corpus 249-2017–. El anterior estándar de motivación de la detención provisional, por tanto, no solo garantiza el respeto al derecho de defensa sino también al de libertad personal –art. 2 Cn– tutelado mediante el hábeas corpus.

III. Como se señaló, el solicitante ha recurrido en revisión en contra de la decisión de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, sosteniendo la falta de fundamentación del pronunciamiento emitido en la audiencia de revisión de medida cautelar, mediante el cual se mantuvo la detención provisional en contra del señor *MACP*, alegando que los magistrados de la cámara "básicamente justificaron la decisión del juez instructor", decisión que no satisface –a su criterio– las exigencias constitucionales y convencionales relativas a la medida cautelar y su carácter excepcional.

Así, se tiene que los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente emitieron sentencia en el proceso de hábeas corpus, el 26 de abril de 2021, en la que indicaron que el juez de instrucción, para ratificar la detención provisional, tomó en cuenta los elementos indiciarios obtenidos durante la investigación, razonando los presupuestos que deben reunirse para tener por alcanzada mínimamente la existencia del delito y la participación del procesado, habiendo fundamentado su resolución; asimismo agregaron que, con base en el análisis efectuado y argumentos expuestos, no se constató que se "presentaran arraigos por parte de la defensa ni la presunta caución ofrecida".

Este tribunal ha tenido a la vista la copia de la resolución cuestionada y en ella se verifica que el Juez Segundo de Instrucción de Santa Ana, en la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2021, en lo referente a los presupuestos para la imposición de la detención provisional concluyó que:

La existencia del hecho y la probable autoría del incoado en el mismo se establecían mediante datos extraídos de distintos actos de investigación, a los cuáles no se hará más referencia porque la revisión de la medida cautelar, según el acta que contiene las alegaciones de las partes, se basó en la modificación del presupuesto de peligro en la demora.

En cuanto la defensa particular del procesado –contrario a lo sostenido por la cámara– sí consta que presentó documentación con el fin de establecer arraigos: a) "declaración" de la señora FN, en la que consta que el imputado es su sustento económico, b) "copia de la escritura de la casa de la madre" del procesado, c) recomendación de una persona de apellido S y d) certificación de partida de nacimiento del hijo del señor *CP*.

Los documentos antes referidos fueron valorados por el juez de instrucción quien determinó que eran insuficientes para cambiar la medida cautelar de la detención provisional, también considerando que faltaban diligencias que practicar, asimismo se trataba de un delito grave –robo agravado– y no se había desvirtuado el peligro de obstaculización o entorpecimiento del proceso, ante la posible ausencia de los testigos y víctima en un eventual juicio.

En consecuencia, el juez instructor resolvió que el señor *MACP* continuara en detención provisional, a efecto de garantizar los fines del proceso, así como para hacer comparecer al indiciado a las diligencias de investigación y audiencias pendientes, sin embargo, de esa decisión la defensa particular interpuso recurso de revocatoria, en el que solicitó se aplicara la "ley de dispositivos electrónicos" y además ofreció una fianza, o en su caso, "un vehículo" para que se le otorgara el beneficio al imputado.

Luego de dar traslado a la representación fiscal, el juez reiteró que los arraigos deben ser garantizados, pero los presentados no eran suficientes, además que sobre el agravio que manifestaba la defensa debía presentar apelación, agregó que la fianza no garantizaba el sometimiento del acusado al proceso y, en el caso del brazalete electrónico, no se contaba con ese recurso, declarando no ha lugar el recurso interpuesto.

En ese sentido, es posible determinar que la citada autoridad, contrario a lo afirmado por el peticionario, expuso diversas razones para mantener la privación de libertad: la insuficiencia de los arraigos, la gravedad del delito –el ilícito de robo agravado tiene una pena de prisión de ocho a doce años y requiere la existencia de violencia–, la objetiva posibilidad de que el imputado se sustrajera del proceso y la falta de algunas diligencias, como un reconocimiento de personas, que evidentemente requiere la presencia del imputado.

Es cierto que la autoridad judicial no explicó sobradamente por qué concluyó que los documentos para establecer arraigos eran insuficientes, sin embargo, el conjunto de sus razones para no variar la privación de libertad son aceptables a la luz de los derechos defensa y libertad personal porque la exigencia –también derivada de la presunción de inocencia– de que los imputados sean juzgados, por regla general, en libertad puede ceder ante datos objetivos y fuertes –como los suficientes elementos de apariencia de buen derecho y la gravedad de los hechos atribuidos a un imputado derivada de la pena y de las características del delito–, que lleven, justificadamente, a la consideración de que otra medida cautelar distinta de prisión preventiva podría comprometer los fines del proceso penal.

En consecuencia, se establece que la resolución dictada el 25 de marzo de 2021, por el Juez Segundo de Instrucción de Santa Ana contiene motivadamente las razones por las cuales mantuvo la detención provisional, por lo cual no vulneró los derechos fundamentales de defensa y libertad personal del favorecido, reconocidos en los arts. 12 y 2 de la Constitución, respectivamente.

Por consiguiente, es procedente confirmar el pronunciamiento desestimatorio emitido por la cámara respectiva.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 2, 11 inc. 2, 12, 247 inc. 2° de la Constitución y 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Confírmase* la sentencia desestimatoria venida en revisión, proveída por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, en el proceso constitucional de hábeas corpus iniciado por el licenciado *********, a favor del señor *MACP*, por no haberse vulnerado los derechos fundamentales de defensa y libertad personal en la decisión de mantener su detención provisional.

2. *Certifíquese* la presente decisión y remítase junto con las diligencias del hábeas corpus a la cámara citada.

3. *Notifíquese*.

4. *Archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O. CANALES C.—GARCÍA—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

747-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas del día diez de julio de dos mil veintitrés.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por la abogada Verónica Esmeralda Montano Sandoval, en contra de la Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador, a favor de la señora *MEDDG*, procesada por el delito de extorsión.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. *A*. La peticionaria refiere que la señora *DDG* fue capturada por orden administrativa el 10 de septiembre de 2020 y fue puesta a la orden de la Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador, se señaló audiencia de imposición de medidas para el día 11 de septiembre de 2020, siendo que de forma verbal, ordenó la detención provisional.

Los días 5 y 14 de octubre de 2020, el defensor particular presentó escrito a la jueza especializada de instrucción solicitando la emisión del acta o auto correspondiente y su notificación; ante dicha situación, la solicitante considera que existe una detención ilegal por parte de la autoridad demandada puesto que a la fecha no existe una orden de detención escrita tal como lo establece el art. 13 de la Constitución, violando también el acceso a los recursos ya que tampoco se tiene el acta de la audiencia de imposición de medidas donde consten los criterios que conocería el tribunal *ad quem.*

B. Por medio de un segundo escrito, la abogada adjuntó documentación del proceso penal con la que quiere evidenciar que al 20 de octubre de 2020, no existía una orden de detención escrita porque aún no se había elaborado el acta de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales se emitió auto de exhibición personal y se prescindió del nombramiento de juez ejecutor, requiriendo de forma directa este tribunal informes a las autoridades correspondientes, junto con la documentación pertinente.

3. La Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador informó que, en audiencia especial de imposición de medidas cautelares celebrada el 11 de septiembre de 2020, decretó detención provisional en contra de la señora *MEDDG*, por los motivos expuestos en las páginas 100 y 101 del acta de la audiencia en comento, siendo que por la complejidad del caso se emitió de forma verbal, notificando a las partes técnicas del mismo de conformidad con el art. 300 inciso 2° del Código Procesal Penal.

Posteriormente, en auto del 20 de octubre de 2020 se resolvieron escritos presentados por el abogado particular de la imputada y se le explicó que dicha sede judicial no realiza autos de detención provisional sino únicamente acta resolutiva ya que los procesos que se conocen son complejos y extensos, como en el presente caso, que se tratan de 129 imputados, con más de 100 delitos, tal como se evidencia en el acta de fecha 11 de septiembre de 2020; también señaló que el abogado defensor no solicitó en la parte petitoria de sus escritos que se le notificara la resolución donde se decreta la detención provisional, ni copia de la misma, por esa razón no se le resolvió ese aspecto; sin embargo, el acta se encuentra a disposición de la partes técnicas para que pueda ser consultada. Por todo lo anterior, considera que no ha existido una detención ilegal en contra de la señora *DDG*.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se relacionará la jurisprudencia constitucional vinculada a la protección del derecho de libertad física, y la garantía de reserva de ley, regulados en el art. 11 inciso 2° y 13 de la Constitución (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. De acuerdo con la jurisprudencia de esta sala, el inciso 2° del art. 11 Cn. protege el derecho de libertad física de la persona, cuando cualquier autoridad o individuo le restrinja ilegalmente por medio de prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizada por ley. Con lo antes referido, la actuación de este tribunal en materia de hábeas corpus, se circunscribe a controlar cualquier restricción ejercida sobre el derecho de libertad personal de los detenidos –sentencia de 7 de septiembre de 2015, hábeas corpus 182-2015–.

Al respecto, se tiene que del art. 13 Cn. se deriva la garantía primordial del derecho a la libertad física denominada reserva de ley y sobre esta, la sala ha sostenido no solo se extiende a los motivos de restricción del derecho de libertad física, sino también a las formalidades requeridas para su ejecución y al tiempo permitido para su mantenimiento.

En ese sentido, impone la obligación a las autoridades facultadas para dictar órdenes que restrinjan el derecho de libertad de una persona, de emitirlas por escrito; a efecto de que quede constancia material en el proceso o procedimiento de que la autoridad resolvió –en el ejercicio de sus competencias–, imponer una restricción y las razones que la motivaron a ello.

Lo anterior en virtud que al consignarse por escrito los fundamentos fácticos y jurídicos para decretar una restricción, se garantiza que el afectado tenga conocimiento –por medio de la notificación– de: la autoridad específica que dictó la detención, la fecha de emisión de ésta, los motivos que consideró la autoridad para decretarla, lo que permite que aquel tenga

certeza sobre su situación jurídica frente al proceso o procedimiento que se sigue en su contra y a la vez la oportunidad de poder controlar dicha decisión mediante los recursos o medios impugnativos previstos por el legislador –sentencia de 13 de julio de 2018, hábeas corpus 128-2018–.

IV. 1. La pretensión de la solicitante fundamentalmente se refiere a la inexistencia de una decisión judicial escrita que justifique la restricción a la libertad física de la señora *MEDDG*.

De la documentación adjuntada al presente hábeas corpus consta el acta de la audiencia especial de imposición de medidas cautelares, de fecha 11 de septiembre de 2020, por medio del cual la Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador impuso la detención provisional a la procesada *DDG* por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la víctima clave "4549", siendo que la autoridad judicial en dicha acta enumeró los elementos con los que contaba para determinar la existencia del delito.

En cuanto a la participación indicó "[...] cuarta entrega controlada (23/Enero/2020) A esta imputada se le encontró la cantidad de ciento veinte dólares en billetes de veinte dólares y varias monedas de diferente denominación, por lo que dicho agente portando copia de acta de seriado de una forma discreta verificó la series de dos billetes de la denominación de veinte dólares serie números NF CINCO NUEVE OCHO SIETE SIETE OCHO OCHO NUEVE F (NF59877889F); JL SIETE NUEVE UNO CINCO NUEVE CERO CINCO CUATRO A (JL79159054A), constatando que dichas series correspondían con las series correspondían con las series de dos billetes del acta de seriado [...]".

Además, la autoridad judicial reseñó algunas consideraciones doctrinarias en cuanto a la detención provisional y los presupuestos para su imposición; en relación al peligro de fuga señaló que los delitos por los que se procesaban a los imputados (129) eran graves, porque la eventual condena supera los tres años de prisión, agregó que aquellos eran señalados como miembros de pandillas, lo que posibilitaba su fuga y entorpecimiento en la investigación y que a pesar de haber presentado arraigos no estaban establecidos; por lo que decidió imponer la detención provisional a los imputados presentes e intimados.

En ese sentido, se ha logrado constatar que la señora *DDG* se ha encontrado privada de su libertad la cual ha estado respaldada por una decisión judicial decretada por la Juez Especializada de Instrucción "C" de San Salvador, según se verifica en el acta de fecha 11 de septiembre de 2020, la cual ha sido suscrita por las partes procesales que asistieron a la audiencia, entre ellos, estuvo el defensor particular de la beneficiada, según se cita en el cuerpo de dicha resolución.

En consecuencia, dada la inexistencia de la violación constitucional alegada con incidencia en el derecho de libertad física de la beneficiada no se puede estimar la pretensión planteada, debiendo continuar la señora *MEDDG* en la situación jurídica en que se encuentre.

2. Finalmente, cabe señalar que si la peticionaria considera que en el proceso penal han existido falsedades o irregularidades, es de aclarar que este tribunal no tiene competencia para determinar dichas situaciones pues la jurisprudencia ha establecido la imposibilidad de conocer en sede constitucional aquellos reclamos que se basen en actuaciones de autoridad –judicial o administrativa–, o en su caso de un particular, que sean irregulares y puedan ser constitutivas de una falta o un ilícito penal, ya que estas son circunstancias que deben ser propuestas ante las autoridades competentes para que, en caso de ser lo procedente, se realicen las investigaciones respectivas (improcedencia del 12 de febrero de 2018, hábeas corpus 7-2018).

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 11 inciso 2º y 13 de la Constitución, a nombre de la República de El Salvador esta sala **FALLA**:

1. *Declárase no ha lugar* el hábeas corpus iniciado a favor de la señora *MEDDG*, por haberse comprobado la existencia de una decisión judicial escrita que justifica la restricción a la libertad física de la favorecida, la cual fue emitida por la Jueza Especializada de Instrucción "C" de San Salvador.

2. *Continúe* la favorecida en la situación jurídica en que a la fecha se encuentre.

3. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J.A PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H-N.G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

128-2022R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas y treinta y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Procedente de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, se conoce en revisión el proceso constitucional de hábeas corpus iniciado por el abogado Carlos Wilfredo Santos López, a favor del señor *JATA* –condenado por el delito de secuestro–; en contra de actuaciones del Juez Especializado de Sentencia, con sede en Santa Ana.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En el escrito de promoción de este hábeas corpus el peticionario relacionó que el proceso penal inició en el Juzgado de Paz de San Antonio

del Monte, en donde al señor *TA* se le acusaba –junto a otros imputados– de los delitos de privación de libertad agravada, violación agravada, lesione s agravadas, robo agravado y extorsión tentada.

En audiencia inicial el juzgador sobreseyó a su representado por los ilícitos de lesiones agravadas y violación agravada, cambió la calificación jurídica de privación de libertad agravada a secuestro y mantuvo el delito de robo agravado, asimismo, ordenó que el proceso continuara, en la etapa de instrucción común, por robo agravado y, en la jurisdicción especializada, por secuestro, bajo la modalidad de crimen organizado o realización compleja, resolución –que a su criterio– fue arbitraria.

Cuestionó dicha circunstancia ya que tuvo como consecuencia la existencia de dos procesos paralelos. En el primero de ellos un juez del Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, en la causa con referencia 58-49-TSP-09-1, absolvió al señor *TA*, por el delito de robo agravado, ordenando su inmediata libertad, sin embargo, no se hizo efectiva debido al otro proceso que se llevaba en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.

Afirmó que en el segundo proceso con referencia 63-05-2009, otro defensor presentó la sentencia emitida por el juez del Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate, a fin de demostrar al juez especializado que se trataba de la misma teoría fáctica, víctima e incluso los mismos testigos, sin embargo, el juzgador afirmó que dicho documento "era impertinente e irrelevante para fundamentar la sentencia", condenando al señor TA a la pena de cuarenta y cinco años de prisión por el delito de secuestro.

Sostuvo que dicha sentencia fue arbitraria dado que se vulneraron los derechos de defensa y seguridad jurídica, así como la garantía fundamental de *"ne bis in ídem"* –art. 11 de la Constitución (Cn) –, en razón de haber sido enjuiciado dos veces por la misma causa, no obstante "[...] los delitos hayan sido diferentes, pero ocurrió en el mismo tiempo, lugar y forma [...]" y del cual había sido absuelto previamente.

2. Por medio de resolución del 5 de enero de 2022, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente pronunciaron auto de exhibición personal y, el día el 20 de enero del citado año, emitieron sentencia en la que declararon no ha lugar el hábeas corpus "por no estar presente el agravio relacionado en la solicitud".

3. Inconforme con lo resuelto por la referida cámara, el peticionario requirió su revisión, al considerar que en la misma únicamente se mencionó que a criterio de los magistrados no existió doble persecución, porque los delitos imputados al privado de libertad eran diferentes, pero en ningún momento argumentaron que los ilícitos fueron enmarcados en la misma teoría fáctica.

Señaló que, a su juicio, los magistrados contradijeron su propia jurisprudencia vulnerando el principio de congruencia, pues en un caso similar

sostuvieron que existió doble persecución dado que se estaba ante la presencia de los mismos hechos punibles, misma víctima y el mismo rol delictivo, independientemente como se haya calificado; lo que –a su criterio– va en detrimento de la libertad del señor *JATA*.

Reiteró que sí hubo doble persecución porque se trataba del mismo sujeto procesado paralelamente, con la misma teoría fáctica y víctima –denominada "Nelson" –, incluso los mismos testigos. En su escrito citó jurisprudencia sobre los términos de su reclamo, tanto de la Sala de lo Penal y de esta sala, en materia de amparo.

II. 1. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) relativos a la existencia de una resolución denegatoria de libertad emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

2. El principio de *non bis in ídem* o prohibición de doble juzgamiento goza de reconocimiento en el sistema jurídico salvadoreño a partir del artículo 11 inciso 1º de la Constitución; asimismo, su desarrollo legal se encuentra en el artículo 9 del Código Procesal Penal (CPP), que dispone "Nadie podrá ser perseguido más de una vez por el mismo hecho". Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicho principio implica la imposibilidad de que el Estado pueda procesar, dos veces o más, a una persona por el mismo hecho, ya sea en forma simultánea o sucesiva, la garantía también incluye la prohibición de doble condena por el mismo hecho.

El análisis sobre el doble enjuiciamiento al que alude la Constitución debe ser realizado en relación con la persecución penal, de manera que lo esencial es la existencia de un acto de autoridad mediante el cual se señale a una misma persona como autora o partícipe de un hecho delictivo conocido previo o simultáneamente. Por tanto, la doble persecución ocurre cuando se inicia un nuevo procesamiento habiendo otro ya concluido o en trámite; es decir, cuando se desenvuelve una persecución penal idéntica a la que se quiere intentar. De tal forma, la finalidad de esta figura es resguardar a las personas de las consecuencias que provoca una nueva persecución penal, cuando otro sobre el mismo objeto está en trámite o ha sido agotado –sentencia del 9 de junio de 2011, hábeas corpus 178-2011–.

Los requisitos que deben concurrir para tener por establecida la existencia o no de una doble o múltiple persecución, y ellos son: i) identidad en la persona *(eadem personas)*; ii) identidad del objeto de la persecución *(eadem res)*; y iii) identidad de la causa de persecución *(eadem causa petendi).*

Para que exista doble juzgamiento por identidad en la persona es necesario que se trate del mismo sujeto perseguido penalmente en uno y otro caso. Este requisito es operativo individualmente pues conlleva una refe-

rencia estrictamente personal y no posee efecto extensivo. Por su parte, la identidad del objeto de la persecución implica que los hechos imputados deben ser los mismos atribuidos a esa persona en un juzgamiento antiguo o simultáneo, por lo tanto este cuadro fáctico ya no puede ni debe ser objeto de un nuevo enjuiciamiento, resultando irrelevante que el acontecimiento histórico soporte ser subsumido en distintos conceptos jurídicos, pues de no entenderlo así, se posibilitaría nuevas persecuciones penales con el pretexto de encuadrarse en valoraciones o calificaciones jurídicas distintas a la anterior. La identidad de causa de persecución indica que debe tratarse del mismo motivo por el cual se juzga, y con ello se hace referencia al mismo objetivo final del proceso, si concurre la misma causa de infracción, corresponde declarar la identidad, por cuanto se trata del mismo motivo de juzgamiento –sentencia del 13 de febrero de 2015, inconstitucionalidad 21-2012–.

Es preciso enfatizar en este punto que el principio *non bis in ídem* no imposibilita perseguir a la misma persona por una misma calificación jurídica cuando se trata de comportamientos históricos diferentes sino volver a perseguir a esa persona por un mismo hecho histórico, cualquiera que fuere la denominación jurídica utilizada. Finalmente, para que exista identidad de la causa de persecución debe constatarse la compatibilidad del sustrato fáctico y del fundamento jurídico de dos o más procesos seguidos contra una misma persona.

Consecuentemente, cuando se promueve la acción penal por un mismo hecho delictivo simultánea o sucesivamente, ante uno o más tribunales, contra una misma persona y ello genera el surgimiento de dos procesamientos con un mismo objeto, se transgrede el principio de *non bis in ídem* –sentencia de hábeas corpus 178-2011 ya citada–.

III. 1. Este tribunal advierte que el abogado Carlos Wilfredo Santos López se queja de que la cámara remitente declaró no ha lugar el hábeas corpus mediante el cual se reclamó vulneración a la prohibición de doble juzgamiento porque, a su criterio, en contra del señor *JATA* se tramitaron simultáneamente dos procesos que tenían como fundamento los mismos hechos, víctima y testigos, siendo la única diferencia la calificación jurídica.

Agrega que, según los magistrados, los delitos son diferentes, pero en ningún momento argumentan que esos ilícitos están fundamentados en los mismos hechos, así como que se trata de la misma causa penal y fue el mismo sujeto que se persiguió, advirtió además que en casos similares la cámara ha declarado que existía doble persecución y en ese sentido la resolución es incongruente.

Al verificar lo acontecido en el proceso de hábeas corpus, según sentencia del 20 de enero de 2022, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente hicieron referencia a los requisitos que

deben cumplirse para que concurra la doble persecución –identidad de persona juzgada, víctima, hechos y delito–, sosteniendo que no se cumplía el referido a que se trate del mismo delito acusado en ambos procesos, dado que en una sede judicial se conoció por secuestro y, en otra, por robo agravado.

Es decir que tiene razón el recurrente cuando indica que se ha omitido la fundamentación de la cámara, en cuanto a por qué la persecución penal del imputado *TA* no contraría el principio constitucional en análisis con base en los hechos acusados, especialmente porque, según se advierte en la jurisprudencia, no es la calificación jurídica la relevante para evaluar el tema de doble juzgamiento sino los hechos fácticos que se enjuician en uno y en otro caso; en ese sentido, esta sala verificará si se ha inobservado la prohibición constitucional en el supuesto del favorecido.

A tal efecto, conforme a la documentación incorporada, se tiene que:

i) La representación fiscal promovió acción penal, el 24 de octubre de 2008, en contra del señor *JATA* y otros, en el Juzgado de Paz de San Antonio del Monte, por los delitos de privación de libertad, violación agravada, lesiones agravadas, robo agravado y extorsión tentada, todos en perjuicio de la víctima denominada "Nelson".

Los hechos relacionados en el requerimiento fiscal eran concretamente los presuntamente sucedidos el 3 de septiembre de 2008 en la ciudad de Sonsonate, en momentos que la víctima fue obligada con arma de fuego a abordar un vehículo en el que fue trasladada a una casa deshabitada ubicada en el cantón **********, en la que estuvo privada de libertad por un lapso de cinco días, tiempo en el que le robaron ciento diez dólares, además de ser amenazada constantemente de muerte y abusada sexualmente.

Uno de los sujetos que la habían privado de libertad, le mencionó que la dejarían ir, pero que a cambio debía pagarles la cantidad de siete mil dólares, pero ella les manifestó que sólo podía proporcionar tres mil dólares, lo que fue aceptado, dinero que sería entregado el 9 de septiembre de ese año, sin embargo, no lo hizo debido a que un día antes –8 de septiembre– interpuso denuncia en la Policía Nacional Civil.

ii) En audiencia inicial del 29 de octubre de 2008, el juez de paz resolvió –entre otros asuntos– subsumir al delito de secuestro los ilícitos de privación de libertad agravada y extorsión tentada, ordenó la remisión del proceso para la siguiente etapa al Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, "por tratarse de un delito bajo la modalidad de crimen organizado o de realización compleja", sin embargo, por el robo agravado, el proceso fue remitido al Juez Primero de Instrucción de Sonsonate y decidió –el juez de paz– sobreseer definitivamente al señor *TA* por los delitos de lesiones agravadas y violación agravada.

iii) En el caso del delito de robo agravado, en la fase plenaria conocieron los jueces del Tribunal de Sentencia de Sonsonate, quienes emitieron sentencia absolutoria el 16 de abril de 2009, a favor del señor *TA*, por considerar que con la prueba aportada –testimonial y documental– no era posible "superar el juicio de tipicidad de los hechos atribuidos".

iv) Por su parte, el delito de secuestro imputado al favorecido fue calificado definitivamente por el Juez Especializado de Sentencia de Santa Ana como secuestro tentado en la sentencia emitida el 21 de agosto de 2009, por medio de la que se condenó al señor *TA* a la pena de cuarenta y cinco años de prisión, por haberse acreditado los hechos acusados con la prueba pericial, testimonial y documental.

Delimitado lo anterior, tal como se ha referido en la jurisprudencia constitucional citada, en el análisis de la existencia de una doble o múltiple persecución deben concurrir: *i)* identidad en la persona; *ii)* identidad del objeto de la persecución; e *iii)* identidad de la causa de persecución.

Con respecto al primer requisito debe indicarse que, a raíz de la resolución emitida por el juez de paz de separar el proceso y remitir a sedes diferentes para la etapa instructiva, fueron emitidas dos sentencias: una absolutoria en sede ordinaria, por robo agravado y otra condenatoria, en la especializada, por secuestro tentado, ambas por hechos sucedidos entre el 3 y 8 de septiembre de 2008, en las que se valoraron las mismas pruebas –pericial, testimonial y documental– lo que evidencia identidad en cuanto a la persona juzgada, es decir, el señor *JATA*.

En cuanto al segundo requisito, consta que los hechos por los cuales ha sido procesado el favorecido tienen su origen en lo acontecido entre el 3 y 8 de septiembre de 2008, los cuales fueron denunciados por la víctima denominada "Nelson", quien indicó diferentes conductas realizadas por el señor *TA* y otros, una de ellas consistente en el apoderamiento de ciento diez dólares, mediante amenazas con una escopeta hechiza, que fue calificada como robo agravado, en perjuicio patrimonial de la víctima y otra consistente en la privación de libertad por cinco días, en la que refirió que era el favorecido quien daba las órdenes y que otro sujeto del grupo le exigió la cantidad de siete mil dólares para dejarla en libertad, sin embargo, llegó a un acuerdo de entregarles tres mil dólares, lo que no se consumó porque realizó la denuncia, esta conducta se calificó como secuestro tentado, en perjuicio de la libertad individual de clave "Nelson".

En ese sentido, tal como se expuso en el criterio jurisprudencial de este tribunal, las acusaciones por delitos distintos no afectan la garantía de prohibición de doble persecución penal cuando es el resultado de que en el mismo contexto histórico se hayan ejecutado comportamientos ilícitos diferentes, entonces, lo argumentado por el recurrente para fundamentar su pretensión sobre la identidad de hechos acusados en ambos procesos

parte de su errónea concepción sobre uno de los requisitos exigibles para establecer la existencia de vulneración a la prohibición de doble juzgamiento –identidad de objeto de persecución–.

En ese línea de ideas no es posible considerar que por la imputación de dos conductas delictivas cuyos elementos típicos y bienes protegidos son distintos aunque se trate de la misma víctima, pueda considerarse la posibilidad de verificar la existencia o no de vulneración a la categoría constitucional en estudio, únicamente porque su comisión se atribuya dentro de un mismo contexto histórico, ya que lo que se protege a través de la prohibición de doble juzgamiento es que de una misma conducta se pretenda hacer más de una persecución penal, en consecuencia, el supuesto planteado en revisión se aleja del contenido regulado por la prohibición de doble persecución en los términos que el art. 11 inc. 1° Cn y la jurisprudencia constitucional exigen.

De modo que esta sala ha determinado no existir inobservancia a la garantía constitucional en mención y al derecho fundamental de libertad personal del señor *JATA*, por lo que deberá confirmarse la resolución venida en revisión por medio de la cual se declaró no ha lugar la petición de hábeas corpus propuesta.

2. Como aspecto final esta sala advierte que el Juez de Paz de San Antonio del Monte, al resolver la situación jurídica del imputado, sin más motivación, decidió separar el proceso, remitiendo a sede común por el robo agravado y a la especializada por secuestro, indicando únicamente que el segundo se trataba de un delito "bajo la modalidad de Crimen Organizado o de realización compleja".

En ese sentido, deberá exhortársele al análisis motivado de las reglas de competencia establecidas en la ley y en especial a las de competencia por conexión establecidas en los art. 59 y 60 del CPP, dado que, si consideraba que los delitos atribuidos al favorecido tenían conexidad debió remitir a la sede especializada el proceso sin realizar separación alguna, para no generar el distinto juzgamiento de causas vinculadas y evitar así también abonar a la confusión del recurrente quién entendió que el juzgamiento de su representado se desarrolló en procesos paralelos y respecto a los mismos hechos.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inc. 2, 247 inc. 2° de la Constitución, 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala **RESUELVE**:

1. *Confírmase* la sentencia venida en revisión, proveída por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, emitida en el hábeas corpus promovido a favor del señor *JATA*, en cuanto a no haberse vulnerado la prohibición constitucional de doble juzgamiento ni el derecho de libertad personal del favorecido.

2. *Certifíquese* la presente decisión y remítase junto con las diligencias del hábeas corpus a la cámara citada. *Previénese* a este último tribunal para que fundamente las resoluciones que emita en ejercicio de su competencia constitucional.

3. *Exhórtase* al Juez Paz de San Antonio del Monte para que realice su labor en armonía con los criterios legales para la determinación de la competencia.

4. *Notifíquese*. A tal efecto, se autoriza a la secretaría de este tribunal para que realice todas las diligencias necesarias para comunicar esta decisión, utilizando cualquiera de los medios regulados en la legislación procesal aplicable, inclusive a través de tablero judicial, una vez agotados los demás procedimientos disponibles.

5. *Archívese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—J. A. PÉREZ— LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA —H. N. G—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

251-2021R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintitrés.

El presente recurso de revisión ha sido interpuesto por el abogado ********** en contra de la resolución emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, en el proceso de hábeas corpus promovido a favor de los señores *HAMD y MAGV*, ambos procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y el segundo, además, por homicidio agravado; en contra del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En la solicitud de exhibición personal se expuso que a los señores *MD y GV*, se les ha violado su derecho de libertad física y defensa ya que en audiencia especial de imposición de medidas cautelares se les declaró rebeldes y se les decretó la detención provisional sin haber sido citados y consecuentemente sin que se les haya dejado participar y ejercer su derecho de defensa a través de un abogado de su elección.

2. Por medio de proveído del 1 de junio de 2021 los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente declararon no ha lugar el hábeas corpus en tanto verificaron que los imputados fueron citados en las direcciones proporcionadas y fueron representados en la audiencia por medio de un defensor público.

3. Inconforme con la resolución pronunciada por la referida cámara y con fundamento en el art. 72 inc. 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), el peticionario interpuso recurso de revisión para ser conocido por esta sala, ratificando los aspectos solicitados inicialmente en el proceso de hábeas corpus, agregó que las citas no fueron entregadas de forma personal, tampoco existía un compromiso real para su entrega, por lo que el acto de citación debió ser verificado por el juez de que aquellos tenían certeza o conocimiento del proceso en su contra por lo que pudieron agotarse otros mecanismos para constatar que las citas se realizaron; además, imponer oficiosamente un abogado a un imputado ausente vulnera su derecho de defensa.

4. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° LPC relativos a la existencia de una resolución denegatoria emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia sobre los actos de comunicación para hacer comparecer al imputado a un proceso penal en su contra y su vinculación con los derechos de defensa y audiencia (III.1), luego sobre el derecho de defensa del imputado en el proceso penal (III.2); y, a partir de los datos que consten en el expediente, se procederá a analizar el recurso de revisión sometido a conocimiento de este tribunal (IV).

III. 1. Esta sala ha sostenido en su jurisprudencia que los actos de comunicación deben cumplir con el fin que tienen dentro del proceso penal –hacer saber una decisión a una persona que se ve afectada por ella–, confiriéndole así la oportunidad para disponer lo conveniente en relación a la defensa de sus derechos que pudiesen estar en juego en la controversia de que se trate.

Por consiguiente, los actos procesales de comunicación se encuentran íntimamente relacionados tanto con la imposición de la detención provisional como con la declaratoria de rebeldía, las cuales implican una incidencia en el derecho de libertad física del imputado –art. 2 Cn–, pues la aplicación de la prisión preventiva se habilita en la medida que el justiciable se encuentre en posición de conocer la imputación y poder controvertirla, y la rebeldía es el estado que adquiere el inculpado, cuando ha desobedecido el llamado judicial o incumplido su deber de disponibilidad como imputado, lo que tiene como consecuencia la emisión de una orden de captura cuyo objeto es hacerlo concurrir a la sede judicial mediante el uso de la seguridad pública, a partir de la certeza que se tenga de su resistencia a hacerlo de manera voluntaria –sentencia del 4 de junio de 2021, hábeas corpus 443-2018–.

Lo anterior, no implica que el único medio para garantizar tal finalidad consista en la constancia de que la esquela de citación sea recibida de manera personal por el procesado –y que se cumplan con los requisitos de forma que exige la disposición respectiva–, sino que basta con la certeza de la utilización de los mecanismos legalmente dispuestos para tener por realizada dicha diligencia; tal es así que, atendiendo al principio finalista de los actos de comunicación procesal, la circunstancia a evaluar no es que tales actos se realicen de una o de otra forma, sino que la comunicación se consiga a efecto de generar las posibilidades reales y concretas de defensa, en atención a los derechos de audiencia y defensa reconocidos en los arts. 11 inc. 1º y 12 inc. 1º Cn –sobreseimiento de 13 de septiembre de 2017, hábeas corpus 287-2016–.

2. Este tribunal ha referido la importancia del derecho de defensa en el proceso penal y reiteró que, en relación con el imputado, este puede verse desde dos perspectivas: material y técnica.

Esta última tiene por objeto, entre otros aspectos, garantizar la igualdad de armas dentro del proceso penal, pues pretende que tanto acusador como acusado cuenten con los mismos medios de defensa y ataque, así como idénticas posibilidades de alegación, prueba e impugnación, y ello, se ha sostenido, se logra con la participación del abogado defensor.

La función que ejerce dicho sujeto procesal no supone únicamente el asesoramiento personal sobre quien pende un cargo penal a fin de que brinde una deposición lo más verosímil posible de su estrategia procesal; sino que también implica sugerir elementos de prueba a los distintos órganos de persecución y juzgamiento que la sustenten, participar en los actos de producción de prueba, controlar su desarrollo e interpretar lo producido, así como sostener una aplicación de la ley conforme las necesidades del encartado.

Por tan importante función, es que la Constitución y el Código Procesal Penal imponen la obligatoriedad de la defensa técnica, tanto del imputado presente como de aquel que se encuentra ausente. En principio, a desarrollarse por un profesional de la confianza del encartado y, en caso de no poderlo nombrar el imputado, el Estado se encuentra en la obligación de designarle uno de carácter público y, en su defecto, uno de oficio –artículos 98 y 101 de la normativa procesal penal–. Es así que el defensor viene a complementar la capacidad de defensa material, tanto en el ámbito de la fase preparatoria, como en la fase contradictoria del procedimiento criminal –sentencia de 25 de enero de 2016, hábeas corpus 216-2015–.

IV. El recurrente alega la inconstitucionalidad del decreto de rebeldía y de la detención provisional impuesta a los señores *HAMD y MAGV*, porque

no fueron citados para la audiencia especial de imposición de medidas razón por la cual no pudieron elegir un abogado que representara sus intereses vulnerando sus derechos de libertad física y defensa.

De conformidad con la certificación de algunos pasajes del proceso penal remitido en revisión se tiene que los beneficiados fueron debidamente citados para la celebración de la referida audiencia especial señalada para las catorce horas del día 13 de octubre de 2020; según corren agregadas las esquelas de citación a folios 44 y 45 de la documentación recibida, en la que se ha hecho constar que el señor *GV*, fue citado por medio de su cuñada la señora *********, en la que además se consignan huellas digitales y el señor *MD* fue citado por medio de su padrastro el señor *********, en la que además se consigna una firma de recibido. Ambos imputados fueron citados en las direcciones que constan en el proceso penal.

De ahí que ante la incomparecencia de aquellos, el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana celebró la audiencia especial de imposición de medidas con la asistencia de la defensora pública licenciada **********, quien representó a los imputados ausentes *MD y GV*, decretándoles la rebeldía y la detención provisional.

Con base en lo expuesto, se advierte que la restricción al derecho de libertad de los favorecidos se emitió como consecuencia del agotamiento del mecanismo legal dispuesto para hacer saber a los imputados su obligación de asistir a la diligencia judicial detallada en dicha comunicación, y al no haberlo atendido, se cumple el presupuesto legal indicado para poder imponerla.

Asimismo, se constató que en la audiencia especial se les garantizó a los señores *MD y GV* su derecho de defensa al contar con la asistencia de la abogada pública en igualdad de armas frente a la participación de la fiscalía; por tanto, esta sala no puede emitir una decisión estimatoria respecto a la pretensión planteada en el recurso de revisión pues se demostró que no se ha generado violación constitucional en los términos expuestos por el peticionario que afecten los derechos fundamentales de defensa y libertad física de los favorecidos, por lo que es procedente confirmar el pronunciamiento desestimatorio emitido por la Cámara.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 2, 11, 12, 247 de la Constitución y 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales; esta sala **RESUELVE**:

1. *Confirmase el fallo* emitido por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, de la resolución venida en revisión consistente en *declarar no ha lugar* el hábeas corpus solicitado a favor de los señores *HAMD y MAGV,* con base en los argumentos expuestos

en esta decisión, al no existir violación a su derecho de defensa y libertad física; en consecuencia, continúen los favorecidos en la situación jurídica en que se encuentren.

2. *Certifíquese* la presente resolución y remítase, con las diligencias del hábeas corpus, a la cámara relacionada.

3. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—J. A. PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

330-2021R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del día once de agosto de dos mil veintitrés.

El presente recurso de revisión ha sido interpuesto por el abogado GOFT en contra de la resolución emitida por la Cámara de la Segunda Sección del Centro, con sede en Cojutepeque, en el proceso de hábeas corpus promovido a favor del señor *PALH* –procesado por el delito de extorsión agravada–; en contra de actuaciones de la Jueza Segunda de Paz y la Jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En la solicitud de exhibición personal se expuso que la Jueza Segunda de Paz de Cojutepeque decretó la detención provisional a pesar de la deficiencia investigativa de la fiscalía, únicamente por la gravedad del delito, pues se sostuvo que el solo hecho genera peligro de evasión y al representar peligrosidad puede obstaculizar actos de investigación pero al verificar la resolución no establece de dónde deduce que su representado es peligroso ni que él fue quien recibió y transfirió a un tercero el dinero producto de la extorsión, es decir, no se indica la participación en el delito acusado.

Agregó que solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares pero la Jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque la denegó de manera ilegítima y arbitraria, haciendo valoraciones de la documentación que aportó y pronunciándose sin dar la oportunidad de debatir.

2. Por medio de proveído del 31 de agosto de 2021 los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro declararon no ha lugar el hábeas corpus por el motivo de falta de fundamentación de la decisión que decretó la detención provisional, al considerar que constaban las razones

que la justificaban y declararon improcedente el reclamo referido a la denegatoria de la audiencia de revisión de medidas cautelares, al constituir dicho asunto inconformidad con la resolución.

3. Inconforme con el fallo de la referida cámara y con fundamento en el art. 72 inc. 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), el peticionario interpuso recurso de revisión para ser conocido por esta sala, ratificando los aspectos solicitados inicialmente en el proceso de hábeas corpus, agregando, por un lado, que la juez de paz impuso la detención provisional únicamente por la gravedad del delito y, por otro, que dada la naturaleza del proceso penal, la revisión de medidas cautelares no puede decidirse sin audiencia oral y pública.

4. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° LPC relativos a la existencia de una resolución denegatoria emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

II. La jurisprudencia de esta sala se ha referido a la importancia de la motivación de las resoluciones judiciales, por su derivación con el derecho fundamental de defensa reconocido en el artículo 12 Cn., en tanto la consignación de las razones que llevaron a una autoridad judicial a emitir una decisión en determinado sentido permite examinar su razonabilidad, controlarla mediante los mecanismos de impugnación y hacer evidente la sumisión del juez o cualquier autoridad a la Constitución –sentencia de 6 de octubre de 2010, hábeas corpus 152-2008–; dicha motivación es particularmente relevante en materia de prisión preventiva.

La imposición de la detención provisional implica la comprobación de ciertos presupuestos, mismos que se encuentran dispuestos en el art. 329 del Código Procesal Penal (CPP): apariencia de buen derecho y los peligros procesales. La concurrencia de ambos debe ser analizada por la autoridad judicial a la que compete la adopción de la medida cautelar, en cada caso concreto.

El primero consiste en un juicio de imputación o fundada sospecha de participación del imputado en un hecho punible; los segundos, en un fundado peligro de fuga u obstaculización de la investigación por parte del imputado. Así, sin una razonada sospecha sobre ambos aspectos mencionados no puede justificarse la detención provisional, dado que solo así sería compatible con la presunción de inocencia –sentencia del 19 de agosto de 2019, hábeas corpus 373-2018–.

Este deber de motivar no exige una exposición detallada y extensa de las razones que llevaron al juzgador a resolver en determinado sentido, mucho menos se requiere la expresión completa del proceso lógico que el juez utilizó para llegar a su decisión; basta con exponer, en forma clara y

concisa, los motivos de la decisión jurisdiccional, permitiendo mediante los mismos que la persona a quien se dirige la resolución logre comprender las razones que la informan (sentencia del 19 de febrero de 2018, hábeas corpus 249-2017).

III. 1. *A*. El pronunciamiento que, se alega, carece de fundamentación, es el emitido en audiencia inicial por la Jueza Segunda de Paz de Cojutepeque, mediante el cual se impuso detención provisional al acusado *PALH*.

Según consta en el proceso, la citada jueza consideró que se habían cumplido los requisitos del artículo 329 CPP para ordenar la medida cautelar, mencionando que se incorporaron elementos suficientes para establecer la existencia del delito, entre ellos lo que consta en el acta de denuncia, entrevista de la víctima, acta de despliegue del documento único de identidad del señor *PALH*, álbum fotográfico de inspección policial del lugar, las diligencias del régimen de protección de la víctima denominada "Milán", acta de ubicación de vivienda del señor *LH*, informe de bitácoras de llamadas de los números de teléfonos involucrados en la actividad extorsiva, acta de captura y remisión por orden administrativa; con las que se establecen los hechos, incluido el depósito de dinero por parte de la víctima, así como, preliminarmente, la participación del imputado por haber recibido directamente dinero de la extorsión.

Sobre el segundo presupuesto de la medida precautoria, detalló la documentación presentada por la defensora para acreditar los arraigos, de los cuales señaló que unos recibos de energía eléctrica están a nombre del señor *LH* y la copia de la escritura de propiedad no está a nombre del imputado, que debido a que vive cerca de la frontera de Guatemala tiene mayores facilidades de fuga, además destacó la gravedad del delito y su pena de prisión por lo que no consideró procedente decretar medidas distintas a la detención provisional.

En ese sentido es posible determinar que la citada autoridad, contrario a lo afirmado por el peticionario, se pronunció en torno al presupuesto de la apariencia del buen derecho, considerando que los indicios presentados –testimoniales y documentales, entre otros– para determinar la existencia del delito de extorsión y la probable participación de aquel en el mismo.

Ahora bien, en cuanto al otro presupuesto de la detención provisional referido al peligro de fuga, sí ponderó los documentos presentados por la defensa, de los cuales consideró que no se establecía suficiente arraigo, utilizando dicho aspecto para ordenar la medida cautelar, así como la gravedad del delito y la posible pena a imponer.

Por tanto se determina que la resolución dictada, con fecha 2 de julio de 2021, por la Jueza Segunda de Paz de Cojutepeque contiene motivadamente las razones por las cuales decretó la detención provisional, siendo que la autoridad demandada respetó los derechos fundamentales del

favorecido, tanto el de defensa como el de libertad personal, reconocidos en los arts. 12 y 2 de la Constitución, respectivamente, al ajustar su actuar a la Ley Suprema, por tanto, es procedente confirmar el pronunciamiento desestimatorio emitido por la cámara.

B. Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe advertir que las autoridades judiciales al momento de pronunciarse sobre los presupuestos procesales para la restricción del derecho de libertad y sobre todo cuando la investigación del delito dentro del proceso judicial va avanzando, dentro de su facultad exclusiva para valorar prueba deben, no solo señalar los elementos a considerar para la imposición de la medida más gravosa sino también evaluar y analizar cada vez con mayor acuciosidad la conexión entre el comportamiento del imputado con los hechos reprochados, es decir, si las acciones u omisiones probadas configuran los elementos objetivos y subjetivos del ilícito, por ejemplo, en casos como el presente, si el recibo de determinada cantidad de dinero, en una oportunidad, a un número telefónico registrado a nombre del imputado –y que, según los hechos, inmediatamente fue trasladada a otra persona que se desconoce si está siendo procesada–, está apoyado con otra prueba en torno a su alegada participación en los actos extorsivos, debiendo considerar en su examen tanto la posición de la parte acusadora como la de la defensa.

2. Ahora bien, con referencia a la denegatoria de la audiencia de revisión de medidas cautelares, según consta en la resolución emitida por los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, de 31 de agosto de 2021, "declararon improcedente" este aspecto de la pretensión; no obstante, señalaron que no existía vulneración constitucional al derecho de "libertad ambulatoria" del favorecido, en tanto que uno de los presupuestos para la revisión de la medida es que deben concurrir presupuestos de variabilidad de aquella, siendo este uno de los argumentos de la Jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque para denegar la referida audiencia.

Ahora bien, es necesario analizar la resolución emitida por la jueza mencionada, de fecha 12 de agosto de 2021, por medio de la cual rechazó la audiencia pedida al indicar: "[...] uno de los motivos de los que se parte para una revisión de la medida cautelar, es la valoración de nuevos elementos aportados posteriormente que desvanezcan los extremos procesales que se refieren a comprobar de manera probable la existencia de hechos tipificados como delito y elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente, que el imputado es probable autor o partícipe del delito relacionado [...] se estima improcedente la revisión de la medida cautelar de detención provisional decretada en este proceso al imputado, ya que los elementos que se valoraron en la fase inicial continúan sin variar hasta

esta fecha, y los documentos para acreditar algún tipo de arraigo que se presentan y relacionan en el escrito, no constituyen elementos de prueba, por lo que no tienen ninguna relación en cuanto a debilitar alguno de los dos extremos procesales indicados [...]

Se advierte al solicitante, que para futuras peticiones de audiencia de revisión de medida cautelar –cuando proceda–, deberá hacerse la debida fundamentación, en el sentido de expresar concretamente qué vínculos u obligaciones se pretenden acreditar o se derivan de un determinado documento y no limitarse únicamente a relacionarlos de forma general o abstracta [...], por lo que deberá hacerse primero la petición escrita debidamente fundamentada para valorar su procedencia, conforme al Art. 344 C.Pr.Pn. [...] Deniégase autorizar audiencia especial para revisar la medida cautelar de la detención provisional [...]" (negritas suprimidas).

Al respecto, la facultad de los jueces de calificar la pertinencia de la solicitud de revisión de medidas, como requisito de procedencia de acuerdo al art. 344 CPP, implica, por una parte, evaluar la justificación dada por el solicitante por la que considera que las circunstancias que motivaron la medida cautelar han cambiado, debiendo examinar el mérito de esa propuesta de variación para ser discutida en audiencia y, por otra, verificar que los elementos de convicción que se presenten sean correspondientes con la naturaleza de la petición.

En el presente caso se advierte que la Jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque denegó la aludida petición fundamentándose en la falta de propuesta de variabilidad de los presupuestos de imposición de la detención provisional y, además, consideró que la solicitud no estaba debidamente fundamentada pues solo se había relacionado de forma general y abstracta la documentación presentada.

De modo que, con tales argumentos, en el examen de pertinencia, la autoridad judicial demandada dejó plasmada las razones por las cuales denegó la audiencia para el caso del favorecido que, a su criterio, hacían considerar, en ese momento, impertinente la solicitud. Si bien en un extracto de la resolución la jueza demandada parece estar concluyendo sobre el valor de los documentos presentados para acreditar arraigos –lo cual solamente puede efectuarse en audiencia– y además sostiene, sin suficiente argumentación ni claridad, que los "documentos para acreditar algún tipo de arraigo que se presentan y relacionan en el escrito, no constituyen elementos de prueba porque no tienen ninguna relación en cuanto a debilitar alguno de los dos extremos procesales indicados", lo cierto es que en parte de su resolución también indica que no advierte idoneidad de lo aportado para establecer arraigos, por las propias características de la documentación que

no considera adecuada para establecer vínculos u obligaciones formales, verificables y permanentes del procesado a favor de terceras personas, argumento que es aceptable en una decisión como la emitida.

Esta sala no sostiene que está de acuerdo o en desacuerdo con las razones de la jueza, porque no forma parte de su competencia constitucional pronunciarse en ese sentido, solo concluye que hay motivos indicados por la demandada para rechazar la audiencia de revisión de la medida cautelar y que, aunque hay aspectos objetables en su decisión, también se indican cuestiones que pueden fundamentar tal denegatoria por considerar impertinente la pretensión de la defensa.

Como punto final sobre este aspecto cabe añadir que la apreciación del recurrente de que "la revisión de medidas no puede decidirse sin que exista audiencia oral y pública" no es certera, dado que, como se indicó en líneas anteriores, la ley faculta al juez el examen de procedencia de dicha actuación.

Por tanto se determina que la resolución dictada contiene motivadamente las razones por las cuales rechazó la solicitud de la defensa, respetando así los derechos fundamentales del favorecido –defensa, presunción de inocencia y libertad personal, reconocidos en los arts. 12 y 2 de la Constitución–, respectivamente; en consecuencia, debe desestimarse este aspecto de la pretensión del recurso de revisión, tal como lo determinó la cámara remitente, aún y cuando utilizó una terminología inadecuada referida a un rechazo liminar –improcedencia–.

En efecto, la improcedencia de un hábeas corpus se reserva para un rechazo *liminar* por vicios de fondo, que provoca defecto absoluto en la facultad de juzgar, como por ejemplo la falta de competencia, la cosa juzgada, los asuntos de mera legalidad, etc. En el presente caso, como se expuso, la cámara utilizó la figura de la improcedencia pero para declarar sin lugar el hábeas corpus, es decir, para señalar que no existían violaciones constitucionales, siendo lo correcto, por tanto, haber utilizado la terminología propia de una sentencia (estimar o desestimar la pretensión), y no la de una especie de rechazo *in limine* (la improcedencia).

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 2, 11, 12, 247 de la Constitución y 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales; esta sala **RESUELVE**:

1. *Confírmase* la resolución emitida por la Cámara de la Segunda Sección del Centro, con sede en Cojutepeque, venida en revisión, consistente en *declarar no ha lugar* el hábeas corpus solicitado a favor del señor PALH, con base en los argumentos expuestos en esta decisión, al no existir violación a sus derechos de defensa, presunción de inocencia y libertad física; en consecuencia, continúe el favorecido en la situación jurídica en que se encuentre.

2. *Certifíquese* la presente resolución y remítase, con las diligencias del hábeas corpus, a la cámara relacionada.

3. *Remita*, la Jueza Segunda de Instrucción de Cojutepeque, copia de esta resolución a la autoridad judicial actualmente a cargo del proceso penal del señor *LH*.

4. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

34-2022R

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas del día veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

El presente recurso de revisión ha sido interpuesto por el abogado ********* en contra de la resolución emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, en el proceso de hábeas corpus promovido en contra del Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, a favor del señor *MARN*, procesado por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.

Analizado el recurso y considerando:

I. 1. En la solicitud de exhibición personal se expuso que al señor *RN* se le vulneró su derecho de libertad física ya que en audiencia especial de imposición de medidas cautelares se le declaró rebelde y se le decretó la detención provisional, sin haber sido citado en legal forma.

2. Por medio de proveído del 10 de enero de 2022, los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente declararon no ha lugar el hábeas corpus en tanto verificaron que el imputado fue citado en legal forma y además había nombrado –con anterioridad a esa audiencia–a su defensora particular, quién tampoco acudió a la diligencia.

3. Inconforme con la resolución pronunciada por la referida cámara y con fundamento en el art. 72 inc. 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), el peticionario interpuso recurso de revisión para ser conocido por esta sala, ratificando los aspectos solicitados inicialmente y agregando que el notificador/citador diligentemente optó por dejar la esquela en el lugar de trabajo del referido procesado, siendo necesario llevar a cabo gestiones relativas a investigar el lugar donde podía ser localizado, pues se citó en un lugar que no era su residencia.

4. Se ha cumplido con los requisitos establecidos en el art. 72 inciso 2° LPC relativos a la existencia de una resolución denegatoria de libertad, emitida por una cámara de segunda instancia y la interposición del recurso dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, lo que permite conocer y decidir este medio impugnativo.

II. Es preciso señalar el orden lógico de esta resolución: Primero se hará referencia a la jurisprudencia sobre los actos de comunicación para hacer comparecer al imputado a un proceso penal en su contra y su vinculación con los derechos de defensa y audiencia (III); luego, a partir de los datos que consten en el expediente, se procederá a analizar el recurso de revisión sometido a conocimiento de este tribunal (IV).

III. Esta sala ha señalado que la citación o la notificación, como actos de comunicación, no tienen desde una perspectiva constitucional sustantividad propia, pues su finalidad va más allá de procurar el simple conocimiento de un acto, condicionando la eficacia del proceso pues habilita un conocimiento real del acto o resolución que la motiva que permite garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de las partes, principalmente los derechos de defensa y audiencia –arts. 11 y 12 de la Constitución (Cn.)–.

Se ha determinado que el acto de citar al imputado contiene una orden coactiva del tribunal para que se presente a la sede judicial, pero también implica una correcta verificación para generar eficacia a la finalidad del mismo y ello implica que el justiciable debe estar en posición de conocer la citación. Así, solo ante este escenario y la reticencia del mismo a comparecer, puede ser ordenada compulsivamente su presencia –arts. 86, 165 y 321 del Código Procesal Penal (CPP)– (sentencia de 2 de marzo de 2022, hábeas corpus 428-2019).

Lo anterior, no implica que el único medio para garantizar tal finalidad consista en la constancia de que la esquela de citación sea recibida de manera personal por el procesado –y que se cumplan con los requisitos de forma que exige la disposición respectiva–, sino que con la certeza de la utilización de los mecanismos legalmente dispuestos para tener por realizada dicha diligencia; tal es así que, atendiendo al principio finalista de los actos de comunicación procesal, la circunstancia a evaluar no es que tales actos se realicen de una o de otra forma, sino que la comunicación se consiga a efecto de generar las posibilidades reales y concretas de defensa, en atención a los derechos de audiencia y defensa reconocidos en los arts. 11 inc. 1º y 12 inc. 1º Cn. (sobreseimiento de 13 de septiembre de 2017, hábeas corpus 287-2016).

IV. 1. El recurrente alega la inconstitucionalidad del decreto de rebeldía y de la detención provisional impuesta al señor *MARN*, porque no fue citado en legal forma para la audiencia especial de imposición de medidas cautelares.

De conformidad con la documentación remitida, se tiene que se señaló audiencia especial para las diez horas del día 3 de septiembre de 2019. En oficio y esquela agregados desde folios 18 al 20 de las diligencias de hábeas corpus recibidas, se ha hecho constar que el señor *RN* fue citado en su lugar de trabajo por medio del señor ********, secretario de la Alcaldía Municipal de Pasaquina "por no encontrarse presente el imputado, ya que se desempeña actualmente como alcalde municipal de esta ciudad", en la que además se consignó fecha, hora, sello institucional y firma de recibido.

A propósito de los argumentos expuestos en la revisión por parte del peticionario, conforme a lo dispuesto en el art. 165 CPP cuando se necesite la presencia de una persona se ordenará su citación "mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega o por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje".

En el caso del imputado *RN* este fue convocado en su lugar de trabajo, a través de una persona empleada del mismo lugar. De ahí que, ante la incomparecencia de aquel a la audiencia programada, el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana la celebró sin su presencia y sin la de la defensora particular *********, que había sido nombrada por el imputado el 29 de agosto de 2019, decretando la rebeldía y la detención provisional del señor *RN*; esto según consta en la resolución del 10 de enero de 2022, emitida por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, agregada a folios 24-26 del expediente de hábeas corpus y lo cual no ha sido rebatido por el recurrente.

Con base en lo expuesto, se advierte que la restricción al derecho de libertad del favorecido se emitió como consecuencia del agotamiento del mecanismo legal dispuesto para hacer saber al imputado su obligación de asistir a la diligencia judicial detallada en dicha comunicación y, al no haberlo atendido, se cumple el presupuesto legal indicado para poder imponerla. No existe indicio alguno de que la comunicación realizada en su lugar de trabajo no haya cumplido su finalidad –que es el aspecto que se evalúa en este proceso constitucional– sino de lo contrario, que si llegó a su conocimiento pues el mismo nombró abogada defensora días antes de la audiencia especial, quien tampoco compareció.

Por tanto, esta sala no puede revocar la decisión impugnada en el recurso de revisión pues se demostró que no se ha generado violación constitucional en los términos expuestos por el peticionario, que afecte los derechos fundamentales de defensa y libertad física del señor *RN*, por lo que es procedente confirmar el pronunciamiento desestimatorio emitido.

2. Como aspecto final, este tribunal estima necesario reiterar que las cámaras de segunda instancia competentes para conocer del proceso cons-

titucional de hábeas corpus deben asegurarse de requerir toda la información del proceso penal que permita examinar las pretensiones y de enviarla a esta sala de forma completa y oportuna, la cual debe resolver "solo con la vista de los autos", según lo dispuesto en el art. 72 LPC, evitando así dilaciones en la decisión de los recursos que conoce este tribunal o yerros en el análisis –sentencia de 29 de noviembre de 2021, hábeas corpus 681-2020R–, lo cual debe ser considerado por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, quienes han vuelto a incurrir en dicha omisión.

En el presente caso se advierte que el Juez Especializado de Instrucción de Santa Ana adjuntó a su informe de defensa certificación de las diligencias pertinentes del proceso penal y un disco compacto que supuestamente contenía solicitud de imposición de medidas cautelares y la consiguiente acta de audiencia especial, esto según oficio agregado a folio 23; sin embargo, los magistrados de la cámara omitieron remitir toda la información a esta sede, incumpliendo de tal forma sus obligaciones exigidas en el art. 72 de la LPC y en la jurisprudencia constitucional al respecto, la cual indica que la cámara respectiva tiene la obligación de enviar las diligencias de hábeas corpus completas para poder deducir el recurso de revisión.

Ante dicha situación y al advertir que al menos en tres ocasiones más se ha llamado la atención a la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, sobre su falta de diligencia en relación con el envío de la información necesaria para resolver –ver resoluciones de fechas 29 de noviembre de 2021, 24 de agosto de 2022 y 17 de febrero de 2023, hábeas corpus 681-2020R, 47-2021R y 148-2021R, respectivamente–, deberá informarse a la Dirección de Investigación Judicial de esta Corte, ello a efecto de que se tomen las medidas legalmente procedentes ante el incumplimiento reiterado en relación con sus funciones constitucionales.

También debe advertírseles nuevamente sobre la obligación aludida en párrafos precedentes para que omitan seguir cometiendo el mismo yerro en otros procesos de hábeas corpus.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 2, 11, 12, 247 de la Constitución y 72 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Constitucionales; esta sala **RESUELVE**:

1. *Confirmase el fallo* emitido por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, de la resolución venida en revisión consistente en declarar no ha lugar el hábeas corpus solicitado a favor del señor *MARN*, con base en los argumentos expuestos en esta decisión, al no existir violación a sus derechos de defensa y libertad física; en consecuencia, continúe el favorecido en la situación jurídica en que se encuentre.

2. *Certifíquese* la presente resolución y remítase, con las diligencias del hábeas corpus, a la cámara relacionada.

3. *Certifíquese* la presente resolución a la Dirección de Investigación Judicial de esta Corte, para los fines correspondientes.

4. *Previénese* a los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, para que atiendan su obligación de requerir a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para resolver los procesos de hábeas corpus tramitados en su sede y además, que cumplan con la remisión completa y oportuna a esta sala, en ocasión de interposición de recursos de revisión.

5. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""""

386-2020

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus ha sido promovido por la señora ATR a favor del señor *MATR*, en contra del Juez Especializado de Instrucción de San Miguel.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La peticionaria señala que su hijo fue detenido el 25 de febrero de 2020 por agentes de la Policía Nacional Civil, mientras realizaba trámites para obtener solvencia policial, en razón de señalarle que tenía orden de captura emitida por el aludido juez especializado. El señor *TR* fue llevado a bartolinas policiales y presentado a dicha sede judicial en ese mismo mes, donde se le indicó la fecha para la audiencia preliminar; sin embargo, hay un error de identidad, siendo ilegal su restricción.

Refirió que su abogado presentó escrito el 3 de marzo de 2020, con el objetivo de pedir que se celebrara audiencia especial a efecto de aclarar la situación de homónimo y adjuntó la prueba documental consistente en certificaciones de partidas de nacimiento y otros que sirven para establecer la identidad de la persona detenida, pero dicha petición fue denegada aludiendo "carga laboral".

Ello, contrario a la obligación de la autoridad que conoce del proceso penal de identificar judicialmente a la persona contra la cual se reclama la comisión del delito.

Asegura que hay un error en la identidad de la persona privada de libertad (su hijo) pues a quien se persigue penalmente es a MA***TR, que tiene diferentes generales en cuanto se verifican las certificaciones de partidas de nacimiento, edad, origen, fecha de nacimiento y padres. En el caso de su hijo solo tiene los apellidos maternos, sin consignarse el nombre de su padre, pero en el del homónimo sí, como consta en la documentación incorporada al proceso.

2. En la forma prescrita por la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC) se emitió auto de exhibición personal y se nombró jueza ejecutora a la licenciada Bacilia del Carmen Portillo quien describió las actuaciones donde se consignan los datos del imputado y manifestó que efectivamente constan dos certificaciones de partidas de nacimiento, la primera número 186, que corresponde a *MATR*, quien nació el día ********** de 1993, en **********, Apopa, hijo de ATR, de quien se indicó que ella dio los datos del inscrito; y la número *** a nombre de MA***TR, quien nació en el cantón ********** jurisdicción de Moncagua, San Miguel, el ********** de 1993, hijo de ********** y de **********, en la cual dio los datos el padre del recién nacido.

Concluyó que no existe seguridad de que la persona por la cual se inició el proceso y que fue identificada con el alias "A***" es la misma persona de *MATR*, pues en la investigación aparece otro nombre que es MA***TR.

3. *A*. El Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, por informe remitido el 11 de mayo de 2020, señaló que la solicitud fiscal se presentó contra el imputado ausente *MATR*, hijo de DEV o ATR y JNT; además, dentro de las diligencias de individualización presentadas por la representación fiscal constan el acta de individualización de *MATR*, alias "A***", la ficha policial de aquel donde se tiene que cuenta con documento único de identidad número ********** y es hijo de la señora DEV o ATR y JNT, además dicho documento posee la fotografía de la persona descrita.

Señaló que el imputado fue intimado judicialmente, a quien se le consultaron sus datos generales, los cuales constan en el acta respectiva, se tiene la copia simple de su documento único de identidad en el que se verifica que es hijo de la señora ATR.

Por lo anterior, el juez sostiene que el señor *MATR* es la persona perseguida penalmente, quien fue recibido en ese juzgado, verificando que se trata del mismo individuo y no se trata de un homónimo, por lo que no tiene lugar la vulneración de derechos alegada.

Concluyó señalando que la audiencia especial solicitada por la defensa para esclarecer el referido asunto no se llevó a cabo debido a la emergencia por la pandemia y se fijó como nueva fecha el 13 de mayo de 2020.

B. Posteriormente, por medio de oficio 1789, que data del 13 de mayo de 2020, el juez informó a esta sala que celebró la aludida audiencia en el

día señalado y que resolvió "no ha lugar al homónimo alegado" (sic) por no estar debidamente fundamentado y constar dentro de los elementos agregados al proceso que la persona que actualmente se encuentra detenida es el acusado penalmente. Pero, además, en virtud de los arraigos presentados, sustituyó la detención provisional por otras medidas cautelares, entre estas arresto domiciliar en su vivienda, con la utilización de un dispositivo electrónico, por el delito de organizaciones terroristas.

4. En virtud de la medida cautelar ordenada por esta sala mediante auto de 1 de julio de 2020, se requirió informe y certificación a la autoridad demandada quien, por oficio 2544, de fecha 14 de junio de 2022, adjuntó tanto la resolución por medio de la cual declaró no ha lugar la solicitud de la defensa en cuanto al tema en discusión como la orden de libertad emitida el 19 de mayo de 2020, en virtud de la aplicación de medidas alternas a la detención provisional, indicando que en la celebración de la audiencia preliminar, del 3 de diciembre de 2020, se decretó auto de apertura a juicio y el proceso penal fue remitido al Juez Especializado de Sentencia de San Miguel.

II. Es preciso determinar la estructura lógica de la presente resolución. Así, primero se señalará la jurisprudencia vinculada con el alcance de la protección del hábeas corpus en los casos donde se alegan homónimos, en aras de la observancia del principio de legalidad y tutela de los derechos a la seguridad jurídica y libertad física, arts. 15 y 2 Cn., respectivamente (III) y luego se examinará el caso concreto de acuerdo a la documentación incorporada (IV).

III. El artículo 11 inciso 2º de la Constitución establece que "La persona tiene derecho al hábeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad...". Tal disposición protege el derecho de libertad personal sujeta a prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizada por ley, habilitando el hábeas corpus como una garantía reactiva frente esos escenarios.

Ahora bien, debe decirse que la identificación o individualización de una persona procesada que ha sido señalada como responsable de un delito no es parte de la competencia de esta sala, siendo esta circunstancia una cuestión que debe determinarse necesariamente en las diligencias preliminares de investigación, actividad que compete, en principio, a la Fiscalía General de la República y, cuando existan dudas sobre la identificación de una persona a quien se inculpa un delito, será el juez penal el encargado de dirimir este tipo de situación.

Al respecto, este tribunal ha sostenido que el juez que conoce del proceso tiene la obligación de identificar judicialmente a la persona contra la cual se sigue una causa penal así como de reconocerla, en los casos previstos por la ley, a fin de que no existan dudas ni errores en la persona que se

persigue penalmente, en cuyo caso se trata de la necesaria individualización judicial del presunto responsable del delito, ya sea por vestigios dejados o por los informes que faciliten los testigos presenciales, por ejemplo.

Es importante entonces señalar que a través del hábeas corpus esta sala tiene competencia para determinar –en estos casos–, a partir de las diligencias incorporadas al proceso, que la persona capturada o detenida es, en efecto, la misma a la que se debe procesar, pues de lo contrario habría incidencia en el principio de legalidad, en tanto no puede un juez o tribunal ejecutar actos contra una persona, sin fundamento legal o con desapego a la ley; ello se traduciría también en una afectación a la seguridad jurídica y consecuentemente al derecho de libertad física, pues toda privación de libertad llevada a cabo sin observar estrictamente las normas del procedimiento aplicable genera arbitrariedades –sentencia de 31 de agosto de 2011, hábeas corpus 144-2010–.

IV. La peticionaria reclama de la detención ilegal de su hijo, el señor *MATR*, debido a un error de identidad pues se trata de un homónimo, ya que a quien se persigue penalmente es al señor MA***TR, de quien se consigna el nombre de su padre mientras que su hijo solo tiene los apellidos maternos.

De la documentación incorporada a este proceso constitucional se cuenta con solicitud de imposición de medidas cautelares presentada el 22 de septiembre de 2017, en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, en la cual la fiscalía atribuye el delito de organizaciones terroristas al imputado ausente *MATR*, alias "A***", quien es de veintitrés años de edad, salvadoreño, portador de su documento único de identidad **********, originario de San Salvador y residente en cantón **********, de la comprensión de Chapeltique del departamento de San Miguel, casa número **********, de Apopa, departamento de San Salvador, quien es hijo de DEV o ATR y JNT (folio 45-385).

Ficha policial con las siguientes generales: *MATR*, alias "A***", de veintitrés años de edad, organización criminal MS, clica Saylor Locos Salvatruchos, residencia en cantón **********, chapeltique, San Miguel, casa número **********, Apopa, San Salvador, fecha de nacimiento ********** de 1993, en Apopa, San Salvador, DUI **********, hijo de DEV o ATR y JNT (folio 387).

Acta de captura de fecha 25 de febrero de 2020, en la que consta "[...] se procede a dejar constancia legal de la detención por orden judicial del señor *MATR* de veintiséis años de edad, quien es hijo de ATR, con fecha de nacimiento el ********** del año mil novecientos noventa y tres [...] identificado por medio de su documento único de identidad **********, residente en **********, municipio de Apopa [...]" (mayúsculas y negritas suprimidas) (folio 466).

Acta de intimación realizada en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, el 27 de febrero de 2020, al señor *MATR*, alias "A***", "[...] quien es de veintitrés años de edad, salvadoreño, quien es portador de su documento único de identidad número **********, quien es originario de San Salvador y residente en cantón **********, de la comprensión de Chapeltique del departamento de San Miguel y casa **********, de Apopa departamento de San Salvador, quien es hijo de DEV o ATR y JNT, a quien se le está atribuyendo el delito siguiente: organizaciones terroristas [...]" (mayúsculas y negritas suprimidas) (folio 483).

Escrito del abogado Edwin Alexander Escolán Romero, presentado el 3 de marzo de 2020, donde solicita audiencia especial a fin de establecer la situación de homónimo de su representado con la persona procesada. Adjuntó la siguiente documentación: a) certificación de partida de nacimiento número ***, extendida en el Registro Familiar de la Alcaldía Municipal de Apopa, a nombre de MA, con fecha de nacimiento ********** de 1993, hijo de la señora ATR y sin nombre de progenitor; b) certificación de partida de nacimiento número ***, extendida por el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de Moncagua, a nombre de MA***-TR, con fecha de nacimiento ********** de 1993, hijo de ********** y **********; c) copia simple del documento único de identidad de *MATR*, número ********** en el que consta que es hijo de ATR (folio 485-489).

Aunado a lo anterior, se tiene el acta de la audiencia especial para resolver la solicitud de la defensa en cuanto al asunto en discusión y de revisión de la medida cautelar, de fecha 13 de mayo de 2020, en la cual el Juez Especializado de Instrucción de San Miguel valoró los elementos agregados al proceso y los ofrecidos por la defensa técnica y señaló: "[...] al referirnos a la individualización del detenido no existe dentro del proceso duda alguna que la persona detenida es la persona acusada por el ente fiscal y no ha logrado la defensa con los argumentos vertidos desvirtuar tal circunstancia en virtud que se ha verificado y no se trata del señor MAT[...] esta persona no figura dentro del proceso ha sido la defensa quien hace del conocimiento de este juzgador de la existencia de esa persona, presentando la partida de nacimiento, pero debe quedar en claro que la representación fiscal en ningún momento ha hecho mención dentro de las diligencias de investigación del señor MAT; no obstante, el nombre de la madre del procesado se ha consignado que es DEV o ATR y JNT. Y tal como lo expresa la defensa no existe posibilidad biológica que una persona tenga dos madres con nombres diferentes o esta posea dos nombres y resulta valido su argumento, pero lo que genera la certeza a este juzgador que el detenido es la persona

procesada, es que este ha sido individualizado con nombre y apellido correcto no tiene para efecto de duda (el conocido por); y además que no es posible que se asigne por parte del Registro de las personas naturales un mismo número de identificación a dos personas distintas, y en el caso que nos ocupa la persona procesada, la persona identificada y consignada como *MATR*, dentro de las diligencias judiciales fue identificado con número de identificación personal, lo cual se constata que no existe error al verificar la copia simple presentada por la defensa del Documento Único de Identidad de *MATR*, número ********** [...] Con lo anterior se concluye que no estamos en presencia de un caso de homonimia [...]" (negritas y mayúsculas suprimidas)(sic)(folio 979-985).

Es así que, sobre la base de las diligencias que constan en el proceso penal y que este tribunal ha referido en párrafos que anteceden, se comprueba que a lo largo del mismo –desde una perspectiva formal– la representación fiscal señaló como imputado al señor *MATR*, persona que fue capturada, presentada ante la autoridad judicial demandada y a quien se le sigue el proceso penal por el delito de organizaciones terroristas.

De modo que, en el trámite del proceso penal relacionado, no existe variación en el nombre del detenido con el del procesado, advirtiéndose, según lo detectado por el juez, que el error de identidad alegado por la peticionaria radicaba en los nombres que se consignaron como los progenitores de aquel, pues tenía dos nombres maternos y uno paterno; sin embargo, dicha circunstancia fue discutida y dilucidada en audiencia, pues se verificó que a lo largo del proceso penal la persona imputada respondía al nombre *MATR*, con número de documento único de identidad **********, evidenciándose de tal forma que se trata de la misma persona detenida y aclarándose que se trata del hijo de la señora ATR.

Con todo lo que antecede, esta sala concluye no haber existido inobservancia al principio de legalidad ni vulneración constitucional a los derechos de seguridad jurídica y libertad física del señor *MATR*, arts. 15 y 2 Cn. respectivamente, al haberse desacreditado, fundadamente, la existencia de una detención errónea por ser homónimo del imputado; por lo que deberá desestimarse la petición propuesta y continuar en la situación jurídica que se encuentre.

POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y lo establecido en los artículos 2, 11 inciso 2º, 12 y 15 de la Constitución, a nombre de la República de El Salvador esta sala **FALLA**:

1. *Declárase no ha lugar* el hábeas corpus iniciado a favor del señor *MATR*, por no haber existido inobservancia al principio de legalidad ni vio-

lación constitucional a sus derechos a la seguridad jurídica y libertad física, por parte del Juez Especializado de Instrucción de San Miguel, en cuanto a haber dilucidado, fundadamente, las dudas sobre su individualización.

2. *Continúe* el favorecido en la situación jurídica en que a la fecha se encuentre.

3. *Notifíquese* y oportunamente *archívese*.

"""—A. L. J. Z—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—O. CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

42-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

Se tiene por recibida la certificación de la sentencia de 1 de junio de 2023, pronunciada por el Juez Segundo de Paz de Atiquizaya en el proceso con referencia 03/2023, en la que declaró inaplicable el art. 346-B letra b del Código Penal[1] (CP), por la supuesta violación al art. 27 inc. 3° Cn.

I. Objeto de control.

"TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO.

Art. 346-B.- Será sancionado con prisión de diez a quince años, el que realizare cualquiera de las conductas siguientes:

b) El que portare una o más armas de fuego en los lugares prohibidos legalmente, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas".

II. Argumentos de la inaplicabilidad.

En esencia, el juez inaplicante sostiene que, si bien el legislador tiene libertad de configuración, esta no debe ser arbitraria. De ahí que los jueces puedan ejercer control difuso de constitucionalidad tomando como base su proporcionalidad (con sus escaños de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Para el caso concreto, afirma que debe haber necesaria proporcionalidad entre un hecho y su sanción, por lo que la pena de 10 a 15 años que prevé el delito en mención viola los fines de la pena que establece el art. 27 inc. 3° Cn, pues es desproporcionada en función del bien jurídico tutelado y por la naturaleza difusa del delito. Para ello, coteja esta pena con la de delitos como las lesiones, lesiones graves, lesiones muy graves y lesiones agravadas (todas inferiores) o con la del delito de homicidio (muy cercana a ella).

III. Sobre la inaplicabilidad y sus requisitos.

1. Conforme al art. 185 Cn., "[d]entro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición

de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales". Esta disposición estatuye la institución de la inaplicabilidad, que es el mecanismo de control difuso de constitucionalidad que corresponde a todo órgano que ejerza jurisdicción, con el fin de determinar que un acto, norma o fuente de Derecho infraconstitucional es contrario a la norma suprema[2]. Esto, en virtud de que todo órgano jurisdiccional es también un juez de la Constitución, por lo que la aplicación de sus disposiciones o la interpretación del orden jurídico de conformidad con ella no es una función que recaiga exclusivamente en este Tribunal[3].

2. Según los arts. 77-A, 77-B y 77-C de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), una inaplicabilidad debe cumplir con algunos requisitos mínimos para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad, los cuales son:

A) Juicio de relevancia, es decir, la relación directa y principal que debe tener la ley, disposición o acto subjetivo, público o privado, con la resolución del caso (art. 77-B letra a LPC). Esta relación puede manifestarse de dos formas: puede ocurrir que la tramitación del proceso dependa de su validez o que sea fundamento de las resoluciones que se pronuncien. Tal juicio se integra por tres elementos: la aplicabilidad o pertinencia, la relevancia en sentido estricto y la concreción del examen[4]. El primero consiste en que la norma o acto inaplicado debe regular el caso que constituye la controversia o petición principal del proceso[5]. El segundo implica que el fallo o decisión que debe pronunciarse en el proceso ordinario debe depender de la validez o falta de validez del acto, fuente o norma inaplicados[6]. Finalmente, el tercero exige que en la decisión se indique cuál resolución se debe dictar en el proceso y hasta qué punto su contenido resulta afectado por la validez del acto o norma inaplicados[7].

B) Agotamiento de la po sibilidad de interpretación conforme (art. 77-B letra b LPC). Esto exige que quien inaplique intente la interpretación conforme del objeto de control y que descarte esta posibilidad, es decir, que solo opte por su inaplicabilidad cuando sea imposible darle un sentido compatible con la norma fundamental. Este Tribunal ha dicho que "entre los diferentes significados que pueden atribuirse a una disposición legal, debe escogerse la norma que mejor se acomode a la Ley Suprema, a fin de dar una solución jurídica al caso. Tal medida se fundamenta [...] en el principio de unidad del ordenamiento jurídico [y] en el de supremacía constitucional, que se proyecta sobre las leyes, condicionando el sentido que cabe atribuirles [...]. [E]n los casos en que la apertura en la formulación lingüística de una determinada prescripción permita el 'juego interpretativo', el juzgador debe buscar un entendimiento de tal disposición que la aco mode al sentido de la Constitución, manteniendo la imperatividad de la ley en aquellas posibilidades interpretativas que no contradigan a la Ley Suprema"[8].

C) La inexistencia de pronunciamiento de esta Sala sobre la constitucionalidad de la disposición, acto o cuerpo normativo inaplicado (art. 10 inc. 2° LPC). El art. 10 inc. 2° LPC prescribe que "[s]i en la sentencia se declarare que [...] no existe la inconstitucionalidad alegada, ningún juez o funcionario podrá negarse a acatarla, amparándose en las facultades que conceden los artículos 185 y 235 de la Constitución".

D) Los elementos del control de constitucionalidad, es decir, el parámetro y objeto de control y la confrontación normativa[9]. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[10]. El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución[11]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[12]. Si alguno de esos elementos no se configura adecuadamente, la inaplicabilidad debe ser rechazada por la vía de la improcedencia[13].

IV. Examen de procedencia de la inaplicación.

1. Sobre el primer requisito, se advierte que la disposición inaplicada sí es relevante para la decisión que debía tomar el Juez Segundo de Paz de Atiquizaya, pues el delito por el que se procesaba al imputado en el proceso con referencia 03/2023 era, precisamente, el de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego (art. 346-B letra b CP). En el caso concreto se había determinado la responsabilidad del imputado, pues se reunían los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, así como también se habían probado los hechos atribuidos. Por ello, era preciso imponer una pena por dicho delito, que es precisamente la que ha sido objeto de inaplicación. Por tanto, el elemento del juicio de relevancia se ha cumplido en el presente caso.

2. Respecto del segundo requisito, se advierte que la autoridad inaplicante ha omitido agotar la posibilidad de interpretación conforme. De hecho, no hay ninguna valoración en su decisión que esté referida a la posibilidad de que el art. 346-B letra b CP pueda ser entendido de algún modo que sea compatible con los contenidos constitucionales. Por el contrario, ha hecho un salto argumentativo directo hasta el último elemento mencionado en el considerando que antecede (los aspectos básicos del control de constitucionalidad, es decir, el parámetro y objeto de control y la confrontación normativa).

Además de lo anterior, la decisión de inaplicación también carece de otro elemento necesario para iniciar un proceso de inconstitucionalidad: omite valorar si existe algún precedente en el que esta Sala se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de la disposición inaplicada. En virtud de esto, es posible afirmar que la resolución analizada no reúne los presupuestos legales y jurisprudenciales para poder iniciar con el presente proceso, *por lo que se deberá declarar improcedente el inicio del proceso.*

3. *A)* Ahora bien, es necesario hacer dos precisiones en relación con la anterior declaratoria de improcedencia. La primera es que, por sinceridad argumentativa, esta Sala debe reconocer que ha iniciado tres procesos de inconstitucionalidad (actualmente acumulados) a raíz de decisiones de inaplicabilidad del art. 346-B letras a y b CP, por la supuesta violación de los arts. 2, 12 y 246 Cn.[14] (de los cuales derivan los principios de lesividad, responsabilidad, culpabilidad y proporcionalidad en el ámbito penal). Pero, a diferencia de este proceso, en los casos anteriormente mencionados sí fueron argumentados expresamente todos los elementos referidos en el considerando III.2 de esta resolución[15]. Esta es una diferencia relevante a efectos de su admisión a trámite, que justifica que en este caso se pronuncie una resolución diferente a la de los casos en mención.

B) Por otro lado, es preciso hacer referencia a las consecuencias de la presente decisión para el caso concreto en el que el Juez Segundo de Paz de Atiquizaya inaplicó el art. 346-B letra b CP. Sobre esto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las resoluciones (autos o sentencias) que se pronuncien en un proceso de inconstitucionalidad no inciden en las decisiones de inaplicación que adopten los jueces ordinarios. Concretamente, ha dicho que "el contenido de la sentencia de inaplicabilidad, en virtud de la cual se [habilita] el inicio de este proceso, importa [solo] para el fin de identificar y delimitar el objeto y parámetro de control, pero sus efectos *inter partes* –a los que alude el art. 77-D de la L.Pr.Cn.– no quedarán supeditados a la [...] sentencia, sino que al resultado de los medios de impugnación a que hubiere lugar"[16]. En consecuencia, ni el inicio de dicho proceso ni su sentencia tienen aptitud para revocar o modificar la resolución de inaplicabilidad, que seguirá manteniendo sus efectos con independencia de la decisión que finalmente adopte esta Sala.

POR TANTO, de conformidad con los artículos 6, 10, 13, 77-A, 77-B y 77-C de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente el inicio del proceso de inconstitucionalidad requerido por vía de inaplicación por el Juez Segundo de Paz de Atiquizaya en el proceso con referencia 03/2023, en la que declaró inaplicable el artículo 346-B letra b del Código Penal, por la supuesta violación al artículo 27 inciso 3° de la Constitución. La razón es que la resolución de inaplicación no reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional y la ley para poder iniciar un proceso de inconstitucionalidad.

2. Notifíquese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

25-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil veintitrés.

El ciudadano Rafael Alfonso Herrera Valle pide la inconstitucionalidad de los arts. 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Impuestos Municipales de Usulután[17] (LIMU), por la supuesta violación de los arts. 2 y 131 ord. 6° Cn.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos del demandante.

En primer orden, el demandante inicia por afirmar que "el [p]rincipio de [i]gualdad consagrado en el art. 3 inc. 1° Cn., no impide tratar desigual a los iguales" y que "tampoco excluye la posibilidad de que se trate igualmente a los desiguales". Luego, sostiene que los arts. 8, 9, 10 y 11 LIMU violan el derecho de propiedad por la inobservancia al principio de igualdad tributaria en su vertiente horizontal (no discriminación), porque se establece una cuantía de pago de tributos desigual o diferente a distintos sectores económicos (industria, comercio, servicios y financiero) que poseen el mismo capital contable neto. Para él, esto infringe la exigencia de razonabilidad en la igualdad tributaria. Por otro lado, afirma que las disposiciones cuestionadas infringen la dimensión vertical de tal igualdad (segmentación de tributos en niveles, según la capacidad de pago), pues no atienden a la progresividad de los tributos, ya que "a mayor [c]apital [c]ontable, menor es el impuesto por millar gravado". Por último, pide como medida cautelar que se suspendan los efectos del objeto de control.

III. El examen de igualdad en la jurisprudencia constitucional.

1. La igualdad es reconocida en el art. 3 Cn., y puede ser concebida como un principio y como un derecho fundamental. Entendida como principio, es un mandato que supone una sujeción para todos los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. También es el derecho que tienen las personas de exigir de las autoridades un trato equivalente al encontrarse en condiciones similares a otras, pero también a que deliberadamente se les dé un trato dispar en beneficio propio, al encontrarse en situación distinta a los demás, bajo criterios justificados constitucionalmente[18]. De ello

se sigue que la igualdad tiene un contenido relacional, porque precisa de la existencia de normas, relaciones jurídicas y situaciones en las que se haya introducido una diferencia de trato.

Ya sea como principio o derecho, puede constituir un mandato de equiparación o uno de diferenciación. Como exigencia de equiparación, implica dar un trato igual a circunstancias o situaciones no idénticas, pero cuyas diferencias deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma disposición[19]. Para llevar a cabo el juicio de equiparación, se debe establecer el criterio según el cual se van a considerar los datos como irrelevantes para predicar la igualdad entre situaciones o personas distintas. Como exigencia de diferenciación, equivale a no equiparar arbitrariamente las situaciones o personas entre quienes hay diferencias relevantes. Se trata de establecer un trato diferenciado con respecto a circunstancias o situaciones aparentemente semejantes, pero que requieren una regulación jurídica distinta[20].

2. El test de igualdad admite cuanto menos tres modelos distintos[21]: a) un modelo "europeo"[22] en el que el test se configura por tres etapas consistentes en la determinación de un objetivo o fin perseguido por el trato desigual, la validez de ese objetivo o fin a la luz de la Constitución y la razonabilidad de ese trato desigual, esto es, una relación de proporcionalidad entre el trato y el fin buscado; b) un modelo "americano"[23] en el que se forman escrutinios distintos según intervengan (o no) categorías sospechosas de discriminación (uno estricto para la discriminación a ellas, uno intermedio para cuando se les favorece y uno básico para cuando no intervienen, siendo el caso que en el primero de esos escrutinios debe haber un "interés imperativo" para la discriminación, pues de lo contrario sería inconstitucional), y c) un "test integrado" que reúne los elementos argumentativos de los dos previos con una estructura escalonada.

Pues bien, en la jurisprudencia constitucional se había venido haciendo un uso indistinto de esos exámenes[24], por lo que, desde el auto de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 35-2018, se anunció la necesidad de estandarizarlo para todos los casos futuros. Así, desde la sentencia de inconstitucionalidad 98-2015[25] hasta la fecha, esta Sala ha venido empleando el test integrado de igualdad[26].

Así, hoy en día se exige que cuando se alegue la violación al principio de igualdad (art. 3. Cn.), se argumenten los elementos para realizar ese test[27]: a) que la diferenciación o equiparación introducida por la norma cuestionada constituya una intervención en el principio de igualdad[28], es decir, que se explique por qué el objeto de control afecta a una situación jurídica (ej. un derecho, interés, expectativa, etc.); b) el término de comparación, en otras palabras, la identificación de las situaciones, criterios o factores que causan el trato discriminatorio o la infracción al deber de

promoción y protección[29], ya que ello será la base para fijar el tipo de escrutinio que esta Sala realizará[30]; y c) la justificación que permita sostener que la medida enjuiciada es desproporcional, lo que, en caso de la prohibición de exceso, supone argumentar por qué aquella es inidónea[31], innecesaria[32] o desproporcional en sentido estricto[33], respetando el carácter escalonado de dicho examen[34].

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. Al examinar los argumentos del actor, se advierte que el centro de sus alegatos es una supuesta infracción al principio de igualdad (así sea su manifestación tributaria). De esa manera, incluso él vincula sus afirmaciones con el art. 3 inc. 1° Cn. Por ello, su análisis debe partir de las exigencias que los precedentes constitucionales han indicado para realizar el examen de igualdad, tal como fueron descritas en el párrafo que antecede.

2. *A)* En primer lugar, el demandante ha configurado deficientemente el término de comparación. Para realizar el test de igualdad, es preciso que se identifiquen con precisión las situaciones, criterios o factores que causan el trato discriminatorio o la infracción al deber de promoción y protección. Pero, el actor se ha limitado a sostener que el objeto de control establece una cuantía de pago de tributos desigual o diferente a distintos sectores económicos (industria, comercio, servicios y financiero) que tienen el mismo capital contable neto y que no atiende al principio de progresividad de los tributos, sin identificar las razones en las que radica la infracción a la capacidad económica por esa desigualdad tributaria aducida. Más allá de identificar distintos rubros económicos, debió establecer las semejanzas relevantes entre los sujetos comparados y cómo estas exigen un trato distinto al que provee la norma cuestionada.

B) En segundo lugar, no se ha realizado el test de proporcionalidad que forma parte del examen integrado de igualdad. A pesar de que el demandante en algún punto ha aludido a la exigencia de "razonabilidad", esta es parte del modelo europeo y, hoy en día, tendría que ser aducida de una manera consistente con dicho test integrado. En consecuencia, la razonabilidad tendría que ser ubicada dentro de alguno de los escaños del examen de proporcionalidad que integra a este último (los de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Sin embargo, en ninguna de sus alegaciones se han configurado los elementos previamente mencionados, de manera que se han incumplido los requisitos que se han establecido en los precedentes constitucionales para argumentar todas las supuestas infracciones al principio de igualdad (con el cual el propio actor ha conectado sus alegatos). En consecuencia, *la demanda se deberá declarar improcedente.*

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y los artículos 6 número 3 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda presentada por el ciudadano Rafael Alfonso Herrera Valle, mediante la cual pide la inconstitucionalidad de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Impuestos Municipales de Usulután, por la supuesta violación de los artículos 2 y 131 ordinal 6° de la Constitución. La razón es que no se han configurado los elementos que se corresponden con el examen de igualdad conforme a los precedentes constitucionales, a pesar de que el propio demandante vinculó sus alegaciones con el principio de igualdad.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—-H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

23-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

El ciudadano Rafael Alfonso Herrera Valle pide la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad[35] (LIAEMST), por la supuesta violación de los arts. 2 y 131 ord. 6° Cn.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos del demandante.

Inicialmente, el actor sostiene que "el [p]rincipio de [i]gualdad consagrado en el art. 3 inc. 1° Cn., no impide tratar desigual a los iguales" y "tampoco excluye la posibilidad de que se trate igualmente a los desiguales". Luego, afirma que el art. 12 LIAEMST infringe el derecho de propiedad porque viola el principio de igualdad tributaria en su vertiente horizontal (no discriminación), pues establece una cuantía de pago de tributos desigual o diferente a distintos sectores económicos (industria, comercio, servicios, agropecuario y financiero) que poseen el mismo capital contable neto. Para él, se infringe la razonabilidad en la igualdad tributaria. Por otro

lado, aduce que la disposición cuestionada viola la dimensión vertical de tal igualdad (segmentación de tributos en niveles, según la capacidad de pago), pues no atiende a la progresividad de los tributos, ya que "a mayor [c]apital [c]ontable, menor es el impuesto por millar gravado". Por último, pide como medida cautelar que se suspendan los efectos del objeto de control.

III. El examen de igualdad en la jurisprudencia constitucional.

1. La igualdad es reconocida en el art. 3 Cn., y puede ser concebida como un principio y como un derecho fundamental. Entendida como principio, es un mandato que supone una sujeción para todos los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones. También es el derecho que tienen las personas de exigir de las autoridades un trato equivalente al encontrarse en condiciones similares a otras, pero también a que deliberadamente se les dé un trato dispar en beneficio propio, al encontrarse en situación distinta a los demás, bajo criterios justificados constitucionalmente[36]. De ello se sigue que la igualdad tiene un contenido relacional, porque precisa de la existencia de normas, relaciones jurídicas y situaciones en las que se haya introducido una diferencia de trato.

Ya sea como principio o derecho, puede constituir un mandato de equiparación o uno de diferenciación. Como exigencia de equiparación, implica dar un trato igual a circunstancias o situaciones no idénticas, pero cuyas diferencias deben considerarse irrelevantes para el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma disposición[37]. Para llevar a cabo el juicio de equiparación, se debe establecer el criterio según el cual se van a considerar los datos como irrelevantes para predicar la igualdad entre situaciones o personas distintas. Como exigencia de diferenciación, equivale a no equiparar arbitrariamente las situaciones o personas entre quienes hay diferencias relevantes. Se trata de establecer un trato diferenciado con respecto a circunstancias o situaciones aparentemente semejantes, pero que requieren una regulación jurídica distinta[38].

2. El test de igualdad admite cuanto menos tres modelos distintos[39]: a) un modelo "europeo"[40] en el que el test se configura por tres etapas consistentes en la determinación de un objetivo o fin perseguido por el trato desigual, la validez de ese objetivo o fin a la luz de la Constitución y la razonabilidad de ese trato desigual, esto es, una relación de proporcionalidad entre el trato y el fin buscado; b) un modelo "americano"[41] en el que se forman escrutinios distintos según intervengan (o no) categorías sospechosas de discriminación (uno estricto para la discriminación a ellas, uno intermedio para cuando se les favorece y uno básico para cuando no intervienen, siendo el caso que en el primero de esos escrutinios debe haber un "interés imperativo" para la discriminación, pues de lo contrario sería inconstitucional), y c) un "test integrado" que reúne los elementos argumentativos de los dos previos con una estructura escalonada.

Pues bien, en la jurisprudencia constitucional se había venido haciendo un uso indistinto de esos exámenes[42], por lo que, desde el auto de 14 de diciembre de 2018, inconstitucionalidad 35-2018, se anunció la necesidad de estandarizarlo para todos los casos futuros. Así, desde la sentencia de inconstitucionalidad 98-2015[43] hasta la fecha, esta Sala ha venido empleando el test integrado de igualdad[44].

Así, hoy en día se exige que cuando se alegue la violación al principio de igualdad (art. 3. Cn.), se argumenten los elementos para realizar ese test[45]: a) que la diferenciación o equiparación introducida por la norma cuestionada constituya una intervención en el principio de igualdad[46], es decir, que se explique por qué el objeto de control afecta a una situación jurídica (ej. un derecho, interés, expectativa, etc.); b) el término de comparación, en otras palabras, la identificación de las situaciones, criterios o factores que causan el trato discriminatorio o la infracción al deber de promoción y protección[47], ya que ello será la base para fijar el tipo de escrutinio que esta Sala realizará[48]; y c) la justificación que permita sostener que la medida enjuiciada es desproporcional, lo que, en caso de la prohibición de exceso, supone argumentar por qué aquella es inidónea[49], innecesaria[50] o desproporcional en sentido estricto[51], respetando el carácter escalonado de dicho examen[52].

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. Luego de analizar los argumentos del demandante, se advierte que todos ellos giran alrededor de una supuesta violación al principio de igualdad (así sea su manifestación tributaria horizontal y vertical). De esa manera, incluso él mismo vincula sus afirmaciones con el art. 3 inc. 1° Cn. En virtud de lo anterior, su examen debe tomar como base las exigencias que los precedentes constitucionales han indicado para realizar el examen de igualdad, tal como fueron descritas en el párrafo que antecede.

2. A) Así, se advierte que, primero, el demandante ha configurado deficientemente el término de comparación. Para realizar el examen de igualdad, deben identificarse con precisión las situaciones, criterios o factores que causan el trato discriminatorio o la infracción al deber de promoción y protección. Sin embargo, el actor solo ha sostenido que el objeto de control prevé una cuantía de pago de tributos desigual o diferente a distintos sectores económicos (industria, comercio, servicios, agropecuario y financiero) que tienen el mismo capital contable neto y que no atiende al principio de progresividad de aquellos, sin identificar las razones en las que radica la infracción a la capacidad económica por esa desigualdad tributaria aducida. Más allá de identificar distintos rubros económicos, debió establecer las semejanzas relevantes entre los sujetos comparados y cómo estas exigen un trato distinto al que provee la norma cuestionada.

B) Segundo, se advierte que no se ha realizado el test de proporcionalidad que forma parte del examen integrado de igualdad. Pese a que el actor en algún punto ha aludido a la exigencia de "razonabilidad", esta es parte del modelo europeo y, hoy en día, tendría que ser aducida de forma consistente con el test integrado. Por tanto, la razonabilidad tendría que ser ubicada en alguno de los escaños del test de proporcionalidad que integra a este último (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). Pero, en ninguna de sus alegaciones se han configurado los elementos previamente mencionados, por lo que se han incumplido los requisitos establecidos en los precedentes constitucionales para aducir todas las supuestas infracciones al principio de igualdad (con el cual el propio demandante ha conectado sus alegatos). En consecuencia, *la demanda se deberá declarar improcedente.*

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y los artículos 6 número 3 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda presentada por el ciudadano Rafael Alfonso Herrera Valle, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, por la supuesta violación de los artículos 2 y 131 ordinal 6° de la Constitución. La razón es que no se han configurado los elementos del test de igualdad según los precedentes constitucionales, pese a que el actor vinculó sus alegaciones con el principio de igualdad.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

27-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia . San Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

La ciudadana Juana Isabel Salamanca Montes, en calidad de defensora de HJLV, pide la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022[53], que contiene la declaratoria del régimen de excepción, así como de sus decretos sucesivos.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos del demandante.

En primer lugar, la demandante sostiene que es defensora de HJLV, quien fue detenido de manera ilegal y sin prueba alguna el 10 de mayo de 2022, bajo el contexto del régimen de excepción. Luego, agrega que él se encuentra procesado en el Juzgado Especializado de Instrucción A2 y que se le ha negado la sustitución de la detención provisional por falta de arraigos (los cuales, afirma, sí posee), a la vez que se le acusa de tener tatuajes alusivos a pandillas y un alto rango en la estructura criminal sin fundamento alguno, pues él no posee antecedentes penales ni policiales. Asimismo, aduce que se ha ampliado su plazo de instrucción con base en "una prórroga del régimen de excepción, [que] es inconstitucional", de manera que se ha violentado el debido proceso. Por último, alude a que la Fiscalía General de la República ha solicitado la reserva de todos los procesos iniciados durante el régimen de excepción y que la prensa ha documentado que las audiencias realizadas son masivas, bajo la imputación de delitos de agrupaciones ilícitas o de organizaciones terroristas sin prueba alguna.

III. Elementos del control de constitucionalidad y carácter abstracto del proceso de inconstitucionalidad.

1. El control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto, en cuanto a su fundamento jurídico, por el parámetro y objeto de control; y en su fundamento material, por la confrontación entre ellos. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[54]. El segundo es la norma o acto que se considera contrario a la Constitución[55]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[56]. Estos elementos deben ser adecuadamente determinados por el actor, porque de lo contrario debe prevenírsele para que subsane los defectos formales de su demanda o rechazarse esta por la vía de la improcedencia[57].

Los precedentes constitucionales han permitido identificar los posibles objetos de control en el proceso de inconstitucionalidad, más allá de los que expresamente se mencionan en el art. 183 Cn. (leyes, decretos y reglamentos). Así, se ha reconocido que, en realidad, es susceptible de control cualquier norma o acto que cumpla con las propiedades de generalidad y abstracción. Al respecto, se ha dicho que "suele ocurrir que bajo la denominación de instructivo, circular, directiva, lineamiento, o cualquier otro término, se cobijen normas que, efectivamente, regulen situaciones jurídicas de los administrados con carácter de generalidad, abstracción y permanencia; por lo cual, pese a su nombre, posean un carácter reglamentario —en sentido material—. Por tanto, su naturaleza normativa será determinada

por las situaciones jurídicas que disciplinen y no por la denominación que se les haya asignado"[58]. Asimismo, se ha aceptado la posibilidad de controlar los actos de aplicación directa de la Constitución, que son aquellos cuya regularidad jurídica está directamente determinada, sin indeterminación de otra fuente, por la norma suprema[59]; las omisiones inconstitucionales en que incurren los órganos constitucionales[60] y los acuerdos de reforma constitucional[61], por mencionar algunos ejemplos.

2. Ahora bien, además de la enumeración de un catálogo de posibles objetos de control constitucional, para este caso también interesa recordar que una de las peculiaridades del proceso de inconstitucionalidad es que posee una naturaleza abstracta. De acuerdo con esta naturaleza, este proceso no requiere de una impugnación de actos concretos a los cuales el demandante atribuya efectos de vulneración a los derechos o principios constitucionales[62]. Como consecuencia de esta propiedad, en él únicamente se busca la defensa objetiva de la Constitución[63,] no la tutela concreta de los derechos fundamentales, ya que para ello existen otros procesos.

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. A partir de las alegaciones realizadas por la demandante y de las consideraciones efectuadas en el considerando que antecede, es posible advertir dos problemas en la configuración de la pretensión de inconstitucionalidad. En primer lugar, es patente que los argumentos aducidos no pretenden cuestionar de manera general y abstracta el Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022, sino que se orientan a denunciar una supuesta detención "arbitraria". En ese sentido, se trata de alegaciones que no se corresponden con los fines del proceso de inconstitucionalidad y que, de ser admitidas, desnaturalizarían sus propósitos. Por el contrario, son argumentos propios del proceso de hábeas corpus (art. 11 inc. 2° Cn.), como control concreto de constitucionalidad.

Al respecto, hay que recordar que el proceso de hábeas corpus es "un mecanismo destinado a proteger el derecho fundamental de libertad física de los justiciables ante restricciones, amenazas o perturbaciones ejercidas de forma contraria a la Constitución, concretadas ya sea por particulares o autoridades judiciales o administrativas"[64]. En tal sentido, en todo hábeas corpus clásico, la pretensión se traduce en el restablecimiento del derecho de libertad física de la persona favorecida[65]. De ese modo, es este el mecanismo que corresponde para resolver la situación que ha sido planteada en este proceso.

2. Por otra parte, por la manera en que se han realizado las alegaciones en este caso, el control constitucional carece de dos de sus elementos indispensables: no existe un parámetro de control y tampoco hay una confrontación normativa. Respecto de lo primero, no se ha establecido cuál es la disposición constitucional que supuestamente se habría violado; y en

cuanto a lo segundo, no se ha indicado en qué consiste la contradicción que, en abstracto, habría entre el objeto de control (Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022) y el parámetro de control, sobre la base de una argumentación que evidencie una tensión irresoluble entre ambos. Como consecuencia de lo anterior, *la demanda se deberá declarar improcedente por esas razones.*

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y los artículos 6 número 3 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda presentada por la ciudadana Juana Isabel Salamanca Montes, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022, que contiene la declaratoria del régimen de excepción, así como de sus decretos sucesivos. Las razones son que: a) se trata de alegaciones que no se corresponden con los fines del proceso de inconstitucionalidad (no son un planteamiento de una contradicción en abstracto entre el objeto de control y la Constitución), sino con los del proceso de hábeas corpus (donde sí se conoce de afectaciones concretas a la libertad física o personal); y b) el control constitucional carece de dos de sus elementos indispensables: no existe un parámetro de control y tampoco hay una confrontación normativa. Respecto de lo primero, no se ha establecido cuál es la disposición constitucional que supuestamente se habría violado; y en cuanto a lo segundo, no se ha indicado en qué consiste la contradicción que, en abstracto, habría entre el objeto de control y el parámetro de control que han sido propuestos por la demandante.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

28-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

La ciudadana Juana Isabel Salamanca Montes, en calidad de defensora de JAGM, pide la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022[66], que contiene la declaratoria del régimen de excepción, así como de sus decretos sucesivos.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos de la demandante.

En esencia, la actora aduce que su representado fue detenido de modo ilegal y sin ningún indicio de prueba en su contra, atribuyéndole el delito de organizaciones terroristas. Por ello, se instruyó en su contra un proceso penal en el Juzgado Especializado de Instrucción A2. Asimismo, la demandante argumenta que se ha pedido la sustitución de la detención provisional, pero que fue negada en audiencia por el tribunal, ya que estimó que su representado no tiene arraigo domiciliar ni un trabajo estable, pese a que se presentaron las constancias y referencias de sus labores como albañil. De igual modo, afirma que se ha ampliado el plazo de instrucción de forma ilegal y sin fundamento jurídico, con base en la aplicación de la prórroga del régimen de excepción que lleva más de 90 días en vigor. Así, a su parecer, se ha violado el debido proceso. Finalmente, sostiene que la Fiscalía General de la República ha pedido la reserva de los procesos en todos los casos, pese a que el proceso penal es esencialmente público, y que la prensa ha documentado que las audiencias realizadas ante los jueces son masivas, con decenas o cientos de imputados.

III. Elementos del control de constitucionalidad y carácter abstracto del proceso de inconstitucionalidad.

1. El control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto, en cuanto a su fundamento jurídico, por el parámetro y objeto de control; y en su fundamento material, por la confrontación entre ellos. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[67]. El segundo es la norma o acto que se considera contrario a la Constitución[68]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[69]. Estos elementos deben ser adecuadamente determinados por el actor, porque de lo contrario debe prevenírsele para que subsane los defectos formales de su demanda o rechazarse esta por la vía de la improcedencia[70].

Los precedentes constitucionales han permitido identificar los posibles objetos de control en el proceso de inconstitucionalidad, más allá de los que expresamente se mencionan en el art. 183 Cn. (leyes, decretos y reglamentos). Así, se ha reconocido que, en realidad, es susceptible de control cualquier norma o acto que cumpla con las propiedades de generalidad y abstracción. Al respecto, se ha dicho que "suele ocurrir que bajo la denominación de instructivo, circular, directiva, lineamiento, o cualquier otro término, se cobijen normas que, efectivamente, regulen situaciones jurídicas de los administrados con carácter de generalidad, abstracción y permanencia; por lo cual, pese a su nombre, posean un carácter reglamentario —en

sentido material—. Por tanto, su naturaleza normativa será determinada por las situaciones jurídicas que disciplinen y no por la denominación que se les haya asignado"[71]. Asimismo, se ha aceptado la posibilidad de controlar los actos de aplicación directa de la Constitución, que son aquellos cuya regularidad jurídica está directamente determinada, sin indeterminación de otra fuente, por la norma suprema[72]; las omisiones inconstitucionales en que incurren los órganos constitucionales[73] y los acuerdos de reforma constitucional[74], por mencionar algunos ejemplos.

2. Ahora bien, además de la enumeración de un catálogo de posibles objetos de control constitucional, para este caso también interesa recordar que una de las peculiaridades del proceso de inconstitucionalidad es que posee una naturaleza abstracta. De acuerdo con esta naturaleza, este proceso no requiere de una impugnación de actos concretos a los cuales el demandante atribuya efectos de vulneración a los derechos o principios constitucionales[75]. Como consecuencia de esta propiedad, en él únicamente se busca la defensa objetiva de la Constitución[76], no la tutela concreta de los derechos fundamentales, ya que para ello existen otros procesos.

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. Luego de examinar los argumentos de la demandante, se advierten dos problemas en la configuración de su pretensión de inconstitucionalidad. Primero, sus alegaciones no pretenden cuestionar de manera general y abstracta el Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022, sino evidenciar una supuesta detención "arbitraria". En ese sentido, se trata de argumentos que se alejan de los fines del proceso de inconstitucionalidad y que, de ser admitidos, desnaturalizarían sus propósitos de análisis abstracto de la compatibilidad entre un objeto de control y un parámetro de control. Por el contrario, los argumentos aducidos son propios del proceso de hábeas corpus (art. 11 inc. 2° Cn.), como mecanismo de control concreto de constitucionalidad en caso de violaciones a la libertad personal.

Al respecto, hay que recordar que el proceso de hábeas corpus es "un mecanismo destinado a proteger el derecho fundamental de libertad física de los justiciables ante restricciones, amenazas o perturbaciones ejercidas de forma contraria a la Constitución, concretadas ya sea por particulares o autoridades judiciales o administrativas"[77]. En tal sentido, en todo hábeas corpus clásico, la pretensión se traduce en el restablecimiento del derecho de libertad física de la persona favorecida[78]. De ese modo, es este el mecanismo que corresponde para resolver la situación que ha sido planteada en este proceso.

2. Por otra parte, por la manera en que se han realizado las alegaciones, el control constitucional carece de dos de sus elementos indispensables: no se ha argumentado un parámetro de control y tampoco se ha aducido la confrontación normativa. En relación con lo primero, no se ha establecido

cuál es la disposición constitucional que supuestamente se habría violado por el objeto de control; y respecto de lo segundo, no se ha especificado en qué consiste la contradicción que, en abstracto, habría entre el objeto de control (Decreto Legislativo n° 333, de 27 de marzo de 2022) y el parámetro de control, sobre la base de una argumentación que evidencie una tensión irresoluble entre ambos (no la mera transcripción de disposiciones jurídicas). En consecuencia, *la demanda se deberá declarar improcedente por esas razones.*

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y los artículos 6 número 3 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda presentada por la ciudadana Juana Isabel Salamanca Montes, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 333, de 27 de marzo de 2022, que contiene la declaratoria del régimen de excepción, así como de sus decretos sucesivos. Las razones son que: a) se trata de alegaciones que no se corresponden con los fines del proceso de inconstitucionalidad (no son un planteamiento de una contradicción en abstracto entre el objeto de control y la Constitución), sino con los del proceso de hábeas corpus (donde sí se conoce de afectaciones concretas a la libertad física o personal); y b) el control constitucional carece de dos de sus elementos indispensables: no existe un parámetro de control y tampoco hay una confrontación normativa. Respecto de lo primero, no se ha establecido cuál es la disposición constitucional que supuestamente se habría violado; y en cuanto a lo segundo, no se ha indicado en qué consiste la contradicción que, en abstracto, habría entre el objeto de control y el parámetro de control que han sido propuestos por la demandante.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—–H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—"""

30-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

El ciudadano Jonatan Josué Flores Tenorio pide la inconstitucionalidad del art. 2 inc. 2° de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión[79] (LECDE), por la supuesta violación de los arts. 27 inc. 3°, 149 inc. 2°, 183 y 246 Cn.

I. Objeto de control.

La extorsión se considerará consumada con independencia de si el acto o negocio a que se refiere el inciso precedente se llevó a cabo y responderán como coautores, tanto el que realice la amenaza o exigencia, como aquellos que participen en la recolección de dinero personalmente, a través de sus cuentas o transferencias financieras o reciban bienes producto del delito.

II. Argumentos del demandante.

En esencia, el actor afirma que el art. 2 inc. 2° LECDE viola los arts. 27 inc. 3°, 149 inc. 2°, 183 y 246 Cn. A su juicio, tal disposición infringe el principio de proporcionalidad y el derecho a la resocialización, ya que "el mismo delito se castiga cuando es imperfecto, lo cual es el punto de dicha [i]nconstitucionalidad, ya que expresamente se considera consumada la conducta delictiva de forma independiente a que afecte el acto, interponiendo misma pena cuando no debería ser así, ya que no se puede crear delitos [...] para proteger funciones y no bienes jurídicos, o anticipar indebidamente la punición a estadios previos a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico". Después, realizó valoraciones acerca de la estructura del examen de proporcionalidad y sobre la relación de la reinserción social con la imposición de penas solamente a quienes hayan consumado un delito.

III. Presupuestos de admisibilidad de la pretensión de inconstitucionalidad.

1. Con base en el art. 6 n° 2 y 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto por el parámetro y objeto de control, y por la confrontación internormativa[80]. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[81]. El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución[82]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[83]. Si alguno de esos elementos no se configura adecuadamente, la demanda debe ser rechazada por la vía de la improcedencia[84].

Por ello, hay vicios en la demanda si, por ejemplo: a) el sustrato jurídico es deficiente, como cuando se omite mencionar las disposiciones constitucionales supuestamente violadas o no se especifica la normativa propuesta como parámetro de control[85], o b) en el sustrato fáctico no se argumenta una posible contradicción entre la normativa impugnada y las disposiciones constitucionales[86], se atribuye un contenido inadecuado o equívoco a la disposición impugnada[87] o al parámetro de control[88] o se propone como parámetro una norma infraconstitucional[89].

2. Cuando la inconstitucionalidad planteada se refiere a una disposición que ya fue objeto de decisión por parte de esta Sala, en relación con la misma confrontación normativa y parámetros constitucionales, no existe fundamento jurídico alguno para el inicio del proceso o su continuación[90]. Por el contrario, la cosa juzgada constitucional supone que cuando una pretensión de inconstitucionalidad ha sido juzgada y luego se presenta otra que guarda con aquella algunas semejanzas relevantes, este Tribunal tiene el deber de atenerse al precedente (siempre que las razones que justifican la decisión previa aún se compartan) que ha adquirido efectos de cosa juzgada, pues así lo exigen la igualdad y la seguridad jurídica[91]. En consecuencia, salvo que haya razones para apartarse de un precedente constitucional, la existencia de una sentencia desestimatoria debe implicar el rechazo del inicio del proceso o su sobreseimiento, según el caso[92].

IV. Análisis liminar de la pretensión.

Las consideraciones anteriores son necesarias para examinar de forma adecuada la pretensión del ciudadano Flores Tenorio.

1. A) En primer lugar, destaca que esta Sala ya ha analizado la constitucionalidad del art. 2 inc. 2° LECDE bajo argumentos como los planteados por el actor. En la sentencia de inconstitucionalidad 30-2016[93] se sostuvo que la denominada tesis de la anticipación de la tutela penal o criminalización en el estadio previo a la lesión del bien jurídico, que se caracteriza por criminalizar comportamientos que se encuentran relativamente distantes de la lesión efectiva, puede tener lugar en un Derecho Penal preventivo que tenga como límite de intervención no únicamente cuando exista lesión del bien jurídico, sino también a los momentos antecedentes en los que se vislumbra un peligro para este.

Aunque una punición exacerbada de los ámbitos previos a la ejecución puede implicar un mayor recorte a la libertad general de actuación del ciudadano, en específicos ámbitos puede ser utilizable según la naturaleza de los intereses penalmente protegidos y el grado de peligrosidad manifestado por el agente (o agentes) con su conducta antijurídica. Dentro de la legislación salvadoreña, la referida técnica no es novedosa, pues el castigo generalizado que se efectúa de la tentativa es una forma de anticipación (art. 24 del Código Penal) y, de igual manera, acontece con la sanción referida a los actos de proposición y conspiración en determinados delitos (arts. 129-A, 149-A, 214-C del citado código y art. 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, etc.). También podemos encontrar actos de preparación que han sido elevados al rango de delitos autónomos, como acontece con el delito de organización terrorista del art. 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo[94], que se consuma mediante

la creación y el mantenimiento de una estructura organizada criminal de forma independientemente a la ejecución de los delitos-fin que hayan sido el motivo de su fundación.

B) En concreto, en la sentencia de inconstitucionalidad 30-2016, citada, se dijo que "en aquellos delitos que ostentan la característica de pluriofensividad —por afectar diversos bienes jurídicos protegidos— el legislador puede establecer su consumación formal con la realización de aquellos actos que reporten un serio menoscabo al sentimiento de seguridad personal de la víctima que es el bien jurídico que inicialmente resulta vulnerado por el delito de extorsión. Y ello puede acaecer, de forma independiente, a la consecución de un posterior resultado material —la entrega de dinero, el otorgamiento o suscripción de un documento que produzca efectos jurídicos, el brindar una prestación profesional, etc.— o la afectación del sistema económico en general".

Seguidamente, se dijo que, "[e]n esta clase de delitos en los que el agente delictivo realiza un primer acto para posteriormente llevar a cabo un segundo se denominan doctrinariamente como delitos de 'resultado cortado' y dentro de los cuales cabe equiparar el delito en examen. En efecto, la mera manifestación de la amenaza extorsiva a la víctima comporta una lesión efectiva a su sentimiento de seguridad personal que se traduce en una diversidad de actos tales como el aviso a la policía, el cambio de domicilio, la contratación de seguridad privada para su empresa, la puesta en aviso a sus familiares y conocidos, etc. lo cual ya reporta una perturbación social digna de ser incriminada".

Y, así, se concluyó que "la reforma legislativa —de forma distinta a su anterior regulación en el Código Penal— parte de una equiparación entre los intereses jurídicos vulnerados por el delito, dando importancia a la libertad de actuar y decidir en iguales términos que el perjuicio económico o profesional al que puede verse sometido la víctima". Esto, entre otras valoraciones con base en las cuales se descartó la inconstitucionalidad por establecer una pena que considera al delito como consumado con independencia de que el acto o negocio se haya llevado a cabo (art. 2 inc. 2° LECDE).

2. Por otra parte, se observa que el actor no ha aducido ningún argumento por el cual se debería cambiar el precedente explicado. Asimismo, su test de proporcionalidad (que podría arrojar algún elemento novedoso para el análisis) no es concretizado. Él se limita a describir cuál es la estructura de un examen de esta clase, pero sin particularizarlo al caso en concreto o hacerlo aplicable a él. Por tanto, puede afirmarse que existe cosa juzgada en relación con este asunto y no hay argumentos para revisar el criterio sentado en la sentencia de inconstitucionalidad 30-2016, ya citada. En conclusión, *la demanda se declarará improcedente.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y en el artículo 6 número 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda del ciudadano Jonatan Josué Flores Tenorio, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 2 inciso 2° de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, por la supuesta violación de los artículos 27 inciso 3°, 149 inciso 2°, 183 y 246 de la Constitución. La razón es que existe cosa juzgada en relación con este asunto y no hay argumentos para revisar el criterio sentado en la sentencia de inconstitucionalidad 30-2016.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por el demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A.L.J.Z.—DUEÑAS—J.A.PÉREZ—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—-H.N.G.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—MARIBEL ALAS—SECRETARIA INTERINA—RUBRICADAS—"""

36-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés.

El ciudadano César Mauricio Ramos Hernández pide la inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley del Nombre de la Persona Natural[95] (LNPN), por la supuesta violación del art. 3 Cn.

I. Objeto de control.

APELLIDO PARA HIJOS DE MATRIMONIO

Art. 14.- Los hijos nacidos de matrimonio así como los reconocidos por el padre, llevarán el primer apellido de éste, seguido del primer apellido de la madre.

II. Argumentos del demandante.

El actor sostiene que una interpretación garantista en materia de género del art. 14 LNPN sirve para apreciar una imposición en favor del sexo masculino como determinante para formar el apellido, dejando en segundo orden o plano el apellido de la mujer. Así, hace una serie de consideraciones constitucionales, del Derecho Internacional y doctrinarias en relación con el contenido de la igualdad y sobre las costumbres patriarcales y machistas que se reivindican y normalizan por las personas y autoridades. Luego señala que la disposición cuestionada invisibiliza la importancia de las mujeres en el matrimonio y el ámbito familiar al imponer que el apellido del padre sea primero que el de la madre, sin que esta medida tenga un fundamen-

to objetivo (es, pues, a su criterio, arbitraria). Por último, reseña algunos precedentes de Derecho Comparado en donde disposiciones similares han sido declaradas inconstitucionales por otros tribunales constitucionales, así como los efectos eventuales que tendría una sentencia estimatoria.

III. Presupuestos de admisibilidad de la pretensión de inconstitucionalidad.

1. Con base en el art. 6 n° 2 y 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto por el parámetro y objeto de control, y por la confrontación internormativa[96]. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[97]. El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución[98]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[99]. Si alguno de esos elementos no se configura adecuadamente, la demanda debe ser rechazada por la vía de la improcedencia[100].

Por ello, hay vicios en la demanda si, por ejemplo: a) el sustrato jurídico es deficiente, como cuando se omite mencionar las disposiciones constitucionales supuestamente violadas o no se especifica la normativa propuesta como parámetro de control[101], o b) en el sustrato fáctico no se argumenta una posible contradicción entre la normativa impugnada y las disposiciones constitucionales[102], se atribuye un contenido inadecuado o equívoco a la disposición impugnada[103] o al parámetro de control[104] o se propone como parámetro una norma infraconstitucional[105].

2. Cuando la inconstitucionalidad planteada se refiere a una disposición que ya fue objeto de decisión por parte de esta Sala, en relación con la misma confrontación normativa y parámetros constitucionales, no existe fundamento jurídico alguno para el inicio del proceso o su continuación[106]. Por el contrario, la cosa juzgada constitucional supone que cuando una pretensión de inconstitucionalidad ha sido juzgada y luego se presenta otra que guarda con aquella algunas semejanzas relevantes, este Tribunal tiene el deber de atenerse al precedente (siempre que las razones que justifican la decisión previa aún se compartan) que ha adquirido efectos de cosa juzgada, pues así lo exigen la igualdad y la seguridad jurídica[107]. En consecuencia, salvo que haya razones para apartarse de un precedente constitucional, la existencia de una sentencia desestimatoria debe implicar el rechazo del inicio del proceso o su sobreseimiento, según el caso [108].

IV. Análisis liminar de la pretensión.

1. A) A partir de los argumentos del actor y de las valoraciones realizadas en el considerando que antecede, es importante señalar, en primer lugar, que el asunto planteado ha sido previamente analizado y decidido en la sentencia de inconstitucionalidad 45-2012[109]. En ese caso se enjuició la constitucionalidad de los arts. 14 y 21 LNPN por la supuesta violación a los arts. 3 y 33 Cn.

En lo que respecta a la primera de dichas disposiciones de la Ley del Nombre de la Persona Natural, los argumentos aducidos consistieron en que "'se violenta el principio de igualdad consagrado en el [a]rtículo 3 relacionado con el 33 [Cn.], debido a que no existen bases equitativas entre el padre y la madre', porque, 'se le otorga mayor importancia a los apellidos paternos, discriminando totalmente los apellidos maternos, de igual manera, ubica en el primer lugar el apellido del hombre y en segundo lugar los de la mujer; asimismo, solo el apellido paterno es transferido a sus descendientes, prohibiendo que el apellido materno lo puedan llevar los descendientes y quedando sin uso; esto da a entender que la mujer está limitada, discriminada y que no tiene iguales derechos Constitucionales como el hombre, dando a entender que los apellidos maternos son sin valor y no sirven'".

B) Al resolver el problema jurídico, esta Sala sostuvo que "resulta claro que dicho planteamiento corresponde al fundamento de los antecedentes históricos de la regulación del apellido familiar, pero que [...] se refiere a una situación totalmente superada por las condiciones actuales, en las que el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de tratamiento a la mujer en las relaciones de pareja, así como de reconocer su valiosa contribución a la economía familiar".

Dicho de otro modo, el argumento del actor de tal proceso estaba fundado en "una interpretación histórica de la norma impugnada, que partía de un modelo de familia donde el hombre era el único proveedor y sostén del hogar. Tal interpretación es inaceptable, porque en el contexto del [o]rdenamiento jurídico actual, el art. 14 LNPN debe ser armonizado con las obligaciones constitucionales, convencionales y legales de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de modo que no puede ser entendido como expresión de menosprecio o subordinación de la mujer, sino únicamente como una opción de identificación familiar, entre otras a disposición de la Asamblea Legislativa, que por ahora satisface las exigencias de certidumbre, uniformidad y simplificación registral y forma parte de un régimen jurídico administrativo que cumple importantes funciones de orden público (en cuanto al registro y control de la identidad de las personas para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones)".

Por último, se estimó que "[l]a demanda no [contenía] razones para considerar que exista un derecho a que el apellido de la mujer sea preferido como referente de la identificación familiar y tampoco [relacionaba] la distinción reclamada con algún otro derecho fundamental". Sobre dicha base, este Tribunal afirmó que bastaba "aclarar cuál es la interpretación constitucionalmente adecuada del art. 14 LNPN, por lo que la pretensión de inconstitucionalidad en este punto [debía] ser desestimada".

2. Asimismo, el actor no ha aportado argumentos por los cuales se debería cambiar el precedente sentado en la sentencia de inconstitucionalidad 45-2012, del mismo modo que tampoco ha efectuado un examen de igualdad que revele nuevos razonamientos que podrían ser considerados para reevaluar tal criterio. En su demanda, este se ha limitado a realizar consideraciones generales sobre el contenido de la igualdad y la discriminación por el género. Por tanto, puede afirmarse que existe cosa juzgada en relación con este asunto y no hay argumentos para revisar el criterio sentado en la sentencia de inconstitucionalidad ya antes citada. En consecuencia, *la demanda se declarará improcedente.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y en el artículo 6 número 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda del ciudadano César Mauricio Ramos Hernández, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, por la supuesta violación del artículo 3 de la Constitución. La razón es que existe cosa juzgada en relación con este asunto y en razón de que no se exponen argumentos diferentes a los analizados en la sentencia de inconstitucionalidad 45-2012.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del lugar y medio señalado por el demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

""""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.———O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

24-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil veintitrés.

El ciudadano Enrique Antonio Fuentes López pide la inconstitucionalidad del art. 482 del Código Procesal Civil y Mercantil[110] (CPCM), por la supuesta violación de los arts. 11 y 12 Cn.

I. Objeto de control.

Prevenciones en la citación para la audiencia

Art. 482.- En todos los procesos de inquilinato en los que se pretenda la desocupación del inmueble, se advertirá al demandado, en la citación para la audiencia, *de que su falta de comparecencia a la misma llevará a la declaración de desahucio sin más trámites en un plazo no mayor de diez* días (itálicas propias).

II. Argumentos del demandante.

El demandante afirma que el art. 482 CPCM infringe los arts. 11 y 12 Cn. (derecho de defensa, debido proceso y presunción de inocencia). Sobre el derecho de defensa, sostiene que se viola tal derecho porque el precepto impugnado establece que la incomparecencia del demandado conlleva a que se declare el desahucio sin más trámite, lo que supone que no hubo ningún desfile de prueba por el actor y que simplemente se ordena la desocupación del inmueble. Así, lo primero que debería hacer el juez es comprobar que la incomparecencia del demandado no está justificada y luego dictar sentencia, notificarla y ejecutarla, dándole la oportunidad al demandado para intervenir en cualquier momento del proceso. En relación con el debido proceso, aduce que la privación de la oportunidad razonable para ser escuchado viola la tutela constitucional del proceso. Finalmente, respecto de la presunción de inocencia, argumenta que no es exclusiva de la materia penal, y que se infringe porque toda persona es inocente y debe mantenerse como tal mientras no se pruebe su culpabilidad en sentencia. Luego de estas alegaciones, pide que, si se declara la inconstitucionalidad del objeto de control, se modulen en el tiempo los efectos de la sentencia mediante su diferimiento.

III. Condiciones para la configuración de la pretensión de inconstitucionalidad.

El control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto, en cuanto a su fundamento jurídico, por el parámetro y objeto de control; y en su fundamento material, por la confrontación entre ellos. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[111]. El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución[112]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[113]. Estos elementos deben ser adecuadamente determinados por el actor, porque de lo contrario debe prevenírsele para que subsane los defectos formales de su demanda o rechazarse esta por la vía de la improcedencia[114].

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. En primer orden, es necesario analizar la alegación referida a la violación del debido proceso, en tanto que de esta derivan los dos argumentos más concretos que se han aducido. Según la jurisprudencia constitucional, de la protección jurisdiccional (art. 2 inc. 1° Cn.) derivan cuatro grandes rubros: el acceso a la jurisdicción, proceso constitucionalmente configurado o debido proceso, derecho a una resolución de fondo justificada y congruente y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales[115]. Para lo que aquí interesa, debe abordarse la cuestión del debido proceso.

El debido proceso es un concepto que alude a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los sujetos partícipes, que agrupa y se desdobla en un haz de garantías que cobran vigencia en todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso. Dentro de ese haz de garantías figuran el derecho de audiencia (art. 11 Cn.), el derecho de defensa (art. 12 Cn.), la presunción de inocencia (art. 12 Cn.) y el acceso a los medios impugnativos[116]. A partir de lo anterior, se puede concluir que los argumentos de la supuesta violación al derecho de defensa y a la presunción de inocencia son más específicos que el de la infracción al debido proceso, pues este último es un concepto general en el que quedan comprendidos los primeros.

Así, este Tribunal ha señalado que cuando se invocan simultáneamente preceptos constitucionales genéricos y otros más concretos en los que se refleje la misma confrontación normativa, solo los segundos deben ser analizados[117]. Esto es lo que ocurre en este caso en relación con las alegaciones antes expuestas, por lo que *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de la supuesta violación al debido proceso.*

2. En segundo lugar, es preciso analizar el argumento de la supuesta violación al derecho de defensa (art. 12 Cn.). Conforme a los precedentes constitucionales, el derecho de defensa únicamente se manifiesta ante la configuración de una contienda donde exista la necesidad de argüir elementos tendentes al desvanecimiento de los alegatos de la contraparte. El ejercicio del derecho de defensa implica la posibilidad de participar en un proceso informado por el principio de contradicción, en que las partes puedan ser oídas en igualdad de condiciones y utilizar las pruebas pertinentes en su defensa, de modo que no se les impida aproximar al juez el material probatorio que consideren pertinente para su defensa[118].

De ese modo, esta actividad procesal de parte viene encauzada por las reglas del proceso y se corresponde con la obligación del juez de procurar su regular desenvolvimiento, de manera que no se genere indefensión en ninguna de sus fases y para ninguna de las partes. Por ello, comprende todo medio de oposición a los argumentos fácticos y jurídicos de la respectiva contraparte[119].

Ahora bien, con base en los argumentos aducidos por el actor, se advierte que su cuestionamiento a la disposición impugnada está centrado en que genera una supuesta indefensión porque la falta de comparecencia del demandado a la audiencia lleva a la declaración de desahucio sin más trámites. Pero, dado el contenido que se le ha asignado a este derecho en la jurisprudencia constitucional, no se ha aducido de forma suficiente cómo resultaría vulnerado, pues: a) el proceso de inquilinato está configurado para que la persona demandada pueda comparecer a él, argumentar y

probar lo que estime oportuno; b) el art. 482 CPCM estatuye una "sanción procesal" en caso de que el demandado no comparezca, como también ocurre en el proceso abreviado (aunque con naturaleza diferente), conforme al art. 423 CPCM, lo cual no evidencia por sí mismo una violación constitucional, y c) en ese sentido, es el incumplimiento de una carga procesal (comparecer), esto es, de una posibilidad de defensa, la que genera el efecto que estatuye el art. 482 CPCM.

No obstante, una cuestión distinta es la de que el juzgador tenga que decidir incluso si no cuenta con las pruebas necesarias por parte del actor (esto es, vista la cuestión ya no como un asunto de contradicción entre las partes, sino como una que involucra al juez y a la justificación de las decisiones que este tome). Sin embargo, analizar este punto supondría evaluar una categoría constitucional correspondiente a la protección jurisdiccional que no ha sido argumentada por el actor (la justificación de las resoluciones judiciales). Por lo anterior, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de la supuesta violación al derecho de defensa (art. 12 Cn.).*

3. Finalmente, en lo que corresponde a la supuesta infracción de la presunción de inocencia (art. 12 Cn.), es preciso recordar que, si bien la jurisprudencia constitucional ha dicho que no es un principio exclusivo del Derecho Penal, sí la ha ligado estrictamente a aquellas ramas jurídicas que suponen el ejercicio del poder punitivo estatal: el Derecho Penal, por un lado, y el Derecho Administrativo Sancionador, por el otro[120]. De ese modo, como bien lo sostuvo el actor en su demanda, no es de aplicación solo en la primera de esas áreas jurídicas. Sin embargo, esto no significa que se extienda hasta materias como la civil o laboral, en las que no hay ejercicio de dicho poder punitivo. En consecuencia, se trata de una categoría constitucional inadecuada para enjuiciar el art. 482 CPCM, por lo que l*a demanda se deberá declarar improcedente respecto de la supuesta violación a la presunción de inocencia (art. 12 Cn.).*

POR TANTO, con base en las razones antes expuestas y de conformidad con el artículo 6 número 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda del ciudadano Enrique Antonio Fuentes López, mediante la cual pide la inconstitucionalidad del artículo 482 del Código Procesal Civil y Mercantil, por la supuesta violación de los artículos 11 y 12 de la Constitución. Las razones son: a) en relación con la alegación sobre la supuesta infracción al debido proceso, se ha invocado un parámetro de control más genérico respecto de otros más concretos; b) en cuanto a la supuesta transgresión del derecho de defensa, no se ha aducido de forma suficiente cómo este resultaría vulnerado, y c) sobre la supuesta violación de la presunción de inocencia, esta es una categoría

constitucional que solamente resulta aplicable a los procesos o procedimientos en los que se ejerza el poder punitivo estatal (Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador), no en los procesos civiles.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—O CANALES C—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—SECRETARIO—RUBRICADAS—""

45-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Los ciudadanos Velia Karina Monterrosa Laínez y José Vinicio Duarte Mártir piden la inconstitucionalidad de la Ordenanza para la Gestión de Aguas Lluvias, Servidas y Potables Sobrantes[121], emitida por el Concejo Municipal de Candelaria, departamento de Cuscatlán, por la supuesta violación de los arts. 8, 14, 22, 88 inc. final, 103, 121, 133, 202 y 204 ord. 5° Cn.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos de los demandantes.

Los argumentos de los actores son los que siguen:

1. El primer argumento aducido es que, según los actores, el art. 202 Cn. confiere a los municipios autonomía "en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo", pero que la administración ("gestión") de aguas lluvias no encaja dentro de ninguna de esas categorías.

2. El segundo argumento expuesto consiste en que el art. 7 de la ordenanza impugnada establece una multa de "un mínimo de $300.00 y un máximo de $2,000.00 por cada infracción que se cometa", lo cual, a su parecer, infringe el art. 14 Cn., pues "equivale a un sueldo al mes (área rural)", pese a que tal disposición prevé un umbral máximo de cinco días.

3. El tercer argumento alegado es que el art. 7 antes mencionado impone una multa sin definir cuáles son las infracciones que la producen e indica que la "copia certificada de la sentencia definitiva condenatoria tendrá fuerza ejecutiva", con lo que se viola el art. 131 Cn., ya que entonces se trata de una norma con el contenido propio de una ley. En este punto, los actores agregan lo siguiente: "en general ningún [d]ecreto puede contra-

venir las [l]eyes [c]onstitucionales, o al menos sin antes haber sido otorgado, algún tipo de poder especial al Ejecutivo por parte del Legislativo, de modo que para que un decreto adquiera el rango de [l]ey, deberá de ser ratificado por el Legislativo".

4. El cuarto argumento que contiene la demanda es que las ordenanzas se subordinan a la ley. No obstante, en el caso de la Ordenanza para la Gestión de Aguas Lluvias, Servidas y Potables Sobrantes, se intenta justificar su contenido con base en los arts. 204 Cn. y 30 del Código Municipal, sin tomar en cuenta que tales disposiciones se refieren a impuestos municipales, como lo reafirma el art. 133 ord. 4° Cn. Así, esta no es una "ordenanza", sino una "ley", porque establece sanciones (art. 8) y procesos (art. 9).

5. Como quinto argumento, los actores afirman que el objeto de control "no tiene la característica de ser general [sino] para un fin determinado y hacia una sola persona que le causó daños [irreparables] a su propiedad a tal grado que existe expediente con el [número] EF-02-19-04 en el mismo Tribunal de Ejecución Forzosa por el delito de [d]años y otro en el Juzgado de Medio Ambiente por la mala aplicación de la [l]ey". Con base en los alegatos ya descritos, piden que se declare la inconstitucionalidad del objeto de control y que "se condenen a los agravios respectivos y al pago de la fianza de la medida cautelar, por la nulidad del proceso, ya que no ha habido en ningún momento, incumplimiento de [l]ey como se le [procesó] al demandado en el proceso 14-comun-2012". En este punto, agregan que el juez que conoció de dicho proceso debió inaplicar la normativa que han cuestionado.

6. Finalmente, los actores relacionan como normas constitucionales infringidas los arts. 8, 22, 88 inc. final, 103, 121, 133 y 204 ord. 5° Cn.

III. Condiciones para la configuración de la pretensión de inconstitucionalidad.

El control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto, en cuanto a su fundamento jurídico, por el parámetro y objeto de control; y en su fundamento material, por la confrontación entre ellos. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[122] El segundo es la norma que se considera contraria a la Constitución[123]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre el objeto y parámetro de control[124]. Estos elementos deben ser adecuadamente determinados por el actor, porque de lo contrario debe prevenírsele para que subsane los defectos formales de su demanda o rechazarse esta por la vía de la improcedencia[125].

IV. Análisis sobre la procedencia.

1. El primer argumento de los demandantes (considerando II.1) incurre en un error en la configuración del parámetro de control. Según ellos, el art. 202 Cn. confiere a los municipios autonomía "en lo económico, en lo

técnico y en lo administrativo". Sin embargo, el texto de esta disposición es otro diferente[126], ya que está referida a la creación de los municipios, a los elementos nucleares de la integración de los concejos municipales y a los requisitos y período de elección de sus miembros. Así, la disposición constitucional en la que auténticamente está prevista la autonomía municipal es otra distinta, como reiteradamente se ha sostenido en la jurisprudencia constitucional[127]. Como consecuencia de lo anterior, se ha atribuido un contenido equívoco al parámetro de control propuesto[128], por lo que *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

2. El segundo argumento de la demanda (considerando II.2) es que el art. 7 de la Ordenanza para la Gestión de Aguas Lluvias, Servidas y Potables Sobrantes prevé una multa de "un mínimo de $300.00 y un máximo de $2,000.00 por cada infracción que se cometa", lo cual infringe el art. 14 Cn., pues "equivale a un sueldo al mes (área rural)", pese a que tal disposición prevé un umbral máximo de cinco días. El art. 14 Cn. señala que "corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad".

Al respecto, se advierte que los actores han confundido la naturaleza de la sanción de "arresto hasta por cinco días" que estatuye la disposición citada. Así, según los precedentes constitucionales, el arresto administrativo previsto en el art. 14 Cn. es una restricción de la libertad física de las personas (art. 11 inc. 2° Cn.) impuesta por una autoridad administrativa, sujeta a reserva de ley, proceso previo y exigencias de justificación, sin que en ningún caso dicha restricción pueda superar los cinco días[129]. De esa manera, no equivale a una pena patrimonial como, por ejemplo, la pena de multa que señala el art. 45 n° 4 del Código Penal, que se cuantifica en "días multa". Por tanto, se advierte que también en este punto le han asignado un contenido equívoco al parámetro de control propuesto, por lo que *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

3. El tercer argumento (considerando II.3) es que el art. 7 antes mencionado impone una multa sin definir cuáles son las infracciones que la producen e indica que la "copia certificada de la sentencia definitiva condenatoria tendrá fuerza ejecutiva", con lo que se viola el art. 131 Cn., ya que entonces se trata de una norma con el contenido propio de una ley. Por tanto, es posible asumir que esta alegación está dirigida a demostrar una supuesta infracción a la reserva de ley, que "implica que hay un conjunto de materias que, por así establecerlo la Constitución, le corresponde exclu-

sivamente a la Asamblea Legislativa regularlas. En este contexto, la reserva de ley es una técnica de distribución de potestades normativas a favor de la Asamblea Legislativa, en relación con ciertos ámbitos de especial interés para los ciudadanos"[130].

Tal reserva de ley puede ser absoluta o relativa. La absoluta implica que la ley en sentido formal regula por sí misma toda la materia reservada. La relativa implica que, con la ley formal, pueden concurrir otras fuentes normativas. En este caso, entonces, la ley formal determina lo básico de la materia, remitiendo sus aspectos complementarios a fuentes del Derecho inferiores, para lo cual establece criterios y directrices, así como una delimitación precisa de su ámbito de aplicación[131].

Sin embargo, el art. 131 Cn. es una disposición constitucional que se compone por 38 ordinales que determinan el conjunto de competencias de la Asamblea Legislativa. Si bien algunos de ellos contienen manifestaciones de dicha reserva, cada uno posee su propio contenido o está circunscrito a un aspecto específico, como el relativo a la limitación de los derechos fundamentales[132] o a la creación de impuestos[133]. En ese sentido, el parámetro de control no está lo suficientemente delimitado en este punto, por lo que su circunscripción concreta implicaría suplir una queja deficiente, algo que solo es posible en los procesos de amparo y *habeas corpus*[134] (art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales). Por tanto, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

4. El cuarto argumento de los actores (considerando II.4) es que la Ordenanza para la Gestión de Aguas Lluvias, Servidas y Potables Sobrantes no es una "ordenanza", sino una "ley", debido a que establece sanciones (art. 8) y procesos (art. 9). En cuanto a este punto, se advierte que, al igual que con el anterior, no han establecido la disposición constitucional concreta en la que se funda la reserva de ley que aducen en específico. Si bien hacen relación del art. 204 Cn., esta disposición tiene cinco ordinales y, conforme a lo que han expuesto, ellos se refieren al ordinal 1°, que tiene un contenido tributario[135]. Además, la mención del art. 204 Cn. es para sostener que la ordenanza cuestionada no es tributaria, pero que intenta justificarse con base en tal precepto. En consecuencia, por la falta de delimitación del parámetro de control del que deriva la reserva de ley alegada por los actores, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

5. Para resolver el quinto argumento aducido por los actores (considerando II.5), es preciso partir de que el proceso de inconstitucionalidad posee una naturaleza abstracta. Conforme a tal naturaleza, este proceso no requiere de una impugnación de actos concretos a los que se atribuya efectos de vulneración a los derechos o principios constitucionales[136]. Como consecuencia de esta propiedad, en él únicamente se busca la defensa objetiva de la Constitución[137], no la tutela concreta de los derechos

fundamentales, ya que para ello existen los procesos de amparo y *habeas corpus* (en sede constitucional) y los procesos judiciales comunes (en sede ordinaria). De ese modo, este prescinde de cualquier situación concreta o subjetiva como la planteada por los demandantes. Esto se traduce también en los efectos de la sentencia, pues esta de ninguna manera puede determinar responsabilidades o agravios, así como tampoco ordenar el pago de ninguna cantidad.

No obstante, los actores piden que se "condenen a los agravios respectivos y al pago de la fianza de la medida cautelar, por la nulidad del proceso, ya que no ha habido en ningún momento, incumplimiento de [l]ey como se le [procesó] al demandado en el proceso 14-comun-2012", debido a que la ordenanza cuestionada "no tiene la característica de ser general [sino] para un fin determinado y hacia una sola persona que le causó daños [irreparables] a su propiedad a tal grado que existe expediente con el [número] EF-02-19-04 en el mismo Tribunal de Ejecución Forzosa por el delito de [d]años y otro en el Juzgado de Medio Ambiente por la mala aplicación de la [l]ey". En consecuencia, la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.

6. Por último, en lo que se refiere a la relación de los arts. 8, 22, 88 inc. final, 103, 121, 133 y 204 ord. 5° Cn. como normas constitucionales violadas, se advierte que los actores no han aportado ningún argumento respecto de tales disposiciones en específico, sino solo de las que se han venido mencio nando en los párrafos que anteceden. Esto significa que hay una argumentación insuficiente en cuanto a este asunto[138]. Como ha dicho la jurisprudencia constitucional, "el fundamento de la pretensión de inconstitucionalidad debe ser reconocible como un auténtico ejercicio argumentativo de interpretación de normas y no como una ligera impresión subjetiva de inconsistencia, causada por una lectura defectuosa o superficial de los enunciados respectivos, por el uso de criterios extravagantes de contraposición textual o por una interpretación aislada, inconexa o fragmentaria de las disposiciones en juego"[139]. En consecuencia, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 6 número 3 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda de los ciudadanos Velia Karina Monterrosa Laínez y José Vinicio Duarte Mártir, mediante la cual piden la inconstitucionalidad de la Ordenanza para la Gestión de Aguas Lluvias, Servidas y Potables Sobrantes, emitida por el Concejo Municipal de Candelaria, departamento de Cuscatlán, por la supuesta violación de los artículos 8, 14, 22, 88 inciso final, 103, 121, 133, 202 y 204 ordinal 5° de la Constitución. Las razones son: a) se ha atribuido un contenido equívoco al artículo

202 de la Constitución, pues este no contiene la autonomía municipal; b) también se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 14 de la Constitución, pues el arresto administrativo previsto en dicha disposición es una restricción de la libertad física de las personas impuesta por una autoridad administrativa, sujeta a reserva de ley, proceso previo y exigencias de justificación, sin que en ningún caso dicha restricción pueda superar los cinco días, por lo que no equivale a una pena patrimonial como, por ejemplo, la pena de multa que señala el artículo 45 número 4 del Código Penal, que se cuantifica en "días multa"; c) la alegación de la supuesta infracción al artículo 131 de la Constitución no delimita suficientemente el parámetro de control en cuanto a la supuesta violación de la reserva de ley; d) sobre el argumento de que el objeto de control no es una "ordenanza", sino una "ley", no adujeron cuál es la disposición constitucional en la que está prevista la reserva de ley; e) acerca de las peticiones con contenido concreto y relacionadas con supuestos agravios específicos sufridos por determinadas personas, estas no se corresponden con la naturaleza abstracta del proceso de inconstitucionalidad, y f) en lo que se refiere a la relación de los artículos 8, 22, 88 inciso final, 103, 121, 133 y 204 ordinal 5° de la Constitución como normas constitucionales violadas, se advierte que los actores no han aportado ningún argumento respecto de tales disposiciones en específico.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del medio señalado por la parte demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G.—O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

54-2023

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

Los ciudadanos José Santos Melara Yanes y José Antonio Castillo Ortiz piden la inconstitucionalidad, por vicios de forma y de contenido, de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal[140] (LERM), por la supuesta violación de los arts. 2, 11, 21, 72, 73 80, 83, 85, 86, 202 y 248 Cn.; arts. 2, 20 n° 4 y 5, 115 y 116 del Código Municipal (CM); y el art. 23 de la Carta Democrática Interamericana.

I. Objeto de control.

Debido a la extensión del objeto de control, se omitirá transcribir su contenido.

II. Argumentos de los demandantes.

La totalidad de los argumentos y peticiones de los actores se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. Primero, aducen que la estructura del gobierno depende de la voluntad popular, expresada en distintos procesos eleccionarios en concordancia con el art. 80 Cn. y derivados de los principios que expresan los arts. 83 y 85 Cn. Por ello, el Estado está compuesto por dos niveles de estructuras políticas: el Estado en sí mismo y los municipios, como estructuras menores que gozan de autonomía (art. 202 Cn.). Ahora bien, como su gobierno se determina por el voto directo, su "extinción" exige de un proceso amplio de consulta ciudadana local, pues así se desprende de los principios constitucionales que rigen al Estado salvadoreño, entre ellos el del art. 86 Cn.

2. Segundo, argumentan que el hecho de que en la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal no se haya tomado en cuenta la actualización del censo poblacional elaborado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo implica que existe una inconstitucionalidad por omisión.

3. Tercero, afirman que una ley que afecte indirectamente los derechos que reconocen los arts. 72 y 73 Cn. (en lo relativo al sufragio y al derecho de optar a cargos públicos) es inconstitucional en congruencia con el art. 23 de la Carta Democrática Interamericana.

4. Cuarto, alegan que el art. 248 Cn. prescribe la irreductibilidad del Estado y de sus componentes. Así, de conformidad al art. 202 Cn., las municipalidades son expresión de las organizaciones locales y poseen una dimensión administrativa separada del departamento y las gobernaciones, cuyo funcionamiento depende del Órgano Ejecutivo. A su parecer, la irreductibilidad del Estado se basa en la libre determinación de los pueblos, que en su dimensión particular se traduce en el municipio o entidad local.

5. Quinto, exponen que las facultades legislativas sobre los municipios están referidas a su forma y extensión, pero que su autonomía limita esas facultades respecto de su disolución en el sentido de que, para ese propósito, es necesaria una consulta dentro del municipio. Así, consideran que la forma democrática de consulta local es el cabildo abierto y que es lógico que sea por ese medio que se pregunte sobre este asunto para dar lugar a una estructura que sea distinta de la que ya existe (arts. 115 y 116 CM). Esto se vincula con la parte inicial de su demanda, donde este argumento fue relacionado a los arts. 2, 11, 21, 85, 202 y 248 Cn. y a los arts. 2, 20 n° 4 y 5, 115 y 116 CM.

6. Sexto, señalan que el sustento central de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal es, según su art. 1, la "Ley Única del régimen político que fue aprobada en el año 1879 como codificación de Leyes Patrias",

que en sus arts. 1 y 3 estableció la estructura de los departamentos, distritos y demarcaciones municipales. Entonces, se trata de un retroceso que viola el principio de irretroactividad que establece el art. 21 Cn.

7. Séptimo, indican que existe una violación al art. 85 Cn., que establece que el gobierno es "republicano, democrático y representativo". Esto se debería a que la democracia evoluciona en la medida en que la participación ciudadana es mayor, pues se crea la tendencia a mayor transparencia de los actos de gobierno. Por el contrario, cuando dicha participación es menor, el sistema democrático involuciona y se altera. Así, en la aprobación del objeto de control se debió tomar en cuenta la autonomía municipal, la identidad territorial (que requiere de mayor tiempo de estudio y de involucrar a los vecinos y saber sus opiniones) y realizar un nuevo censo para actualizar la población. De igual manera, la representación proporcional puede aumentarse o mantenerse igual, pero no disminuirse sin violar el art. 85 Cn., que es el que establece la forma de gobierno. Sin embargo, en virtud del objeto de control habría una menor representación en el ejercicio del gobierno que en el presente.

8. Octavo, aseveran que el proceso de formación de ley inicia, en su fondo, con la discusión. Luego de comenzado ese proceso mediante la iniciativa de ley, debe llamarse a las partes involucradas para preservar el bien común. Después de eso, es preciso cumplir con los requisitos de forma de decreto, sanción y publicación. Pero, un error en el procedimiento descrito viola el art. 11 Cn. (debido proceso y seguridad jurídica).

9. Noveno, en el petitorio de la demanda solicitan que: a) se emita una medida cautelar en contra de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral en relación con el calendario electoral, previamente previsto para las elecciones de 2024, pues sus exigencias requirieron que los partidos políticos realicen elecciones internas sobre municipios inexistentes; b) se solicite a la Asamblea Legislativa la certificación de la hora de la emisión del decreto que se cuestiona, a la Casa Presidencial la certificación de la hora de su sanción y al Diario Oficial la certificación de la hora de su impresión y el recibo de la documentación para publicarlo, y c) se declare inconstitucional la Ley Especial para la Reestructuración Municipal.

III. Elementos del control constitucional, en especial el parámetro de control y el uso del Derecho Internacional como parte de él.

1. El control constitucional que realiza este Tribunal está compuesto del parámetro y objeto de control, y de la confrontación normativa[141]. El primero es la norma constitucional potencialmente violada por el acto, norma u omisión examinado[142]. El segundo es el acto, norma u omisión que se considera contrario a la Constitución[143]. El tercero es la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida entre ellos[144]. Si uno de esos elementos no se configura adecuadamente, la demanda debe rechazarse

por la vía de la improcedencia[145] o prevenirse al actor para que subsane los defectos de forma en que haya incurrido (esto último, por aplicación analógica del art. 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales)[146]. Por el contrario, debe admitirse cuando sí se configuran debidamente[147].

La jurisprudencia constitucional ha permitido delimitar negativamente los posibles parámetros de control constitucional. Así, sin ánimos de exhaustividad, se ha dicho que no pueden serlo: a) el orden ético, como un orden normativo distinto y superior al Derecho Positivo, al cual pertenece la Constitución[148] (sin que esto implique que se desconozca que las disposiciones constitucionales tienen un contenido moral que permea en su interpretación[149]); y b) normas infraconstitucionales, como los tratados internacionales (con la excepción de la acción por vía refleja, que se abordará luego), leyes, ordenanzas municipales o reglamentos[150].

En tal sentido, se advierte que los precedentes de este Tribunal rechazan desde hace mucho tiempo que puedan ser aducidos como parámetros de control normas distintas a la Constitución. En el caso concreto de las normas infraconstitucionales, esto se debe a que, de aceptarles como dicho parámetro, se produciría "una desconstitucionalización por exceso e implicaría aceptar otras consecuencias derivadas de esta idea que son plenamente rechazables —ej., que si las obligaciones legales son a su vez constitucionales, bastaría con la reforma de la ley ordinaria mediante un proceso distinto del previsto en el art. 248 Cn.—"[151].

2. Como se dijo, los tratados internacionales no pueden ser parámetro de control constitucional a menos que se trate de una inconstitucionalidad por vía de acción refleja. Un tratado, con independencia de su denominación (tratado, convenio, convención, pacto, etc.), es todo acuerdo entre sujetos de Derecho Internacional destinado a producir efectos jurídicos que consisten en crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Dicho de otra manera, establecen relaciones jurídicas entre partes de la comunidad internacional de las cuales surgen derechos y obligaciones al determinar las reglas o pautas de conducta que estas deben adoptar en la regulación de un asunto en concreto[152].

Conforme a la jurisprudencia constitucional, la inconstitucionalidad por vía de acción refleja se produce cuando se alega la violación al art. 144 inc. 2° Cn. por la incompatibilidad entre el objeto de control y una norma del Derecho Internacional. En este caso, el parámetro de control es el art. 144 Cn. y solo indirectamente el tratado internacional aducido. Esto se debe a que, al ser la Constitución el único parámetro de enjuiciamiento constitucional, los tratados internacionales solo pueden llegar a ser tomados en consideración al efectuar el contraste normativo cuando se alegan en esos términos.

Sin embargo, no toda la gama de tratados internacionales pueden ser objeto de una inconstitucionalidad por vía de acción refleja. Por el sustrato ideológico de la Constitución, cifrado en su preámbulo y en su parte dogmática, pueden serlo los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por El Salvador[153], que comparten la concepción humanista de esta[154]. De igual manera, también pueden serlo aquellos tratados que, sin ser parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, regulen actividades que por su naturaleza puedan suponer violaciones directas o indirectas a dichos derechos[155] (ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), debido a que en ambos casos se trata de convenios que comparten el mismo sustrato ideológico que la Constitución: la persona humana como elemento central de todo acto de autoridad o estatal.

IV. Inconstitucionalidad por omisión.

Se denomina inconstitucionalidad por omisión a la falta de cumplimiento, por los órganos constitucionales, de los mandatos constitucionales de desarrollo obligatorio o regulación de ciertos temas o asuntos, en la medida que ese incumplimiento exceda un plazo razonable y obstaculice la aplicación eficaz de la Constitución[156]. En esta inconstitucionalidad es necesario argumentar la existencia de una orden concreta, específica e ineludible de producción normativa infraconstitucional de desarrollo que, como consecuencia de la estructura abierta y de la función promocional de la Constitución, es necesaria para la aplicación efectiva de ciertos preceptos constitucionales[157].

Cuando se alega una inconstitucionalidad por omisión, es preciso partir de que esta clase de violación a la Constitución puede presentarse de dos maneras. Por un lado, como omisión absoluta, que consiste en la total ausencia de cualquier normativa que dote de eficacia a las normas constitucionales que lo requieran[158]. Por el otro, como omisión parcial, en la cual la normativa de desarrollo existe, pero es insuficiente o incompleta[159]. A su vez, esta última modalidad de omisión puede adoptar dos formas. Primero, por la infracción al principio de igualdad, cuando el legislador establece una exclusión arbitraria de beneficio en cuanto a ciertos destinatarios de un derecho[160]. Y segundo, por la incompleta o deficiente regulación de un aspecto que provocaría la ineficacia de un mandato constitucional[161].

V. Principio de retroactividad.

1. Todas las disposiciones jurídicas se refieren a intervalos temporales, ya sea en su supuesto o en su consecuencia[162]. El momento en que acontecen los supuestos relevantes para un caso es determinante para la aplicabilidad de sus disposiciones. Así, el ámbito temporal abstracto que contiene

la disposición debe coincidir con el momento en que acontece la acción que habilitaría su aplicación. De manera que todo lo que ocurra fuera de ese ámbito temporal debe considerarse irrelevante para ella. Por tanto, para establecer si determinada circunstancia de hecho es merecedora de la consecuencia jurídica prevista en un texto normativo, es necesario establecer en qué momento es realizada la acción y el intervalo de tiempo al que la primera se refiere[163].

En ese sentido, desde el punto de vista del aplicador de la norma, el sistema jurídico vigente presente al momento de su decisión ocupa una posición privilegiada en cuanto a la aplicabilidad al caso concreto. Sin embargo, no es el único susceptible de aplicación actual, ya que existirán casos en los que quien aplica la norma debe optar por disposiciones que ya han sido derogadas, pero que retienen su aplicabilidad, porque los hechos a los que se refiere se consumaron durante su vigencia (ultractividad). Así también, existirán otros supuestos en que se deberán aplicar disposiciones actualmente vigentes sobre situaciones o hechos iniciados o acontecidos con anterioridad a dicha vigencia (retroactividad).

2. Ahora bien, en el sistema jurídico salvadoreño, uno de los criterios de aplicabilidad de las normas en el tiempo es el principio de irretroactividad de las leyes (art. 21 Cn.) Al respecto, hay que subrayar que la Constitución no garantiza un principio de irretroactividad absoluto o total, sino que sujeta la excepción a dicho principio a los casos de leyes favorables en materia penal y en materia de orden público (este último, declarado expresamente en la ley y avalado por la jurisdicción constitucional[164]). Como límite al legislador, implica que las emisiones normativas futuras no pueden calificar jurídicamente los actos o hechos pasados de los individuos o instituciones públicas, de manera que se altere la regulación que correspondería aplicar según el ordenamiento que estuvo vigente en el momento en que aquella tuvo lugar o se consumó.

Desde este punto de vista, la retroactividad se verificaría en la afectación o modificación de situaciones jurídicas consolidadas, esto es, en la traslación de consecuencias jurídicas a un momento anterior a la vigencia de la nueva ley. De ahí que, en definitiva, para comprobar si una ley es o no retroactiva, sea determinante verificar si las situaciones iniciadas en el pasado son reguladas por la nueva ley y si las consecuencias de esta se extienden a esas situaciones consumadas.

Como se dejó apuntado, ya sea de forma expresa o tácita, todos los enunciados jurídicos se refieren a intervalos temporales en su supuesto y en su consecuencia. Cuando la afectación de la nueva disposición se da en el supuesto de hecho, el intervalo de tiempo se refiere a la subsunción, mientras que, si el ámbito temporal se da en la consecuencia, se refiere al efecto. En virtud de ello, cabe distinguir dos requisitos para verificar la

retroactividad: que el enunciado jurídico nuevo se refiera a supuestos de hecho pasados; y que, además, desplace a las consecuencias jurídicas que el ordenamiento anterior preveía[165]. En conclusión, ninguna ley es retroactiva si solo se refiere a hechos pasados (por ejemplo, el derecho intertemporal, en la sucesión de normas procesales). Lo determinante es calificar si pretende extender las consecuencias jurídicas del presente a situaciones de hecho que se produjeron en el pasado[166]. Asimismo, para determinar en definitiva si existe o no aplicación retroactiva de una ley, se debe precisar si la situación jurídica a regular se ha constituido durante la vigencia de la norma anterior o bien durante la de la nueva norma[167].

VI. Debido proceso y seguridad jurídica.

1. Según la jurisprudencia constitucional, la protección jurisdiccional (art. 2 inc. 1° Cn.) se integra de cuatro rubros: acceso a la jurisdicción, proceso constitucionalmente configurado o debido proceso, derecho a una resolución de fondo justificada y congruente y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales[168]. En ese sentido, el lugar natural de dicha protección es cualquier proceso judicial o que suponga el ejercicio de la jurisdicción. Para lo que aquí interesa, debe abordarse la cuestión del debido proceso.

El debido proceso es un concepto que alude a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los sujetos partícipes, que agrupa y se desdobla en un haz de garantías que cobran vigencia en todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso. Dentro de ese haz de garantías figuran el derecho de audiencia (art. 11 Cn.), el derecho de defensa (art. 12 Cn.), la presunción de inocencia (art. 12 Cn.) y el acceso a los medios impugnativos[169].

2. Por su lado, la seguridad jurídica se concibe como la capacidad de un ordenamiento jurídico para hacer previsibles, es decir, seguros, los valores de libertad e igualdad[170]. Este Tribunal la ha definido como la certeza que el individuo posee de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente[171]. De ahí que la seguridad jurídica implica una actitud de confianza en el Derecho vigente y una razonable previsibilidad sobre su futuro. Es la que permite prever las consecuencias de las acciones y las garantías constitucionales de que gozan tales actos. Con respecto a los poderes públicos, esta Sala ha indicado que su finalidad no es otra que la de erigirse como parámetro de actuación en el proceso decisional de los entes estatales, a fin de poder prever las distintas operaciones o evoluciones de las situaciones jurídicas que se desarrollan a través del reparto de competencias y atribuciones[172].

Es decir, desde esta seguridad del individuo en relación con sus situaciones y expectativas legítimas, se requiere también de la coherencia en el ejercicio del poder y de la estabilidad de la adopción de decisiones estatales, pues no solo se reduce a las exigencias de certeza, precisión y publicación de la ley, sino también a los elementos que forman parte de la Constitución o de la extinción de una situación jurídica en vías de extinguirse. De modo que no debe relacionarse únicamente con derechos consolidados, ya que ello implicaría reducir su ámbito de eficacia a la prohibición de retroactividad, que extiende sus ámbitos de incidencia objetiva en la estructuración del marco competencial del poder y se manifiesta, en ese sentido, en una estructuración normativa del poder público que debe a su vez estar informada por la certeza y la claridad normativa sobre los sentidos en que desembocará dicho reparto competencial. De ahí que sea importante que el Estado se ocupe de dicha seguridad.

Hay tres situaciones que propician la inseguridad jurídica. En primer término, la falta de comprensión completa del Derecho: las fuentes del Derecho son numerosas y complejas, dado que provienen de distintos órganos internos y externos, por lo que el ciudadano podría no tener todas las condiciones razonables para conocer el contenido normativo que debe obedecer. En segundo lugar, la falta de total estabilidad del Derecho: el constante cambio en el mundo actual trae aparejada la necesidad de una modificación en las circunstancias e intereses que se deben proteger, de modo que las fuentes de Derecho son objeto de numerosas y constantes modificaciones. Y, en tercer término, los déficits en la previsibilidad: existe una "presión" para que esa modificación del orden jurídico se produzca según las exigencias políticas, económicas y sociales. De ahí que existe el riesgo que el ciudadano no tenga condiciones razonables para prever las consecuencias jurídicas que el Derecho atribuirá en el futuro a los actos presentes. Para evitar estos efectos nocivos, la seguridad jurídica se erige como norma que exige un estado de comprensión, confiabilidad y calculabilidad del Derecho. Estas tres condiciones deben verificarse de forma acumulativa[173].

VII. Democracia representativa, democracia directa y democracia participativa.

1. El art. 85 inc. 1° Cn. establece que el gobierno es "republicano, democrático y representativo". Entonces, en países como el nuestro existe un sistema de democracia representativa, por la cual el pueblo elige a sus representantes a través de elecciones periódicas y libres para atribuirles la facultad de tomar decisiones fundamentales para el país. Estos delegados del pueblo deben regirse por el marco jurídico establecido por el soberano y velar por los intereses de la comunidad que los eligió[174]. Así, hay un componente participativo (de elección) y otro sustitutivo (de decisión a nombre del elector).

El gobierno democrático y representativo demanda de quienes son elegidos como representantes del pueblo, un compromiso con él, en el sentido de que no actúan en nombre o a favor de grupos de poder o de sectores determinados, sino de todos y cada uno de los miembros de la sociedad salvadoreña, y que, por tanto, deben tomar en cuenta la voluntad y los intereses de la totalidad de sus representados. Todo este sistema se da mediante las elecciones que posibilitan que los ciudadanos controlen los actos de sus representantes y reduce las posibilidades de que estos procedan por su cuenta en forma arbitraria[175].

En ese contexto, los procesos electorales son el origen de la legitimación de los funcionarios públicos de elección que se da a través del sufragio. En El Salvador, las elecciones de los gobernantes se realizan a través de dos vías: a) elección de primer grado, en la cual se elige a los representantes por medio de una votación directa, es decir, que los electores participan de manera inmediata en la designación de los funcionarios del gobierno; y b) elección indirecta, la cual implica que los ciudadanos designan a sus representantes, quienes a su vez eligen a otros funcionarios para el ejercicio de determinados cargos. Este segundo tipo de elecciones también son llamadas de segundo grado, pues es antecedida por otra, en este caso un cuerpo de elección popular que cuenta con atribuciones para designar a otros representantes.

2. Por otra parte, la democracia directa, como su nombre lo sugiere, supone que los ciudadanos toman sus decisiones sin intermediación alguna, es decir, por sí mismos. Por ejemplo, el art. 89 Cn. prevé que, en el hipotético caso de que se reconstruyera total o parcialmente la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada, el proyecto y bases de la unión se tendrían que someter a una consulta popular. Estas decisiones de democracia directa pueden tomar el nombre de referéndum, plebiscito, consulta popular, entre otras semejantes[176].

Uno de los elementos procedimentales más importantes de esta forma de democracia es la formulación de diseños institucionales que permitan que las preferencias de los ciudadanos se sometan a un proceso de discusión inclusivo e intenso, el cual debe estar regido por la plena transparencia sobre el contenido de lo que ha de decidirse y de sus posibles consecuencias, así como del mayor acceso a la información clara, sencilla, comprensible y accesible acerca de esos puntos. Requiere, pues, de un compromiso no solo institucional, sino también ético y normativo, con la toma de decisiones libres e informadas por las personas.

3. Finalmente, la democracia participativa alude a las figuras que tienen por objeto la participación de los ciudadanos, en su calidad de afectados por la decisión concreta o en cuanto tales, ya sea de forma individual

o bien agrupados en organizaciones defensivas de intereses sociales, en alguna fase del proceso que culmina con la toma de decisión, pero en que la decisión final corresponde a las autoridades o instituciones competentes para ello[177]. Es decir, si bien existe participación ciudadana en el procedimiento decisional, la adopción final de una postura o solución corresponde exclusivamente a los órganos competentes, quienes se informan de las ideas, opiniones o hechos que tales participantes les exponen.

VIII. Representación proporcional.

Conforme a los precedentes constitucionales, la representación proporcional significa que el hecho de ganar o no un escaño depende generalmente de la proporción de votos que obtengan los diversos candidatos o partidos políticos. Los candidatos que hayan sido capaces de conseguir la cantidad o proporción necesaria de votos serán elegidos. Así, la idea clave del principio de representación proporcional es reflejar las fuerzas sociales y grupos políticos en la población con la mayor exactitud posible. La cantidad de votos y la de escaños de los partidos deben corresponderse de modo aproximado, es decir, según la fórmula de representación proporcional, la cantidad de escaños obtenidos por un partido será igual a la proporción de votos que haya conseguido[178].

De ese modo, en contraste con la fórmula mayoritaria, la proporcional produce resultados electorales que otorgan a cada partido una importancia ponderada según el número de votos obtenidos, de manera que los partidos, aun sin registrar a su favor la mayoría de votos, obtienen escaños de participación institucional, es decir, la proporción de votos se transforma a su vez en proporción del resultado participativo. La idea del sistema de representación proporcional, en tanto que pretende la inclusión de más de un ganador, se evidencia de mejor manera en procesos electorales mediante los cuales se pretende la configuración de órganos plurales o pluripersonales.

El fin de este sistema es generar una aproximación porcentual de la representación social, hacia la representación orgánico-funcional en las instituciones estatales, de modo que mientras más sectores se vean representados, mayor legitimidad adquiere la decisión de los órganos de conformación compuesta[179].

IX. Examen liminar de la demanda.

1. El primer argumento de los actores (considerando II.1) es que la "extinción" de los municipios requiere de una consulta ciudadana local. Estas consultas ciudadanas pueden ser entendidas ya bien como mecanismos de democracia directa (considerando VII.2) o como mecanismos de democracia participativa (considerando VII.3), dependiendo de la forma que en concreto adopten en su formulación institucional y en su aplicación práctica.

Sin embargo, el proceso de formación de ley (art. 133 y siguientes Cn.) se configura por las siguientes etapas: a) fase de iniciativa de ley (art. 133 Cn.); b) fase legislativa, que comprende la discusión y aprobación de los proyectos de ley (arts. 131 ord. 5°, 134 y 135 Cn.); c) fase ejecutiva, que comprende su sanción y promulgación (arts. 135, 137, 138, 139 y 168 ord. 8° Cn.); y d) publicación, que da a lugar al plazo establecido para la obligatoriedad de la ley (art. 140 Cn.)[180]. Estos son los elementos constitucionales que el legislador debe observar preceptivamente, sin que en ellos quede comprendida la consulta ciudadana. Esto se justifica en que el modelo democrático de El Salvador es representativo (considerando VII.1), de manera que se parte de que los diputados de la Asamblea Legislativa ejercen esa función representativa de todo el pueblo[181], sin que se exija de la consulta popular para el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, es preciso hacer notar que los actores, como cualquier otro ciudadano, tenían a su disposición dos mecanismos de democracia participativa previstos en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Por una parte, su art. 49 habilita a que las comisiones legislativas, cuando lo consideren procedente, "previa solicitud por escrito del interesado, [den] audiencia a las personas o los representantes de sectores peticionarios, en algún tema que las comisiones estén estudiando". Por la otra, el art. 50 de dicho reglamento indica que "[l]as comisiones podrán acordar realizar consultas públicas sobre los temas en estudio [...]". De ese modo, si bien la consulta popular no es una exigencia del proceso de formación de ley conforme a la Constitución, sí hay mecanismos de democracia participativa en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa que en este caso en concreto podrían haber servido como sucedáneos a dicha consulta, los cuales estuvieron en todo momento a disposición de cualquier ciudadano. Por tanto, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

2. El segundo argumento de los demandantes (considerando II.2) consiste en que el hecho de que en la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal no se haya tomado en cuenta la actualización del censo poblacional elaborado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo implica que existe una inconstitucionalidad por omisión.

En cuanto a este punto, se advierten dos defectos en la configuración de la pretensión. Por un lado, no se ha establecido cuál es la disposición constitucional que serviría como parámetro de control (esto es, de la cual derivaría el mandato constitucional supuestamente infringido)[182]. Por el otro lado, conforme a lo sostenido por esta Sala en decisiones pasadas, se está en presencia de una inconstitucionalidad por omisión si se logra determinar: a) que hay una orden concreta, específica e ineludible de producción

normativa infraconstitucional de desarrollo; b) la falta de desarrollo legislativo y c) la ineficacia de las disposiciones constitucionales concernidas[183]. No obstante, los actores se han limitado en su demanda a sostener que existe una inconstitucionalidad por omisión, sin argumentar esos elementos. Por *tanto, la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

3. El tercer argumento (considerando II.3) es que una ley que afecte indirectamente los derechos que reconocen los arts. 72 y 73 Cn. (sufragio y derecho a optar a cargos públicos) es inconstitucional en congruencia con el art. 23 de la Carta Democrática Interamericana. En cuanto a esta alegación, se advierte que los actores no han hecho ningún contraste normativo y que tampoco han aducido la violación al art. 23 de la Carta Democrática Interamericana como una inconstitucionalidad por vía de acción refleja, conforme a los términos descritos en el considerando III.2 de la presente resolución.

De hecho, ni siquiera indicaron mínimamente si dicha carta encaja dentro de alguno de los supuestos que habilitan la argumentación de la inconstitucionalidad por vía de acción refleja, esto es, que se trate de un tratado del derecho internacional de los derechos humanos o que regule actividades que directa o indirectamente incidan en ellos. Así, no se tienen por cumplidos los presupuestos para analizar esta cuestión. Por tanto, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

4. El cuarto argumento es que se ha infringido el art. 248 Cn., que prescribe la irreductibilidad del Estado y de sus componentes. En específico, esta disposición establece en su inciso 4° que "[n]o podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren [...] *al territorio de la República* [...]" (el resaltado es propio).

Pues bien, conforme a los precedentes constitucionales, el territorio puede ser entendido desde tres aproximaciones: "desde una primera aproximación se entiende que el territorio estatal se integra por la tierra firme o territorio en sentido estricto, concepto en el que debe distinguirse entre territorio continental y territorio insular, compuesto este último por las islas comprendidas dentro del mar territorial; desde una segunda, se entiende que dentro de dicha denominación también está comprendido el mar territorial, es decir, la zona de mar adyacente a las costas, aunque debe aclararse que conceptualmente el mar territorial no comprende [solo] la superficie del mar, sino también el subsuelo, el lecho marino, la columna de agua y el espacio aéreo suprayacente; y una tercera, por la que cabe entender que también forma parte del territorio el espacio aéreo, esto es, el existente sobre la tierra firme y, como ya se dijo, sobre el mar territorial. Contenidos que en definitiva puede afirmarse revelan el alcance de dicho concepto"[184].

De ese modo, el concepto de territorio estatal está vinculado con el art. 84 Cn., que sería la disposición constitucional afectada por la cláusula de irreformabilidad del art. 248 Cn. Básicamente, de lo que se trata es de que las reformas constitucionales no sirvan como un vehículo para realizar concesiones o reducciones territoriales, sino que la demarcación del territorio de El Salvador provenga de lo que el art. 84 Cn. establece, el cual, en muchos de sus aspectos, reconduce a las normas del derecho internacional como fundamento para tal demarcación y limitación. Así, no es una disposición vinculada con la extensión del área de los municipios, sino con la del Estado como un todo. En consecuencia, se ha atribuido un contenido equívoco al parámetro de control propuesto[185], por lo que *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

5. El quinto argumento de los demandantes consiste en que las facultades legislativas sobre los municipios están referidas a su forma y extensión, pero que su autonomía limita esas facultades respecto de su disolución en el sentido de que, para ese propósito, es necesaria una consulta dentro del municipio. Así, consideran que la forma democrática de consulta local es el cabildo abierto y que es lógico que sea por ese medio que se pregunte sobre este asunto para dar lugar a una estructura que sea distinta de la que ya existe (arts. 115 y 116 CM). Esto se vincula con la parte inicial de su demanda, donde este argumento fue relacionado a los arts. 2, 11, 21, 85, 202 y 248 Cn. y a los arts. 2, 20 n° 4 y 5, 115 y 116 CM.

El cabildo abierto es una figura prevista en el art. 116 letra b CM como un mecanismo de participación ciudadana. Esta disposición enlaza con el art. 117 de dicho código, que establece ciertas reglas procedimentales para la consulta popular. Sin embargo, es patente que esta alegación se traduce en una supuesta inconstitucionalidad que deriva de la infracción de las reglas legales que estatuye el Código Municipal. Esto se debe a que, como se dijo con anterioridad, el proceso de formación de ley que prevé la Constitución no se integra por ninguna fase en la que se exija de la consulta popular de un proyecto de ley, sin perjuicio de los mecanismos de democracia participativa que se señalan en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Como consecuencia de lo anterior, se puede afirmar que el parámetro de control propuesto es, en realidad, una norma infraconstitucional (las que derivan de las disposiciones del Código Municipal). Pues bien, conforme a lo dicho en el considerando III.1, esta Sala ha sostenido reiteradamente que tales normas no pueden erigirse en dicho parámetro, porque entonces se produciría una deconstitucionalización por exceso. Entonces, la conclusión a la que se llega es que este planteamiento de los actores es errado, por lo que *la demanda deberá declararse improcedente respecto de este punto.*

6. El sexto argumento contenido en la demanda es que la base de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal es, según su art. 1, la "Ley Única del régimen político que fue aprobada en el año 1879 como codificación de Leyes Patrias", que en sus arts. 1 y 3 estableció la estructura de los departamentos, distritos y demarcaciones municipales. Entonces, se trata de un retroceso que viola el principio de irretroactividad que establece el art. 21 Cn.

En cuanto a esto, se advierte que los actores confieren al principio de irretroactividad un significado que no le corresponde, conforme a lo dicho en el considerando V de esta resolución. La naturaleza esencial de este principio es la no afectación de las situaciones o derechos creados o surgidos al amparo de un ordenamiento jurídico por una norma surgida posteriormente. Es decir, la irretroactividad implica que las emisiones normativas futuras no pueden calificar jurídicamente los actos o hechos pasados de los individuos o instituciones, de manera que se altere la regulación que correspondería aplicar según el ordenamiento que estuvo vigente en el momento en que aquella tuvo lugar o se consumó[186].

Por el contrario, no se infringe de ninguna manera el principio de irretroactividad cuando una regulación posterior retoma contenidos que estaban previstos en regulaciones anteriores. De hecho, justamente este asunto es el que justifica la figura del traslado del objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad[187] (una figura que acontece cuando, pese a la derogación de la disposición cuestionada en el transcurso del proceso, permanece la norma por haberse alojado en un nuevo cuerpo normativo). Asumir que la irretroactividad tiene esta proyección supondría un resultado absurdo: admitir que el orden jurídico es pétreo y que no puede retrotraerse a regulaciones pasadas que, a la luz de las circunstancias (y sin que haya en ellas un vicio sustantivo de inconstitucionalidad), sean adecuadas para un fin legítimo[188].

La única excepción a la regla antedicha es la prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales[189], que impone el deber de no retroceder en el estatus reconocido y protegido para tales derechos en las normas constitucionales y en la legislación, a menos que se justifique en el principio de proporcionalidad[190], que no es lo que acontece en este caso. En consecuencia, al habérsele asignado un contenido equívoco al parámetro de control, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

7. El eje central del séptimo argumento de los actores es que la representación proporcional puede aumentarse o mantenerse igual, pero no disminuirse sin violar el art. 85 Cn., que es el que establece la forma de gobierno. Sin embargo, en virtud del objeto de control habría una menor representación en el ejercicio del gobierno que en el presente.

Pero, a partir de lo dicho en el considerando VIII, la representación proporcional significa que el hecho de ganar o no un escaño depende generalmente de la proporción de votos que obtengan los diversos candidatos o partidos políticos. Así, la idea clave de dicho principio es reflejar, con la mayor exactitud posible, las fuerzas sociales y grupos políticos en la población. La cantidad de votos y la de escaños de los partidos deben corresponderse de modo aproximado, es decir, según la fórmula de representación proporcional, la cantidad de escaños obtenidos por un partido será igual a la proporción de votos que haya conseguido.

Es decir, este principio es un asunto electoral que, por ejemplo, podría ver violado cuando una hipotética reorganización territorial implicara, a la vez, una modificación en el sistema de conteos de votos y en la proporcionalidad representativa que corresponde a cada uno de los municipios a partir de su territorio y población. No obstante, los actores no han detallado ni una cuestión ni la otra, por lo que se incurre en un doble vicio en la configuración de la pretensión: por una parte, se asigna un contenido equívoco al concepto constitucional de representación proporcional; y por la otra, se aduce un contraste normativo deficiente. En consecuencia, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

8. El octavo argumento de los peticionarios es que el proceso de formación de ley inicia, en su fondo, con la discusión. Luego de comenzado ese proceso mediante la iniciativa de ley, debe llamarse a las partes involucradas para preservar el bien común. Después de eso, es preciso cumplir con los requisitos de forma de decreto, sanción y publicación. Pero, un error en el procedimiento descrito viola el art. 11 Cn. (debido proceso y seguridad jurídica).

En relación con este argumento, se advierte que los actores le han atribuido un contenido equívoco al art. 11 Cn., pues de tal disposición no deriva el debido proceso (sino solo algunas de sus manifestaciones, como el derecho de audiencia) ni la seguridad jurídica, según lo explicado en el considerando VI de esta resolución. De igual manera, el debido proceso es una categoría con incidencia procesal que no está vinculada con el proceso de formación de ley, ya que este último no hace surgir una relación jurídico-procesal, sino que es un conjunto de trámites que han de seguirse a fin de que un texto determinado adquiera jurídicamente fuerza obligatoria de ley[191] y en el que no se debaten derechos o intereses.

En el mismo sentido, como ya se apuntó previamente, el proceso de formación de ley no comprende la consulta popular como una exigencia hacia el legislador. De ese modo, la seguridad jurídica no se vería infringida en el supuesto de que esta no se realice. Por todo lo anterior, *la demanda se deberá declarar improcedente respecto de este punto.*

9. En lo que respecta a las peticiones referidas en el considerando II.9 de esta decisión, al haberse declarado improcedentes todas las pretensiones principales de las cuales dependen estas, resulta inoficioso pronunciarse sobre ellas.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y en los artículos 6, 7 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala **RESUELVE**:

1. Declárase improcedente la demanda presentada por los ciudadanos José Santos Melara Yanes y José Antonio Castillo Ortiz, mediante la cual piden la inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, por la supuesta violación de los artículos 2, 11, 21, 72, 73 80, 83, 85, 86, 202 y 248 de la Constitución; artículos 2, 20 número 4 y 5, 115 y 116 del Código Municipal; y artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana. Las razones de tal improcedencia son: a) la consulta popular no es parte de las exigencias constitucionales del proceso de formación de ley; b) en cuanto a la alegación de una inconstitucionalidad por omisión por no haberse tomado en cuenta la actualización del censo poblacional elaborado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo, no se han argumentado los elementos necesarios para aducir una inconstitucionalidad de tal naturaleza; c) no se realizó ningún contraste normativo sobre la supuesta infracción a los artículos 72 y 73 de la Constitución, así como tampoco se adujo la violación al artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana como una inconstitucionalidad por vía de acción refleja.

Asimismo, d) se atribuyó un contenido equívoco al artículo 248 de la Constitución en relación con el artículo 84 de la norma fundamental, debido a que no son disposiciones vinculadas con la extensión del área de los municipios, sino con la del Estado como un todo; e) el argumento de falta de consulta popular mediante un cabildo abierto se traduce en una supuesta inconstitucionalidad que deriva de la infracción de las reglas legales que estatuye el Código Municipal, que no puede figurar como un parámetro de control constitucional, aunado a que, como se dijo con anterioridad, la consulta popular no es parte del proceso de formación de ley que establece la Constitución; f) se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 21 de la Constitución (principio de irretroactividad), ya que no se infringe de ninguna manera tal principio si una regulación posterior retoma contenidos que estaban previstos en regulaciones anteriores, a menos que esta despliegue sus efectos en situaciones consolidadas.

De igual manera, g) se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 85 de la Constitución y se ha hecho un contraste normativo deficiente, dado que la representación proporcional es un asunto electoral que, por ejemplo, podría ver violado si una hipotética reorganización territorial

implicara, a la vez, una modificación en el sistema de conteos de votos y en la proporcionalidad representativa que corresponde a cada uno de los municipios a partir de su territorio y población; h) se ha atribuido un contenido equívoco al artículo 11 de la Constitución, en tanto que el debido proceso es una categoría con incidencia procesal que no está vinculada con el proceso de formación de ley, ya que este último no hace surgir una relación jurídico-procesal, sino que es un conjunto de trámites que han de seguirse a fin de que un texto determinado adquiera jurídicamente fuerza obligatoria de ley y en el que no se debaten derechos o intereses, a la vez que, como dicho proceso no comprende la consulta popular como una exigencia hacia el legislador, la seguridad jurídica no se vería infringida en el supuesto de que esta no se realice, e i) sobre las peticiones mencionadas en el considerando II.9 de esta decisión, al haberse declarado improcedentes todas las pretensiones principales de las cuales dependen estas, resulta inoficioso pronunciarse sobre ellas.

2. Tome nota la secretaría de este Tribunal del lugar y medio técnico señalado por los demandantes para recibir los actos procesales de comunicación.

3. Notifíquese.

"""—A. L. J. Z.—DUEÑAS.—LUIS JAVIER SUÁREZ MAGAÑA—H. N. G. —O. CANALES C.—PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN—RENE ARISTIDES GONZALEZ BENÍTEZ—RUBRICADAS—"""

NOTAS

1 Dicho código fue emitido mediante el Decreto Legislativo n° 1030, de 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial n° 105, tomo 335, de 10 de junio de 1997. La disposición inaplicada fue reformada mediante el Decreto Legislativo n° 212, de 17 de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial n° 226, tomo 433, de 26 de noviembre de 2021.

2 Sentencia de 10 de julio de 2018, inconstitucionalidad 64-2015 AC.

3 Sentencia de 18 de enero de 2016, inconstitucionalidad 126-2013, en la que se afirmó que "el operador jurídico debe: (i) identificar las disposiciones legales que incidan relevantemente en la interpretación de otras y, (ii) realizar una interpretación sistemática, integral y armónica de las mismas a la luz de los contenidos constitucionales".

4 Auto de 18 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 66-2017.

5 Auto de 23 de febrero de 2018, inconstitucionalidad 109-2017. La aplicabilidad o pertinencia significa que el caso concreto debe reunir las propiedades que describe el supuesto de hecho o condición de aplicación establecido en la norma inaplicada.

6 Auto de inconstitucionalidad 66-2017, ya citado.

7 Auto de inconstitucionalidad 109-2017, ya citado.

8 Sentencia de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidad 136-2014/141-2014.

9 Auto de 5 de julio de 2021, inconstitucionalidad 122-2020.

10 Auto de 11 de noviembre de 2020, inconstitucionalidad 116-2020.

11 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

12 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

13 Auto de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2017.

14 Se trata de los procesos con referencia 18-2022, 20-2022 y 25-2022, admitidos a trámite mediante los autos de 9 de mayo de 2022, 9 de mayo de 2022 y 8 de junio de 2022, respectivamente.

15 Puede consultarse el considerando IX de la resolución de inaplicabilidad que dio inicio al proceso de inconstitucionalidad 18-2022 (titulado "inaplicabilidad de la norma"), el considerando X de la resolución de inaplicabilidad que dio inicio al proceso de inconstitucionalidad 20-2022 (titulado "inaplicabilidad de la norma") y el considerando VIII de la resolución de inaplicabilidad que dio inicio al proceso de inconstitucionalidad 25-2022 (titulado "[i]naplicabilidad del [a]rt. 346-B Código Penal en cuanto al rango de pena"). Estas resoluciones constan en los expedientes judiciales de los procesos de inconstitucionalidad que han sido iniciados en virtud de ellas.

16 Sentencia de 9 de abril de 2008, inconstitucionalidad 25-2006/1-2007.

17 Dicha ley fue emitida mediante el Decreto Legislativo n° 852, de 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial n° 221, tomo 333, de 22 de noviembre de 1996.

18 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.

19 Sentencia de 8 de abril de 2003, inconstitucionalidad 28-2002.

20 Entre otras, sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012 AC.

21 Sobre todo lo que se dirá a continuación, véase Bernal Pulido, Carlos, El derecho de los

derechos, 1ª ed., 5ª reimpresión, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2008, pp. 262-279.

22 Se le llama así por su "origen" en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de Alemania.

23 Recibe este nombre porque su "origen" es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.

24 Por ejemplo, en la sentencia de 22 de junio de 2011, inconstitucionalidad 2-2006, se usó el modelo europeo. Luego, en la sentencia de 10 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 112-2012, se utilizó el americano. Posteriormente, en la sentencia de 22 de junio de 2016, inconstitucionalidad 15-2014, se volvió a usar el europeo. Esto denota una oscilación en el empleo uniforme de alguna versión del test de igualdad.

25 Sentencia de 23 de octubre de 2020, inconstitucionalidad 98-2015.

26 Algunas decisiones recientes en donde se ha utilizado dicho examen: sentencia de 4 de junio de 2021, inconstitucionalidad 5-2016; y sentencia de 18 de febrero de 2022, inconstitucionalidad 33-2016 AC.

27 Auto de 4 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 8-2017.

28 Sentencia de inconstitucionalidad 5-2016, ya citada.

29 En torno a esta exigencia, debe señalarse que en la sentencia de 23 de diciembre de 2016, inconstitucionalidad 156-2012, se explicó que el art. 3 Cn. indica que la nacionalidad, raza, sexo y religión pueden considerarse como categorías sospechosas de discriminación, pero dicha enumeración no es taxativa.

30 Al respecto, de acuerdo con la sentencia de 10 de diciembre de 2021, inconstitucionalidad 67-2016, "[c]uando el trato equiparador o diferenciador se basa en circunstancias ajenas o distintas a las referidas categorías sospechosas, el escrutinio a utilizar es aquel que puede denominarse escrutinio básico. En cambio, cuando el trato equiparador o diferenciador sí se basa en ellas, es posible hacer una distinción de escrutinios excepcionales: el escrutinio intermedio, que es el que debe utilizarse para enjuiciar las acciones afirmativas cuyo propósito es cumplir la obligación de promoción o protección de los derechos de las personas que pertenecen a alguna de esas categorías; y el escrutinio estricto, que es el que debe realizarse para analizar las medidas que establecen un trato diferente en detrimento (discriminación) de los derechos de un grupo de personas de alguna de dichas categorías".

31 La medida es inidónea cuando no persigue un fin constitucionalmente legítimo o, aun persiguiéndolo, no es adecuada para alcanzarlo.

32 La medida es innecesaria cuando existe otra al menos igualmente idónea, pero menos lesiva a la situación jurídica afectada.

33 La medida es desproporcionada cuando, dada la seguridad sobre lo alegado en idoneidad y necesidad –premisas fácticas–, el grado de satisfacción que se pretende alcanzar por la medida es inferior al grado de afectación de la situación jurídica enjuiciada.

34 Sobre el carácter escalonado del test de proporcionalidad, véase el auto de 19 de enero de 2022, inconstitucionalidad 76-2018.

35 Dicha ley fue emitida mediante el Decreto Legislativo n° 691, de 29 de abril de 2011,

publicado en el Diario Oficial n° 108, tomo 391, de 10 de junio de 2011.

36 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, inconstitucionalidad 9-2006.

37 Sentencia de 8 de abril de 2003, inconstitucionalidad 28-2002.

38 Entre otras, sentencia de 29 de julio de 2015, inconstitucionalidad 65-2012 AC.

39 Sobre todo lo que se dirá a continuación, véase Bernal Pulido, Carlos, El derecho de los derechos, 1ª ed., 5ª reimpresión, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2008, pp. 262-279.

40 Se le llama así por su "origen" en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Constitucional de Alemania.

41 Recibe este nombre porque su "origen" es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.

42 Por ejemplo, en la sentencia de 22 de junio de 2011, inconstitucionalidad 2-2006, se usó el modelo europeo. Luego, en la sentencia de 10 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 112-2012, se utilizó el americano. Posteriormente, en la sentencia de 22 de junio de 2016, inconstitucionalidad 15-2014, se volvió a usar el europeo. Esto denota una oscilación en el empleo uniforme de alguna versión del test de igualdad.

43 Sentencia de 23 de octubre de 2020, inconstitucionalidad 98-2015.

44 Algunas decisiones recientes en donde se ha utilizado dicho examen: sentencia de 4 de junio de 2021, inconstitucionalidad 5-2016; y sentencia de 18 de febrero de 2022, inconstitucionalidad 33-2016 AC.

45 Auto de 4 de octubre de 2021, inconstitucionalidad 8-2017.

46 Sentencia de inconstitucionalidad 5-2016, ya citada.

47 En torno a esta exigencia, debe señalarse que en la sentencia de 23 de diciembre de 2016, inconstitucionalidad 156-2012, se explicó que el art. 3 Cn. indica que la nacionalidad, raza, sexo y religión pueden considerarse como categorías sospechosas de discriminación, pero dicha enumeración no es taxativa.

48 Al respecto, de acuerdo con la sentencia de 10 de diciembre de 2021, inconstitucionalidad 67-2016, "[c]uando el trato equiparador o diferenciador se basa en circunstancias ajenas o distintas a las referidas categorías sospechosas, el escrutinio a utilizar es aquel que puede denominarse escrutinio básico. En cambio, cuando el trato equiparador o diferenciador sí se basa en ellas, es posible hacer una distinción de escrutinios excepcionales: el escrutinio intermedio, que es el que debe utilizarse para enjuiciar las acciones afirmativas cuyo propósito es cumplir la obligación de promoción o protección de los derechos de las personas que pertenecen a alguna de esas categorías; y el escrutinio estricto, que es el que debe realizarse para analizar las medidas que establecen un trato diferente en detrimento (discriminación) de los derechos de un grupo de personas de alguna de dichas categorías".

49 La medida es inidónea cuando no persigue un fin constitucionalmente legítimo o, aun persiguiéndolo, no es adecuada para alcanzarlo.

50 La medida es innecesaria cuando existe otra al menos igualmente idónea, pero menos lesiva a la situación jurídica afectada.

51 La medida es desproporcionada cuando, dada la seguridad sobre lo alegado en idonei-

dad y necesidad –premisas fácticas–, el grado de satisfacción que se pretende alcanzar por la medida es inferior al grado de afectación de la situación jurídica enjuiciada.

52 Sobre el carácter escalonado del test de proporcionalidad, véase el auto de 19 de enero de 2022, inconstitucionalidad 76-2018.

53 Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial n° 62, tomo 434, de 27 de marzo de 2022.

54 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

55 Auto de 13 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 45-2020.

56 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

57 Auto de 6 de septiembre de 2021, inconstitucionalidad 72-2020.

58 Auto de 1 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2014.

59 Auto de 11 de julio de 2014, inconstitucionalidad 29-2014.

60 Por ejemplo, sentencia de 23 de enero de 2015, inconstitucionalidad 53-2012.

61 Sentencia de 16 de diciembre de 2013, inconstitucionalidad 7-2012.

62 Auto de 14 de enero de 2000, inconstitucionalidad 10-94.

63 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 83-2006.

64 Sentencia de 26 de junio de 2009, hábeas corpus 7-2008.

65 Auto de 30 de octubre de 2008, hábeas corpus 143-2008.

66 Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial n° 62, tomo 434, de 27 de marzo de 2022.

67 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

68 Auto de 13 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 45-2020.

69 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

70 Auto de 6 de septiembre de 2021, inconstitucionalidad 72-2020.

71 Auto de 1 de julio de 2015, inconstitucionalidad 100-2014.

72 Auto de 11 de julio de 2014, inconstitucionalidad 29-2014.

73 Por ejemplo, sentencia de 23 de enero de 2015, inconstitucionalidad 53-2012.

74 Sentencia de 16 de diciembre de 2013, inconstitucionalidad 7-2012.

75 Auto de 14 de enero de 2000, inconstitucionalidad 10-94.

76 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 83-2006.

77 Sentencia de 26 de junio de 2009, hábeas corpus 7-2008.

78 Auto de 30 de octubre de 2008, hábeas corpus 143-2008.

79 Dicha ley fue emitida mediante el Decreto Legislativo n° 953, de 18 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial n° 56, tomo 406, de 23 de marzo de 2015.

80 Auto de 5 de julio de 2021, inconstitucionalidad 122-2020.

81 Auto de 11 de noviembre de 2020, inconstitucionalidad 116-2020.

82 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

83 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

84 Auto de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2017.

85 Sentencias de 13 de marzo de 2006 y 16 de octubre de 2007, inconstitucionalidades 27-2005 AC y 63-2007 AC, respectivamente.

86 Sentencias de 26 de septiembre de 2000 y 4 de abril de 2001, inconstitucionalidad 24-

97 AC y amparo 348-99, respectivamente.

87 Sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 56-2010.

88 Autos de 13 de julio de 2011 y 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidades 89-2010 y 116-2015, respectivamente.

89 Sentencia de inconstitucionalidad 27-2005 AC, ya citada.

90 Auto de 16 de abril de 2008, inconstitucionalidad 9-2008.

91 Auto de 23 de diciembre de 2020, controversia 13-2020.

92 Auto de 17 de enero de 2022, inconstitucionalidad 15-2020.

93 Sentencia de 27 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 30-2016.

94 Sobre este tema, véase la sentencia de 24 de agosto de 2015, inconstitucionalidad 22-2007 AC, donde se estableció la constitucionalidad de este tipo penal.

95 Dicha ley fue emitida mediante el Decreto Legislativo n° 450, de 22 de febrero de 1990, publicado en el Diario Oficial n° 103, tomo 307, de 4 de mayo de 1990.

96 Auto de 5 de julio de 2021, inconstitucionalidad 122-2020.

97 Auto de 11 de noviembre de 2020, inconstitucionalidad 116-2020.

98 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

99 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

100 Auto de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2017.

101 Sentencias de 13 de marzo de 2006 y 16 de octubre de 2007, inconstitucionalidades 27-2005 AC y 63-2007 AC, respectivamente.

102 Sentencias de 26 de septiembre de 2000 y 4 de abril de 2001, inconstitucionalidad 24-97 AC y amparo 348-99, respectivamente.

103 Sentencia de 29 de abril de 2013, inconstitucionalidad 56-2010.

104 Autos de 13 de julio de 2011 y 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidades 89-2010 y 116-2015, respectivamente.

105 Sentencia de inconstitucionalidad 27-2005 AC, ya citada.

106 Auto de 16 de abril de 2008, inconstitucionalidad 9-2008.

107 Auto de 23 de diciembre de 2020, controversia 13-2020.

108 Auto de 17 de enero de 2022, inconstitucionalidad 15-2020.

109 Sentencia de 22 de julio de 2015, inconstitucionalidad 45-2012.

110 Dicho código fue emitido mediante el Decreto Legislativo n° 712, de 18 de septiembre de 2008, publicado en el Diario Oficial n° 224, tomo 381, de 27 de noviembre de 2008.

111 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

112 Auto de 13 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 45-2020.

113 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

114 Auto de 6 de septiembre de 2021, inconstitucionalidad 72-2020.

115 Sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009 AC.

116 Sentencia de inconstitucionalidad 40-2009 AC, ya citada.

117 Auto de 17 de enero de 2018, inconstitucionalidad 124-2017.

118 Sentencia de 12 de septiembre de 2022, inconstitucionalidad 99-2018.

119 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 102-2007.

120 Sentencia de 3 de octubre de 2022, inconstitucionalidad 95-2018.

121 Dicha ordenanza fue emitida mediante el Decreto Municipal n° 2, de 9 de agosto de 2011, publicado en el Diario Oficial n° 153, tomo 392, de 19 de agosto de 2011.

122 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

123 Auto de 13 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 45-2020.

124 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

125 Auto de 6 de septiembre de 2021, inconstitucionalidad 72-2020.

126 El art. 202 Cn. prevé que, "[p]ara el Gobierno Local, los departamentos se dividen en Municipios, que estarán regidos por Concejos formados de un Alcalde, un Síndico y dos o más Regidores cuyo número será proporcional a la población"; y que "[l]os miembros de los Concejos Municipales deberán ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del municipio; serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley".

127 Sentencia de 22 de septiembre de 2014, inconstitucionalidad 79-2010; y sentencia de 14 de diciembre de 2020, inconstitucionalidad 159-2015 AC.

128 Sobre el tema, véase la sentencia de 28 de mayo de 2001, inconstitucionalidad 4-99.

129 Véase la sentencia de 20 de enero de 2009, habeas corpus 201-2007.

130 Sentencia de 22 de abril de 2015, amparo 297-2012.

131 Véase la sentencia de 4 de junio de 2018, inconstitucionalidad 82-2015

132 Véase la sentencia de 8 de junio de 2020, inconstitucionalidad 21-2020 AC.

133 Véase la sentencia de 3 de octubre de 2016, amparo 624-2013.

134 Sentencia de 14 de octubre de 2003, inconstitucionalidad 42-2000.

135 Sentencia de amparo 624-2013, ya citada.

136 Auto de 14 de enero de 2000, inconstitucionalidad 10-94.

137 Sentencia de 25 de junio de 2009, inconstitucionalidad 83-2006.

138 Sentencia de 14 de diciembre de 2004, inconstitucionalidad 42-2003.

139 Auto de inconstitucionalidad 132-2015, ya citado.

140 Dicha ley fue emitida mediante el Decreto Legislativo n° 762, de 13 de junio de 2023, publicado en el Diario Oficial n° 110, tomo 439, de 14 de junio de 2023.

141 Auto de 4 de diciembre de 2015, inconstitucionalidad 132-2015.

142 Auto de 5 de mayo de 2021, inconstitucionalidad 37-2021.

143 Auto de inconstitucionalidad 132-2015, ya citado.

144 Auto de 30 de marzo de 2016, inconstitucionalidad 110-2015.

145 Auto de 7 de marzo de 2018, inconstitucionalidad 69-2017.

146 Auto de 20 de octubre de 2017, inconstitucionalidad 76-2017.

147 Véase el auto de 26 de enero de 2021, inconstitucionalidad 5-2021.

148 Sentencia de 31 de enero de 2001, inconstitucionalidad 10-95.

149 Véase la sentencia de 8 de junio de 2020, inconstitucionalidad 21-2020 AC. En esta decisión se sostuvo que la interpretación de la Constitución requiere de dos juicios evaluativos. El primero consiste en "hacer un juicio evaluativo primario en el que [el intérprete] determine cuáles son los principios y valores constitucionales que el Derecho pretende desarrollar". El segundo consiste en indicar "cómo debe interpretarse la disposición o disposiciones concernidas a la luz de dichos principios y valores, con el fin

de dotarlas del significado que desarrolle al máximo sus posibilidades —esto no debe suponer una interpretación que esté fuera de las posibilidades semánticas de la disposición o que sugiera la superposición de concepciones puramente morales por encima del sistema jurídico—".

150 Sentencia de 26 de septiembre de 2000, inconstitucionalidad 24-97/21-98. En esta sentencia se sostuvo que "el contenido de la Constitución requiere de la concreción legislativa para una mejor determinación de sus alcances y manifestaciones, pero tal circunstancia no conduce necesariamente a una fusión de las disposiciones del ordenamiento jurídico que cumplen con dicha función, con la Constitución, convirtiéndolas en parámetro de constitucionalidad".

151 Auto de 23 de febrero de 2018, inconstitucionalidad 6-2018.

152 Auto de 6 de septiembre de 2021, inconstitucionalidad 77-2019.

153 Sentencia de 1 de abril de 2004, inconstitucionalidad 52-2003 AC.

154 Sobre la concepción humanista de la Constitución salvadoreña, véase la sentencia de 15 de febrero de 2017, inconstitucionalidad 22-2011.

155 Sentencia de 28 de mayo de 2018, inconstitucionalidad 146-2014 AC.

156 Sentencia de 26 de enero de 2011, inconstitucionalidad 37-2004.

157 Sentencia de 15 de febrero de 2012, inconstitucionalidad 66-2005/4-2006.

158 Sentencia de 23 de enero de 2015, inconstitucionalidad 53-2012.

159 Sentencia de 10 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 8-2015 AC.

160 Sentencia de inconstitucionalidad 66-2005/4-2006, ya citada.

161 Sentencia de inconstitucionalidad 8-2015 AC, ya citada.

162 Sentencia de 6 de junio de 2008, inconstitucionalidad 31-2004 AC.

163 Sentencia de inconstitucionalidad 31-2004 AC, ya citada.

164 Sentencia de inconstitucionalidad 31-2004 AC, ya citada.

165 Sentencia de inconstitucionalidad 31-2004 AC, ya citada

166 Sentencia de inconstitucionalidad 31-2004 AC, ya citada.

167 Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de noviembre de 2014, referencia 6-2008.

168 Sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009 AC.

169 Sentencia de inconstitucionalidad 40-2009 AC, ya citada.

170 Sentencia de 11 de julio de 2022, inconstitucionalidad 101-2016.

171 Véase la sentencia de 23 de octubre de 2020, inconstitucionalidad 6-2020 AC.

172 Sentencia de 31 de julio de 2009, inconstitucionalidad 78-2006.

173 Sobre lo dicho en este párrafo, véase la sentencia inconstitucionalidad 101-2016, ya citada.

174 Sentencia de 13 de mayo de 2011, inconstitucionalidad 7-2011.

175 Sentencia de inconstitucionalidad 7-2011, ya citada.

176 Véase Corte Constitucional de Colombia, sentencia de 26 de febrero de 2010, C-141/10.

177 Pizzorusso, Alessandro, "Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa", en Studi in memoria di Carlo Esposito, volumen III, Cedam, Padua, 1973, pp. 1473 y siguientes.

178 Sentencia de 25 de abril de 2006, inconstitucionalidad 11-2004.
179 Sentencia de inconstitucionalidad 11-2004, ya citada.
180 Sentencia de 9 de febrero de 2018, inconstitucionalidad 6-2016/2-2016.
181 Véase la sentencia de 14 de diciembre de 2004, inconstitucionalidad 17-2003.
182 Sobre el tema, véase el auto de 19 de julio de 2001, inconstitucionalidad 20-2001.
183 Auto de 25 de julio de 2016, inconstitucionalidad 97-2016.
184 Sentencia de 31 de agosto de 2001, inconstitucionalidad 33-37/2000.
185 Sobre el tema, véase la sentencia de 28 de mayo de 2001, inconstitucionalidad 4-99.
186 Sentencia de 25 de enero de 2016, inconstitucionalidad 132-2013 AC.
187 Auto de 20 de mayo de 2020, inconstitucionalidad 54-2020.
188 Por ejemplo, normas preconstitucionales incompatibles con la Constitución. Véase la sentencia de 9 de mayo de 2000, inconstitucionalidad 1-95.
189 Sentencia de 16 de diciembre de 2013, inconstitucionalidad 7-2012.
190 Sentencia de 26 de julio de 2017, inconstitucionalidad 1-2017 AC.
191 Sentencia de 23 de enero de 2019, controversia 1-2018.

Índice por descriptores

AMPAROS

Improcedencias

IMPROCEDENCIA DEL PROCESO DE AMPARO
119-2022 192
Necesario justificar que le reclamo planteado posea trascendencia constitucional, es decir poner de manifiesto la presunta afectación de los derechos fundamentales y no en aspectos puramente judiciales o administrativos

PROCESO DE AMPARO
251-2022 399
Agotamiento de los recursos
Exigencia que debe cumplirse para el agotamiento de los recursos
Objeto del proceso es la pretensión y para que esta sea válida debe cumplir con ciertos presupuestos

Sentencias definitivas

DERECHO DE AUDIENCIA
189-2017 288
Posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona

DERECHO DE PROPIEDAD
512-2019 275
Facultades
Modalidades

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
189-2017 288
Condiciones para determinar si una persona es o no titular del derecho a la estabilidad laboral

Facultades
Garantiza la continuidad de las funciones y actividades que los empleados realizan en las instituciones públicas y concede un grado de seguridad para que su situación jurídica no se modifique fuera del marco constitucional y legal establecido

LIBERTAD SINDICAL
189-2017 288
Facultad de patronos y trabajadores de asociarse libremente para la defensa de sus intereses
Fuero sindical

POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL
512-2019 275
Facultad de los municipios para decretar tasas y contribuciones especiales por medio de la emisión de ordenanzas
Múltiple imposición
Tasas

PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA
512-2019 275
Deber de contribuir de las personas al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económica-social que se tenga

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA
512-2019 275
Finalidad

SOBRESEIMIENTO EN EL PROCESO DE AMPARO
189-2017 288
Agotamiento de los recursos como presupuesto procesal que posibilita la formación y el desarrollo normal del proceso, autorizando la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto

HÁBEAS CORPUS
Improcedencias

HÁBEAS CORPUS
2126-2022 573
Aspectos de las restricciones de libertad que la Sala de lo Constitucional por medio del proceso de hábeas corpus no está habilitada para decidir
Derecho de libertad personal no es un derecho absoluto
Manifestar la inexistencia de una orden administrativa o judicial para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración al derecho de libertad personal
Vicios en la pretensión que conlleva a que se declare su improcedencia

HÁBEAS CORPUS
2127-2022 417
Aspectos de las restricciones de libertad que la Sala de lo Constitucional por medio del proceso de hábeas corpus no está habilitada para decidir
Derecho de libertad personal no es un derecho absoluto
Manifestar la inexistencia de una orden administrativa o judicial para la captura de una persona no implica por sí misma una vulneración al derecho de libertad personal
Vicios en la pretensión que conlleva a que se declare su improcedencia

LIBERTAD FÍSICA
2126-2022 573
Garantías fundamentales establecidas en la Constitución

LIBERTAD FÍSICA
2127-2022 417
Garantías fundamentales establecidas en la Constitución

POLICÍA NACIONAL CIVIL
2126-2022 573
Agentes fiscales promotores de la acción penal
Agentes policiales se encuentran obligados legal y constitucionalmente entre otros a detener a las personas, ya sea en cumplimiento de su función de colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo
Facultad de aprehensión de una persona cuando existen indicios en la investigación, ya sea por órdenes fiscales, judiciales o notificaciones rojas
Función de colaboración en la investigación de un delito, paralizando la actividad cotidiana de una persona en un tiempo mínimo para así poder recabar elementos suficientes para una imputación
Fundamentación de la detención provisional establecida por el juez
Valoración de los indicios de comisión de un hecho delictivo y participación delincuencial de una persona

POLICÍA NACIONAL CIVIL
2127-2022 417
Agentes fiscales promotores de la acción penal
Facultad de aprehensión de una persona cuando existen indicios en la investigación, ya sea por órdenes fiscales, judiciales o notificaciones rojas
Función de colaboración en la investigación de un delito, paralizando la actividad cotidiana de una persona en un tiempo mínimo para así poder recabar elementos suficientes para una imputación
Fundamentación de la detención provisional establecida por el juez

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
2126-2022 573
Competencias de los jueces penales
Detenciones realizadas en este contexto conlleva una limitación a ciertas garantías establecidas en la Constitución

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
2127-2022 417
Competencias de los jueces penales

Detenciones realizadas en este contexto conlleva una limitación a ciertas garantías establecidas en la Constitución

INCONSTITUCIONALIDADES

Iniciados por inaplicación

Improcedencias

INAPLICABILIDAD DE LA LEY
42-2023 909

Potestad de los tribunales de declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición contraria a la Constitución

Requisitos mínimos que debe cumplir una inaplicabilidad para tramitar y decidir un proceso de inconstitucionalidad

Iniciados por demanda

Improcedencias

DEMOCRACIA
54-2023 941

Existencia de tres tipos de democracia

INCONSTITUCIONALIDAD POR ACCIÓN REFLEJA
54-2023 941

Imposibilidad de que todos los tratados puedan ser objeto de una inconstitucionalidad por vía de acción refleja

Permite de forma indirecta que el tratado o la norma de Derecho Internacional funcione como parámetro de control en conjunto con la Constitución

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
54-2023 941

Definición

Omisión absoluta y omisión parcial

LEY ESPECIAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL
54-2023 941

Actores disponían de dos mecanismos establecidos en el Reglamento de la Asamblea para ejercer la democracia participativa, aunque estos no sean exigencia del proceso de formación de ley

Actores establecen un contenido equívoco al concepto constitucional de representación proporcional; y alegan un contraste normativo deficiente

Actores establecen un significado erróneo al principio de irretroactividad

Actores proponen como parámetro de control una norma infraconstitucional razón por la cual se declara improcedente

Alcance del concepto de territorio estatal

Cabildeo abierto es una figura establecida en el Código Municipal

Defectos en la configuración de la pretensión, al no establecer un parámetro de control y por falta de fundamento de la supuesta inconstitucionalidad por omisión

Inexistencia de contraste normativo que fundamente la existencia de una inconstitucionalidad por vía de acción refleja

Proceso de formación de ley no comprende la consulta popular como una exigencia hacia el legislador. De ese modo, la seguridad jurídica no se vería infringida en el supuesto de que esta no se realice

OBJETO DE CONTROL EN EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
28-2023 922

Naturaleza abstracta del proceso de inconstitucionalidad

Parámetro objeto de control y argumentación

Posibles objetos de control

PARÁMETRO Y OBJETO DE CONTROL CONSTITUCIONAL
54-2023 941

Definición y correcta configuración de cada elemento para evitar una improcedencia

Delimitación de los elementos que no pueden ser parámetros de control constitucional

PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
54-2023 941
Necesario establecer en qué momento se realizó una acción para que coincida con el ámbito temporal que contiene la disposición para poder ser aplicada
Principio de irretroactividad de las leyes
Verificación de la retroactividad en la afectación o modificación de situaciones jurídicas consolidadas

PROCESO DE FORMACIÓN DE LEY
54-2023 941
Diferentes etapas

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
36-2023 929
Presupuestos de admisibilidad de la pretensión

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
45-2023 936
Condiciones para la configuración de la pretensión de inconstitucionalidad

PROTECCIÓN JURISDICCIONAL
54-2023 941
Elementos que propician a obtener una inseguridad jurídica
Integrada por cuatro etapas
Seguridad jurídica

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
54-2023 941
Genera una aproximación porcentual de la representación social